El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 29/12/2023 00:18

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

SENTENCIA EN CASACIÓN

CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 1
CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 2
QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 159

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

ÍNDICE

• CASACIÓN Nº 26934-2021 LAMBAYEQUE 1
Materia: Acción contencioso administrativa laboral

CASACIÓN Nº 26934-2021 LAMBAYEQUE

Materia: Acción contencioso administrativa laboral
Reposición laboral – Ley Nº 24041
PROCESO ESPECIAL

Lima, diecinueve de enero de dos mil veintitrés

VISTO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno[1], interpuesto por la parte demandada, **Gobierno Regional de Lambayeque** contra la sentencia de vista[2] de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia[3] apelada de fecha dos de octubre de dos mil veinte, que declaró **fundada en parte** la demanda. **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Conforme a lo previsto en los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS[4], concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente al caso de autos, se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio establecidos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a las modificaciones dispuestas por la acotada Ley Nº 29364[5]. **ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: SEGUNDO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** ha sido interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; **iii)** fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la recurrente con la resolución impugnada; y, **iv)** no adjunta tasa judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerada por ser una entidad del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política. **FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN: TERCERO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación del recurso debe ser **clara, precisa y concreta;** debiendo indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. PROCEDENCIA DEL RECURSO: **CUARTO:** En cuanto a las causales del recurso, estas se encuentran contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se señala que: «El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la

resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos de procedencia del recurso: **i)** que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; así como, **iii)** demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, finalmente **iv)** indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **QUINTO:** El recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la parte recurrente interpuso recurso de apelación[6] contra la sentencia de primera instancia, porque la misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo la parte recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. **CAUSALES DENUNCIADAS: SEXTO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Sala Suprema distingue que se denuncia las siguientes causales casatorias: a) **Infracción del Decreto Legislativo Nº 1057.** Sostiene que la Sala Superior extiende y otorga al demandante los mismos derechos que tienen los trabajadores nombrados, pasando por alto que estos tienen tales derechos porque precisamente ingresaron por concurso público de méritos; asimismo, se le reconoce su estabilidad laboral por principio de la primacía de la realidad, sin tener en cuenta que la actora no ingresó por concurso público. b) **Infracción de la Resolución Jefatural Nº 252-87-INAP/DNP que aprueba la Directiva Nº 002-87-INAP/DNP.** Manifiesta que esta disposición solo se aplica a los trabajadores del régimen del Decreto Legislativo Nº 276, mas no para los contratados bajo servicios no personales, como es el caso del demandante. En vista que esta normativa lo prohíbe, teniendo en cuenta que en el caso del actor, este debió ser contratado bajo contratos CAS, por lo que no se le puede aplicar el régimen público que se le ha reconocido; en consecuencia, no podía ser incorporado a planillas, resultando anulable lo resuelto por el órgano superior. ANALISIS DE LAS CAUSALES DENUNCIADAS: **SÉPTIMO:** Del examen conjunto de las causales denunciadas en los literales **a)** y **b)**; verificamos que la entidad recurrente no solo no identificó con precisión y claridad cuál o cuáles de sus artículos del Decreto Legislativo Nº 1057 se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, sino que tampoco demostró su incidencia directa sobre el sentido del fallo, pues, por el contrario, sus argumentos están estructurados de forma tal que el recurso es interpuesto como si fuera uno de instancia, orientado más bien a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso; propósito que evidentemente no se condice con la naturaleza ni con los fines del recurso extraordinario de casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, cuales son, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, el recurso extraordinario interpuesto, no cumple con los requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la **improcedencia** del recurso casatorio. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Gobierno Regional de Lambayeque**, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno. **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por Juan Carlos Ojeda Pérez contra la parte recurrente, sobre acción contencioso administrativa laboral; notifíquese por Secretaría, y devolvieron los actuados. Interviene como **ponente la señora Jueza Suprema Izaga Rodríguez.** SS. **RUEDA FERNÁNDEZ, RUBIO ZEVALLOS, CRISTÓVAL DE LA CRUZ, REYES GUERRA, IZAGA RODRÍGUEZ.**

---

1 Obrante a fojas 931 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 915 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 881 del expediente principal.
4 Antes previstos en los artículos 35 inciso 3 sub numeral 3.1, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.
5 Considerando que las modificatorias introducidas al Código Procesal Civil a través de la Ley Nº 31591, publicada el 26 de octubre de 2022, no son de aplicación al presente caso, por mandato de la Segunda Disposición Final del acotado Código.
6 Obrante a fojas 892 del expediente principal.

C-2245458-1

CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

ÍNDICE

- CASACIÓN LABORAL N° 242-2021 LIMA 8
  Materia: REINTEGRO DE REMUNERACIONES
- CASACIÓN LABORAL N° 277-2021 LIMA 8
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
- CASACIÓN N° 421-2021 LIMA 9
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 553-2021 LIMA 10
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 1030-2021 LIMA 11
  Materia: REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO
- CASACIÓN LABORAL Nº 1051-2021 LIMA 12
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN LABORAL Nº 1195-2021 LIMA 13
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
- CASACIÓN Nº 1223-2021 LIMA 14
  Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

- CASACIÓN LABORAL Nº 1256-2021 LIMA 15
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
- CASACIÓN LABORAL Nº 1347-2021 LIMA 16
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
- CASACIÓN LABORAL Nº 1389-2021 LIMA 17
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 1880-2021 LA LIBERTAD 19
  Materia: REPOSICIÓN, INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO
- CASACIÓN Nº 1954-2021 TACNA 20
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 1973-2021 LA LIBERTAD 20
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 2060-2022 LIMA 21
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
- CASACIÓN Nº 2936-2021 PIURA 22
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 3089-2021 LIMA 23
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN 3204-2021 LAMBAYEQUE 24
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 3285-2021 AREQUIPA 25
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 3285-2021 AREQUIPA 26
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN 3567-2021 AREQUIPA 28
  Materia: IMPUGNACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA
- CASACIÓN LABORAL Nº 3580-2021 LIMA 28
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 3600-2021 LIMA 29
  Materia: REPOSICIÓN POR DESPIDO NULO
- CASACIÓN LABORAL Nº 3894-2021 CUSCO 30
  Materia: NULIDAD DE DESPIDO Y OTROS
- CASACIÓN 3928-2021 LA LIBERTAD 31
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN LABORAL Nº 4549-2021 LIMA 32
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
- CASACIÓN LABORAL Nº 4733-2021 LIMA 32
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
- CASACIÓN LABORAL Nº 5024-2019 MOQUEGUA 33
  Materia: REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 5615-2019 LORETO 37
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 5725- 2021 LA LIBERTAD 39
  Materia: CESE DE HOSTILIDAD
- CASACIÓN Nº 5842-2021 LIMA 40
  Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 6075-2021 LIMA 41
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 6089-2021 LA LIBERTAD 42
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

- CASACIÓN Nº 6198-2021 CUSCO 43
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 6208-2021 LA LIBERTAD 44
  Materia: CESE DE HOSTILIDAD Y OTROS
- CASACIÓN 6211-2021 SELVA CENTRAL 45
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO
- CASACIÓN Nº 6374-2021LIMA 46
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN LABORAL Nº 6402-2019 LAMBAYEQUE 46
  Materia: REPOSICIÓN
- CASACIÓN Nº 6978-2022 LIMA 49
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 7403-2019 LIMA 51
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN LABORAL Nº 7492-2019 DEL SANTA 52
  Materia: NULIDAD DE DESPIDO
- CASACIÓN Nº 7495-2022 LIMA NORTE 55
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 7816-2022 ICA 56
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 7909-2019 LIMA 57
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 8689-2021 LIMA 60
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 10918-2022 LIMA 61
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 11413-2021 AREQUIPA 63
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
- CASACIÓN LABORAL Nº 11518-2020 LA LIBERTAD 64
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 11568-2020 LIMA 65
  Materia: PAGO DE BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y OTROS
- CASACIÓN 12388-2021 LIMA 71
  Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 13564-2021 LIMA 71
  Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
- CASACIÓN LABORAL Nº 14131-2021 LIMA 72
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN N° 14976-2021 LIMA 73
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 15668-2022 LIMA 73
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 15674-2019 CALLAO 75
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 15809-2021 CALLAO 77
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 17173-2019 SULLANA 78
- Materia; INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 20844-2017 PUNO 79
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO

- CASACIÓN Nº 21006-2021 LIMA 81
  Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
- CASACIÓN Nº 21485-2019 LIMA 82
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
- CASACIÓN Nº 21666-2022 DEL SANTA 83
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 21688-2022 LIMA 83
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN 22103-2022 DEL SANTA 83
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 22126-2022 ICA 84
  Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 22136-2022 AREQUIPA 84
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 22372-2018 LIMA 84
  Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 22419-2021 LIMA NORTE 89
  Materia: RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO LABORAL
- CASACIÓN Nº 22845-2021 LIMA NORTE 91
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 22926-2022 PUNO 92
  Materia: PAGO DE REMUNERACIONES INSOLUTAS
- CASACIÓN Nº 22964-2022 AREQUIPA 92
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 23202-2021 LIMA 93
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 23346-2019 LIMA 93
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 23389-2019 LIMA 94
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN 23400- 2022 ICA 96
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
- CASACIÓN Nº 23414-2022 LIMA ESTE 96
  Materia: PAGO DE DERECHOS ECONÓMICOS
- CASACIÓN Nº 23421-2022 LIMA ESTE 97
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 23457-2022 JUNIN 98
  Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 23774-2021 LIMA NORTE 98
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 23835-2022 LIMA ESTE 100
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACION Nº 24526-2018 LAMBAYEQUE 100
  Materia: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
- CASACIÓN Nº 24537-2022 AREQUIPA 102
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
- CASACIÓN Nº 24726-2022 LIMA ESTE 103
  Materia: PAGO DE BENEFICIO FONAVI
- CASACIÓN Nº 24830-2022 LIMA ESTE 104
  Materia: PAGO DEL BENEFICIO DEL FONAVI

- CASACIÓN Nº 25049-2022 UCAYALI 104
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 25204-2022 AREQUIPA 105
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 25967-2022 LA LIBERTAD 107
  Materia: REINTEGRO DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL
- CASACIÓN Nº 26108-2022 DEL SANTA 108
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
- CASACIÓN Nº 26186-2022 UCAYALI 108
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 26257-2022 UCAYALI 110
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 26520-2019 LORETO 111
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 26763-2022 LIMA ESTE 112
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 26778-2022 DEL SANTA 113
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 27048-2022 JUNIN 115
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 27401-2022 VENTANILLA 117
  Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
- CASACIÓN Nº 27447-2022 LIMA 117
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 27640-2019 PIURA 117
  Materia: REINTEGRO DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL
- CASACIÓN Nº 27753-2022 LIMA 118
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 27945-2022 CUSCO 119
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- CASACIÓN Nº 27963-2022 LA LIBERTAD 119
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN LABORAL Nº 28160-2021 UCAYALI 120
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
- CASACIÓN Nº 28285-2019 LIMA 121
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 28285-2019 LIMA 121
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 28623-2018 AREQUIPA 122
  Materia: IMPUGNACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA Y OTRO
- CASACIÓN Nº 29071-2022 LIMA 128
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 29342-2022 AREQUIPA 130
  Materia: PAGO DE BONIFICACIÓN
- CASACIÓN Nº 29343-2022 LIMA 130
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 29445-2022 VENTANILLA 132
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 29515-2022 LIMA 134
  Materia: BONO JURISDICCIONAL E INCIDENCIA

- CASACIÓN Nº 29830-2022 DEL SANTA 135
  Materia: PAGO DE INCREMENTOS REMUNERATIVOS Y OTRO
- CASACIÓN LABORAL Nº 30068-2022 LIMA 135
  Materia: INVALIDEZ DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
- CASACIÓN Nº 30467-2019 LIMA 136
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
- CASACIÓN Nº 31800-2022 LIMA 137
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 31838-2022 LIMA 138
  Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE
- CASACIÓN Nº 34486-2022 LIMA NORTE 138
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 34592-2022 LIMA 140
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 35062-2022 LORETO 141
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN LABORAL Nº 36202-2022 LIMA 142
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 36581-2022 LIMA 143
  Materia: PAGO DE DERECHOS LABORALES
- CASACIÓN Nº 41259-2022 LIMA 144
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 41382-2022 LA LIBERTAD 145
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 41407-2022/ LA LIBERTAD 146
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
- CASACIÓN Nº 42416-2022 LA LIBERTAD 147
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 43386-2022 UCAYALI 147
  Materia: INCUMPLIMIENO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 43473-2022 DEL SANTA 148
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 43500-2022 ICA 150
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 43937-2022 LIMA ESTE 151
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 44115-2022 LIMA ESTE 152
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LABORALES
- CASACIÓN Nº 45252-2022 LIMA ESTE 152
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
- CASACIÓN Nº 45494-2022 UCAYALI 153
  Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
- CASACIÓN Nº 46329-2022 LIMA ESTE 155
  Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
- CASACIÓN Nº 46564-2022 LIMA ESTE 155
  Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
- CASACIÓN Nº 47927-2022 LIMA 157
  Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

CASACIÓN LABORAL N° 242-2021 LIMA

Materia: REINTEGRO DE REMUNERACIONES
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, tres de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de esta Corte Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Elmer Saavedra Saavedra**, mediante escrito presentado con fecha veintinueve de setiembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve, de fecha diez de setiembre de dos mil veinte, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **confirmó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número tres, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la demanda de reintegro de remuneraciones, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio extraordinario, conforme a lo previsto en la Ley número 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al artículo 35 inciso 1 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, se interpone: "Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). (…)". **Tercero:** La Sala Superior mediante la sentencia de vista impugnada, confirma la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda sobre reintegro de remuneraciones. **Cuarto:** En tal sentido, estando a que la demanda ha sido declarada infundada por ambas instancias, se procede a revisar la pretensión y el monto demandado el cual asciende a la suma de S/26,270.16, siendo que dicho monto, no supera las cien Unidades de Referencia Procesal, exigido como presupuesto necesario para la admisibilidad del recurso casatorio y que a la fecha de su interposición, esto es, al veintinueve de setiembre de dos mil veinte, ascendía a **S/ 43,000.00** (cuarenta y tres mil con 00/100 soles), teniendo en cuenta que por Resolución Administrativa número 048-2020-CE-PJ, el monto de la Unidad de Referencia Procesal – URP para el año 2020, se determinó en S/ 430.00 (cuatrocientos treinta con 00/100 soles); en consecuencia, el recurso debe desestimarse, al no cumplir con el requisito previsto en el citado artículo 35 inciso 1 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo. Por estas consideraciones y en aplicación del primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Elmer Saavedra Saavedra**, mediante escrito presentado con fecha veintinueve de setiembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve, de fecha diez de setiembre de dos mil veinte, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en los seguidos por Elmer Saavedra Saavedra contra el Banco de la Nación sobre reintegro de remuneraciones y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO. **AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-1**

CASACIÓN LABORAL N° 277-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LABORAL- LEY N° 29497, NLPT
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO - EJE

Lima, trece de julio de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO. -** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada, **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO** de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, de fojas ciento nueve a ciento veintitrés; contra la **Sentencia de Vista** de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, de fojas noventa y ocho a ciento cuatro; expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que: "**Ha resuelto: 1.- CONFIRMAR la SENTENCIA Nº 310 -2019,** contenida en la Resolución de fecha 9 de octubre del 2019, que resuelve: **1.1 Declarar FUNDADA la demanda** interpuesta por PRADO PIMENTEL PEDRO MIGUEL contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCO sobre INEFICACIA DE LOS CONTRATOS Y OTROS. **1.2. CUMPLA la demandada** con incluir al actor, en las planillas de remuneraciones de los trabajadores obreros sujetos al régimen laboral privado desde el 01 de junio del 2018. **1.3. ORDENAR** a la demandada pagar la suma de TRES MIL DOSCIENTOS (S/3,200.00) soles por el concepto de gratificaciones, y escolaridad. **1.4. ORDENAR** a la demandada que se **CONSTITUYA** como Depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios del actor en la suma de MIL SETESCIENTOS ONCE CON 11/100 SOLES (S/1,711.11); o en su defecto deposite dicha cantidad en la cuenta CTS que elegirá el actor, si la política de la Institución demandada así lo determinó. **1.5. FACULTAR** a la demandada a realizar las deducciones pertinentes que estén establecidas expresamente en la ley y siempre que sean compatibles con los ingresos mensuales percibidos por el actor; **2. Intégrese la SENTENCIA Nº 310 -2019,** contenida en la Resolución de fecha 9 de octubre del 2019, y en consecuencia se impone a la demandada el pago de costos del proceso, sin costas.". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO. -** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; como órgano jurisdiccional de segunda instancia; **ii)** La referida sentencia de vista se pronuncia sobre pretensiones no cuantificables y cuantificables; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente ya que el recurrente fue notificado con la sentencia de vista, el treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas ciento seis); **iv)** La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de las tasas y aranceles judiciales. **QUINTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, de fojas tres a trece, el demandante solicita se sirva declarar la invalidez e ineficacia del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, suscrito por el recurrente a partir del uno de Junio del año dos mil ocho, así como sus prórrogas; y como consecuencia de ello se declare la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada que regula el Decreto Supremo N° 003-97-TR, desde el uno de junio del año dos mil dieciocho hasta la actualidad y en adelante, por tener la condición de Obrero Municipal; asimismo se ordene la incorporación del recurrente en el Libro de Planillas Única de Pago, debiéndose de precisar la fecha de ingreso a trabajar y los conceptos remunerativos. Asimismo, solicita el pago de los beneficios sociales consistentes en gratificaciones, pago de escolaridad, con intereses legales, con costos y costas del proceso. **SEXTO**. – Respecto requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley N° 29497, la parte recurrente apeló la sentencia

primera instancia al resultarle adversa, tal como se verifica del escrito de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de fojas sesenta y siete a setenta. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **revocatorio. SEPTIMO. -** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, las siguientes: **1. Inaplicación o aplicación indebida del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020.** Refiere que, el A quo, pasando por alto dichas prescripciones legales, ha reconocido al demandante como un trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada, ordenando su inscripción a las planillas correspondientes; lo que ha generado un grave perjuicio al orden jurídico, que desarrollaremos en lo sucesivo. **2. Inaplicación del principio de igualdad y el principio de equilibrio presupuestario reconocidos en los artículos 2° y 78° de la Constitución Política del Perú.** Alega que, las implicancias del Derecho del trabajo en las entidades públicas, deben ser concatenadas con el precitado principio legal, que también está reconocido en la Constitución Política. **OCTAVO. -** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **NOVENO. -**. Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **DECIMO.-** Con relación a la causal contenida en el **numeral 1),** en las casaciones Nros. 1772-2021 y 3577-2021, ambas de fecha uno de junio de dos mil veintidós, esta Sala Suprema, asumió posición respecto al análisis de las disposiciones normativas denunciadas; donde se concluyó que la decisión resulta acorde a la Constitución, ya que, aplicar las normas antes referidas, importaría la vulneración de los derechos fundamentales del derecho al trabajo, irrenunciabilidad de derechos laborales, retroactividad de las leyes y a la tutela judicial efectiva; más aún si mediante la Ley Nº 31115, publicada el veintitrés de enero de dos mil veintiuno, se han derogado los artículos 2, 3, 4, 13, la Cuarta Disposición Complementaria Final y la Única Disposición Derogatoria del Decreto de Urgencia citado. En consecuencia, es evidente que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo tanto, la causal invocada deviene en **improcedente. DECIMO PRIMERO.-** Respecto a la causal contenida en el **numeral 2),** carece de incidencia, ya que, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que, las rigurosas reglas presupuestarias, no constituye un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador, por lo tanto, no cumple con el requisito del inciso 3) del artículo 36 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, por lo que la causal denunciada deviene en **improcedente**. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO** de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, de fojas ciento nueve a ciento veintitrés; contra la **Sentencia de Vista** de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, de fojas noventa y ocho a ciento cuatro; expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Pedro Miguel Prado Pimentel contra la recurrente; sobre desnaturalización de contratos y otros**; y los devolvieron.** Interviene la Jueza Suprema Carlos Casas por licencia del Juez Supremo Torres Gamarra. Ponente Señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. - S.S CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LEVANO VERGARA, CARLOS CASAS. C-2246709-2**

CASACIÓN N° 421-2021 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO - LEY N° 29497

Lima, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Clínica San Pablo Sociedad Anónima Cerrada,** contra la sentencia de vista de fecha seis de octubre de dos mil veinte, la cual **confirma** la sentencia apelada de fecha diez de enero de dos mil veinte modificándola a **fundada en parte** la demanda, declarando la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ordenando a la demandada cancelar el monto modificado de S/80,055.07 por concepto de gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios e indemnización por despido arbitrario; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (conforme se advierte de su recurso de apelación, cumpliéndose con tal exigencia); debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el pago de beneficios laborales consistentes en compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar e indemnización por despido arbitrario. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.** Alega que no se presenta ningún rasgo de laboralidad en el caso concreto, la demandada no ejerció control sobre la actividad desarrollada o la forma cómo se ejecutó, no existe horario establecido, la prestación se produjo sin continuidad, no hay suministro de herramientas y materiales y no existe remuneración. **(ii) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú.** Se ha limitado a referir que la sala superior ha vulnerado el debido proceso y la debida motivación de resoluciones judiciales. **SEXTO.** En efecto, como se señala en el tercer considerando de la presente resolución, los requisitos de procedencia exigidos para conceder el recurso extraordinario de casación se encuentran expresamente desarrollados en la Ley, lo cual la parte recurrente deberá dar cumplimiento fundándose en razones que denoten la existencia de una infracción normativa o el apartamiento de los precedentes. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1545-2007-Lambayeque, señala lo siguiente: "El recurso extraordinario de casación, como así lo reconocen la jurisprudencia establecida y la doctrina, es el debate netamente jurídico, pues el debate fáctico ha culminado con la sentencia objeto de la impugnación. Por lo tanto, es deber del impugnante expresar y demostrar que esa decisión judicial, de la cual discrepa, es violatoria del derecho tanto procesal como sustantivo. Por consiguiente, la denuncia casatoria tiene que satisfacer a cabalidad las exigencias legales establecidas para el recurso, tanto para su admisibilidad como para su procedencia. El cumplimiento de estos requisitos se explica por la necesidad de determinar objetivamente el sentido y alcance de la impugnación en la cual ha de expresarse y demostrarse no solo la presencia de los errores in iudicando o in procedendo, según sea el caso, sino también su incidencia en la decisión objetada (...)"; también la Casación Nº 768-2007-Moquegua, menciona que: "Los requisitos de procedencia del recurso de casación (…), incluyen la obligación de los justiciables de sustentarlos con probidad y buena fe, con un mínimo de verosimilitud, toda vez que no puede distraerse y abultarse la carga procesal del Órgano Supremo del Poder

Judicial con fundamentos forzados, inconsistentes o inexistentes que al ser calificados procedentes se desvanecen instantáneamente al momento de analizarse el fondo del recurso en la etapa de la sentencia casatoria correspondiente (...)". **SÉTIMO.** Por lo que, de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** Siendo así, respecto a la causal denunciada en el **ítem (i),** esta deviene en **improcedente** porque los argumentos expresados en el recurso, lejos de constituir denuncias de infracción normativa, constituyen intentos por pretender una nueva revisión de mérito o de instancia, rol que definitivamente no corresponde a un tribunal casatorio pues conforme se advierte del presente recurso, la parte recurrente no brinda razones de por qué se han infringido las normas, lo que plantea es un nuevo examen de los hechos, en el sentido que pretende la valoración de caudal probatorio consistente en determinar la existencia del vínculo laboral de la actora. En efecto, el presente recurso de casación está dirigido a cuestionar un hecho fáctico introducido por las partes al proceso; en ese sentido, no puede plantearse que un tribunal casatorio controle si un hecho está probado o no. Es importante, pues, distinguir entre cuestiones de hecho y de derecho, en tanto en la casación solo tiene lugar, esencialmente, un control de las cuestiones de derecho. Asimismo, respecto a la denuncia contenida en el **ítem (ii)** esta deviene también en **improcedente** pues se advierte que la demandada recurrente denuncia una supuesta vulneración al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, pero no expresa la incidencia formal directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, por el contrario más que un vicio de motivación, la recurrente no está conforme con el razonamiento que expuso la sala superior para concluir probatoriamente que la actora estuvo vinculada laboralmente con la demandada, hoy recurrente, al haberse acreditado los elementos del contrato laboral. Razones por las cuales, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **NOVENO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio como subordinado, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia; lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso, porque la recurrente no cumplió con precisar las infracciones normativas y su incidencia en la decisión cuestionada por los fundamentos expuestos en los considerandos anteriores. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Clínica San Pablo Sociedad Anónima Cerrada,** contra la sentencia de vista de fecha seis de octubre de dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Gissela Jacqueline Villegas Jara contra Clínica San Pablo Sociedad Anónima Cerrada, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-3**

CASACIÓN Nº 553-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, cinco de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Miraflores,** contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, que resolvió **revocar** la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número tres, de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el extremo que declara infundado el pago de beneficios sindicales, y reformándolo se declara fundado, modificándose la suma a abonar. **Confirma** la sentencia en el extremo que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, se determina la existencia entre las partes de un contrato laboral de naturaleza indeterminada desde el 01 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013, regulado bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, su reglamento y normas afines. Ordena a la demandada cumpla con registrar al accionante en las planillas de obreros dentro del régimen laboral privado desde el 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2013. Ordena a la demandada abonar al demandante la suma de S/155 254.29, por concepto de beneficios sociales y beneficios sindicales; más intereses legales y financieros, así como costos del proceso, a liquidarse en ejecución de sentencia. Improcedente la demanda en los extremos de invalidez de contratos administrativos de servicios desde el 01 de enero del 2014 al 02 de enero del 2019 y reposición por despido incausado. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo **CUARTO.** Conforme se aprecia del escrito de demanda incoada por David Sánchez Cutiño contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, el accionante solicita lo siguiente: **1.-** Desnaturalización de contratos de locación de servicios del 01 de enero de 2004 al 31 de agosto de 2008 y la invalidez de contratos administrativos de servicios suscritos del 01 de septiembre de 2008 en adelante y se establezca una relación laboral de duración indeterminada sujeto al régimen laboral de la actividad privada, debiendo incorporarlo en planilla de pago como obrero municipal. **2.-** Pago de beneficios sociales desde el 01 de enero de 2004 al 30 de septiembre de 2018, por concepto de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria, escolaridad, vacaciones e indemnización vacacional, ascendente a S/93 256.93. **3.-** Pago de beneficios sindicales especificados en los convenios colectivos de los años 2004 a 2015, consistentes en: bonificación vacacional, escolaridad, día internacional del trabajador, día del trabajador municipal, bonificación extraordinaria por cierre de pliego, vacaciones y costo de vida, ascendente a S/152 330.55. **4.-** Reintegro de gratificaciones, bonificación extraordinaria y compensación por tiempo de servicios, por incidencia del costo de vida, racionamiento y movilidad, ascendente a S/21 926.25. **5.-** Pago de intereses legales y costos del proceso. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley N° 29497, se advierte que la parte impugnante no consintió la sentencia que le fue adversa, ya que la apeló conforme se observa del escrito de apelación; por lo que tal exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente sustenta su recurso literalmente en las siguientes causales: **a) Infracción normativa material de los artículos 3 y 28 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 (Decreto Supremo Nº 5-90-PCM), y el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.** Señala que, los obreros municipales en razón a su condición de servidores públicos ingresan a la administración pública de conformidad a las normas establecidas en el Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento, requiriendo participación en un concurso público. **b) Infracción normativa procesal del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 364 del Código Procesal Civil.** Indica que, tanto en su escrito de contestación de demanda, como en su recurso de apelación, se ha sostenido que dada la condición de los obreros municipales como servidores públicos, no se les puede aplicar el régimen laboral privado si no han ingresado conforme a las reglas establecidas en el Decreto Legislativo Nº 276, no habiendo sido motivo de análisis por la Sala. **c) Infracción normativa del Decreto de Urgencia Nº 16-2020.** Menciona que, no se han considerado los alcances del dispositivo legal en mención, en virtud del cual, el gobierno ha

regulado el ingreso de las servidoras y servidores a las entidades del Sector Público, en aras de salvaguardar el principio de meritocracia. **d) Infracción normativa del artículo 11-A del Decreto Supremo Nº 65-2011.** Señala que, la norma ha delimitado la facultad de los trabajadores adscritos al régimen de contratación administrativa de servicios, de afiliarse a un gremio sindical, vislumbrándose que se ha inaplicado el mencionado artículo. **SÉTIMO.** Previo al análisis de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO. Respecto a los apartados a) y b),** se advierte que lo que en rigor pretende el recurrente es variar el sentido lógico jurídico de la decisión adoptada por la Sala Superior en donde quedo establecido que, al haber ejercido el demandante labores como obrero municipal, le corresponde el régimen laboral privado; además, en el presente caso no ha sido materia de debate el ingreso laboral por concurso público sino el reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada, por desnaturalización de contratos de contratos de locación de servicios e invalidez de contratos administrativos de servicios suscritos con la demandada. Se debe agregar que la decisión adoptada por el Colegiado Superior se encuentra adecuadamente fundamentada, ya que establece la relación de hecho en base a su apreciación probatoria y se ha ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso. En consecuencia, no cumpliéndose con la exigencia establecida en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, las causales denunciadas devienen en **improcedentes. NOVENO. En relación al apartado c),** este Colegiado Supremo ya ha tenido la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre la inaplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia Nro. 016-2020, como es el caso de las Casaciones Nros. 2321-2021 y 5504-2021, ambas de fecha primero de junio de dos mil veintidós, y otras de este órgano jurisdiccional, en las cuales se ha determinado que no resulta exigible el ingreso por concurso público respecto a los obreros municipales; condición que ha sido ampliamente acreditada ante los Tribunales de Mérito que determinaron que el actor se ha desempeñado como personal de serenazgo, por lo que corresponde declarar la **improcedencia** de la causal denunciada. **DÉCIMO. En cuanto al apartado d),** se debe señalar que el recurrente se limita a conceptualizar de forma genérica la norma que cita, sin describir de forma clara y precisa cómo es que la instancia de mérito ha incurrido en infracción normativa en el caso concreto; así mismo no se demuestra la incidencia directa sobre la decisión impugnada; por lo tanto, no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497, deviniendo en **improcedente. DÉCIMO PRIMERO.** Cabe precisar que en cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497, carece de objeto su análisis al haberse declarado la improcedencia de las causales contenidas en los considerandos que anteceden. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Miraflores,** contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por David Sánchez Cutiño contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-4**

CASACIÓN LABORAL Nº 1030-2021 LIMA

Materia: REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veintiuno de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Empresa Minera Los Quenuales S. A.**, mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, contra la **sentencia de vista** de fecha dos de octubre de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, que declaró fundada en parte la demanda sobre reposición por despido incausado, con lo demás que contiene; cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la parte demandante solicita reposición por despido incausado, más costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i. Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 10 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. ii. Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1351, 1352 y 1373 del Código Civil. Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre la causal señalada en el **ítem i)** del sexto considerando, debemos señalar que la causal de interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, el juzgador al analizarla le da un sentido distinto al que corresponde. En el presente caso, a pesar de haberse sustentado la denuncia en un supuesto de infracción normativa por interpretación errónea de los dispositivos denunciados, la parte recurrente no ha cumplido con la exigencia antes descrita, pues no señala de modo expreso y concreto cuál es la interpretación de las disposiciones supuestamente infringidas llevadas a cabo por la instancia de mérito- que considera errónea y cuál es la interpretación de la misma que sí considera correcta, así, como las razones concretas que sostienen su apreciación (esto es de qué modo ha obtenido el resultado interpretativo que considera correcto), a efectos de poder establecer con precisión los alcances de la evaluación de la Sala de Casación, motivo por el cual, resulta improcedente la causal denunciada; incumpliendo así, con requisito de procedencia contemplado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que prevé describir con claridad y precisión la infracción normativa; deviniendo en **improcedente. Noveno:** Sobre la causal contenida en el **ítem ii)** corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, si bien los artículos de la norma invocada no han sido considerados en la Sentencia de Vista, se debe señalar que pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema

revise nuevamente los hechos y pruebas aportados en el proceso, lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. En consecuencia, no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente. Décimo:** Al haberse declarado improcedente las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley citada, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la **Empresa Minera Los Quenuales S. A.,** mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha dos de octubre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Luciano Huaira Huamani contra la Empresa Minera Los Quenuales S.A., sobre reposición por despido incausado y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-5**

CASACIÓN LABORAL Nº 1051-2021 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, catorce de octubre de dos mil veintidós.

VISTO y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**, mediante escrito de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número tres, de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, que declaró fundada la demanda sobre desnaturalización de contratos y otros, cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la parte demandante solicita la desnaturalización de contratos y otros, más costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veinte. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i. Infracción normativa por inaplicación o aplicación indebida del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política Del Perú; el artículo 12 Del T.U.O., de la Ley Orgánica Del Poder Judicial y los artículos 50, inciso 6; 121 y 122 del Código Procesal Civil. ii. Infracción normativa por inobservancia del artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; asimismo, inobservancia del artículo 6 de la Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020 y el artículo 1 de la Ley Nº 28411. iii. Infracción normativa por vulneración de los artículos 2 inciso 2 y 78 de la Constitución Política del Perú. iv. Apartamiento injustificado del Precedente Vinculante emitido por el Tribunal Constitucional Expediente 05057-2013-PA/TC-Junín, Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco. v. Infracción normativa por inaplicación del artículo 1764 del Código Civil. vi. Infracción por inaplicación del artículo 5 de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público. vii. Infracción por inaplicación de los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo Nº 1057. viii. Infracción por inaplicación del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. ix. Infracción por inaplicación del artículo 6 de la Ley Nº 27735 y el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 005-2002-TR, Normas Reglamentarias de la Ley que Regula el Otorgamiento de Gratificaciones para Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad. x. Infracción por inaplicación del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713 y de los artículos 4 y 8 del Decreto Legislativo Nº 650. Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre la causal señalada en el **ítem i)** se aprecia que la parte impugnante denuncia "inaplicación e interpretación errónea", sin precisar cuál es la causal que corresponde a cada norma invocada; asimismo, es importante mencionar que no se puede denunciar dos causales distintas respecto a una misma norma, al ser estas excluyentes entre sí, motivo por el que el recurrente no cumple con señalar de forma clara y precisa la infracción normativa, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo lo denunciado en **improcedente**. **Noveno:** En cuanto a las causales indicada en los **ítems ii) y iii)** del sexto considerando, este Colegiado observa que, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de derechos constitucionales y legales, la recurrente no ha indicado en forma concreta cómo así se ha producido la afectación a estos derechos, ni ha identificado adecuadamente cuál es el supuesto de vicio ocurrido en este caso; puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales; asimismo, es indicar que el modo en que ha sido propuesta por la recurrente evidencia que lo pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a una nueva valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. En tal sentido, tal como ha sostenido la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a realizar un nuevo examen del proceso, toda vez que tal pretensión vulneraría la naturaleza y fines de este recurso extraordinario; en consecuencia, las causales materia de calificación no cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en **improcedentes. Décimo:** En relación a la causal denunciada en el acápite **iv),** es de advertir que pese a denunciar el apartamiento del precedente vinculante, en la incidencia directa el recurrente refiere que la sala superior no lo aplicó correctamente; por tanto, no existe claridad en la causal denunciada, máxime si en el fondo se está cuestionando el pronunciamiento expuesto por la instancia de mérito, pretendiendo se analice nuevamente el fondo controvertido, lo cual no es posible dada la naturaleza y fines de esta sede casatoria; en consecuencia, la causal denunciada deviene en **improcedente. Décimo Primero:** En cuanto a las causales contempladas en los **ítems v) y vi)** corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, si bien los artículos de la norma invocada si han sido considerados en la Sentencia de Vista, se debe señalar que pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos y pruebas aportados en el proceso, lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso

de casación. En consecuencia, no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedentes. Décimo Segundo:** En cuanto a las causales contempladas en los **ítems vii), viii), ix) y x)** corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, si bien los artículos de la norma invocada no han sido considerados en la Sentencia de Vista, se debe señalar que pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos y pruebas aportados en el proceso, lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. En consecuencia, no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedentes. Décimo Tercero:** Al haberse declarado improcedentes las causales denunciadas, carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el numeral 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el **Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**, mediante escrito de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante Ruth Fiorella Silva Laguado contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sobre pago de beneficios sociales y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-6**

CASACIÓN LABORAL Nº 1195-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, trece de julio de dos mil veintidós.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, **Municipalidad Distrital de Miraflores**, mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha trece de agosto de dos mil veinte, expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, que declaró entre otros extremos, fundada en parte la demanda, en consecuencia, se declaró ineficaces los contratos administrativos de servicios suscritos desde el primero de marzo de dos mil trece en adelante y se reconoce la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada a partir del primero de marzo de dos mil trece en adelante, con lo demás que contiene; en los seguidos por Delfín Martin Ilizarbe Cabanillas contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros; cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i) La infracción normativa;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. Tercero:** Asimismo, el recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Cuarto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la institución impugnante no consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, cumpliendo con la exigencia de dicha norma. **Quinto:** La entidad recurrente denuncia como causales en su recurso: **i) Vulneración del principio de legalidad y al debido proceso dentro de los alcances del Decreto Legislativo número 1057. ii) Infracción normativa del artículo 37 de la Ley número 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. iii) Infracción normativa del artículo 413 de Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 14 del T.U.O. de la Ley número 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. Sexto:** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley número 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación. Además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **Séptimo:** Sobre la causal invocada en los **ítems i) y ii),** se señala que la entidad recurrente se limita señalar principios generales sin expresar afectación a la norma casatoria denunciada, debiéndose señalar que la parte recurrente no demuestra de manera clara y precisa la supuesta infracción normativa; toda vez que en sendos pronunciamientos se ha establecido que los obreros municipales pertenecen al régimen de la actividad privada; no apreciándose una falta de motivación, advirtiéndose que lo pretendido a través de la causal invocada es promover un nuevo debate probatorio y un nuevo análisis de la situación fáctica aducida por las partes que ya ha sido analizada, para modificar las conclusiones establecidas por la instancia de mérito y forzar un nuevo pronunciamiento, lo que es inviable por resultar contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; a ello se agrega que los argumentos esbozados no contribuyen a revertir lo resuelto por la instancias de mérito, máxime si el Colegiado de Vista ha precisado con claridad que conforme al VI Pleno Jurisprudencial Supremo en Materia Laboral y Previsional de dos mil diecisiete, realizado en la ciudad de Lima en los días dieciocho de septiembre y dos de octubre de dos mil diecisiete, publicado en el diario oficial "El Peruano" el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en su II acuerdo, se ha determinado expresamente, como precedente vinculante que la categoría laboral en la que se debe enmarcar a los policías municipales y al personal de serenazgo, el Pleno acordó por unanimidad: "Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipalidades deben ser considerados como obreros", siendo ello así las causales devienen en **improcedentes. Octavo:** Sobre la causal denunciada en el **ítem iii),** debemos señalar que el dispositivo legal denunciado está dirigido a cuestionar el análisis fáctico y jurídico realizado por la Sala de mérito, no como parte del pronunciamiento sobre el fondo dictado para resolver la causa; tanto más, si la Sétima Disposición Complementaria de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, bajo la cual se ha tramitado el presente proceso, prevé que en los procesos laborales, el Estado (donde se encuentra incluidos los Gobiernos Locales) puede ser condenado al pago de costos. En consecuencia, la causal materia de calificación no cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber demostrado la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; razón por la cual deviene en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Municipalidad Distrital de Miraflores**, mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha trece de agosto de dos mil veinte, expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en los seguidos por Delfín Martin Ilizarbe Cabanillas contra la Municipalidad Distrital de Miraflores sobre desnaturalización de contratos y otros; y los devolvieron. Integra esta Sala el señor Juez Supremo Ato Alvarado por licencia del señor Juez Supremo Torres Gamarra. **Ponente, señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.-** S.S. CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-7**

CASACIÓN Nº 1223-2021 LIMA

Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Grupo RPP S.A.C., contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de febrero del dos mil veinte, que declara fundada la demanda sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros, modificando el importe a pagar a favor de actor en la suma de veinte mil cuatrocientos veinticuatro soles con cuarenta y nueve céntimos (S/.20,424.49) por concepto de beneficios sociales, utilidades y compensación por tiempo de servicios; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación interpuesto en fecha catorce de enero del dos mil veintiuno, debe observarse los lineamientos establecidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios laborales y otros; la misma que ha sido acogida por la Sala Superior en un monto total de veinte mil cuatrocientos veinticuatro soles con cuarenta y nueve céntimos (S/.20,424.49). Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, se declare el **reconocimiento de contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el Decreto Legislativo Nº 728**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, no constituyen pretensiones autónomas, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización y el consecuente reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, de por sí forman parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado no constituyen una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su

ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado son un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado en la sentencia de vista **no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por Grupo RPP S.A.C., contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por David Lee Sánchez Salazar contra Grupo RPP S.A.C., sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-8

CASACIÓN LABORAL Nº 1256-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, diecinueve de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Brightstar Logística Sociedad Anónima Cerrada antes Tgestiona Logística S.A.C.,** mediante escrito de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, contra la **Sentencia de Vista** de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, que **confirma** la sentencia de primera instancia de fecha trece de noviembre del año dos mil diecinueve, que declaró fundada la demanda sobre desnaturalización de contratos y otros, con lo demás que contiene, el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la parte demandante solicita desnaturalización de los contratos modales, reposición por despido incausado, costos y costas. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa mediante escrito de fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, por lo que cumple con dicho requisito. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i. Infracción normativa por inaplicación del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú. ii. Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 57 y 72 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la

resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre la causal señalada en el **ítem i)** del sexto considerando, este Tribunal Supremo observa que, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de derechos constitucionales, la recurrente no ha indicado en forma concreta cómo así se ha producido la afectación a estos derechos, ni ha identificado adecuadamente cuál es el supuesto de vicio ocurrido en este caso; asimismo, es indicar que el modo en que ha sido propuesta por la recurrente evidencia que lo pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a una nueva valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. En tal sentido, tal como ha sostenido la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a realizar un nuevo examen del proceso, toda vez que tal pretensión vulneraría la naturaleza y fines de este recurso extraordinario; en consecuencia, la causal materia de calificación no cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en **improcedente. Noveno:** En cuanto a la causal contemplada en los **ítems ii)** corresponde señalar que la causal de **interpretación errónea** se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, el juzgador al analizarla le da un sentido distinto al que corresponde. En el presente caso, a pesar de haberse sustentado la denuncia en un supuesto de infracción normativa por interpretación errónea de los dispositivos denunciados, la parte recurrente no ha cumplido con la exigencia antes descrita, pues no señala de modo expreso y concreto cuál es la interpretación de las disposiciones supuestamente infringidas llevadas a cabo por la instancia de mérito- que considera errónea y cuál es la interpretación de la misma que sí considera correcta, así, como las razones concretas que sostienen su apreciación (esto es de qué modo ha obtenido el resultado interpretativo que considera correcto), a efectos de poder establecer con precisión los alcances de la evaluación de la Sala de Casación, incumpliendo así, con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que prevé describir con claridad y precisión la infracción normativa; deviniendo en **improcedente. Décimo:** Al haberse declarado improcedente las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley citada, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Brightstar Logística Sociedad Anónima Cerrada antes Tgestiona Logística S.A.C.,** mediante escrito de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante Ángela Milagros López Mendoza contra Brightstar Logística Sociedad Anónima Cerrada, sobre desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA,** LÉVANO VERGARA. **C-2246709-9**

CASACIÓN LABORAL Nº 1347-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LABORAL- LEY Nº 29497, NLPT
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EJE

Lima, trece de julio de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada, **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO** de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, de fojas doscientos setenta y siete a trescientos cuatro; contra la **Sentencia de Vista** de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, de fojas doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y cuatro; expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispone: "**REVOCAR** la Sentencia Nº 432-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, que declara incausado el despido del accionante, ordena su reposición, así como el pago de la indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante y daño moral; la misma que **REFORMANDOLA** se declara **INFUNDADOS** dichos extremos. **CONFIRMAR** la Sentencia que declara: **DESNATURALIZADOS** los contratos de locación de servicios suscritos entre las partes; en consecuencia, se determina la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada, desde el 01 de octubre de 2018, con los beneficios económicos legales que surgen del régimen laboral de la actividad privada. **ORDENA** que la demandada registre al actor en su planilla de pago de trabajadores obreros permanentes del régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo Nº 728, tomando como f echa de ingreso del actor la del 01 de octubre de 2018. **ORDENA** que la demandada abone al actor la suma de SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES (S/.660.00) por conceptos de gratificaciones más intereses legales. **CONDENA** a la demandada al pago de costos; **SIN COSTAS**.". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; como órgano jurisdiccional de segunda instancia; **ii)** La referida sentencia de vista se pronuncia sobre pretensiones no cuantificables y cuantificables; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente ya que el recurrente fue notificado con la sentencia de vista, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno (fojas doscientos setenta y seis); **iv)** La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de las tasas y aranceles judiciales. **QUINTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, de fojas dos a dieciocho, ampliada de fojas ciento sesenta y siete; el demandante: **1)** Solicita la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre el actor y la Municipalidad de Santiago de Surco, desde el uno de octubre de dos mil dieciocho en adelante y en consecuencia el reconocimiento del vínculo laboral por dicho periodo. **2)** Solicita la incorporación a las planillas de pago de remuneraciones de obreros permanentes bajo el Decreto Legislativo Nº 728 régimen laboral privado-, por la modalidad del contrato indeterminado, desde el uno de octubre de dos mil dieciocho en adelante. **3)** Solicito el pago de los beneficios sociales, desde el uno de julio de dos mil dieciocho en adelante, que se detallan a continuación: 3.a) El pago de gratificaciones, por la suma de seiscientos con 00/100 (S/600.00). **4)** Solicito se ordene mi reposición al puesto de trabajo en las mismas condiciones de serenazgo en la subgerencia de serenazgo ahora denominada subgerencia de operaciones de seguridad ciudadana que venía desempeñando para la Municipalidad de Santiago de Surco por despido incausado, y además por gozar de estabilidad laboral en el Régimen Laboral de la Actividad Privada Decreto Legislativo Nº 728, no pudiendo ser cesado ni despedido sino por causas previstas en el CAPITULO IV del Decreto Legislativo Nº 728. **5)** Solicita el pago de la

indemnización por daños y perjuicios, los mismos que se detallan a continuación: **5.a)** Por lucro cesante consistente en el pago de mis remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir, desde la fecha del despido acontecido el dos de enero de dos mil diecinueve hasta mi efectiva reposición. **5.b)** Por daño moral consistente en un resarcimiento económico, por la grave afectación emocional y/o anímica sufrida a causa del despido incausado, por la suma de veinte mil con 00/100 soles (S/20.000.00). Y como pretensión subordinada solicita el pago de la indemnización por despido incausado, equivalente a un sueldo y medio por año laborado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38° del T.U.O del Decreto Legislativo Nº 728, por la suma de cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 (S/495.00). **SEXTO**. – Respecto requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa, tal como se verifica del escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve de fojas doscientos treinta y tres a doscientos treinta y siete. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **revocatorio. SEPTIMO.** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, las siguientes: **1. Inaplicación o aplicación indebida del artículo 3° del Decreto de Urgencia Nº 016-2020.** Refiere que, el A quo, pasando por alto dichas prescripciones legales, ha reconocido al demandante como un trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada, ordenando su inscripción a las planillas correspondientes; lo que ha generado un grave perjuicio al orden jurídico, que desarrollaremos en lo sucesivo. **2. Inaplicación del principio de igualdad y el principio de equilibrio presupuestario reconocidos en los artículos 2° y 78° de la Constitución Política del Perú.** Alega que, las implicancias del Derecho del trabajo en las entidades públicas, deben ser concatenadas con el precitado principio legal, que también está reconocido en la Constitución Política. **3. Inaplicación o aplicación indebida del artículo 139°, incisos 5) de la Constitución Política del Perú; el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los artículos 50° incisos 6), 121° y 122° del Código Procesal Civil, relativos al principio de congruencia y la debida motivación de resoluciones judiciales y la incorrecta interpretación del artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades.** Indica que, la Sala Superior no indica de qué forma la condición de un concurso público podría vulnerar el principio de tutela jurisdiccional efectiva. **OCTAVO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **NOVENO.** . Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **DECIMO.-** Con relación a la causal contenida en el **numeral 1),** en las casaciones Nros. 1772-2021 y 3577-2021, ambas de fecha uno de junio de dos mil veintidós, esta Sala Suprema, asumió posición respecto al análisis de las disposiciones normativas denunciadas; donde se concluyó que la decisión resulta acorde a la Constitución, ya que, aplicar las normas antes referidas, importaría la vulneración de los derechos fundamentales del derecho al trabajo, irrenunciabilidad de derechos laborales, retroactividad de las leyes y a la tutela judicial efectiva; más aún si mediante la Ley Nº 31115, de publicada el veintitrés de enero de dos mil veintiuno, se han derogado los artículos 2, 3, 4, 13, la Cuarta Disposición Complementaria Final y la Única Disposición Derogatoria del Decreto de Urgencia citado. En consecuencia, es evidente que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo tanto, la causal invocada deviene en **improcedente. DECIMO PRIMERO.-** Respecto a la causal contenida en el **numeral 2),** carece de incidencia, ya que, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que, las rigurosas reglas presupuestarias, no constituye un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador, por lo tanto, no cumple con el requisito del inciso 3) del artículo 36 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, por lo que la causal denunciada deviene en **improcedente**. **DECIMO SEGUNDO**.- Con relación a la causal contenida en el **numeral 3),** la entidad recurrente cuestiona el criterio adoptado por la Sala Superior en la sentencia de vista respecto a la materia discutida (desnaturalización de contratos y pago de beneficios laborales), circunstancia que no se subsume en la causal denunciada. Además, se debe indicar que, al dar lectura a la sentencia de vista, se observa que cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, sino también con la correspondiente absolución de agravios expuestos por la recurrente en su recurso de apelación, lo cual, conjuntamente con la valoración de las pruebas esenciales determinaron la decisión de confirmar la sentencia apelada; más aún si por tener la condición de sereno municipal, al demandante le corresponde el régimen de la actividad privada, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. En mérito a lo expuesto, se desprende que el recurso de casación en este extremo no cumple con los requisitos de procedencia normados en los incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y precisa en qué consistiría efectivamente la infracción normativa invocada, ni haber demostrado su incidencia en la decisión impugnada; razones por las cuales la causal denunciada deviene en **improcedente**. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO** de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, de fojas doscientos setenta y siete a trescientos cuatro; contra la Sentencia de Vista de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, de fojas doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y cuatro; expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **Luis Antonio Morales Paredes** contra la **recurrente**; sobre **desnaturalización de contratos y otros; y los devolvieron.** Interviene la Jueza Suprema Carlos Casas por licencia del Juez Supremo Torres Gamarra. **Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema.** S.S CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-10**

CASACIÓN LABORAL Nº 1389-2021 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de octubre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores**; contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que resuelve: **"**INAPLICAR, parcialmente, el D.U. Nº 016-2020; y como consecuencia de ello: CONFIRMAR la Sentencia Nº 362-2019-21° contenido en la Resolución Nº TRES de fecha 28 de agosto del 2019, que resuelve declarar FUNDADA la demanda, interpuesta por ALBERTO NERI ROJAS GONZALES contra MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, sobre la desnaturalización de Contratos Administrativos de Servicios y Beneficios Sociales, en consecuencia: DECLARARON la ineficacia de los Contratos Administrativos de Servicios celebrados entre las partes por el periodo comprendido del 01 de mayo del 2011 en adelante. DECLARARON la existencia de una relación laboral de carácter indeterminado (D. L. 728) entre el actor y la demandada desde el 01 de mayo del 2011 en adelante. ORDENARON que la demandada cumpla con inscribir al actor en su libro de planillas régimen laboral de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo Nº 728 desde el 01 de mayo del 2011 en adelante, en calidad de obrero. ORDENARON abone la demandada al actor la suma de S/31,104.49 SOLES (TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO CON 49/100 SOLES) por concepto de Beneficios Sociales (Gratificación, escolaridad, Asignación Familiar.

ORDENARON que la demandada se constituya en depositaria de la suma de S/6,739.99 SOLES (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES) por concepto de la compensación por tiempo de servicios, la misma que será abonada a la finalización del vínculo laboral. IMPONER a la demandada la obligación del pago de los costos que debe liquidarse en ejecución de sentencia sin costas del proceso"; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación por escolaridad, asignación familiar, los mismos que han sido acogidos por las instancias de mérito en el monto total de S/ 37,844.48. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la Ley Procesal del Trabajo tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la Ley Procesal del Trabajo que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la Ley Procesal del Trabajo; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión

procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores**; contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Alberto Neri Rojas Gonzales contra la recurrente, sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema.-** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. Excepcionalmente, la calificación será procedente si en el pronunciamiento materia de casación, se evidencia contravención a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto o si contraviene la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 384 y 392-A del Código Procesal Civil, normas de aplicación supletoria en los procesos laborales. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-11

CASACIÓN LABORAL Nº 1880-2021 LA LIBERTAD

Materia: REPOSICIÓN, INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO
PROCESO ORDINARIO LABORAL, LEY Nº 29497-LPT

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el **CENTRO PERUANO AMERICANO "EL CULTURAL",** de fecha seis de marzo de dos mil veinte; contra la **Sentencia de Vista** de fecha catorce de febrero de dos mil veinte; que resolvió: "**REVOCARON la sentencia (Resolución número TRES)**, de fecha 12 de abril de 2019, de fojas 260-282, de fecha 12 de setiembre de 2018, que se declaró **FUNDADA EN PARTE** la demanda **interpuesta** por **JESUS GERARDO CAILLOMA NAVARRETE** contra el **CENTRO PERUANO AMERICANO "EL CULTURAL"**, sobre **REPOSICIÓN POR DESPIDO FRAUDULENTO**; en consecuencia, **REFORMANDOLA** declararon **INFUNDADA** la demanda en el extremo de la reposición por despido fraudulento. **CONFIRMARON** como INFUNDADA la demanda respecto de la pretensión de indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante y daño moral. **DECLARARON** fundada la demanda en el extremo de indemnización por despido arbitrario; en consecuencia, **CUMPLA** la demandada con pagar al demandante la suma de **S/96,000.00 (noventa y seis mil y 00/100 soles). ORDENARON a** la demandada con pagar a la demandante la suma de S/. 5, 000.00 por concepto de honorarios profesionales, más el 5% para el Colegio de Abogados de La Libertad. **La confirmaron en lo demás que contiene".** Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 36 de la Ley Nº 29497 – Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, el demandante solicita su reposición por despido fraudulento por hechos falsos y falta de tipicidad, indemnización por daños y perjuicios y como

pretensión accesoria la indemnización por despido arbitrario, más intereses legales, costos y costas procesales. **QUINTO**. – Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, se debe indicar que la parte recurrente apeló, tal como se aprecia del escrito de apelación de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **REVOCATORIO. SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, la siguiente: **1. Infracción normativa de los artículos I, II, III, IV del Título Preliminar, el artículo 11, artículos 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 24, 31 de la Ley 29497, NLPT, artículo 188, 190, 191, 196, 197, 200 y 201 del Código Procesal Civil. SEPTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **OCTAVO.** . Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** En cuanto a la causal contenida en el **numeral 1)**, si bien es cierto la parte recurrente señala la norma supuestamente infringida; sin embargo, no explica con claridad y precisión la infracción que plantea ni demuestra su incidencia directa sobre la decisión cuestionada; en tanto, se advierte de su recurso de casación que de manera extensa se ha limitado a relatar sobre hechos sobre lucro cesante, pretendiendo que esta Sala Suprema realice un reexamen de la conclusión arribada por la Sala de mérito luego del análisis de las pruebas del proceso lo cual no es posible en esta sede casatoria. Siendo ello así, la cuestión jurídica que la parte recurrente pretende sea de conocimiento por esta Corte Suprema de Justicia de la República carece de trascendencia jurídica suficiente para merecer en el caso en concreto el correspondiente control casatorio. Razones por las cuales, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, deviniendo esta denuncia en **improcedente**. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **CENTRO PERUANO AMERICANO "EL CULTURAL",** de fecha seis de marzo de dos mil veinte; contra la **Sentencia de Vista** de fecha catorce de febrero de dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **Jesús Gerardo Cailloma Navarrete** contra la **recurrente**, sobre reposición, Indemnización por despido arbitrario; **y los devolvieron. Interviniendo la Señora Jueza Suprema Carlos Casas por impedimento del Señor Juez Supremo Castillo León. Ponente Vera Lazo, Jueza Suprema.** S.S CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-12**

CASACIÓN Nº 1954-2021 TACNA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por la demandante **Marilú Benita Choque Flores,** contra la sentencia de vista de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de una indemnización por daños y perjuicios por un monto total de S/40,633.66; es decir, la pretensión postulada representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso), consecuentemente, en el supuesto de haberse amparado lo pretendido, no superaría el monto exigido en la norma. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Marilú Benita Choque Flores,** contra la sentencia de vista de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Marilú Benita Choque Flores contra Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp – Sede Tacna, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021

C-2246709-13

CASACIÓN Nº 1973-2021 LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Asesores & Analistas SAC,** contra la sentencia de vista de fecha siete de setiembre de dos mil veinte, que resuelve **confirmar** la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales. **Revoca** los extremos de la recurrida que declaran infundadas las pretensiones de pago de remuneraciones insolutas por los meses de julio y diciembre del 2015 y del mes de junio del 2016; así como el pago de las gratificaciones correspondientes a julio y diciembre de 2012, julio de 2013, julio y diciembre de 2015 y julio de 2016; **y reformándolas,** las declararon fundadas; en consecuencia, **modificaron** la suma del adeudo, y ordenaron que las codemandadas paguen de manera solidaria al demandante la suma de S/89,275.03 (ochenta y nueve mil doscientos setenta y cinco y 03/100 soles), por los conceptos disgregados en el considerando Décimo Cuarto de la presente, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia. Declararon infundada la demanda respecto de la codemandada GP Motos SAC. **Modificaron** los costos del proceso y ordenaron que las codemandadas antes mencionadas paguen de manera solidaria en favor del demandante la suma de S/8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles), más el 5% de dicho monto en favor del Colegio de Abogados de La Libertad. Confirman con lo demás que contiene. Para cuyo efecto debe procederse a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Sala Laboral Superior, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; **ii)** Ante el órgano o jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, y **iv)** La parte recurrente adjuntó la tasa judicial correspondiente. **CUARTO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la

infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **QUINTO.** El recurso de casación cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso **1** del artículo 36 de la Ley Nº 29497, pues la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa. En cuanto al requisito señalado en el inciso **4** de la referida norma, del recurso se desprende que su pedido es anulatorio.- **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **1) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú,** indica que la Sala Laboral al responder el tema de fondo de lo alegado por la parte demandante, no ha tenido en cuenta las máximas de la experiencia, ni los principios de proporcionalidad y razonabilidad. **SÉTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO.** En relación a la causal denunciada en el **ítem 1)**, los argumentos que sustentan la causal bajo análisis están destinados a que este Tribunal Supremo realice un examen de la conclusión arribada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. Además, se debe indicar que, al dar lectura a la sentencia de vista, se observa que cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, sino también con la correspondiente absolución de agravios expuestos en el recurso de apelación, lo cual, conjuntamente con la valoración de las pruebas esenciales determinaron la decisión a la que arribo la sala laboral. En mérito a lo expuesto, se desprende que el recurso de casación no cumple con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nro. 29497, por lo tanto, la causal denunciada deviene en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Asesores & Analistas SAC,** contra la sentencia de vista de fecha siete de setiembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Juan Luis Martín Morales Landauro contra Asesores & Analistas SAC y otros, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y devuélvase. Interviniendo la señora Jueza Suprema Carlos Casas por impedimento del señor Juez Supremo Castillo León. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.- S.S.** CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-14**

CASACIÓN Nº 2060-2022 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Jesús María**; contra la sentencia de vista de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con cancelar al actor la suma de S/14,310.50 por concepto de gratificaciones legales y asignación familiar más intereses legales y financieros; asimismo, **ordena** que la demandada se constituya en depositaria de S/393.75 y deposite en una entidad financiera S/6,742.75 por concepto de compensación por tiempo de servicios, con lo demás que la contiene, más intereses legales y financieros; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones legales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios y asignación familiar; de los cuales el pago de gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios y asignación familiar han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/21,447.00; mientras que, respecto del concepto de vacaciones se advierte de autos que, en la sentencia de primera instancia se determinó que el actor hizo goce de su descanso vacacional por el periodo pretendido, extremo que ha quedado consentido por ambas partes. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **ineficacia de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la ineficacia de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando

impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de ineficacia de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013-Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización o ineficacia de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Jesús María**; contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Roberto Christian Cruzate Alcántara contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, sobre desnaturalización de contratos; y los devolvieron. Ponente Señor Salazar Lizárraga, Juez Supremo. **S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-15

CASACIÓN Nº 2936-2021 PIURA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Municipalidad Provincial de Piura,** de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de agosto de dos mil veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Piura, que resuelve: **"1.- CONFIRMARON** la Sentencia contenida en la Resolución No. 05 su fecha 16 de diciembre del dos mil diecinueve,

que obra de fojas 385 al 396 de autos, que resuelve DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por BAZALAR CAMACHO MARTIN contra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, respecto de la pretensión de Nivelación de Remuneraciones. 2.- ORDENA que la demandada cumpla con nivelar la remuneración al accionante, a partir de la fecha de interposición de la demanda, respecto del trabajador comparativo CRUZ ANTONIO TORREZ FLORES; DECLARA FUNDADA la pretensión accesoria de costos procesales; sin costas del proceso." Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (lo que se advierte en el presente caso, ya que apeló la sentencia de primera instancia; por lo que, tal exigencia se cumple); debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el demandante solicita, la nivelación de remuneraciones del accionante con el trabajador comparativo Cruz Antonio Torres Flores. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la cuestionó, conforme se aprecia del escrito de apelación presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que esta exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación la siguiente: **1. Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política de Perú. 2. Apartamiento del precedente vinculante consiste en que la Sala Superior no observó la Casación Laboral 19367-2015-JUNÍN y Casación Nº 208-2005-PASCO SEPTIMO.** Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** Sobre la causal denunciada en el **numeral 1),** la parte recurrente pretende que esta Sala Suprema realice un reexamen de la conclusión arribada por la sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual no es posible en esta sede casatoria; señalando, que omitió precisar los conceptos remunerativos del trabajador homólogo propuesto, constituía un defecto de motivación lo cual impide que podamos cuestionar dichos conceptos remunerativos, lo cuales de haberse consignado hubiésemos podido cuestionarlos, por ende no se ha emitido una sentencia conforme al mérito de lo actuado y acorde a derecho; de ello se advierte que el recurso de casación está dirigido a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito; sin embargo, en el fondo pretende que esta Sala Suprema revise las pruebas y hechos establecidas por la Sala Superior al emitir pronunciamiento, situación que no es propia del análisis casatorio. Razones por la cual, la causal invocada no cumplen con las exigencias señaladas en el inciso 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo esta denuncia en **improcedente. NOVENO.** Sobre la causal denunciada en el **numeral 2),** cabe señalar que la parte recurrente señala el apartamiento casaciones emitidas por la Corte Suprema. Sin embargo, las casaciones referidas en sus fundamentos no constituyen precedente vinculante conforme al Artículo 40[1] de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo; atributo de la cual debe estar investida para efectos de ser amparada dentro de la causal prevista en el artículo 34° del mismo dispositivo legal. Razón por la que dicha causal denunciada califica como **improcedente**. **DECIMO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es **revocatorio**, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso, pues los requisitos son necesariamente concurrentes, lo que no se configura en el caso concreto. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación por la parte demandada, **Municipalidad Provincial de Piura,** de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de agosto de dos mil veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Piura; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en el proceso seguido por Martin Bazalar Camacho, contra la recurrente, sobre Incumplimiento de normas laborales. Interviniendo como **ponente** señora jueza suprema **Vera Lazo; y los devolvieron.** S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA.

---

[1] **Artículo 40.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República**
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.
Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio.

C-2246709-16

CASACIÓN Nº 3089-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Cia Minera Casapalca SA (hoy: Alpayana SA),** contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que resuelve **confirmar** la sentencia apelada que declara fundada la demanda en consecuencia; se reconoce al actor bajo un Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado por el periodo 01.09.2010 al 26.02.2019, bajo el régimen laboral de la actividad Privada Decreto Legislativo Nº 728; se reconoce que el cese del actor es por despido fraudulento; se ordena a la parte demandada cumpla con reponer al actor, en un plazo de cinco días hábiles, en su mismo puesto de trabajo que ostentaba antes de su cese o en otro de igual o similar categoría en caso de imposibilidad, manteniendo su misma remuneración. Para cuyo efecto debe procederse a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Sala Laboral Superior, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; **ii)** Ante el órgano o jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, y **iv)** La parte recurrente adjuntó la tasa judicial correspondiente. **CUARTO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes

vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **QUINTO.** El recurso de casación cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso **1** del artículo 36 de la Ley Nº 29497, pues la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa. En cuanto al requisito señalado en el inciso **4** de la referida norma, del recurso se desprende que su pedido es revocatorio.- **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **1) Interpretación errónea del artículo 43 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR,** indica que la Sala Laboral ha considerado que el cargo de chofer del gerente de operaciones no es un cargo de confianza lo cual evidencia una notoria interpretación errónea. **SÉTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO.** En relación a la causal denunciada en el **apartado 1),** se debe señalar que la recurrente no ha incumplido con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, esto es, demostrar la incidencia de ésta en la decisión impugnada, toda vez que los fundamentos que sustentan dicha denuncia se centran en cuestionar lo resuelto por la Sala Superior en donde quedó establecido que la demandante no cumple con los requisitos que establece el artículo 43 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, para ser calificado como un trabajador de confianza, al no verificarse que no tenía acceso a información de carácter reservado, ni reportaba sus labores a personal de dirección de la emplazada. En ese contexto, se advierte que lo pretendido por la recurrente es que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos analizados en el proceso, lo cual resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. En consecuencia, al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, **la causal denunciada en este extremo deviene en improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Cia Minera Casapalca SA (hoy: Alpayana SA),** contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Julio Gregorio Garcia Burga contra Cia Minera Casapalca SA (hoy: Alpayana SA), sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.- S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-17**

CASACIÓN 3204-2021 LAMBAYEQUE

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO

Lima, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirma la sentencia apelada de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, que declara fundada la demanda sobre desnaturalización de contrato; con lo demás que contiene; medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verificados, de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: **a)** La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; **b)** Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **c)** La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **d)** El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales, en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó al recurrente el veintisiete de agosto de dos mil veinte, y el recurso se interpuso el siete de setiembre de dos mil veinte. Finalmente, se observa que la parte impugnante adjunta el arancel correspondiente. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i)** La infracción normativa; o, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: **a)** En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, y, **b)** En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte emplazada denuncia las causales de: **1) Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política de Perú; 2) Infracción normativa material del artículo 2 del Reglamento de la Ley número 29245, aprobado por Decreto Supremo 006-2008-TR, sobre el ámbito de la tercerización y normas del sector eléctrico; 3) Infracción normativa material del artículo 2 de la Ley 29245, Ley de Tercerización; 4) Infracción normativa material del artículo 82 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 163 de su Reglamento, sobre pago de un presupuesto por parte del usuario que comprende la conexión eléctrica que pasan a ser propiedad del usuario; 5) Infracción normativa material de la Resolución 153-2011-OS/CD, sobre los costos de la conexión eléctrica; 6) Infracción normativa material del artículo 4 numeral 4.3 del Reglamento de la Ley 29245, aprobado por el Decreto Supremo 006-2008-TR, sobre equipos propios de la tercerizadora; 7) Infracción normativa material de los artículos 4, 9, 25 y 101 de la Resolución Ministerial 111-2013-MEM/DM, sobre las obligaciones de la entidad; 8) Infracción normativa material de los artículos 1777 y 1354 del Código Civil; 9) Infracción normativa material de los artículos 13 y 47 de la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo; 10) Infracción normativa procesal de los artículos 370 y 197 del Código Procesal Civil; y, 11) Infracción normativa material del Decreto de Urgencia 016-2020. SÉTIMO.-** En relación a las causales denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, pues no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende la entidad edil casante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a

fin de que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y al no advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra las garantías procesales constitucionales, se concluye que la sentencia de vista ha sido expedida en cumplimiento de los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que en el presente caso la Sala Superior ha determinado que en la ejecución del contrato celebrado entre las codemandadas Electronorte S.A. y Pexport S.A.C., los trabajadores de esta última no estaban bajo su exclusiva subordinación tal y como exige el artículo 2 de la Ley 29245; en consecuencia, tal y como lo establece el artículo 5 de la citada norma, da origen a que los trabajadores desplazados (entre ellos el demandante) tengan una relación directa e inmediata con la empresa principal, que es Electronorte S.A.; asimismo, habiéndose producido el cese del actor el treinta y uno de marzo de dos mil trece, durante la vigencia del contrato celebrado entre Electronorte S.A. y Pexport S.A.C., es decir cuando por efecto de la desnaturalización de la tercerización, el demandante tenía la condición de trabajador directo de Electronorte S.A.; entonces, se determina que el accionante no podía ser cesado sino por alguna de las causas justas previstas en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; por otro lado, se verifica que existe proximidad entre la fecha en la que se desarrolló el procedimiento de inspección del trabajo y la fecha en que se produjo el cese del vínculo laboral del demandante, despido, esto es el treinta y uno de marzo de dos mil trece, configurándose así el despido nulo en la causal invocada prevista en el artículo 29 inciso c) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por presentar queja contra el empleador ante las autoridades competentes. Cabe anotar que la actuación inspectiva se inició a partir del veintinueve de noviembre de dos mil doce y preliminarmente, en su fase de Hechos Comprobados concluyó el veintiuno de febrero de dos mil trece. Luego daría lugar al Acta de Infracción Nº 019-2013-DNCISS; por lo tanto, se concluye que por la existencia de un despido nulo da derecho a la reposición en el puesto de trabajo que tenía al momento del cese y conforme al artículo 40 de la Ley citada, el accionante tiene derecho al pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el despido, con deducción de los periodos de inactividad procesal no imputables a las partes, además la demandada debe proceder al depósito de la compensación por tiempo de servicios con sus intereses. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Carlos Alberto Ponce Vásquez contra Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima y otra, sobre desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron. Interviene la Jueza Suprema Carlos Casas por licencia de la Jueza Suprema Ampudia Herrera. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo.- S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-18**

CASACIÓN Nº 3285-2021 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO-NLPT

Lima, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento el recurso de casación interpuesto por la parte co demandada, **Reguard Security Corp SA,** contra la sentencia de vista de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, que **confirma** la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, e infundada la demanda en cuanto al pago de reintegro de bonificaciones, horas extras, trabajo días feriados y descansos, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, utilidades y asignación familiar; la revocaron en cuanto ordena el pago de la suma de S/90,780.65 por los conceptos demandados y reformándola ordena el pago de S/89,850.29 por los conceptos de reintegros de horas extras, gratificaciones, bonificación extraordinaria, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, más el concepto de utilidades, con todo lo demás que contiene. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 114 y siguientes, el accionante, interpone demanda solicitando el reintegro de beneficios sociales así como la declaración de la existencia de vinculación económica entre los co demandados a efectos que se considere la existencia de una sola relación laboral desde el trece de enero de dos mil once hasta el veintiocho de febrero del dos mil diecisiete. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la sentencia que le fue adversa, ya que la apeló conforme se observa del escrito de apelación de fojas 77 y siguientes; por lo que tal exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa por vulneración del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado,** toda vez que la motivación empleada sobre la naturaleza del concepto de bonificación es aparente, además, la motivación empleada por la sala en cuanto a la incidencia de las bonificaciones para el cálculo de reintegro de horas extras, días feriados y beneficios sociales es nula. **ii) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 140, 141 y 141-A del Código Civil,** toda vez que no se ha tomado en consideración que el demandante renunció el 30 de junio del 2012 a su primer empleador, con lo cual el vínculo laboral válidamente se extinguió, lo que acredita que el vínculo laboral no fue continuo sino que hubo un corte en el tiempo. **iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 51 de la Ley General de Sociedades,** toda vez que la Sala Superior ha concluido la existencia de una vinculación económica entre las demandadas y en virtud a ello una responsabilidad solidaria, sin embargo, la solidaridad no se presume sino que debe ser expresamente sancionada por ley por haberse observado alguna irregularidad, situación que no ha tenido lugar en el presente caso. **iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo 11 del TUO del Decreto Legislativo Nº 854 Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR,** toda vez que la Sala Superior si bien analiza que los conceptos de bonificación, bonificación cliente, bonificación asignación cliente, bonificación especial y movilidad por asistencia serian remunerativos, sin embargo no analiza si estos conceptos califican como complementarios, variables o imprecisos. **v) Infracción normativa por inaplicación del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,** toda vez que la Sala Superior si bien determina que los conceptos pagados al demandante por bonificación, bonificación cliente, bonificación asignación cliente, bonificación especial son remunerativos, sin embargo, no analiza si según la norma denunciada estos conceptos califican como complementarios, variables o imprecisos. **SÉTIMO.** La

infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material, incluyendo, además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO.** Previo al análisis de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** En relación a la causal denunciada en el **apartado i)**, se aprecia que si bien la recurrente cuestiona la existencia de una motivación aparente en cuanto al pago de las bonificaciones, sin embargo, contrario a lo señalado por el impugnante, se advierte una motivación suficiente y razonada por parte del Ad quem en cuanto a este extremo, conforme se puede observar del considerando 4.2.2, por el que luego de analizar que conceptos se consideran remunerativos y cuáles no, se ha determinado que las bonificaciones habituales constituyen remuneraciones si el empleador acostumbra a otorgarlas todos los meses, como ocurre en el presente caso, al verificarse que el demandante ha percibido dicho concepto durante su relación laboral sin condición alguna; en tal sentido, se razona que lo que pretende con dichas alegaciones es modificar las cuestiones de hecho, así como una revaloración del material probatorio con el fin de obtener un nuevo fallo que le resulte favorable lo que a todas luces no resulta posible en sede casatoria. En tal sentido se observa una resolución suficientemente motivada, que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho, expedida con respeto al debido proceso, al deber de motivación de las resoluciones judiciales y cautelando el derecho de defensa de las partes. En consecuencia, la causal materia de calificación no cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en **improcedente. DÉCIMO.** Respecto a la causal descrita en el **apartado ii),** se debe indicar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, corresponde señalar cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, requisitos que no cumple el impugnante, pues, de la fundamentación expuesta en el recurso no se advierte análisis del por qué debería aplicarse la norma denunciada, toda vez que no basta la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; por cuyas razones, la causal invocada deviene en **improcedente** al no cumplir con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **DÉCIMO PRIMERO.** En relación al cargo señalado en el **apartado iii),** se debe señalar que si bien el recurrente cumple con señalar la norma inaplicada; sin embargo, respecto a la incidencia directa del pronunciamiento materia de impugnación, se advierte que sus fundamentos están referidos a aspectos fácticos y de valoración de medios probatorios analizados por las instancias de mérito, en donde quedo establecido que la empresa Proseguridad SA intervino como accionista en la reunión de directorio de la empresa Reguard Security Corp SA, presentando intereses empresariales comunes, lo que denota la existencia de una vinculación económica entre ambas empresas al haber ejercido de manera simultánea su administración y dirección, más aún, si son las propias demandadas las que han aceptado en sus escritos de contestación de demanda y apelación que pertenecen a un mismo grupo empresarial. De lo expuesto, se observa que lo pretendido por el recurrente es imponer su especial parecer respecto del proceso por encima del criterio de los juzgadores, cuando estos son los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a los artículos 138 y 139 inciso 2 de la Constitución, razón por la cual debe desestimarse el recurso al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 2) del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; siendo así, la causal deviene en **improcedente**. **DÉCIMO SEGUNDO:** En cuanto a las denuncias descritas en los **literales iv) y v)** si bien se mencionan las normas que se consideran infringidas, sin embargo, el recurrente no precisa con claridad y precisión su pertinencia al caso de autos, y como incidiría en el resultado del proceso, pues solo se limita a señalar que la Sala Superior no habría analizado si las bonificaciones califican como complementarios, variables o imprecisas, advirtiéndose que lo que en rigor pretense el recurrente es que se emita nuevo pronunciamiento respecto a la naturaleza de las bonificaciones lo que no se corresponde con el objeto del recurso de casación al haberse determinado claramente que al ser dichas bonificaciones de naturaleza remunerativos, si corresponden ser incluidos en el recalculo correspondiente; por cuyas razones, la causal invocada deviene en **improcedente** al no cumplir con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **DÉCIMÓ TERCERO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, carece de objeto su análisis al haberse declarado la improcedencia de las causales contenidas en los considerandos que anteceden. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte co demandada, **Reguard Security Corp SA**, contra la sentencia de vista de fecha siete de diciembre de dos mil veinte; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Wilfredo Gutiérrez Mendoza contra Reguard Security Corp SA, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-19**

CASACIÓN Nº 3285-2021 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO-NLPT

Lima, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO**: Viene a conocimiento el recurso de casación interpuesto por la parte codemandada, **Proseguridad SA**, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de octubre del dos mil veinte, que **confirma** la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, e infundada la demanda en cuanto al pago de reintegro de bonificaciones, horas extras, trabajo días feriados y descansos, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, utilidades y asignación familiar; la revocaron en cuanto ordena el pago de la suma de S/90,780.65 por los conceptos demandados y reformándola ordena el pago de S/89,850.29 por los conceptos de reintegros de horas extras, gratificaciones, bonificación extraordinaria, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, más el concepto de utilidades, con todo lo demás que contiene. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 114 y siguientes, el accionante, interpone demanda solicitando el reintegro de beneficios sociales así como la

declaración de la existencia de vinculación económica entre las codemandadas a efectos que se considere la existencia de una sola relación laboral desde el trece de enero de dos mil once hasta el veintiocho de febrero del dos mil diecisiete. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la sentencia que le fue adversa, ya que la apeló conforme se observa del escrito de apelación de fojas 77 y siguientes; por lo que tal exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa por vulneración del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado,** toda vez que la motivación empleada sobre la naturaleza del concepto de bonificación es aparente, además, la motivación empleada por la sala en cuanto a la incidencia de las bonificaciones para el cálculo de reintegro de horas extras, días feriados y beneficios sociales es nula. **ii) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 140, 141 y 141-A del Código Civil,** toda vez que no se ha tomado en consideración que el demandante renuncio el 30 de junio del 2012 a su primer empleador, con lo cual el vínculo laboral válidamente se extinguió, lo que acredita que el vínculo laboral no fue continuo sino que hubo un corte en el tiempo. **iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 51 de la Ley General de Sociedades,** toda vez que la Sala Superior ha concluido la existencia de una vinculación económica entre las demandadas y en virtud a ello una responsabilidad solidaria, sin embargo, la solidaridad no se presume sino que debe ser expresamente sancionada por ley por haberse observado alguna irregularidad, situación que no ha tenido lugar en el presente caso. **iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo 11 del TUO del Decreto Legislativo Nº 854 Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR,** toda vez que la Sala Superior si bien analiza que los conceptos de bonificación, bonificación cliente, bonificación asignación cliente, bonificación especial y movilidad por asistencia serian remunerativos, sin embargo no analiza si estos conceptos califican como complementarios, variables o imprecisos. **v) Infracción normativa por inaplicación del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,** toda vez que la Sala Superior si bien determina que los conceptos pagados al demandante por bonificación, bonificación cliente, bonificación asignación cliente, bonificación especial son remunerativos; sin embargo, no analiza si según la norma denunciada estos conceptos califican como complementarios, variables o imprecisos **SÉTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material, incluyendo, además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO.** Previo al análisis de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** En relación a la causal denunciada en el **apartado i)**, se aprecia que si bien la recurrente cuestiona la existencia de una motivación aparente en cuanto al pago de las bonificaciones; sin embargo, contrario a lo señalado por el impugnante, se advierte una motivación suficiente y razonada por parte del Ad quem en cuanto a este extremo, conforme se puede observar del considerando 4.2.2, por el que luego de analizar que conceptos se consideran remunerativos y cuáles no, se ha determinado que las bonificaciones habituales constituyen remuneraciones si el empleador acostumbra a otorgarlas todos los meses, como ocurre en el presente caso, al verificarse que el demandante ha percibido dicho concepto durante su relación laboral sin condición alguna; en tal sentido, se razona que lo que pretende con dichas alegaciones es modificar las cuestiones de hecho, así como una revaloración del material probatorio con el fin de obtener un nuevo fallo que le resulte favorable lo que a todas luces no resulta posible en sede casatoria. En tal sentido se observa una resolución suficientemente motivada, que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho, expedida con respeto al debido proceso, al deber de motivación de las resoluciones judiciales y cautelando el derecho de defensa de las partes. En consecuencia, la causal materia de calificación no cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en **improcedente. DÉCIMO.** Respecto a la causal descrita en el **apartado ii),** se debe indicar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, corresponde señalar cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, requisitos que no cumple el impugnante, pues, de la fundamentación expuesta en el recurso no se advierte análisis del por qué debería aplicarse la norma denunciada, toda vez que no basta la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; por cuyas razones, la causal invocada deviene en **improcedente** al no cumplir con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **DÉCIMO PRIMERO.** En relación al cargo señalado en el **apartado iii),** se debe señalar que si bien el recurrente cumple con señalar la norma inaplicada; sin embargo, respecto a la incidencia directa del pronunciamiento materia de impugnación, se advierte que sus fundamentos están referidos a aspectos fácticos y de valoración de medios probatorios analizados por las instancias de mérito, en donde quedo establecido que la empresa Proseguridad SA intervino como accionista en la reunión de directorio de la empresa Reguard Security Corp SA, presentando intereses empresariales comunes, lo que denota la existencia de una vinculación económica entre ambas empresas al haber ejercido de manera simultánea su administración y dirección, más aún, si son las propias demandadas las que han aceptado en sus escritos de contestación de demanda y apelación que pertenecen a un mismo grupo empresarial. De lo expuesto, se observa que lo pretendido por el recurrente es imponer su especial parecer respecto del proceso por encima del criterio de los juzgadores, cuando estos son los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a los artículos 138 y 139 inciso 2 de la Constitución, razón por la cual debe desestimarse el recurso al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 2) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; siendo así, la causal deviene en **improcedente**. **DÉCIMO SEGUNDO:** En cuanto a las denuncias descritas en los **literales iv) y v),** si bien se mencionan las normas que se consideran infringidas; sin embargo, el recurrente no precisa con claridad y precisión su pertinencia al caso de autos, y como incidiría en el resultado del proceso, pues solo se limita a señalar que la Sala Superior no habría analizado si las bonificaciones califican como complementarios, variables o imprecisas, advirtiéndose que lo que en rigor pretense el recurrente es que se emita nuevo pronunciamiento respecto a la naturaleza de las bonificaciones lo que no corresponde con el objeto del recurso de casación, al haberse determinado claramente que al ser dichas bonificaciones de naturaleza remunerativas, si corresponderían ser incluidos en el recálculo correspondiente; por cuyas razones, la causal invocada deviene en **improcedente** al no cumplir con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **DÉCIMO TERCERO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, carece de objeto su análisis al haberse declarado la improcedencia de las causales contenidas en los considerandos que anteceden. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte co demandada, **Proseguridad SA**, contra la sentencia de vista de fecha siete de diciembre de dos mil veinte; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Wilfredo Gutiérrez Mendoza contra Proseguridad SA y otra, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-20**

CASACIÓN 3567-2021 AREQUIPA

Materia: IMPUGNACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: **PRIMERO**.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por **Luis Helmunth Orihuela Astorga**, contra la sentencia de vista de fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirma la sentencia apelada de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, que declara infundada la demanda de impugnación de medida disciplinaria; con lo demás que contiene; medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verificados, de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: **a)** La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; **b)** Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **c)** La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **d)** El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone contra la sentencia de vista de fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales, en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó al recurrente el doce de noviembre de dos mil veinte, y el recurso se interpuso el veintiséis de noviembre de dos mil veinte; presentando la tasa judicial correspondiente. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i)** La infracción normativa; o, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: **a)** En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley; y, **b)** En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte recurrente denuncia las causales de: **1) Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 5 y 14 de la Constitución Política del Estado; 2) Infracción normativa material de los artículos 23.4 inciso a) y 19 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo; y, 3) Apartamiento del precedente vinculante recaído en la casación laboral 3804-2010-Del Santa. SÉTIMO.-** En relación a las causales denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, pues no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende el casante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y al no advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra las garantías procesales constitucionales, se concluye que la sentencia de vista ha sido expedida en cumplimiento de los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que en el presente caso la Sala Superior ha determinado que respecto a que el demandante sostiene que no ejerció su derecho a defensa al habérsele privado de su derecho de ofrecer medios de prueba; sin embargo, no señala cuales son los medios de prueba que pudo haber presentado, y tampoco en ese proceso judicial ha ofrecido medios probatorios de los que se manifieste que los hechos alegados por su empleador no se hayan producido, que determine que el empleador actuó arbitrariamente; por lo que, en ese sentido se desestima dicha alegación, y en base a similares fundamentos del a quo, como es de tomar en cuenta las declaraciones testimoniales de las trabajadoras por la cuales se comprueba que hay una conducta que configura el hostigamiento sexual por el actor; asimismo, indica que resulta razonable, proporcional y de tal importancia que determine la suspensión del trabajador por cinco dias sin goce de haber; cabe indicar que el actor prestaba sus servicios en la empresa Petroperú como jefe de la unidad sur, y las agraviadas se encontraban laborando prestando servicios en las diversas áreas de la empresa, y se evidencia que la conducta del actor afectó el clima laboral, por lo que resulta una causal de suspensión del contrato de trabajo contemplada en el inciso g) del artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aunado a ello, también se encuentra contemplado en el artículo 8 inciso 3 de la Ley 27942, que señala: “si el hostigador es un trabajador del régimen laboral privado, puede ser sancionado, según la gravedad de los hechos, con amonestación, suspensión o despido”, así como en su reglamento interno de trabajo, en su artículo 39. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Luis Helmunth Orihuela Astorga**, contra la sentencia de vista de fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Luis Helmunth Orihuela Astorga contra Petroperú Sociedad Anónima, sobre impugnación de sanción disciplinaria; y los devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo.- S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-21**

CASACIÓN LABORAL Nº 3580-2021 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, tres de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS y CONSIDERANDOS: Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Ajinomoto del Perú S.A.**, mediante escrito presentado con fecha nueve de setiembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho, de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, expedida por la Sétima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **revocó** la sentencia en el extremo que declaró fundada la demanda de indemnización por daño moral; y, **reformándola** declaró infundado este concepto, y confirmó la sentencia expedida, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el extremo que declaró fundada en parte la demanda sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las

causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, el accionante solicita desnaturalización del contrato de trabajo bajo la modalidad de contrato por incremento de actividades, reposición en el cargo que venía desempeñándose, el pago de indemnización por daños y perjuicios lucro cesante, pago de indemnización por daño moral y pago de intereses más costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i. Infracción al artículo 139 incisos 3 y 6 de la Constitución Política del Perú, y el del artículo 23.4 inciso a) de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo.** Sostiene que la Sétima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima ha desconocido las alegaciones referidas al legítimo derecho a probar, y consecuentemente al derecho a la doble instancia. **ii. Indebida interpretación del artículo 1332 del Código Civil.** Manifiesta que la Sétima Sala Laboral ha inaplicado dicho dispositivo legal, y en su lugar ha establecido una indemnización por lucro cesante sobre una negada base que se equipara a las remuneraciones dejadas de percibir, porque así lo plantea el demandante, es decir que se atiende un concepto indemnizatorio que brinda al actor aquellas remuneraciones que no habría recibido por el plazo en el que se encontró sin vínculo laboral. **iii. Inaplicación del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-97-TR.** Refiere que al aplicar el artículo citado se hubiera concluido que en el presente caso no es posible equiparar la indemnización por lucro cesante a las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo en que el actor estuvo cesado. **Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Respecto a la causal denunciada en el **ítem i)** la parte recurrente no esboza argumentos claros sobre la causal, no demuestra la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, ni ha expresado cómo es que se ha visto afectado el debido proceso y cómo entiende que se ha afectado el derecho a la debida motivación, tampoco precisa un vicio concreto e insubsanable que amerite una nulidad de actuados; antes bien, pretende que este Tribunal Supremo realice un examen de las conclusiones arribadas por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, no se cumple con las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que la causal invocada deviene en **improcedente. Noveno:** Sobre la causal denunciada en el ítem **ii)** se debe decir que la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. En el caso concreto, la parte demandante señala cual sería la supuesta infracción normativa; sin embargo no se demuestra la incidencia directa de esta sobre la decisión tomada; en consecuencia, las causales invocadas no cumplen con la exigencia establecida por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente. Décimo:** Sobre la causa denunciada en el **ítem iii)** debemos indicar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, es evidente que no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la conclusión arribada por la Sala Laboral. Siendo así, al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviene en **improcedente. Décimo primero:** Al haberse declarado improcedentes las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Ajinomoto del Perú S.A.**, mediante escrito presentado con fecha nueve de setiembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho, de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Juan Carlos Bernabe Huasacca contra Ajinomoto del Perú S.A., sobre desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, **AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-22**

CASACIÓN LABORAL Nº 3600-2021 LIMA

Materia: REPOSICIÓN POR DESPIDO NULO
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **ARIS INDUSTRIAL S.A.,** mediante escrito de fecha trece de octubre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de fecha veintidós de setiembre de dos mil veinte, que revoca la sentencia de primera instancia contenida en la resolución fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la demanda y reformándola la declaró fundada sobre nulidad de despido y otros, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la parte demandante solicita reposición por despido nulo, pago de remuneraciones devengadas más costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante se encuentra

exonerado de dicho requisito, toda vez que la sentencia emitida en primera instancia le fue favorable. Cabe señalar que su pedido casatorio es revocatorio. **Sexto:** La empresa recurrente denuncia, textualmente, las siguientes causales: **i) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. ii) Infracción normativa del artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal. iii) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 29 incisos a) y b) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. iv) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 25 inciso b) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre las causales señaladas en los **ítems i) y ii)** del sexto considerando, este Tribunal Supremo observa que, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de dispositivos constitucionales y legales, debemos decir que la parte demandada no ha descrito en forma clara ni precisa las normas invocadas y tampoco ha demostrado adecuadamente la incidencia directa de las mismas sobre la decisión impugnada, ello de conformidad con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497; motivo por las cuales estas causales devienen en **improcedentes. Noveno:** Respecto a las causales propuestas en los **ítems iii) y iv)**, del sexto considerando, debemos señalar que la causal de **interpretación errónea** se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, el juzgador al analizarla le da un sentido distinto al que corresponde. En el presente caso, a pesar de haberse sustentado la denuncia en un supuesto de infracción normativa por interpretación errónea de los dispositivos denunciados, la parte recurrente no ha cumplido con la exigencia antes descrita, pues no señala de modo expreso y concreto cuál es la interpretación de las disposiciones supuestamente infringidas llevadas a cabo por la instancia de mérito- que considera errónea y cuál es la interpretación de la misma que sí considera correcta, así, como las razones concretas que sostienen su apreciación (esto es de qué modo ha obtenido el resultado interpretativo que considera correcto), a efectos de poder establecer con precisión los alcances de la evaluación de la Sala de Casación, motivo por el cual, resulta improcedente la causal denunciada; incumpliendo así, con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que prevé describir con claridad y precisión la infracción normativa; deviniendo en **improcedentes. Décimo:** Al haberse declarado improcedentes las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley citada, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **ARIS INDUSTRIAL S.A.,** mediante escrito de fecha trece de octubre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Orlando Rodolfo Alegre Carrasco contra ARIS INDUSTRIAL S.A., sobre reposición por despido nulo y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-22**

CASACIÓN LABORAL Nº 3894-2021 CUSCO

Materia: NULIDAD DE DESPIDO Y OTROS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veintiséis de octubre de dos mil veintidós

VISTOS; y **CONSIDERANDO: Primero:** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Epifanía Quispe Castillo**, mediante escrito de fecha tres de setiembre de dos mil veinte, contra el Auto de Vista de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, que confirmó el auto de fecha veinte de enero de dos mil veinte, que declaró concluido el proceso de forma especial, por inconcurrencia a una segunda audiencia programado por el órgano jurisdiccional, con lo demás que contiene; cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la parte demandante solicita reposición por despido nulo, más costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causal de su recurso de casación la **infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Séptimo:** Antes del análisis de la causal propuesta, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre la causal señalada en el sexto considerando, este Tribunal Supremo observa que, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de derecho constitucional, debemos decir que la parte demandada no ha descrito en forma clara ni precisa las normas invocadas y tampoco ha demostrado adecuadamente la incidencia directa de las mismas sobre la decisión impugnada, ello de conformidad con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497; motivo por las cuales esta causal deviene en **improcedente. Noveno:** Al haberse declarado improcedente las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley citada, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Epifanía Quispe Castillo,** mediante escrito de fecha tres de setiembre de dos mil veinte, contra el Auto de vista de fecha veinte de agosto de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Epifanía Quispe Castillo contra el Plan Copesco (antes: Proyecto Especial Regional Plan Copesco del Gobierno Regional del Cusco), sobre nulidad de despido y otros; y los devolvieron. Ponente, señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-24**

CASACIÓN 3928-2021 LA LIBERTAD

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera Poderosa Sociedad Anónima, a fojas cuatrocientos cinco, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos ochenta y tres, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución número 6, de fecha siete de octubre de dos mil dieciocho, de fojas trescientos diecinueve, que declara fundada en parte la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios y otros; en consecuencia, ordenaron que la demandada pague a la parte demandante la suma de S/ 160,107.69 (ciento sesenta mil ciento siete mil y 69/100 soles), más el pago de intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia; con lo demás que contiene; medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verificados, de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; b) Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, d) El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos ochenta y tres, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales, en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó a la parte recurrente el cuatro de junio de dos mil veinte, según el cargo de notificación electrónica de fojas cuatrocientos dos, y el recurso se interpuso el dieciséis de julio de dos mil veinte. Finalmente, se observa que la parte impugnante adjunta el arancel correspondiente a la pretensión que se ha demandado. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La infracción normativa; o, ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: a) En relación a los requisitos de procedencia, cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues, la parte impugnante apeló la sentencia de primera instancia donde obtuvo fallo desfavorable; y, b) En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte emplazada denuncia la causal de:- **1) Infracción normativa procesal del artículo 23.1 de la Ley Nº 29497 y los artículos XV del Título Preliminar, 411 y 418 del Código Procesal Civil; y, 2) Infracción normativa material del artículo 166 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minero Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, artículos 1969, 1970 y 1985 del Código Civil, artículo 9 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, en correspondencia con los artículos 1 y 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo Decreto Supremo Nº 007-2002-TR. SÉTIMO.-** En relación a las causales material y procesal denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, pues, no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende la entidad edil casante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y al no advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra las garantías procesales constitucionales, se concluye que la sentencia de vista ha sido expedida en cumplimiento de los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, ya que en el presente caso la Sala Superior ha determinado que el accidente de trabajo ha truncado al occiso de todos sus proyectos a la edad de cuarenta y dos años, a su libre desarrollo, pues por la naturaleza del daño irrogado, del accidente de trabajo, suponen, en esencia, la generación de un daño a la persona; respecto al daño moral, uno de los múltiples daños sicosomáticos que pueden lesionar a la persona por lo que se le debe considerar como un daño que afecta la esfera sentimental causado a la familia del occiso; es razonable que la familia se encuentre afectada emocionalmente por la pérdida de su ser querido. Asimismo, respecto a la categoría de daño extrapatrimonial señala que este daño debe ser fijado subjetivamente pero de manera prudente y razonable conforme se desprende del artículo 1332 del Código Civil, que establece “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración equitativa”, por lo que fija que se pague a favor de la parte demandante la suma de ciento diez mil soles (S/110,000.00 soles), disgregados en daño a la persona, daño moral y daño al proyecto de vida; y en referencia al pago de horas extras, colige que le corresponde que se le pague a favor de los accionantes, debido a que existe un adeudo a su favor y por consiguiente le corresponde el pago de los reintegros de los beneficios sociales por incidencia del pago del pago de las horas extras. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera Poderosa Sociedad Anónima, a fojas cuatrocientos cinco, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos ochenta y tres, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Angelica Cabrera Ramírez contra la Compañía Minera Poderosa Sociedad Anónima, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y otros; y los devolvieron. Interviene esta Sala la Señora Jueza Suprema Carlos Casas por impedimento del Señor Juez Supremo Castillo León. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo. S.S. VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS.**C-2246709-25**

CASACIÓN LABORAL Nº 4549-2021 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, diez de octubre de dos mil veintidós

VISTOS y CONSIDERANDOS: Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Jair Orlando Mogollón Díaz**, mediante escrito presentado con fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **confirmó** la sentencia contenida en la resolución número ocho, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, que declaró **infundada** la demanda interpuesta por Jair Orlando Mogollón Díaz contra Petrolera Transoceánica S.A., sobre pago de indemnización por despido arbitrario, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, el accionante solicita se ordene a la demandada el abono de la suma de S/ 123,394.92 por concepto de indemnización por despido arbitrario; se ordene el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución de primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha dos de setiembre de dos mil veinte, del expediente principal electrónico. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causal de su recurso: **Infracción normativa del artículo 22 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR en concordancia con el artículo 197 del Código Procesal Civil;** refiere que no están demostradas las faltas acusadas, ni individualizadas las mismas, no justifica el despido, procediendo la indemnización por despido arbitrario. **Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** En lo que concierne a la causal señalada, corresponde señalar que si bien la recurrente ha precisado el dispositivo legal cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que ésta no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista. En consecuencia, correspondía a la recurrente expresar razones concretas y específicas del modo en que se habrían producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito, resultase jurídicamente errado. En tal sentido, se aprecia que el recurrente incumple los requisitos de procedencia, deviniendo en **improcedente** la causal invocada. **Noveno:** Al haberse declarado improcedente las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Jair Orlando Mogollón Díaz**, mediante escrito presentado con fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a Ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Jair Orlando Mogollón Díaz contra Petrolera Transoceánica S.A., y otros**,** sobre indemnización por despido arbitrario y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-26**

CASACIÓN LABORAL Nº 4733-2021 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, diez de octubre de dos mil veintidós

VISTOS y CONSIDERANDOS: Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Gisella María Huamán García**, mediante escrito presentado con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, expedida por la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **revocó** la sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha seis de agosto de dos mil veinte, en el extremo que ampara la indemnización por despido arbitrario; y, **reformándola** la declaró infundada; confirmando la sentencia en lo demás que contiene, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se advierte del escrito de demanda, la accionante solicita, desnaturalización de los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad y la indemnización por despido arbitrario, así mismo se ordene el pago de intereses, costas y costos del proceso. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que no le es exigible dicho requisito, ya que la resolución de primera instancia le fue favorable a la recurrente, tal como se aprecia del expediente principal electrónico. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **I. Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú;** indica que se ha transgredido en forma evidente su derecho a obtener una resolución motivada, pues si bien existe una motivación aparente esta no se ha producido como consecuencia de las pruebas actuadas en el proceso y el debate de posiciones en ambas instancias. **II. Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 25 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 728;** sostiene que la sala laboral ha realizado una interpretación errónea sobre las faltas graves imputadas al demandante sobre incumplimiento

de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con las labores. **Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** En cuanto a la causal señalada en el **ítem i)** este Colegiado observa que, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de un derecho constitucional, la parte recurrente no ha indicado en forma concreta cómo así se ha producido la afectación a este derecho, ni ha identificado adecuadamente cuál es el supuesto de vicio en la motivación de las resoluciones, ocurrido en este caso; puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales; por lo que se incumple con los requisitos de procedencia contemplados en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente** la causal invocada. **Noveno:** En lo que concierne a la causal señalada en el **ítem ii)** corresponde señalar que si bien la parte recurrente ha precisado el dispositivo legal cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que la misma ha sido desarrollada en forma genérica, toda vez que ésta no contiene argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista. En consecuencia, correspondía a la recurrente expresar razones concretas y específicas del modo en que se habrían producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito, resultase jurídicamente errado. En tal sentido, se aprecia que la recurrente incumple los requisitos de procedencia, deviniendo en **improcedente** la causal invocada. **Décimo:** Al haberse declarado improcedentes las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Gisella María Huamán García**, mediante escrito presentado con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, expedida por la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a Ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Gisella María Huamán García contra Rimac Seguros y Reaseguros S.A., sobre indemnización por despido arbitrario y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-27**

CASACIÓN LABORAL Nº 5024-2019 MOQUEGUA

Materia: REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS PROCESO ORDINARIO NLPT

Sumilla: "Al no haber acreditado la accionante haber ingresado al Poder Judicial en el cargo de Secretaria de Sala de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, cargo ejercido en el año 2011, no es aplicable lo establecido en el inciso b) del número 5 del artículo 186 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, veintinueve de setiembre de dos mil veintidós

VISTA; la causa número cinco mil veinticuatro, guion dos mil diecinueve guion **MOQUEGUA;** en audiencia llevada en la fecha, y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Poder Judicial,** mediante escrito presentado con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y ocho, contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número nueve, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que **confirmó la sentencia apelada** emitida mediante resolución número cinco, de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, que declaró **fundada la demanda**; sobre reintegro de remuneraciones, en el extremo que ordena que la demandada cumpla con lo establecido en el literal b) inciso 05) del artículo 186° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo pagar al demandante el reintegro de sus remuneraciones en su condición de secretario de sala el equivalente al 55% del total que percibían los vocales de la Corte Suprema, por los periodos comprendidos desde el 19.01.2011 al 30.06.2011 y del 01.10.2011 al 13.12.2013, por un monto total de S/295,404.29 (Doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles) y el extremo que declara **fundado** el pago de intereses legales, que serán calculados en ejecución de sentencia; con lo demás que contiene; en los seguidos por Ronald Moisés Chacón Hurtado sobre reintegro de remuneraciones. **II. CAUSALES DEL RECURSO:** Mediante resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por las siguientes causales: **i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y del artículo 4 del Código Procesal Constitucional; ii) Infracción normativa del artículo 186, inciso 5, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Nº 30125 Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial; iii) Infracción normativa de los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, del artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y del artículo 19 de la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. III. CONSIDERANDO: Primero: De la pretensión demandada y pronunciamiento de las instancias de mérito.** A fin de establecer si en el caso de autos se ha incurrido o no en las infracciones normativas reseñadas precedentemente, es necesario realizar las siguientes precisiones fácticas sobre el proceso: **a) De la pretensión demandada:** Del escrito de demanda que corre a fojas sesenta y siete, se advierte que la parte actora pretende el reintegro de remuneraciones y se ordene al Poder Judicial, el pago de devengados de la remuneración establecida en el literal b) del inciso 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (texto originario), esto es el 55% del haber total que percibían los Jueces Supremos, de un primer periodo laborado del 11 enero 2011 al 30 junio 2011 y un segundo periodo del 01 octubre 2011 al 13 diciembre 2013, por un monto de S/ 284,413.99. Como pretensiones accesorias solicita el pago de intereses legales y costos del proceso. **b) Sentencia de primera instancia:** El Juez Especializado del Módulo Corporativo Laboral de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, a través de la sentencia emitida mediante resolución número cinco de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento once, que declaró fundada la demanda, fundamenta su decisión señalando que: **i)** El actor, solicita se ordene al Poder Judicial cumpla con el pago de reintegros de la remuneración establecida en el literal b) inciso 5) del artículo 186° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (texto originario), esto es el 55% del haber total que percibían los Jueces Supremos, de un primer periodo laborado del 11 de enero de 2011 al 30 de junio de 2011 y un segundo periodo del 01 de octubre de 2011 al 13 de diciembre de 2013, por un monto de S/ 284,413.99. **ii)** De la revisión realizada por el SPIJ, se tiene que ésta, si bien ha tenido modificaciones, el numeral 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su texto originario, no está derogada, pero sí modificada por el artículo 1 de la Ley número 30125 a partir del 14 de diciembre del 2013, momento a partir del cual surte recién sus efectos, por lo que el periodo anterior a esta fecha, queda plenamente expedito para el reclamo de los derechos peticionados y por el periodo solicitado, el cual va del 11 de enero de 2011 al 30 de junio de 2011 y en un segundo periodo del 01 de octubre de 2011 al 13 de diciembre de 2013. **c) Sentencia de segunda instancia:** Por su parte, la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en virtud al recurso de apelación planteada por la entidad demanda, mediante **sentencia de vista** emitida mediante resolución número nueve de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, a fojas ciento sesenta y cinco, procedió a **confirmar** la sentencia apelada, estableciendo como fundamentos principales que: **i)** El Colegiado comparte el criterio del juez de primer grado en declarar fundada la

demanda del actor hasta la fecha en que estuvo vigente el texto original del literal b) inciso 05 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la LOPJ, por encontrarse vigente en el periodo materia de reclamo, toda vez que su aplicación es ultractiva, debiendo precisarse que no se afecta el artículo 103° de la Constitución Política del Estado que establece: "(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos (…)"; por tal sentido, la Ley Nº 30125 se aplica a la situación de hecho existente a su vigencia y conforme se ha fundamentado en el caso de autos no se pretende otorgamiento de derecho en la vigencia de esta ley, sino de un periodo anterior, lo que ha sido especificado por el juez de primera instancia y por el propio demandante. **ii)** Respecto a que la recurrida vulnera los principios de legalidad y equilibrio fiscal. La defensa técnica de la entidad demandada, sostiene que el juez de primer grado ha inobservado el artículo 19 de la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, que prescribe la obligación de que los funcionarios del sector público deben observar, previo a la emisión del acto o disposición administrativa de gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria correspondiente. Sobre dicho extremo, sostiene que en el caso de autos no se trata de un incremento de remuneraciones sino del cumplimiento de una nivelación de haberes establecido en una norma jurídica con rango de Ley, por ende de ineludible y obligatorio cumplimiento; en ese sentido, los derechos que contenía el primigenio literal b) inciso 05) del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la LOPJ resultan de ineludible y obligatorio cumplimiento a favor del actor en su condición de secretario de sala por el periodo materia de reclamo. **Segundo. La infracción normativa.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley número 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de normas, como son las de carácter adjetivo. Se ha declarado procedente el recurso de casación por infracciones de normas de orden procesal y de derecho material, por lo que, en estricto orden lógico corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento, en primer término, respecto a la supuesta infracción procesal, toda vez que, únicamente descartada la presencia de defectos procesales durante el trámite del proceso será posible la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida. **Tercero: Infracción de orden procesal. Infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y del artículo 4 del Código Procesal Constitucional**, que establecen lo siguiente: **Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia** "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) **5.** La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". **Artículo 4 del Código Procesal Constitucional.** (…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de un resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. **Cuarto:** En relación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tenemos que, este se concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando, se aprecie una **motivación** en la que el órgano jurisdiccional: **i)** Delimite con precisión, el problema jurídico que se derive del análisis del caso concreto; premisas que deben extraerse de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes en la etapa postulatoria; **ii)** Desarrolle de modo coherente y consistente, la justificación de la premisa jurídica aplicable, exponiendo las razones de la adecuación del supuesto de hecho, a la consecuencia jurídica de la norma o normas elegidas; desplegando una justificación de la aplicación e interpretación de dichas normas al caso concreto; **iii)** Aprecie de modo razonado, en una valoración conjunta e integral, las pruebas actuadas en el proceso, exponiendo las conclusiones que se extraigan de dicha valoración, es decir explicar y fundamentar el razonamiento que se sintetice en la inferencia probatoria, entre hechos y medios de prueba y; finalmente; y, **iv)** Observe la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. **Quinto:** Sobre la justificación interna[1] del razonamiento en la motivación de las resoluciones judiciales; esta implica la conexión, entre **las premisas fácticas determinadas** mediante la inferencia de prueba esto es los hechos contrastadas que producen convicción al juez en base, a la valoración conjunta de los medios probatorios- **y**, **las normas jurídicas seleccionadas, interpretadas y aplicadas al caso concreto**; de modo tal que se evalúa la corrección formal de la motivación, es decir **el silogismo judicial[2], a través del que se arriba a la decisión**; en el que la premisa mayor corresponde a la norma jurídica, la premisa menor, a los hechos probados, siendo el resultado, la conclusión. **Sexto:** Por otro lado, El Tribunal Constitucional nacional en la Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el expediente número 00728-2008-HC, respecto a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sexto fundamento, ha expresado lo siguiente: "(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que 'el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso'". Asimismo, en el Séptimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: **a)** Inexistencia de motivación o motivación aparente; **b)** Falta de motivación interna del razonamiento; **c)** Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas; **d)** Motivación insuficiente; **e)** Motivación sustancialmente incongruente; y, **f)** Motivaciones cualificadas. **Séptimo: Análisis procesal.** A fin de emitir pronunciamiento sobre las causales procesales procedentes, es preciso tener en cuenta que la motivación está orientada a que el Juez proceda a enunciar los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a adoptar una determinada decisión, haciendo un análisis de los medios probatorios aportados en el proceso; siendo ello así, que una decisión le sea adversa a una de las partes no implica que necesariamente la resolución no se encuentre debidamente motivada. De los fundamentos expuestos, se desprende que la decisión contenida en la resolución de vista objeto de análisis se encuentre fundada en una argumentación que ha sido construida válidamente por el ad quem sobre la base de premisas que no solo se encuentran expuestas y sustentadas en atención a los hechos acreditados en los autos (premisas fácticas) y el derecho aplicable a la controversia (premisas jurídicas), sino que, además, evidencian una secuencia lógica capaz de arribar a la decisión adoptada. En tal sentido, se aprecia razones motivadas para determinar que al accionante le corresponde el reintegro de sus remuneraciones en base al 55% del total de ingresos percibidos por los vocales supremos de la Corte Suprema, conforme lo establecido por los literales b) y c) del numeral 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; cumpliendo de esta manera, con lo previsto en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional – al momento de expedir la sentencia. Por tanto, se evidencia las razones expresadas como fundamento de la sentencia de vista objeto de impugnación han cumplido con el estándar de motivación exigido por las disposiciones legales invocadas; correspondiendo por ello **desestimar las causales procesales denunciadas. Octavo: Infracciones de orden sustantivo.** Al haberse declarado infundada la causal de orden procesal, es pertinente emitir pronunciamiento respecto a las causales de orden sustantivo siguientes: **Infracción normativa material del artículo 186 numeral 5, inciso b) del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.** El dispositivo legal en mención establecía lo siguiente: (…) **Artículo 186°** Son derechos de los Magistrados[3] 5. Percibir una remuneración

acorde con su función, dignidad y jerarquía. Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente:" b) El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema (…). **Análisis del caso concreto. Séptimo:** De la revisión de los actuados, se aprecia que: (i) A fojas cuarenta y dos, obra la constancia de trabajo de fecha 18 de octubre de dos mil dieciséis, donde se determina el cargo desempeñado como Secretario de Sala desde el 19 de enero hasta el 30 de junio de 2011 y desde el 01 de octubre de 2011 al 18 de octubre de dos mil dieciséis, adscrito a la Corte Superior de Justicia de Moquegua. **Octavo:** Asimismo, este Tribunal Supremo aprecia que las instancias de mérito disponen homologar las remuneraciones del actor en base al 55% del total de ingresos percibidos por los Vocales (jueces) de la Corte Suprema conforme lo establece los literales b) y c) del numeral 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por haber desempeñado el cargo de secretario de Sala. Respecto a ello cabe precisar en primer lugar que la pretensión de la parte actora versa sobre reintegro de remuneraciones desde el once de enero de dos mil once hasta el treinta de junio de dos mil once y el segundo periodo del primero de octubre de dos mil once al trece de diciembre de dos mil trece; sin embargo, las instancias de mérito han soslayado analizar que el demandante no se encuentra comprendida dentro de la carrera judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; tampoco han verificado si el demandante ha acreditado haber ingresado al Poder Judicial mediante concurso público de méritos en el cargo de secretario de sala de la Corte Superior de Justicia de Moquegua como titular de la plaza, conforme lo establece el artículo 258 del decreto antes referido[4], ya que de la boletas de pago que adjunta, así como de la constancia de trabajo, solo acreditaría que el actor tuvo la plaza de especialista judicial de audiencias y que la plaza de secretario de sala de la Corte Superior de Justicia de la Moquegua, por el periodo del 2011, la ostentó por encargatura (esto es, de manera provisional, no porque haya adquirido la plaza mediante concurso público) de acuerdo al Memo 015-2011-GPEJ-GG/PJ (fojas siete), Memo 026-2011-GPEJ-GG/PJ (fojas diez), Memo 053-2011-GPEJ-GG/PJ (fojas trece), Memo 004-2012-GPEJ-GG/PJ (fojas diecisiete), Memo 020-2012-GPEJ-GG/PJ (fojas veinte), Memo 037-2012-GPEJ-GG/PJ (fojas veintitrés), Memo 052-2012-GPEJ-GG/PJ(fojas veintiséis), y Memo 002-2013-GPEJ-GG/PJ (fojas veintinueve). La Sala Superior tampoco habría tomado en cuenta que al estimar el reintegro de remuneraciones pretendido desde el once de enero hasta el treinta de junio de dos mil once y el segundo periodo del primero de octubre de dos mil once al trece de diciembre de dos mil trece, a pesar de no haber ingresado por concurso público a la carrera judicial, se estaría otorgando un beneficio que la ley solo otorga a quienes tienen la condición de titulares comprendidos dentro de la carrera judicial; por lo que al no existir razones jurídicas que lo lleven a decidir de tal manera y disponer el pago del beneficio homologado que reclama el demandante, en función al cargo de secretario de sala, ambas instancias han incurrido en la infracción normativa incoada. Tanto más si el asunto que se examina ya ha sido objeto de análisis por esta Corte Suprema en las casaciones número 7457-2015-La Libertad[5]; 1614-2018- La Libertad[6]. Por lo que dicha causal deviene en **fundada. Noveno:** Asimismo, se debe tener presente que el Congreso de la República mediante la **Ley 30125**, estableció medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de diciembre de 2013, que modificó la norma cuyo cumplimiento fue objeto del presente proceso **(**inciso b) del numeral 5 del artículo 186 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, del Poder Judicial) en el sentido siguiente: b) El haber total mensual por todo concepto de los Jueces Superiores será del 80% del haber total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos, conforme a lo establecido en el literal a) precedente; el de los Jueces Especializados o Mixtos será del 62%; el de los Jueces de Paz Letrados será del 40%, referidos también los dos últimos porcentajes al haber total mensual por todo concepto que perciben los Jueces Supremos. Siendo que de la norma acotada se desprende que los secretarios y relatores de Sala no fueron comprendidos para el reintegro u homologación de remuneraciones conforme al haber total mensual por todo concepto que perciban los jueces supremos. **Décimo:** Sin perjuicio de haberse ya amparado la infracción normativa del inciso b) del numeral 5 del artículo 186 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS pasaremos a analizar la causal relacionada con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, **la cual en nada enerva la decisión determinada.** El **artículo 78 de la Constitución Política del Perú.** Señala textualmente lo siguiente: **Artículo 78°.-** El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública." Asimismo, por guardar estrecha relación con los artículos antes mencionado, corresponde previamente traer a colación lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política. "**Artículo 77°.** La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. Aunado a ello**,** el **artículo 19 de la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,** señala: "**Artículo 19.-** Actos o disposiciones administrativas de gasto Los funcionarios de las entidades del Sector Público competentes para comprometer gastos deben observar, previo a la emisión del acto o disposición administrativa de gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria correspondiente. Caso contrario devienen en nulos de pleno derecho". **Y el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo I.-** Equilibrio presupuestario El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Por su parte el Tribunal Constitucional en el fundamento 29 del Expediente 00016-2020-PI/TC de fecha 4 de febrero de 2021, estableció sobre el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria "(…) este principio implica que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, a efectos de evitar que el déficit fiscal perturbe el proceso de desarrollo económico del país. El equilibrio presupuestal es un principio fundamental de nuestro modelo constitucional y se sustenta en el objetivo de no comprometer las perspectivas económicas de las generaciones futuras. Este principio impone límites a la adopción de medidas que demanden gasto público. La conciencia de la escasez de recursos públicos para atender las obligaciones del Estado subyace a este principio." **Décimo primero:** El sustento de la entidad demandada frente a las normas denunciadas, se orienta a señalar que el Poder Judicial es una institución pública, cuyo ámbito remunerativo se rige por el principio de legalidad presupuestal, por lo que no se encuentran sujetos a la libre actuación de sus funcionarios de turno, pues por el contrario debe ceñirse de modo estricto a disposiciones de carácter presupuestal. **Décimo segundo:** Al respecto, la Ley Nº 28112, Ley de la Administración Financiera del Sector Público, regula la prohibición de todo incremento remunerativo, es pertinente establecer que se trata de una norma que tiene por objeto restringir la capacidad de las diversas agencias gubernamentales, tales como el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y en general de cualquier órgano de la Administración Pública, entre ellos el Poder Judicial, de incrementar las remuneraciones de sus trabajadores, debiendo interpretarse que aquella regulación debe llevarse a cabo a través de las normas emitidas por la entidad competente del sector correspondiente y para regulación específica ello en correlato con los principios de Legalidad y Equilibrio Fiscal que se encuentran establecidos en nuestra Constitución

Política del Perú en sus artículos 77 y 78. **Décimo tercero:** A tenor de los artículos constitucionales y legales citados, el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos y su proyecto debe estar indudablemente equilibrado y equitativo. El equilibrio fiscal es de interés público, por lo que debe ser tutelado por el Estado. El Estado tiene potestades regladas y no puede adoptar decisiones que no están formalmente estipuladas en la ley, por lo que sólo puede actuar y decidir siempre que exista norma que expresamente le permita conceder u otorgar beneficios al trabajador. En el caso en concreto para ser considerado Secretario de Sala, el actor debió previamente ser nombrado mediante concurso público por el Consejo Ejecutivo del Distrito judicial de Moquegua, situación que no se advierte de autos, ya que la asignación del cargo que tuvo el actor fue por encargatura, esto es, de manera temporal. En consecuencia, el Colegiado Superior, al disponer el reintegro de remuneraciones en la condición de secretario de sala equivalente al 55% del total que perciben los Vocales y/o Jueces Supremos de la Corte Suprema ha incurrido en infracción normativa del artículo 186, inciso 5, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Nº 30125 Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial; Infracción normativa de los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, del artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y del artículo 19 de la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, razones por las cuales las causales denunciadas devienen en **fundada.** Por las razones anotadas, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la entidad demandada **Poder Judicial,** mediante escrito presentado con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y ocho; en consecuencia, **CASARON** la **sentencia de vista** contenida en la resolución número nueve, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; y actuando en sede de instancia: **REVOCARON** la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, y **REFORMÁNDOLA**, declararon **INFUNDADA** la demanda en todos los extremos; sin costas, ni costos del proceso; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Ronald Moisés Chacón Hurtado contra el Poder Judicial, sobre reintegro de remuneraciones y otros; y los devolvieron. Ponente Señora, Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.** EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO VÍCTOR ANTONIO CASTILLO LEÓN ES COMO SIGUE: **PRIMERO.** El literal b) numeral 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenaba lo siguiente: "El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema". La norma citada estuvo vigente hasta el 13 de diciembre del año 2013, fecha en la que fue modificada por la Ley 30125, la derogada norma reconocía expresamente un sueldo equivalente al 55% del haber total del juez supremo, para los secretarios y relatores de sala. **SEGUNDO.** La ponencia en mayoría, postula que al demandante no le corresponde el 55% del haber del juez supremo, disposición contenida en el literal b) del numeral 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no ha sido designado secretario de sala por concurso público. Considero que la designación por concurso público para el ejercicio de cargo de relator o secretario de sala no es impedimento para percibir la remuneración pretendida, pues a partir de la Ley 26584, los servidores del Poder Judicial, salvo los magistrados, rigen, por regla general, sus relaciones laborales por el régimen laboral de la actividad privada. Ello supone la aplicación del estatuto legal establecido por el Decreto Legislativo 728, específicamente en el texto ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, pero también los principios que lo inspiran y las reglas jurídicas que los tornan operativos. Este cambio normativo, se dio en un contexto en el cual diversas reparticiones de la administración pública cambiaron su régimen laboral al de la actividad privada, siendo que, hoy en día, este cambio alcanza a más de 30 instituciones del Estado. **TERCERO.** Pertenecer al régimen de la actividad privada, supone, sin ser exhaustivo, la habilitación de varias instituciones del derecho del trabajo, como el carácter imperativo o de orden público de las normas laborales, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de la primacía de la realidad, entre otros valores bacilares. Categorías estas de estirpe constitucional que gobiernan el goce y disfrute de los derechos de esta clase de laborantes. Siendo así, el derecho consagrado a su favor por hoy abrogado artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no está condicionado a la calidad de titular del trabajador, ni haber ingresado por concurso público al cargo de relator o secretario de sala; se trata más bien de un derecho de naturaleza remunerativa, protegido por tanto por el artículo 24 de la Constitución, que garantiza a toda persona el disfrute de una remuneración equitativa y suficiente, en concordancia con lo previsto por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, que prescriben respectivamente el aseguramiento del trabajo a una remuneración. Las exigencias de concurso público de méritos de los artículos 258 y 262 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son la condición legal habilitante para el nombramiento de esta clase de funcionarios, pero no para el disfrute de la remuneración acordada por la ley para quien realiza la función, aun tratándose de una encargatura o en forma previsional, pues esa es la técnica remunerativa esencial o básica de quien ocupa un cargo y realiza una función en forma provisional, vale decir, tiene el derecho a percibir el monto de la remuneración que corresponde a la naturaleza de la función. Tal concepción es pacífica en la administración pública y es además una práctica comúnmente aceptada; y obviamente tiene pleno sustento en el principio-derecho, según el cual a trabajo de igual valor, corresponde igual remuneración, el cual se encuentra positivado en el convenio 100 de la OIT, en la prohibición de deparar un trato discriminatorio, incluso en materia remunerativa (convenio 111 de la OIT)[7], derechos humanos que encuentran recepción en los artículos 24 y 26.1 de la Constitución, que consagran el derecho a la igualdad de trato en materia remunerativa, salvo que exista una causa objetiva y razonable que justifique un trato diferenciado. En el presente caso, el no-acceso a la función por concurso público no configura una causa objetiva que justifique un trato diferenciado porque, como ya adelantamos, el concurso habilita al nombramiento, pero no a disfrutar de un derecho elemental, pero fundamental como es el de la remuneración equitativa y suficiente, acordada en este caso, en el periodo reclamado por el artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy abrogado; más aún si el actor tiene incorporado a su patrimonio jurídico su pertenencia al régimen laboral de la actividad privada. **CUARTO.** De otro lado, en diferentes pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha ponderado que debe priorizarse el reconocimiento de los derechos laborales, frente a alegaciones formales como la previsión presupuestaria, la titularidad, nombramiento en un cargo o el acceso por concurso público; en efecto, el máximo intérprete de nuestra Constitución hace prevalecer la probanza real y efectiva de la labor desplegada por el trabajador, merced a la aplicación del principio de primacía de la realidad. De ello dan cuentan sentencias como las recaídas en el expediente 5577-2015-PA/TC seguido por Julio Alberto Meza Leandro, contra la Municipalidad Provincial de Huánuco o el expediente 4718-2016-PA-TC seguido por Pedro Jesús Huamán Curioso contra la Municipalidad Provincial de Huayra; sentencias en las que el supremo intérprete de la Constitución ha señalado lo siguiente: "(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos (…)". **QUINTO.** Si bien es cierto la ley marco del empleo público, Ley 28175, exige de manera general el concurso público para el acceso a cualquier contrato de servicios con el Estado, sin embargo, la jurisprudencia constitucional y ordinaria privilegia el principio de la primacía de la realidad, frente a las exigencia formales impuestas por diferentes normas, como por ejemplo la del concurso público, tal tendencia jurisprudencial no solo es aplicada para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, sino también, a los trabajadores del régimen laboral público. Así el expediente 05057-2013-PA/TC, precedente vinculante Huatuco, reconoce la desnaturalización del contrato de trabajo como mecanismo de acceso a la indemnización por despido arbitrario

(fundamento 22 del referido precedente vinculante); del mismo modo, el Caso Baylón Flores, Expediente (fundamento 22) valida la desnaturalización de los servicios según la ley 24041 en el régimen laboral público. En ninguno de los dos casos anteriores, el concurso público resulta determinante para la atribución de los correspondientes derechos subjetivos. Con mayor razón, en el presente caso, tratándose de una pretensión de pago de un reintegro remunerativo, no puede considerarse determinante el concurso público ni la titularidad en el ejercicio de un cargo, salvo que el derecho en cuestión expresamente así lo exija, sino la materialidad de la función desempeñada, merced a la primacía de la realidad, elemento implícito en la Constitución, según lo señalado por el Supremo Intérprete de la Constitución en las sentencias citadas supra. **SEXTO**. En efecto, en el precedente vinculante Rosalía Huatuco, Expediente 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional limita la exigencia de concurso público, solamente para acceder a la reposición, tratándose de la desnaturalización de los servicios de los trabajadores del Estado del régimen laboral privado; dicho en otros términos, el referido precedente vinculante no impide o limita el ejercicio o disfrute de cualquier otro derecho laboral, como consecuencia de la desnaturalización de los servicios de esta clase de trabajadores; tan cierto es lo que aquí se afirma que incluso el propio Tribunal Constitucional, en el fundamento 22 del indicado precedente, admite la tutela resarcitoria para esta clase de trabajadores. Esta es la mejor evidencia que el Supremo Intérprete de la Constitución, a lo largo del tiempo no ha cambiado su doctrina jurisprudencial sobre la plena y vigorosa aplicación del principio de primacía de la realidad, a las relaciones laborales en general –regímenes público y privado- y al régimen privado en particular, como da cuenta el precedente Huatuco, tal como se acaba de graficar, al quedar evidenciado que el único derecho que queda condicionado al concurso público es la reposición en el trabajo de los trabajadores del estado del régimen privado, pero que todos los demás derechos laborales siguen siendo respetados merced a la plena aplicación de la primacía de la realidad. **SÉPTIMO**. El trabajador judicial en general y el secretario y relator de sala en particular, desde el año 1996 en que se dio la citada Ley 26586, son trabajadores cuyo estatuto de protección laboral está fuertemente marcado no solo por las reglas jurídicas del régimen laboral privado, sino también por los principios que inspiran y dan sustento axiológico y operacional a dicho régimen laboral privado; decimos axiológico porque los principios del derecho del trabajo cumplen una función informadora, normativa e integradora del derecho del trabajo, y operacional, porque como ocurre con la primacía de la realidad, facilitan al juez identificar lo que realmente ocurrió en el terreno fáctico, facilitando el juicio de subsunción y la aplicación del derecho. **OCTAVO**. Entonces, como hemos señalado, la uniforme jurisprudencia constitucional, descarta el concurso público como condición habilitante para el goce de los derechos que asignan a los trabajadores del Estado las normas laborales respectivas, incluso, como repetimos, el precedente Huatuco, limita la exigencia de concurso público únicamente al supuesto de reposición de los trabajadores del Estado del régimen privado. Asimismo, porque la propia norma del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no lo exigía; por lo tanto, tal interpretación surge de los artículos 258 y 262 del mismo cuerpo legal, que de manera general, y refiriéndose a la carrera administrativa auxiliar jurisdiccional, también desarrollada por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecen estos elementos; lo que significa que tales exigencias no constituyen requisitos para la percepción del beneficio remunerativo en cuestión, por lo que el recurso de Casación interpuesto por la demandada debe ser declarado infundado, pues el demandante demuestra haber ejercido las labores de secretario de sala, en el período reclamado, el cual coincide en su parte final con la fecha hasta la que tuvo vigencia el derecho pretendido, no siendo necesario haber acreditado el ingreso por concurso público o la titularidad del puesto de secretario. Por estas consideraciones, mi voto es por declarar: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandada **PODER JUDICIAL;** en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Ronald Moisés Chacón Hurtado contra el Poder Judicial., sobre reintegro de remuneraciones y otros; **y los devolvieron**. **S.S.** CASTILLO LEÓN.

[1] "la justificación interna muestra la corrección de la inferencia de la conclusión o decisión a partir de las premisas. En la justificación interna se aplican las reglas de la lógica formal o deductiva para determinar si un argumento es lógicamente correcto. Es decir, se considera como no-problemática o como "algo dado" la tarea de subsunción (PM/pm) y, a partir de ahí, se aplica lógicamente la consecuencia jurídica pertinente." López García, José Antonio "Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica" En Tutela de Derechos en Sede Jurisdiccional. (2013). Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima. Pp. 63

[2] "Este tipo de esquema lógico (…) se denomina silogismo judicial o silogismo jurídico [en el que] la primera premisa enuncia una norma general y abstracta en la que un supuesto de hecho (…) aparece como condición para una consecuencia jurídica (…). La segunda premisa representa la situación en que se ha producido un hecho (...) que cae bajo el supuesto de hecho de la norma. Y la conclusión establece [que a dicho supuesto de hecho] se le debe anudar la consecuencia jurídica prevista por la norma". Atienza, Manuel (2006) "Las Razones del Derecho". Palestra. Segunda Edición. Lima. Pp. 54

[3] Decreto Supremo Nº 017-93-JUS Publicada el 10 de noviembre 2006

[4] Artículo 258.- Nombramiento por concurso. Los Secretarios de Sala son nombrados previo concurso por el Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial correspondiente.

[5] Casación 7457-2015 – La Libertad, de fecha 15 de noviembre de 2016

[6] Casación 1614-2018- La Libertad, de fecha de noviembre de 2020

[7] A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

C-2246709-28

CASACIÓN Nº 5615-2019 LORETO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636
Sumilla: La falta de motivación se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han omitido o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma aparente o insuficiente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

Lima, seis de setiembre de dos mil veintidós.-

VISTA; la causa número cinco mil seiscientos quince dos mil diecinueve Loreto, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO** Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Luis Enrique Jaén Ferreira**, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y cuatro de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que **confirma la sentencia de primera instancia,** en el extremo que declaró infundada la demanda. **II. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN** El demandante en virtud del inciso c) del artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, denuncia como causal de su recurso: **i. Infracción normativa procesal del inciso 2 del artículo 40 de la Ley Nro. 26636. ii. Infracción normativa procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con los incisos 2 y 3 del artículo 122 y artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil.** Correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto. **III. CONSIDERANDO: PRIMERO.** El recurso de casación cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y artículo 57° de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley número 27021, necesarios para su admisibilidad; por ello, corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. **SEGUNDO.** El artículo 58 de la Ley número 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley número 27021, regula que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56° del mencionad o cuerpo legal, a saber: **a)** la aplicación indebida de una norma de derecho material; **b)** la interpretación errónea de una norma de derecho material; **c)** la inaplicación de una norma de derecho material; y, **d)** la contradicción con otras resoluciones

expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la República o por las Cortes Superiores de Justicia, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores y, según el caso, la parte recurrente indique lo siguiente: **a)** qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; **b)** cuál es la correcta interpretación de la norma; **c)** cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y, **d)** cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. **TERCERO.** En relación a la causal mencionada en los **ítems i) y ii),** se debe precisar que la misma no se encuentran previstas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal de Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nª 27021, el cual señala taxativamente como causales del recurso de casación la interpretación errónea, aplicación indebida, inaplicación de una norma de derecho material y contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, no encontrándose contemplada la aplicación indebida de normas de carácter adjetivo o procesal, **por cuya razón las causales promovidas por el demandante devienen en improcedentes. CUARTO.** Ahora bien, no obstante lo expuesto, esta Sala Suprema considera que en este caso concreto corresponde admitir de manera excepcional el recurso de casación, por haberse advertido aparentes vicios que por su gravedad pueden transgredir lo establecido en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referido a las garantías sobre el debido proceso, que incluye la motivación escrita de las resoluciones judiciales; por tal razón corresponde declarar procedente tal disposición ya que el inciso 5 del artículo 139° de la Carta Fundamental, así como el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el inciso 4 del artículo 122° y el inciso 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil, se encuentran subsumidos dentro de la afectación al debido proceso. Esta situación obliga por consiguiente al Colegiado Supremo a **declarar en forma excepcional procedente** el recurso de casación por contravención al **inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. QUINTO. Antecedentes del caso. 1.1 Pretensión:** Conforme se aprecia del escrito de demanda, que corre de fojas veinticuatro, **Luis Enrique Jaén Ferreira** interpone demanda contra Industrial Punchana Inpulsa y Maderera El Choche SAC, con la finalidad que le pague la suma de ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres y 24/100 nuevos soles (S/156,493.24), por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario, utilidades, remuneración dejadas de percibir, vacaciones, vacaciones truncas y horas extras más intereses legales, costos y costas que devenguen del presente proceso. **1.2 Sentencia de primera instancia.** El Juez del Juzgado Civil de Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, emite la sentencia contenida en la resolución número veinte de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, **declara fundada en parte la demanda,** en consecuencia, ordena que las demandadas paguen solidariamente al actor las sumas de cuatro mil setecientos sesenta y seis y 15/100 soles (S/4,766.15), por concepto de compensación por tiempo de servicios. diez mil setecientos veinticinco y 00/100 soles (S/10,725.00), por concepto de vacaciones no gozadas e indemnizables y record trunco, más intereses legales, con costos y costas para el actor. Infundada la demanda en los extremos de indemnización por despido arbitrario, utilidades, remuneraciones dejadas de percibir, y pago de horas extras. **1.3 Sentencia de Vista.** Apelada esta decisión por el apoderado del demandante, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, emite la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y cuatro de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, **confirmando la sentencia de primera instancia** en cuanto declaró infundada la demanda en los extremos de indemnización por despido arbitrario, utilidades, remuneraciones dejadas de percibir, y pago de horas extras. **SEXTO.** Conforme se ha dejado anotado, la evaluación que corresponde efectuar a esta Sala Suprema es por la causal de orden procesal declarada procedente de manera excepcional, referida a la **contravención del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú,** desde que si ella resulta fundada, su efecto nulificante generaría el reenvío de la causa a la instancia y etapa procesal pertinente, careciendo de objeto en ese escenario el examen de las causales materiales por las que también se ha declarado procedente el recurso. La disposición normativa en mención establece lo siguiente: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". **SÉPTIMO. Análisis y fundamentación de esta Sala Suprema Apuntes Previos sobre el Recurso de Casación 7.1.** El Recurso de Casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria según autorización contenida en la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley número 26636 Ley Procesal del Trabajo. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto. **7.2.** La labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[1], revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, ésta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un Recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **7.3.** Por causal de casación ha de entenderse al motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso[2], debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[3], por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo. **OCTAVO. Alcances sobre el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 8.1** El debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el **inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado**, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. **8.2** En ese sentido, la infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se configura, cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales y cuando se deja de valorar el material probatorio necesario y suficiente a fin de crear convicción en la decisión del órgano jurisdiccional. **8.3** Sobre el derecho a una debida motivación el cual también se encuentra reconocido en el **inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado,** corresponde señalar que este derecho importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. **8.4** Asimismo, importa destacar que el derecho al debido proceso, comprende también el derecho a la prueba recogido en el **artículo 197 del Código Procesal Civil,** el cual

preconiza que todos los medios probatorios serán valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; no obstante, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. En virtud de este principio las resoluciones judiciales deberán ser expedidas en mérito de lo actuado en el proceso y en aplicación correcta de la ley, tal como lo señala el artículo 122, inciso 3, del citado Código Formal. **8.5** Conviene igualmente precisar que en materia probatoria el derecho a la utilización de los medios de prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada en derecho, como también con el derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el contenido esencial de este derecho se respeta siempre que, una vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. **8.6** Precisamente regulando éste derecho fundamental, el legislador ha optado por imponer al Juez, en los términos que señala los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, la obligación en atención a la finalidad de la prueba, de valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que, las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que den origen al conflicto y tomando en cuenta además las reglas de la carga probatoria que establece el artículo 196 del código adjetivo, por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que sólo teniendo una visión integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad que es el fin del proceso. **NOVENO. Análisis del caso concreto 9.1** Este Supremo Tribunal, al revisar la causal materia de análisis, determina que existe un vicio de motivación que afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y, por ende, al debido proceso, ello a partir de la revisión de la Sentencia de Vista, el que a continuación se enuncia y que debe corregirse para resolver el caso concreto. **9.2** En efecto, de autos se advierte que la Sala Superior ha confirmado la decisión del Juez de Primera Instancia, señalando en su considerativa cuarta, que en concordancia con el artículo 27 inciso 1 de la Ley Nro. 26636, el demandante no ha acreditado con documental alguno que le corresponde el reintegro de las remuneraciones por el periodo peticionado, además que no se aprecia que en la demanda incoada a folios 24, haya solicitado la reversión de dicha prueba a favor de su ex empleadora; sin embargo, dichas premisas no se condicen con el texto de la norma invocada ya que ésta contiene dos extremos: "Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y **esencialmente**: 1) Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral y, 2) Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, (…)". En ese sentido, conforme a lo mencionado por la Sala Superior en la recurrida, le ha trasladado la obligación al trabajador de probar el incumplimiento de las obligaciones que reclama en su demanda, cuando la norma especial, únicamente exige que el trabajador acredite la existencia de la relación laboral, condición que ha sido superada ampliamente ante las dos instancias, desde que en el primer extremo de la sentencia se ha reconocido el pago de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas y record trunco, extremos que no han sido materia de medio impugnatorio alguno, por ende, han quedado incólumes, por lo que se hace imperioso que el Ad Quem proceda a realizar un nuevo análisis de la materia controvertida –en el extremo impugnado- a efectos determinar el cumplimiento de las obligaciones que la norma citada exige expresamente a cada uno de las partes. **DÉCIMO**. En el contexto precedentemente expuesto, se concluye que el Colegiado Superior ha incurrido en infracción del derecho al debido proceso previsto en el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; al no haberse examinado ninguna las circunstancias antes descritas; en ese sentido, este Supremo Tribunal considera que ha existido una insuficiente motivación fáctica de la recurrida, deficiencias que deben ser corregidas para efectos de emitir una sentencia acorde a derecho; por lo que corresponde declarar **fundada** la causal de orden procesal, casar la Sentencia de Vista y anular la misma, con la finalidad que el Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento con observancia de las consideraciones que se expresan en la presente sentencia. **IV. DECISIÓN** Por estas consideraciones; declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Luis Enrique Jaen Ferreira**; en consecuencia, **NULA** la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y cuatro, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho; por lo que, **ORDENARON** que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Loreto, cumpla con emitir nuevo pronunciamiento tomando en consideración los argumentos expuestos en la presente resolución; y **DISPUSIERON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; en el proceso ordinario laboral seguido por Luis Enrique Jaén Ferreira contra Industrial Punchana SA- Inpulsa y otra, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y otro; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.-** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, **AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

1 **Hitters,** Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166.

2 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359

3 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222

C-2246709-29

CASACIÓN Nº 5725- 2021 LA LIBERTAD

Materia: CESE DE HOSTILIDAD
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **José Antonio Bacon Acon,** contra la sentencia de vista de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, que resuelve **revocar** la sentencia de primera instancia de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, que declara fundada en parte la demanda sobre cese de actos de hostilidad y otros; **y reformándola** la declararon infundada. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497. **CUARTO.** Conforme se aprecia del escrito de demanda incoada por José Antonio Bacon Acon contra la empresa Cartavio SAA, la accionante solicita lo siguiente: Cese de actos de hostilidad consistente en el cambio inmotivado de puesto de trabajo, se disponga la restitución de su puesto de trabajo como operario de campo en el anexo Chiclin, y se imponga una multa a la demandada la suma de 10 URP más pago de honorarios profesionales. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley N° 29497, se advierte que a la parte recurrente le fue favorable la sentencia de primera instancia; por lo que tal exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente sustenta su recurso literalmente en la siguiente causal: **i. Interpretación errónea del artículo 30 inciso c) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR y articulo 50 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR,** sostiene que no se analiza si el memorando de fecha 20 de julio de 2018, contiene una disposición u orden laboral que cumpla las condiciones de razonabilidad y necesidad, pues se verifica que en la sentencia de vista si bien se desarrolla un análisis legal y doctrinario del ius variandi pero omite verificar si dicha orden cumplía con dichos requisitos. **SÉTIMO.** Previo al análisis de la causal propuesta, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la

República. **OCTAVO.** Respecto a la causal denunciada en el **ítem i),** es preciso señalar que la interpretación errónea es denominada por parte de la doctrina como "error normativo de apreciación por comprensión", se origina cuando, no obstante, el órgano jurisdiccional ha elegido correctamente la norma aplicable al caso que analiza; sin embargo, le otorga un sentido, significado u orientación distinta a la admitida como apropiada o adecuada en un determinado sistema social en el cual la norma está vigente. En el caso concreto, si bien el recurrente señala la norma interpretada de manera errónea; sin embargo, se puede advertir que los mismos han sido desarrollados en forma genérica, toda vez que éstas no contiene argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista. En consecuencia, correspondía a la entidad recurrente expresar razones concretas y específicas del modo en que se habrían producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito, resultase jurídicamente errado; y, por ende, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto. En tal sentido, se aprecia que el recurrente incumple los requisitos de procedencia, deviniendo en **improcedente** la causal invocada. **NOVENO.** Cabe precisar que en cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497, carece de objeto su análisis al haberse declarado la improcedencia de las causales contenidas en los considerandos que anteceden. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley N° 29497; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **José Antonio Bacon Acon,** contra la sentencia de vista de fecha tres de noviembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por José Antonio Bacon Acon contra Cartavio SAA, sobre Cese de Hostilidad y otros; y devuélvase. Interviniendo la señora Jueza Suprema Carlos Casas por impedimento del señor Juez Supremo Castillo León. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-30**

CASACIÓN Nº 5842-2021 LIMA

Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, catorce de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO**. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Víctor Manuel Sánchez Lara,** contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que resuelve **confirmar** la sentencia apelada que declara infundada la demanda con lo demás que contiene; para cuyo efecto debe procederse a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Sala Laboral Superior, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; **ii)** Ante el órgano o jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, y **iv)** La parte recurrente adjuntó la tasa judicial correspondiente. **CUARTO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **QUINTO.** El recurso de casación cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso **1** del artículo 36 de la Ley Nº 29497, pues la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa. En cuanto al requisito señalado en el inciso **4** de la referida norma, del recurso se desprende que su pedido es anulatorio como principal y revocatorio como subordinado. **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **1) Inaplicación del artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Perú,** precisa que en la sentencia recurrida no cumple con analizar los agravios señalados en el recurso de apelación incumpliendo el principio y deber de congruencia previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil y las garantías respecto al trámite del recurso de apelación. La demandada ofreció como único medio probatorio de su argumentación de cálculo de pago de vacaciones: El informe de actuaciones inspectivas Nº 9199-2018-SUNAFIL, de fecha 08 de agosto de 2018, en cuya parte final concluye que la empresa demandada no ha incumplido la normatividad laboral respecto al descanso vacacional. En ese sentido el abogado de la parte demandante se opuso a la actuación y la eficacia del medio probatorio referido más aún si se trataba de un caso de otro trabajador de un proceso que aún está pendiente de pronunciamiento definitivo por el Poder Judicial; por lo que se solicitó al juzgado declarar improcedente dicho medio probatorio. La obligación incumplida por el juzgado, de examinar el documento cuestionado por improcedente e ineficaz, mediante la oposición formulada, resulta una infracción grave en el caso concreto ya que pretendería convalidar una actuación de Sunafil, totalmente nula. Que el párrafo segundo del convenio de fecha 24 de noviembre del 2011 de manera genérica e imprecisa señala que los catorce días de descanso compensarán el trabajo en sobre tiempo u horas extras y los días de descanso semanal obligatorio y feriados tanto el juzgado como la Sala han aceptado erróneamente que dicho convenio es válido, dándole una categoría de marco protector del derecho del empleador para no otorgar vacaciones a los trabajadores con jornada atípica de trabajo. **2) Inaplicación de los artículos 17 y 23 del Decreto Legislativo Nº 713 –** norma referida a los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. **3) Infracción normativa del artículo 23.4) inciso a) de La Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley Nº 29497 y artículo 14 y 18 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR –** normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago (modificado por el Decreto Supremo Nº 009-2011-TR). El empleador no cumplió con su obligación de acreditar el otorgamiento de goce vacacional y el pago correspondiente por los periodos comprendidos entre los años 2011 al 2017. **4) Inaplicación Precedente Vinculante: Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4635-2004-AA/TC y del artículo IV de la Nueva Ley Procesal Del Trabajo – Ley Nº 29497,** el análisis y aplicación de dicho precedente vinculante debió haber permitido que los jueces en el caso concreto establecieran la invalidez por incompatibilidad inconstitucional del convenio de pago de vacaciones y modificación de la jornada laboral, celebrado entre el demandante y la empresa, el 24 de noviembre de 2011. **SÉTIMO.** Previo al análisis de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** En lo referido a la causal del acápite **1),** si bien precisa la norma que considera infringida, cierto es también que no precisa la incidencia y de qué manera se habría vulnerado el debido proceso y el deber de motivación, advirtiéndose que la parte recurrente esboza argumentos genéricos relativos a que no se habrían dilucidados los agravios de su recurso de apelación, pretendiendo a su vez la valoración de medios probatorios que no habrían sido analizados, lo cual no corresponde ser objeto de tratamiento a través del recurso de casación que nos ocupa cuya naturaleza es de carácter extraordinaria, en ese sentido se advierte que la recurrente pretende que este Tribunal Supremo realice un examen de la conclusión tomada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, es evidente que no cumple con demostrar la

incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que la causal invocada deviene en **improcedente. NOVENO.** En cuanto a las causales denunciadas en los **numerales 2)** y **3),** si bien se precisa las normas que considera infringidas cierto es también que no se precisa la incidencia de las mismas al caso concreto; advirtiéndose que los argumentos van dirigidos a cuestionar lo que es en puridad el fondo de la controversia, cual es, el pago de vacaciones, sin embargo, en ese sentido se ha determinado con claridad por las instancias que dentro de los seis meses y dos días de descanso están inmersos los días que le corresponde al demandante por su descanso vacacional; situación que era conocida por el actor en virtud del convenio de pago de vacaciones y modificación de jornada laboral y puesto; por lo que se concluye que el actor hizo efectivo plenamente su goce vacacional. Siendo ello así, las causales invocadas no cumplen con las exigencias de los incisos 2) y 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497; en consecuencia, la causal propuesta deviene en **improcedentes. DÉCIMO.** En lo referido a la causal 4**)** la parte recurrente si bien precisa el precedente que considera vinculante al presente caso; se advierte que no acredita la incidencia en la decisión impugnada; asimismo, la sentencia indicada no tiene la calidad de precedente vinculante, conforme el artículo 40 de la Ley Nº 29497. Siendo ello así, la causal invocada no cumple con las exigencias de los incisos 2) y 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497; en consecuencia, la causal propuesta deviene en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Víctor Manuel Sánchez Lara,** contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Víctor Manuel Sánchez Lara contra Hunt Lng Operating Company SAC y otros, sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. C-2246709-31**

CASACIÓN LABORAL Nº 6075-2021 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL, LEY Nº 29497-LPT
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO-EJE

Lima, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por EL **PODER JUDICIAL** de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte**;** contra la **Sentencia de Vista** de fecha quince de diciembre de dos mil veinte; expedida por la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; que resuelve **CONFIRMAR** la **Sentencia Apelada** de fecha treinta de julio de dos mil veinte; que resolvió "declara **FUNDADA** la demanda interpuesta, en consecuencia se **ORDENA** a la demandada **CUMPLA** con el pago del bono jurisdiccional (S/ 39,600.00), reintegro del bono (S/ 16,789.00), gratificación por incidencia del bono jurisdiccional (S/ 23,831.50), Gratificación por incidencia de las asignaciones excepcionales (S/ 14,311.70), y beneficios por el periodo locación (S/ 16,388.09); **TAMBIÉN ORDENA** a la demandada que SE CONSTITUYA como depositaria del pago y reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios del 01 de enero del 2001 al 30 de octubre de 2015, por la suma de S/ 15,404.00 soles, Y DEPOSITE en la entidad financiera elegida por el demandante el reintegro de la Compensación por tiempo de servicios del **01.NOV.2015** en adelante **S/. 4584.00 SOLES. ORDENO** a la demandada **CUMPLA** con el pago de derechos accesorios como son los costos del proceso, sin costas". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 36 de la Ley Nº 29497 –Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, la demandante solicita: **a)** Se declare la desnaturalización de los contratos de naturaleza civil; **b)** Se declare la existencia del vínculo laboral por el periodo del uno de enero de dos mil uno hasta octubre de dos mil ocho, a plazo indeterminado bajo el régimen laboral 728; **c)** Pago del bono por función jurisdiccional del dos mil uno noviembre de dos mil ocho; **d)** Reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y las asignaciones especiales; **e)** Pago de beneficios sociales: vacaciones, gratificaciones, y compensación por tiempo de servicios; **f)** Intereses legales, costos y costas procesales. **QUINTO**. – Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, se debe indicar que la parte recurrente si apeló, tal como se aprecia del escrito de apelación de fecha seis de agosto de dos mil veinte. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **ANULATORIO y REVOCATORIO. SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, la siguiente: **1. Infracción normativa del inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.** Refiere que, la Sentencia de Vista no se encuentra debidamente motivada. **2. Infracción normativa del artículo 1764° del Código Civil.** Indica que, el demandante prestó servicios sin estar sujeto a subordinación. **3. Infracción normativa del artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.** Alega que, se ha cumplido con el principio de causalidad que regula la norma para contratar de forma temporal. **4. Infracción normativa del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 016-2020.** Señala que, en el presente caso no correspondía la desnaturalización de los contratos de servicios personal. **5. Infracción normativa del inciso 1) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú.** Argumenta que, no toda desigualdad constituye necesariamente discriminación**. 6. Infracción normativa del primer párrafo artículo 81° del Código Procesal Constitucional.** Alega que, la Sala Superior le otorga a la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ, efectos disimiles – retroactivos, supuesto distinto al consagrado en la norma denunciada. **7. Infracción normativa del artículo 6° del Texto Único Ordenado Del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad Y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR y el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación Por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR.** Señala que los conceptos reclamados fueron emitidos como gratificaciones extraordinarias a título de liberalidad del Poder Judicial, por ende, sin carácter remunerativo**. 8. Infracción normativa de la Tercera[1] (CUARTA) Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y (el inciso a))[2] del artículo 19° de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del sector Público,** Indica que dentro del principio de legalidad y equilibrio fiscal se establece que, no se pueden incrementar las obligaciones que no tiene marco legal y presupuestal, pues implicaría la vulneración de los citados principios. **SEPTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **OCTAVO.** . Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la

infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** – Sobre a la causal contenida en el **numeral 1),** la entidad recurrente no denuncia aspectos estrictamente procesales relacionados al debido proceso en cuanto a la motivación de la sentencia impugnada, sino que en el fondo cuestiona el criterio adoptado por la Sala Superior en la sentencia de vista respecto a la materia discutida (desnaturalización de contratos), circunstancia que no se subsume en la causal denunciada. Asimismo, se debe indicar que, al dar lectura a la sentencia de vista, expedida por la Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, sino también con la correspondiente absolución de agravios expuestos por la recurrente en su recurso de apelación, lo cual, conjuntamente con la valoración de las pruebas esenciales determinaron la decisión de confirmar la sentencia apelada. En mérito a lo expuesto, se desprende que el recurso de casación en este extremo no cumple con los requisitos de procedencia normados en los incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y precisa en qué consistiría efectivamente la infracción normativa invocada, ni haber demostrado su incidencia en la decisión impugnada; razones por las cuales la causal denuncian deviene en **improcedente**. **DECIMO.** Con relación a las causales contenidas en los **numerales 2), 3), 4) y 5),** se advierte que los argumentos desarrollados por el recurrente están dirigidos a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito respecto a la desnaturalización de los contratos de locación de servicios. En ese sentido, lo que pretende la parte recurrente este que este Supremo Tribunal realice un examen de la conclusión tomada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; por lo tanto, es evidente que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo tanto, las causales invocadas devienen en **improcedentes. DECIMO PRIMERO. –** En cuanto a la causal contenida en el **numeral 6),** si bien la parte recurrente cumple con describir las infracciones normativas denunciadas, empero, se advierte que no ha demostrado la incidencia directa de éstas sobre la decisión impugnada, puesto que ha quedado determinado que el Reglamento para el otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional, aprobado por la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 305-2011-P/PJ de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, tiene efecto retroactivo desde el veintinueve de febrero de dos mil ocho[3], en merito a lo ordenado en la Acción Popular[4] recaída en el Expediente Nº 192-2008-AP, la misma que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N°1610-2010 publicada el veintisiete de septiembre de dos mil once; por lo que, se evidencia el incumpliendo de los requisitos de procedencia fijados en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal Laboral, deviniendo en **improcedente. DECIMO SEGUNDO. –** Respecto a la causal contenida en el **numeral 7),** cabe precisar que, esta Sala Suprema en las Casaciones Nº 6578-2021 ANCASH y 11981-2021 PIURA, ambas de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, aplicando el Control de convencionalidad, concluyó que tanto el bono por función jurisdiccional como las asignaciones excepcionales, tienen naturaleza remunerativa, puesto que han sido percibidas de manera mensual, con carácter permanente, sobre un monto fijo y que es de su libre disponibilidad; por tal motivo, dichos conceptos forman parte de su remuneración y tienen incidencia sobre los beneficios sociales. En consecuencia, no se cumple con el requisito de procedencia establecido en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, por falta de claridad y precisión, en consecuencia, la causal denunciada deviene en **improcedente**. **DECIMO TERCERO.-** Con relación a la causal contenida en el **numeral 8)** carece de incidencia, ya que, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que, las rigurosas reglas presupuestarias, no constituye un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador, por lo tanto, no cumple con el requisito del inciso 3) del artículo 36 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, por lo que la causal denunciada deviene en **improcedente**. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **PODER JUDICIAL** de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte**;** contra la **Sentencia de Vista** de fecha quince de diciembre de dos mil veinte; expedida por la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Yudy Marleny Criollo Arce contra la recurrente**;** sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron. Ponente Vera Lazo, Jueza Suprema.** S.S CASTILLO LEON, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LEVANO VERGARA .**

---

1 Se verifica del contenido del recurso de casación que la Disposición Transitoria de la Ley Nº 28441, que forma parte de la causal es la Cuarta y no la Tercera como erróneamente indica la parte recurrente.

2 Se verifica de la revisión de la norma, que la misma no contiene el inciso a), por lo que debe entenderse la infracción normativa solo del artículo 19° de la Ley Nº 28112.

3 Décimo Tercer Considerando estableció textualmente lo siguiente:
"(…) Que, el nuevo Reglamento de Bono por Función Jurisdiccional y su anexo a expedirse por la demandada conforme a lo dispuesto en la presente resolución **tendrá efecto retroactivo desde el 29 de enero de 2008**, **fecha que tuvo la Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial 056-2008-P-PJ** que aprobaba el derogado reglamento y su anexo y que modificaba desde ese momento lo establecido en la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 191-2006-P-PJ; ello conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 81° del Código Procesal Constitucional (…)" (el sombreado es nuestro).

4 Sentencia de Vista de fecha 20 de octubre de 2009, emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de Lima, que declara fundada la demanda de Acción Popular interpuesta por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial.

C-2246709-32

CASACIÓN Nº 6089-2021 LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO-NLPT

Lima, once de noviembre del dos mil veintidós.

VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Especial Chavimochic,** contra la sentencia de vista de fecha uno de setiembre de dos mil veinte, que resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, que declara fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales. Revocaron el extremo que declara infundada la gratificación por escolaridad y reformándola la declararon fundada. Declararon infundada el pago de asignación vacacional. Para cuyo efecto debe procederse a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción normativa; y, ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: i) Contra la sentencia de vista expedida por la Sala Laboral Superior, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; ii) Ante el órgano o jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) El recurso fue presentado oportunamente dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, y iv) La parte demandante no adjuntó tasa la judicial correspondiente por estar exonerada. **CUARTO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **QUINTO.** El recurso de casación cumple con el requisito de

procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, pues la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, del recurso se desprende que su pedido es anulatorio y revocatorio. **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **i. Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú,** indica que no se ha motivado respecto al por que considera como desnaturalizada la relación civil y merezca la declaración de desnaturalización de los contratos de índole civil y de cas, a su vez se ha justificado la decisión en medios probatorios inútiles, inconducentes e impertinentes. **ii. Aplicación errónea del artículo 3.1 del Decreto de Urgencia Nº 016-2020,** menciona las reglas que se deben cumplir para que mediante mandatos judiciales se ordene la reposición, reincorporación o el reconocimiento del vínculo laboral en una de las entidades públicas que este dispositivo legal regula. **iii. Inaplicación del artículo 1 del Decreto Ley N°25807,** indica que las entidades del gobierno central y organismos cuyo personal se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad privada, no están comprendidos en la aplicación del decreto legislativo N°650 y decreto legislativo N°25460. **SÉTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO. En cuanto al ítem i),** corresponde precisar que los argumentos que detalla la recurrente no demuestran la incidencia directa sobre la decisión cuestionada, pretendiendo que esta Sala Suprema realice un nuevo análisis del caudal probatorio, cuando dicha petición no resulta viable en sede casatoria, puesto que este recurso es uno de debate netamente jurídico, ya que el debate fáctico culminó con el auto de vista objeto de impugnación; en consecuencia, se puede concluir que lo señalado por el recurrente busca la modificación de los hechos establecidos, propósito que como ha sostenido este Supremo Colegiado en reiteradas ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación, a lo que debe agregarse, que si bien el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación implícita del derecho a la pluralidad de instancias, el cual, a su vez, forma parte del derecho fundamental al debido proceso, ésta no debe ser utilizada de manera irrestricta. Por consiguiente, la motivación expuesta en la sentencia de vista impugnada se encuentra legal y racionalmente justificada, revelando la construcción de un razonamiento lógicamente válido, la materia sometida ha sido resuelta en base a la valoración en forma conjunta de los medios probatorios, utilizando su apreciación razonada en observancia a la garantía constitucional al debido proceso en su vertiente a la motivación de las resoluciones judiciales. Razones por las cuales, la causal invocada no cumple con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, **deviniendo esta denuncia en improcedente. NOVENO.** En cuanto a la causal denunciada en el **apartado ii),** se debe señalar que la parte impugnante no demuestra de manera concreta la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada, pues, pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos analizados en el proceso, lo cual resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, **la causal denunciada en este extremo deviene en improcedente. DÉCIMO.** Sobre la causa denunciada en el **ítem iv),** debemos indicar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, la recurrente realiza una fundamentación de manera genérica, sin indicar la incidencia que tendría sobre la decisión arribada por la sala. Siendo así, al no cumplir con el requisito de procedencia contemplado en el inciso 3) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, **deviene en improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Especial Chavimochic,** contra la sentencia de vista de fecha uno de setiembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Juana Mercedes Castillo Esquerre contra el Gobierno Regional de La Libertad, sobre Pago de Beneficios Sociales; y devuélvase. Interviniendo la señora Jueza Suprema Carlos Casas por impedimento del señor Juez Supremo Castillo León. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS. **C-2246709-33**

CASACIÓN Nº 6198-2021 CUSCO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Municipalidad Provincial de Canchis**, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte que resuelve **confirmar** la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, ordena a la demandada cumpla con pagar al demandante por concepto de indemnización por daños y perjuicios por daño patrimonial (lucro cesante) (...) por concepto de daño punitivo; todo más intereses legales, con costos procesales, que se liquidarán en ejecución de sentencia; **Revocar** dicha sentencia en el extremo que dispone que la demandada cumpla con pagar al demandante por concepto de indemnización por daños y perjuicios por daño patrimonial (lucro cesante), la suma equivalente a cinco mil trescientos noventa y cuatro con 33/100 soles (S/5,880.33**),** en el extremo que dispone que la demandada pague a favor de la demandante la suma de S/5,394.66 por concepto de daño punitivo y en el extremo que declara respecto de la pretensión de indemnización por daño moral, así como respecto al monto no acogido en la presente. **Reformándola** resolvieron disponer que: **1)** La demandada pague a la demandante, por concepto de lucro cesante la suma de S/45,511.69**;** más intereses legales que serán liquidados en ejecución de sentencia, **2)** Que la demandada pague a la demandante, por concepto de daño punitivo la suma de S/4882.44; más intereses legales que serán liquidados en ejecución de sentencia; y **3)** Declararon fundada en parte la demanda interpuesta por Pamela Colque Condori; en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con pagar a favor de la demandada la suma de S/6,000.00 por concepto de daño moral. Para cuyo efecto debe procederse a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** En ese sentido, se verifica que el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que ha sido interpuesto de la siguiente forma: **i)** Contra la sentencia de vista expedida por la Sala Laboral Superior, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; **ii)** Ante el órgano o jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **iii)** El recurso fue presentado oportunamente dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, y **iv)** La parte recurrente no adjuntó la tasa judicial correspondiente por estar exonerada.- **CUARTO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal

del Trabajo. **QUINTO.** El recurso de casación cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso **1** del artículo 36 de la Ley Nº 29497, pues la parte recurrente apeló la sentencia primera instancia al resultarle adversa. En cuanto al requisito señalado en el inciso **4** de la referida norma, del recurso se desprende que su pedido es revocatorio. **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **1) Apartamiento inmotivado de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República, Casaciones Nº 5057-2013-PA/TC, Nº 12475-2014 – Moquegua, Nº 1793-2000, Nº 2105-2000-Lima, Nº 2712-2009-Lima, Nº 4711-2011-Cusco, Nº 5192-2012, Nº 2534-2013-Junín, Nº 7893-2013-La Libertad y Nº 7186-2013,** precisa que con las casaciones en mención se llegó a establecer los siguientes lineamientos: Que la reposición real en el centro laboral del cual ha sido despedido satisface en el trabajador el derecho a prestar su fuerza de trabajo, en este punto, como lo estima el Tribunal Supremo; la reposición no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago remunerativo de parte del empleador; sobre lo sostenido el pago de remuneraciones devengadas producto del despido nulo no resulta aplicable analógicamente al caso de autos al tratarse de una norma excepcional al artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. Respecto al Pleno Jurisdiccional Nacional y Procesal Laboral (llevado a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2019) en la ciudad de Tacna, en este acuerdo se reconoce que el daño por lucro cesante importa, no las remuneraciones dejadas de percibir, sino todos aquellos ingresos que el trabajador pudo percibir de continuar laborando para el empleador que lo despidió de forma inconstitucional, menos los costos, de conseguir esos ingresos, restando además la incidencia de haber conseguido trabajo con un empleador distinto. Agrega que la sentencia de vista para fijar el lucro cesante únicamente se remite a lo solicitado por la parte demandante. **SÉTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. **OCTAVO.** Sobre la única causal denunciada, es de advertir que si bien invoca el apartamiento inmotivado de los pronunciamiento de la Corte Suprema**,** se advierte que la entidad recurrente denuncia el apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente número 05057-2013-PA/TC; sin embargo, de los argumentos que sustentan su causal, no se advierte argumento alguno tendiente a establecer con claridad el por qué considera que la Sala de Vista al emitir pronunciamiento debió aplicar dicho precedente, toda vez que cuando se invoca esta causal no resulta suficiente citar la sentencia que contiene el precedente de observancia obligatoria, sino que además se debe señalar cómo el supuesto fáctico de dicha resolución se aplica al caso concreto, lo que no ha ocurrido en el caso materia de análisis; razón por la que dicha causal deviene en **improcedente.** En lo referido al apartamiento de las demás sentencias casatorias que invoca; es de advertir que la parte recurrente destina sus cuestionamientos interpretando que el daño por lucro cesante no importa las remuneraciones dejadas de percibir; sin embargo, en dicho sentido es de precisar que, conforme lo han precisado las instancias, el lucro cesante debe otorgarse conforme a la valoración equitativa establecida en el artículo 1332 del Código Civil, tomándose como referencia o parámetro el periodo dejado de laborar así como la última remuneración percibida por el demandante; a ello se agrega que las referidas sentencias no constituyen precedente vinculante conforme al artículo 40 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; atributo de la cual debe estar investida para efectos de ser amparada dentro de la causal prevista en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo tanto, no cumple con describir con claridad y precisión el apartamiento denunciado, requisito de procedencia previsto en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley procesal mencionada, deviniendo la causal invocada en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Municipalidad Provincial de Canchis**, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Pamela Colque Condori contra la Municipalidad Provincial de Canchis, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-34**

CASACIÓN Nº 6208-2021 LA LIBERTAD

Materia: CESE DE HOSTILIDAD Y OTROS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veintisiete de octubre de dos mil veintidós .-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: Primero.** Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la **Sociedad Agrícola Virú S.A.,** de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución veinte, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veinte, que resuelve confirmar la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número trece, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho, que declaró fundada la demanda en el extremo de nulidad de despido, revocándola en el extremo por el cual se declaró fundada la demanda sobre cese de actos de hostilidad; y, reformándola declararon sustracción de la materia de la pretensión de cese de actos de hostilidad, en los seguidos por Santos Vargas Rodríguez contra Sociedad Agrícola Virú S.A., sobre nulidad de despido y otros, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada;** y, **b) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**. **Tercero.** Asimismo, el recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; conforme a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4, del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Cuarto.** Conforme al escrito de demanda presentado con fecha once de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas treinta, el accionante solicita el cese de actos de hostilidad, se deje sin efecto la suspensión de labores, y como pretensión accesoria peticionó el pago de la indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante, consistente en las remuneraciones dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la fecha de reposición efectiva. **Quinto.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución emitida en primera instancia que le fue adversa, pues la apeló conforme puede apreciarse del escrito presentado de fojas trescientos treinta y tres, por lo que esta exigencia se cumple. **Sexto.** La parte impugnante sustenta su recurso en las siguientes causales: **i. Infracción normativa de motivación y afectación al debido proceso;** indicándose que la desnaturalización de contrato no fue controvertido en primera instancia, por lo que el proceso adolece de nulidad. Asimismo, se evaluó aspectos como descansos temporales, sin embargo se concluyó prestaciones de manera ininterrumpida, advirtiéndose una motivación aparente y parcializada afectándose el debido proceso. **ii. Infracción normativa de inaplicación del artículo 64 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral;** al respecto, señala que se celebraron contratos de servicios intermitentes, los cuales el emperador estaba facultado para celebrarlos. **iii. Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 29 inciso a) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral;** toda vez que el demandante no ha acreditado a lo largo del proceso su condición de afiliado a algún sindicato. **iv. Infracción normativa por inaplicación del artículo 7.2 inciso c) de la Ley Nº 27360 Ley que aprueba las Normas**

de Promoción del Sector Agrario; en este extremo, indica que ante el despido, la única reparación resarcitoria es la indemnización, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional. **Sétimo.** Resulta pertinente citar el contenido de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en los cuales se considera como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: 2. «Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes. 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada». **Octavo.** Emitiendo pronunciamiento respecto a la causal contenida en el **literal i)** debemos decir que la entidad recurrente ha señalado genéricamente el derecho, sin mencionar específicamente norma alguna, invocándose afectación al debido proceso y falta de motivación, sin embargo, de los fundamentos en los que sustenta dicha causal no se advierte argumento alguno dirigido a demostrar su incidencia directa sobre la modificación de la decisión contenida en la resolución recurrida respecto al cese de hostilidades respecto a otorgamiento de descansos temporales; en ese sentido, contraviene la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la referida ley procesal, por lo cual es **improcedente**. **Noveno.** En referencia a las causales contenidas en los **literales ii) y iv)** debemos manifestar que se aprecia que el impugnante denuncia "inaplicación" por lo que corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, se debe señalar que pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos y pruebas aportados en el proceso, lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. En consecuencia, no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedentes. Décimo.** En referencia a la causal contenida en el **literal iii)** debemos mencionar que según la doctrina, existirá aplicación **indebida** cuando se actúa una norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, cuando el Juez ha errado en la elección de la norma o en el proceso de establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma. En el presente caso, se debe señalar que la norma constitucional, objeto de cuestionamiento en este apartado, ha sido correctamente aplicada en la medida que resulta pertinente para resolver la controversia respecto a la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; evidenciándose que las instancias no han incurrido en la aplicación **indebida** denunciada. Por lo que el extremo de la denuncia en este apartado deviene en **improcedente,** de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Décimo primero.** En cuanto al requisito de procedencia contenido en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, carece de objeto su análisis al haberse declarado la improcedencia de la causal invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la **Sociedad Agrícola Virú S.A.,** de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso seguido por Santos Vargas Rodríguez contra la Sociedad Agrícola Virú S.A., sobre cese de hostilidad y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- **S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-35**

CASACIÓN 6211-2021 SELVA CENTRAL

Materia: INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Lima, nueve de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.-** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por Jhema Construction Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a fojas trescientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos treinta y ocho, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Primera Sala Mixta y Sala Penal de Apelaciones de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confirma el fallo del quo, que resolvió declarar fundada en parte la demanda; y, revoca el extremo, que ordeno a los demandados pagar de forma solidaria la suma de treinta mil seiscientos soles (S/.30,600.00); y, reformándola ordeno que se pague a favor del actor la suma de ciento cincuenta y tres mil soles (S/.153,0000.00); medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verificados, de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: **a)** La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; **b)** Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **c)** La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **d)** El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos treinta y ocho, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Primera Sala Mixta y Sala Penal de Apelaciones de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales, en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó a la parte recurrente el doce de noviembre de dos mil diecinueve, según el cargo de notificación electrónica de fojas trescientos cuarenta y ocho, y el recurso se interpuso el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, se observa que la parte impugnante no adjunta el arancel correspondiente, pues al tratarse de una entidad del estado, se encuentra exonerada de pago de arancel judicial. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i)** La infracción normativa; o, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: **a)** En relación a los requisitos de procedencia, cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues, la parte impugnante apeló la sentencia de primera instancia donde obtuvo fallo desfavorable; y, **b)** En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte emplazada denuncia la causal de: **1) Infracción normativa procesal del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado; y, 2) Infracción normativa material procesal del artículo 3 del Decreto Ley Nº 25920. SÉTIMO.-** En relación a las causales material y procesal denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, pues, no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende la entidad edil casante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación,

ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, a fin de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y al no advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra las garantías procesales constitucionales, se concluye que la sentencia de vista ha sido expedida en cumplimiento de los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, ya que en el presente caso la Sala Superior ha determinado que el actor ha quedado discapacitado permanentemente tras el accidente de trabajo sucedido por un comportamiento de incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa demandada, y teniendo en cuenta que el actor sufrió el accidente donde perdió su brazo derecho, cuando tenía veinticinco años, diez meses y doce días y considerando que una persona debe continuar laborando hasta su cese, esto es, setenta años de edad, es que le corresponde sea indemnizado por los conceptos de lucro cesante, daño moral y daños punitivos conforme a lo estipulado en el artículo 1321 del Código Civil. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por Jhema Construction Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a fojas trescientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fojas trescientos treinta y ocho, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Primera Sala Mixta y Sala Penal de Apelaciones de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por José Luis Peñaloza Sinche contra Jhema Construction Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sobre Indemnización por Accidente de Trabajo; y los devolvieron. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. C-2246709-36**

CASACIÓN Nº 6374-2021LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, doce de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el trece de octubre del dos mil veinte, por **la demandada Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú "Santa Rosa de Lima" LTDA.,** contra la sentencia de vista de fecha treinta de setiembre del dos mil veinte; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal (URP); de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de beneficios sociales), ordenándose a la demandada al pago total de S/38,512.98 a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 43,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°048-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso), por lo que esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú "Santa Rosa de Lima" LTDA.,** contra la sentencia de vista de fecha treinta de setiembre del dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Otilia Castillo Fernández contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú "Santa Rosa de Lima" LTDA., sobre Pago de Beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 05 de febrero del 2020.

C-2246709-37

CASACIÓN LABORAL Nº 6402-2019 LAMBAYEQUE

Materia: REPOSICIÓN
Proceso Abreviado Laboral, Ley Nº 29497-LPT
Sumilla: si bien el ingreso a la administración pública debe darse en el marco de un concurso público para una plaza vacante y presupuestada. Dicho supuesto corresponde a quienes realicen carrera administrativa, no siendo el caso del actor quien desempeña labores de vigilante, no habiéndose acreditado en el proceso que se encuentre sujeto a progresión en la carrera administrativa.

Lima, diez de noviembre de dos mil veintidós.

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número seis mil cuatrocientos dos, guion, dos mil diecinueve, llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia. **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación formulado por la demandada **Ministerio Público**, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho; contra la **Sentencia de Vista** de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Desconcentrada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que **CONFIRMA** la **Sentencia Apelada** de fecha 20 de agosto de 2018, que declaró "FUNDADA la demanda de Reposición laboral interpuesta por Santander Roña López, contra la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio y la Procuraduría Publica del Ministerio Público"; en el proceso Abreviado laboral seguido por **Santander Roña López** contra el **Ministerio Público,** sobre reposición**. CAUSALES DEL RECURSO:** Mediante resolución de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno (inserta en el cuaderno de casación); se declaró procedente el recurso interpuesto por la parte demandada por las siguientes causales: **1. Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; 2. Infracción normativa por inaplicación del artículo 5° de la Ley Marco del Empleo Público, Ley Nº 28175; y, 3. Infracción normativa de la sentencia recaída en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC. CONSIDERANDO:** PRIMERO. Del desarrollo del proceso. **1.1.- Demanda**: Conforme al escrito de demanda de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, el demandante solicita: **a)** se deje sin efecto legal el despido del que ha sido víctima, por tratarse de un despido incausado; **b)** se ordene a la demandada proceda a la inmediata reposición del recurrente en su puesto habitual de labores; **c)** se ordene a la demandada proceda a incluirle en planilla, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728 y su reglamento. **1.2.- Sentencia de primera instancia:** El Juez del Juzgado Mixto – San Ignacio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resolvió: "i) FUNDADA la demanda de Reposición laboral interpuesta por Santander Roña López, contra la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio y la Procuraduría Publica del Ministerio Público, en consecuencia, ORDENO a las demandadas cumplan con reponer al demandante SANTANDER ROÑA LOPEZ en el puesto habitual de trabajo como Agente de Seguridad del ministerio Público- sede San Ignacio- u otro puesto similar jerarquía y remuneración, incluyéndolo en la planilla de trabajadores sujeto a plazo indeterminado en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728; ii) NULO Y SIN EFECTO LEGAL EL DESPIDO INCAUSADO, perpetrado contra el demandante Santander Roña Lopez con fecha siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (208); (iii) liquídese en ejecución de sentencia los costos procesales". **1.3.- Sentencia de segunda instancia:** La Sala Desconcentrada Mixta y Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resolvió: "**CONFIRMAR** la sentencia contenida en la resolución número cuatro, en todos sus extremos, emitida por el Juez del Juzgado Mixto de San Ignacio, quien declaró FUNDADA la demanda de Reposición laboral interpuesta por Santander Roña López,

contra la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio y la Procuraduría Publica del Ministerio Público". **Infracción normativa. SEGUNDO.** La infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior, al emitir una resolución, originando que la parte que se considere afectada pueda interponer recurso de casación. Sobre los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidas también, las causales que anteriormente contemplaba la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636 en su artículo 56°[1], relativas a: Interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; además de normas de carácter procesal. **Respecto a la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. TERCERO.** Los dispositivos mencionados regulan lo siguiente: **"**Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". **CUARTO.** El debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Suprema, en la Casación Laboral Nº 15284-2018 CAJAMARCA de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se estableció como doctrina jurisprudencial vinculante: "Se considerará que existe infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por falta de motivación o motivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando la resolución que se haya expedido adolezca de los defectos siguientes: **1.** Carezca de fundamentación jurídica. **2.** Carezca de fundamentos de hecho. **3.** Carezca de logicidad. **4.** Carezca de congruencia. **5.** Aplique indebidamente, inaplique o interprete erróneamente una norma de carácter procesal. **6.** Se fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes supuestas o derogadas. **7.** Se aparte de la Doctrina Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin expresar motivación alguna para dicho apartamiento. En todos los supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará la nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la Sala Superior emitir nueva resolución". **QUINTO-** En esa misma línea de análisis, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída Nº 00728-2008-HC, publicado el ocho de noviembre de dos mil ocho, en su fundamento séptimo señaló que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: **a)** inexistencia de motivación o motivación aparente; **b)** falta de motivación interna del razonamiento; **c)** deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas; **d)** motivación insuficiente; **e)** motivación sustancialmente incongruente; y, **f)** motivaciones cualificadas. **SEXTO**.- En ese sentido, no se producirá la infracción normativa de la norma denunciada siempre que exista fundamentación jurídica y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; en tal caso, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que se observe los requisitos ya indicados y que, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa; permitiendo a los justiciables poder conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión; de igual forma, permitirá al órgano superior, ante la interposición de un recurso, determinar si las razones expuestas por el órgano inferior se ajustan al ordenamiento jurídico vigente. **SEPTIMO.** En el caso de autos, esta Sala Suprema advierte que la decisión adoptada por la Sala Superior se ha ceñido a lo aportado y probado en el proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas y con precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi; asimismo, se verifica que las partes procesales han podido ejercer su derecho de defensa durante todo el proceso; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación; asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente contra las garantías procesales constitucionales. Por lo que, deviene en infundado en este extremo. Sobre la infracción normativa por inaplicación del artículo 5° de la Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 28175; y del expediente Nº 05057-2013-PA/TC. **OCTAVO.** Respecto a la primera causal, el artículo 5 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, señala lo siguiente: "Artículo 5.- Acceso al empleo público El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades". **NOVENO.-** La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, consagra como principios esenciales el mérito y la capacidad; en cuya virtud el ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, así como, los ascensos en el empleo público, deben fundamentarse en el mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la administración pública; asimismo, los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Además, la exigencia de un concurso público deberá ser realizado por la entidad pública, bajo un procedimiento abierto y democrático, que permita una verdadera igualdad de oportunidades, a efectos de que las personas sean evaluadas de acuerdo con los ítems necesarios, circunscritos sobre todo en las capacidades académicas, experiencias profesionales y otros lineamientos, dependiendo del cargo, respectivo. Aunado a ello, la importancia de la meritocracia para el ingreso a la administración pública ha sido recogida por el legislador en la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, que lo ha conceptualizado como un principio necesario para el acceso a la función pública, el mismo que encuentra desarrollo en los artículos 161° y 165° del Decreto Supremo Nº 040-20 14-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Civil. **DECIMO.** Con relación a la causal referida al apartamiento del precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 05057-2013-PA/TC; corresponde citar los siguientes fundamentos: "De lo expuesto se puede sostener que el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, en la Administración Pública, necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, a través de un concurso público y abierto", y en los fundamentos 18 y 22, que constituyen precedentes vinculantes, prescriben: "18. (…) en los casos en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada (…) 22. En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38° del TUO del Decreto Legislativo Nº 728. Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la Ley procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de extemporaneidad. Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación procederá el archivo del proceso". **DECIMO PRIMERO.-** Para efectos de analizar la referida causal, se debe tener presente que el Tribunal Constitucional dispuso que la Sentencia expedida el dieciséis de abril de dos mil quince, en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC (proceso seguido por Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco con el Poder Judicial) debe ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano[2], incluso en los procesos que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Cabe resaltar que los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional tienen efectos de una Ley, es decir, una regla que el Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso concreto, es una regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier ciudadano puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin tener que recurrir previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los poderes públicos y también frente a los particulares[3] . **DECIMO SEGUNDO.** Se ha

concebido a la carrera administrativa como un bien jurídico constitucional, precisándose que por ley se regulará el ingreso, los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Así, en el artículo 40° de nuestra Constitución, se establece lo siguiente: La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente Por su parte, el artículo 1 del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala: Carrera Administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública. Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público". **DECIMO TERCERO.** En ese sentido, la carrera administrativa constituye, sobre todo, una garantía para el ejercicio profesionalizado de la función pública, lo que supone que el desarrollo de la labor del servidor público se rija bajo el principio de imparcialidad y capacidad. Para conseguir lo anterior, un régimen de carrera administrativa se articula consagrando los derechos y deberes de los servidores públicos a la luz del principio de mérito que rige tanto en el acceso, como para el ascenso en la estructura estratificada – carrera correspondiente a un rango de nivel remunerativo, como también, del necesario reconocimiento de la estabilidad laboral absoluta de los mismos[4]. **DECIMO CUARTO.** En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 06681-2013-PA/TC de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, al esclarecer la aplicación del precedente vinculante recaído en la Sentencia Nº 05057-2013-PA/TC/JUNÍN, señaló en el fundamento 11, lo siguiente: "(…) es claro que el "precedente Huatuco" solo resulta de aplicación cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública. Esto es especialmente relevante, pues implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público, y a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil), **y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada**, los trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionaros de confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)"; (negrita nuestro). Así pues, existe una distinción entre función pública y carrera administrativa, puesto que, no toda persona que se vincule a la función pública, necesariamente, realiza carrera administrativa; de manera que, los supuestos establecidos en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y del precedente vinculante "HUATUCO", serán aplicable solo a quienes "efectúen carrera administrativa". **DÉCIMO QUINTO.** Dentro de ese contexto, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Supremo, en la Casación Laboral Nº 21082-2017-CAJAMARCA de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se estableció como principio jurisprudencial, lo siguiente: "f) Esta distinción es importante para la aplicación de las reglas establecidas en el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC, toda vez que conforme a ello no resulta procedente la reposición de un trabajador que realiza función pública, que forme parte de una carrera administrativa, cuyo contrato se ha desnaturalizado, contrario sensu, sí es procedente la reposición de un trabajador que realiza función pública pero que no forme parte de una carrera administrativa" **DECIMO SEXTO**.- Así las cosas, se puede concluir que el "precedente Huatuco" solo resulta de aplicable cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública, pues, lo que se pretende es que el acceso, la permanencia y el ascenso atiendan a criterios meritocráticos; pues no tendría sentido exigir este tipo de estándar para la reposición laboral si se tratara de plazas que no requieren tomar en cuenta esas consideraciones; esto es que, por la naturaleza de las funciones desempeñadas no nos encontramos ante supuestos vinculados al ingreso a la carrera administrativa. **Análisis de la controversia DECIMO SEPTIMO.** La procuraduría del Ministerio Público señala que el demandante no acreditó en el decurso de proceso que ingresó por concurso público, a una plaza presupuestada y vacante, por lo tanto, no corresponde ordenar su reposición. Delimitados los argumentos expresados por la parte recurrente; así como las consideraciones jurídicas pertinentes, corresponde dar respuesta a dichas alegaciones a efectos de corroborar si, en el caso de autos, es de aplicación o no, la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y el precedente vinculante recaído en el expediente Nº 05057-2013-PA/TC. **DECIMO OCTAVO.** En ese contexto, cabe reiterar que, el fundamento Vigésimo del precedente vinculante recaído en el expediente Nº 05057-2013-PA/TC, precisa que solo resulta aplicable dicho precedente cuando la plaza a la cual se pretenda la reposición forme parte de la carrera administrativa; asimismo, en el fundamento décimo octavo se estableció como regla de obligatorio cumplimiento: "Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 para el sector privado". A partir de dicha regla, observamos que su aplicación se circunscribe cuando el trabajador solicite: **a)** la desnaturalización de un contrato de trabajo temporal o de naturaleza civil, y como consecuencia ello, se determine la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR; y, **b)** La reposición a una plaza que forme parte de la carrera administrativa a la cual corresponde acceder a través de un concurso público de méritos y que, además, se encuentre vacante y presupuestada. **DECIMO NOVENO.** En el presente caso, conforme lo han señalado las instancias de mérito, entre las partes procesales existió una relación contractual de naturaleza laboral a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privado, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por el periodo del seis de enero de dos mil dieciséis hasta el ocho de marzo de dos mil dieciochoi, como consecuencia de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios; extremo que no ha sido cuestionado en el recurso de casación. Asimismo, de los actuados se aprecia que el señor Santander Roña López fue contratado por el Ministerio Público para que desempeñe labores de guardianía, la misma que, por su naturaleza, es eminentemente manual; ya que, no se requiere de un conocimiento técnico y/o científico para su ejecución; existiendo una ausencia de especialidad en el desarrollo de las mismas. Por otro lado, de la revisión del Manual de Organización y Funciones de la referida entidad que obra en autos y de su página web institucional, se advierte una clasificación de niveles y categorías, así como el detalle de las funciones y requisitos por cada cargo específico (MOF), vale decir, que existe una línea de carrera. Sin embargo, en los mencionados instrumentos de gestión, no se encuentra contemplado el cargo de vigilancia, o como lo denomina la demandada "guardianía"[5]; lo que permite concluir que no existe una línea de ascenso para estos tipos de trabajares dentro de la carrera administrativa de la entidad demandada, de manera que, en ningún caso, salvo el cambio de categoría remunerativa, podrán llegar a desempeñar cargo alguno de relevancia funcional, para los cuales se tiene que respetar irrestrictamente – salvo los cargos de elección popular– los principios de meritocracia y capacidad que rigen la administración pública en el Perú. **VIGESIMO. –** En ese sentido, atendiendo las reglas establecidas en el precedente vinculante recaído en el expediente Nº 05057-2013-13A/TC, y su aclaración recaída en la sentencia emitida en el expediente Nº 06681 2013-PA/TC; se puede concluir que la ratio decidendi del Tribunal Constitucional es que el «precedente Huatuco» solo resulta de aplicación cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública, y dado que el actor no

desarrolla carrera administrativa, por lo tanto, no resulta exigible el requisito de ingresar a plaza presupuestada y vacante, conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, ni es aplicable al caso en concreto los presupuestos o requisitos establecidos en el precedente vinculante citada relacionado a la exigibilidad del ingreso a la administración pública por concurso público de méritos en una plaza vacante, presupuestada y de naturaleza indeterminada. **VIGESIMO PRIMERO. –** Por otro lado, resulta pertinente indicar que este Tribunal Supremo comparte y es respetuoso de lo establecido por el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante recaído en el expediente Nº 5057-2013-PA/TC y su aclaratoria expedida en el expediente Nº 06681-2013-PA/TC, en fortalecer la administración pública con personal capacitado e idóneo; de tal manera que su ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, así como, los ascensos en el empleo público, deben fundamentarse en los principios de mérito y capacidad de los postulantes, tal como lo ha establecido la Carta de Iberoamérica de la Función Pública – en la cual se asientan las bases de un sistema profesional y eficaz de la función pública ; sin embargo, conforme se ha expuesto precedentemente, existen trabajadores del sector público que sus funciones son de naturaleza predominantemente manuales o físicas, sin necesidad de una formación técnico-profesional; por lo tanto, no sería posible aplicarles "criterios meritocráticos", como sí lo es en el caso de los empleados que realizan carrera administrativa. **VIGESIMO SEGUNDO.** En atención a los argumentos expuestos, en el caso de autos no se advierte infracción normativa del artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, coligiéndose que el apartamiento del precedente vinculante recaído en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 5057-2013-PA/TC, se ha dado al no encontrarse dentro de las reglas establecidas en el citado precedente, el recurso postulado deviene en **infundado. Cambio de criterio VIGESIMO TERCERO.** La suscrita se aparta del criterio en anteriores pronunciamientos, en virtud del análisis del presente caso y de conformidad con el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; en este sentido, se aparta de cualquier criterio distinto al señalado en la presente ejecutoria. Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido además por el artículo 41° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, **DECISIÓN:** Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el **Ministerio Público**, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho; **NO CASARON** la **Sentencia de Vista** de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Desconcentrada Mixta y Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso laboral por **Santander Roña López** contra el **Ministerio Público,** sobre reposición; **y los devolvieron.** Ponente Señora **Vera Lazo**, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEON, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA.

---

1 Modificado por el artículo 1 de la Ley 27021 publicada el 23 de diciembre de 1998

2 La fecha de Publicación en el diario oficial El Peruano, es el uno de junio de dos mil quince.

3 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el catorce de noviembre de dos mil cinco, en el proceso recaído en el expediente Nº 3741-2004-AA/TC

4 LUYO RODRÍGUEZ, María Eugenia. La carrera administrativa: su necesaria observancia para la regulación de la negociación colectiva en materia remunerativa de los servidores públicos en el Perú. Revista Derecho & Sociedad, Nº 53, 2019; Lima, pag. 173

5 Incluso este extremo ha sido aceptado por la parte recurrente en su escrito de contestación de demanda, véase el ítem 2.3.4, fojas 136 parte pertinente.

C-2246709-38

CASACIÓN Nº 6978-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
EXPEDIENTE EJE

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada **Municipalidad Distrital de Miraflores**; contra la sentencia de vista de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resuelve: "(…) 1. DECLARA FUNDADA la demanda de fecha 07 de diciembre de 2018, interpuesta por MARLON JEREMMY CAYCHO ARELLANO en contra de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES; en consecuencia, declaro la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminada entre las partes, bajo el régimen laboral de la actividad privada, desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de enero de 2019. 2. ORDENO que la demandada inscriba al actor en su planilla de pagos de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, plazo indeterminado, consignando como fecha de ingreso la del 01 de mayo de 2016 y cese la del 30 de enero de 2019. 3. ORDENO que la demandada abone al actor la suma de DOCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES (S/12.256.67) por concepto de COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS, GRATIFICACIONES y ESCOLARIDAD, más intereses legales y financieros. 4. SE CONDENA a la demandada al pago de costos; SIN COSTAS. (…)"; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2021-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y escolaridad, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/ 12,256.67 soles. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, se declare la **invalidez de contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial,

cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que invalidez de contratos administrativos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 Unidades de Referencia Procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores; contra la sentencia de vista de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo

responsabilidad; en los seguidos por Marlon Jeremmy Caycho Arellano contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. –** S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-39

CASACIÓN Nº 7403-2019 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

SUMILLA. Las normas de orden presupuestal no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo y, por ende, la obligación de pago de remuneraciones y de los beneficios sociales, pues entender lo contrario importaría vaciar de contenido a la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado que precisa que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

Lima, trece de octubre de dos mil veintidós.-

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número siete mil cuatrocientos tres guion dos mil diecinueve, llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** Se trata del recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Poder Judicial**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la cual **confirma** la sentencia apelada de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, que declara **fundada en parte** la demanda y ordena el pago de la suma de **S/59,761.00** por pago y reintegro de bono por función jurisdiccional y de las gratificaciones legales; asimismo, ordena que la demandada se constituya en depositaria de la suma de **S/14,081.83** por concepto de compensación por tiempo de servicios; **confirma** el extremo que declara **infundada** la demanda por reintegro de bono jurisdiccional del periodo octubre de 1999 a febrero de 2008. **II. CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO** El recurso de la demandada ha sido declarado procedente por las siguientes causales: **(i)** Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú. **(ii)** Infracción normativa de los artículos 4 y 81 del Código Procesal Constitucional. **(iii)** Infracción normativa material de los artículos 77, 78 y 103 de la Constitución Política del Perú. **III. CONSIDERANDO PRIMERO.** Corresponde a esta Sala Suprema, emitir pronunciamiento respecto a la **infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y del artículo 4 del Código Procesal Constitucional,** es decir, establecer si con la expedición de la sentencia de vista, la Sala Superior ha afectado el derecho fundamental al debido proceso, debida motivación de resoluciones judiciales y tutela jurisdiccional efectiva, pues de ser amparada carecerá de objeto que esta Sala Suprema se pronuncie sobre las otras causales invocadas. **SEGUNDO.** Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, al resolver el Expediente Nº 00712-2018-PA/TC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su fundamento 4 ha expresado lo siguiente: "Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de **obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.** "La exigencia –dice este Tribunal– de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, **expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley;** pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, **garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos** que al juez penal corresponde resolver (STC 08125-2005-PHC/TC, fundamento 11)." (Fundamento jurídico 4) (El resaltado es nuestro). **TERCERO.** Siendo esto así, de la revisión de la sentencia de vista, y en mérito al sustento esbozado por la parte recurrente sobre la causal procesal denunciada, no se evidencia el vicio de motivación postulado toda vez que se verifica que la Sala Superior ha expuesto las razones mínimas para sustentar su decisión, justificando la premisa fáctica y jurídica a partir de cual arriba a la conclusión de amparar la demanda en los términos expresados en la sentencia impugnada. Así, la Sala Superior en el considerando tercero ha dado respuesta a los cuestionamientos sobre los vicios procesales denunciados en la apelación, en los considerandos cuarto y quinto ha dado respuesta a los cuestionamientos referidos a la decisión de amparar el pago del bono por función jurisdiccional, del considerando sexto al noveno, ha dado respuesta a los cuestionamientos sobre la naturaleza remunerativa del bono jurisdiccional y de las asignaciones especiales, cumpliendo de esta manera el principio "**tantum devolutum quantum appellatum"** contemplado en el artículo 370 del Código Procesal Civil, en virtud al cual el órgano superior ha dado respuesta a cada uno de los extremos formulados en su recurso de apelación. Razón por la cual, la sentencia de vista cumple la protección y la exigencia constitucional que permite a los justiciables defenderse adecuadamente porque expuso los fundamentos fácticos y jurídicos que justifican su decisión; en consecuencia, estas causales declaradas procedentes devienen en **infundadas. CUARTO. Respecto a las infracciones normativas por inaplicación del artículo 103 de la Constitución Política del Perú y por interpretación errónea del artículo 81 del Código Procesal Constitucional** La demandada refiere en su recurso impugnatorio que la Sala Superior ha aplicado retroactivamente la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ, para amparar la pretensión de reintegro de bono por función jurisdiccional desde el 2008 hasta el 2011, lo cual a decir de la demandada- vulnera el artículo 103 de la Constitución que prohíbe la aplicación retroactiva de las normas y el artículo 81 del Código Procesal Constitucional, sobre los efectos de la sentencia de acción popular. Las normas en cuestión prescriben: El artículo 103 de la Constitución Política del Perú prescribe: "**Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho.** Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho" El artículo 81 de Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional[1] prescribe: "**Artículo 81.- Efectos de la sentencia fundada.** (…) Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo (…)" **QUINTO.** De la revisión de la sentencia impugnada, no se advierte tal infracción, por las razones que pasamos a exponer a continuación. En efecto, en la sentencia impugnada la Sala Superior establece que la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ fue emitida en cumplimiento a un mandato judicial (Expediente Nº 192-2008-AP), como consecuencia de haberse declarado fundada la acción popular contra la Resolución Administrativa Nº 056-2008-P/PJ, siendo que la sentencia en el referido proceso establecía que la demandada debía emitir una nueva resolución aplicable desde el 29 de febrero de 2008, toda vez que la resolución administrativa del 2008 vulneraba la Constitución al diferenciar injustificadamente entre administrativos y jurisdiccionales, al otorgar montos distintos por bono jurisdiccional pese a encontrarse en el mismo nivel remunerativo. **SEXTO.** Es decir, no hay en estricto- una aplicación retroactiva de una norma en contravención al artículo 103 de la Constitución, sino el cumplimiento de un mandato judicial emitido en el marco de un proceso de acción popular que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Nº 28237, permitía determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas que se impugnan. Es en virtud al artículo 81 de la Ley Nº 28237 que en la sentencia de acción popular, en decisión que fue confirmada en segunda instancia, se resolvió: "El nuevo reglamento del bono por función jurisdiccional y su anexo a expedirse por la demandada conforme a lo dispuesto en la presente resolución tendrá efecto retroactivo desde el 29 de febrero de 2008, fecha que tuvo la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 056-2008-P/PJ, que

aprobaba el derogado reglamento y su anexo y que modificaba desde ese momento lo establecido en la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 191-2006-P/PJ, ello conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional". **SÉTIMO.** De esta manera damos respuesta a los cuestionamientos planteados con motivo del recurso de casación, evidenciando que no existe una inaplicación del artículo 103 de la Constitución ni una interpretación errónea del artículo 81 del Código Procesal Constitucional, sino que, por el contrario, es correcto aplicar en el periodo demandado los efectos de la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ, porque dicha resolución fue emitida en el marco del cumplimiento de una sentencia de acción popular que declaró la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 056-2008-P/PJ, con efectos retroactivos, disponiendo la emisión de una nueva norma conforme a los lineamientos establecidos en dicha sentencia. En tal virtud, las infracciones normativas bajo análisis devienen en **infundadas**. **OCTAVO.** Cabe precisar, sin embargo, que el caso de autos pudo incluso ser resuelto sin tener que hacer referencia al proceso de acción popular, pues no es posible diferenciar remunerativamente entre dos trabajadores que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, salvo la existencia de causas objetivas y razonables que lo justifiquen, lo cual no ocurre en el caso de autos porque en el periodo en cuestión el empleador otorgó un bono por función jurisdiccional diferenciando a trabajadores del mismo nivel jerárquico, siendo el elemento diferenciador, únicamente, que unos eran cargos jurisdiccionales y otros administrativos, siendo que los primeros percibían un monto menor en relación a los segundos, pese a la naturaleza del beneficio en cuestión. Es decir, aun sin hacer referencia al proceso de acción popular, la consecuencia es la misma porque diferenciar remunerativamente a dos trabajadores del mismo nivel jerárquico, sin que medien causas objetivas y razonables que lo justifiquen, lesiona el derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación, establecido en el artículo 26.1 de la Constitución. Se precisa, por cierto, que hacemos referencia a la naturaleza remunerativa del bono jurisdiccional en tanto ello fue determinado por las instancias de mérito, lo cual no fue objeto de cuestionamiento por la demandada. **NOVENO. Infracción normativa material de los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú** Asimismo, del recurso de casación se advierte que la entidad demandada señala que no se puede incrementar las obligaciones que no tienen marco legal y presupuestal, pues implicaría la vulneración de los principios de legalidad y equilibrio fiscal. Al respecto debemos señalar que los reintegros de los beneficios sociales amparados con motivo de este proceso sí tienen basamento legal, en tanto son propios de los trabajadores adscritos al régimen del Decreto Legislativo Nº 728, al cual pertenecía la trabajadora demandante. Dicho reintegro se efectivizó como consecuencia de la incidencia del bono jurisdiccional y de las asignaciones especiales, cuya naturaleza remunerativa fue reconocida por las instancias de mérito en decisión que no ha merecido cuestionamiento por parte de la demandada. Por lo que, en rigor, no se advierte afectación alguna al principio de legalidad. **DÉCIMO.** Sobre la aplicación de las normas presupuestarias, debemos señalar que en el recurso la demandada se ha limitado a transcribir el artículo 77 y 78 de la Constitución, así como el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, lo que significa que, en rigor, no se ha evidenciado ni demostrado un problema jurídico que amerite una respuesta por parte de esta Sala Suprema, pues la sola cita de las normas sin una adecuada fundamentación sobre la infracción normativa que se denuncia, no cumple los estándares mínimos del recurso de casación para merecer un pronunciamiento de fondo. **UNDÉCIMO.** Sin embargo, haciendo un esfuerzo por identificar el problema jurídico que pretende plantear la demandada, observamos que lo que plantea esta última es anteponer las normas presupuestales para desestimar la demanda de reintegro de bono jurisdiccional y de beneficios sociales. Al respecto, debemos señalar que las normas de orden presupuestal no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo y, por ende, la obligación de pago de remuneraciones y de los beneficios sociales, pues entender lo contrario importaría vaciar de contenido a la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado que precisa que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En este escenario, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que, las rigurosas reglas presupuestarias no constituyen un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador. Por las razones expuestas, esta Sala Suprema no advierte la configuración de las infracciones normativas denunciadas, y por ello el recurso de casación interpuesto no tiene respaldo, deviniendo en **infundado. IV. DECISIÓN** Por estas consideraciones, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Poder Judicial**; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Myriam Elizabeth Dávila Ríos contra Poder Judicial, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; **y los devolvieron**. **Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo.- S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] Vigente a la fecha en la que suscitaron los hechos objeto de pronunciamiento.

C-2246709-40

CASACIÓN LABORAL Nº 7492-2019 DEL SANTA

Materia: NULIDAD DE DESPIDO
PROCESO ORDINARIO – NLPT
Sumilla: Se encuentra desnaturalizada la intermediación laboral mediante la cual se destacó a la demandante a EsSalud para desempeñar la labor de operadora de módulo de atención, en la medida que las actividades de programación de citas médicas y de orientación a los afiliados o asegurados sí constituye actividad principal de la usuaria en el caso bajo análisis, por lo que el periodo que la demandante fue destacada a la empresa usuaria, se considera como trabajadora de la usuaria EsSalud, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley Nº 27626.

Lima, seis de octubre de dos mil veintidós

VISTA; la causa número siete mil cuatrocientos noventa y dos, guion dos mil diecinueve, **DEL SANTA,** en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO** Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la codemandada, por la demandada **Seguro Social de Salud – Essalud,** contra la sentencia de vista de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho que **confirma l**a sentencia apelada, integrada por resolución número de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Jim Jammil Bocanegra Sandoval, Rosa Amelia Ocharán Chauca y Humbertina Marisol Campoblanco Pinedo, sobre reposición por despido nulo y otros; CAUSAL DEL RECURSO Mediante Resolución de fecha diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno contenida en el cuaderno de casación, se declaró procedente el Recurso interpuesto por la demandada **Seguro Social de Salud Essalud** por las siguientes causales: **i) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de Constitución Política del Perú. ii) Apartamiento del precedente vinculante – Caso Huatuco Huatuco Expediente Nº 05057-2013-PA/TC, iii) Apartamiento injustificado del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional – Expediente Nº 03238-2013-PA/TC, iv) Infracción normativa del artículo 3 de la Ley Nº 27626 – Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores;** CONSIDERANDO Primero. Del desarrollo del proceso **a) Pretensión demandada.** De la revisión de los actuados, los demandantes Jim Jammil Bocanegra Sandoval, Rosa Amelia Ocharán Chauca y Humbertina Marisol Campoblanco Pinedo, interponen demanda contra Seguro Social de Salud – Essalud y otros, sobre nulidad de despido conforme al inciso c) del artículo 29 del Decreto Supremo N°003-97-TR, la desnaturalización de la intermediación laboral debiendo considerarse la existencia de un vínculo de naturaleza laboral de manera directa con la demandada Seguridad Social de Salud, la reposición al puesto de trabajo el pago de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de reposición. Fundamentan su recurso indicando que con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, interpusieron demanda pretendiendo su inclusión en planillas de pago como trabajadores públicos permanentes dentro del régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo Nº 728, a través del expediente N°02874-2016-0-2501-JR-LA-08, en razón a la desnaturalización de la intermediación laboral entre la entidad usuaria Seguro Social de Salud – Essalud y la empresa de servicios SM Group SA y,

por ende, encontrarse configurada una relación laboral directa entre los recurrentes y el Seguro Social de Salud – Essalud. Que, como consecuencia de ello, la entidad recurrente tomó represalias despidiendo a los demandantes, sin tener en cuenta la queja presentada por ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, sobre desnaturalización de la intermediación laboral, corroborada con la medida de requerimiento derivado la orden de inspección N°230-2017-SUNAFIL/IRE-ANC-ZCHI de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. **b) Sentencia de primera instancia.** El juez del Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Sentencia emitida el veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, declaró fundada en parte la demanda ordenando que ESSALUD cumpla con reponer a los demandantes en los puestos de operadores de módulos en la división de admisión y registros médicos, referencias y contrarreferencias ocupados antes del cese; **c) Sentencia de segunda instancia.** Por su parte, el Colegiado de la Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior de Justicia, confirmó la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda. **Segundo**. La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo Nº 26636 en su artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material. **Tercero.** Corresponde analizar, en primer lugar, la causal procesal denunciada por demandada Seguro Social de Salud – EsSalud, referida a la **infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú**, en concordancia con los artículos I y III del Título Preliminar de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil la cual denuncia una inconsistencia en la motivación, de modo tal que de calificarse positivamente, implicará la carencia de objeto el pronunciamiento de las casuales materiales invocadas por la parte recurrente. Al respecto, la recurrente indica que se advierte una motivación aparente, siendo que la sentencia de vista no cuenta con las razones mínimas que sustentan la motivación. **3.1.** Así tenemos que, corresponde señalar en primer término que existirá infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado[1], cuando en el desarrollo del proceso no se haya respetado el derecho de las partes, se haya obviado o alterado actos de procedimientos, la tutela jurisdiccional no haya sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. **3.2.** Es así que el Derecho a un debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y las reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. **3.3.** Asimismo, se debe señalar que el principio procesal de la motivación de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5 del artículo 139°[2] de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil[3] y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[4]; y, dicho deber implica que los juzgadores señalan en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respectando los principios de jerarquía normativa y de congruencia. **3.4.** En otras palabras, la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la decisión final. En esta fundamentación debe existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes (demandante y demandado), y las pruebas aportadas por ellos, coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea real y fiel reflejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en Derecho, lo que significa que la norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido y vigente, y en caso de no ser vigente, si corresponde su aplicación o no al caso en concreto. **3.5.** En el presente caso, respecto a la causal declarada procedente sobre la presente infracción, se tiene que la Sala Superior ha explicado las razones por las cuales ha confirmado la decisión de la jueza de primera instancia, declarando fundada en parte la demanda; de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con precisar los argumentos y normas que le permiten asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación o el debido proceso. De igual manera, no se advierte la existencia de vicio procesal alguno durante el trámite del proceso, que atente contra las garantías procesales constitucionales que integran el debido proceso; siendo esto así, la causal denunciada deviene en **infundada**. **Cuarto. Apartamiento del precedente vinculante – Caso Huatuco Huatuco Expediente Nº 05057-2013-PA/TC y del Expediente Nº 03238-2013-PA/TC** Que, el acceso al sector público se realiza en base a los méritos y capacidades de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades y cuya inobservancia constituye una infracción al interés público que impide la existencia de una relación válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que lo contravenga; no obstante, en el caso de autos ha quedado demostrado probatoriamente la existencia de proximidad entre la fecha en la que la demandante solicitó su inclusión en las Planillas de pago (dieciocho de octubre de dos mil dieciséis), a través del expediente Nº 02874-2016-0-2501-JR-LA-08, así como de la queja por parte de los trabajadores demandantes contra ESSALUD ante SUNAFIL a efecto que se verifique que los trabajadores destacados de la contratista SM Group SA no registraron asistencia desde de abril de 2017, para dicha empresa, advirtiéndose en el Acta de Infracción N°026-2017-SUNAFIL/IRE-AN-ZCHI (obrante a fojas novecientos diecisiete) notificada a la recurrente con fecha doce de abril de dos mil diecisiete, con la fecha de su despido de los trabajadores, Jim Jammil Bocanegra Sandoval (despedido el quince de abril de dos mil diecisiete), Rosa Amelia Ocharán Chauca y Humbertina Marisol Campoblanco Pinedo (despedidas el treinta de abril de dos mil diecisiete), configurándose así el despido nulo en la causal invocada por la demandante que es la prevista en el artículo 29 literal c) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, por presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. En efecto, si bien el acceso a la función pública de los trabajadores al sector público debe realizarse mediante concurso público y abierto, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Nº 28175, este supuesto de hecho no puede restringir los casos de reposición por nulidad de despido, como lo sucedido en el caso de autos, tal como fue determinado por las instancias de mérito, no resultando aplicable el precedente Vinculante del Caso Huatuco contenido en el Expediente Nro. 5057-2013-PA/TC, teniendo derecho a la reposición según lo establecido en la Casación Laboral Nº 12475-2914-Moquegua de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince. **Quinto. Respecto a los alcances de la reposición por despido nulo en el caso de autos** Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente Nº 02748-2021-PA/TC, de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, caso Meléndez Vega, que dispone la reposición temporal en la administración pública, bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 728, a una trabajadora con contrato a plazo indeterminado por desnaturalización de la contratación civil, que ha sido objeto de un despido nulo. Esta sentencia ostenta la calidad de doctrina jurisprudencial porque sienta un principio de interpretación general en la medida que determina una situación jurídica basada en valores constitucionales como son el derecho de acceso al empleo público que tiene como principio consustancial el mérito-, la carrera administrativa y la protección constitucional de los despidos lesivos de derechos fundamentales. **Sexto**. La referida sentencia, en puridad, constituye una delimitación del precedente vinculante Huatuco (Expediente Nº 05057-2013-PA/TC), similar a lo ocurrido en el caso Cruz Llanos (Expediente Nº 06681-2013-

PA/TC), sentencia en la que el Tribunal Constitucional excluye a los obreros municipales del ámbito de aplicación del precedente vinculante Huatuco. En efecto, en el Expediente Nº 02748-2021-PA/TC, caso Meléndez Vega, el Tribunal Constitucional ha desarrollado un supuesto de delimitación similar, porque en un caso de reposición por lesión de derechos fundamentales brinda tutela restitutoria frente al despido, por la lesión del derecho fundamental. Es decir, el Tribunal Constitucional nuevamente vuelve a hacer una labor delimitadora del precedente Huatuco porque establece que el empleado de la administración pública sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 728 sí tiene derecho a tutela restitutoria cuando el despido es nulo, ordenando su reposición. Sin embargo, atendiendo a los valores constitucionales que se encuentran detrás del acceso al empleo público, los que constituyen fundamentos del precedente vinculante Huatuco, en el caso Meléndez Vega, el máximo intérprete de la Constitución limita y condiciona el tiempo de permanencia del trabajador cuya reposición ordenó a la condición suspensiva de que la entidad correspondiente convoque a un concurso público para el puesto que desempeñaba. Así, en el fundamento 19 de la sentencia en mención se ha establecido: "En consecuencia, a fin de tutelar tanto los derechos laborales de los trabajadores como los requisitos del acceso al empleo público a plazo indeterminado, este Tribunal Constitucional concluye que cuando se despide a una trabajadora cuyo contrato ha sido desnaturalizado y se comprueba que existe nulidad en el despido, **se debe ordenar la reposición en forma temporal,** es decir, hasta que la entidad convoque a un concurso público de méritos para el puesto que desempeñaba, que ha de corresponder a una plaza vacante y presupuestada. En caso que la trabajadora no se presente al concurso o no lo apruebe, su contrato se extinguirá sin que tenga derecho al pago de indemnización. Durante el tiempo de la reincorporación temporal, como resulta obvio, quedan habilitadas las facultades disciplinarias del empleador, cuando compruebe faltas relacionadas con la conducta o capacidad de la trabajadora". **Sétimo.** Por las razones anteriores, el referido pronunciamiento tiene carácter vinculante tal como lo define el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, porque a partir de la solución de un caso concreto y a partir de coordenadas de estricta tesitura constitucional sienta una regla aplicable para el universo de trabajadores cuya esfera subjetiva corresponde al supuesto de reposición en el empleo por despido lesivo de derechos fundamentales con contrato desnaturalizado de un trabajador de la administración pública sujeto al régimen laboral privado. Teniendo en cuenta lo antes señalado, en el presente caso, corresponde disponer la reposición de la demandante, con contrato de trabajo a plazo indeterminado en el régimen del Decreto Legislativo Nº 728, en la medida que se ha configurado un supuesto de despido nulo. Sin embargo, atendiendo a que la demandante no ha ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, la reposición será temporal hasta que la entidad convoque a un concurso público de méritos para el puesto que desempeñaba, que ha de corresponder a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. El contrato de trabajo se extinguiría si la trabajadora no se presenta al concurso o no resultase ganadora. **Octavo.** Finalmente respecto al apartamiento del precedente contenido en el Expediente Nº 03238-2013-PA/TC, el mismo que se encuentra referido a infringir el artículo 413º del Código Procesal Civil, que dispone que los Gobiernos Locales y Regionales, así como los demás Poderes del Estado, están exentos de la condena de costas y costos procesales, se indica que se debe indicar que lo señalado por la parte recurrente sobre la exoneración de costos procesales, carece de incidencia sobre la decisión impugnada, por cuanto la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que: "En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos". En consecuencia, no cumple con describir de manera clara y precisa la incidencia directa sobre la decisión impugnada, incumpliendo el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. en ese sentido, se señala que la presente casual deviene en **infundada**. **Noveno. Infracción normativa del artículo 3 de la Ley Nº 27626 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores;** El texto de la citada norma legal, establece lo siguiente: **Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral** La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. […] **Décimo.** La recurrente, para sustentar la causal declarada procedente, alegó que la Sala Superior no toma en cuenta que los únicos supuestos de desnaturalización de la intermediación laboral son la temporalidad, complementariedad o especialización conforme al artículo 3° de la Ley Nº 27626; y se ha considerado también erróneamente que está probada la desnaturalización de los contratos de intermediación laboral sin tener en cuenta que la infracción de los supuestos deben estar debidamente comprobados en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, lo que no existe ni se ha probado su existencia, ni actuado como prueba. Se encuentra acreditado en autos que los demandantes Jim Jammil Bocanegra Sandoval, Rosa Amelia Ocharan Chauca, Humbertina Marisol Campoblanco Pinedo, Noelia Sánchez Sánchez vienen laborando para la recurrente, desde el tres de agosto de dos mil nueve, mientras que Doris Margot Villar Caballero desde el primero de diciembre de dos mil nueve, como personal destacado al servicio del Módulo de Admisión de la Red Asistencial de Ancash **Décimo primero. Respecto al artículo 3° de la Ley Nº 27626** Como se ha señalado precedentemente, el primer párrafo del texto normativo de la norma en mención señala que la intermediación laboral se produce cuando se presentan los supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Sin embargo, en el presente caso, se debe considerar que existe un expediente judicial anterior, signado con el expediente N°02874-2016-0-2501-JR-LA-08, en el cual los demandantes solicitan la inclusión al libro de planillas sobre la base que cuentan con un contrato de trabajo de naturaleza permanente y bajo los alcances del régimen laboral de la actividad privada, encontrándose dicho proceso en la Corte Suprema de Justicia de la República en vía de casación, habiéndose establecido en las sentencias de primera y segunda instancia que existe un vínculo laboral directo con ESSALUD, por lo que no se configura los supuestos esgrimidos en el primer párrafo del mencionado artículo 3° de la Ley Nº 27626, pero si se configura el supuesto de hecho establecido en el segundo párrafo de dicha norma legal, en el sentido de que como se ha señalado las actoras ejercen función permanente en el Seguro Social de Salud. En consecuencia, la Sala Superior no ha incurrido en una interpretación errónea del artículo 3 de la Ley Nº 27626, razones por las cuales, la causal denunciada deviene en **infundada.** Por estas consideraciones, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, **HA RESUELTO:** Declarar **INFUNDADO** el Recurso de Casación interpuesto por la codemandada, **Seguro Social de Salud ESSALUD**. En consecuencia, **NO CASAR** la Sentencia de Vista de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho. **DISPONER** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley, en los seguidos por Jim Jammil Bocanegra Sandoval y otras contra el Seguro Social de Salud – Essalud y otros sobre Nulidad de Despido y otros, y los devolvieron. **Ponente, señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

1 **Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional**:
(…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

2 **Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:**
(…)
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

3 **Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso**:
(…)
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable.
(…)

4 **Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-** Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

C-2246709-41

CASACIÓN Nº 7495-2022 LIMA NORTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Carabayllo**, contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declara **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, pagar la suma de **S/2,651.00** por concepto de gratificaciones legales y asignación familiar, más intereses legales; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo (en adelante LPT). **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, el cual contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 048-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/430.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/43,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones, asignación familiar y escolaridad; las mismas que han sido acogidas, en parte, por las instancias de mérito en el monto total de S/2,651.00. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que se declare la **desnaturalización de los contratos de locación servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los contratos de locación servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación Nº 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de locación servicios solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los contratos como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los contratos tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de contratos constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas

de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los contratos es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Carabayllo**, contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Orlando Enrique Altamirano Quispe contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 05 de febrero de 2020.

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-42

CASACIÓN Nº 7816-2022 ICA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada**, Municipalidad Distrital de los Aquijes**; contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y entre otros, **ordena** a pagar la suma de S/405.70 por bonificación por escolaridad. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre una pretensión cuantificable, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de la bonificación por escolaridad, la misma que ha sido acogida por la instancia de mérito en el monto total de S/405.70. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de los contratos administrativos solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista

la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada**, Municipalidad Distrital de los Aquijes**; contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Víctor Hugo Pasache Ramos contra la Municipalidad Distrital de los Aquijes, sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y los devolvieron**. Ponente señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-43

CASACIÓN Nº 7909-2019 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

SUMILLA. El acuerdo individual entre el trabajador y el empleador, celebrado conforme a la Ley Nº 9463, mediante el cual se establece un nuevo básico vía reestructuración de la remuneración histórica, es válido en tanto no contravenga el orden público laboral (derecho a la remuneración mínima) y tiene como propósito evitar que cualquier discordancia posterior pueda abrir una discusión sobre el cálculo del nuevo básico pactado individualmente.

Lima, trece de octubre de dos mil veintidós.-

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número siete mil novecientos nueve dos mil diecinueve Lima, llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** Se trata del recurso de casación interpuesto por la

parte demandada **Banco de la Nación**, contra la sentencia de vista de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, que resuelve **confirmar** la sentencia de primera instancia de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, que declara fundada la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada cumpla con abonar a favor del accionante la suma de S/59,724.44 por reintegro de las cinco gratificaciones anuales pos incidencia de la productividad gerencial, reintegro de gratificaciones por incidencia del D.S Nº 010-2022-EF, reintegro de remuneraciones por efecto del promedio de las remuneraciones, reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por reintegro de la remuneración básica, más intereses legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia; más costos. **II. CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO** Por resolución suprema de fecha veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto, por las siguientes causales: **1) Infracción normativa material por aplicación indebida del artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR y; el artículo 9 del Decreto Legislativo número 650 aprobado por el Decreto Supremo número 001-97-TR. 2) Infracción normativa de carácter procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú** (De forma Excepcional) **III. ANTECEDENTES DEL CASO RELEVANTES PARA LA CUESTIÓN JURÍDICA A DILUCIDAR POR ESTA SALA SUPREMA 3.1 Mediante escrito de demanda** de fecha 18 de agosto de 2016, el demandante **Ricardo Norberto Bilbao Mansilla**, interpone demanda de reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la productividad gerencial y otros contra el Banco de la Nación, exponiendo en su escrito de demanda y confrontación de posiciones, los siguientes fundamentos: **a.** Siguió un proceso judicial anterior por reintegro de gratificaciones por incidencia de la Bonificación por Productividad Gerencial hasta diciembre de 2001, conforme a los pronunciamientos que se acompañan, en los cuales ya se reconoció el carácter remunerativo de la productividad gerencial, por lo que en este proceso se pretende la extensión desde el 2002 hasta el 2005. **b.** En relación al reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones y escolaridad desde el 2002 hasta el 2005, por la incidencia de la suma de S/164.00 y S/174.00, también este petitorio se sustenta en que estos montos fueron percibidos por el actor de manera mensual y consecutiva desde enero de 2002 a julio 2005; y que formaron parte de la remuneración ordinaria mensual; no obstante, el Banco no los consideró en el pago de las gratificaciones de vacaciones y escolaridad. **c.** En relación al reintegro de la remuneración básica por el incremento diminuto del catorceavo de las gratificaciones vacacionales y la escolaridad desde enero 2006 y su incidencia en las gratificaciones y CTS se sustenta en que en el año 2005, firmaron un Convenio de Modificación de Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura remuneración, con fecha 30 de junio de 2005; en dicho documento se pactó que el catorceavo de esas tres gratificaciones se calcularía en base a los montos fijos y permanentes percibidos al 30 de junio de 2005; parte de esos montos fijos y permanentes lo constituía el monto de la productividad gerencial y los montos de S/164.00 y S/17400; el Banco al calcular ese catorceavo excluyó de la base de cálculo a esos tres conceptos. **3.2 Mediante sentencia de primera instancia,** el A quo **declara fundada la demanda**. Ordena a la demandada cumpla con abonar a favor del accionante la suma de S/59,724.44 (cincuenta y nueve mil setecientos veinticuatro con 44/100 soles) por el reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la productividad gerencial reintegro de gratificaciones por incidencia del D.S Nº 010-2002-EF, reintegro de remuneraciones por efecto del promedio de 14 remuneraciones, reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por reintegro de la remuneración básica, más intereses legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia. Condena a la demandada al pago de costos del proceso, sin costas procesales. **3.3 Mediante sentencia de vista,** el Ad quem **confirma** la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, e impone a la demandada el pago por costos procesales por ambas instancias en el monto del 20% de la deuda total (incluyendo intereses legales). Faculta a la demandada a realizar las deducciones o retenciones conforme a lo estipulado en la presente sentencia. **IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA CONSIDERANDO: PRIMERO. Respecto a la infracción normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, por afectación al derecho a la motivación de las resoluciones** Corresponde a esta Sala Suprema, emitir pronunciamiento respecto a la causal procesal (introducida de manera excepcional) de **infracción normativa del inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,** es decir, establecer si con la expedición de la sentencia de vista, la Sala Superior ha afectado el derecho fundamental a la debida motivación de resoluciones judiciales, pues de ser amparada carecerá de objeto que esta Sala Suprema se pronuncie sobre las otras causales invocadas. **SEGUNDO.** Respecto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 01480-2006-AA/TC, ha señalado: "(…) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada (…) Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos" (Fundamento jurídico 2). De la revisión de la sentencia de vista, no se advierte ninguna afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que el Ad quem ha expresado las razones que sustentan su decisión de confirmar la sentencia que declara fundada la demanda, en tanto ha expresado las razones fácticas y jurídicas. Es decir, la Sala Superior ha cumplido con la garantía de la motivación, componente esencial del debido proceso, en tanto ha justificado adecuadamente cada una de las premisas que componen el silogismo jurídico a través del cual arribó a la decisión impugnada. Razón por la cual, la sentencia de vista cumple la protección y la exigencia constitucional que radica en que los justiciables tengan la garantía de que al defenderse lo hagan adecuadamente sin que exista algún acto que pueda afectarlos; en consecuencia, **esta causal declarada procedente deviene en infundada. TERCERO. Respecto a la infracción normativa de por aplicación indebida del artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR; y el artículo 9 del Decreto Legislativo número 650, aprobado por el Decreto Supremo número 001-97-TR. Sobre la protección constitucional de la remuneración** El contrato de trabajo tiene como uno de sus componentes esenciales la remuneración, conforme establece el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR (en adelante LPCL). La remuneración, como componente esencial del contrato de trabajo, tiene protección constitucional en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, mediante el cual se garantiza no solo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente, sino también el derecho a una remuneración mínima y a una atención prioritaria en el pago, al reconocerle el primer orden de prelación entre las obligaciones del empleador. La protección de la remuneración como derecho humano también lo encontramos en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 7 de Protocolo de San Salvador. **CUARTO. Sobre la presunción de salariedad de la remuneración** El artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, adelante LPCL, regula una presunción de salariedad en virtud al cual se considera remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Así, la norma en cuestión establece: "**Artículo 6.-** Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa". Es decir, en virtud a lo dispuesto en el artículo 6 de la LPCL se presume remuneración el íntegro de lo que el trabajador perciba por sus servicios, siempre que sea de su libre disposición, siendo irrelevante la forma de otorgamiento y la denominación del concepto. **Sobre la presunción de salariedad, el profesor Manuel Palomeque,** refiere: "El principio de presunción de salario debe ser estudiado desde la perspectiva de considerar salario a toda la retribución del trabajador que tenga el carácter de continuidad y predeterminación; tal principio supone una presunción iuris tantum de que todo lo que recibe el trabajador de la empresa le es debido en el concepto amplio de salario, con todas las

importantes consecuencias que tal exclusión comporta, "debiendo solo juzgar las excepciones legales cuando su existencia quede probada" (STS 25-10-1998, A. 8152)"[1] **QUINTO. Sobre la remuneración computable para los beneficios sociales** Sobre la remuneración computable para los beneficios sociales, el artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, en adelante LCTS, prescribe: **"Artículo 9.-** Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos contemplados en los artículos 19 y 20". Nótese que, para el cálculo de los beneficios sociales constituye remuneración computable el íntegro de lo que perciba el trabajador por sus servicios, siempre que se perciba de forma regular y sea de libre disposición del trabajador, siendo irrelevante –nuevamente- la denominación del concepto. **SEXTO.** Queda claro, por tanto, que para calificar a un concepto como uno de carácter remunerativo es irrelevante la denominación que le asigne el empleador, la ley o el convenio colectivo, pues se considerará remuneración si el concepto es percibido –en dinero o en especie- por sus servicios, esto es, como contraprestación de su labor, siempre que sea de su libre disposición. Estos son, en esencia, los únicos requisitos para considerar a un concepto como remunerativo. **SÉTIMO.** La regularidad en la percepción del concepto remunerativo al que hace referencia el artículo 9 de la LCTS constituye, en puridad, un elemento para determinar qué conceptos remunerativos integran la base de cálculo o remuneración computable de los beneficios sociales, mas no es un requisito para calificar a un determinado concepto como uno de carácter remunerativo. En efecto, un concepto es regular cuando es percibido habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos, conforme establece el primer párrafo del artículo 16 de la LCTS. Sin embargo, que sea regular no significa necesariamente que sea remunerativo, pues hay conceptos regulares que tienen naturaleza remunerativa y otros que, pese a percibirse habitualmente, no tienen tal naturaleza, como ocurre, por ejemplo, con los montos otorgados por movilidad condicionado a la asistencia de trabajo, siempre que cumpla con los requisitos de ley. Esta precisión es importante porque constituye un error asociar la regularidad a la naturaleza remunerativa de un concepto. **OCTAVO. Sobre los conceptos excluidos de la base de cálculo de los beneficios sociales.** Según el artículo 7 de la LPCL, no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del TUO del Decreto Legislativo Nº 650. Así, los artículos 19 y 20 de la LCTS que regulan cuáles son los conceptos que no se consideran remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales, establecen: **"Artículo 19.-** No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego; b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa; c) El costo o valor de las condiciones de trabajo; d) La canasta de Navidad o similares; e) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados; f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada; g) Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva; h) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia; i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador; j) La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente, o cuando se derive de mandato legal". **"Artículo 20.-** Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios, o cuando se derive de mandato legal". Adviértase, de la norma glosada, que los conceptos no remunerativos se rigen por el principio de causalidad, en la medida que para calificar como tal deben cumplirse los presupuestos o requisitos establecidos en el artículo 19 y 20 de la LCTS; por tanto, si el concepto no cumple los requisitos establecidos en la norma en mención, se considerará como uno de carácter remunerativo. Esto es, pues, una manifestación de la presunción de salariedad del artículo 6 de la LPCL. **NOVENO.** Por lo tanto, **sobre la base de la presunción de salariedad,** se presume que el íntegro de los ingresos del trabajador son percibidos por sus servicios y son de su libre disposición, independientemente de la forma de su otorgamiento y de la denominación que le asigne el empleador, la ley o el convenio colectivo; es decir, sobre la base de la presunción de salariedad, se presume que el íntegro de los ingresos del trabajador es remuneración, salvo prueba en contrario. Esta prueba en contrario lo constituye la acreditación de la configuración de los supuestos de exclusión regulados en el artículo 19 y 20 de la LCTS, por expresa remisión del artículo 7 de la LPCL. **DÉCIMO. En cuanto a la naturaleza remunerativa de la productividad gerencial.** En relación a la productividad gerencial, las instancias de mérito han concluido que se encuentra acreditado: - Por resolución suprema Nº 104-94-EF, se aprueba la política remunerativa del Banco de la Nación y se estableció en el artículo 2 el otorgamiento de una Asignación Extraordinaria de Productividad, haciendo hincapié que no es computable ni base de cálculo para ningún tipo de remuneración, pensión o beneficio. - Por Resolución Suprema Nº 121-95-EF se autorizó el otorgamiento de una bonificación por productividad previa evaluación específica y personal de cada trabajador, en función al trabajo efectivo realizado. En dicha resolución se establece que se trata de un pago extraordinario, de carácter excepcional, condicionado, eventual y aleatorio, no computable para ninguna remuneración o beneficio. - Por Resolución Suprema Nº 009-97-EF, se autorizó otorgar una bonificación por productividad bajo los mismos requisitos y condiciones previstas por la Resolución Suprema Nº 121-95-EF. - Por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 047-2003/DE-FONAFE, se estableció como conceptos remunerativos tanto a la productividad gerencial y a la productividad por convenio (sindical), desde diciembre de 2003. - La productividad gerencial, desde el año 2000, ha sido otorgado de forma mensual, continua y periódica, bajo diversas denominaciones como "Abono por regularizar A", "préstamo A", "concepto no remunerativo a", "concepto variable I", "ingreso no remunerativo". - La productividad gerencial tiene carácter contraprestativo, en tanto estuvo condicionado a la prestación de servicios. Por lo que, siendo ello así, **es correcta la estimación que hacen las instancias respecto de los extremos: 1)** reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por "productividad gerencial" periodo 2002 al 2005 al considerar el carácter remunerativo de dicho concepto (máxime si en un proceso judicial anterior sobre reintegro de gratificaciones por incidencia de la Bonificación por Productividad Gerencial hasta diciembre de 2001, se reconoció el carácter remunerativo de dicha productividad gerencial). **2)** Reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones (02) y gratificación por escolaridad (1), como consecuencia, de no haber incluido en la remuneración mensual ordinaria los importes de S/164.00 y S/174.00, desde el año 2002 hasta 2005 siendo que también estos conceptos fueron considerados por las instancias con las características propias que posee la remuneración, debiendo estos conceptos ser considerados como de carácter remunerativo. Por lo que, no se advierte la infracción normativa material **del artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR y; el artículo 9 del Decreto Legislativo número 650 aprobado por el Decreto Supremo número 001-97-TR,** en lo que a estos extremos se refiere **DÉCIMO PRIMERO.** Sin embargo, analizando además la causal de infracción normativa **del artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR y; el artículo 9 del Decreto Legislativo número 650 aprobado por el Decreto Supremo número 001-97-TR,** en lo referido al extremo estimatorio de: "El reintegro de la remuneración básica por el incremento

diminuto del catorceavo de las gratificaciones por vacaciones (2) y escolaridad (1) desde enero del año 2006 y su incidencia en las gratificaciones y CTS; Aquí resulta necesario realizar el análisis de los alcances del acuerdo individual, celebrado el 30 de junio de 2005, el cual se celebró con el objeto de, ampliar la jornada de trabajo (cláusula tercera), incrementar la remuneración como consecuencia del incremento de la jornada de trabajo (cláusula cuarta) y reestructurar la remuneración (cláusula quinta). Es más, en la cláusula sétima se estableció que el sustento legal del convenio es el artículo único de la Ley Nº 9463. **DÉCIMO SEGUNDO.** Adviértase, lo que fue objeto del acuerdo es una nueva estructura remunerativa, fijándose inclusive la nueva remuneración que iba a percibir el trabajador desde julio de 2005 y desde enero de 2006 en adelante, acuerdo que no puede ser desconocido por las partes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1361 del Código Civil. Dentro de ese contexto, es de precisar que, resulta necesario revocar el extremo de la sentencia apelada que confirma lo reseñado por el Juez, esto es: cuando señala que: "de la nueva estructura remunerativa que se encuentra consignado en el Convenio de Modificación de la Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura Remunerativa, el promedio de la tres gratificaciones (dos gratificaciones vacacionales y una gratificación de escolaridad), debe ser prorrateado en 14 pagos anuales; y del acotado documento, se desprende que la demandada ha consignado el monto de S/257.29, sin embargo, el promedio de estos montos es de S/524.05". Agregando que: " efectivamente la demandada, al promediar estas tres gratificaciones no consideró los montos de S/ 164.00 y S/ 174.00, así como la productividad mensual S/906.90, la cual se le otorgó por decisión propia del Banco la calidad remunerativa, y ella debía ser aplicado a partir de la vigencia de la nueva estructura remunerativa, esto es, a partir de enero de 2006; por lo tanto, al no ser incluidos estos montos para promediar las tres gratificaciones, corresponde su reintegro de su remuneración en la suma de S/266.76 mensuales". Argumentos éstos que le sirvieron al Juez (confirmado por la Sala de vista) para arribar a la conclusión de estimar el reintegro de la remuneración básica por el incremento diminuto del catorceavo de las gratificaciones por vacaciones (2) y escolaridad (1) desde enero 2006 y su incidencia en las gratificaciones y CTS; sin embargo, las instancias no advierten que el convenio individual de fecha 30 de junio de 2005 tiene por objeto producir una novación del básico (nueva estructura remunerativa). Esa es la naturaleza del referido acuerdo. Es más, en una de sus cláusulas se establece que la base legal del acuerdo es la Ley Nº 9463, esto significa que, aun cuando podría haber un acto de disposición del trabajador al momento de reestructurar la nueva remuneración básica, ello es absolutamente válido, por tratarse de un acuerdo individual sin afectación al orden público laboral. **DÉCIMO TERCERO.** La existencia de un reconocimiento del carácter remunerativo de la Productividad Gerencial hasta el año 2011 (en un proceso judicial previo) y en este proceso desde el año 2002 hasta el año 2005, no justifica la realización de un recálculo del básico vigente desde julio de 2005, pues con la celebración del Convenio, el nuevo básico es producto de la voluntad individual de las partes y tiene sustento legal en la Ley Nº 9463. Y en efecto, no es posible un recálculo del básico acordado en el convenio del 30 de junio de 2005, pues el convenio individual de reestructuración del básico tiene una finalidad ordenadora y pacificadora, pues más allá de los datos históricos de la remuneración del trabajador, lo que busca es establecer vía acuerdo individual una nueva remuneración básica. **DÉCIMO CUARTO.** El acuerdo individual de fecha 30 de junio de 2005 desde su ontología, ratio y finalidad es absolutamente autónomo a la sentencia que reconoce naturaleza remunerativa a la productividad gerencial, en tanto el referido acuerdo se ha celebrado en el marco de la autonomía individual de las partes y con la garantía de la Ley Nº 9463. Esta norma no solo permite la rebaja de remuneraciones con autorización del trabajador, siempre que no sea inferior a la remuneración mínima vital, sino que, ante un acuerdo de reestructuración de remuneraciones, tiene como propósito evitar que cualquier discordancia posterior pueda abrir otra vez un debate sobre la forma de cálculo de la nueva remuneración pactada en convenio individual, que es precisamente lo que el trabajador pretende en este proceso. **DECÍMO QUINTO.** En suma, el acuerdo individual entre el trabajador y el empleador, celebrado conforme a la Ley Nº 9463, mediante el cual se establece un nuevo básico vía reestructuración de la remuneración histórica, es válido en tanto no contravenga el orden público laboral (derecho a la remuneración mínima) y tiene como propósito evitar que cualquier discordancia posterior pueda abrir una discusión sobre el cálculo del nuevo básico pactado individualmente. **DÉCIMO SEXTO.** Por las razones expuestas, **el recurso de casación interpuesto por la parte demandada deviene, en INFUNDADO** respecto de los extremos que estiman: **1) El reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por "productividad gerencial" periodo 2002 al 2005 al considerar el carácter remunerativo de dicho concepto. 2) El reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones (02) y gratificación por escolaridad (1), como consecuencia, de no haber incluido en la remuneración mensual ordinaria los importes de S/164.00 y S/174.00 desde el año 2002 hasta 2005. De otro lado, el propio recurso de casación que nos ocupa deviene en FUNDADO** respecto del extremo estimatorio por parte de las instancias de: **El reintegro de la remuneración básica por el incremento diminuto del catorceavo de las gratificaciones por vacaciones (2) y escolaridad (1) desde enero 2006 y su incidencia en las gratificaciones y CTS,** el cual debe ser revocado por esta Sala Suprema, debiendo efectuarse en ejecución de sentencia el descuento de lo reconocido en cuanto a este extremo se refiere. **VI. DECISIÓN** Por estas consideraciones, declararon: **1. INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Banco de la Nación**, contra la sentencia de vista de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, que resuelve **confirmar** la sentencia apelada **respecto de los extremos que dispone**: "1) El reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por "productividad gerencial" periodo 2002 al 2005 al considerar el carácter remunerativo de dicho concepto. 2) El reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones (02) y gratificación por escolaridad (1), como consecuencia, de no haber incluido en la remuneración mensual ordinaria los importes de S/164.00 y S/174.00 desde el 2002 hasta 2005". **2.** Asimismo, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Banco de la Nación**; en consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, **"sólo" respecto del extremo que resuelve:** "confirmar el reintegro de la remuneración básica por el incremento diminuto del catorceavo de las gratificaciones por vacaciones (2) y escolaridad (1) desde enero 2006 y su incidencia en las gratificaciones y CTS"; **y actuando en sede de instancia revocaron** dicho extremo y **reformándolo** lo declararon **infundado,** conforme a los argumentos esbozados a partir del considerando décimo primero. **3. DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Ricardo Norberto Bilbao Mansilla contra el Banco de la Nación sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA.**

---

[1] PALOMEQUE, Manuel y ÁLVAREZ, Manuel. Derecho del Trabajo. Editorial Universitaria Ramón Areces. Décimo sétima edición. Madrid, julio 2009, p. 662.

C-2246709-44

CASACIÓN LABORAL Nº 8689-2021 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO LABORAL, LEY Nº 29497-LPT

Lima, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO** de fecha once de enero de dos mil veintiuno; contra la **Sentencia de Vista** de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte; expedida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; que resuelve **CONFIRMAR** la **Sentencia Apelada** de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en resolvió "1. INFUNDADAS las excepciones de Prescripción Extintiva; Cosa Juzgada e Incompetencia. 2. FUNDADA EN PARTE la demanda. 3. ORDENO que la demandada abone a la actora la suma de CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES (S/. 120,000.00) por concepto de indemnización por daños y perjuicios lucro cesante; deviniendo en infundadas las pretensiones de remuneraciones impagas y beneficios sociales, incluyendo vacaciones truncas y daño moral; con el pago intereses legales, de costos del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia. 4. ORDENO que la demandada inscriba a la actora en el libro de planillas y boletas de pago con la fecha de ingreso desde el 01 de julio de 1995". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 36 de la Ley Nº 29497 – Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal

que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la demandante solicita: **a)** Cumpla con pagarle la suma de S/212,437.87, por concepto de indemnización por daños y perjuicios, **b)** por concepto de lucro cesante (remuneraciones dejadas de percibir y beneficios sociales la suma de S/135,459.80; **c)** Pago de daño moral por la suma de S/40,000.00 soles; **d)** Acumular el periodo vacacional trunco, por ocasión del despido; **e)** Registrar en planillas electrónica de trabajadores, así como boletas de pago, desde uno de julio de mil novecientos noventa y cinco; **f)** Intereses legales, costos y costas procesales **QUINTO**. – Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, se debe indicar que la parte recurrente si apeló, tal como se aprecia del escrito de apelación de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **ANULATORIO. SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, la siguiente: **1. Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 2. Indebida aplicación de costos procesales SEPTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **OCTAVO.** . Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** En cuanto a la causal contenida en el **numeral 1)**, la entidad recurrente no denuncia aspectos estrictamente procesales relacionados al debido proceso en cuanto a la motivación de la sentencia impugnada, sino que en el fondo cuestiona el criterio adoptado por la Sala Superior en la sentencia de vista respecto a la materia discutida (indemnización por daños y perjuicios y registro en las planillas de pago su fecha de ingreso inicial), circunstancia que no se subsume en la causal denunciada. Asimismo, se debe indicar que, al dar lectura a la sentencia de vista, expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, sino también con la correspondiente absolución de agravios expuestos por la recurrente en su recurso de apelación, lo cual, conjuntamente con la valoración de las pruebas esenciales determinaron confirmar la sentencia apelada. En mérito a lo expuesto, se desprende que el recurso de casación en este extremo no cumple con los requisitos de procedencia normados en los incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y precisa en qué consistiría efectivamente la infracción normativa invocada, ni haber demostrado su incidencia en la decisión impugnada; razones por las cuales la causal denuncian deviene en **improcedente**. **DECIMO.-** Sobre la causal prevista en el **numeral 2),** se advierte que el recurrente la denuncia de manera genérica, pues no precisa el artículo en el que sustenta la causal invocada, impidiendo así que este Colegiado Supremo pueda pronunciarse al respecto; en consecuencia, no se cumple con exponer con claridad y precisión la infracción normativa ni con demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada, conforme a las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, por lo que la causal invocada es **improcedente. DECIMO PRIMERO.** Sin perjuicio de lo expuesto, dentro de los argumentos del recurso de casación se indica que la decisión de la Sala Superior infracciona el inciso 13) del artículo 139 de la Constitución Política. Al respecto, se debe indicar que este extremo deviene en **improcedente** por cuanto, en primer lugar, no ha sido formulado como causal de casación en los términos establecidos por el artículo 34 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. En segundo lugar, lo que pretende la parte recurrente es que este Colegiado Supremo realice un examen de la conclusión arribada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, no se cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones normativas sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO** de fecha once de enero de dos mil veintiuno; contra la **Sentencia de Vista** de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte; expedida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Luz Margit Chiroque Villagómez contra la recurrente, sobre indemnización por daños y perjuicios; **y los devolvieron.** Ponente señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. S.S CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA.**C-2246709-45**

CASACIÓN Nº 10918-2022 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado**, Ministerio de Transportes y Comunicaciones**; contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y entre otros, **ordena** a pagar la suma de S/17,981.67 por los conceptos estimados en su parte considerativa. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el 05 de julio de 2021, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones

cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, vacaciones truncas, asignación familiar y escolaridad, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/17,981.67. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de

los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandado **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**; contra la sentencia de vista de fecha 13 de mayo de 2021;y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Mapy Mercedes Cortez Acosta contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros, sobre Desnaturalización de Contrato; y los devolvieron**. Ponente señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-46

CASACIÓN Nº 11413-2021 AREQUIPA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por la demandada **Martínez Contratistas e Ingeniería SA – Mceisa,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que **revocando** la sentencia de primera instancia; y **reformándola** declaró **fundada** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con cancelar a la actora la suma de S/ 28,349.06 por el concepto de indemnización por despido arbitrario; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 048-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 430.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 43,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago por indemnización por despido arbitrario; la misma que fue amparadas por sala de mérito en el monto total de S/ 28,349.06. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos modales para obra determinada o servicio específico**, sin tomar en consideración que las mismas constituyen situaciones fácticas, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque

se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013-Cusco** tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización o ineficacia de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia del contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por la demandada **Martínez Contratistas e Ingeniería SA – Mceisa,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Miguel Ignacio Sana Huamaní contra Martínez Contratistas e Ingeniería SA Mceisa, sobre desnaturalización de contratos; y los devolvieron. **Ponente, señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA,** VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 05 de febrero de 2020.

C-2246709-47

CASACIÓN LABORAL Nº 11518-2020 LA LIBERTAD

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

VISTO y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Pan American Silver Huaron Sociedad Anónima,** de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, de fojas quinientos cinco, contra la **Sentencia de Vista** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, de fojas cuatrocientos sesenta y cuatro, expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; que resuelve: **"CONFIRMA** la Sentencia (Resolución número Once), de fecha 28 de junio de 2018, obrante a folios 334-398, que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por FRANCISCO GERMAN NAUCA BENITES, contra COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA S.A. y PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A., sobre Pago y reintegro de Beneficios Sociales. REVOCARON el extremo que declaró infundada la demanda respecto al incremento FONAVI; y, REFORMANDOLA la declararon FUNDADA y, en consecuencia, ORDENARON que las codemandadas cumplan con cancelar en forma solidaria la suma MODIFICADA de S/ 196,365.62 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 62/100 SOLES) por los conceptos disgregados en el fundamento 20 de la presente. CONFIRMARON el extremo que ORDENÓ a la demandada Compañía Minera Quiruvilca S.A. otorgar el certificado de trabajo del actor, por el período del 27 de abril de 1992 al 07 de junio de 2014. Y en cuanto FIJA Honorarios profesionales en la suma de S/ 8.500.00, que debe ser pagado en forma solidaria por las codemandadas, más el 5% para el Colegio de Abogados de La Libertad. La confirman en lo demás que contiene y lo devuelven al juzgado de origen"; para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (lo que se advierte en el presente caso, ya que apeló la sentencia de primera instancia; por lo que, tal exigencia se cumple); debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio

es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, el actor solicita la desnaturalización de la tercerización, pago y/o reintegro de derechos colectivos, reintegro de gratificación de primero de mayo, reintegro de pasajes vacacionales, retorno vacacional, bonificación por asistencia, asignación escolar, asignación de útiles escolares, ayuda económica pan, bono subsuelo, bono guardia, bono leche, fonavi, incremento AFP, horas extras, domingos laborados, feriados laborados, pago y reintegro de gratificaciones legales, reintegro de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, certificado de trabajo, intereses legales y honorarios profesionales. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la cuestionó, conforme se aprecia del escrito de apelación presentado que corre a fojas cuatrocientos treinta y tres; por lo que esta exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente denuncia lo siguiente: **I. Infracción normativa por inaplicación del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; II. Infracción normativa por inaplicación del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 29497. III. Infracción normativa por inaplicación del artículo 1183 del Código Civil. IV. Infracción normativa por inaplicación del artículo 5 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución Superintendencia del Mercado de Valores 019-2015-SMV/01. V. Infracción por inaplicación del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 856. VI. Infracción normativa por inaplicación del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 856. SÉPTIMO.** Respecto a las causales denunciadas en los **ítems i)** y **ii),** debemos decir que la parte demandada no ha descrito en forma clara ni precisa las normas invocadas y tampoco ha demostrado adecuadamente la incidencia directa de las mismas sobre la decisión impugnada, ello de conformidad con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497; motivo por el cual estas causales devienen en **improcedentes. OCTAVO.** En cuanto a la causal contemplada en los **ítems iii)** corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, si bien el artículo de la norma invocada no ha sido considerado en la Sentencia de Vista, se debe señalar que pretende a través de sus argumentos que esta Sala Suprema revise nuevamente los hechos y pruebas aportados en el proceso, lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación. En consecuencia, no demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; requisito de procedencia contemplado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente. NOVENO.** Respecto de la causal denunciada en el **literal iv),** debemos decir que, si bien la parte recurrente ha cumplido con describir la norma que denuncia, no ha tenido en cuenta que la aplicación de la misma no resulta pertinente al caso de autos, pues la norma invocada materia de análisis obedece a otra materia distinta a la que regula el derecho laboral; motivo por el cual esta causal deviene en **improcedente. DÉCIMO.** Con relación a las causales denunciadas en los **literales v)** y **vi),** debemos decir que la parte impugnante no ha tenido en consideración que la convocatoria procesal a la parte demandada es por un caso de tercerización, materia distinta a la que regula la persecutoriedad; en tal sentido, las normas invocadas resultan impertinentes para ser analizadas en sede casatoria, deviniendo estas causales en **improcedentes. DÉCIMO PRIMERO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es **revocatorio**, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso, pues los requisitos a los que el mismo se sujeta son necesariamente concurrentes, lo que no se configura en el caso concreto. **DÉCIMO SEGUNDO.** Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente indicar que la insuficiente redacción de la fundamentación del recurso de casación, es de entera responsabilidad de la parte que lo interpone; lo que se sanciona con la improcedencia del recurso. Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Pan American Silver Huaron Sociedad Anónima,** mediante escrito presentado con fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, que corre a fojas quinientos cinco, contra la **Sentencia de Vista** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, de fojas cuatrocientos sesenta y cuatro, expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a Ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Francisco German Nauca Benites contra Pan American Silver Huaron Sociedad Anónima y otros, sobre desnaturalización de contrato; y los devolvieron. Integran esta Sala los Jueces Supremos Pinares Silva de Torre y Ato Alvarado por impedimento de los Jueces Supremos Castillo León y Ampudia Herrera, respectivamente; así como la Jueza Suprema Carlos Casas por licencia de la Jueza Suprema Cabello Matamala. Ponente señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S. S. VERA LAZO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO, **LEVANO VERGARA, CARLOS CASAS. C-2246709-48**

CASACIÓN LABORAL Nº 11568-2020 LIMA

Materia: PAGO DE BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y OTROS
PROCESO ORDINARIO NLPT
Sumilla. Bajo el contexto del control de convencionalidad, existe la obligación de aplicar el Convenio número 100 de la OIT cuyo artículo 1 literal a) ha definido que el término remuneración "comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último". Evaluando los actuados se verifica que, el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales son otorgados de forma permanente, fija, y de libre disposición para el trabajador como contraprestación por su labor desempeñada, quedando comprendido dentro de la expresión "remuneración" establecida en el convenio antes citado.

Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

VISTA; la causa once mil quinientos sesenta y ocho, guion dos mil veinte, **LIMA**, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO.** Se trata del recurso de casación interpuesto por el procurador público de la entidad demandada, **Poder Judicial**, mediante escrito presentado con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, obrante a fojas ciento cincuenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, expedida por la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia contenida en la resolución número dos, de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, obrante de folios setenta, que declaró fundada la demanda; en consecuencia: ordena a la demandada cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/ 38,877.27 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia del bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia de las asignaciones excepcionales, incidencia del bono jurisdiccional y de las asignaciones en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios – CTS, debiendo constituirse la emplazada como depositaria del monto de S/ 18,437.82 por compensación por tiempo de servicios, más los intereses financieros y legales, con lo demás que contiene; en los seguidos por Edgar Gilberto Rodríguez Guarniz contra el Poder Judicial. **II. CAUSALES DEL RECURSO.** Por resolución de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, por las siguientes causales: **i) Infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú ii) Infracción normativa procesal por interpretación errónea del artículo 81 del Código Procesal Constitucional. iii) Infracción normativa material del artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR y el inciso a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR. iv) Infracción normativa material de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el inciso a) del artículo 19 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.** Correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dichas causales. **III. CONSIDERANDO. PRIMERO. Antecedentes del caso a) Pretensión:** Conforme se advierte del escrito de demanda, el

accionante solicita se ordene el pago de la suma de S/ 15,132.00 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional por el periodo del 01 de mayo de 2010 hasta el 30 de abril de 2011 y del 01 de mayo del 2011 a noviembre de 2011; se ordene el reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y su incidencia en el pago de las gratificaciones legales por el periodo de julio del 2010 a diciembre del 2016, en la suma de S/ 11,900.00; se ordene el reconocimiento de la naturaleza remunerativa de las asignaciones excepcionales y su incidencia en el pago de gratificaciones legales, por el periodo de julio del 2010 a diciembre del 2016, en la suma de S/ 5,880.00; se ordene el reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y de las asignaciones excepcionales y su incidencia para el cálculo y pago de la compensación por tiempo de servicios, conforme a la Ley Nº 30408, debiéndose efectuar el depósito de la suma de S/ 24,597.42, más devengados y como pretensiones accesorias, se ordene el pago de las gratificaciones de julio y diciembre, incluyendo en la remuneración computable el bono por función jurisdiccional; se ordene el depósito de la compensación por tiempo de servicio conforme al Decreto Legislativo Nº 650 y su modificatoria la Ley Nº 30408, incluyendo dentro de la remuneración computable el concepto del bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales; se ordene el pago de intereses legales y costos del proceso, este último ascendente al 25 % de lo ordenado en sentencia. **b) Sentencia de primera instancia:** El juez del Trigésimo Noveno Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia emitida mediante resolución número dos de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordenó al demandado cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/ 38,877.27 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional, de las gratificaciones por incidencia del bono jurisdiccional, de las gratificaciones por incidencia de las asignaciones excepcionales, incidencia del bono jurisdiccional y de las asignaciones en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios – CTS, debiendo constituirse el emplazado como depositario del monto de S/ 18,437.82 por compensación por tiempo de servicios, más los intereses financieros y legales, con lo demás que contiene. Señalando el a quo que no se puede dejar de lado, el carácter remunerativo y alimentario que en la realidad ostenta tanto el bono por función jurisdiccional como las asignaciones excepcionales, al haber sido otorgados en forma mensual, permanente, de libre disposición, a pesar de que indique en su otorgamiento que no tienen naturaleza remunerativa en tanto que de acuerdo a la Constitución se debe hacer una interpretación de derechos con reconocimiento constitucional, con tendencia a una interpretación favorable y no restrictiva de derechos, en aplicación del principio pro homine; es por ello que corresponde determinar que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen el carácter remunerativo, debiendo tener incidencia tanto en las gratificaciones de julio y diciembre como en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, desde la fecha del otorgamiento de cada uno de estos conceptos y hasta la fecha de cese del actor. **c) Sentencia de segunda instancia.** La Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordenó al demandado cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/ 38,877.27 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia del bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia de las asignaciones excepcionales, incidencia del bono jurisdiccional y de las asignaciones en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, más los intereses financieros y legales, con lo demás que contiene. **SEGUNDO. Infracción normativa.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. La infracción normativa comprende la interpretación errónea, la aplicación indebida y la inaplicación de normas de derecho material, incluyendo otros tipos de normas como son las de carácter adjetivo. **TERCERO. Delimitación del objeto de pronunciamiento.** En el presente caso, se ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de infracción de normas de derecho material y procesal, teniendo en cuenta ello, resulta necesario comenzar por el análisis de la infracción normativa de naturaleza procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; y en caso sea desestimada esta causal, corresponderá analizar las causales de infracción normativa material. **CUARTO.** Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir sentencia, incurre en infracción normativa de la siguiente norma: **Inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú:** "**Artículo 139.-** Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) **3.** La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) **QUINTO.** Sobre el derecho al debido proceso el Tribunal Constitucional es uniforme al sostener que: "(…) 2. El artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigadora realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)."[1] **SEXTO. Respecto al derecho a una resolución debidamente motivada**. La cual se encuentra reconocida en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, corresponde precisar que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, y de hacerlo de manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, el Tribunal Constitucional, órgano de control de la Constitución, afirma en su sentencia del doce de setiembre de dos mil seis, expedida en el expediente número 4228-2005-PHC/TC (fundamento número uno), que el "contenido esencial" del derecho a la debida motivación de las resoluciones, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, "se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, **congruencia entre lo pedido y lo resuelto** y, por sí mismo, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión"; correspondiendo entonces a esta instancia revisora, verificar si la resolución venida en grado cumple con la motivación prevista en la citada norma constitucional y reúne así los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, por cuanto lo contrario constituye causal de nulidad como establece el artículo 171 del Código Procesal Civil. **SÉPTIMO. Pronunciamiento del caso concreto.** Conforme se advierte del escrito de demanda, la controversia se circunscribe en determinar si corresponde declarar la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales y como consecuencia de ello, el reintegro de las gratificaciones legales y compensación por tiempo de servicios. **OCTAVO.** Estando a lo expuesto precedentemente se colige que, la decisión adoptada por la instancia de mérito se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, por lo que no se advierte en la recurrida la presencia de vicio alguno que atente contra la citada garantía procesal constitucional, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por afectación al debido proceso o por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas por las partes y se ha cumplido con precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación y supuesta afectación al debido proceso. En tal sentido, el Colegiado Superior al resolver el presente proceso, no ha incurrido en infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; motivo por el cual, **la causal invocada deviene en infundada. NOVENO. Sobre las otras causales declaradas procedentes.** Habiéndose desestimado las causales procesales, corresponde a continuación evaluar las demás causales declaradas procedentes: **Sobre la infracción normativa contenida en el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR que establecen: Artículo 6.-** Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga,

siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto." **Inciso a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°001-97-TR Artículo 19.-** No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego. Antes de analizar el contenido de las infracciones normativas denunciadas las cuales versan sobre la determinación de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales, resulta pertinente revisar las posiciones asumidas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Así tenemos lo siguiente: **Posiciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema respecto al bono por función jurisdiccional, el bono fiscal, y el pago de las asignaciones excepcionales. DÉCIMO:** En principio cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, puso en conocimiento del Colegiado conformante de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, lo resuelto en la Sentencia del Pleno de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, resolución 410/2021 recaída en el expediente número 04495-2019-PA/TC, con motivo de los seguidos por el procurador del Ministerio Público contra la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, acción de amparo contra resolución judicial dictada en los seguidos por Irma Josefina Yabar Rayo sobre pago de bono por función fiscal, en donde se declara fundada la demanda de amparo y nula la resolución de fecha siete de setiembre del dos mil quince recaída en la casación número 1692-2015 LIMA**.** Y, como quiera que la referida sentencia se ocupa del bono otorgado por el Estado, resulta pertinente indicar que tanto el bono fiscal como el bono por función jurisdiccional poseen la misma naturaleza, por lo que resulta necesario analizar la sentencia en mención, que establece de forma expresa lo siguiente: "4. Conforme a las normas citadas, el Bono por Función Fiscal no tiene carácter pensionable ni remunerativo y se financia a través de los recursos ordinarios del Ministerio Público. No obstante, el Tribunal Constitucional observa que al expedirse la resolución casatoria cuestionada, de fecha 7 de septiembre de 2015, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió el recurso al margen de lo establecido por la normatividad mencionada y omitiendo los criterios expuestos por el Tribunal en relación con el carácter no pensionable ni remunerativo del Bono por Función Fiscal en las Sentencias 10714-2006-PC/TC, 05391-2006- PC/TC, 00442-2008-PC/TC, 04836-2008-PA/TC, 01713-2014-PC/TC, entre otras. (…) **10. De ahí que la decisión de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resulta inconstitucional por no haber tomado en cuenta la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional relativa al carácter no pensionable ni remunerativo del Bono por Función Fiscal y a que no debe ser incluido en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, tal como lo solicitara el Ministerio Público.** En tal sentido, la resolución suprema cuestionada, incurre en un déficit de motivación que afecta el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, por lo que corresponde estimar la demanda." (Negrita nuestra) En el mismo sentido, la sentencia recaída en el expediente número 02119-2017-PA/TC de fecha veintinueve de setiembre de dos mil veinte, declaró la nulidad de la casación 557-2012 LIMA, emitida el nueve de enero de dos mil catorce, que declaró infundado el recurso del Ministerio Público, disponiendo la inclusión del bono por función fiscal como base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios de los cesantes. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, considerando que los magistrados emplazados afectaron el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, uno de los fundamentos del Tribunal Constitucional es que en su vasta jurisprudencia ha establecido que el Decreto de Urgencia número 038-2000, publicado el siete de junio de dos mil, que aprobó el otorgamiento del bono por función fiscal, dispuso que este concepto no tiene carácter pensionable ni remunerativo, ni conforma la base para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios. (Véase expedientes números 04357-2011-AC/TC, 01713-2014-AC/TC, 04357-2011-AC/TC, entre otros). De la lectura minuciosa de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, y su aplicación al caso en concreto, se evidencia que sobre la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y el bono por función fiscal, hay dos posiciones jurisprudenciales que deben ser analizadas a fin establecer la que resulte razonable por buscar la tutela de los derechos de la persona humana y concretar el mandato del artículo 1 de la Constitución Política del Perú. **DÉCIMO PRIMERO. La primera posición jurisprudencial.** Es la del Tribunal Constitucional, que está expresada en sentencias emitidas en procesos de cumplimiento (ver SSTC 10094-2005-PC/TC, 7971-2006-PC/TC, 4384-2007-AC/TC, 5198-2008-PC/TC, 2807-2010-PC/TC y 0847-2012-PC/TC, entre otras). Ahora bien, en dichos procesos, los demandantes eran pensionistas que solicitaron como pretensión que en cumplimiento del acto administrativo que les otorgó su pensión de cesantía nivelada (Decreto Ley número 20530 – Ley número 23495) se le incluya en esta, el bono por función jurisdiccional que percibían cuando eran trabajadores. Sobre este tema, tenemos el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional, que se limita a verificar si el acto administrativo tiene virtualidad suficiente para ser un mandato, para lo que primero acude a la norma que otorga el bono por función fiscal que es el Decreto de Urgencia número 38-2000 cuyo artículo 1 dispone que: "El Bono por Función Fiscal no tendrá carácter pensionable ni remunerativo", para después argumentar que el Decreto de Urgencia número 114-2001: "establece implícitamente la equivalencia, dada su misma naturaleza, entre el bono por función fiscal y el bono por función jurisdiccional para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público" y sobre dicha base concluir que "los bonos por función jurisdiccional no son de carácter remunerativos ni pensionable y son financiados por los recursos administrados por el Poder Judicial" (STC 10094-2005-PC/TC, fundamentos 6 y 7). Es decir, bajo este criterio se niega el carácter remunerativo, y por ende, pensionable del bono fiscal y jurisdiccional. En estricto, el Tribunal Constitucional concluye que el bono por función jurisdiccional no tiene carácter remunerativo porque así lo señala el artículo 1 del Decreto de Urgencia número 038-2000, sobre el bono por función fiscal, sin desarrollar ningún otro argumento o razonamiento que justifique su decisión. **DÉCIMO SEGUNDO.** Además, debe subrayarse el contexto procesal de las decisiones del Tribunal Constitucional en relación a los procesos de cumplimiento emitidos, en atención que, por su naturaleza procedimental resultaba imposible discutir el carácter remunerativo del bono por función fiscal, habiéndose desestimado dichas demandas por no cumplir con el requisito legal del mandamus, es decir con el mandato claro de la ley o acto administrativo, y sin realizar un análisis de la verdadera naturaleza del bono por función fiscal, limitándose a citar normas legales, sin considerar aplicar el principio laboral de primacía de la realidad, mediante el cual se hubiese determinado su real naturaleza remunerativo o no. Asimismo, en estos pronunciamientos solo se dilucida si el bono por función fiscal era pensionable, aplicando por extensión el artículo 1 del Decreto de Urgencia número 38-2000, en la medida que el Decreto de Urgencia número 114-2001 no establece que el bono por función jurisdiccional carecía de carácter pensionable y/o remunerativo, lo cual fue reconocido en la STC 10094-2005-PC/TC al sostener que ambos bonos implícitamente son equivalentes, y por ello, ante el vacío del Decreto de Urgencia número 114-2001, se extiende la restricción del bono por función fiscal al bono por función jurisdiccional. En ese sentido, debe resaltarse que el Decreto de Urgencia en mención, solo establece que los gastos operativos "no tienen carácter pensionable ni remunerativo", más no se ha establecido esta restricción al bono por función jurisdiccional, lo cual permite concluir que el legislador no tenía por finalidad limitar su carácter remunerativo. **DÉCIMO TERCERO. La segunda posición jurisprudencial.** Se encuentra plasmada en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral publicado en el diario oficial El Peruano el cuatro de julio de dos mil catorce que, en el Tema Nº 4, pregunta 4.2 acordó por unanimidad: "El Bono por función jurisdiccional y el Bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa, y como tal, son computables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, además de tener carácter de conceptos pensionables, específicamente para el caso de los jueces y fiscales" La motivación de este acuerdo es: El bono por función jurisdiccional y el bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa. El artículo 194 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial establece que la compensación por tiempo de servicios se calcula agregando a la remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma permanente, salvo las que tienen aplicación a un determinado gasto que no sea de libre disposición. El bono por función jurisdiccional y el bono por función fiscal se perciben de manera mensual, permanente y sobre un monto fijo, de manera que son computables para calcular la compensación por tiempo de servicios, conforme con el citado artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial teniendo además el carácter de pensionables. Igualmente, cabe resaltar que al amparo del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la casación laboral número 10277-2016-ICA de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, se estableció como "doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento" que: "El Bono por función jurisdiccional tiene naturaleza remunerativa, pues, se percibe de manera mensual, permanente y en un monto fijo, asimismo es de libre disposición para el trabajador, razón por la cual, debe ser considerado como base de cálculo de las gratificaciones de julio y diciembre y de la compensación por tiempo de servicios." En este punto, esta Corte Suprema determinó que el bono por función jurisdiccional, dado sus características, tiene naturaleza remunerativa. **Los derechos laborales y las remuneraciones en el derecho nacional, internacional y convencional. DÉCIMO CUARTO.** Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 24 establece: "El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)", en ese entendido todo trabajador, sin distinción, tendrá el derecho de percibir una retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, pues, tal derecho posee naturaleza alimentaria, y tiene una estrecha relación con el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la persona humana, al generar diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona. De esta manera, en función de este derecho fundamental, nadie se encontrará obligado a prestar servicios sin retribución o sin su libre consentimiento, pues la remuneración como tal constituye una contraprestación por las labores del trabajador, siendo de libre disposición, y con carácter claramente alimentario; su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, conforme al mandato reconocido en el artículo 23 y el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política del Perú. **DÉCIMO QUINTO.** Por otra parte, la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito de los derechos laborales, no se constriñe únicamente al texto constitucional formal, sino a una protección en sentido material, en tanto la norma fundamental y las disposiciones legales que se desarrollan directamente en el marco de las relaciones de trabajo, se integra con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, todo ello conforma el denominado **"bloque de constitucionalidad y convencionalidad"**. Estos últimos, se encuentran integrados en nuestro sistema jurídico positivo, en razón al artículo 55 de nuestra Constitución Política, donde se establece que: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". En este sentido, la remuneración ha sido objeto de reconocimiento como un derecho fundamental de la persona en diversos los instrumentos internacionales aprobados al respecto, algunos de los cuales, dada su importancia, mencionaremos en las líneas siguientes. **DÉCIMO SEXTO.** La Declaración Universal de Derechos Humanos, documento internacional que fue aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa número 13282, el nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reconoce que la remuneración constituye un derecho humano de segunda generación, denominado también derecho social, señalando las siguientes premisas: "(…) 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabajo tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (…)" Por su parte, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar remuneraciones en base a una equidad de obligaciones, en donde no se permita apreciar una diferencia de las mismas sin una causa justificada, en cuanto: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; (…)". En la Novena Conferencia Internacional Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, estableciendo en su artículo XIV, respecto al derecho al trabajo y una justa remuneración, lo siguiente: "Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia". Además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece en su artículo 7, referido a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, lo siguiente: "Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; (…)". Del análisis de los instrumentos internacionales reseñados, se verifica que existe consenso en cuanto al acatamiento por parte de los Estados miembros al respeto de la igualdad remunerativa, que se refleja en el derecho a una remuneración equitativa y suficiente, la cual se garantiza con el establecimiento de pisos mínimos de percepción remunerativa, esto es, con el establecimiento de una remuneración mínima. **DÉCIMO SEPTIMO.** A su vez, en el Convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), sobre igualdad de remuneraciones, aprobado por Resolución Legislativa número 13284 del quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, ratificado por nuestro país el uno de febrero mil novecientos sesenta, y aplicable por mandato de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, señala: "[…] **el término [remuneración] comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente**, al trabajador, en concepto del empleo de este último […]". (Lo resaltado es nuestro) De igual forma, a manera de referencia, el Convenio Nº 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección del salario (1949), si bien no ha sido ratificado por nuestro país, se asimila como doctrina, el cual, define el salario en los términos siguientes: "(...) el término **salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempnre que pueda evaluarse en efectivo,** fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". (El subrayado es nuestro) **DÉCIMO OCTAVO:** De todo ello, podemos conceptualizar a la remuneración, como todo pago en dinero y excepcionalmente en especie, que percibe el trabajador por los servicios efectivamente prestados al empleador, la misma que está constituida por la remuneración básica, así como las retribuciones complementarias o indirectas que le corresponde percibir por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. **DÉCIMO NOVENO.** Ahora bien, en relación a las infracciones normativas denunciadas el artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97- TR, y el literal a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR, hacen referencia al concepto de remuneración, básicamente considerando que es el monto íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, de forma periódica, en dinero o en especie, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que sea de su libre disposición y no se encuentre sujeto a rendición de cuentas. **VIGÉSIMO.** Asimismo, el propio Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución ha señalado en la sentencia recaída en el expediente número 0020-2012-P1/TC, respecto a los conceptos que integran la remuneración, lo siguiente: "En cuanto a los conceptos que conforman la remuneración, el artículo 1 del Convenio 100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de

Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el Perú, ha señalado que la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, reflejando una concepción totalizadora de la remuneración establecido en la Constitución". **VIGÉSIMO PRIMERO.** Desde otra perspectiva de análisis, se establece que las sentencias antes mencionadas emitidas por el Tribunal Constitucional que establecen que el bono por función fiscal y bono por función jurisdiccional no tendrían carácter pensionario ni remunerativo ni conformaría base para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, no poseen la calidad de precedente vinculante que obligue a los demás organismos jurisdiccionales a asumir dicha posición, así como tampoco, establecen principios y preceptos constitucionales, puesto que no están declarados en forma expresa e inequívoca en las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional. **VIGÉSIMO SEGUNDO. Solución al caso concreto.** Como se ha señalado de manera precedente, la controversia se delimita en determinar si el bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales tienen carácter remunerativo o no y si como consecuencia de ello corresponde ordenar los reintegros de beneficios sociales reclamados. Es así que absolviendo las infracciones normativas denunciadas por la parte recurrente en su recurso de casación, quien sostiene que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales no tienen naturaleza remunerativa, ello debido a que esos conceptos se han otorgado bajo el principio de legalidad, por lo que el determinar que tiene incidencia en beneficios sociales afecta gravemente el equilibrio presupuestal de la Nación. Ahora bien, se debe tener en cuenta al momento de analizar la Ley y las Resoluciones Administrativas referidas al bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales, la prohibición de que cualquier relación laboral limite el ejercicio de derechos constitucionales o desconozca o rebaje la dignidad del trabajador, así como el principio del in dubio pro operario que supone la obligación de que se realice la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, máxime si se tiene en cuenta que el bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales se otorga al personal en actividad que labora en el Poder Judicial para lograr un adecuado desarrollo de la posición funcional, profesional y otras variables inherentes a la función jurisdiccional a favor de magistrados, auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo. Igualmente, resulta pertinente señalar que el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, establece que: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales es un presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es, su connotación ética y axiológica en tanto manifiesta concreciones positivas del principio – derecho de dignidad humana, preexistentes al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado; conforme así lo estableció el Supremo Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente número 1417-2005-AA-TC. Estando a las consideraciones expuestas, y al haberse efectuado en el caso en concreto control de convencionalidad, permitido por las normas citadas en los considerandos precedentes, se ha podido determinar que si tiene naturaleza remunerativa el bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales por ende incidencia en el pago de beneficios sociales, aunado a ello este Supremo Tribunal considera que la sentencia de vista venida en casación ha sido emitida con arreglo a derecho, no advirtiéndose que el Colegiado Superior haya incurrido en infracción normativa de los artículos 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR y literal a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de compensación por tiempo de servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR, por lo que el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente **deviene en infundada. VIGÉSIMO TERCERO. Sobre la infracción normativa contenida en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional,** la citada norma prescribe lo siguiente: **Artículo 81 del Código Procesal Constitucional. Efectos de la Sentencia fundada. Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos.** Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia. Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas**. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano. VIGÉSIMO CUARTO.** Sostiene la institución recurrente en su recurso de casación, que la Resolución Administrativa número 305-2011-P/PJ de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once entro en vigencia y cobró todos sus efectos a partir el uno de septiembre de dos mil once y no en forma retroactiva como pretende la demandante y reconoce y liquida las instancias de mérito, desde el primero de mayo de dos mil diez. Agrega indicando que debe tenerse en cuenta que las sentencias fundadas recaídas en proceso de inconstitucionalidad (…) tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos, se publican íntegramente en el Diario Oficial "El Peruano" y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. Por lo que, no se puede argumentar que la aplicación de la última resolución del bono por función jurisdiccional tiene efectos retroactivos desde el veintinueve de febrero de dos mil ocho, ya que existe un principio denominado irretroactividad de todo proceso constitucional de acción de amparo. **VIGÉSIMO QUINTO.** En relación a ello, la Sala Superior confirmó la sentencia contenida en la resolución número dos, de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, obrante de folios setenta que declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordena al demandado cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/ 38,877.27 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia del bono jurisdiccional, reintegro de las gratificaciones por incidencia de las asignaciones excepcionales, incidencia del bono jurisdiccional y de las asignaciones en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios – CTS, debiendo constituirse la emplazada como depositaria y depositar por el concepto de compensación por tiempo de servicios, más los intereses financieros y legales, con lo demás que contiene. **VIGÉSIMO SEXTO.** Ahora bien, en relación a la Acción Popular iniciado por el Sindicato de Trabajadores en contra del demandado, resulta pertinente indicar que la Primera Sala Laboral Permanente de Lima, con fecha veinte de octubre del dos mil nueve, al resolver el expediente número 192-2008-AP, expidió sentencia declarando fundada la demanda interpuesta por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial, disponiendo la emisión de un nuevo Reglamento en sustitución del aprobado por Resolución Administrativa número 056-2008-P/PJ; señalando en el Décimo Tercer considerando de su sentencia, lo siguiente: "Que, el nuevo Reglamento de Bono por Función jurisdiccional y su anexo a expedirse por la demandada, conforme a lo dispuesto en la presente resolución, tendrá efecto retroactivo desde el 29 de febrero de 2008, fecha que tuvo la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 056-2008-P/PJ, que aprobaba el derogado reglamento y su anexo y que modificada desde ese momento lo establecido en la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 191-2006-P/PJ (…)". La citada Sentencia fue confirmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de fecha siete de octubre del dos mil diez. El Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial solicitó la corrección y la aclaración de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil diez en los siguientes términos: **"a)** Se declare la nulidad con efectos retroactivos de los artículos 4 y 5 del Reglamento para el otorgamiento del bono por función jurisdiccional para el personal del Poder Judicial y el anexo escala de bonificación por función jurisdiccional, respecto al tratamiento discriminatorio en perjuicio de los auxiliares jurisdiccionales; y **b)** Se ordene que se apruebe un nuevo reglamento y un nuevo anexo escala que lo regule para un tratamiento igualitario desde la fecha de aprobación del reglamento y anexo escala impugnados, hasta la fecha de entrada en vigencia de la supuesta nueva escala remunerativa aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la República**".** Dicho pedido fue resuelto por la propia Corte Suprema de Justicia, a través de la resolución de fecha veintinueve de marzo del dos mil once; señalando, en cuanto al pedido de corrección formulado de declarar la nulidad con efecto retroactivo de las normas impugnadas, en su Cuarto Considerando, que: "(…) el efecto de esta sentencia, acorde

con lo previsto en el artículo 81 del primer párrafo del Código Procesal Constitucional, aplicable a este proceso, por compartir la misma naturaleza de control normativo; establece necesariamente dejar sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian; esto es, la declaración de nulidad de la norma impugnada; por lo que, dada la previsión legal expresa antes referida, deviene en innecesaria la integración solicitada (…)". Se debe destacar que, en la parte resolutiva, se estableció lo siguiente: **"CONFIRMARON** la sentencia apelada de fojas doscientos veintisiete, su fecha veinte de octubre de dos mil nueve, que declara **FUNDADA** la demanda de Acción Popular; y la INTEGRARON declarando inconstitucional e ilegal el "Reglamento para el Otorgamiento de la Bonificación por función jurisdiccional para el personal del Poder Judicial" y el "Anexo Escala de Bonificación por Función Jurisdiccional" (…)". **SÉPTIMO.** Al respecto, debe tenerse en cuenta que, actualmente, existe reiterada jurisprudencia, en la que se estima el pago del citado concepto; pues, como es de verse la Primera Sala Laboral Permanente de Lima, con fecha veinte de octubre del dos mil nueve, al resolver el Expediente número 192-2008-AP, expidió sentencia y, en su Décimo Tercer considerando, expresamente, estableció que el nuevo Reglamento del bono por función jurisdiccional y su anexo a expedirse por la demandada **tendría efecto retroactivo desde el veintinueve de febrero del dos mil ocho (fecha de la Resolución Administrativa número 056-2008-P/PJ)**. Cabe mencionar que si, en efecto, en el fallo emitido por la Corte Suprema, se denegó el pedido de integración solicitado por el Sindicato Unitario de Trabajadores, ello no enerva lo resuelto por la Primera Sala Laboral; pues, **en ningún momento revocó ningún extremo de la sentencia apelada, toda vez que la misma fue confirmada en todos sus extremos**. Es de precisarse que, por sentencia, sólo puede considerarse aquella resolución que emite el juzgador, siempre y cuando decida la cuestión principal en cuanto al fondo del caso planteado[2]; lo que no ocurrió en el caso de la aclaración solicitada por el Sindicato; por lo que, no podría modificar lo resuelto sobre su contenido. Debe entenderse entonces que, el considerando Décimo Tercero reconoce los efectos retroactivos del nuevo reglamento del bono por función jurisdiccional y su anexo, con autoridad de **cosa juzgada. VIGÉSIMO OCTAVO.** Por consiguiente, al expedirse la Resolución Administrativa número 305-2011-P/PJ, es totalmente válido concluir que, al no existir pronunciamiento en contrario de dicha decisión, corresponde reconocer los efectos retroactivos a la citada resolución conforme lo ha realizado el Colegiado Superior, motivos por los cuales este Supremo Tribunal considera que la sentencia de vista venida en casación ha sido emitida con arreglo a derecho, no advirtiéndose que el Colegiado Superior haya incurrido en infracción normativa del artículo 81 del Código Procesal Constitucional en concordancia con la Resolución Administrativa número 305-2011-P-PJ, por lo que el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente en este extremo **deviene en infundada.** VIGÉSIMO NOVENO. En cuanto a la Infracción normativa material de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el inciso a) del artículo 19 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Tercera Disposición Transitoria "TERCERA. En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se tomará en cuenta lo siguiente: a) El ingreso de personal sólo se efectúa cuando se cuenta con la plaza presupuestada. Las acciones que contravengan el presente numeral serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad que autorizó tales actos, así como de su Titular. b) Queda prohibida la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten al incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del Cuadro para Asignación de Personal CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal PAP. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente literal genera la nulidad de la acción de personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad, así como de su Titular. c) La planilla única de pago sólo puede ser afectada por los descuentos establecidos por Ley, por mandato judicial, y otros conceptos aceptados por el servidor o cesante y con visación del Director General de Administración o del que haga sus veces. d) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios. e) El pago del personal activo y cesante debe considerar únicamente a sus funcionarios, servidores así como a pensionistas registrados nominalmente en la Planilla Única de Pagos PUP. f) La incorporación paulatina en los Cuadros para Asignación de Personal CAP y/o en el Presupuesto Analítico de Personal PAP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de los trabajadores que vienen ejerciendo labores de carácter permanente y propio de la Entidad, bajo la modalidad de contratados o de servicios no personales." Asimismo, corresponde citar la siguiente disposición transitoria: "CUARTA.- Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público. 1. Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad". **Ley N°28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público**, señala: **"**Artículo 19. Actos o disposiciones administrativas de gasto. Los funcionarios de las entidades del Sector Público competentes para comprometer gastos deben observar, previo a la emisión del acto o disposición administrativa de gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria correspondiente. Caso contrario devienen en nulos de pleno derecho." **TRIGÉSIMO.** El sustento de la entidad demandada frente a las normas denunciadas, se orienta a señalar que el Poder Judicial es una institución pública, cuyo ámbito remunerativo se rige por el principio de legalidad presupuestal, por lo que no se encuentran sujetos a la libre actuación de sus funcionarios de turno, pues por el contrario debe ceñirse de modo estricto a disposiciones de carácter presupuestal. **TRIGÉSIMO PRIMERO:** Al respecto, la Ley Nº 28112, Ley de la administración Financiera del Sector Público, regula la prohibición de todo incremento remunerativo, es pertinente establecer que se trata de una norma que tiene por objeto restringir la capacidad de las diversas agencias gubernamentales, tales como el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y en general de cualquier órgano de la Administración Pública, entre ellos el Poder Judicial, de incrementar las remuneraciones de sus trabajadores, debiendo interpretarse que aquella regulación debe llevarse a cabo a través de las normas emitidas por la entidad competente del sector correspondiente y para regulación específica ello en correlato con los principios de Legalidad y Equilibrio Fiscal que se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política del Perú en sus artículos 77 y 78. **TRIGÉSIMO SEGUNDO.** A tenor de los artículos constitucionales citados, el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos y su proyecto debe estar indudablemente equilibrado y equitativo. El equilibrio fiscal es de interés público, por lo que debe ser tutelado por el Estado, quien tiene potestades regladas y no puede adoptar decisiones que no están formalmente estipuladas en la ley, por lo que sólo puede actuar y decidir siempre que exista norma que expresamente le permita conceder u otorgar beneficios al trabajador. Así, lo expuesto colisiona otro derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú en su artículo 24 que establece: "El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)". Y lo establecido el artículo 23 del mismo cuerpo constitucional que precisa que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador; en consecuencia, todo trabajador, sin distinción alguna, tendrá el derecho de percibir una retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, pues, tal derecho posee naturaleza alimentaria, y tiene una estrecha relación con el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la persona humana, al generar diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona. Aunado a ello, las normas de orden presupuestales no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo, pues entender lo contrario importaría vaciar de contenido a la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado que precisa que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En este escenario, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que, las rigurosas reglas presupuestarias, no constituye un motivo para la inobservancia de los derechos

laborales de todo trabajador. **TRIGÉSIMO TERCERO.** Aunado a ello, este Supremo Tribunal considera que la sentencia de vista venida en casación ha sido emitida con arreglo a derecho, no advirtiéndose que el Colegiado Superior haya incurrido en infracción normativa de las normas materiales citadas, por lo que el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente **deviene en infundada. TRIGÉSIMO CUARTO. Descuento social y presupuesto.** Es necesario establecer que, tratándose de una deuda social que la entidad demandada tiene con sus servidores, a efectos de que se concretice el pago de la misma, de una manera efectiva y responsable, y que no se afecten los presupuestos públicos y cargas sociales, la emplazada deberá presupuestar los abonos en el modo y forma de ley, así como efectuar los descuentos a que hubiere lugar en cada ocasión de pago a los trabajadores ya sean de índole laboral, tributario, seguridad social y los que correspondan. **IV. DECISIÓN:** Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido además por el artículo 41 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Poder Judicial**; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, expedida por la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; por ende, **ORDENARON** que al momento de los pagos se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso seguido por Edgar Gilberto Rodríguez Guarniz contra el Poder Judicial, sobre pago de bono por función jurisdiccional y otros; y los devolvieron. Ponente Señor Salazar Lizárraga, Juez Supremo.- **S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

[1] Sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil cinco, recaída en el Expediente número 4907-2005-HC/TC.

[2] RUMOROSO RODRÍGUEZ, José Antonio. Las sentencias. https://es.scribd.com/document/317987530/LAS-SENTENCIAS.

C-2246709-49

CASACIÓN 12388-2021 LIMA

Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada **Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte (fojas 18-23), que confirmó la sentencia contenida en la resolución número cuatro, que declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, modificando el monto **ordenaron** a la demandada cumpla con pagar al demandante el monto de S/30.000.00 por los conceptos de daño moral y lucro cesante, más intereses legales y costos del proceso; sin costas. **Integraron y confirmaron** la sentencia en el extremo que declara, propiamente, infundada la demanda, sobre indemnización por daños y perjuicios por el concepto de daño a la persona; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio extraordinario, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 inciso 1 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". **CUARTO.** El último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley N°26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N°00048-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 430.00; por lo que, Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 43,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **QUINTO.** En el caso de autos, se advierte que la sentencia de vista recurrida confirmó la sentencia contenida en la resolución número cuatro, que declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, modificando el monto **ordena** a la demandada cumpla con pagar al demandante el monto de S/30.000.00 por los conceptos de daño moral y lucro cesante; siendo que lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. En consecuencia, esta Sala Suprema debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada **Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en lo seguido por Agustín Gerardo Alejos Alejos, sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. Interviene la Jueza Suprema Carlos Casas por licencia del Juez Supremo Castillo León. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 29 de enero de 2020.

C-2246709-50

CASACIÓN Nº 13564-2021 LIMA

Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contra la sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Unipersonal de la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada pague a favor de la parte demandante veintisiete mil seiscientos treinta soles con veinticinco céntimos (S/27,630.25) por concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al artículo 35 inciso 1 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se interpone: "Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). (…)".- **TERCERO.** Estando a lo expuesto, este Supremo Tribunal constata que el monto ordenado a pagar asciende a veintisiete mil seiscientos treinta soles con veinticinco céntimos (S/27,630.25), lo que no le permite la interposición del recurso de casación, por no superarse las cien Unidades de Referencia Procesal[1] (100 URP), exigido como presupuesto necesario para su admisibilidad, que a la fecha de su interposición, esto es, al doce de enero de dos mil veintiuno, ascendía al monto de cuarenta y cuatro mil soles (S/44,000.00), en atención a que por Resolución Administrativa número 393-2020-CE-PJ, se fijó el valor de la Unidad de Referencia Procesal y aprobó el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año dos mil veintiuno, publicada el seis de enero de dos mil veintiuno, determinándose el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP) en cuatrocientos cuarenta soles (S/440.00); por lo que el recurso interpuesto debe declararse improcedente, al no cumplir con el requisito previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo. Por estas

consideraciones, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contra la sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Unipersonal de la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos Andrés Francisco Castillo Bellido contra la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sobre Reintegro de Beneficios Sociales; y los devolvieron. **Ponente Señor Lévano Vergara**, Juez Supremo. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

[1] Equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

C-2246709-51

CASACIÓN LABORAL Nº 14131-2021 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL, LEY Nº 29497-LPT
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO-EJE

Lima, veinte de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el **PODER JUDICIAL** de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno**;** contra la **Sentencia de Vista** de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno; que resuelve: "CONFIRMAR la Sentencia Nº 357-2019-38°-JETP-ZAL (Resolución Nº 03) de fecha 14 de octubre de 2019, obrante de fojas 97 a 109, que declara: 1. FUNDADA EN PARTE la demanda de autos, en consecuencia, se declara la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos entre las partes, desde el 11 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, y el reconocimiento de la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminada entre las partes en dicho período; en tal sentido, se dispone que la demandada pague a la actora la suma de S/. 4,718.54 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 54/100 SOLES) por concepto de indemnización por despido arbitrario, más intereses legales. 2. INFUNDADA la demandada en el extremo referido a la reposición por despido incausado. 3. SE ORDENA a la demandada pagar los costos del proceso, SIN COSTAS. Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 36 de la Ley Nº 29497 –Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i) La infracción normativa** y **ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República**, señalando asimismo, la incidencia directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. **TERCERO.-** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que, el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **CUARTO. –** Por otro lado, conforme a la demanda de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, subsanado por escrito de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, la demandante solicita: **a)** Se declare la desnaturalización de los contratos Modales a Plazo Fijo, suscritos con la demandada y como consecuencia se considere el reconocimiento de una relación laboral con la misma a plazo indeterminado; **b)** Se ordene su reposición por despido incausado en el mismo cargo que venía desempeñando; **c)** Como pretensión subordinada, solicita el pago de S/9,195.00 por concepto de Indemnización por Despido Arbitrario y, **d)** El pago de intereses legales, costos y costas del proceso. **QUINTO**. – Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1, del artículo 36, de la Ley Nº 29497, se debe indicar que la parte recurrente si apeló, tal como se aprecia del escrito de apelación de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. En cuanto al requisito señalado en el inciso 4 de la referida norma, la parte demandada señala que el pedido casatorio es **ANULATORIO y REVOCATORIO. SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causal en su recurso, la siguiente: **1. Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 2. Infracción normativa del artículo 63° del texto único ordenado del decreto legislativo Nº 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 3. Infracción normativa del artículo 16, inciso c) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR 4. Infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, LPT SEPTIMO.** La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación **OCTAVO.** . Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **NOVENO.** – Sobre a la causal contenida en el **numeral 1),** la entidad recurrente no denuncia aspectos estrictamente procesales relacionados al debido proceso en cuanto a la motivación de la sentencia impugnada, sino que en el fondo cuestiona el criterio adoptado por la Sala Superior en la sentencia de vista respecto a la materia discutida (desnaturalización de contratos), circunstancia que no se subsume en la causal denunciada. Asimismo, se debe indicar que, al dar lectura a la sentencia de vista, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, sino también con la correspondiente absolución de agravios expuestos por la recurrente en su recurso de apelación, lo cual, conjuntamente con la valoración de las pruebas esenciales determinaron la decisión de confirmar la sentencia apelada. En mérito a lo expuesto, se desprende que el recurso de casación en este extremo no cumple con los requisitos de procedencia normados en los incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y precisa en qué consistiría efectivamente la infracción normativa invocada, ni haber demostrado su incidencia en la decisión impugnada; razones por las cuales la causal denuncian deviene en **improcedente**. **DECIMO.** Con relación a las causales contenidas en los **numerales 2) y 3),** se advierte que los argumentos desarrollados por el recurrente están dirigidos a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito respecto a la desnaturalización de los contratos por servicio específico. En ese sentido, lo que pretende la parte recurrente este que este Supremo Tribunal realice un examen de la conclusión tomada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; por lo tanto, es evidente que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, conforme a la exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo tanto, las causales invocadas devienen en **improcedentes. DECIMO PRIMERO. –** En cuanto a la causal contenida en el **numeral 4),** sobre la exoneración de costos y costas. Al respecto la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que: "En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos". Siendo así, la recurrente no ha fundamentado describiendo de manera clara y precisa, la razón por la que no tendría que ser condenado al pago de costos procesales, en consecuencia, no ha demostrado la incidencia directa sobre la decisión impugnada, incumpliendo el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente.** Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del

Trabajo. Declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **PODER JUDICIAL** de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno**;** contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **KATERIN NATHALY YAMOZA CELIZ** contra el recurrente**;** sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron.** Ponente señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. S.S CASTILLO LEON, ABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA. **C-2246709-52**

CASACIÓN N° 14976-2021 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO - LEY N° 29497

Lima, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Instituto Peruano del Deporte (representado por el Ministerio de Educación),** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el extremo que **confirma** la sentencia apelada de fecha nueve de octubre de dos mil veinte que declara **fundada** la demanda; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (conforme se advierte del recurso de apelación); debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el pago de la suma ascendente a S/153,840.00 por beneficios sociales y S/33,410.00 por beneficios convencionales. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú.** Sostiene que la sala superior no ha motivado debidamente su decisión por cuanto la única relación que existió fue civil, de conformidad al artículo 1766 del Código Civil y que no se han acreditado los elementos esenciales de un contrato de trabajo. **(ii) Infracción normativa del Decreto Legislativo Nº 1057 y de la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497.** Refiere que el contrato administrativo de servicios es un régimen válido y constitucional para el sector público. Indica que la demandada se encuentra exonerada de pagar costas y costos al ser una entidad del Estado. **SEXTO.** En efecto, como se señala en el tercer considerando de la presente resolución, los requisitos de procedencia exigidos para conceder el recurso extraordinario de casación se encuentran expresamente desarrollados en la ley, lo cual la parte recurrente deberá dar cumplimiento fundándose en razones que denoten la existencia de una infracción normativa o el apartamiento de los precedentes. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1545-2007-Lambayeque, señala lo siguiente: "El recurso extraordinario de casación, como así lo reconocen la jurisprudencia establecida y la doctrina, es el debate netamente jurídico, pues el debate fáctico ha culminado con la sentencia objeto de la impugnación. Por lo tanto, es deber del impugnante expresar y demostrar que esa decisión judicial, de la cual discrepa, es violatoria del derecho tanto procesal como sustantivo. Por consiguiente, la denuncia casatoria tiene que satisfacer a cabalidad las exigencias legales establecidas para el recurso, tanto para su admisibilidad como para su procedencia. El cumplimiento de estos requisitos se explica por la necesidad de determinar objetivamente el sentido y alcance de la impugnación en la cual ha de expresarse y demostrarse no solo la presencia de los errores in iudicando o in procedendo, según sea el caso, sino también su incidencia en la decisión objetada (...)"; también la Casación Nº 768-2007-Moquegua, menciona que: "Los requisitos de procedencia del recurso de casación (…), incluyen la obligación de los justiciables de sustentarlos con probidad y buena fe, con un mínimo de verosimilitud, toda vez que no puede distraerse y abultarse la carga procesal del Órgano Supremo del Poder Judicial con fundamentos forzados, inconsistentes o inexistentes que al ser calificados procedentes se desvanecen instantáneamente al momento de analizarse el fondo del recurso en la etapa de la sentencia casatoria correspondiente (...)". **SÉTIMO.** Por lo que, de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** Siendo así, respecto a la causal denunciada en el **ítem (i),** esta deviene en **improcedente** pues se advierte que la demandada recurrente denuncia una supuesta vulneración al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, pero no expresa la incidencia formal directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, por el contrario más que un vicio de motivación, no está conforme con el razonamiento que expuso la sala superior para concluir probatoriamente que el actor estuvo vinculado laboralmente a la demandada por el periodo del 01 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2016. Asimismo, respecto a las causales denunciadas en el **ítem (ii),** estas también devienen en **improcedentes** porque los argumentos expresados en el recurso, lejos de constituir denuncias de infracción normativa, constituyen intentos por pretender una nueva revisión de mérito o de instancia, rol que definitivamente no corresponde a un tribunal casatorio pues conforme se advierte del presente recurso, la parte recurrente no brinda razones de porqué se han infringido las normas, lo que plantea es un nuevo examen de los hechos, en el sentido que pretende la valoración de medios probatorios a efectos de que se determine si el actor estuvo vinculado laboralmente. En efecto, el presente recurso de casación está dirigido a cuestionar un hecho fáctico introducido por las partes al proceso, en ese sentido no puede plantearse que un tribunal casatorio controle si un hecho está probado o no. Es importante, pues, distinguir entre cuestiones de hecho y de derecho, en tanto en la casación solo tiene lugar, esencialmente, un control de las cuestiones de derecho. Razones por las cuales, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **NOVENO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es revocatorio cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia; lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso, porque la recurrente no cumplió con precisar las infracciones normativas y su incidencia en la decisión cuestionada por los fundamentos expuestos en los considerandos anteriores. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Instituto Peruano del Deporte (representado por el Ministerio de Educación),** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Enrique Arturo Guerrero Vidal contra el Instituto Peruano del Deporte, sobre pago de beneficios sociales; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-53**

CASACIÓN LABORAL Nº 15668-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO – EJE

Lima, doce de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la **Municipalidad Metropolitana de Lima,**

de fecha uno de setiembre de dos mil veintiuno; contra la **Sentencia de Vista** de fecha doce de agosto del dos mil veintiuno; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 – Ley Procesal del Trabajo- en adelante NLPT. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la NLPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 0393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el uno de setiembre de dos mil veintiuno deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene desnaturalización de contratos, pago de beneficios sociales, inclusión en el libro de planillas de la institución recurrente, los cuales han sido acogidos por las instancias de mérito en el monto total de S/ 13,000.00, por concepto de beneficios sociales. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, **desnaturalización de los servicios,** sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, más no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la **desnaturalización de los servicios**, no constituyen pretensiones autónomas, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de **la desnaturalización de servicios** prestados no son otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la **desnaturalización de los servicios** no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la **desnaturalización de los servicios** en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la validez de la contratación como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la NLPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 Unidades de Referencia Procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de **desnaturalización de los servicios** postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la NLPT; de ahí que, las pretensiones de inscripción a planilla de la institución recurrente que contiene en la demanda, tampoco pueden ser consideradas como pretensiones no cuantificables para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, constituyen una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR (referido a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago), constituyendo obligaciones primarias de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción a planilla, no constituye pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la **desnaturalización de los servicios** tengan la calidad de pretensiones declarativas válidamente formuladas; definiendo por el contrario con meridiana claridad que el reconocimiento de un contrato laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico

que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de locación de servicios desnaturalizado, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la **desnaturalización de los servicios** y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista se ordena a la Municipalidad Metropolitana de Lima al pago de S/13,000.00 a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°0393-2020-CE-PJ (vigente a la fecha de interposición del recurso). En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios** como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos que anteceden. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, Declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTÍA** el recurso de casación interpuesto por la **Municipalidad Metropolitana de Lima,** de fecha uno de setiembre de dos mil veintiuno; contra la **Sentencia de Vista** de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **William Mitchel Burga Silva,** contra la **recurrente**, sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron.** Ponente la señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

---

1 Establece los aranceles judiciales para el año 2021

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-54

CASACIÓN Nº 15674-2019 CALLAO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636
Sumilla. En el caso de autos, se verifica la existencia de solidaridad entre las empresas codemandadas, respecto de las obligaciones laborales, debido a la vinculación económica y empresarial entre las mismas y a mérito de los hechos relevantes hallados en el proceso en aplicación del principio de primacía de la realidad que han servido de plataforma fáctica y legal para establecer el pago de la indemnización demandada.

Lima, cinco de agosto del dos mil veintidós.

VISTA; la causa número quince mil seiscientos setenta y cuatro dos mil diecinueve Callao, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO** Se trata de los recursos de casación interpuesto por las codemandadas **Tritón Trading SA, Neptunia Cosmos SA y Agencia Cosmos SAC,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que **revoca** el auto contenido en la resolución Nº 9 de fecha 25 de enero en el extremo que declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar de los demandantes, deducidas por Tritón Trading SA y Neptunia SA; **reformándola** este extremo se declaran improcedentes dichas excepciones. **Revoca** dicho auto en el extremo que declara infundada la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por Neptunia SA; **reformándola** este extremo, se declara **improcedente** la referida excepción. **Confirma** el mismo auto en el extremo que declara infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia. **Confirma** la sentencia contenida en la resolución Nº 45 de fecha 29 de agosto de 2017, en el extremo que declara fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales y establece la existencia de daño moral, así como la responsabilidad solidaria de las codemandadas por pertenecer a un mismo grupo económico; y, declara infundada la demanda por daño a la persona. **Revoca** la misma sentencia en los extremos que declara infundada la pretensión de lucro cesante y ordena el pago de S/100,000.00 por concepto de daño moral; **reformándola** estos extremos, se ordena a las codemandadas el pago de S/181,900.82 por indemnización por daños y perjuicios por accidente mortal de trabajo, la cual incluye los conceptos de lucro cesante (S/43,200.00) y daño moral (S/138,700.82), más los respectivos intereses legales, con costas y costos; en el proceso seguido por Marco Antonio Chávez Huamán y María Olivia Estela y Ponce sobre indemnización por daños y perjuicios. **II. CAUSALES DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN 1. Tritón Trading SA,** en virtud del inciso b) del artículo 56 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, denuncia como causal de su recurso: **iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos primero y segundo del Título Preliminar de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Neptunia SA** en virtud del artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 1183 del Código Civil. ii) Infracción normativa por la inaplicación y vulneración de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. 3. Agencia Cosmos SAC,** en virtud del artículo 56 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 1183 del Código Civil. ii) Infracción normativa por la inaplicación y vulneración de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.** Los recursos de casación interpuestos por Tritón Trading SA, Neptunia SA y Agencia

Cosmos SAC cumplen con los requisitos de forma contemplados en el artículo 57 de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley número 27021, necesarios para su admisibilidad; por ello, corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. **SEGUNDO.** En relación a **la causal de inaplicación de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, denunciadas por Neptunia SA y Agencia Cosmos SAC,** se debe precisar que la misma no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal de Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, el cual señala taxativamente como causales del recurso de casación la interpretación errónea, aplicación indebida, inaplicación de una norma de derecho material y contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, no encontrándose contemplada la inaplicación de normas de carácter adjetivo o procesal, **por cuya razón las causales promovidas por ambas codemandadas devienen en improcedentes. TERCERO**. En cuanto a **la causal de infracción normativa por interpretación errónea de los artículos primero y segundo del Título Preliminar de la Ley del Título Preliminar de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, denunciada por la codemandada Tritón Trading SA,** se debe señalar que la causal de interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, el juzgador al analizarla le da un sentido distinto al que corresponde. En el caso de autos, la parte impugnante no ha descrito de manera concreta cual es la interpretación correcta del artículo de la norma invocada, tanto más, cuando los principios de Prevención y Responsabilidad son considerados preceptos genéricos que requieren de un desarrollo legal; de esta manera, incumple con la exigencia prevista en el inciso b) del artículo 58 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; **por lo que la causal denunciada es improcedente. CUARTO. En relación a las causales denunciadas por las codemandadas Neptunia SA y Agencia Cosmos SAC,** mencionadas en los **apartados i),** debemos expresar que las empresas recurrentes han cumplido con señalar las razones por las cuales invoca las infracciones de su propósito; además, ha precisado la incidencia de las infracciones en la decisión cuestionada, por lo que se ha cumplido con lo establecido en el inciso b) del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, **deviniendo las causales bajo examen en procedentes. QUINTO. Antecedentes del caso. 1.1 Pretensión:** Conforme se aprecia del escrito de demanda, que corre de fojas doscientos catorce a doscientos setenta y seis, subsanada a fojas trescientos trece, los accionantes **Marco Antonio Chávez Huamán y María Olivia Estela y Ponce** interponen demanda de indemnización por daños y perjuicios contra las empresas Neptunia SA, Tritón Trading SA y Cosmos Agencia Marítima SAC, a efectos que las demandadas cumplan con pagar la suma de S/1´000.000.00, por los conceptos de **lucro cesante** (S/722,598.36), **daño a la persona** (S/138,700.82) y **daño moral** (S/138,700.82); más intereses legales, costas y costos del proceso, derivado del accidente de trabajo del hijo de los demandantes que provoco su muerte. **1.2 Sentencia de Primera Instancia.** El Juez del Quinto Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante sentencia de fecha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, declara **fundada en parte** la demanda, en consecuencia, ordena que las empresas demandadas cumplan con pagar de manera solidaria a los accionantes la suma de S/100,000.00 por el concepto de daño moral e **infundada** la demanda por lucro cesante y daño a la persona. **1.3 Sentencia de Vista.** La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante sentencia de vista de fecha veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho, **confirma** la sentencia apelada en el extremo que declara fundada en parte la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales, estableciendo la existencia de daño moral así como la responsabilidad solidaria de las codemandadas por pertenecer a un mismo grupo económico y declara infundada la demanda por daño a la persona, **revoca** la referida sentencia en los extremos que declara infundada la pretensión de lucro cesante y ordena pagar la suma de S/100,000.00 por concepto de daño moral, **reformándola** dichos extremos, ordena a las codemandadas el pago de la suma de S/181,900.82 soles por indemnización por daños y perjuicios por accidente mortal de trabajo, que incluye los conceptos de lucro cesante (S/43,200.00) y daño moral (S/138,700.82), más intereses legales, costas y costos. **SEXTO.** La evaluación que corresponde efectuar a esta Sala Suprema debe iniciarse por la causal de orden material declarada procedente, referida a la interpretación errónea del artículo 1183 del código civil. La disposición normativa en mención establece lo siguiente: "La solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa." **SÉTIMO. Análisis y fundamentación de esta Sala Suprema Apuntes previos sobre el recurso de casación 7.1.** El Recurso de Casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria según autorización contenida en la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto. **7.2.** La labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[1], revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, ésta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un Recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **7.3.** Por causal de casación ha de entenderse al motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso[2], debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[3], por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo. **OCTAVO. Alcances sobre el artículo 1183 del Código Civil. 8.1** La solidaridad es una modalidad de las obligaciones caracterizada por la existencia de sujetos múltiples que pueden exigir o deben cumplir la prestación en su integridad, sea porque la ley lo impone o porque existe un título en el que se ha pactado expresamente la solidaridad[4]. De esta manera, la solidaridad tiene dos fuentes posibles: primera, la voluntad, y segunda, la ley. **8.2** No obstante, en el contexto de los derechos laborales, la regla contenida en el artículo precitado del Código sustantivo, no opera de la misma manera, habida cuenta que existen circunstancias gravitantes que deben ser tomados en cuenta, asi por ejemplo, el hecho que las condiciones de asimetría en la relación laboral obligan a adoptar un criterio tuitivo a favor del trabajador, toda vez que el empleador por lo general se encuentra en mejores condiciones que el trabajador; un segundo aspecto a tener en consideración es la aplicación del denominado principio de primacía de la realidad, que significa que ante la existencia de alguna discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos; ello significa, por ejemplo, que si en los hechos se verifica la existencia de solidaridad entre las empresas demandadas, deberá otorgarse preferencia a

tales hechos, y conforme a ello concluirse que en realidad existe un vínculo económico o empresarial ente las demandadas. **NOVENO. Análisis del caso concreto 9.1** Este Supremo Tribunal, al revisar la causal materia de análisis, determina que no se aprecia la causal de interpretación errónea del artículo 1183 del Código Civil denunciado por Neptunia S.A y Agencia Cosmos SAC toda vez que las instancias de mérito han establecido, conforme a la prueba aportada y valorada en el proceso que la responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas no se sostiene esencialmente en la norma material denunciada sino en la vinculación económica y empresarial entre la citadas empresas. **9.2** En efecto, antes de entrar de lleno a la causal declarada procedente, debemos señalar a manera de referencia que se encuentra debidamente acreditado en autos que el día 30 de junio de 2007, dentro de las instalaciones de la empresa codemandada Neptunia SA, se produjo un accidente de trabajo que ocasionó el deceso de Cristian Antonio Chávez Estela hijo de los hoy demandantes-, en circunstancias que el citado trabajador efectuaba labores de mantenimiento preventivo en una maquinaria de propiedad de la empresa codemandada Agencia Cosmos SAC, efectuando labores como trabajador de Tritón Trading SA, resultando incuestionable la existencia de una relación causal entre el accidente de trabajo y el fallecimiento del hijo de los accionantes. **9.3** Se debe igualmente precisar que ni en el momento de la inspección ni en el presente proceso se han aportado medios probatorios tendientes a demostrar que antes de la fecha en que ocurrieron los hechos, Tritón Trading S.A. en su calidad de empleador del fallecido trabajador, hubiese adoptado las medidas preventivas necesarias con la finalidad de evitar, prevenir o cuando menos aminorar la gravedad del daño ocasionado, tanto más, cuando Tritón Trading SA se encontraba obligada a examinar y monitorear las labores realizadas por su trabajador con la finalidad de prevenir o impedir un eventual accidente de trabajo, como en efecto sucedió en el presente caso, con consecuencias fatales debido a la muerte de uno de sus trabajadores. A ello se debe agregar ciertas circunstancias relevantes que es necesario puntualizar como es el hecho que en el momento de ocurrido el accidente de trabajo, el supervisor de la empresa Tritón, Driven Ernesto Ludeña Pérez, no se encontraba en el lugar de los hechos siendo que las indicaciones le eran indicadas al citado trabajador vía telefónica. En ese contexto, se connota que el citado supervisor no fiscalizo debidamente la labor que se encontraba realizando el trabajador Cristian Chávez Estela, resultando imputable la responsabilidad Tritón Trading SA a título de culpa. **9.4** Entrando al análisis de la causal material declarada procedente, se debe señalar que para los efectos de determinar la existencia de una responsabilidad solidaria entre las empresas codemandadas, las instancias de mérito han efectuado un análisis pormenorizado en torno a la vinculación económica entre las mismas, asi por ejemplo, se ha logrado establecer conforme se ha dejado anotado en líneas precedentes, la existencia de un vínculo contractual entre el trabajador fallecido y Tritón Trading SA asimismo, la maquinaria sobre la cual se efectuó el mantenimiento por parte del citado trabajador, era de propiedad de Agencia Cosmos SAC, mantenimiento que se efectuó a mérito de un contrato de mantenimiento preventivo suscrito entre dichas empresas, a lo que se debe agregar que el citado mantenimiento así como el accidente de trabajo se produjo en las instalaciones de propiedad de Neptunia SA. **9.5** Asimismo, otro dato adicional que no puede dejar de señalarse es que las empresas codemandadas, han mantenido actividades productivas similares, pues de autos se aprecia que la empresa Tritón Trading S.A, realiza actividades complementarias de mantenimiento y otros de carácter especializado a otras empresas usuarias; por su parte, Cosmos es un Agencia Marítima una de cuyas actividades económicas es la manipulación de carga; del mismo modo, Neptunia SA se dedica a las actividades relacionadas con el Agenciamiento Marítimo, Servicios Portuarios, entre otros, siendo su actividad económica principal el almacenamiento y depósito. **9.6** En ese mismo sentido, otro dato que corrobora la existencia de una solidaridad por vinculación económica y empresarial entre las codemandadas es el hecho acreditado en sede de instancia que existen representantes legales y del directorio que integran las citadas empresas. Así, por ejemplo, el señor Enrique Gastón Matías Vargas Loret de Mola era Director de Tritón Trading S.A y de Neptunia SA y además Gerente General de Cosmos a la fecha de ocurrido el accidente de trabajo, asimismo, el señor Wolf Dieter Krefft Berthold, era Director de Neptunia y además Director Suplente de Cosmos entre los años 2007 y 2008, fecha que también coincide con el accidente de trabajo. De otro lado, se verifica que por escritura pública del 23 de noviembre de 2006 y por Junta General del 20 de noviembre de 2006, la codemandada Agencia Cosmos SAC, acordó la adquisición de acciones de su codemandada Neptunia SA en un equivalente al 52.8% del capital de dicha empresa. Lo anterior significa que, con anterioridad al referido accidente, Cosmos logro adquirir la mayoría de acciones empresariales de Neptunia, manteniéndose el accionariado mayoritario a favor de Cosmos, incluso a la fecha del accidente de trabajo, al no obrar en autos prueba que demuestre lo contrario. **9.7** En ese contexto, de los medios probatorios antes señalados, demuestran a las claras que entre las empresas codemandadas era evidente la existencia de una vinculación económica y empresarial, lo que no ha podido ser desvirtuada por la recurrente durante el decurso del proceso. **9.8** Por lo demás, las codemandadas Neptunia SA y Agencia Cosmos SAC señalan que no existiría una vinculación económica entre Tritón Trading SA Neptunia SA y Agencia Cosmos SAC ya que se trataría de empresas distintas que pertenecen a distintos grupos económicos. Sobre este particular se debe precisar que si bien Tritón Trading SA, forma parte del Grupo Andino Investment Holding, mientras que Agencia Cosmos SAC y Neptunia SA forman parte del grupo DP World, no obstante, se aprecia que la compra de estas dos últimas empresas se dio en el año 2018, esto es, con posterioridad al accidente de trabajo, materia de análisis en el presente caso, por lo que el agravio denunciado resulta inoficioso e ineficaz al caso de autos; por cuyas razones la causal material denunciada debe desestimarse por improbada. **IV. DECISIÓN** Por estas consideraciones, declararon **INFUNDADOS** los recursos de casación interpuesto por las codemandadas **Triton Trading SA, Neptunia Cosmos SA y Cosmos Agencia Marítima SAC**; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso seguido por Marco Antonio Chávez Huamán y María Olivia Estela y Ponce contra Tritón Trading SA y otros, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, TORRES GAMARRA, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA.**

---

1 **Hitters,** Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166.

2 **Monroy Cabra,** Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359

3 **De Pina, Rafael.** Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.

4 **Bejarano Sánchez,** Manuel. Obligaciones Civiles. Sexta Edición. México 2011

C-2246709-55

CASACIÓN Nº 15809-2021 CALLAO

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO NLPT Nº 29497

Lima, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Ministerio de Producción en representación del Instituto del Mar del Perú – IMARPE,** de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Callao, que resuelve: **"CONFIRMARON** la Sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha 20 de noviembre de 2019, en los extremos que declara: 1) Infundadas las excepciones de incompetencia por razón de la materia y falta de agotamiento de la vía administrativa que interpone la demandada. 2) Fundada la demanda interpuesta por don Ireno Carbajal Mejía contra Instituto del Mar del Perú (en adelante IMARPE), sobre reconocimiento de la existencia de relación laboral, en consecuencia, declara que entre las partes existe una vinculación jurídica de naturaleza laboral a plazo indeterminado dentro del régimen laboral de la actividad privada desde el 01 de octubre del 2001 en adelante. 3) Fundada la demanda en el extremo de reintegro de remuneraciones pagadas en forma diminuta, pago de los

beneficios sociales por los conceptos de remuneración e indemnización vacacional, gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, y escolaridad, ordena el pago de S/. 196,300.00, más intereses legales y financieros, que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos. 4) Fundada la demanda en el extremo de reconocimiento de compensación por tiempo de servicios, en consecuencia, ordena que la demandada se constituya en depositaria de la compensación por tiempo de servicios (en adelante CTS), por el periodo del 01 de octubre de 2001 al 31 de octubre de 2015 en el monto de S/. 44,866.70 y deposite la suma de S/. 9,333.36 por los periodos semestrales del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017." Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 35 y 36 de la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (lo que se advierte en el presente caso, ya que apeló la sentencia de primera instancia; por lo que, tal exigencia se cumple); debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el demandante solicita, el reconocimiento de relación laboral a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada, el reintegro de remuneraciones pagadas de forma diminuta, y el pago de los beneficios económicos. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la cuestionó, conforme se aprecia del escrito de apelación presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que esta exigencia se cumple. **SEXTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación lo siguiente: **1) Infracción normativa consistente en la contravención a los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 2) Inaplicación de los artículos 1760°, 1764°, 1765° y 1766° del Código Civil; 3) Inaplicación del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 e inaplicación de lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar Del Código Procesal Constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00002-2010-PI/TC); 4) Inaplicación del artículo 40° de la Constitución Política del Perú, así como también del artículo 5° de la Ley Marco del Empleo Público y lo establecido en el Precedente Huatuco Huatuco y Decreto de Urgencia Nº 016-2020; 5) Aplicación Indebida del artículo 4° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. SÉPTIMO.** Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** Sobre la causal denunciada en el **numeral 1),** la parte recurrente pretende que esta Sala Suprema realice un reexamen de la conclusión arribada por la sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual no es posible en esta sede casatoria; de ello se advierte que el recurso de casación está dirigido a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito; sin embargo, en el fondo pretende que esta Sala Suprema revise las pruebas y hechos establecidas por la Sala Superior al emitir pronunciamiento, situación que no es propia del análisis casatorio. Razones por la cual, la causal invocada no cumple con las exigencias señaladas en el inciso 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo esta denuncia en **improcedente. NOVENO.** Sobre las causales denunciadas en los **numerales 2), 3) y 4),** corresponde señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, ha señalado que los hechos materia de proceso corresponden a una relación contractual de naturaleza civil, por lo tanto, no se hubiera declarado la existencia de vinculaciones laborales y el pago de beneficios sociales; asimismo, se habría determinado que el vínculo que unió a las partes bajo contratos administrativos de servicios se reguló exclusivamente por las normas especiales del régimen laboral especial, habiendo el demandante gozado de todos sus beneficios laborales de forma efectiva, de ello se verifica que la parte recurrente no demuestra la eficacia de las normas denunciadas ni cómo afectarían la decisión tomada por las instancias de mérito; en consecuencia, no se cumple con el requisito de procedencia fijado en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en **improcedentes**. **DÉCIMO.** Sobre la causal denunciada en el **numeral 5),** se debe precisar que existe aplicación indebida de una norma, cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. En el caso concreto, se advierte que el artículo de la norma invocada ha sido considerado dentro de los fundamentos de la Sentencia de Vista, de manera adecuada; en consecuencia, al no describir de manera clara y precisa la supuesta infracción normativa; requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviene en **improcedente. DÉCIMO PRIMERO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es **anulatorio y revocatorio**, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso, pues los requisitos son necesariamente concurrentes, lo que no se configura en el caso concreto. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación por la parte demandada, **Ministerio de Producción en representación del Instituto del Mar del Perú – IMARPE,** de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Callao; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en el proceso seguido contra la recurrente, por la parte demandante Ireno Carbajal Mejía, sobre Incumplimiento de normas laborales. Interviniendo como **ponente** señora jueza suprema **Vera Lazo; y los devolvieron.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA. **C-2246709-56**

CASACIÓN Nº 17173-2019 SULLANA

Materia; INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO LABORAL LEY Nº 26636

Lima, cuatro de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Red Asistencial de Piura y Seguro Social de Salud ESSALUD**, por escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que: "CONFIRMARON a) la resolución número trece de fecha 12 de octubre de 2015, obrante a fojas 292 a 295, en el extremo que declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado propuesta por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y b) la Sentencia contenida en la Resolución número veintidós, de fojas 404 a 417, de fecha 27 de junio de 2018, que falla: Declarando 1. DECLARO FUNDADA EN PARTE, la demanda incoada por Mirtha Rocío Vivanco Godoy contra la empresa Seguro Social de Salud – Essalud, Red Asistencial Piura y el Procurador Publico del Ministerio de Trabajo; en consecuencia, MODIFICARON el monto, ORDENANDO a la demandada cumpla con pagar al

actor la suma total de S/29,210.38 (Veintinueve Mil Doscientos Diez con 38/100 soles) que corresponden, S/9,210.38 por concepto de Indemnización por Lucro Cesante y S/20,000.00 por concepto de Indemnización por Daño Moral. 2. INFUNDADA la demanda en el extremo de Indemnización por Daño Emergente, Reintegro de Remuneraciones dejadas de percibir, reconocimiento del contrato de trabajo a plazo indeterminado, establecimiento del real Récord laboral, y la determinación del Nivel Profesional y reintegro de Remuneraciones; DEVOLVIERON, el presente expediente a su juzgado para que procedan conforme a ley.". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO.** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO.** Se aprecia de la demanda de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, que la demandante solicita el pago de S/98,990.00 por concepto de una indemnización por daños y perjuicios generados por despido incausado declarado en proceso de amparo (responsabilidad contractual). Asimismo, solicita como pretensión subordinada el pago de remuneraciones devengadas dejadas de percibir en atención al despido incausado del cual fue objeto. De igual forma, solicita el reconocimiento de su contrato de trabajo a plazo indeterminado, se establezca su real record laboral y se determine el verdadero nivel profesional en la institución. Asimismo, accesoriamente solicita el reintegro de remuneraciones desde el 01 de noviembre de 2012 hasta la fecha en la que se declare firme y consentida la sentencia que resuelva el proceso de autos, el cual hasta la fecha de interposición de demanda asciende a la suma de S/43,155.77. **QUINTO.** La recurrente denuncia como causal de su recurso la **Interpretación errónea de una norma de derecho material**, refiriendo que la Sala Laboral refiere el pago de indemnización por daños y perjuicios, es decir, el pago del lucro cesante y daño moral, como consecuencia de un despido. Asimismo, dentro de su fundamento cita normas legales que supuestamente se han violentado. **SEXTO.** Sobre a **la causal denunciada;** la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. En el caso concreto, la parte recurrente no identifica cuál de las normas citadas como fundamento de su causal, ha sido infraccionada por interpretación errónea (causal denunciada expresamente), ni mucho menos aduce alguna interpretación de las normas que cita. Siendo así, no se cumple con el requisito de procedencia fijado en el literal b) del artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021; deviniendo en **improcedente**. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021: Declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Red Asistencial de Piura y Seguro Social de Salud ESSALUD**, por escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Sullana; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por la demandante, **Mirtha Rocío Vivanco Godoy**, contra la recurrente, sobre indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como **ponente**, la señora juez suprema **Vera Lazo**; y los devolvieron. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-57**

CASACIÓN Nº 20844-2017 PUNO

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636
SUMILLA: El hecho que las instancias de mérito no hayan actuado en atención a las reglas de obligatorio cumplimiento, torna en insalvable la nulidad porque en la forma como se desarrolló el proceso, es de aplicación a la actora el precedente vinculante contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 05057-2013-PA/TC.

Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.-

VISTA; la causa número veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro dos mil diecisiete en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO** Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Estela Chela Sardon Quispe,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticuatro de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Civil de la provincia de San Ramón – Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, que **revoca** la sentencia de primera instancia; **y reformándola** declara infundada la demanda sobre invalidez de contratos administrativos de servicios y otros, sin costas y costos del proceso. **II. CAUSALES DEL RECURSO:** La recurrente invocando el artículo 56° de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley número 27021, denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa material por inaplicación de la Tercera Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley Nro. 26918. ii) Infracción normativa material por indebida aplicación del artículo 1 de la Ley Nro. 24041. iii) Infracción normativa material por interpretación errónea de la Tercera Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley Nro. 26918. iv) Infracción normativa material por indebida aplicación del artículo 18 del Decreto Ley Nro. 26093. v) Contradicción con la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente Nº 5652-2007-AA-TC. vi) Contradicción con el numeral 1.5.3 del II Pleno Jurisdiccional Supremo en material laboral. III. CONSIDERANDO PRIMERO.** El recurso de casación reúne los requisitos de procedencia y forma contemplados en los artículos 55° y 57° de la Ley número 26636, Ley Procesal de Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley número 27021, respectivamente. **SEGUNDO.** Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas setenta y ocho, la demandante solicita se declare la invalidez de sus contratos administrativos de servicios, por existir desnaturalización de los contratos de locación de servicios, y como pretensiones objetiva originaria accesoria, se declare la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre la demandante y la Sociedad de Beneficencia Pública de San Román, ordenándose su reposición en el cargo de auxiliar de albergue de la Gerencia de Servicios sociales de la Sociedad de Beneficencia Púbica de San Román **TERCERO. El Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno,** emite la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número dieciséis de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, **declara fundada la demanda,** en consecuencia, inválidos los contratos administrativos de servicios celebrados desde el 21 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 entre Estela Chela Sardón Quispe y la Sociedad de Beneficencia Pública de San Román, por haberse desnaturalizado los Contratos de Locación de Servicios, celebrados desde el 16 de enero de 2012 hasta el 20 de agosto de 2012 entre las mismas partes, por tanto, se declara la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada, y como tal sin valor alguno el despido del que ha sido objeto la demandante, asimismo, ordena la reposición de la demandante en su último puesto de trabajo como Auxiliar de Albergue o en otro de similar categoría o nivel, sin costas ni costos del proceso. **CUARTO.** El Colegiado de la **Sala Civil de la Provincia de San Román – Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno,** mediante la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticuatro de fecha diecisiete de agosto de dos diecisiete, **revoca la sentencia de primera instancia; y reformándola declara infundada la demanda,**

refieren que si bien se acreditan que las labores realizadas por la demandante fueron de naturaleza permanente, sin embargo, el artículo 1 de la Ley Nro. 24041, establece que deberá cumplir el plazo de más de un año ininterrumpido para que le alcance la protección ante un despido que no esté dentro de los alcances previstos en el artículo V del Decreto Legislativo Nº 276. Por lo expuesto, se determina que no se ha producido la desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscrito por las partes procesales **QUINTO.** Sobre las causales denunciadas en el **acápite i) y iii),** se advierte que la parte recurrente no cumple con describir con precisión y claridad la infracción que invoca, ya que por un lado sostiene que la instancia de mérito interpretó errónea de la Tercera Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley Nro. 26918 y por otro lado invoca como causal su inaplicación, lo que denota que ha propuesto una causal ambigua y oscura; aunado a ello, no demuestra la incidencia de la referida norma sobre el resultado del proceso, deviniendo en improcedente. **SEXTO**. Con relación a las causales contenidas en los **acápites ii) y iv),** se verifica que la recurrente ha cumplido con claridad con exponer los fundamentos de la incidencia directa de la norma citada en la decisión cuestionada; por lo que la misma deviene en **procedente. SÉPTIMO**. Respecto a las causales contenidas en los **acápites v)** y **vi),** debe reiterarse que el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 56° de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley número 27021, referidas a normas de naturaleza material. En el caso concreto, se aprecia que el recurrente denuncia como causales la contradicción con la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente Nº 5652-2007-AA-TC y el 1.5.3 del II Pleno Jurisdiccional Supremo en material laboral, empero, no cumple con señalar de qué manera se habría incurrido en contradicción con otras resoluciones en casos objetivamente similares, tal como se exige en el inciso d) del artículo 56 de la Ley Nro. 26636, por lo que las denuncias deben ser desestimadas. **Delimitación del objeto de pronunciamiento NOVENO.** De la revisión del recurso de casación en específico de las causales declaradas procedentes- y de lo resuelto por las instancias de mérito, se tiene que el análisis debe circunscribirse a determinar si en el presente caso se aplicaron indebidamente el artículo 1 de la Ley Nro. 24041 y el artículo 18 del Decreto Ley Nro. 26093, a efectos de dilucidar si la demandante tiene vínculo contractual de naturaleza indeterminada con la demandada y si es que corresponde disponerse su reposición en el cargo de Auxiliar. **DÉCIMO.** En principio, es importante tener en cuenta que según lo expuesto en la demanda, la actora considera que ha operado la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios así como la invalidez de sus contratos administrativos de servicios celebrados con la Beneficencia Pública del San Román, por consiguiente, se habría configurado un despido arbitrario por lo que debe ordenarse su reposición en el cargo de Auxiliar de Albergue de la Gerencia de Servicios Sociales de la entidad demandada. Considerando que existe una pretensión de reposición, es imperioso merituar los lineamientos establecidos en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el cinco de junio de dos mil quince, en la cual el Tribunal Constitucional señaló en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 con carácter de precedente, que en los casos en los cuales se verifique la desnaturalización del contrato temporal o civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado en el régimen del Decreto Legislativo número 728, cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en la Administración Pública mediante un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. **10.1** Nótese que el precedente vinculante bajo análisis niega tutela restitutoria a los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral privado del Decreto Legislativo número 728, en aquellos casos en los que se discuta la desnaturalización de la contratación y se pretenda la reposición sin que se haya ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. No obstante, la aplicación del precedente Huatuco no debe entenderse como la negación de tutela frente al despido arbitrario, sino como un cauce diferenciado de tutela material porque no está vedada la tutela resarcitoria, aunque sí la restitutoria por los fundamentos consignados en el punto anterior. **10.2** Respecto a los efectos temporales de la sentencia, indicó que las reglas establecidas como precedente vinculante en la sentencia deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", incluyendo a los procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Es por ello que en el fundamento 22 de la sentencia también se ha establecido como regla vinculante de obligatorio cumplimiento, lo siguiente: "22. En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, **el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728** (…). Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso". **10.3** Aun cuando la regla de la indemnización en su literalidad se refiere a los procesos de amparo cuya reconducción se ordena, también deben incluirse los procesos que, sin ser de amparo, en sentido formal el trabajador pretendía tutela restitutoria, tal como ha sucedido en el caso de autos porque la trabajadora demandante antes de la emisión del precedente Huatuco inició la presente demanda (cinco de febrero de dos mil quince) pretendiendo su reposición por despido arbitrario a consecuencia de la declaración de desnaturalización de los contratos de trabajo, que también peticiona, postulando una teoría del caso que coincide con las características del supuesto fáctico del citado precedente, en tanto, se trata de un trabajador del Estado (Beneficencia Pública), sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que alegó la desnaturalización de su contratación modal, pero no postula haber ingresado por concurso público a una plaza presupuestada y vacante a plazo indeterminado. **10.4** Siendo esto así, independientemente del sentido de la decisión, la demanda debe contener todos los mecanismos de tutela material derivados de los hechos postulados, lo cual implica que en atención al precedente Huatuco emitido después de terminada la etapa postulatoria de este caso, pueda reconducir su pretensión a la tutela resarcitoria o en todo caso postularla como pretensión subordinada, a fin de que la demandante tenga acceso a la tutela prevista en citado precedente. Por tanto, dada la vinculatoriedad del referido precedente, el hecho que las instancias de mérito no hayan actuado en atención a las reglas de obligatorio cumplimiento, torna en insalvable la nulidad porque en la forma como se desarrolló el proceso, es de aplicación a la actora el referido precedente vinculante, que contiene la exigencia de un concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante para que pueda ser parte de la carrera administrativa; por lo que, a fin de que la demandante para alcanzar tutela frente al despido arbitrario, se debe remitir al juez de instancia con la finalidad que se le dé a la parte litigante la opción de acumular de manera subordinada a la pretensión de reposición, la pretensión de indemnización por despido arbitrario en los términos descritos en el apartado 22 del precedente vinculante Huatuco. Actividad procesal que no puede ser desplegada por este Tribunal Casatorio, atendiendo a que se trata de una actividad postulatoria correspondiente a una instancia de mérito y ante la necesidad de que una vez efectuada dicha acumulación subordinada de la pretensión indemnizatoria se pueda garantizar el derecho a la defensa a la parte emplazada, precisándose que esta decisión excepcional de reenvío procura garantizar a la parte demandante la plena tutela de sus derechos materiales a la luz del ordenamiento jurídico vigente y dado el mandato imperativo del precedente Huatuco cuando en su fundamento 21, el cual dispone su aplicación a los procesos en trámite a la fecha de expedición, supuesto que se configura en el caso de autos. Señalándose también que este reenvío excepcional se justifica en el propósito de asegurar que ante la eventualidad de que la pretensión restitutoria sea desestimada por esta Sala Suprema, la parte demandante tenga la oportunidad de ejercitar las demás opciones de tutela material de sus derechos que en el presente caso se concretaría con la pretensión indemnizatoria. **IV. DECISIÓN** Por estas consideraciones, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Estela Chela Sardón Quispe;** en consecuencia, **NULA** la sentencia de vista de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Civil de la provincia de San Ramón – Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Lima, **e INSUBSISTENTE** la sentencia apelada de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno; por lo que **ORDENARON** al Juez de primera instancia que resuelva conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente Ejecutoria Suprema; y **DISPUSIERON** la publicación de esta resolución en el Diario

Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Estela Chela Sardón Quispe contra la Sociedad de Beneficencia Pública de San Román y otra, sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Ato Alvarado y la señora Jueza Suprema Carlos Casas por licencia del señor Juez Supremo Castillo León y la señora Jueza Suprema Vera Lazo. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. **CABELLO MATAMALA, AMPUDIA HERRERA, ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS. C-2246709-58**

CASACIÓN Nº 21006-2021 LIMA

Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Poder Judicial contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, reconoce el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, ordena que la parte demandada pague a favor del demandante el reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, por incidencia del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, en la suma de veintiocho mil novecientos doce soles con quince céntimos (S/28,912.15); con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: **a)** La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; **b)** Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **c)** La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **d)** El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó a la parte recurrente el uno de noviembre de dos mil veinte, y el recurso se interpuso el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Finalmente, se observa que la parte impugnante no adjunta el arancel correspondiente, pues es una entidad del Estado, encontrándose exonerada de dicho pago, de conformidad con el inciso G del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i)** La infracción normativa; o, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: **a)** En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues, se advierte que la parte impugnante no ha consentido la decisión que le fue adversa en primera instancia, y mediante auto de fecha veinte de enero de dos mil veinte, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el ahora casante; y, **b)** En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte recurrente denuncia las causales de: **1) Infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3[1] de la Constitución Política del Estado; 2) Infracción normativa material de los artículos 6[2] del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97-TR, y 19 inciso a)[3] del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo número 001-97-TR; y, 3) Infracción normativa material de la Tercera Disposición Transitoria[4] de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y el artículo 19[5] de la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. SÉTIMO.-** En relación a las causales denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, ya que no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende la parte impugnante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, con la finalidad de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y sin advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, ya que la Sala Superior ha determinado de la valoración conjunta de los medios de prueba, que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen naturaleza remunerativa al ser percibidas mensualmente de manera fija y permanente, sin condición alguna y a título de liberalidad, teniendo ambas incidencia en el cálculo de los beneficios sociales, por lo que, le corresponde al demandante el reintegro solicitado; en tal sentido, habiéndose reconocido el carácter remunerativo del bono, los agravios denunciados por la parte demandada en el recurso extraordinario deben ser desestimados. **OCTAVO.-** Este Supremo Tribunal ya ha emitido pronunciamiento de fondo sobre esta materia, con fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, entre ellas en las Casaciones Supremas números 4012-2021, 8987-2019 y 4353-2021, en las cuales se ha dejado establecido que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen el carácter remunerativo, pues conforme lo prevé el artículo 24 de la Constitución Política del Estado: "El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)". Dicho salario guarda relación con el Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección del salario (1949); y, que en el contexto de convencionalidad, existe la obligación de aplicar el Convenio número 100 de la Organización Internacional de Trabajo, cuyo artículo 1 literal a) ha definido que el término remuneración: "comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último". Por lo que, al advertirse que, el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen la característica de ser percibidas de forma permanente, fija, y de libre disposición para el trabajador como contraprestación por su labor desempeñada, es que dichos conceptos están comprendidos dentro de la expresión "remuneración" establecida en el convenio antes citado. Por tanto, dichos conceptos deben ser interpretados de conformidad con el Convenio número 100 de la Organización Internacional de Trabajo, que, al haber sido ratificado por el Perú, es una norma que integra nuestro derecho interno por mandato del artículo 55 de la Constitución Política y su Cuarta Disposición Final y

Transitoria. Por estas consideraciones, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el Poder Judicial contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Julián Usaqui Soria contra el Poder Judicial, sobre Reintegro del Bono por función Jurisdiccional y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

1 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)

2 Artículo 6.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.

3 Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes:
a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego. (…).

4 TERCERA.- En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se tomará en cuenta lo siguiente:
a) El ingreso de personal sólo se efectúa cuando se cuenta con la plaza presupuestada. Las acciones que contravengan el presente numeral serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad que autorizó tales actos, así como de su Titular.
b) Queda prohibida la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten al incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del Cuadro para Asignación de Personal CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal PAP. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente literal genera la nulidad de la acción de personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad, así como de su Titular.
c) La planilla única de pago sólo puede ser afectada por los descuentos establecidos por Ley, por mandato judicial, y otros conceptos aceptados por el servidor o cesante y con visación del Director General de Administración o del que haga sus veces.
d) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios.
e) El pago del personal activo y cesante debe considerar únicamente a sus funcionarios, servidores así como a pensionistas registrados nominalmente en la Planilla Única de Pagos PUP.
f) La incorporación paulatina en los Cuadros para Asignación de Personal CAP y/o en el Presupuesto Analítico de Personal PAP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de los trabajadores que vienen ejerciendo labores de carácter permanente y propio de la Entidad, bajo la modalidad de contratados o de servicios no personales.
(*) DEROGADA por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1440, publicado el 16 septiembre 2018, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena Disposición Transitoria, las cuales mantienen su vigencia. El citado Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2019.

5 Artículo 19.- Actos o disposiciones administrativas de gasto.
Los funcionarios de las entidades del Sector Público competentes para comprometer gastos deben observar, previo a la emisión del acto o disposición administrativa de gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria correspondiente. Caso contrario devienen en nulos de pleno derecho.

C-2246709-59

CASACIÓN Nº 21485-2019 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636

Lima, once de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Rosario Haydee Goyas Crocce**, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, contra la sentencia de vista de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución numero treinta y ocho de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete que declara infundada la demanda sobre reintegro de remuneraciones por homologación y otros; con lo demás que contiene; recurso que cumple con los requisitos de forma contemplados en los artículos 55 y 57 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, las mismas que son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material; **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material; **c)** La inaplicación de una norma de derecho material; y, **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la República o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO.** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56 de la mencionada ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma; **c)** Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la sala casatoria calificar estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO.** Mediante escrito de demanda, la accionante pretende que se cumpla con efectuar el abono de la suma de S/ 462,406.17 por concepto de reintegro de sueldo básico por homologación de remuneraciones y reintegro de beneficios económicos por el periodo de homologación devengados desde el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. **QUINTO.** La parte recurrente sustenta su recurso de casación en las causales siguientes: **I. Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. II. Infracción normativa material del artículo 2 incisos 2 de la Constitución Política del Estado, y los incisos 2 y 3 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el literal i) del artículo 7 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el numeral 2 del artículo 1 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 100 y Nº 111. III. Contradicción con otras resoluciones expedida por la Corte Suprema recaída en las Casaciones Laborales Nº 10588-2012-CUSCO, 228-2006-LIMA, entre otras. SEXTO.** Los agravios denunciados por el casante no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 56 de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley 27021, pues en relación a las causales denunciadas, las mismas devienen en improcedentes, ya que no tienen asidero legal, observándose que lo que pretende la parte impugnante a lo largo de su recurso, es forzar a este Supremo Tribunal a una revaloración de los hechos y de las pruebas, a fin que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo en sede casatoria, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, ya que esta Corte vela por el interés de la sociedad, de allí que a través de sus decisiones se van delimitando criterios jurisprudenciales y conductas de vida; además, de redefinir el sentido interpretativo de la norma para el caso en concreto, con la finalidad de asegurar a las partes una solución, no solo conforme a derecho, sino justa. Más aún, si el ad quem ha cumplido con motivar adecuadamente su resolución, precisando los hechos y normas que le han permitido asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, y sin advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, pues la Sala Superior ha considerado que, analizados los medios probatorios aportados en el proceso, así como la demanda incoada, en el presente caso no se ha dado la desigualdad o discriminación alegada por la actora, ello al haberse verificado que no ha logrado demostrar que las

referidas homólogas desempeñan las mismas labores y tengan cargos idénticos al suyo, pues si bien ostentan la calificación de "Técnico I", existen diferencias notorias y objetivas; siendo ello así, no resulta procedente la homologación del sueldo básico peticionado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por la Ley 27021, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Rosario Haydee Goyas Crocce**, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, contra la sentencia de vista de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosario Haydee Goyas Crocce contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre pago de beneficios económicos y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-60**

CASACIÓN Nº 21666-2022 DEL SANTA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha trece de mayo dos mil veintiuno, interpuesto por el demandante **Hoguer Antonio Desposorio Mendo**, contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, se advierte que la sentencia de vista revoca la apelada declarando infundada la demanda; sin embargo, **se advierte que el monto del petitorio es de S/ 21,787.29, monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00),** de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso); incluso, en el supuesto que se hubiese amparado lo pretendido, evidentemente no superaría el monto exigido por el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante **Hoguer Antonio Desposorio Mendo**, contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Hoguer Antonio Desposorio Mendo contra la Pesquera Centinela SAC, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.
C-2246709-61

CASACIÓN Nº 21688-2022 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte demandada **Municipalidad Distrital de La Punta**, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, se advierte que la sentencia de vista confirma la apelada que declara infundada la demanda; sin embargo, se advierte que el **monto del petitorio** es de **S/16,156.46**, monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso); incluso, en el supuesto que se hubiese amparado lo pretendido, evidentemente no superaría el monto exigido por el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Municipalidad Distrital de La Punta,** contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge Luis Zavaleta Campos contra la Municipalidad Distrital de La Punta, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y otros; y los devolvieron**. Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.
C-2246709-62

CASACIÓN 22103-2022 DEL SANTA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, diez de octubre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **el demandante Luis Alberto Lázaro Garay,** de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que **revocó** la sentencia contenida en la resolución número dos, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el actor contra la empresa Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre indemnización por daños y perjuicios; **reformándola**, declararon infundada la misma; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio extraordinario, conforme a lo previsto en la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 inciso 1 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". **CUARTO.** El último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley N°26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles (S/440.00); por lo que, Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles (S/44,000.00); y, siendo que el recurso de casación fue presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa.

QUINTO. En el caso de autos, se advierte que la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de fojas veintinueve al treinta y ocho del cuaderno, que **revocó** la sentencia contenida en la resolución número dos, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el actor contra la empresa Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre indemnización por daños y perjuicios; **reformándola**, declararon infundada; Sin embargo estando a que el petitorio de la demanda asciende a la suma de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 22/100 soles (S/31,445.22), **evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTIA,** el recurso de casación interpuesto por **el demandante Luis Alberto Lázaro Garay,** de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre indemnización por daños y perjuicios; **notificándose.** Ponente señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. – **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-63

CASACIÓN Nº 22126-2022 ICA

Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el ocho de febrero de dos mil veintiuno por **la demandada Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima Abierta**, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (reintegro de asignación familiar, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y utilidades), ordenándose a la demandada el pago de la suma total de S/40,117.92 a favor de los trabajadores Gerardo Tassara Chuyes, Christian Martín Flores Baldeón, Miguel Ángel Canales Vizarreta, José Luis Tapia Agapito y Jorge Leirson Muñoz Luján; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** Cabe precisar que se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de reconocimiento del derecho a la asignación familiar que contiene la demanda, no puede ser considerada como pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo, en el caso de trabajadores que cuentan con carga familiar, a estar por lo dispuesto en la Ley Nº 25129 y el Decreto Supremo Nº 035-90-PCM. De modo que, el reconocimiento del derecho a la asignación familiar, no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima Abierta**, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por el Sindicato de Empleados de Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima Abierta contra Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre reintegro de beneficios sociales; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-64

CASACIÓN Nº 22136-2022 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL – LEY Nº 29497
EXPEDIENTE DIGITALIZADO – NO EJE

Lima, doce de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, interpuesto por **la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar** contra la sentencia de vista del uno de junio de veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que se ordenó a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar al pago total de **S/6,030.20** a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°0393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). Por estas consideraciones, conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTÍA** el recurso de casación interpuesto por **la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar** contra la sentencia de vista del uno de junio de veintiuno; el cual; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **José Pastor Vargas Cáceres** contra la **parte recurrente**, sobre pago de beneficios sociales; **y los devolvieron. Ponente la Señora Vera Lazo, Jueza Suprema.- S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Regula los aranceles judiciales para el año judicial 2021.

C-2246709-65

CASACIÓN LABORAL Nº 22372-2018 LIMA

Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY 26636
SUMILLA: Resulta técnicamente inexigible, el cumplimiento de la ACOE pactada en la cláusula quinta del contrato de trabajo de fecha primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, porque se trata de un acto jurídico nulo al condicionar el otorgamiento de tal beneficio a condición suspensiva que depende de la exclusiva voluntad del deudor.

Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.-

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número veintidós mil trescientos setenta y dos dos mil dieciocho; efectuados el debate y la votación correspondientes, emite la siguiente sentencia: **I.- MATERIA DEL RECURSO.** Se trata del recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Murillo

Seminario, a fojas mil ciento treinta, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 9, de fojas mil ciento veintiuno, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia de primera instancia, resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas novecientos cincuenta y nueve, que declaró fundada en parte la demanda; reformándola, la declaró infundada, con lo demás que contiene. **II. CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN**. Jorge Luis Murillo Seminario, denuncia las siguientes causales: **1. Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 5[1] del de la Constitución Política del Perú. 2. Interpretación errónea del artículo 6[2] del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97-TR. 3. Interpretación errónea del artículo 19[3] del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR. 4. Inaplicación del artículo 16[4]del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR. 5. Inaplicación del artículo 23[5] y los incisos 2 y 3 del artículo 26[6] de la Constitución Política del Perú.** Las causales denunciadas en el considerando que antecede por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificados por la Ley Nº 27021, en tal sentido devienen en procedentes. Ello en tanto se propone, a partir de las infracciones normativas antes anotadas, la discusión jurídica respecto a la exigibilidad del pago de la Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales, así como su naturaleza remunerativa, lo cual fue desestimado por el ad quem. **III.- ANTECEDENTES. 3.1. DEMANDA Y CONTESTACIÓN. 3.1.1.** Mediante el presente proceso, el accionante Jorge Luis Murillo Seminario, interpone demanda[7] contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre Pago de Beneficios Sociales y otro. Como sustento de la demanda, el emplazante refiere, entre otros, que**: i)** Ingresó a prestar servicios para la empresa demandada Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres hasta el veintiocho de junio de dos mil dos, siendo su último cargo el de Jefe de Área, que el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro suscribió un contrato de trabajo como ejecutivo en la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima, estableciéndose en la cláusula octava que la empresa le abonaría una remuneración fija anual de cincuenta y cinco mil soles (S/55,000), en la que estarían comprendidas las gratificaciones semestrales establecidas por la Ley número 25139, siendo la suma amortizada por dozavos mensuales, más una asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales equivalente al cien por ciento de la fijada como remuneración fija anual en ese momento, es decir, cincuenta y cinco mil soles (S/55,000), por lo que su pretensión abarca desde el año mil novecientos noventa y cinco al dos mil dos; y, **ii)** Dicho contrato también establecía que en cada cuatritrimestre del año, la demandada pondría en conocimiento del trabajador el monto que tendrá para el año en curso la referida asignación y los objetivos que debían ser alcanzados para que se le abone dicha asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales; pero la demandada nunca señaló cuáles eran esos objetivos a ser cumplidos, incumpliendo con lo establecido en la cláusula octava, no efectuándose el pago, pues no figuran dichos conceptos en las boletas de pago del actor. **3.1.2.** La empresa Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, deduce excepción de prescripción extintiva, y contesta la demanda[8], solicitando que se declare infundada la misma, señalando entre otros, que: **i)** Conforme se aprecia del contrato que suscribiera el actor, se le asignó un cargo de dirección como Jefe de Área que él aceptó, conviniéndose el pago de una remuneración integral, incrementándose su remuneración, por lo que al ser un cargo de dirección no le eran aplicables los convenios colectivos, por cuanto se había acordado una remuneración integral; y, **ii)** Respecto de la cláusula octava, sobre asignación por cumplimiento de objetivos empresariales, la empresa no determinó cuáles eran los objetivos a cumplir, en ese sentido, no se podía acceder al pago, por cuanto no se puede cuantificar dicho monto, por lo que no se le puede obligar al pago. **3.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.** El a quo, mediante la sentencia contenida en la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas novecientos cincuenta y nueve, que declaró fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales; en consecuencia, dispuso que la demandada abone a favor del demandante, la suma de trescientos treinta y nueve mil trescientos setenta y nueve soles con treinta y ocho céntimos (S/339,379.38). Sosteniendo el juez de la causa: **i)** Que, la asignación por cumplimiento de objetivos empresariales nace de un contrato suscrito entre el trabajador y la empresa, como se corrobora a fojas ciento noventa y dos, estableciéndose una remuneración integral y además una asignación económica por cumplimiento de objetivos – ACOE, para lo cual, debía comunicar la empleadora cada cuatritrimestre de cada año el monto de la referida asignación y los objetivos a ser alcanzados para abono; y, **ii)** Siendo la asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales un concepto remunerativo, por cuanto presenta características tales como ser contraprestativo, al derivar su pago de los servicios prestados por el actor a favor de la demandada, habiéndose demostrado la naturaleza remunerativa del incentivo antes anotado desde el primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, corresponde su pago a partir de mil novecientos noventa y siete, conforme a la cláusula quinta del referido contrato, considerándose los montos a cuenta depositados por la demandada; con respecto al año dos mil dos, su abono corresponde en el año dos mil tres, y atendiendo a que la ACOE consistía en una asignación otorgada de manera anual en base a los objetivos anuales a ser alcanzados, y teniendo en cuenta que el trabajador cesó antes de haber concluido el año dos mil dos no corresponde su abono por este periodo. **3.3. SENTENCIA DE VISTA.** La Sala Superior, mediante sentencia de vista contenida en la Resolución número 9, de fojas mil ciento veintiuno, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, revocó la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales; reformándola, lo declaró infundada. Fundamenta básicamente el ad quem, que se abonaron al actor gratificaciones para que se compensaran los préstamos a cuenta de la asignación económica por cumplimiento de objetivos – ACOE, pero no se puede ordenar pagar los mismos, dado que la empresa demandada nunca señaló los objetivos a cumplir, debiendo declararse infundada la demanda en todos sus extremos. **IV.- MATERIA JURÍDICA EN DEBATE.** Corresponde a esta Sala Suprema establecer si con la expedición de la sentencia de vista apelada, la Sala Superior ha afectado o no, las normas procesales y materiales denunciadas en el caso concreto, en relación a si le corresponde al demandante el pago de los reintegros de remuneraciones y su incidencia en los beneficios que pretende, esto es, en la compensación por tiempo de servicios y utilidades por el periodo del año mil novecientos noventa y cinco hasta el año dos mil dos, a razón del reintegro del concepto asignación económica por cumplimiento de objetivos anuales – ACOE. **V.- CONSIDERANDOS: PRIMERO.-** Como se ha precisado, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; e, infracción normativa material de los artículos 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97-TR; 16 y 19 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR; 23 y los incisos 2 y 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, a efecto de verificar en primer término si se ha incurrido en transgresión del derecho fundamental del debido proceso y del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, dados los efectos nulificantes de la causal procesal citada, en caso de configurarse, corresponde empezar el análisis del recurso a partir de la misma; y de ser el caso, de no verificarse la vulneración del derecho citado, analizar la causal in iudicando, igualmente declarada procedente.— **SEGUNDO.-** Sobre el derecho fundamental del debido proceso que consagra el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional[9] ha sostenido que se trata de un derecho continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. En ese sentido, dicho órgano jurisdiccional ha afirmado que: "(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos"[10]. Entonces, la vulneración del derecho fundamental del debido proceso se verifica cuando, en el desarrollo del proceso, los jueces no respetan los derechos procesales de las partes, se

obvian o alteran actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o los órganos jurisdiccionales dejan de motivar sus resoluciones. **TERCERO.-** Ante el pedido de tutela, es deber de los jueces observar el debido proceso e impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, mientras que la tutela jurisdiccional efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia, como la eficacia de lo decidido en la sentencia, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Siendo que, con relación a esto último, la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas, conforme lo reconoce el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a nuestra Carta Magna y a las leyes; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. **CUARTO.-** Con relación a las causales procesales denunciadas, estas devienen en infundadas, pues este Supremo Tribunal constata que la Sala Superior ha desarrollado de manera motivada las consideraciones fácticas y jurídicas que sirven de sustento a la sentencia en cuestión. Así pues, a fin de justificar lo decidido, ha señalado que la asignación de cumplimiento de objetivos empresariales anuales (ACOE) estaba supeditado al cumplimiento de objetivos según lo acordado en el contrato de trabajo, que se abonaron al actor gratificaciones para que se compensaran los préstamos a cuenta de la asignación económica por cumplimiento de objetivos – ACOE, pero no se puede ordenar pagar los mismos, dado que la empresa demandada nunca señaló los objetivos a cumplir, debiendo declararse infundada la demanda en todos sus extremos. Correspondiendo seguidamente analizar las causales materiales declaradas procedentes. **QUINTO.- Sobre la Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales (ACOE).** Mediante el recurso de casación el demandante cuestiona la decisión de la Sala Superior de desestimar la demanda, invocando la naturaleza remunerativa de la ACOE pactada en el contrato de trabajo, así como el principio de irrenunciabilidad de derechos, en tanto refiere que cualquier acto de renuncia al celebrar el contrato de trabajo que suponga una desmejora de derechos para el trabajador, no tiene efecto jurídico alguno. En tal virtud, en atención a lo resuelto por la Sala Superior y a los cuestionamientos jurídicos planteados con motivo del recurso de casación, corresponde a esta Sala Suprema dilucidar: 5.1 ¿Es exigible el pago de la ACOE pactada en la cláusula quinta del contrato de trabajo celebrado el primero de mayo de mil novecientos noventa y seis? 5.2 ¿La ACOE tiene naturaleza remunerativa? **SEXTO.-** Un primer aspecto a tener en cuenta es que el derecho que se peticiona, según lo establecido por las instancias de mérito, se encuentra pactado en el contrato de trabajo celebrado entre las partes el uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, en cuya cláusula quinta se estableció: "QUINTO: Como retribución por sus servicios, LA EMPRESA abonará a EL TRABAJADOR las siguientes remuneraciones, las cuales sustituyeron íntegramente al total de las sumas que por cualquier concepto estuviera percibiendo EL TRABAJADOR: a) Una remuneración fija anual de S/ 70,000.00, suma en la que estarán comprendidos todos los beneficios legales y convencionales aplicados en la empresa (…) b) Una asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales y cuyo monto se determinará de la siguiente manera. Durante el primer cuatrimestre de cada año, LA EMPRESA pondrá en conocimiento de EL TRABAJADOR el monto que tendrá para el año en curso la referida asignación, y los objetivos que deben ser alcanzados para que aquella le sea abonada a EL TRABAJADOR en su totalidad. En el primer cuatrimestre del año siguiente, LA EMPRESA determinará si EL TRABAJADOR es acreedor a la totalidad, a una fracción, o a una suma mayor del 100% de la asignación fijada para el año anterior, procediendo LA EMPRESA a efectuar el pago correspondiente. EL TRABAJADOR podrá solicitar a LA EMPRESA préstamos a cargo de la asignación del año en curso, quedando a criterio de LA EMPRESA aceptar en todo o en parte el pedido de EL TRABAJADOR". Tratándose de una cláusula contractual, estas se someten a las disposiciones del Código Civil. Así, una primera regla aplicable la encontramos en el artículo 168 del Código Civil según el cual el acto jurídico debe interpretarse de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Y lo que se advierte de la cláusula quinta en mención, es que las partes pactaron una estructura remunerativa quinta por dos conceptos: **i)** un salario fijo de setenta mil soles (S/ 70,000.00) anuales y, **ii)** una asignación supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, llamada "Asignación por Cumplimiento de Objetivos Anuales". **SÉTIMO.-** Conforme a lo expuesto, desde la perspectiva del derecho del trabajo, esta no resiente derechos mínimos o indisponibles que integren el orden público laboral, primero porque la estructura de la nueva remuneración obedece al acuerdo entre las partes y, la segunda, porque la remuneración fija pactada supera ampliamente la remuneración mínima vital. Cabe precisar que, incluso en el supuesto hipotético de que la remuneración percibida por el trabajador demandante antes de mayo de mil novecientos noventa y seis, hubiese sido mayor a la remuneración fija pactada desde mayo de mil novecientos noventa y seis, en adelante, aún en dicho supuesto, tampoco existe afectación al orden púbico laboral porque, tratándose de las remuneraciones, el trabajador y el empleador pueden acordar la rebaja de las mismas, al amparo de la Ley Nº 9463. **OCTAVO.-** Asimismo, la Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales anuales (ACOE), está supeditada o subordinada a una condición suspensiva que dependía exclusivamente de la voluntad del empleador, conforme a lo señalado por el ad quem en su sentencia que para el otorgamiento de la ACOE debían cumplirse los objetivos que establezca el empleador, pues solo cumplido dicho requisito correspondía cancelar la ACOE en los montos que establezca la empresa para cada año, es decir, la condición necesaria para el otorgamiento del beneficio en cuestión estaba supeditada a la voluntad del empleador, pues no hay forma de que se cumplan los requisitos para el otorgamiento de la ACOE si el empleador no establece el monto que corresponde por año ni establece las metas que debía cumplir el trabajador para percibir el beneficio. Teniendo en cuenta ello, resulta inexigible el pago de la ACOE, pues, no se han dado las condiciones pactadas entre las partes para su otorgamiento. **NOVENO.-** Sobre la omisión del empleador respecto al establecimiento de las metas u objetivos que debía cumplir el trabajador para percibir la ACOE, así como la omisión respecto a la comunicación del monto que correspondía por ACOE en cada año, no es reprochable jurídicamente, en virtud a lo estipulado en el artículo 172 del Código Civil, que prescribe: "Es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que dependa de la exclusiva voluntad del deudor" En efecto, no resulta reprochable la omisión del empleador en la medida que la cláusula que establece la obligación de pago de ACOE es ineficaz en tanto se pactó una condición suspensiva que depende de la exclusiva voluntad del deudor, acuerdo que, en términos de la norma antes citada, deviene en nulo; pues si bien es cierto el artículo 176 del Código Civil establece que, se considerará cumplida la condición suspensiva si el deudor impide de mala fe el cumplimiento de la condición; dicha regla tiene como presupuesto que la condición suspensiva haya sido válidamente pactada, empero que su cumplimiento no ocurre por una acción de mala fe por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse. Ese, sin embargo, no es el supuesto del caso de autos, pues conforme hemos anotado en el párrafo que precede, la cláusula que contiene la condición suspensiva para el otorgamiento de la ACOE, técnicamente es inválida conforme al artículo 172 del Código Civil, ya que, en rigor, no se fijó una condición suspensiva que pueda servir de parámetro para exigir el pago del beneficio, sino que el otorgamiento del beneficio quedó supeditado a condición suspensiva que depende de la exclusiva voluntad del deudor. **DÉCIMO.-** En suma, el cumplimiento de la ACOE pactada en la cláusula quinta del contrato de trabajo de fecha uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, resulta técnicamente inexigible, porque se trata de un acto jurídico nulo al condicionar el otorgamiento de tal beneficio a condición suspensiva que depende de la exclusiva voluntad del deudor. Es decir, las partes no solo pactaron el otorgamiento de la ACOE al cumplimiento de una condición que, conforme ha concluido la Sala Superior, no se cumplió porque el empleador no fijó las metas objetivas que debían cumplirse anualmente; sino que, al tratarse de una condición subordinada a la voluntad exclusiva del deudor, la omisión del empleador tampoco resulta reprochable jurídicamente en virtud a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil. Por lo tanto, la discusión jurídica de si dicho beneficio tiene o no naturaleza remunerativa, ya no resulta jurídicamente relevante, porque al no haber percibido este beneficio el trabajador, no hay suma alguna que pueda incidir en la compensación por tiempo de servicios y en las utilidades, conforme a lo solicitado en la demanda. Por lo que resultan infundadas las infracciones normativas materiales de los artículos 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97-TR; 16 y 19 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 650,

Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número 001-97-TR denunciadas con motivo del recurso de casación. **DÉCIMO PRIMERO.-** Asimismo, respecto a la infracción material de los artículos 23 y 26 inciso 2 y 3 de la Constitución Política, es de apreciarse que conforme al acuerdo contenido en la cláusula quinta del contrato de trabajo de fecha uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, este no constituye un acto de renuncia a un derecho indisponible, es decir, no supone un acto que afecte o lesione el principio de irrenunciabilidad de derechos, pues, fue un acuerdo voluntario de reestructuración de remuneraciones celebrado entre el trabajador y el empleador, el cual no significó en ningún momento un pacto a un monto menor a la remuneración mínima vital vigente a la celebración del acuerdo, siendo ello si, con el acuerdo no se lesionó el principio de irrenunciabilidad de derechos reconocido en el artículo 26 inciso 1 de la Constitución Política. Ello es así porque, el principio de irrenunciabilidad de derechos prohíbe los actos de disposición o renuncia del trabajador a los derechos que se encuentran reconocidos en normas imperativas, en tanto integran el orden público laboral[11]. Sobre la base de este principio, cualquier acto de disposición por parte del trabajador a una norma imperativa no tiene ninguna eficacia jurídica. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, no opera el principio de irrenunciabilidad cuando el acto de disposición es respecto de un derecho de naturaleza laboral que proviene de una norma dispositiva, es decir, si bien las normas laborales son, por regla general imperativas, tienen en algunos casos- un componente dispositivo. Tratándose de la remuneración, el componente imperativo y, por ende, indisponible, es el derecho a la remuneración mínima; por lo que, solo será inválido el acto de disposición mediante el cual el trabajador autoriza la rebaja de su remuneración por debajo de la remuneración mínima, pues solo en dicho caso operará el principio de irrenunciabilidad de derechos como estatuto de protección laboral. Al no ser este el caso de autos, las infracciones normativas por vulneración a los artículos 23 y 26 incisos 2 y 3 de la Constitución, devienen también en infundadas. **VI. DECISIÓN.** Por las razones anotadas y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Murillo Seminario, a fojas mil ciento treinta; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la Resolución número 9, de fojas mil ciento veintiuno, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge Luis Murillo Seminario contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. Integra los Jueces Supremos Ato Alvarado y Pinares Silva Torres por licencia de los Jueces Supremos Castillo León y Vera Lazo. S.S. AMPUDIA HERRERA, PINARES SILVA DE TORRE, **LÉVANO VERGARA. EL VOTO DE LOS JUECES SUPREMOS CABELLO MATAMALA Y ATO ALVARADO, ES COMO SIGUE: VISTA**; la causa número veintidós mil trescientos setenta y dos, guion dos mil dieciocho, en audiencia llevada de la fecha, y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, **Cabello Matamala**; se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO.** Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante **Jorge Luis Murillo Seminario** mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que corre a fojas mil ciento treinta, contra la sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número cincuenta y cinco de fecha treinta de noviembre del dos mil diecisiete, que resuelve declarar fundada en parte la demanda; y reformándola la declara infundada, en los seguidos por Jorge Murillo Seminario contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta; sobre pago de remuneraciones y beneficios sociales. **II. CAUSALES DEL RECURSO.** La parte recurrente invocando el artículo 56 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, denuncia como causales de su recurso: **i) Contravención al debido proceso, previsto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. ii) Interpretación errónea del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. iii) Interpretación errónea del artículo 19 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR. iv) Interpretación errónea del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 001-97-TR. v) Inaplicación del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR. vi) Inaplicación del artículo 23 y los incisos 2 y 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO. PRIMERO.** El recurso de casación reúne los requisitos de procedencia del artículo 55 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal de Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 57 de la citada ley. **SEGUNDO. De la pretensión del demandante y pronunciamientos de las instancias de mérito. a) Demanda:** Conforme se aprecia del escrito presentado por el accionante, que corre en fojas dieciséis y siguientes, pretende el reintegro de remuneraciones y beneficios sociales por pago de remuneraciones no otorgadas por el no pago de la asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales, acordados según contrato, por el monto de S/ 920,310.68, por el periodo correspondiente del años mil novecientos noventa y cinco al dos mil dos. **b) Contestación:** La demandada afirma no haber abonado dicha asignación, y siendo que su percepción estaba sujeto una condición suspensiva que no fue cumplida ya que no fue comunicado al demandante ni el monto de cada asignación por cumplimiento de objetivos, ni los objetivos propuestos por cada año, por tanto, no corresponde al demandante la percepción de dicho beneficio ni los reintegros de la compensación de tiempo de servicios reclamados. **c) Sentencia de primera instancia:** El Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Laboral Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, declaró fundada en parte la demanda, ordenando a la recurrente abonar a favor del demandante la suma de S/ 339,379.38. Como fundamentación expone que el incentivo denominado Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE) presenta características, tales como ser contraprestativo, al derivar su pago de los servicios prestados por el actor a favor de la demandada; en ese sentido, se ha demostrado la naturaleza remunerativa del incentivo antes anotado desde el año dos mil, criterio que es concordancia con lo previsto en el artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que procede la integración de dicho concepto para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y utilidades pretendidas por el actor. **d) Sentencia de segunda instancia:** El Colegiado de la Segunda Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, revocó la sentencia emitida en primera instancia, y reformándola declararon infundada, argumentando que el contrato celebrado con el demandante, la asignación estaba condicionada al cumplimiento de objetivos empresariales anuales. Sin embargo, tal como se aprecia de los actuados, dichos objetivos no fueron oportunamente determinados, siendo que durante los años mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y nueve, no se establecieron ni precisaron los objetivos que persigue, ni la calificación que implicaba su determinación económica, para ser aplicados concretamente a los trabajadores. **TERCERO. De la calificación de las causales.** a) Sobre la causal contemplada en el **ítem i)**, debemos decir, que el recurso de casación por su carácter extraordinario solo resulta procedente por las causales taxativamente establecidas en el artículo 56 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, relativos a la interpretación errónea, la aplicación indebida o la inaplicación de normas de derecho material; por tal motivo, no resulta admisible la invocación como causal casatoria de normas de derecho adjetivo, por no encontrarse expresamente estipuladas en la norma procesal laboral; por tal motivo, la causal bajo análisis deviene en **improcedente.** b) En cuanto a las causal descrita en el **ítem ii),** debemos señalar que la causal de interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso específico; sin embargo, al momento de aplicar dicha norma a los hechos acreditados en el proceso le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. En el presente caso, se aprecia que la norma legal que se invoca no forma parte del sustento jurídico de la resolución impugnada, es decir, no ha sido aplicada por lo que resulta contradictorio denunciar la causal de interpretación errónea; por lo expuesto esta causal deviene en **improcedente**. c) En referencia a la causal contenida en el **ítem iii)**, se debe decir que la parte recurrente ha cumplido con la exigencia contemplada en el inciso b) del artículo 58 de la Ley Nº 26636,

Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; deviniendo en **procedente.** d) En las causales, contenidas en los **ítems iv)** y **v),** la parte recurrente denuncia interpretación errónea e inaplicación del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, debemos decir que estas causales resultan imprecisas, considerando que no es posible denunciar la interpretación errónea e inaplicación respecto de una misma norma, por ser éstas excluyentes entre sí, quedando así indeterminada la materia de fondo sobre la que este Colegiado debería pronunciarse, por lo que devienen en **improcedentes**. e) En referencia a la causal invocada en el **ítem vi),** se aprecia que el recurrente no ha cumplido con sustentar de forma clara y precisa por qué debió aplicarse dichas normas jurídicas, requisito establecido en el inciso c), del artículo 58, de la Ley Nº 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; razón por la que esta causal deviene en **improcedente**. **CUARTO: De la causal declarada procedente.** La causal contenida en el **ítem iii), interpretación errónea del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR,** precisa: "Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego; (…)". Aunado a ello, es preciso concatenar el **artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR**, que establece lo siguiente: "Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se **excluyen los conceptos contemplados en los artículos 19** y 20". (El sombreado es nuestro). **QUINTO. Delimitación del objeto de pronunciamiento.** Conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, el tema en controversia está relacionado a determinar si los conceptos por Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE) percibidos por el demandante, tienen carácter remunerativo o, por el contrario, constituyen gratificaciones extraordinarias, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR. **SEXTO. Definición de remuneración.** La remuneración es todo pago en dinero y excepcionalmente en especie, que percibe el trabajador por los servicios efectivamente prestados al empleador o por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del mismo. El concepto de remuneración comprende no solo la remuneración ordinaria sino todo otro pago que se otorgue cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, salvo que por norma expresa se le niegue tal calidad. El Convenio Nº 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección del salario, define al respecto lo siguiente: "(…) el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". Por su parte, Anacleto Guerrero[12] refiere lo siguiente: "Viene a ser el íntegro de lo que el trabajador recibe como contraprestación por sus servicios que otorga, y que se percibe ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición". **SÉTIMO. Naturaleza jurídica de la remuneración.** La remuneración se encuentra prevista en el ya citado artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, modificado por la Ley Nº 28051, publicada el dos de agosto de dos mil tres. La remuneración es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, que establece: "(…) El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores." Rendón Vásquez[13], sobre este tema escribe lo siguiente: "(…) El carácter jurídico dimana del hecho de ser la remuneración una contraprestación que en la estructura del contrato de trabajo, ya como un acuerdo, ya como una relación en ejecución, equilibra la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Esta reciprocidad obligacional constituye la causa del contrato (…) y es esencial en el contrato de trabajo. No podría existir éste si el trabajo fuera gratuito, si ambas partes así lo deciden, como por ejemplo en los trabajos llamados benévolos, de ayuda desinteresada, en espera de una actitud similar del beneficiario de la labor (…) Otro efecto del carácter jurídico de la remuneración es la imposibilidad legal de las partes de variarla unilateralmente (…)." En consecuencia este derecho fundamental puede servir de base de cálculo para efectos de beneficios sociales, tales como vacaciones, compensación por tiempo de servicios, indemnización por vacaciones truncas y otros beneficios sociales. **OCTAVO. Características de la remuneración.** Conforme a la doctrina, las características de la remuneración son: **a) carácter alimenticio**, se desprende del hecho que por estar dedicado el trabajador en forma personal a cumplir con sus labores a favor del empleador, no puede desarrollar otras actividades que le permitan satisfacer las necesidades de subsistencia de él y de su familia, debiendo atender dichas necesidades con la remuneración que percibe; **b) carácter dinerario**, implica que la remuneración debe ser pagada en dinero, pues esta le permite al trabajador y su familia adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, en cuanto al pago en especie, si bien es cierto, la ley lo permite consideramos posible aceptar que solo una parte de la remuneración sea abonada en especie, pues un criterio en contrario solo favorecería el abuso del empleador; y **c) carácter de independencia del riesgo de la empresa**, significa que las pérdidas que sufra la empresa como consecuencia de la naturaleza aleatoria de la actividad económica no pueden perjudicar las remuneraciones de los trabajadores, pues el empleador es el único responsable de la explotación del negocio. **NOVENO. Alcances para determinar el carácter remunerativo de un concepto.** Para determinar que un pago hecho a un trabajador (en dinero o especie) tiene carácter remunerativo, debe cumplir con las siguientes condiciones: **i)** Que lo percibido (cualquiera que sea la denominación que se le dé) sea como contraprestación de los servicios del trabajador; **ii)** Que sea percibida en forma regular; y **iii)** Que sea de su libre disposición, esto es, que el trabajador dentro de su ámbito de libertad pueda decidir el destino que le otorga. Además, debe tenerse en cuenta que el dinero u otro pago en especie que abone el empleador a su trabajador, no dependerá su naturaleza exclusivamente por la denominación que le haya sido asignada, sino por la finalidad que tiene dicha prestación. En consecuencia, resulta necesaria la aplicación del principio de primacía de la realidad, para determinar el carácter remunerativo[14]. **DÉCIMO. Solución al caso concreto.** De acuerdo a lo expresado por las partes, el concepto denominado Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE) ha sido abonado a favor del demandante, es así que, del contrato de fecha primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, que corre a fojas ciento noventa y dos a ciento noventa y cinco, se aprecia de la cláusula quinta, lo siguiente: "QUINTO: Como retribución por sus servicios la EMPRESA abonara a EL (LA) TRABAJADOR(A) (…) Una asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales y cuyo monto se determinara de la siguiente manera. Durante el primer cuatrimestre de cada año, la EMPRESA pondrá en conocimiento de EL (LA) TRABAJADOR(A) el monto que tendrá para el año en curso la referida asignación, y los objetivos que deben ser alcanzados para que aquella le sea abonada a EL (LA) TRABAJADOR(A) en su totalidad. En el primer cuatrimestre del año siguiente, LA EMPRESA determinará si EL (LA) TRABAJOR (A) es acreedor a la totalidad, a una fracción, o a una suma mayor al 100% de la asignación fijada para el año anterior, procediendo la EMPRESA a efectuar el pago correspondiente. (…)" **DÉCIMO PRIMERO.** En atención a lo expuesto, se aprecia que el concepto de Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE), contenía obligaciones asumidas por la empresa demandada para determinar el pago de la misma, en la que debe señalar el monto y los objetivos que tendrá para el año en curso y señalar si el trabajador es acreedor de la asignación; sin embargo, de la revisión de autos se aprecia que la parte demandada no ha cumplido con acreditar con la primera obligación, situación que evidencia una conducta indebida de la parte demandada. **DÉCIMO SEGUNDO.** Al respecto, si bien la emplazada argumenta que la fuente de la asignación cuestionada es por el cumplimiento

de los resultados esperados por la empresa, también es cierto que de la revisión de autos no se acredita que dicha parte ha cumplido con sus obligaciones de comunicar de manera oportuna al demandante sobre los montos y objetivos que tendrá para cada año, y que efectivamente cumplió con los mismos, pues, no resultan suficientes meras comunicaciones formales, consignando el monto de abono. Adicionalmente, del Anexo I del contrato de trabajo, que corre en fojas ciento noventa y cinco, se aprecia: "(…) la base de cálculo para la determinación del incentivo aplicable al ejercicio 1996 será una cantidad equivalente al 74% de la fijada como remuneración fija anual (…)", supuesto que denota que no es concepto extraordinario. **DÉCIMO TERCERO.** En atención a lo expuesto y en aplicación del principio de primacía de la realidad, se llega a concluir, que el concepto denominado Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE), presenta: i) La naturaleza de retribución indirecta que emerge del acto unilateral del empleador; y, ii) Han sido abonados en forma habitual, anualmente; hecho que es corroborado por la misma demandada conforme se aprecia en su contestación, obrante a fojas trescientos trece, por lo cual, habiéndose otorgado por más de dos años, denota que no han sido conceptos meramente ocasionales y extraordinarios, sino permanente; máxime aún si la emplazada no ha cumplido de forma íntegra con las obligaciones señaladas en el considerando décimo primero, en cada año, las cuales tienen la carga probatoria, de acuerdo al artículo 27 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo; y iii) Tiene la calidad de concepto de libre disposición; características que como se ha precisado en los considerandos precedentes advierten de su naturaleza remunerativa; además, que la demandada establece que es un acto de liberalidad de acuerdo a lo expuesto en autos. **DÉCIMO CUARTO.** En ese contexto, en aplicación de los artículos 9 y 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, se determina que los montos abonados por asignación por cumplimiento de objetivos empresariales anuales (ACOE), tiene carácter remunerativo, lo cual excluiría el carácter de "suma extraordinaria" otorgado por la demandada, en atención al artículo 19 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, para ser considerada como tal. Por consiguiente, resulta acorde a ley que se integre los montos antes notados en forma proporcional para el cómputo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y la participación de utilidades. **DÉCIMO QUINTO.** Siendo así, se concluye que el Colegiado Superior ha e interpretado erróneamente el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, así como también ha inaplicado el artículo 9 antes referido pues, determinó que los montos abonados por Asignación por Cumplimiento de Objetivos Empresariales Anuales (ACOE), constituyen gratificaciones extraordinarias; sin embargo, como se ha establecido en el considerando precedente, tienen naturaleza remunerativa; en consecuencia, resulta acorde a derecho declarar **fundada** dicha la causal. Por estas consideraciones, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Jorge Luis Murillo Seminario** mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, **y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON** la **sentencia apelada** de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró fundada en parte la demanda; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso laboral seguido por Jorge Luis Murillo Seminario contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre reintegro de beneficios sociales y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S. CABELLO MATAMALA, ATO ALVARADO.**

---

1 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…)

2 Artículo 6.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.

3 Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego; b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa; c) El costo o valor de las condiciones de trabajo; d) La canasta de Navidad o similares; e) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados; f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada; g) Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva; h) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia; i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador;
j) La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente, o cuando se derive de mandato legal.

4 Artículo 16.- Se considera remuneración regular aquélla percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Por excepción, tratándose de remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses en cada período de seis, a efectos de los depósitos a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley. Para su incorporación a la remuneración computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre seis. Es igualmente exigible el requisito establecido en el párrafo anterior, si el período a liquidarse es inferior a seis meses.

5 Artículo 23º.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

6 Artículo 26º.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…)
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

7 Por escrito de fojas 16.

8 A fojas 47.

9 En el Expediente Nº 03433-2013-PA/TC, sentencia de fecha 18 de marzo de 2014, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. SERPOST S.A. Fundamento jurídico 3.

10 En el Expediente Nº 7289-2005-AA/TC, sentencia de fecha 3 de mayo de 2006, en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fundamento jurídico 5.

11 Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente Nº 008-2005-PI/TC, en el que sobre el principio bajo análisis refiere: "(…) el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe los actos de disposición del trabajador, como titular de un derecho (…) se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral" (fundamento jurídico 24).

12 ANACLETO GUERRERO, Víctor. "Manuel de Derecho del Trabajo". Lex & Iuris Grupo Editorial, Lima, 2015, p. 160.

13 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. "Derecho del Trabajo Individual". Ediciones EDIAL E.I.R.L. Quinta Edición, Lima, 2000, pp. 298-299.

14 Principio que constituye uno de los instrumentos de mayor relevancia en el Derecho de Trabajo, por cuanto permite al Juez establecer la verdadera naturaleza de una relación contractual, privilegiando lo que sucede en el campo de los hechos, sobre lo que puedan contener los documentos, principio que ha sido positivisado en el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

C-2246709-66

CASACIÓN LABORAL Nº 22419-2021 LIMA NORTE

Materia: RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO LABORAL
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación

interpuesto por **la entidad demandada Municipalidad Distrital de Independencia**, contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, que **confirmó** la sentencia de primera instancia, de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, la desnaturalización e invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos desde el primero de noviembre de dos mil catorce que a la fecha continua; reconoce como vínculo laboral en atención a la desnaturalización de los contratos, la existencia de una relación laboral con contrato a plazo indeterminado bajo el régimen común en calidad de obrero, con fecha de ingreso primero de noviembre de dos mil catorce y que a la fecha continua; el pago de beneficios sociales que demanda por el importe de S/ 10,825.00, los cuales deberán abonar la demandada a favor del demandante; e improcedente el pago de asignación familiar; respecto al pago de la compensación por tiempo de servicios; ordenó el depósito en la suma de S/ 6,350.69 en una entidad bancaria previa solicitud del demandante; estima el pedido de adquisición de póliza de seguro de vida; y, dispone elevar los actuados en la Sala de Derecho Constitucional y Social en caso de no interponerse recurso de casación; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". El último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el siete de enero del dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones de fiestas patrias y navidad, asignación familiar y compensación por tiempo de servicios, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/ 17,175.69. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare **la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la ineficacia de los contratos administrativos de servicios** sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simplemente alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la NLPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, que es descrita en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por lo que las reglas de competencia previstas en la NLPT tengan como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la prescripción final de la NLPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de cien (100) unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de verdaderas pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de invalidez de los contratos administrativos de servicios o la declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la NLPT. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar de manera correcta la formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; afirmando por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla

razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Municipalidad Distrital de Independencia**, contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte; y, **habiéndose además elevado en consulta el control difuso ejercido** por la Sala Superior respecto del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, inaplicándolo, corresponde su absolución por el órgano jurisdiccional competente; por lo que, de conformidad con el artículo 14[2] del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; dispusieron: **REMITIR** los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que de acorde a su competencia absuelva la consulta efectuada por la Sala Laboral Permanente de Lima Norte; en los seguidos por Eduardo Eulogio Postigo Uribe contra la Municipalidad Distrital de Independencia, sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros. **Ponente, señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE: La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. Excepcionalmente, la calificación será procedente si en el pronunciamiento materia de casación, se evidencia contravención a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto o si contraviene la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 384 y 392-A del Código Procesal Civil, normas de aplicación supletoria en los procesos laborales. S.S. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021

[2] Artículo 14: "(…) cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema (..)"

C-2246709-67

CASACIÓN Nº 22845-2021 LIMA NORTE

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Municipalidad Distrital de Los Olivos,** contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia apelada que declara fundada la demanda, en consecuencia, declara la desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscrito por las partes desde el 1 de agosto de 2018 y se ordena que la demandada reconozca a la actora como trabajadora obrera (áreas verdes) sujeto al régimen laboral de la actividad privada a plazo indeterminado desde el 1 de agosto del 2018, consignando en la planilla de remuneraciones y en las boletas de pago desde la fecha de ingreso. Estima la demanda sobre reposición por despido incausado, por lo que se ordena a la demandada cumpla con reponer al demandante a su puesto de trabajo que venía desempeñando para la demandada, es decir, como obrero de áreas verdes. Dispusieron el pago de beneficios sociales: gratificaciones, bonificación extraordinaria 9%, asignación familiar, vacaciones, incluido el laudo 2012, por costo de vida y por movilidad; así como los beneficios convencionales otorgados por el día del trabajador municipal, bonificación vacacional, escolaridad, debiendo la entidad demandada cumplir con pagar a la demandante la suma de S/7,714.31 por los conceptos descritos; asimismo, cumpla la demandada con depositar a la cuenta bancaria de compensación por tiempo de servicios de la demandante la suma de S/ 893.35, así como los beneficios sociales antes citados que se devenguen que se liquidaran en ejecución de sentencia; más intereses legales y costos procesales. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio extraordinario, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la citada Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: **i)** La infracción normativa; y, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República; ; por tanto, esta Sala Suprema procede a calificar el recurso materia de autos con arreglo a la norma citada. **TERCERO.** Asimismo, el recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **CUARTO.** Conforme se aprecia del escrito de fojas 3 y siguientes, la accionante solicita la desnaturalización de contratos de locación de servicios del 1 de agosto de 2018 y, se ordena que la demandada reconozca a la actora como trabajadora obrera (áreas verdes) sujeto al régimen laboral de la actividad privada a plazo indeterminado desde el 1 de agosto del 2018, consignando en la planilla de remuneraciones y en las boletas de pago la fecha de ingreso. Pretende la reposición por despido incausado, por lo que se ordena a la demandada cumpla con reponer al demandante

a su puesto de trabajo como obrero de áreas verdes. Ordena el pago de beneficios sociales y laudos arbitrales: gratificaciones, bonificación extraordinaria 9%, asignación familiar, vacaciones, incluido los laudos 2012 y 2013, por costo de vida y por movilidad; así como los beneficios convencionales otorgados por el día del trabajador municipal, aniversario de distrito, bonificación vacacional, escolaridad, debiendo la entidad demandada cumplir con pagar a la demandante la suma de S/ 8,338.96, por los conceptos descritos; asimismo, cumpla la demandada con depositar a la cuenta bancaria de compensación por tiempo de servicios de la demandante la suma de S/ 1,002.03. Así como los beneficios sociales antes citados que se devenguen que se liquidaran en ejecución de sentencia; más intereses legales y costos procesales. **QUINTO.** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se verifica que el recurrente no consintió la sentencia de primera instancia ya que la apeló, conforme se verifica del recurso de apelación interpuesto, por lo que se cumple este requisito; asimismo, señala su pedido casatorio como revocatorio, cumpliendo con la exigencia prevista en el inciso 4) de la citada norma. **SEXTO.** En el recurso de casación se invoca como causales previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 29497, esto es, la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; a tal efecto se denuncia: **i) Apartamiento del precedente vinculante emitido por la Corte Suprema de la República contenido en la Casación Nº 12901-2014- Cusco y artículo 9 del Decreto Supremo Nº 010-2009-TR,** refiere que el juzgador realiza interpretaciones subjetivas respecto de la vulneración de la libertad sindical que habría sufrido el demandante, señalando que este no pudo afiliarse al Sindicato SINTROMO por cuanto no contaba con vínculo laboral y sólo mantenía un vínculo contractual de naturaleza civil; sin embargo tal posición no es sustentada adecuadamente. **SÉTIMO.** Antes del análisis de la causal propuesta es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **OCTAVO.** Respecto a la causal invocada, se aprecia que no cumple con el requisito de procedencia contenido en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, debido a que la Casación Nº 12901-2014, no constituye precedente vinculante conforme lo establece el artículo 40 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; aunado a ello, la recurrente pretende que este Tribunal Supremo realice un examen de la conclusión arribada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, la causal denunciada **deviene en improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada **Municipalidad Distrital de Los Olivos,** contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; en el proceso laboral seguido por Zanaduth Katicsa Rivera Cajamarca contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos, sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y notifíquese. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. – S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO,m AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. C-2246709-68**

CASACIÓN Nº 22926-2022 PUNO

Materia: PAGO DE REMUNERACIONES INSOLUTAS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, interpuesto por el demandante **Carlos Adolfo Luján Urviola**, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de remuneraciones no canceladas por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil veinte), ordenándose a la demandada, el pago de S/2,261.07 a favor de la demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso), consecuentemente, en el supuesto de haberse amparado lo pretendido, no superaría el monto exigido en la norma. Por estas consideraciones, en aplicación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante **Carlos Adolfo Luján Urviola**, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Carlos Adolfo Lujan Urviola contra La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, sobre pago de remuneraciones insolutas; y los devolvieron**. Ponente señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-69

CASACIÓN Nº 22964-2022 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintidós de setiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por el demandante **Ángel Bonifacio Núñez Valdivia**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. En el presente caso, se advierte que la sentencia de vista confirma la apelada que declara infundada la demanda; sin embargo, se advierte que el **monto del petitorio** es de **S/26,532.24**, monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso); incluso, en el supuesto que se hubiese amparado lo pretendido, evidentemente no superaría el monto exigido por el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **TERCERO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones, en aplicación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante **Ángel Bonifacio Núñez Valdivia**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Ángel Bonifacio Núñez Valdivia contra la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad

Anónima – Sedapar S.A., sobre pago de beneficios sociales; y los devolvieron**. Ponente señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-70

CASACIÓN Nº 23202-2021 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, dos de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, que **confirma** la sentencia apelada de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, que declara **fundada** la demanda; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo (en adelante LPT). **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por incidencia del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales; así como el pago de intereses, costas y honorarios profesionales. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.** La sentencia de vista se pronuncia sobre el reintegro de bono por función jurisdiccional por los efectos retroactivos de la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ; sin embargo, no se ha justificado debidamente por qué no se ha aplicado lo previsto en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional. **(ii) Infracción normativa del primer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional.** No corresponde aplicar el carácter retroactivo de la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ. **(iii) Infracción normativa del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR y del artículo 19 literal a) del Decreto Supremo Nº 001-97-TR.** El bono y las asignaciones excepcionales fueron otorgados como gratificaciones extraordinarias a título de liberalidad y sin carácter remunerativo porque existe impedimento presupuestal de reajustar remuneraciones. Además, los descuentos efectuados al demandante se efectuaron solo respecto a la remuneración básica. **(iv) Infracción normativa de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 y del artículo 19 de la Ley Nº 28112.** Presupuestalmente no se puede reajustar la remuneración de los trabajadores de la administración pública por falta de financiamiento. **SEXTO.** Identificadas las causales procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuación: **vi.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso ítem (i)-, pero no expresa la incidencia formal directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada porque en sus fundamentos no identifica el quebrantamiento de ninguna de las garantías reguladas en el inciso 3 del artículo 139 de la Carta Magna, es decir, no ponen en manifiesto un vicio trascendente que origine la nulidad de la sentencia; al contrario, cuestiona el razonamiento adoptado por las instancias de mérito en base al cual declararon fundada la demanda, por tanto, más que una vulneración al debido proceso, la parte recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada, pero ello no forma parte de la infracción normativa postulada. **vi.2.** Por otro lado, en el ítem (ii) indica una supuesta infracción al artículo 81 del Código Procesal Constitucional porque no debe aplicarse retroactivamente la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ, pero el referido artículo regula justamente lo contrario porque prescribe el efecto retroactivo de la nulidad declarada en los procesos de acción popular, por tanto, la casacionista no cumple con identificar y sustentar la infracción normativa, ni su incidencia en la decisión cuestionada. **vi.3.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales ítems (iii) y (iv)- también se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, ante lo cual corresponde señalar que existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascendente para ejercer control casatorio. **vi.4.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia; lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la parte demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil veinte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Emilio Roberto Montañez Criado contra el Poder Judicial, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Casación Nº 10277-2016-Ica de fecha 08 de agosto de 2018.
Casación Nº 1112-2014-Lima de fecha 28 de abril de 2016.
Casación Nº 04265-2020-Ica de fecha 01 de diciembre de 2021.

C-2246709-71

CASACIÓN Nº 23346-2019 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL LEY Nº 26636

Lima, once de octubre de dos mil veintidós

VISTO y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Alejandro Rey Pareja Morante**, por escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, que: "HA RESUELTO: 1. CONFIRMAR la Resolución Nº 05 emitido en Audiencia Única de fecha 12 de enero de 2010, obrante de fojas 348 a 350, que declara INFUNDADAS la excepción de oscuridad y/o ambigüedad en el modo de proponer la demanda de caducidad, e improcedente la excepción de prescripción. 2. CONFIRMAR la Resolución Nº 23 de fecha 30 de mayo de 2014, obrante a fojas 967 a 968, que declara INFUNDADA la observación y el pedido de ampliación formulada por la demandada. 3. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, obrante de fojas 1358 a 1376, que declara INFUNDADA la demanda de fojas 117 a 129, que declara: INFUNDADA la demanda sobre reintegro de sueldo básico y otros; sin costas ni costos; y, consentida o ejecutoriada que sea la presente, ARCHÍVENSE DEFINITIVAMENTE los de la materia". Para cuyo efecto debe calificarse los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre

que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO.** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO.** Se aprecia de la demanda de fecha veinte de julio de dos mil nueve, que el demandante solicita que el pago de S/296,000.00 por concepto de reintegro de sueldo básico, por efecto de la evaluación y homologación de las categorías y funciones, más intereses legales, con costas y costos del proceso. **QUINTO.** El recurrente denuncia como causales de su recurso las siguientes: **1. Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.** Refiere que, el Colegiado Superior no ha tenido a bien considerar el objeto de la demanda, en tanto, no ha merituado que la pretensión se encuentra comprendida en el reintegro del sueldo básico respecto del periodo comprendido entre el uno de septiembre de mil novecientos noventa y seis al treinta de diciembre de dos mil ocho, además del pago de los intereses legales. Asimismo, señala que la instancia de mérito sustenta su decisión en la celebración de un convenio colectivo, así como, respecto a un presunto pacto de remuneración integral anual. **2. Infracción normativa por inaplicación del inciso 2) del artículo 2° y del inciso 1) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú.** Refiere que, el principio de igualdad se ve trastocado cuando, en el caso de autos, no toma en cuenta que la demandada ha sido quien ha otorgado la categoría, cargo, nivel laboral y funciones al demandante, calificándolo con sus pares como Técnico II. **3. Infracción normativa respecto de la aplicación de la Casación Nº 208-2005-Pasco.** Refiere que, las conclusiones del Colegiado Superior yerran puesto que pretende otorgar a la casación, citada precedentemente, la categoría de precedente vinculante y además naturaleza normativa; sin embargo, no ha tenido en cuenta que dicho pronunciamiento no detenta la categoría de precedente vinculante, ni puede constituirse en supuesto a partir del cual debe resolverse toda controversia. **SEXTO.** Sobre las causales denunciadas en los **numerales 1), 2) y 3);** corresponde manifestar que las causales de casación se encuentran previstas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. En el caso concreto, se advierte que las invocadas no se encuentran previstas como causales de casación en la norma citada, además que, se verifica que las mismas han sido denunciadas sin tener en cuenta que se trata de un proceso ordinario laboral, tramitado con la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, norma a la cual debió recurrir; además que se verifica que el sustento de las causales, están orientadas a que este Tribunal Supremo realice una nueva revisión de hechos y medios probatorios, lo que no se condice con la naturaleza casatoria del presente recurso; por lo que, la casual invocada devienen en **improcedente**. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021: Declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Alejandro Rey Pareja Morante**, por escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, expedida por la Sala Laboral Transitoria – Sede Alimar-Corte Superior de Justicia de Lima; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por el recurrente, contra la demandada, **Telefónica del Perú S.A.A.,** sobre incumplimiento de normas laborales; interviniendo como **ponente**, la señora juez suprema **Vera Lazo**; y los devolvieron. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-72**

CASACIÓN LABORAL Nº 23389-2019 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL, LEY Nº 26636-LPT
Sumilla: El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, así como la observancia de las disposiciones procesales que se encuentran vigentes, situación que no ha sucedido en el presente proceso.

Lima, once de octubre de dos mil veintidós

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número veintitrés mil trescientos ochenta y nueve, guion, dos mil diecinueve, llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia. **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación interpuesto por **MILAGROS VANESSA ALANIA VALCARCEL,** por escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve**;** contra la **Sentencia de Vista** de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve; expedida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **CONFIRMARON** la **Sentencia Apelada** de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, que resolvió declarar infundada la demanda. CAUSALES DEL RECURSO: La recurrente invocando el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, denuncia como causales de su recurso: **1. Contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso reguladas por los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 2. Interpretación errónea de una norma de derecho material respecto al artículo 4 del Decreto Supremo N°003-97-TR** CONSIDERANDO: **PRIMERO.** El artículo 58° de la Ley Nº 26636, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, señala que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada norma, las cuales son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material; **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material; **c)** La inaplicación de una norma de derecho material; y, **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y según el caso, la parte recurrente indique lo siguiente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma; **c)** cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y, **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. **SEGUNDO.** Se aprecia de la demanda de fecha dieciocho de julio de dos mil seis, subsanado por escrito de fecha once de octubre de dos mil seis, la demandante solicita el pago de beneficios sociales en los conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades, así como el pago de condiciones de trabajo y salariales del personal de empleador estables, más intereses legales. **TERCERO.** La Jueza del Vigésimo Juzgado Laboral Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, resolvió: "**INFUNDADA** la demanda de reintegro de beneficios sociales, interpuesta por doña **MILAGROS VANESSA ALANIA VALCARCEL;** en consecuencia, se absuelve de la instancia a la empresa **TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.**; **y, TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION PERU S.A.C.,** sin costos ni costas**". CUARTO.** El Colegiado de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, resolvió: "1. REVOCAR la Resolución Nº 12 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de abril del 2007, corriente de fojas 621 a 624, en el extremo que declara improcedente la oposición de las exhibiciones de las planillas y boletas de pago, REFORMANDOLA declararon fundada en parte la oposición formulada por las emplazadas; 2. CONFIRMAR la Resolución Nº 12 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de abril del 2007, corriente de fojas 621 a 624, en el extremo que declara improcedente la oposición de las exhibiciones de declaraciones juradas y cuadro de distribución de utilidades. 3. CONFIRMAR la Resolución Nº 13 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de abril del 2007, que declara INFUNDADA la impertinencia de los puntos 1,2,3,4,5 y 6 de los medios probatorios ofrecidos por la parte actora. 4. CONFIRMAR la resolución Nº 36 que contiene la SENTENCIA de fecha 04 de enero del 2017, que declara: INFUNDADA la demanda de reintegro de beneficios sociales, interpuesta por doña Milagros Vanessa Alania Valcárcel; en consecuencia, se absuelve de la instancia a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A; y TELEFÓNICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN PERÚ S.A.C, sin costos, ni costas". QUINTO. De la calificación de las causales: **5.1.**- Sobre la causal contemplada

en el **numeral 1),** se debe señalar que, si bien la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificada por la Ley Nº 27021, no establece como causal de casación las de naturaleza procesal, esto es, las relacionadas a la vulneración a la debida motivación de resoluciones judiciales y debido proceso; sin embargo, estos derecho se encuentran consagrados en el artículo 139, incisos 3) y 5) de nuestra Constitución Política, por lo tanto, en aplicación del artículo 51 del mencionado cuerpo constitucional, que establece que "la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente"; este Colegiado Supremo realizará un estudio previo y somero de todo el proceso, con la finalidad de determinar si la Sentencia Vista ha respetado y garantizado los derechos mencionados, así como verificar que la decisión emitida por las instancias de mérito sea conforme a la jurisprudencia emitida por esta Corte Suprema en casos similares, esto último en atención a la función que cumple el recurso de casación de la defensa y conservación del ordenamiento jurídico así como la unificación de la jurisprudencia nacional por esta Corte Suprema de Justicia; por lo que causal materia de análisis deviene en **procedente**. **5.2.**- Con relación a la causal contenida en el **numeral 2),** cabe señalar que la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentidos distinto al que le corresponde, En el caso concreto, si bien, la parte recurrente invoca como causal la interpretación errónea, sin embargo, no ha precisado cual es la interpretación correcta de dicho dispositivo legal, de manera que, lo que se pretende es que este tribunal Supremo realice un examen de la conclusión tomada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, lo que la causal invocada deviene en **improcedente. Respecto a la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú**. **SEXTO.** Los dispositivos mencionados regulan lo siguiente: **Artículo 139:** Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". **SEPTIMO.** La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Suprema, en la Casación Laboral Nº 15284-2018 CAJAMARCA de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se estableció como doctrina jurisprudencial vinculante: Se considerará que existe infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por falta de motivación o motivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando la resolución que se haya expedido adolezca de los defectos siguientes: 1.- Carezca de fundamentación jurídica. 2.- Carezca de fundamentos de hecho. 3.- Carezca de logicidad. 4.- Carezca de congruencia. 5.- Aplique indebidamente, inaplique o interprete erróneamente una norma de carácter procesal. 6.- Se fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes supuestas o derogadas. 7.- Se aparte de la Doctrina Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin expresar motivación alguna para dicho apartamiento. En todos los supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará la nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la Sala Superior emitir nueva resolución". **OCTAVO.** En esa misma línea de análisis, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída Nº 00728-2008-HC, publicado el ocho de noviembre de dos mil ocho, en su fundamento séptimo señaló que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: **a)** Inexistencia de motivación o motivación aparente; **b)** Falta de motivación interna del razonamiento; **c)** Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas; **d)** Motivación insuficiente; **e)** Motivación sustancialmente incongruente; y, **f)** Motivaciones cualificadas. **NOVENO**. De la revisión de autos, se aprecia que la demandante pretende con el presente proceso el reconocimiento de su vínculo laboral y el pago de sus beneficios sociales, por el periodo de enero de mil novecientos noventa y nueve hasta junio de dos mil uno, como consecuencia de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios que celebró con Telefónica del Perú S.A.A. Las instancias de mérito, han declarado infundada la demanda por no demostrarse el elemento de la subordinación. Así, la Sala Superior en el fundamento décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia impugnada, señala lo siguiente: **"DECIMO TERCERO.-** Si bien queda evidenciada, con los recibos por honorarios, la existencia de una prestación personal, no se advierte mayores elementos de dirección, fiscalización o sanción que develen una relación laboral, pues tal como señaló el Juez de la causa, en el numeral 4.19 de la sentencia, de los medios de prueba ofrecidos, tales como interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, convenios colectivos y recibos por honorarios, no demuestren que la accionante hubiese prestado servicios bajo un vínculo de subordinación respecto de la emplazada, y de las certificaciones obrantes a fojas 336 y 337 si bien se desprende la participación de la actora en actividades de capacitación ello tampoco permite establecer laboralidad. Se aprecia entonces que los medios probatorios resultan insuficientes para acreditar la existencia de una relación laboral, más aún si no existe en autos indicios adicionales que pudieran constituir rasgos sintomáticos para la acreditación de la subordinación, como son reportes, controles, ya sea en el lugar de trabajo o en la forma de trabajar, la propiedad de los bienes utilizados para la prestación del servicio, conformidades de servicios, amonestaciones, fotocheck, entre otros **DECIMO CUARTO.** Así las cosas, a partir de la revisión de los medios probatorios actuados se concluye que la accionante no ha acreditado de forma fehaciente el desarrollo de una prestación de servicios de naturaleza laboral, incumpliendo así lo establecido en el artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo que señala que corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. En ese orden de ideas, no habiéndose determinado el elemento esencial de un contrato de trabajo (subordinación), no es posible establecer que entre la demandante y las demandadas haya existido una relación de trabajo por el periodo enero de 1999 a junio de 2001". **DECIMO.** Para determinar la existencia de una relación laboral encubierta mediante un contrato de naturaleza civil o mercantil y ante la dificultad probatoria por parte del trabajador para acreditar cada elemento del contrato de trabajo: prestación personal de servicio, subordinación y remuneración, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº **3146-2012-PA/TC de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, estableció siete rasgos de laboralidad:** a) control sobre la prestación o la forma en que esta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales del demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración del demandante; y g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud. En esa misma línea, la Organización Internación del Trabajo en la Recomendación Nº 198 de la de fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, estableció algunos elementos para determinar la existencia de una relación de trabajo. Así, en el artículo 13 señaló que: a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador. **DECIMO PRIMERO**. En esa línea de análisis, de la lectura de la sentencia de vista se aprecia que la Sala Superior no efectuado un análisis pormenorizado de los rasgos de laboralidad citados anteriormente, así pues, no se advierte análisis alguno relacionado a la naturaleza de la prestación

de servicio de la demandante, quien se desempeñaba, según el informe revisorio de fecha veintiséis de julio de dos mil siete (fojas seiscientos cuarenta y dos), como ejecutiva de venta o impulsadora de ventas. Asimismo, el referido órgano jurisdiccional no argumenta las razones por las cuales los certificados de estudios emitidos por la Telefónica de Publicidad e Informática Perú S.A.C a favor de la demandante, no pueden constituir indicio de la existencia de una relación laboral; aunado al hecho que en el escrito de demanda se indica que en la actualidad entre la mencionada empresa y la accionante tienen un contrato de trabajo a plazo indeterminado con el mismo cargo que desempeñó cuando era locadora de servicios, extremo que no es negado por ninguna de las partes procesales y se corrobora con lo señalado por el perito contable en el citado informe revisorio. Si lo anterior resulta insuficiente para determinar la existencia de una relación de trabajo, las instancias de merito pueden recurrir, si así lo consideran pertinente, a la facultad contenida en el artículo 28 de la Ley Nº 26636, de actuar medios de prueba de oficio; ello con la finalidad que se pueda emitir un pronunciamiento acorde a derecho y a la realidad. **DECIMO SEGUNDO**.- Siendo ello así, si bien es cierto la nulidad constituye un recurso de ultima ratio, en el caso de autos se advierten vicios de motivación grave (motivación aparente, incongruente y deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas), siendo que el acto procesal no puede ser salvado haciendo uso de las técnicas de conservación previstas en el artículo 172 del Código Procesal Civil, en tanto no es posible subsanar, integrar o convalidar el acto procesal porque se ha lesionado el contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, máxime si en el caso de autos se ha infringido una norma expresa cuyo incumplimiento se sanciona con nulidad, como es el caso del artículo 122 del Código Procesal Civil; por tanto, se debe declarar nula sentencia de vista, debiendo la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento. **DECIMO TERCERO.-** Asimismo, se dispone que las instancias de mérito emitan pronunciamiento en el más breve plazo, para no resentir el principio-derecho de la tutela procesal efectiva y a la obligación de pronunciarse en un plazo razonable, en atención a lo regulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica; disposición que se justifica en que el caso de autos fue iniciado el dieciocho de julio de dos mil seis, teniendo a la fecha más de 15 años de tramitación. Además, en caso de volverse a impugnar las sentencias de mérito, se dispone la priorización de la calificación del recurso de apelación y casación y, de corresponder, se le dé trámite preferente en el señalamiento de la vista de la causa, lo que supone que no se observará el orden de programación ordinario sino se fijará una fecha próxima a efecto de no vulnerar el principio de celeridad procesal. Por estas consideraciones: **DECISIÓN:** Declararon **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por **MILAGROS VANESSA ALANIA VALCARCEL,** por escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, **NULA la Sentencia de Vista de fecha** ocho de julio de dos mil diecinueve; expedida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima; **ORDENARON** que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento dentro del plazo de ley y conforme a derecho; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por **la recurrente** contra **Telefónica del Perú S.A.A** y **Telefónica de Publicidad e Información del Perú SAC**, sobre incumplimiento de normas laborales. Ponente Señora **Vera Lazo**, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEON, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-73**

CASACIÓN 23400- 2022 ICA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
EXPEDIENTE EJE

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación, interpuestos por la demandada **Municipalidad Provincial de Ica** y el demandante **Marco Antonio Marquina Alcalde,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución trece de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica; los cuales, deben ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al artículo 35 inciso 1 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se interpone: "Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). (…)".- **TERCERO. –** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de beneficios económicos), ordenándose a la Municipalidad Provincial de Ica al pago de S/ 39,099.46 soles a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso) Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** los recursos de casación interpuestos por la demandada **Municipalidad Provincial de Ica** y el demandante **Marco Antonio Marquina Alcalde,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución trece de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Marco Antonio Marquina Alcalde contra la Municipalidad Provincial de Ica, sobre Pago de Beneficios Sociales; **y los devolvieron. Ponente señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-74

CASACIÓN Nº 23414-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DE DERECHOS ECONÓMICOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, interpuesto por **el demandado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; el cual debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT- . **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (reintegro de incremento Fonavi y beneficios sociales), ordenándose al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, el pago de S/21,508.32 a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44 000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). Por estas consideraciones, en aplicación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Manuel Alfredo Castro Maldonado contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, sobre pago de derechos económicos; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-75

CASACIÓN Nº 23421-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada **Municipalidad de Lurigancho – Chosica,** contra la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada** la demanda y **ordena** entre otros, a pagar la suma de S/23,693.90 por los conceptos de escolaridad y gratificaciones. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que "…corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP)". En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 0393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintitrés de enero de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones por fiestas patrias y navidad, así como las gratificaciones; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/23,693.90. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se **declare la desnaturalización de los contratos de administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 –Cusco,** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7358-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin

embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada **Municipalidad de Lurigancho – Chosica**, contra la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Timoteo Medina Arias contra la Municipalidad de Lurigancho Chosica, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021

C-2246709-76

CASACIÓN Nº 23457-2022 JUNIN

Materia: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497
EXPEDIENTE DIGITALIZADO – NO EJE

Lima, veintiocho de octubre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, interpuesto por la demandada **Municipalidad Distrital de Chilca**, contra la sentencia de vista de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (reintegro de beneficios sociales), ordenándose a la Municipalidad Distrital de Chilca el pago de S/ 25,204.34 soles a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada **Municipalidad Distrital de Chilca**, contra la sentencia de vista de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno; expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Adinson Emilio Echpas Obregón contra la Municipalidad Distrital de Chilca, sobre Reintegro de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-77

CASACIÓN Nº 23774-2021 LIMA NORTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL LEY Nº 29497
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EJE

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Municipalidad Distrital de Carabayllo,** de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, de fojas ciento veintitrés a ciento treinta y uno; contra la **Sentencia de Vista** contenida en la resolución Nº nueve, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, de fojas ciento trece a ciento veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada** la demanda y **ordena** entre otros, pagar la suma de tres mil noventa y ocho con 33/100 soles (S/3,098.33) por concepto de gratificaciones legales y escolaridad, más intereses legales y costos. Para cuyo efecto deben calificarse los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 36° de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2021-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles (S/44,000.00); y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones y escolaridad, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de tres mil noventa y ocho con 33/100 soles (S/3 098.33). Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos administrativos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simplemente alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual descrita en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por lo que las reglas de competencia previstas en la Ley Procesal del Trabajo tengan como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la prescripción final de la Ley Procesal del Trabajo que regulan la competencia del juez de paz letrado de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de cien Unidades de Referencia Procesal –100 URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de verdaderas pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la Ley Procesal del Trabajo; de ahí que, el pedido de inscripción en planillas que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR, normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los contratos tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; afirmando por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para

nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Carabayllo,** de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, de fojas ciento veintitrés a ciento treinta y uno; contra la **Sentencia de Vista** contenida en la resolución Nº nueve, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, de fojas ciento trece a ciento veinte, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por el demandante **Ramadier Acuña Tello**, contra la recurrente, sobre Pago de Beneficios Sociales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. Excepcionalmente, la calificación será procedente si en el pronunciamiento materia de casación, se evidencia contravención a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto o si contraviene la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 384 y 392-A del Código Procesal Civil, normas de aplicación supletoria en los procesos laborales. **S. CABELLO MATAMALA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-78

CASACIÓN Nº 23835-2022 LIMA ESTE

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, quince de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, interpuesto por **Rómulo Najar Lozano**, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios), ordenaron que la demandada pague a favor del demandante la suma de S/32,849.00 por el concepto de indemnización por daños y perjuicios; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTIA** el recurso de casación interpuesto por **Rómulo Najar Lozano**, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Rómulo Najar Lozano contra Sur Color Star Sociedad Anónima, sobre indemnización por daños y perjuicios; **y los devolvieron. Ponente señora Vera Lazo Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-79

CASACION Nº 24526-2018 LAMBAYEQUE

Materia: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO ESPECIAL – LEY Nº 27584
Sumilla: El juez podrá requerir al demandante precisar su petitorio atendiendo a los hechos constitutivos de su demanda, especialmente aquellos identificadores de su pretensión, y en el presente caso que la parte demandante precise los términos de su demanda y aclare los beneficios que solicita conforme al régimen laboral que estaría vigente al momento de inicio de sus labores.

Lima, uno de setiembre de dos mil veintidós.

LA CUARTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número veinticuatro mil quinientos veintiséis dos mil dieciocho – Lambayeque, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL RECURSO** Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante **Juan Sandoval Santisteban,** contra la sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, que **revoca** la sentencia apelada que declara que declara fundada en parte la demanda, **y reformándola** la declararon infundada. **II. CAUSALES DEL RECURSO** Mediante resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso extraordinario de casación interpuesto, por las causales de: **1) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar, artículo 122, inciso 6 del artículo 50 y 197 del Código Procesal Civil. III. ANTECEDENTES** A fin de establecer si en el caso de autos se ha incurrido o no en las infracciones normativas reseñadas precedentemente, es necesario realizar las siguientes precisiones fácticas sobre el proceso: **3.1 Demanda:** La parte actora **Juan Sandoval Santisteban**, interpone demanda contra el Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA-, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; a fin de que se declare la nulidad de despido de fecha 4 de julio de 2012 por haber trasgredido principios y normas del ordenamiento jurídico y se ordene su reposición con inmediatez a su centro de trabajo en su cargo de trabajador en el área de servicio de investigación de producción de arroz, dentro de INIA y se ordene el reconocimiento de sus pagos mensuales y beneficios dejados de percibir desde julio de 2012 y costos del proceso. **Refiere como fundamentos de hecho** que, ingresó a laborar para la demandada el 1 de abril

de 2008, ejerciendo funciones en el área de servicio de investigación de producción de arroz, dedicándose a la siembra, cosecha y recolección de semillas de arroz, realizando sus labores dentro de los parámetros de estricta responsabilidad y respeto, percibiendo la suma de S/432.00 mensuales y posteriormente, S/600.00 mensuales; labores que ha realizado de manera continua hasta el 4 de julio de 2012, en que tuvo conocimiento que por falta de presupuesto ya no iba a laborar en dicha entidad, encontrándose ante un despido arbitrario, solicitó reposición, no obteniendo respuesta, lo que motivó que con fecha 27 de septiembre de 2012 se acogiera al agotamiento de la vía administrativa por silencio administrativo. **3.2 Sentencia de Primera Instancia:** Mediante sentencia de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, el Juez del Noveno Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declara fundada en parte la demanda interpuesta por Juan Sandoval Santisteban, contra el Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA-, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; en consecuencia, declara nulo el despido en perjuicio del demandante, efectuado por la demandada con fecha cuatro de julio de dos mil doce, ordena que ésta proceda a la inmediata reposición definitiva del demandante en el puesto de labores que venía desempeñado o en otro, de similar jerarquía, reconociéndolo como servidor público contratado, en el plazo de cuarenta y ocho horas; declaro improcedente la demanda en el extremo referido a reconocimiento de haberes mensuales y beneficios dejados de percibir. **3.3 Sentencia de Segunda Instancia** Por su parte el Colegiado de Vista, resuelve **revocar** la sentencia apelada contenida en la resolución de fecha veintidós de agosto del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, **reformándola** declararon infundada la demanda. **Argumentando** que, si bien los servicios prestados por el demandante son propios u ordinarios en la entidad demandada, sin embargo, los recibos por honorarios presentados por la demandante, no están corroborados con algún otro medio de prueba que demuestre la vinculación directa y subordinada del demandante para ser considerada como una de naturaleza laboral; en cuanto a la constatación policial ello sólo cumplió la función de constatar el impedimento de ingreso al centro de labores, no puede interpretarse como acto extintivo de una vinculación contractual laboral. **IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA:** PRIMERO. La infracción normativa La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. SEGUNDO. En el caso concreto, las infracciones normativas están referidas a: Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar, artículo 122 inciso 6 del artículo 50, y 197 del Código Procesal Civil. **"Artículo 139:** Son principios y derechos de la función jurisdiccional **3.** La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. **5.** La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". **"Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil Artículo VII.- Juez y Derecho** "El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes". **"Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones** Las resoluciones contienen: 1.- La indicación del lugar y fecha en que se expiden; 2.- El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden; 3.- La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4.- La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; 5.- El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso; 6.- La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y, 7.- La suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo". **"Artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil** Son deberes de los Jueces en el proceso: … 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia". **"Artículo 197 del Código Procesal Civil:** Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión". TERCERO. Delimitación del objeto de pronunciamiento; Conforme a las causales de casación declaradas procedentes, el análisis debe circunscribirse a delimitar en línea de principio si se ha infringido el inciso 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, relacionado a la vulneración al debido proceso y al deber de motivación de las resoluciones. De advertirse la infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39 de la Ley Nº 294971 Nueva Ley Procesal del Trabajo; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la parte recurrente, la causal devendrá en infundada. **Alcances sobre el inciso 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.** En cuanto a la infracción normativa bajo análisis, debemos reconocer que entre los distintos elementos integrantes del derecho al debido proceso están comprendidos: **a)** Derecho a un Juez predeterminado por la ley (Juez natural); **b)** Derecho a un Juez independiente e imparcial; **c)** Derecho a la defensa y patrocinio por un Abogado; **d)** Derecho a la prueba; **e) Derecho a una resolución debidamente motivada**; **f)** Derecho a la impugnación; **g)** Derecho a la instancia plural. **CUARTO.** En efecto, **el debido proceso es** un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina: "(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa".[1] **QUINTO. Análisis del caso en concreto** Ante la situación precedentemente señalada y no advirtiéndose en el presente caso, que el petitorio de la demandada contenga una determinación clara y concreta de lo que se pide, y siendo además necesario que dilucide de manera adecuada la presente controversia al encontrarse en pugna derechos de naturaleza laboral, se hace necesario que, por esta situación excepcional, se remitan los presentes actuados al Juez de la causa a los efectos de que se requiera a la parte accionante el esclarecimiento de los términos de su demanda con la finalidad que se emita una resolución conforme a derecho. **SEXTO.** No obstante, lo expuesto, revisados lo términos de la demanda incoada, esa Suprema Sala advierte igualmente que la parte accionante estaría reclamando los derechos laborales dentro del régimen laboral de la actividad pública, al considerar que su cese laboral constituiría un despido arbitrario toda vez que solo podía ser destituido por causa justa prevista en el Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha normatividad. **SÉTIMO.** Estando a lo precedentemente señalado, resulta evidente que nos encontramos con un panorama de posturas contradictorias pues por un lado la parte accionante estaría reclamando los derechos laborales dentro del régimen laboral público del Decreto Legislativo Nº 276, vía impugnación de resolución administrativa, y por otro lado, estaríamos frente a la decisión de la Primera Sala Constitucional Y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en cuanto dispone remitir los autos a este Supremo Colegiado al advertir que el personal del INIA estaría comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728 declarándose incompetente para el conocimiento de la causa. **OCTAVO.** Ante la situación precedentemente señala y no advirtiéndose en el presente caso, que el petitorio de la demanda contenga

una determinación clara y concreta de lo que se pide, y siendo además necesario que se dilucide de manera adecuada la presente controversia al encontrarse en pugna derechos de naturaleza laboral, se hace necesario que, por esta situación excepcional, se remitan los presentes actuados al Juez de la causa a los efectos de que se requiera a la parte accionante el esclarecimiento de los términos de su demanda con la finalidad que se emita una resolución conforme a derecho. **NOVENO.** En el contexto precedentemente descrito y teniendo en cuenta que de la identificación del objeto del petitorio dependerá que se tutelen las garantías del debido proceso de las partes en conflicto y se encauce de manera idónea la presente litis, se hace necesario que el juez de la causa requiera al demandante precise los términos de su demanda y aclare los beneficios que solicita conforme al régimen laboral que le corresponde. **DÉCIMO.** En dicho sentido, resulta necesario amparar la causal procesal que nos ocupa, al advertirse vicios insubsanables que atentan con el derecho al debido proceso y acarrean por consiguiente la nulidad de la recurrida y todo lo actuado hasta la etapa previa a la admisión de la demanda, a los efectos que la parte actora aclare los términos de su demanda conforme a las precisiones realizadas en la presente resolución. **V.** DECISIÓN Por las consideraciones expuestas; declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante, **Juan Sandoval Santisteban;** en consecuencia, **NULA** la sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, **e INSUBSISTENTE** la sentencia apelada y **NULO** todo lo actuado, incluido el auto admisorio, a donde se repone la causa a los efectos de que el Juez de la causa reconduzca el proceso y requiera a la parte recurrente la aclaración de su petitorio conforme a los lineamientos esbozados en la presente resolución; y **DISPUSIERON** la publicación de ésta resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso seguido por Juan Sandoval Santisteban contra el Instituto Nacional de Innovación Agraria –INIA, sobre Nulidad de Resolución Administrativa; y devuélvase. Interviene el señor Juez Supremo Ato Alvarado por licencia de la señora Jueza Suprema Cabello Matamala. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA.

---

[1] **Faúndez Ledesma,** Héctor, "El Derecho a un juicio justo". En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17

C-2246709-80

CASACIÓN Nº 24537-2022 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Mariano Melgar,** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil veintiuno, que **confirma en parte** la sentencia de primera instancia, que declaró fundada en parte la demanda y entre otros, ordena a pagar la suma de S/800.00 por bonificación escolar, S/4,966.67 por gratificaciones, S/ 4,681.25 por vacaciones y S/ 3,857.49 por compensación por tiempo de servicios. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 0393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/440,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre una pretensión cuantificable, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de incremento de la remuneración mensual, asignación por movilidad y refrigerio, bonificación por vacaciones y asignación por aguinaldo, bonificación escolar, aguinaldo extraordinario, pago de indemnización vacacional, pago de remuneración vacacional, pago de vacaciones truncas y pago de compensación por tiempo de servicios, la misma que ha sido acogida por las instancias de mérito en el monto total de S/ 14,305.41. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare **la existencia de una relación laboral de carácter indeterminado**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 –Cusco,** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica

esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos; sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral de carácter indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Mariano Melgar**, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Alipio Puma Pérez contra la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, sobre Pago de Beneficios Económicos; y los devolvieron. **Ponente**, **señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN,** VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-81

CASACIÓN Nº 24726-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DE BENEFICIO FONAVI
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, dos de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por el **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil veinte; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios), ordenándose al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima el abono de S/21,452.75 a favor del demandante; es decir, **la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal** (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal,** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil veinte; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Beatriz Mercedes Cáceres Leturia contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, sobre Pago de Beneficios Fonavi; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.- S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-82

CASACIÓN Nº 24830-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DEL BENEFICIO DEL FONAVI
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha treinta de sétiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por el demandado **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha ocho de sétiembre de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (Pago del Beneficio del Fonavi), ordenándose al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, el pago de S/ 22,731.94 a favor del demandante; es decir, **la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00),** de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso), consecuentemente, en el supuesto de haberse amparado lo pretendido, no superaría el monto exigido en la norma. Por estas consideraciones, en aplicación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandado **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha ocho de sétiembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos Edmundo Olano Azaña contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, sobre Pago del Beneficio del Fonavi; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-83

CASACIÓN Nº 25049-2022 UCAYALI

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintisiete de octubre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO**. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada **Municipalidad Provincial de Coronel Portillo**, contra la sentencia de vista de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número cuatro, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que declaró **fundada** la demanda, y ordena entre otros, que la demandada pague a favor del demandante la suma **S/4 033.33**, por concepto de gratificaciones, remuneraciones vacacionales, bonificación extraordinaria, más intereses legales; asimismo, ordenó a la demandada que se constituya en depositaria y aprovisione la compensación por tiempo de servicios correspondiente al demandante por la suma de **S/1 439.81**, asumiendo las cargas financieras correspondientes, a efectos que sea cancelada al término del contrato de trabajo, con lo demás que contiene. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44 000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que las pretensiones buscan que se ordene el pago de beneficios sociales, comprendidos por: compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria y vacaciones; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/5 473.14 soles. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare **la desnaturalización de contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de contratos de locación de servicios, solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los contratos como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el

trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Provincial de Coronel Portillo**, contra la sentencia de vista de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Julio Delgado Ruiz contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-84

CASACIÓN Nº 25204-2022 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **el demandante José Luis Torres Málaga**, contra la sentencia de vista de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia que declara **infundada la demanda** en todos sus extremos; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo (en adelante LPT). **SEGUNDO.** Que, en atención a lo

previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, indemnización vacacional y vacaciones truncas y gratificaciones. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, **el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado a razón de un contrato verbal**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o invalidez de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación del reconocimiento del vínculo laboral no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación Nº 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que el reconocimiento del vínculo laboral o la desnaturalización de los contratos de locación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado a razón de un contrato verbal solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre el reconocimiento del vínculo laboral como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 URP para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado a razón de un contrato verbal, postulado en autos. **SEXTO.** Ahora bien, el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, no se configura pues se advierte que la sentencia de vista confirma la apelada que declara infundada la demanda en todos sus extremos, y versando la causa respecto a pretensiones cuantificables (pago de beneficios sociales), cuyo monto fue determinado en el escrito de demanda en la suma de S/40,600.00, es decir, la condena se postula en un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ, por tanto, aun en el supuesto de haberse amparado lo pretendido, no superaría el monto exigido en la norma. **SÉPTIMO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **OCTAVO.** A mayor abundamiento la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos; sin embargo, niega tajantemente que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que el reconocimiento de un contrato laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **NOVENO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe,

fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **DÉCIMO.** Así, en el presente caso, como se tiene de los considerandos primero y sexto de la presente resolución, habiendo sido desestimada la demanda en ambas instancias y habiéndose postulado un monto condenatorio ascendente a S/40,600.00, este **evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandante José Luis Torres Málaga**, contra la sentencia de vista de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por José Luis Torres Málaga contra Transporte Cuela Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

[2] Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-85

CASACIÓN Nº 25967-2022 LA LIBERTAD

Materia: REINTEGRO DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Poder Judicial contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que declara fundada la demanda, y ordena el pago a favor de la actora por la suma de treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos (S/ 38,952.22), por concepto de reintegro de remuneraciones, reintegro de bono por función jurisdiccional, reintegro de gratificaciones, reintegro de compensación por tiempo de servicios y pago de vacaciones; con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.-** El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, comprende inicialmente la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: **a)** La naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso; **b)** Los recaudos especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; **c)** La verificación del plazo: que sea interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **d)** El control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. **TERCERO.-** En el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se interpone contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, observando el plazo legal, pues la sentencia de vista se notificó a la parte recurrente el veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno, y el recurso se interpuso el once de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, se observa que la parte impugnante no adjunta el arancel correspondiente, pues es una entidad del Estado, encontrándose exonerada de dicho pago, de conformidad con el inciso G del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **CUARTO.-** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: **i)** La infracción normativa; o, **ii)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO.-** Asimismo, la parte impugnante no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEXTO.-** En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: **a)** En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la citada ley, pues se aprecia que la parte recurrente presentó su recurso impugnatorio, contra el fallo de primera instancia que le fue desfavorable; y, **b)** En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del acotado artículo 36, se tiene que la parte recurrente denuncia las causales de: **i. Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; ii. Infracción normativa procesal del literal c) del artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto San José; iii. Infracción normativa material del artículo 5 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público; y, iv. Infracción normativa material de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el inciso a) del artículo 19° de la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. SÉTIMO.-** Identificadas las casaules procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuacion: **1.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que

los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **1.2.** Por otro lado, respecto a la causal relacionada a la infracción de normas materiales (iii y iv), si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales, resulta jurídicamente errados; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **1.3.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **OCTAVO.-** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el Poder Judicial contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Luis Diofanto Garro Vergara contra el Poder Judicial, sobre Pago de beneficios sociales y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Juez Supremo Lévano Vergara. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-86

CASACIÓN Nº 26108-2022 DEL SANTA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Riberas del Mar SAC (antes: Lsa Enterprises Perú SAC),** contra la sentencia de vista número quince de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Tercer Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que revocó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró fundada la pretensión de pago de remuneraciones de mayo del 2019; y revocándolo se declarar infundado. Confirmaron la misma sentencia que estima favorablemente los extremos de indemnización por despido arbitrario, remuneraciones octubre y noviembre del 2019 y compensación por tiempo de servicios; en consecuencia; se ordena a la demandada cumpla con pagar al actor en el plazo de cinco días la suma ascendente a S/ 27, 026.77 (veintisiete mil veintiséis soles con 77/100 céntimos); más el pago de intereses legales y costas del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia; fija como costos procesales la suma de S/ 2,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley N°29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios y pago de remuneraciones), ordenándose a la demandada el pago en total de S/27,026.77; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1], vigente a la fecha de interposición del recurso 14 de setiembre de 2021-. **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Riberas del Mar SAC (antes: Lsa Enterprises Perú SAC),** contra la sentencia de vista número quince de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Tercer Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia Del Santa; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Segundo Eduardo Correa Sánchez contra Riberas del Mar SAC (antes: Lsa Enterprises Perú SAC), sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA,LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-87

CASACIÓN Nº 26186-2022 UCAYALI

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Provincial de Coronel Portillo**; contra la sentencia de vista de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con pagar al actor la suma de S/2,256.80 por concepto de vacaciones, gratificaciones y bonificación extraordinaria; asimismo, ordena que la demandada se constituya en depositaria de S/807.29 por concepto de compensación por tiempo de servicios; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/

44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones legales y bonificación extraordinaria del 9%; los mismos que han sido acogidos por las instancias de mérito en el monto total de S/3,064.09. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los contratos de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los contratos postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013-Cusco** tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha

"existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Provincial de Coronel Portillo**; contra la sentencia de vista de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Elio Armas Pérez contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sobre desnaturalización de contrato; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.** S. CABELLO MATAMALA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-88

CASACIÓN Nº 26257-2022 UCAYALI

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Manantay**; contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, la cual declaró **fundada** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con cancelar a la actora la suma total de S/16,226.00 por los conceptos de gratificaciones legales, asignación familiar, bonificación escolar y vacaciones; asimismo, ordena que la demandada se constituya en depositaria de S/4,746.29; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones legales, escolaridad, vacaciones, asignación familiar y compensación por tiempo d servicios; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/20,746.29. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que las mismas constituyen situaciones fácticas, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar

suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla y aportes al sistema pensionario que contienen la demanda, tampoco pueden ser considerados como pretensiones no cuantificables para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la inscripción en planilla y aportes al sistema pensionario son consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR y artículo 16 de la ley Nª 28991, constituyendo obligaciones primarias de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, inscripción en planilla y aportes al sistema pensionario no constituyen pretensiones no cuantificables que habilitan la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013-Cusco** tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización o ineficacia de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia del contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTÍA** el recurso de casación interpuesto por **la Municipalidad Distrital de Manantay**; contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Edwin Pérez Isuiza contra la Municipalidad Provincial de Manantay, sobre desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.** S. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-89

CASACIÓN LABORAL Nº 26520-2019 LORETO

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
Proceso Ordinario Laboral, Ley Nº 26636-LPT

Lima, ocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación por la parte demandante **Juan Manuel Ramírez Barco,** de fecha nueve de mayo de dos mil nueve; contra la **Sentencia de Vista** de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve; expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que: "**CONFIRMAR** la Sentencia de fecha 21 de noviembre del

2017, en los extremos que declara INFUNDADA la demanda en los extremos de reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones trabajadas y no remuneradas periodo 2007 2008 y bonificación por 25 y 30 años de servicios"; recurso que cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO.-** El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO.-** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO.** Se aprecia de la demanda de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el demandante solicita reintegros por compensación por tiempo de servicios (CTS), pago de vacaciones trabajadas y no remuneradas, pago diferencia encargatura proterra y pago de bonificaciones por veinticinco y treinta años; por un monto total de S/. 147,946.97. **QUINTO.** La parte recurrente sustenta su recurso de casación en la causal siguiente: **- Infracción normativa por inaplicación del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios del Decreto Legislativo Nº 650. SEXTO.** Antes del análisis del recurso de casación, es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que denuncia. **SÉPTIMO.** Sobre la única causal señalada, se debe decir que la parte impugnante, señala cual sería la norma inaplicada; sin embargo, de la argumentación esgrimida por la entidad recurrente, se advierte que se encuentra referida a la valoración de hechos y pruebas (señala que al no estar de acuerdo con la liquidación de sus beneficios, ya que la misma ha sido diminuta, por lo que se reclama el reintegro de las mismas), supuesto que no se condice con el objeto de este recurso extraordinario, en la medida que la Sede Casatoria no constituye una instancia de revisión. Siendo así, no se demuestra la incidencia directa de la supuesta infracción normativa sobre la decisión impugnada; incumpliendo así, con el requisito de procedencia contemplado en la Ley Nº 26636, modificada por la Ley Nº 27021, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021: Declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Juan Manuel Ramírez Barco,** de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve; contra la **Sentencia de Vista** de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por **el recurrente** contra la parte demandada **Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana**, sobre Incumplimiento de disposiciones laborales; **notificándose**. Ponente señora **VERA LAZO, Jueza Suprema.** S.S **CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LEVANO VERGARA. C-2246709-90**

CASACIÓN Nº 26763-2022 LIMA ESTE

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintidós de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada**, Municipalidad Distrital de Ate,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declara fundada en parte la demanda, y ordena entre otros, que la demandada deposite la compensación por tiempo de servicios de la demandante, ascendente a la suma de S/2,045.15, en una entidad bancaria a elección de la demandante, más los intereses financieros y costos procesales. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo-en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, asignación familiar y racionamiento y movilidad; beneficios sociales que solo han sido acogidos respecto de la compensación por tiempo de servicios en el monto total de S/2,045.15. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **ineficacia de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la ineficacia de cualquier contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la ineficacia de cualquier contratación de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la ineficacia de cualquier contratación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la ineficacia de cualquier contratación de servicios solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la ineficacia de cualquier contratación de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión

derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria Final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la ineficacia de cualquier contratación de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la ineficacia de cualquier contratación de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la ineficacia de cualquier contratación de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la ineficacia de cualquier contratación de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la ineficacia de cualquier contratación de servicios, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la ineficacia de cualquier contratación de servicios como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Ate,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Creselda Condor Jiménez contra la Municipalidad Distrital de Ate, sobre Incumplimiento de Normas Laborales; y los devolvieron. **Ponente, Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-91

CASACIÓN Nº 26778-2022 DEL SANTA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, siete de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el once de diciembre de dos mil veintiuno, por el

demandante, **Segundo Gerardo Alcántara de la Cruz,** contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que **revoca** la sentencia de primera sentencia que declara fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción formulada por la demandada **y reformándola** declararon fundada la misma por los conceptos reclamados entre el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve a diciembre de dos mil siete, en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso por el periodo antes indicado sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios sociales, sin la condena de costos del proceso. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley N°29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el once de diciembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales (gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicios) por un monto total de S/18,808.00. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se **declare la desnaturalización de los contratos modales**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 – Cusco,** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la invalidez de los contratos modales solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7853-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho

jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, se desprende que la pretensión solicitada en la demanda, aún en el caso de ser estimada en su totalidad, contiene un **monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de los contratos como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Segundo Gerardo Alcántara de la Cruz,** contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Santa; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Segundo Gerardo Alcántara de la Cruz contra Corporación Pesquera Inca SAC y otros, sobre Desnaturalización de Contrato y otro; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA. C-2246709-92**

CASACIÓN Nº 27048-2022 JUNIN

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Chilca**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, la cual declaró **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con cancelar a la actora la suma total de S/31,965.00 por concepto de bonificación por escolaridad, bonificación por fiestas patrias y navidad, bonificación vacacional, canasta navideña, día del trabajador municipal e incremento remunerativo; asimismo, **ordena** que la demandada cumpla con depositar en la cuenta financiera de la actora la suma de S/5,787.15 por concepto de compensación por tiempo de servicios ; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el cinco de septiembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el reintegro de beneficios sociales (gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, escolaridad), pago y reintegro de beneficios colectivos (incremento de remuneraciones, escolaridad, bonificación por fiestas patrias, bonificación vacacional, canasta navideña, día del trabajador municipal), reintegro de remuneraciones, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/37,752.15. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **ineficacia de contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que las mismas constituyen situaciones fácticas, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación**

7358-2013-Cusco en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. Sumado a ello, la solicitud de invalidez de contratos administrativos de servicios fue desestimado por las instancias de mérito y no habiendo sido cuestionado por la parte demandante; en consecuencia, adquirió la calidad de cosa juzgada[2]. De ahí que, no existe ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013-Cusco** tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización o ineficacia de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia del contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la Municipalidad Distrital de Chilca**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Gladys Victoria Tuncar Reginaldo contra la Municipalidad Distrital de Chilca, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. Ponente señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. **S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los

contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.** S. CABELLO MATAMALA.

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

2 Artículo 123.- una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando:
1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o
2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.
La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 178 y 407.

C-2246709-93

CASACIÓN Nº 27401-2022 VENTANILLA

Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Puente Piedra contra la sentencia de vista de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve y ordena, entre otros, el pago de S/ 29, 100.58 soles por concepto de pago de laudos arbitrales 2014, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al artículo 35 inciso 1 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se interpone: "Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). (…)".- **TERCERO.** Estando a lo expuesto, este Supremo Tribunal constata que el monto reconocido en la sentencia de vista recurrida no permite la interposición del recurso de casación, por no superarse las cien Unidades de Referencia Procesal[1] (100 URP), exigido como presupuesto necesario para su admisibilidad, que, a la fecha de su interposición, esto es, al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ascendía al monto de cuarenta y tres mil soles (S/ 44,000.00), en atención a la Resolución Administrativa número 393-2020-CE-PJ, que fijó el valor de la Unidad de Referencia Procesal y aprobó el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año dos mil veintiuno, publicada el seis de enero de dos mil veintiuno, determinándose el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP) en cuatrocientos cuarenta soles (S/ 440.00); en consecuencia, el recurso interpuesto debe declararse improcedente, al no cumplir con el requisito previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo. Por estas consideraciones, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Puente Piedra contra la sentencia de vista de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan de Dios Ayala Vega contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sobre Pago de Laudos Arbitrales; y los devolvieron. **Ponente Señor Lévano Vergara**, Juez Supremo. **S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

1 Equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

C-2246709-94

CASACIÓN Nº 27447-2022 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, dos de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, interpuesto por **Cold Import Sociedad Anónima**, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios), ordenándose a la empresa Cold Import Sociedad Anónima el abono de S/41,383.00 a favor de la demandante; es decir, **la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal** (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Cold Import Sociedad Anónima,** contra la sentencia de vista de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Silvana Berenice Cárdenas Flores contra Cold Import Sociedad Anónima, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-95

CASACIÓN Nº 27640-2019 PIURA

Materia: REINTEGRO DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL
PROCESO ORDINARIO LEY 26636

Lima, veintidós de noviembre de dos mil veintidos.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo del dos mil diecinueve, que **confirma** la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ordena a la demandada pague la suma de S/76,110.00 por los conceptos de reintegro de remuneraciones como asistente judicial más el pago de bono jurisdiccional respectivo, más intereses legales. Sin costos ni costas; se ordena a la demandada proceda a depositar por compensación por tiempo de servicios la suma de S/18,970.21, más intereses legales; **infundada** la demanda en el extremo de incorporar en la remuneración computable de los beneficios sociales demandada, los montos percibidos por los D.S. Nº 045-2003-EF, 016-04; D.U Nº 01-2006 y Ley Nº 29142; **infundada** la demanda en el extremo de pago de reintegros por homologación de bonificación por función jurisdiccional por el periodo de enero del 2007 a marzo del 2009. Recurso de casación que cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55º y del artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1º de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, las cuales son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y, **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una

de las causales anteriores. **TERCERO:** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56º de la mencionada Ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y, **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo el Colegiado Casatorio calificar estos requisitos, y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO:** Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas ciento treinta y uno y siguientes, el accionante interpone demanda contra el Poder Judicial, solicitando que la demandada cumpla con reintegrarle sus remuneraciones por el periodo de enero de 2005 a la actualidad en la suma de S/57,750.00, al haber ejercido labores de Asistente Judicial cuando estuvo contratado como Auxiliar Administrativo I, bajo el Decreto Legislativo Nº 728; el pago y reintegro del bono jurisdiccional por nivelación por el periodo enero de 2005 a noviembre de 2011, hasta por la suma de S/28,485.00, más intereses legales, por considerar que su cargo en dicho periodo ha sido como Asistente Judicial no como Auxiliar Administrativo I; el Pago y reintegro de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad desde enero 2005 hasta julio 2017, y su incidencia en el pago del bono por función jurisdiccional, en la suma de S/33,604.36, más intereses legales; el pago de la compensación por tiempo de servicios desde enero de 2005 hasta abril del 2017 y su incidencia en el pago del bono por función jurisdiccional, en la suma de S/31,131.60, más intereses legales. **QUINTO:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción del derecho a obtener una decisión fundada en derecho y debidamente motivada,** toda vez que la sala superior ha omitido pronunciarse respecto de un aspecto fundamental de la controversia por lo que se hace impostergable que su decisión sea anulada a los efectos que se emita una nueva resolución, esta vez contemplando todos y cada uno de los agravios impugnatorios formulados y sobre todo realizando un análisis completo de lo que constituye la materia controvertida en segundo grado. **ii) Del pago de costas y costos,** refiere que no se han generado costas procesales al encontrarse exonerado del pago de tasas judiciales al no superar su pretensión las 70 URP acorde con la Undécima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497. En cuanto a los costos procesales, no obstante lo previsto en la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, deberá tomarse en cuenta que la entidad demandada forma parte de una entidad del Estado que se encuentra sujeta a un presupuesto anual por lo que los costos procesales deben desestimarse. **SEXTO:** En relación a la causal señalada en el **apartado i),** se debe señalar que la infracción normativa no se encuentra comprendida como causal casatoria conforme a lo previsto por el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, tanto más, cuando el recurrente fundamenta su denuncia sobre la base de una norma de derecho procesal cuando la citada norma prevé de manera expresa que las casuales deben estar referidas a normas de derecho material, motivo por el cual la causal denunciada en este extremo resulta **improcedente. SÉTIMO:** En cuanto a la causal descrita en el **apartado ii),** se debe indicar que el recurso de casación es por su naturaleza extraordinaria eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. En el caso concreto, se advierte que la denuncia formulada por el recurrente no se encuentra prevista como causal de casación en el artículo 56° de la norma procesal laboral citada precedentemente. En consecuencia, la denuncia casatoria propuesta resulta **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo del dos mil diecinueve; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Josua Alexis León Vílchez contra el Poder Judicial, sobre Pago de Bono por Función Jurisdiccional y otro; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-96**

CASACIÓN Nº 27753-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, que declara infundada la Excepción de Incompetencia por razón del Territorio; fundada en parte la demanda, reconoce el concepto del Bono por Función Jurisdiccional y las Bonificaciones otorgadas por D.S. 002-16, 016-04, 045-03, DU 017-06 y Ley 29142 como conceptos remunerativos y/o parte de la remuneración del demandante y su incidencia en el cómputo de los beneficios sociales, de forma permanente, desde marzo dos mil diez a noviembre dos mil dieciocho, se ordenó que la demandada pague al demandante la suma de S/ 21,687.26 más los intereses legales laborales correspondientes, los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia por concepto de reintegro de gratificaciones legales y el 9% por incidencia del reconocimiento como conceptos remunerativos del bono por función jurisdiccional y las bonificaciones otorgadas por Decreto Supremo Nº 002-16, 016-04, 045-03, DU 017-06 y Ley 29142, se ordenó que el Poder Judicial se constituya en custodia de la compensación por tiempo de servicios de la demandante, considerando para el cálculo la remuneración básica, el bono por función jurisdiccional y las asignaciones especiales establecidas en el Decreto Supremo Nº 045-2003-EF, Decreto Supremo Nº 016-2004 , Decreto de Urgencia Nº 017-2006, la Ley Nº 29142 y el Decreto Supremo Nº 002-2016-EF, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2010 al 31 de octubre del 2015, calculado en el importe de S/ 6,140.07, con lo demás que contiene; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el reconocimiento de la naturaleza remunerativa y el pago del bono por función jurisdiccional en su incidencia en el pago de gratificaciones de julio dos mil diez y diciembre dos mil dieciocho, se ordene el reconocimiento de la naturaleza remunerativa y su pago de las asignaciones excepcionales y su incidencia en el pago de gratificaciones de julio dos mil diez y diciembre dos mil dieciocho y pago de la bonificación extraordinaria, se ordene el reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y de las asignaciones excepcionales, entre otros. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.°728, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, y el inciso a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°001-97-TR. (iii) Infracción normativa del artículo 138 de la Constitución Política del Perú. (iv) Infracción normativa de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el artículo 19 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. (v) Infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del**

Trabajo. SEXTO. Identificadas las causales procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuación: **1.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales **(i),** pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **1.2.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales **(ii** y **iv)**, si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrollados en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebasan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales, resulta jurídicamente errados; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **1.3.** Por otro lado, la parte recurrente denuncia una supuesta infracción del artículo 138 de la Constitucional Política del Perú **(iii),** pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada; puesto que, si bien es cierto el recurrente fundamenta la infracción precisando que el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamientos en los cuales ha establecido que el bono por función jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionable y por tanto no incide en el cómputo los beneficios sociales; sin embargo, los citados pronunciamientos no constituyen precedentes vinculantes, razón por la cual no son de aplicación obligatoria para esta Corte Casatoria. Además, se advierte que la sentencia de vista se ha emitido bajo fundamentos de derecho y de conformidad con reiterados y uniformes pronunciamientos casatorios que han reconocido la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, los mismos que tienen la calidad de doctrina jurisprudencial. En ese sentido, la infracción denuncia por la recurrente carece de trascendencia jurídica suficiente para merecer en el caso en concreto el correspondiente control casatorio. **1.4.** Finalmente, se denuncia la interpretación errónea de la Séptima Disposición Complementaria de la LPT que regula la posibilidad de condenar al Estado del pago de costos procesales **(v)**; no obstante, no especifica cuál sería la interpretación correcta de la norma en cuestión que de forma expresa posibilita la condena al Estado al pago de costos en los procesos laborales, es decir, no se ha fundamentado de forma clara y precisa la infracción que se denuncia; máxime si sobre la condena de costos procesales al Estado en los procesos laborales es una cuestión que ya ha sido ampliamente dilucidada por este Tribunal en las casaciones 2167-2019 Lima, 1628-2019 Lima, 8237-2019 Tumbes, entre otros, en el sentido que en el proceso laboral el Estado sí puede ser condenado al pago de costos procesales. Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉPTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **Erica Yesenia Moreno Perdomo** contra el Poder Judicial, sobre Incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-97

CASACIÓN LABORAL Nº 27945-2022 CUSCO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha catorce de setiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por la **Municipalidad Provincial del Cusco**, contra la sentencia de vista de fecha tres de setiembre de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios), ordenándose a la Municipalidad Provincial del Cusco al pago de S/ 10,039.00 a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/ 44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497-Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la entidad demandada. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la **Municipalidad Provincial del Cusco**, contra la sentencia de vista de fecha tres de setiembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Francisco Apaza Champi contra la Municipalidad Provincial del Cusco, sobre indemnización por daños y perjuicios; **y los devolvieron. Ponente señor Salazar Lizárraga, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-98

CASACIÓN Nº 27963-2022 LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha seis de setiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por la demandada, **Agropecuaria Las Pampas EIRL**, contra la sentencia de vista de fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo.

SEGUNDO. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de beneficios sociales), ordenaron que la demandada pague a favor del demandante la suma de S/21,611.51; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Agropecuaria Las Pampas EIRL**, contra la sentencia de vista de fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Segundo Rodolfo Riveros Laguna contra Agropecuaria Las Pampas EIRL, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-99

CASACIÓN LABORAL Nº 28160-2021 UCAYALI

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
PROCESO ORDINARIO – NLPT

Lima, cinco de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS y CONSIDERANDOS: Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el procurador público de la parte demandada **Ministerio de Agricultura y Riego**, mediante escrito presentado de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número tres, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, que: 1. **Confirmó** la resolución número ocho, de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, que declaró **fundada en parte** la demanda, por consiguiente declaró desnaturalizados los contratos de locación de servicios y contratos de servicios no personales, suscritos por las partes, y entre otros ordenó a la demandada cumpla con pagarle a la demandante la suma de S/ 37,697.93 por los conceptos de gratificaciones, remuneraciones vacacionales; además ordenó que la demandada se constituya en depositaria y aprovisione la compensación por tiempo de servicios a la demandante por la suma de S/ 15,748.48, con lo demás que contiene; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. **Segundo:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. **Tercero:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36 de la precitada Ley, prevé los siguientes: **i)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; **iii)** Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, **iv)** Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. **Cuarto:** Conforme se desprende de la demanda, la parte accionante pretende el reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado por desnaturalización de contratos de locación de servicios e invalidez de contratos administrativos de servicios e incorporación al régimen laboral de la actividad privada y el pago de beneficios sociales. **Quinto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito apelación de fojas trescientos uno, de los actuados. **Sexto:** La parte recurrente denuncia como causales: **i. Infracción normativa material por inaplicación de los artículos 1764 y 1766 del Código Civil. ii. Infracción normativa material por inaplicación de los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo Nº 1057. iii. Infracción normativa por inaplicación del artículo vi) del Código Procesal Constitucional. iv. Infracción del artículo 5 de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público. v. Infracción normativa por inaplicación de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público Ley Nº 28411 con relación a creación de plazas. vi. Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Séptimo:** Antes del análisis de las causales propuestas, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Octavo:** Sobre las causales denunciadas en los **ítems i) y ii)**, debemos decir que no cumplen con el requisito de procedencia exigido en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, toda vez que las citadas normas han sido aplicadas y forman parte del sustento jurídico de la sentencia de vista emitida por la instancia de mérito, por lo tanto, no es factible denunciar respecto de ellas su inaplicación. Aunado a ello, pretende que este Tribunal Supremo realice un examen de la conclusión arribada por la Sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso (lo que importa un nuevo examen de las pruebas aportadas), lo cual es contrario a la naturaleza y fines del recurso de casación; en consecuencia, no se cumple con las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que tales causales devienen en **improcedentes. Noveno:** Sobre las causales denunciadas en los acápites **iii), iv), v),** si bien es cierto la parte recurrente señala normas supuestamente denunciadas por inaplicación de las mismas; sin embargo, no explica con claridad y precisión las infracciones que plantea ni demuestra su incidencia directa sobre la decisión cuestionada, pretendiendo que esta Sala Suprema realice un reexamen de la conclusión arribada por la sala de mérito luego del análisis de los hechos y pruebas del proceso, lo cual no es posible en esta sede casatoria, pues el debate se basa en cuestiones eminentemente jurídicas y no cuestiones fácticas; siendo ello así, se aprecia que el recurrente realiza cuestionamiento de fondo sobre el reconocimiento de la estabilidad laboral del accionante, sin rebatir en forma clara y precisa lo decidido por la Sala de mérito. Siendo ello así, la cuestión jurídica que la parte recurrente pretende sea de conocimiento por esta Corte Suprema de Justicia de la República carece de trascendencia jurídica suficiente para merecer en el caso en concreto el correspondiente control casatorio. Razones por las cuales, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, ni tampoco cumplen con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral; tampoco demuestra la incidencia de la mismas en lo resuelto por la Sala de mérito, deviniendo estas denuncias en **improcedentes**. **Décimo:** Respecto a la causal contenida en el **ítem vi)**, a pesar de haber sustentado su denuncia en función a la vulneración de derechos constitucionales y legales, la parte recurrente no ha indicado en forma concreta cómo así se ha producido la afectación a estos derechos, ni ha identificado adecuadamente cuál es el supuesto de vicio en el debido proceso ocurrido en este caso; puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales; por lo que se incumple con

los requisitos de procedencia contemplados en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en **improcedente** la causal invocada. **Décimo primero:** Al haberse declarado improcedentes las causales denunciadas carece de objeto verificar el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley citada, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el procurador público de la parte demandada **Ministerio de Agricultura y Riego**, mediante escrito presentado de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número tres, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral, seguido por el demandante Juan Ruiz Gaviria contra el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA Estación Experimental Pucallpa, sobre desnaturalización de contratos y otros; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S. **CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. C-2246709-100**

CASACIÓN Nº 28285-2019 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636

Lima, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Manuel Saavedra Llacchua,** contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto del dos mil diecinueve, que **revoca** la sentencia apelada en el extremo que declara infundada el reconocimiento de una relación laboral directa con Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA y el pago de reintegro de utilidades, **reformándola** se declaran **fundadas** dichas pretensiones, ordenándose a dicha empresa reconozca al demandante como su trabajador desde el 13 de diciembre del 2004 al 21 de enero del 2012, asimismo, se le ordena pagar la suma de S/125,279.15, más intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, por concepto de utilidades de los años 2004 al 2010. **Confirma l**a misma sentencia apelada en los extremos que declara **infundada** la reposición por despido nulo y pago de remuneraciones devengadas, y **fundada** la pretensión subordinada relativa al pago de una indemnización por despido arbitrario, en consecuencia, se ordena a la demandada Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/13,327.06 más intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, con costas y costos. Recurso de casación que cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55º y del artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1º de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, las cuales son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y, **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO:** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56º de la mencionada Ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y, **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo el Colegiado Casatorio calificar estos requisitos, y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO:** Conforme se aprecia del escrito de demanda incoada, el accionante solicita se declare la desnaturalización de los contratos de tercerización y se le incluya en el libro de planillas de la demandada Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, por el periodo 2004 al 2010; en su condición real de trabajador de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, solicita que se le abonen las utilidades generadas en dicha empresa, en la suma de S/115,164.16; el pago de los intereses legales correspondientes, más las costas y costos del proceso. Asimismo, mediante acumulación de procesos, el demandante solicita la nulidad de despido prevista en el artículo 29, incisos a) y c) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como su reposición en sus ocupaciones habituales como asistente administrativo contra la empresa Backus S.A.A. y como pretensión subordinada el pago de una indemnización por despido arbitrario. **QUINTO:** La parte demandante denuncia como causales de su recurso: **i) Interpretación errónea del inciso a) del artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR,** toda vez que si bien no existe la comunicación de la fecha de afiliación al Sindicato, en las boletas de pago que obran en autos, se evidencia que el demandante se afilió al Sindicato el 2011, apareciendo descuentos por cuota sindical a partir del mes de setiembre del 2011 y el despido ocurrió el 21 de enero del 2012, esto es, 04 meses después de haberse afiliado; y si bien no es posible observar la fecha exacta de afiliación, estamos frente a una duda que en todo caso debió resolverse en aplicación del principio pro operario; además el actor realizó actividad sindical como resulta ser la presentación de la carta de fecha 13 de enero del 2012 mediante la cual manifiesta con otros trabajadores también sindicalizados su desacuerdo con la disolución y liquidación de la empresa SISA. **ii) Interpretación errónea del inciso c) del artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR,** toda vez que la Sala Superior no tuvo en cuenta que el actor formuló reclamo ante la empleadora al presentar una queja ante su empleador hecho que se encuentra configurado con la carta de fecha 13 de enero del 2012 por la disolución o liquidación de la empresa SISA, más aún cuando se presentó la demanda por incumplimiento de normas laborales. **SEXTO:** En relación a las causales denunciadas en los **apartados i) y ii),** corresponde señalar que la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicar dicha norma a los hechos expuestos en el proceso, le atribuye un sentido distinto al que corresponde. En el caso de autos, se advierte que el recurrente no describe cuál es la interpretación de las normas denunciadas que propone como válida, de manera clara y precisa, además, de los fundamentos que sustentan el recurso en estos extremos se advierte que lo pretendido es una nueva valoración de los hechos planteados en el proceso que fueron oportunamente debatidos y analizados por la Sala Superior al emitir el respectivo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; en consecuencia, **las causales invocadas devienen en improcedentes.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante**, Manuel Saavedra Llacchua,** contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto del dos mil diecinueve; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Manuel Saavedra Llacchua contra Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, sobre Desnaturalización de Contrato y otro; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-101**

CASACIÓN Nº 28285-2019 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 26636

Lima, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA,** contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto del dos mil diecinueve, que **revoca** la sentencia apelada en el extremo que declara infundada el reconocimiento de una relación laboral directa con Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA y el pago de reintegro de utilidades, **reformándola** se declaran **fundadas** dichas pretensiones, ordenándose a dicha empresa reconozca al demandante como su trabajador desde el 13 de diciembre del 2004 al 21 de enero del 2012, asimismo, se le ordena pagar la suma de S/. 125,279.15 soles, más intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, por concepto de utilidades de los años

2004 al 2010. **Confirma l**a misma sentencia apelada en los extremos que declara **infundada** la reposición por despido nulo y pago de remuneraciones devengadas, y **fundada** la pretensión subordinada relativa al pago de una indemnización por despido arbitrario, en consecuencia, se ordena a la demandada Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/13,327.06 más intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, con costas y costos. Recurso de casación que cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55º y del artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1º de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO:** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, las cuales son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y, **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO:** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56º de la mencionada Ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y, **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo el Colegiado Casatorio calificar estos requisitos, y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO:** Conforme se aprecia del escrito de demanda incoada, el accionante solicita se declare la desnaturalización de los contratos de tercerización y se le incluya en el libro de planillas de la demandada Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., por el periodo 2004 al 2010; en su condición real de trabajador de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., solicita que se le abonen las utilidades generadas en dicha empresa, en la suma de S/. 115,164.16 soles; el pago de los intereses legales correspondientes, más las costas y costos del proceso. Asimismo, mediante acumulación de procesos, el demandante solicita la nulidad de despido prevista en el artículo 29, incisos a) y c) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como su reposición en sus ocupaciones habituales como asistente administrativo contra la empresa Backus S.A.A y como pretensión subordinada el pago de una indemnización por despido arbitrario **QUINTO:** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: **i) Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado,** toda vez que la sentencia de vista no realiza una adecuada fundamentación al omitir resolver la pretensión del actor sobre desnaturalización de los contratos de tercerización, además la referida sentencia no explica cómo se habrían presentado los elementos de la relación laboral entre Backus y el demandante. **ii) Inaplicación del artículo 4 del TUO del Decreto Supremo Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR**, toda vez que, en la sentencia de vista, la sala laboral señala que Backus es el empleador del actor, analizando el vínculo entre Sisa y Backus, omitiendo, sin embargo, pronunciarse objetivamente sobre la remuneración y/o sobre la prestación personal de servicios. **iii) Inaplicación del artículo 9 del TUO del Decreto Supremo Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR**, toda vez que la sala laboral a partir de una inaplicación de la norma denunciada presume la existencia de una relación laboral, otorgando un derecho laboral (pago de utilidades) sin advertir que no existe medio probatorio alguno que acredite una subordinación directa hacia el actor con la recurrente. **iv) Inaplicación de los artículos 238, 253, 255, y 257 del Código de Comercio,** toda vez que de acuerdo a las clausulas contenidas en el contrato suscrito entre las codemandadas, la recurrente ha cumplido estrictamente con los términos y requisitos exigidos en dicho cuerpo legal en el que se detalla de qué manera las actividades desarrolladas se adecuan a dicho tipo de contrato y que por el contrario la sentencia de vista lejos de analizarlas se limita a aludir al código de comercio pero sin citar norma alguna del mismo en que sustente jurídicamente el criterio asumido. **SEXTO:** En relación a la causal denunciada en el **apartado i),** se debe señalar que la misma no se encuentra prevista en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, el cual señala taxativamente como causales del recurso de casación la interpretación errónea, aplicación indebida, inaplicación de una norma de derecho material y la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, resultando inviable alegar aspectos procesales de las actuaciones realizadas por las instancias de mérito. Por consiguiente, al no señalar la forma de la causal prevista bajo los lineamientos de la Ley Nº 26636 y señalar normas de carácter procesal y no material; dicha causal resulta **improcedente. SÉTIMO:** En cuanto a las causales denunciadas en los **apartados ii) y iii)**, corresponde señalar que cuando se denuncia la inaplicación de una norma de derecho material se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso de autos, la empresa recurrente no ha demostrado cómo la aplicación de los dispositivos legales invocados modificaría el resultado del juzgamiento, pues el sustento de la infracción normativa que se denuncia contiene argumentos que impiden reconocer su pertinencia con la relación fáctica establecida en la Sentencia impugnada como pretender sostener que no se ha acreditado los elementos de una relación laboral: subordinación y prestación personal. Sin embargo, tales alegaciones únicamente buscan cuestionar el fallo dado por la instancia de mérito, al haberse determinado que el verdadero empleador del demandante ha sido Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, por lo que, no se demuestra la incidencia que tendría en la decisión de la Sala Superior, tanto más, cuando los elementos de la relación laboral sobre subordinación y prestación personal de la norma denunciada han sido analizados por la Sala Superior conforme se verifica de los considerandos octavo, noveno, undécimo y duodécimo de la sentencia de vista. Siendo así, dichas causales devienen en **Improcedentes. OCTAVO:** Respecto a la causal denunciada en el **apartado iv)**, se debe indicar que la parte recurrente ha cumplido con señalar la forma de infracción (inaplicación), así como las normas que a su entender habrían sido infringidas por el órgano superior. Sin embargo, se limita a señalar que la Sala no ha analizado las características particulares de los contratos de comisión mercantil celebrados entre Backus y Sisa, sin señalar de manera clara y precisa por que debe aplicarse tal dispositivo al caso concreto y menos aún con demostrar la incidencia directa que tendría su aplicación en la variación de la decisión impugnada, por lo que la causal denunciada resulta **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636 Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.,** contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto del dos mil diecinueve; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Manuel Saavedra Llacchua, contra Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, sobre Desnaturalización de Contrato y otro; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-102**

CASACIÓN LABORAL Nº 28623-2018 AREQUIPA

Materia: IMPUGNACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA Y OTRO
PROCESO ORDINARIO NLPT
Sumilla: El derecho a la huelga no es un derecho ilimitado, siendo que la responsabilidad disciplinaria por efecto de la paralización de labores realizada por una organización sindical debe ser considerada posterior a la resolución que declara por agotado la vía administrativa y que dicha decisión quede consentida o ejecutoriada, en atención al principio de legalidad tal y como lo regula el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR.

Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.-

VISTA la causa número veintiocho mil seiscientos veintitrés, guion dos mil dieciocho, guion **AREQUIPA,** en audiencia en la presente fecha; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **I. MATERIA DEL**

RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, **Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta**, mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, que corre a fojas doscientos ochenta y uno, contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce, de fecha veintisiete de setiembre dos mil dieciocho, que corre a fojas ciento ochenta y siete, expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó la **sentencia apelada** contenida mediante resolución número ocho, de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, que declaró **fundada la demanda**; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, **Jorge Luis Paredes Del Carpio,** sobre impugnacion de sanción disciplinaria y otros. **II. CAUSALES DEL RECURSO:** Mediante resolución de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto, por las siguientes causales: **i) Infracción normativa procesal por vulneración del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú**[1]**. ii) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 28 y del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, iii) Infracción normativa material de los artículos 77 y 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR. iv) Infracción normativa del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. v) Infracción normativa del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR y artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.- III. CONSIDERANDO: Primero: De la pretensión demandada y pronunciamiento de las instancias de mérito.** A fin de establecer si en el caso de autos se ha incurrido o no en las infracciones normativas reseñadas precedentemente, es necesario realizar las siguientes precisiones fácticas sobre el proceso: **a) De la pretensión demandada:** Se verifica del escrito de demanda interpuesto el doce de junio de dos mil diecisiete, que corre en seis del cuadernillo, el actor solicita como pretensión principal: Impugnación de la medida disciplinaria a efectos de que se deje sin efecto la sanción disciplinaria de severa llamada de atención escrita, sanción interpuesta mediante carta de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete y como pretensión accesoria solicita se retire de sus registros y del file personal del demandante, la sanción impuesta. **b) Sentencia de primera instancia:** Mediante **sentencia de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho,** que corre a fojas ciento cuarenta y uno, la juez del Octavo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró **fundada la demanda**; ordenando que se deje sin efecto la carta de fecha dos de mayo del dos mil diecisiete, en la que se disponía la sanción de severa llamada de atención; asimismo, ordenó que la demandada retire del file personal del demandante la sanción impuesta, con costos y costas procesales. Señalando la juzgadora como fundamentos de su decisión, de forma expresa lo siguiente: **i)** En el caso de autos no encontramos claramente ante un supuesto de 'huelga ilegal', por haberse materializado la paralización los días 10 al 24 de marzo del 2017, pese a haberse declarado por la Autoridad Administrativa de Trabajo improcedente la comunicación de huelga presentada por el Sindicato, configurándose el supuesto regulado por el artículo 84 literal a) de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, TUO aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR; modalidad, que sin dejar de ser 'ilegal', tiene consecuencias jurídicas reguladas por la ley, que se hace necesario analizar para determinar si la conducta incurrida por el demandante al acatar esta huelga irregular es sancionable o no, **ii)** Las normas legales vigentes, permiten interpretar que en tanto que no exista una resolución definitiva de ilegalidad de la huelga emitida en decisión definitiva y firme por la Autoridad Administrativa de Trabajo, las inasistencias a laborar de los trabajadores en huelga no se pueden calificar automáticamente como sancionables, pues si bien se puede haber determinado, con posterioridad a la paralización, en forma definitiva la improcedencia y por ende subsecuente ilegalidad de la huelga, no deja de ser el ejercicio del derecho de huelga, cuya calificación y procedencia, no estuvo determinada en forma definitiva sino hasta la resolución final que emita la Autoridad de Trabajo, **iii)** Por tanto, consideramos que este contexto no faculta al empleador a ejercer su poder sancionatorio hasta contar con una resolución definitiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo, e inclusive una vez que cuente con la misma, no podría sancionarse a los trabajadores que dejaron de laborar, por el solo hecho de haber acatado la huelga, dado que, la ratificación de su improcedencia y por ende ilegalidad, recién se determinó en forma definitiva con posteridad a su ejecución. Siendo que, al acatarse la paralización pese a la improcedencia declarada, en tanto no se declarase su ilegalidad, constituía el ejercicio del derecho de 'huelga', aunque devenida en la modalidad de 'ilegal' (presupuesto de huelga ilegal, no declarado por la Autoridad Administrativa de Trabajo), pero con inicio y existencia de procedimiento administrativo aun en trámite. No se configura el supuesto de una 'paralización intempestiva' alegado como fundamento de la sanción por parte de la demandada, careciendo por tanto de sustento la sanción impuesta. **c) Sentencia de segunda instancia:** Por su parte el Colegiado de la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en virtud a la apelación planteada, mediante **sentencia de vista contenida en la resolución número doce Número N°667-2018-3SL, de fecha veintisiete de setiembre dos mil dieciocho**, que corre en fojas ciento ochenta y siete, procedió a **confirmar la sentencia de primera instancia** en todos sus extremos; expresando como sustento de su decisión de manera expresa, lo siguiente: Se sancionó a un trabajador por un hecho que a la fecha de su efectivización (diez de marzo y días siguientes del año dos mil diecisiete) no había sido calificado por la autoridad competente de manera firme como un acto irregular pues la Resolución Directoral general 39-2017/MTPE/2/14 que declaró infundado el recurso de revisión interpuesto y declaró en su artículo segundo improcedente la comunicación de huelga indefinida cursada por el Sindicato de Cerro verde, fue emitida recién el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, situación que a todas luces resulta arbitraria, pues de la revisión de los hechos así expuestos, se puede concluir, que a la fecha de la comisión de la actuación materia de sanción, el trabajador desconocía de la antijuricidad de su conducta y por tanto esta actuación no le resultaba reprochable y en esta línea de pensamiento el empleador no estaba legitimado razonablemente ara imponerle una sanción. **Segundo. La infracción normativa.** Se ha declarado procedente el recurso de casación por infracciones de normas de orden procesal y de derecho material, por lo que, en estricto orden lógico corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento, en primer término, respecto a la supuesta infracción procesal, toda vez que, únicamente descartada la presencia de defectos procesales durante el trámite del proceso será posible la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida. **Tercero: Infracción de orden procesal. i) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece lo siguiente:** "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". **Cuarto: Alcances sobre el debido proceso.** El debido proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental, además entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, está necesariamente comprendido el derecho a una resolución debidamente motivada. Que, bajo ese contexto, la causal de la infracción normativa procesal denunciada se configura entre otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. **Quinto:** Respecto al derecho a una resolución debidamente motivada, la cual también se encuentra reconocida en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, corresponde precisar que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales y, de hacerlo de manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. **Sexto:** En ese sentido, se advierte que la decisión adoptada por la instancia de mérito se ha ceñido a lo aportado, expuesto y debatido en el proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por un vicio en el debido proceso, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas por las partes y con precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación. Siendo así, se aprecia que la Sentencia de Vista ha sido expedida con observancia de la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho al debido proceso, toda vez que no se advierte la existencia de vicio alguno que atente

contra las citadas garantías procesales constitucionales; en consecuencia, la causal materia de análisis deviene en **infundada. Sétimo: Infracciones de orden sustantivo.** Al haberse declarado infundada la causal de orden procesal, es pertinente emitir pronunciamiento respecto a las causales de orden sustantivo siguientes: **ii) Infracción normativa material del inciso 3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. iii) Infracción normativa del artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR. iv) Infracción normativa del artículo 103 de la Constitución Política del Perú y del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. v) Infracción normativa del artículo 77 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo número 010-2003-TR. vi) Infracción normativa del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR. vii) Infracción normativa del artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR. Octavo:** En cuanto a las infracciones normativas contenidas en los acápites ii), iii), v) y vi), las mismas serán resueltas de manera conjunta en tanto existe conexidad entre ellas. **Noveno:** En relación a las **infracciones normativas citadas: Inciso 3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú, artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR, artículo 77 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR y del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR**. Así tenemos que las citadas normas establecen lo siguiente: Inciso 3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. **Artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR.** No están amparadas por la presente norma las modalidades irregulares, tales como paralización intempestiva, paralización de zonas o secciones neurálgicas de la empresa, trabajo a desgano, a ritmo lento o a reglamento, reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo. **Artículo 77 del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR** La huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73, produce los siguientes efectos: **a)** Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en el artículo 78. **b)** Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. **c)** Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la Autoridad de Trabajo. **d)** No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por tiempo de servicios. **Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR** En caso de incumplimiento de disposiciones legales o convencionales de trabajo, los trabajadores podrán declarar la huelga cuando el empleador se negare a cumplir la resolución judicial consentida o ejecutoriada. Antes de emitir pronunciamiento de fondo sobre las causales antes citadas esta Sala Suprema considera necesario hacer algunas precisiones sobre la **libertad sindical y el derecho de huelga. Alcances sobre la libertad sindical y el derecho de huelga. Décimo:** En relación al derecho a la libertad sindical, el Tribunal Constitucional sostiene que: "6. El derecho a la libertad sindical está reconocido en el artículo 28, inciso 1, de la Constitución. Este derecho tiene un doble contenido: un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no a este tipo de organizaciones. A su vez, implica la protección del trabajador afiliado frente a actos que perjudiquen sus derechos y tengan como motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga; es decir, la protección por pertenecer o participar de actividades sindicales". "7. Sin embargo, además de los dos planos de la libertad sindical antes mencionados, debe también considerarse la garantía para el ejercicio de aquellas actividades que hagan factible la defensa y protección de los propios trabajadores. En tal sentido, el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los aspectos orgánico y funcional, sino que a este núcleo mínimo e indisponible deben añadirse todos aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, la protección y la defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resultará vulneratorio del derecho de libertad sindical."[2] **Décimo primero:** En cuanto al derecho a la huelga reconocido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional ha precisado que: "(…) la huelga es un derecho que "(…) consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe previamente ser acordada por la mayoría de los trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes- y con abandono del centro de trabajo".[3] "Siendo así, a través del derecho a la huelga, los trabajadores se encuentran facultados para desligarse de manera temporal de sus obligaciones jurídico-contractuales, a efectos de lograr la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales (…)". **Décimo segundo:** El Perú ha ratificado los convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, por lo que dichos instrumentos están vinculados al Estado Peruano. **Décimo Tercero:** Ahora bien, el Comité de Libertad Sindical de la OIT en su Recopilación de Decisiones[4] del 2018 ha señalado que la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a organizarse para defender sus intereses, resaltando a su vez "que si bien el hecho de tener un mandato sindical no confiere a su titular una inmunidad que permita transgredir las disposiciones legales en vigor, estos a su vez no deben menoscabar las garantías básicas en materia de libertad sindical, ni sancionar actividades que conforme a los principios generalmente reconocidos en la materia deberán ser consideradas actividades sindicales lícitas". Por otro parte, el Comité de Libertad Sindical de la OIT se ha referido al derecho de huelga como uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus organizaciones, constituyendo un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, constituyendo un corolario indisociable del derecho a la sindicación protegido por el convenio número 87 de la OIT[5]. Finalmente, cabe agregar que según lo establecido en el Comité de Libertad Sindical de la OIT en su Recopilación de Decisiones del 2006[6], establece que: **"Nadie debería ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legítima". Décimo cuarto:** En el **Decreto Supremo número 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo** (en adelante TUOLRCT), se define la huelga de la manera siguiente: **Artículo 72.-** Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente Texto Único Ordenado y demás normas complementarias y conexas. **Características de la huelga: a) Suspensión del trabajo:** La huelga implica dejar de hacer, dejar de trabajar; queda por ello fuera de esta definición cualquier acto que consista en disminuir o variar el ritmo de trabajo que no implique la suspensión de las labores. **b) Suspensión colectiva:** Solo de manera grupal los trabajadores pueden realizar la huelga, este elemento se fundamenta en el hecho que el ejercicio del derecho de la huelga es un derecho colectivo y no individual. **c) Acuerdo mayoritario:** La decisión de ejercitar el derecho de huelga solo puede provenir de un acuerdo tomado por los trabajadores en forma mayoritaria durante una asamblea que debe cumplir con las formalidades exigidas por el artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. **d) Realización voluntaria:** El ejercicio del derecho de huelga debe ser en forma voluntaria sin coacción alguna, eliminando toda clase de presiones abusivas. **e) Realización pacífica:** El ejercicio del derecho de huelga debe ser pacífico, rechazando la utilización de formas violentas sobre las personas; por ejemplo, agresiones contra los directivos de la empresa o contra los bienes de la misma (destrucción de la maquinaria o de las instalaciones); aspecto que es reiterado en el artículo 79

del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. **f) Abandono del centro de trabajo:** La huelga debe realizarse fuera de las instalaciones del centro de trabajo, entendiéndose que al suspenderse las labores no pueden permanecer los trabajadores dentro de la empresa. **Ilegalidad de la huelga.** El procedimiento de huelga se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades, cuya omisión genera que la huelga sea declarada ilegal por la Autoridad Administrativa de Trabajo. El Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece determinados supuestos por los cuales la huelga puede ser declarada ilegal, dentro de los cuales encontramos los siguientes: **a)** Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente. **b)** Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes o personas. **c)** Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. **d)** Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82. **e)** Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia (artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). **Décimo Quinto: Análisis del caso.** De autos consta que el actor empezó a laborar el primero de julio de dos mil dieciséis en el cargo de Técnico III Camión Acarreo 240 TM, lo que se corrobora con la boleta de pago y demás medios probatorios que corren en autos. **Décimo Sexto.** Mediante Carta de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas cuatro, se le impuso al actor la sanción de **severa llamada de atención escrita**, por haber **paralizado intempestivamente** sus labores desde el día diez de marzo al veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. **Décimo Sétimo:** Tal previsión legal conlleva al análisis de los efectos de la huelga declarada improcedente, conforme ha ocurrido en el presente caso. Debe tenerse en consideración que la participación del trabajador en una huelga legal o legítima está comprendida dentro del ejercicio del derecho fundamental de huelga y suspende válidamente la relación de trabajo del trabajador huelguista hasta el momento de su reincorporación efectiva al trabajo; empero, dicho derecho no es ilimitado, pues se debe ejercer en armonía con el interés público respetando los procedimientos legales establecidos. De la misma forma sucede con la potestad disciplinaria del empleador quien tiene una facultad discrecional, dicho derecho no es ilimitado pues, el resultado de una sanción debe ser consecuencia del respecto de las garantías formales propias de un procedimiento disciplinario, lo cual implica permitir el ejercicio del derecho de defensa y contradicción por parte del trabajador. **Décimo Octavo:** El artículo 77 del Decreto Supremo número 010-2003-TR, cuya infracción normativa alega la parte recurrente, es totalmente impertinente al caso materia de autos, toda vez que la norma legal regula el supuesto de los efectos que se derivan de una huelga declarada legal, que observó el artículo 73 de la norma citada, situación que precisamente no se presenta, conforme así concluye la instancia de mérito cuando determina que la huelga fue declarada improcedente por la Autoridad Administrativa de Trabajo. **Décimo Noveno:** En efecto, conforme se desprende de Resolución Directoral General Número 39-2017/MTPE/2/14 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por el Sindicato de Cerro Verde contra la Resolución Gerencial Regional número 059-2017-GRA/GRTPE, confirmando de esta manera la declaración de improcedencia de la comunicación de huelga indefinida cursada por el sindicato antes aludido, dando por agotada la vía administrativa. **Vigésimo:** En lo que respecta el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR, se configura como un requisito adicional a los establecidos en el artículo 73 de la Ley de Relaciones Colectiva de trabajo, sobre la naturaleza de dichos requerimientos el profesor Daniel Ulloa[7] en su artículo "Las huelgas improcedentes e ilegales ¿Son huelgas? señala: "Consideramos que los requisitos de procedencia del artículo 73 son enunciativos, referencias para garantizar que la medida de huelga cumpla con respetar un cierto orden inicial, pero no constituyen requisitos necesarios para la efectiva concreción de la misma (o la que podríamos denominar "huelga irregular"). Si esta se produce a pesar de que sea declarada improcedente, como ocurre en gran parte de las huelgas realizadas por personal que labora, bajo régimen privado o público, para el Estado, la medida será una huelga irregular, no sujeta a la prevista en la ley, pero huelga como manifestación de la libertad sindical de la organización de trabajadores." (sic.) **Vigésimo Primero:** Que, respecto a los alcances del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuya inaplicación invoca la parte recurrente, dicha norma resulta impertinente al caso materia de autos, toda vez que la norma citada regula un requisito legal para declarar la huelga; empero, en el presente proceso no se encuentra en discusión si la huelga fue legal o no, sino que el actor en ejercicio de su derecho a la huelga continuo ejerciendo el mismo hasta antes de que se emita un pronunciamiento final por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo quien declaró infundado el recurso de revisión y por agotada la vía administrativa con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, conforme es de verse a fojas veintiocho a treinta, siendo que la huelga convocada por el sindicato de trabajadores culminó el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, esto es, siete días antes del pronunciamiento final de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Estando a lo expuesto, deviene en **infundada** la causal invocada en este extremo. **Vigésimo Segundo:** En cuanto a la **infracción normativa del artículo 81 del Decreto Supremo número 010-2003-TR**, la parte recurrente alega que la huelga en que participó el demandante fue una paralización intempestiva, por lo tanto ameritaba la sanción disciplinaria de severa llamada de atención escrita (así se menciona en la carta que le cursó la demandada al demandante y que corre a fojas cuatro); empero, según lo reseña la Resolución Directoral General número 39-2017/MTPE/2/14, que corre en fojas veintiocho a treinta, se suscitó lo siguiente: **i)** con fecha dos de marzo de dos mil diecisiete el Sindicato de Cerro Verde pone en conocimiento de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, la comunicación hecha a la Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta, el inicio de una huelga indefinida a realizarse el diez de marzo de dos mil diecisiete; **ii)** Mediante Auto Directoral número 11-2017-GRA/GRTPE-DPSC de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa declaró improcedente la comunicación de plazo de huelga presentado; **iii)** el Sindicato con fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, interpone recurso de apelación contra el Auto Directoral número 11-2017-GRA/GRTPE-DPSC; **iv)** Mediante Resolución Gerencial Regional número 059-2017-GRA/GRTPE, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa confirmó el Auto Directoral número 11-2017-GRA/GRTPE-DPSC en todos sus extremos; **v)** el Sindicato, con fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, interpone recurso de revisión contra la Resolución Gerencial Regional Nº 059-2017-GRA/GRTPE, emitida por la GRTPE de Arequipa; y, **vi)** Mediante Resolución Directoral General número 39-2017/MTPE/2/14 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que declara infundado el recurso de revisión interpuesto por el Sindicato, declarando agotada la vía administrativa en dicho procedimiento. **Vigésimo Tercero:** En concordancia con lo expuesto, la alegada cesación de labores intempestiva no resulta ser cierta pues el Sindicato de Cerro Verde cumplió con remitir una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo, dando a conocer que a su empleadora le comunicó que iniciaría una huelga indefinida a partir del diez de marzo de dos mil diecisiete y cuando fue declarada improcedente la huelga, ejerció su derecho de contradicción, pluralidad de instancia e interpuso recurso de apelación y finalmente recurso de revisión, culminando el procedimiento administrativo con la Resolución Administrativa de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas veintiocho a treinta). Todo esto refleja que la demandada de manera inequívoca conoció de antemano las actividades que iba a realizar el sindicato, no configurándose de tal modo el supuesto prescrito en el artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo número 010-2003-TR. **Vigésimo Cuarto:** En el contexto citado, se encuentra acreditado que la huelga la conoció previamente el empleador y luego el Ministerio de Trabajo; es decir, que no fue intempestiva, no se produjo abruptamente; por el contrario, en cumplimiento de la ley, la organización sindical expreso las razones de su decisión, trasladando tal acuerdo a su empleadora y a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por lo que, no existe infracción normativa de la citada norma, ello debido a que la instancia de mérito ha analizado y resuelto la sentencia en este extremo con arreglo a ley. **Vigésimo Quinto:** En relación a la causal de **infracción del inciso 3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú**, es de advertir que la actividad desarrollada por los trabajadores se mantuvo de forma pacífica, pues la demandada no da cuenta en su carta de sanción disciplinaria en el proceso de actos perturbadores como la toma de local, agresiones físicas u otros actos de violencia; lo que permite concluir que el actor para ejercer su derecho constitucional a la huelga, observó lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto Supremo antes citado. **Vigésimo Sexto:** Siendo ello así, se evidencia que la instancia de mérito no ha infraccionado el

inciso 3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú, ni el artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, tampoco el artículo 77 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo número 010-2003-TR, ni el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR.; **en consecuencia, corresponde en estos extremos declarar infundada las causales denunciadas por la demandada. Vigésimo Sétimo:** En lo que respecta a las infracciones normativas contenidas en los acápites **iv) y vii),** corresponde emitir el siguiente pronunciamiento. **Vigésimo Octavo:** En relación a la **infracción normativa del articulo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, del articulo II del Título Preliminar del Código Civil y del artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR**. Las citadas normas señalan lo siguiente: **Artículo 103 de la Constitución Política del Perú** Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. **La Constitución no ampara el abuso del derecho**. **Artículo II del Título Preliminar del Código Civil** La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. **Artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR.** Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. **Vigésimo Noveno: Delimitación del objeto de pronunciamiento.** Conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, el tema en controversia está relacionado a determinar si la sanción disciplinaria de severa llamada de atención escrita impuesta al demandante con fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, se encuentra debidamente motivada, de acuerdo a la facultad sancionadora del empleador, previsto en el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR, norma que a consideración de la parte recurrente ha sido omitida. Asimismo, corresponde determinar si, en el presente caso, se ha incurrido en abuso de derecho, ello debido a que el ejercicio del derecho a la huelga tiene límites los mismos que a criterio de la parte recurrente habrían sido suprimidos por el sindicato de trabajadores, por lo que considera pertinente la aplicación de los artículos 103 de la Constitución Política del Perú y artículo II del Título Preliminar del Código Civil en la sentencia de vista. **Trigésimo: Poder de dirección y la facultad disciplinaria del empleador.** El fundamento del poder de dirección y la facultad disciplinaria del empleador se encuentra prevista en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio, industria y estimula la creación de riqueza. En tal virtud le corresponde al empleador organizar y dirigir su empresa a fin de lograr sus objetivos y para ello goza del poder de dirección, que conlleva intrínsecamente, la facultad de sancionar las faltas del trabajador en el desempeño de sus funciones, faltas que perjudican el normal desarrollo de la producción, de los servicios o las relaciones de trabajo. De acuerdo con el tratadista Alonso Olea, el poder de dirección del empleador es la facultad que confiere al empresario el contrato de trabajo, para dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo[8]. Sin embargo, el poder de dirección que goza el empleador no es un poder absoluto y arbitrario, sino que está limitado por la ley, los convenios colectivos de trabajo, el contrato individual de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Blancas Bustamante, señala: "Alonso Olea, en cambio asumiendo una posición integradora funda el derecho del empleador al despido del Trabajador, tanto en la naturaleza contractual de la relación de trabajo, cuanto en el poder disciplinario del empleador (...) El despido disciplinario es la resolución unilateral del contrato de trabajo por decisión del empresario fundada en un incumplimiento previo del trabajador (...) Dicho poder disciplinario se gradúa en función de la gravedad de las faltas del trabajador y culmina en el derecho de resolución unilateral, esto es, el despido (...)"[9]. Este derecho supone atribuirle al empleador, en palabras del **profesor español Sala Franco**, "un poder de dirección como poder de especificación o concreción de la prestación laboral y, como contrapartida del mismo, surge un deber de obediencia en el trabajador"[10]. En este sentido, en nuestro ordenamiento el empleador tiene reconocido el poder de dirigir, fiscalizar y sancionar la prestación laboral del trabajador. Por tanto, toda relación contractual para ser calificada como laboral supone una parte que dirija la prestación y otra que deba obedecer, al encontrarse subordinada. Sin embargo, resulta obvio que esta facultad se ve limitada por la racionabilidad y las necesidades del centro de trabajo, así como por causales específicas. **Alcances sobre la subordinación.** El elemento de subordinación de la relación laboral se suscita cuando el que presta de servicios se encuentra bajo la dirección del empleador, esto es, la existencia de un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla; por tal razón según el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003-97-TR, el empleador puede impartir instrucciones tanto de forma genérica como específica mediante reglas válidas para todos o solo una parte de los trabajadores de la empresa. Sobre el poder de dirección, que ostenta el empleador, y se plasma en la facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador, se debe tener presente que debe estar dentro los límites de razonabilidad, a fin de que su ejercicio no se considere como arbitrario e irregular; razón por el cual, existen dos límites: internos y externos. Los primeros se encuentran circunscritos por las definiciones propias de la libertad de empresa y del poder de dirección, y los segundos relacionados con el principio de razonabilidad y los derechos fundamentales del trabajador. El indicado artículo 9 de la Ley ya citada, alude a todas las modificaciones de las condiciones de trabajo que, unilateralmente, son introducidas por el empleador en la relación laboral. El dispositivo legal prevé un concepto amplio sin que exista una delimitación acerca de la naturaleza de las modificaciones que se pretenden implementar. Ahora bien, el ejercicio del ius variandi no es irrestricto, tiene limitaciones cuyos alcances deben ser expuestos, pues de su transgresión o no dependerá la posibilidad del trabajador de oponerse a la medida. Estos límites a la potestad del empleador son: (i) la razonabilidad de la medida, y; (ii) que encuentre su justificación en las necesidades del centro de trabajo. De igual modo, tal como prevé el artículo 25 del Decreto Supremo número 03-97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la falta grave es la infracción por el trabajador, de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación; es decir, tiene que tomarse en cuenta requisitos esenciales, tales como, que la falta debe estar **tipificada** en la ley, la existencia de **proporcionalidad** que consiste en atribuir correctamente la conducta infractora del trabajador la connotación de "grave", que hace justificable la sanción impuesta, y el de la **oportunidad**, que consiste en que el momento en que se produzca la sanción disciplinaria debe guardar relación inmediata con aquel en el cual el empleador conoció o comprobó la existencia de la falta cometida por el trabajador, al que se deberá de agregar el principio de **razonabilidad** a que se refiere el artículo antes mencionado y respecto al fondo de la controversia es necesario señalar que de acuerdo a nuestra normatividad adjetiva, corresponde al empleador demostrar la existencia de la falta grave alegada e imputada al demandante. Aunado a ello, el empleador debe cumplir con un procedimiento formal, antes de imponer una sanción disciplinaria, si bien es cierto, en nuestro ordenamiento jurídico sólo existe un procedimiento prestablecido para el caso del despido, supuesto en la que requiere que el empleador otorgue un plazo de seis (06) días al trabajador para que efectúe sus descargos correspondientes; empero, conforme se encuentra establecido en la Casación 4494-2017-Lima de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, que: "En el seno de un procedimiento disciplinario privado es necesario "[notificar] previamente a los [implicados] acerca de las faltas que se les imputan, a fin de que ejerzan su defensa. [Así, deben] comunicarles por escrito los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarles un plazo prudencial a efectos de que

—mediante la expresión de los descargos correspondientes— puedan ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa." Fundamento que guarda correlato con lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 00206-2013-PA/TC, en la que señala: "(…) los derechos que componen el debido proceso no sólo se deben aplicar en los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos, en los procedimientos corporativos privados y en general, en cualquier proceso o procedimiento en el cual materialmente se discutan o restrinjan derechos. Uno de estos derechos es el **derecho de defensa**, y como un derecho que garantiza su —ejercicio al interior de un procedimiento sancionador, el derecho a la comunicación previa de la infracción (…) En efecto, de acuerdo a las sentencias emitidas en los Expedientes 0067-1993-AA/TC, 0083-2000-AA/TC, 1612-2003-AA/TC, 1489-2004-AA/TC, 5215-2007-PA/TC, entre otras, en el seno de un procedimiento disciplinario privado es necesario "[notificar] previamente a los [implicados] acerca de las faltas que se les imputan, a fin de que ejerzan su defensa. [Así, deben] comunicarles por escrito los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarles un plazo prudencial a efectos de que —mediante la expresión de los descargos correspondientes— puedan ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa". Es así que el empleador no podrá imponer una sanción disciplinaria al trabajador sin antes iniciar el procedimiento formal, similar al establecido en el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En ese sentido, dicho procedimiento es de suma importancia, puesto que, de no seguirse correctamente, nos encontraríamos ante la afectación del derecho al debido proceso, afectación del derecho de defensa, precisado por nuestro Tribunal Constitucional en el expediente número 976-2001-AA/TC; el mismo que forma parte de la denominada "protección preventiva" consagrada en la Constitución Política del Estado, en su artículo 27[11]. **Trigésimo Primero:** En lo que respecta al **abuso del derecho.** Juan Espinoza Espinoza[12] ha señalado que: "El abuso del derecho, en tanto principio general, es un instrumento del cual se vale el operador jurídico para lograr una correcta y justa administración de justicia. Es aquí donde juega un rol decisivo la labor creativa y prudente del juez que, debe estar atento a reconocer nuevos intereses existenciales y patrimoniales, enfrentando audazmente modelos legislativos que los pretenden inmovilizar". **Trigésimo Segundo:** Según la normativa vigente y aplicable al caso concreto, en las normas sustantivas y materiales del derecho laboral prima el principio protector, o, otras palabras, el carácter tuitivo que "inspira todo el Derecho del trabajo y se funda en la desigualdad de posiciones existentes entre el empleador y el trabajador, manifestada en la subordinación hacia aquél"[13]. El artículo 23 de la Constitución Política del Perú prevé que: "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". **Trigésimo Tercero: Principio de legalidad.** En cuanto al citado principio, las faltas y prohibiciones deberán estar debidamente tipificadas, prohibiéndose de este modo la aplicación por analogía de conductas reprochables. Según el Tribunal Constitucional en el expediente 4810-2004-AA/TC (fundamento 6), establece «(...) que el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.» Asimismo, el principio de legalidad se configura como derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido debe estar de forma expresa previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica (principio de tipicidad o legalidad). **Trigésimo Cuarto: Solución al caso concreto.** De la revisión del recurso de casación presentado, se advierte que la empresa demandada basa su teoría del caso en el hecho de que existe una infracción normativa el artículo 9° del Decreto Supremo número 003-97-TR, puesto que ésta norma establece la facultad que tiene el empleador para aplicar sanciones o medidas disciplinarias en caso que se verifique el incumplimiento de obligaciones de parte del trabajador. En el caso en concreto a fojas cuatro, es de verse que al actor le notifican de manera directa la carta de sanción disciplinaria, de severa llamada de atención escrita, no advirtiéndose de modo alguno el inicio de un procedimiento formal para la imposición de una sanción disciplinaria, esto es, que al actor se le haya dado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción para enervar o cuestionar la carta de imposición de sanción disciplinaria. De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la parte demandada al imponer la sanción disciplinaria, no cumplió con las reglas mínimas del debido proceso (derecho de defensa), habiendo ejercido en ese sentido, de manera arbitraria la facultad sancionadora. Pues del contenido de la carta de sanción disciplinaria de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, se observa que se le sanciona al actor por una supuesta paralización intempestiva, siendo que no se trató de ello (ausencia de tipicidad) sino del ejercicio regular del derecho a la huelga, la misma que fue ejercida mientras aún no había un pronunciamiento final sobre la improcedencia de la comunicación de plazo de huelga presentado por el Sindicato Cerro Verde a la autoridad administrativa de trabajo. Por otro lado, atendiendo el principio de legalidad, resulta pertinente indicar que la sanción impuesta al actor contraviene el citado principio, ello debido a que la huelga se paralizó el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete antes de que se emita el pronunciamiento final de la autoridad administrativa de trabajo, que declara improcedente la comunicación de huelga, y con ello da por agotada la vía administrativa, la misma que se emitió con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, siendo que a partir de esta última fecha conforme lo establece el artículo 39 del Decreto Supremo número 001-96-TR, que aprueba el Reglamento de Ley de Fomento al Empleo, se configura lo siguiente: "Artículo 39. Los días de inasistencia injustificada en caso de huelga ilegal, se computan desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro de trabajo bajo constancia notarial o a falta de notario, bajo constancia policial, siempre y cuando la resolución que declare ilegal la huelga haya quedado consentida o ejecutoriada. La resolución dictada en segunda y última instancia causa estado, desde el día siguiente a su notificación. De no interponerse Recurso de Apelación de la resolución de primera instancia, en el término del tercer día contado a partir del día siguiente de su notificación, aquélla queda consentida". Al respecto debemos decir que la aplicación de dicha norma implica la existencia de una huelga que haya sido declarada ilegal, es decir, que haya sido calificada como tal por presentarse las causales previstas en el artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo número 010-2003-TR[14] . **Trigésimo Quinto:** Estando a lo expuesto, la exigencia prevista en el artículo 39 del Decreto Supremo número 001-96-TR, solo tiene sentido cuando a pesar de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, los trabajadores continúan paralizando sus labores, pues no resulta lógico pensar que se requiera mediante cartelón que se reincorporen a sus labores a quienes ya han depuesto su paralización anticipadamente. Como ha sucedido en el presente caso, pues los trabajadores del sindicato levantaron la huelga el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, antes de que se emita la resolución final de la autoridad administrativa de trabajo que declara improcedente la comunicación de huelga y da por agotada la vía administrativa con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. **Trigésimo Sexto:** Es así que, tal como se ha detallado en los considerandos precedentes, la sucesión de los hechos, se encuentran debidamente reconocidos; no obstante, la empresa demandada imputó una falta sanción de severa llamada de atención escrita- al considerar como una paralización intempestiva, los días de huelga; sin embargo, no corre en autos prueba alguna que demuestre que esta imputación haya sido comunicada al demandante a efectos del cómputo del plazo, ni que se haya requerido el retorno a sus labores, menos de que se le haya dado la oportunidad de presentar sus descargos a fin de enervar la falta imputada y la sanción impuesta. El incumplimiento de esta formalidad de orden público, inobserva el debido proceso aplicable también a esta facultad sancionadora, al advertirse claramente la afectación al derecho de defensa y contradicción. **Trigésimo Séptimo:** En cuanto a las infracciones normativas del artículo 103 de la Constitución Política del Perú y del articulo II del Título Preliminar del Código Civil, carecen de sustento e impertinencia en el presente caso, el análisis de los mismos, ello debido a que no existe abuso del derecho por parte del sindicato de trabajadores, ya que de manera anticipada comunicó formalmente que iniciaría huelga a partir del diez de marzo de dos mil veintiuno, la misma que duró hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, lo que se advierte de autos, es el ejercicio regular de un derecho constitucional, que como bien se indicó de manera precedente también tiene límites.

Trigésimo Octavo: En consecuencia, el derecho a la huelga debe ejercerse en armonía con el interés público respetando los procedimientos legales establecidos, pues, de lo contrario en caso de declararse ilegal habiéndose agotado la vía administrativa y la decisión haya quedado consentida o ejecutoriada, acarrea la correspondiente responsabilidad para sus autores, ello debido a que se estaría incurriendo en inasistencias injustificadas, conforme lo prevé el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR. De igual modo debemos considerar que la facultad sancionadora del empleador también tiene límites y debe respetar los procedimientos previstos en la ley, siendo que todo trabajador, tiene derecho al ejercicio de la defensa y contradicción por lo que no puede ser sancionado sin previo ejercicio de tales derechos, de lo contrario se estaría afectando el derecho al debido proceso, situación que ha ocurrido en el presente caso, al no haberse observado en la imposición de la sanción disciplinaria. **Trigésimo Noveno:** En atención a lo expuesto, se concluye que el Colegiado Superior no ha infraccionado el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR, tampoco el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y del artículo II del Título Preliminar del Código Civil; previsto como causales del recurso de casación presentado por la empresa demandada; en consecuencia, **devienen en infundada. Cuadragésimo:** Asimismo, cabe señalar que **el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR y el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo número 001-96-TR**, la primera norma citada establece que declarada la ilegalidad de la huelga mediante resolución consentida o ejecutoriada, los trabajadores deberán reincorporarse al día siguiente al del requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores, resolución que quedará consentida a partir del vencimiento del plazo de apelación de la resolución de primera instancia, sin que ésta se haya producido. Al respecto este Supremo Tribunal verifica de autos que efectivamente el Sindicato Cerro Verde convocó a huelga indefinida a iniciarse el diez de marzo de dos mil diecisiete, la cual se produjo en dicha fecha hasta el veinticuatro de marzo del mismo año, habiéndose cumplido previamente con los respectivos plazos de huelga ante el empleador y la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. Asimismo, se verifica del contenido del Auto Directoral número 011-2017-GRA/GRTPE-DPSC, que el Sindicato Cerro Verde comunica el plazo de huelga, fue presentado después de haberse agotado la negociación directa entre la Sociedad Minera Cerro Verde y el Sindicato Cerro Verde sobre los siguientes puntos: 1) Mejores condiciones de trabajo seguro, por investigación transparente y objetiva de accidentes de trabajo y el respeto al comité paritario de seguridad; 2) Pago de utilidades convencionales con sujeción a la cláusula 8 del convenio colectivo y a la carta número 1533-2003 y cumplimiento del acta de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis; 3) Se dé cumplimiento a la cláusula 35 del convenio colectivo; y, 4) Se dé cumplimiento a la cláusula 25 de convenio colectivo, efectuando el pago de remuneración y asignación vacacional antes del inicio del goce físico. En ese orden de análisis, la huelga, en el caso concreto, no necesariamente terminaba con la declaratoria de improcedencia, sino recién cuando sea declarada ilegal, tal como lo establece el artículo 85 inciso d) del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR; lo que no ha ocurrido en el caso de autos; por tanto, si no existe la declaratoria de ilegalidad de la huelga, habiendo el Sindicato Cerro Verde comunicado al empleador y a la Autoridad Administrativa de Trabajo el inicio de la paralización de labores desde el diez de marzo de dos mil diecisiete, tal decisión constituye el ejercicio legítimo del derecho de huelga, más aún si: 1.- Frente a la declaratoria de improcedencia de la huelga, el Sindicato Cerro Verde planteó recurso de apelación y luego el de revisión; 2.- Que el recurso de revisión fue resuelto el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, cuando la huelga ya había concluido el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; 3.- Que no hubo requerimiento del empleador a los trabajadores para que se reincorporen a las labores. **Fundamentos por los cuales también corresponde desestimar las infracciones de las normas materiales denunciadas en este extremo. Cuadragésimo Primero:** Este colegiado supremo ha decidido apartarse de la doctrina jurisprudencial establecida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria Suprema en la CASACION LABORAL número 25646-2017-AREQUIPA, atendiendo los fundamentos expuestos en los considerandos vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y cuadragésimo considerando de la presente resolución. Para lo cual invocamos la aplicación del segundo párrafo del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por estas consideraciones, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, **Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta,** mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, que corre a fojas doscientos ochenta y uno; en consecuencia, **NO CASARON** la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce Nº 667-2018-3SL, de fecha veintisiete de setiembre dos mil dieciocho, que corre a fojas ciento ochenta y siete, expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; **DISPUSIERON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Jorge Luis Paredes Del Carpio contra Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta sobre impugnación de sancion disciplinaria y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Salazar Lizárraga, Juez Supremo. **S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

1 **Artículo 139.-** Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)

2 Expediente Nº 02211-2009-AA

3 Expediente Nº 00008-2005-PI/TC

4 Recopilación de 2006, párrafo 40, 342º Informe caso número 2441, párrafo 619. Recopilación de 2018 (sexta edición), párrafo 70.

5 Recopilación de 2006, párrafo 521; Recopilación de 2018 (sexta edición) párrafo 751 y 752 y 754.

6 Recopilación de 2006, párrafo 660; 343º informe, Caso núm. 2472, párrafo 966; 346º informe, Caso núm. 2473, párrafo 1532; 348º informe, Caso núm. 2494, párrafo 961; 351º informe, Caso núm. 2569, párrafo 640.

7 ULLOA MILLARES, Daniel, Revista Derecho & Sociedad, Nº 46, Marzo 2016 / ISSN 2079-3634, pág. 279-280

8 ALONSO OLEA, Manuel; CASAS BAAMONDE, María. Derecho del Trabajo. Editorial Civitas. España 2001. Página 366

9 Carlos Blancas Bustamante, en su libro "El despido en el Derecho Laboral Peruano", tercera edición, Juristas Editores, marzo 2013, página 190

10 SALA FRANCO, Tomas. "Derecho del Trabajo", Valencia, Tirant lo Blanch, 1989, p. 530

11 **Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario**
La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

12 Espinoza Espinoza, Juan. En: Código Civil Comentado. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica. pág. 30.

13 García Manrique. Álvaro. "¿Cómo se están aplicando los principios laborales en el Perú?" Gaceta Jurídica Editores. Lima, 2010, página 84.

14 Artículo 84.- La huelga será declarada ilegal:
a) Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente.
b) Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes o personas.
c) Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81.
d) Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82.
e) Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia.
La resolución será emitida, de oficio o a pedido de parte, dentro de los dos (2) días de producidos los hechos y podrá ser apelada. La resolución de segunda instancia deberá ser emitida dentro del plazo máximo de dos (2) días.

C-2246709-103

CASACIÓN Nº 29071-2022 LIMA

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, doce de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de San Borja,** contra la sentencia de vista de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno; que **revoca** la sentencia apelada **en** el extremo que otorga los beneficios convencionales por el periodo del 01 de mayo de 2016 a noviembre de 2018, **reformándola** se declara infundado este extremo. **Confirma** la sentencia que declara fundada la demanda, en consecuencia: Ordena que la demandada considere que la relación laboral habida entre las partes corresponde a un contrato de trabajo de duración indeterminada, debiendo la demandada formalizar el vínculo laboral de la demandante desde el 01 de julio de

2015. Ordena que la demandada inscriba a la accionante en su planilla de pagos de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada plazo indeterminado, consignando como fecha de ingreso de la accionante la del 1 de julio de 2015, la misma que también debe constar en las boletas de pago. Modifica el monto a pagar por la demandada abone a la actora en la suma de s/24,853.03 (veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres con y 03/100 soles**,** por concepto de beneficio sociales y sindicales, más intereses legales. Ordena que la demandada se constituya en depositaria de la compensación por tiempo de servicios (CTS) de la demandante; por tanto, la demandada deberá cumplir con mantener en custodia y pagar al finalizar la relación laboral este concepto en la suma de S/266.67 (doscientos sesenta y seis y 67/100 soles), más los intereses financieros que se generen. Ordena que la demandada realice el depósito en la entidad bancaria de elección de la actora la suma de S/5,757.12 (cinco mil setecientos cincuenta y siete y 12/100 soles), por concepto de compensación por tiempo de servicios (CTS). Ordena que la entidad demandada cumpla con contratar el correspondiente Seguro de Vida regulado por el Decreto Legislativo Nº 688, así como cumpla con efectuar los aportes previsionales en la AFP de elección de la actora. Sin costas. Fijar los costos procesales a la demandada en 20%. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo-en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios; beneficios sociales que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/30,876.82. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios e ineficacia de contratos CAS**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 – Cusco,** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación

de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de San Borja,** contra la sentencia de vista de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Ana María Rosales Averanga contra la Municipalidad de San Borja, sobre Desnaturalización de Contrato y otro; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. SS. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-104

CASACIÓN Nº 29342-2022 AREQUIPA

Materia: PAGO DE BONIFICACIÓN
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, interpuesto por **el demandante Ubaldo Rosas Quispe** contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo- en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 inciso 1 de la LPT: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". **CUARTO.** El último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **QUINTO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, pues se advierte que la sentencia de vista confirma la apelada declarando infundada la demanda, habiendo emitido pronunciamiento solo respecto a pretensiones cuantificables (Pago y reintegro de bono por riesgo de salud), cuyo monto fue determinado en el escrito de demanda en la suma de S/12.201.00; por tanto, incluso en el supuesto que se hubiese amparado lo pretendido, evidentemente la pretensión de este proceso no superaría el monto exigido en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, esta Sala Suprema debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandante Ubaldo Rosas Quispe** contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Ubaldo Rosas Quispe contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, sobre Pago de Bonificación; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-105

CASACIÓN Nº 29343-2022 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores** contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia apelada de fecha nueve de julio de dos mil veinte, la cual declara fundada en parte la demanda, ordena que la citada entidad edil cancele a la parte actora la suma de S/8,744.44 por concepto de beneficios sociales; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo- en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N°393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44,000.00; y, siendo que el recurso de casación es de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales; los mismos que han sido amparados por las instancias de mérito en el monto total de S/8,744.44. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e invalidez de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización o ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de contratos administrativos de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización o ineficacia de la contratación no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de la contratación administrativa de servicios solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la ineficacia y desnaturalización de los contratos como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planillas que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. La misma situación se genera en la contratación de seguro de vida Ley. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7358-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral;

doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores** contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Giancarlos Aldair Boza Uriarte contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre Pago de beneficios sociales; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE: La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

[2] Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-106

CASACIÓN Nº 29445-2022 VENTANILLA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Puente Piedra**; contra la sentencia de vista de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, a pagar la suma de S/ 8,991.11 soles por los conceptos de gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9%, escolaridad del año 2020, vacaciones no gozadas y asignación familiar; además de ordenar a la demandada con depositar en la entidad financiera del trabajador la suma de S/ 3,262.18 soles por compensación por tiempo de servicios; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones, escolaridad, bonificación extraordinaria de 9%, vacaciones, asignación familiar y compensación por tiempo de servicios; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/ 12,253.29 soles. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare **el reconocimiento de vínculo laboral por desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la ineficacia de los contratos administrativos de servicios,** sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En

efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Puente Piedra;**

contra la sentencia de vista de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Eduardo Cuellar Flores contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sobre Desnaturalización de contrato y otro; **y los devolvieron. Ponente Señor Lévano Vergara, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-107

CASACIÓN Nº 29515-2022 LIMA

Materia: BONO JURISDICCIONAL E INCIDENCIA
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO- EJE

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, que resuelve: **"CONFIRMAR** la Sentencia Nº 224-2021-18°JETP, contenida en la resolución número seis, de fecha 27 de agosto de 2021, que resuelve: 1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia: 1.1. Se ORDENA a la demandada considere el bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales como conceptos remunerativos. 1.2. Se ORDENA a la demandada abone a favor del demandante la suma de S/ 43,105.73 (Cuarenta y tres mil ciento cinco con 73/100 soles), por concepto de pago y reintegro del bono de función jurisdiccional y gratificaciones, como consecuencia del reconocimiento del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, más intereses legales que se liquidaran en ejecución de sentencia. 2. CONDENAR a la demandada el pago de costos, sin costas. ORDENARON que la presente resolución sea notificada a través de las casillas electrónicas de las partes."; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, pretende el pago íntegro del Bono por función jurisdiccional, del 01 de marzo de 1997 a noviembre de 2002 y el reintegro del bono jurisdiccional en virtud de la aplicación retroactiva de la Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ, del 01 de marzo de 2008 al 30 de noviembre de 2011.La naturaleza remunerativa del Bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales. Ordenar el reintegro de gratificaciones, como consecuencia del reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.°728, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, y el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°001-97-TR. (iii) Infracción normativa de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el inciso a) del artículo 19 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. (iv) Infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. SEXTO.** Identificadas las causales procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuación: **vii.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales **(i)**, pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **vii.2.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales **(ii y iii)**, si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales, resulta jurídicamente errados; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **vii.3.** Finalmente, se denuncia la infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la LPT que regula la posibilidad de condenar al Estado del pago de costos procesales **(iv)**; no obstante, no especifica cuál sería la interpretación correcta de la norma en cuestión que de forma expresa posibilita la condena al Estado al pago de costos en los procesos laborales, es decir, no se ha fundamentado de forma clara y precisa la infracción que se denuncia; máxime si sobre la condena de costos procesales al Estado en los procesos laborales es una cuestión que ya ha sido ampliamente dilucidada por este Tribunal en las casaciones 2167-2019 Lima, 1628-2019 Lima, 8237-2019 Tumbes, entre otros, en el sentido que en el proceso laboral el Estado sí puede ser condenado al pago de costos procesales. **vii.4.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉPTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **Clarisa Fuentes Machacuay** contra el Poder Judicial, sobre Bono Jurisdiccional e incidencia; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-108

CASACIÓN Nº 29830-2022 DEL SANTA

Materia: PAGO DE INCREMENTOS REMUNERATIVOS Y OTRO
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno por **la demandada Municipalidad Provincial Del Santa**, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cinco de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Santa; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (incrementos remunerativos derivados de convenio colectivos y pago de beneficios legales como vacaciones, escolaridad, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios), ordenándose a la demandada el pago de S/ 31,690.00 soles en favor de la demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Provincial Del Santa**, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Santa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Alfonso Rubén Paredes Castañeda contra la Municipalidad Provincial Del Santa, sobre Pago de Incrementos Remunerativos y otro; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2020.

C-2246709-109

CASACIÓN LABORAL Nº 30068-2022 LIMA

Materia: INVALIDEZ DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, once de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Miraflores**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, que la demandada cumpla con cancelar al actor la suma de S/11,121.83 por concepto de gratificaciones legales y asignación familiar, más intereses legales; asimismo, **ordena** que la demandada cumpla con depositar en la cuenta bancaria del actor la suma de S/6,111.54 por concepto de compensación por tiempo de servicios, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios y asignación familiar; las cuales han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/17,233.37. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **ineficacia de contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso, constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la ineficacia de los contratos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial, con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos

laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de ineficacia de los contratos de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013- Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización o ineficacia de los contratos de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de los contratos de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia del contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Municipalidad Distrital de Miraflores**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Carlos Alberto Canales Chuquipoma contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre invalidez de contratos administrativos de servicios; **y los devolvieron. Ponente Señor Salazar Lizárraga, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-110

CASACIÓN Nº 30467-2019 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
PROCESO ORDINARIO NLPT

Lima, quince de noviembre de dos mil veintidós .-

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** El recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Humberto Arturo Fernández Muñoz,** contra la sentencia de vista de fecha doce de setiembre de dos mil diecinueve, que resuelve **confirmar** la sentencia apelada que declara: infundada la demanda. Recurso de casación que cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. **SEGUNDO:** El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: **a)** La aplicación indebida de una norma de derecho material, **b)** La interpretación errónea de una norma de derecho material, **c)** La inaplicación de una norma de derecho material, y **d)** La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. **TERCERO:** Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo

58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: **a)** Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, **b)** Cuál es la correcta interpretación de la norma, **c)** Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y **d)** Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. **CUARTO:** La parte demandante interpone demanda postulando como pretensión: que la demandada le abone Indemnización por Despido Arbitrario (en adelante IDA), al haber sido despedido arbitrariamente. **QUINTO:** La parte recurrente sustenta su recurso de casación en las causales siguientes: **1) Infracción del artículo 26 de la Constitución Política del Estado,** precisa que no se ha fundamentado en que consiste el incumplimiento de las obligaciones del recurrente; y demás supuestos contenidos en el numeral 25 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728. Pues solo se indica que la falta cometida es grave debido al incumplimiento de las obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral lo cual se extiende a las directivas o al ROF y la inobservancia de memorandums múltiples sin haber sido notificado con los mismos. Asimismo, invoca la parte recurrente los principios de la relación laboral consistentes en igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los derechos e interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. Señala que el apoderado de CORPOSAC si contaba con poderes sin embargo la falta atribuida fue por no haberle solicitado dicho poder en forma oportuna, lo cual no es así porque si se hubiera pagado el cheque sin el poder, se le hubiera despedido el mismo día que tomó conocimiento del oficio de la Dirincri. **2) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado,** precisa que no se ha considerado lo dispuesto sobre el principio de inmediatez en nuestra legislación como tampoco se han considerado los hechos y las pruebas en autos, solo ha resuelto considerando como ciertos los argumentos de la demandada. Agrega que no se ha tomado en cuenta su impecable desempeño laboral. **SEXTO:** En cuanto a las causal denunciada en el acápite **1),** es de precisar que la parte recurrente denuncia la norma que considera infringida; sin embargo, no se advierte la incidencia de la misma al caso concreto, máxime si a través de ella lo pretendido es el análisis de circunstancias fácticas, que ya fueron objeto de análisis al momento de resolver como son, que la parte recurrente aceptó haber cometido irregularidades en el trámite del pago del cheque de gerencia objeto de litis no habiendo contado en su oportunidad con el poder del apoderado encargado de cobrarlo, circunstancias esta que ya no corresponden ser analizadas nuevamente, lo contrario sería ir en contra de la naturaleza y fines del recurso de casación; siendo ello así la presente causal deviene en **improcedente. SÉTIMO:** Respecto de la infracción normativa precisada en el acápite **2),** si bien se precisa la norma que considera infringida cierto es que no se precisa su incidencia y en que supuestos de infracción normativa se habría incurrido, invocando únicamente argumentos que ya fueron dilucidados por las instancias, como es, el principio de inmediatez y su impecable record laboral, aspectos que cumplieron con ser dilucidados por la Sala de vista; siendo ello así, la presente causal también deviene en **improcedente.** Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Humberto Arturo Fernández Muñoz,** contra la sentencia de vista de fecha doce de setiembre de dos mil diecinueve; y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley, en el proceso laboral seguido por Humberto Arturo Fernández Muñoz contra el Banco de la Nación, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otro; y devuélvase. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZÁRRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-111**

CASACIÓN Nº 31800-2022 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, que **revoca** la sentencia apelada de nueve de enero de dos mil veinte, en los extremos que declara **fundada** la pretensión de desnaturalización de contrato modal, la misma que declara infundada; **confirma** en el extremo que declara fundada la demanda respecto al carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales y sus incidencias en las gratificaciones de julio y diciembre y compensación por tiempo de servicios; en consecuencia, ordena que la demandada pague al actor la suma de S/ 14,170.00 por reintegro de gratificaciones, por incidencia del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, más intereses legales; y, ordena que la demandada se constituya en depositaria respecto del depósito de la compensación por tiempo de servicios por la suma de S/ 2,912.78, más intereses financieros; y. ordena que la demandada cumpla con depositar la suma de S/ 5,287.92 por el mismo concepto. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son la desnaturalización de contratos, reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y de las asignaciones excepcionales, así como su incidencia en las gratificaciones y compensación por tiempo de servicios. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.°728, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, y el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°001-97-TR. (iii) Infracción del artículo 138 de la Constitución Política del Perú. (iv) Infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo. (v) Infracción normativa de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el artículo 19 de la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. SEXTO.** Identificadas las casaules procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuacion: **vii.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales (i), pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **vii.2.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales (ii, iii y v), si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los

mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales, resulta jurídicamente errados; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **vii.3.** Finalmente, denuncia que la Sala Superior no consideró lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria de la LPT que regula la posibilidad de condenar al Estado del pago de costos procesales (iv); no obstante, la recurrente no ha cumplido con fundamentar de forma clara y precisa la infracción que se denuncia; máxime si sobre la condena de costos procesales al Estado en los procesos laborales es una cuestión que ya ha sido ampliamente dilucidada por este Tribunal en las casaciones 2167-2019 Lima, 1628-2019 Lima, 8237-2019 Tumbes, entre otros, en el sentido que en el proceso laboral el Estado sí puede ser condenado al pago de costos procesales. **vii.4.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉPTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Laura Verónica Yapu Machaca contra el Poder Judicial, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-112

CASACIÓN Nº 31838-2022 LIMA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, interpuesto por la demandada, **Shougang Hierro Perú SAA**, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (indemnización por daños y perjuicios), ordenándose a la empresa minera Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima Abierta el abono de S/25,000.00 a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Shougang Hierro Perú SAA,** contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Enrique Felipe Meléndez Aguirre contra la Shougang Hierro Perú SAA, sobre Indemnización por Daño Emergente; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-113

CASACIÓN Nº 34486-2022 LIMA NORTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Carabayllo**; contra la sentencia de vista de fecha once de enero de dos mil veintidós, que **confirma** la sentencia de primera instancia que declaró **fundada en parte** la demanda y **ordena** entre otros, pagar la suma de **S/28,933.33** por los conceptos de gratificaciones, bonificación extraordinaria, vacaciones y escolaridad, asimismo **ordena** que la demandada deposite la suma de **S/13,223.33** por compensación por tiempo de servicios; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** En atención a lo previsto, en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT se contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 00002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/460.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el siete de febrero de dos mil veintidós, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y escolaridad; las cuales han sido acogidas en parte- por las instancias de mérito en el monto total de S/42,156.66. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, **la desnaturalización de contratos administrativos de servicios y contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la mismo constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de

configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o invalidez de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de desnaturalización de contratos administrativos de servicios y contratos de locación de servicios, no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo permanente que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación Nº 7358-2013-Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de contratos no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de contratos administrativos de servicios y contratos de locación de servicios, solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simples alegaciones de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la validez de la contratación como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de contratos postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planillas y boletas de pago que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como pretensiones no cuantificables para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, son una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en los artículos 3 y 18 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR Norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas y boletas de pago, no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Nº 7358-2013-Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de la contratación tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que el reconocimiento de un contrato laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de locación de servicios desnaturalizado, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de contratos es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO: (**…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del

artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Carabayllo**; contra la sentencia de vista de fecha once de enero de dos mil veintidós; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Joselin Ticona Afán contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.** EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE: La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-114

CASACIÓN Nº 34592-2022 LIMA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, que **confirma** la sentencia apelada de fecha once de junio de dos mil veintiuno, que declara **fundada** la demanda, en consecuencia **ordena** a la demandada que cumpla con abonar a favor de la demandante la suma de S/24,516.00 por concepto de reintegro de bono jurisdiccional, más intereses legales y costos del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley N°29497, Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el reintegro de bono por función jurisdiccional; así como el pago de intereses, costas y costos del proceso. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa del primer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional. (iii) Infracción normativa de la Séptima Disposición Complementaria de la Ley N°29497, Ley Procesal del Trabajo. (iv) Infracción normativa de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el inciso a) del artículo 19 de la Ley N°28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. SEXTO.** Identificadas las causales procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuacion: **vii.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales **(i),** pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **vii.2.** Por otro lado, se postula una supuesta infracción al artículo 81 del Código Procesal Constitucional porque no debe aplicarse retroactivamente la Resolución Administrativa N°305-2011-P-PJ **(ii),** pero el referido artículo regula justamente lo contrario porque prescribe el efecto retroactivo de la nulidad declarada en los procesos de Acción Popular, por tanto, la casacionista no cumple con precisar la incidencia de la infracción normativa postulada en la decisión cuestionada. **vii.3.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales **(iv),** si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales resulta jurídicamente errado; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **vii.4.** Finalmente, respecto a la denuncia de la infracción de la Séptima Disposición Complementaria de la LPT, respecto a la posibilidad de condenar al Estado del pago de costos procesales **(iii);** no se ha fundamentado de forma clara y precisa la infracción que se denuncia, máxime si sobre la condena de costos procesales al Estado en los procesos laborales es una cuestión que ya ha sido ampliamente dilucidada por este Tribunal en las casaciones 2167-2019 Lima, 1628-2019 Lima, 8237-2019 Tumbes, entre otros, en el sentido que en el proceso laboral el Estado sí puede ser condenado al pago de costos procesales. **vii.5.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉPTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Magnolia

Milagros Leyva Ramírez contra el Poder Judicial, sobre Pago de beneficios sociales; **y los devolvieron.** Ponente Señora **Vera Lazo,** Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-115

CASACIÓN Nº 35062-2022 LORETO

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, que confirma en parte la sentencia apelada de fecha treinta de enero de dos mil veinte, que resuelve: declarar fundada la demanda sobre desnaturalización de contrato a plazo indeterminado desde el 16 de setiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017; reconocimiento del carácter remunerativo de la bonificación por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales; pago y reintegro de la compensación por tiempo de servicios y de las gratificaciones por incidencia de la bonificación por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales desde el 16 de setiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018; en consecuencia: se ordena que la demandada pague a la demandante la suma total de S/22,593.42 (veintidós mil quinientos noventa y tres con 42/100 soles), en virtud a los siguientes conceptos: S/7,902.28 (siete mil novecientos dos con 28/100 soles), por concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios por incidencia del bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales, debiendo la demandada efectuar el depósito correspondiente en la entidad bancaria en la que el trabajador accionante tenga su "cuenta CTS"; S/14,691.14 (catorce mil seiscientos noventa y uno con 14/100 soles), por concepto de reintegro de gratificaciones legales por incidencia del bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales; más intereses legales sin costas procesales. Revocaron el extremo de pago de costos procesales; reformándola, exoneraron el pago de costos. Recurso de casación que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el reintegro de las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios por incidencia de la bonificación por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales; así como el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 72 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. (iii) Infracción normativa del artículo 63 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR (iv) Infracción normativa del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.°728, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, y el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°001-97-TR. SEXTO.** Identificadas las casaules procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuacion: **vii.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales **(i),** pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, el recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello, no forma parte de la infracción normativa postulada. **vii.2.** Respecto a la causal denunciada en el apartado **(ii y iii),** se debe precisar que el recurrente si bien cumple con señalar el derecho contenido en la norma que considera ha sido infraccionada por la Sala Superior al emitir pronunciamiento, sin embargo, de los fundamentos que sirven de sustento a dicha causal, no se advierte argumento alguno dirigido a demostrar su incidencia directa sobre la modificación de la decisión contenida en la resolución recurrida, no evidenciándose en específico algún vicio procesal trascendente de nulidad, tanto más, cuando la Sala Superior ha expresado de manera suficiente los argumentos que han sustentado su decisión de declarar la desnaturalización modales (16 de setiembre 2013 a 31 de diciembre 2017), puesto que, conforme han dejado establecido las instancias de mérito, no se ha cumplido con consignar la causa objetiva determinante. Además, debe tenerse en cuenta que las funciones que desarrollaba el demandante son de naturaleza permanente e inherente a las actividades de su empleador (Técnico Judicial y Asistente Judicial) y no se ha justificado el requisito de temporalidad con el que debe contar este tipo de contrato. **vii.3.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales **(iv),** si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrolladas en forma genérica, toda vez que éstas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habría producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la Sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales, resulta jurídicamente errados; y, con ello, demostrar a este Tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascedente para ejercer control casatorio. **vii.4.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉPTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia, lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Poder Judicial,** contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano",

bajo responsabilidad; en los seguidos por Rider Martín Flores de la Cruz contra el Poder Judicial, sobre Desnaturalización de Contrato y otros; y los devolvieron**. Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] CAS. N°10277-2016-Ica.
CAS Nº 1112-2014-Lima.
CAS. Nº 4265-2020-Ica.
CAS Nº 6578-2021-Ancash
CAS N.°11981-2021-Piura

C-2246709-116

CASACIÓN LABORAL Nº 36202-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
Proceso Ordinario Laboral, Ley Nº 29497
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EJE

Lima, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA,** de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós; contra la **Sentencia de Vista** de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, que resolvió: "CONFIRMAR la SENTENCIA de fecha 28 de febrero del 2022, que declara: 1) Declarando infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa propuestas por la emplazada. 2) Declarando FUNDADA la demanda. En consecuencia, declaro que la actora está sujeta a un contrato de trabajo de duración indeterminada bajo el régimen de la actividad privada desde el 05 de febrero del 2016 en adelante, debiendo incorporarla desde dicha fecha a planilla de trabajadores indeterminados del régimen laboral privado. 3) ORDENO que la demandada pague a favor de la parte actora el monto de S/.20,470.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) importe bruto sujeto a descuentos de ley; por los conceptos de gratificaciones legales, vacaciones y escolaridad, más los intereses legales; que se liquidaran en ejecución de sentencia. 4) CUMPLA la demandada con depositar en entidad bancaria el monto de la Cts, y liberar el pago al finalizar la relación laboral, obteniendo por este concepto de compensación por tiempo de servicios a favor del actor; la suma total de S/.8,943.34 (OCHO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA YTRES CON 34/100 SOLES), más intereses financieros. 5) ORDENO a la demandada el pago de los costos sin costas". Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 –Ley Procesal del Trabajo en adelante NLPT. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la NLPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 460.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene la desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios**,** pago de beneficios sociales e inclusión en planillas, los cuales han sido acogidos por las instancias de mérito en el monto total de **S/29,413.34**, por concepto de beneficios sociales. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios**, no constituyen pretensiones autónomas, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de **la desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** no son otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la validez de la contratación como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la NLPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios**

postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la NLPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** tengan la calidad de pretensiones declarativas válidamente formuladas; definiendo por el contrario con meridiana claridad que el reconocimiento de un contrato laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de locación de servicios desnaturalizado, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la NLPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la **desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios** como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, Declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTIA** el recurso de casación interpuesto por **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA,** de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por **YRMA YSABEL OLIVEROS GARCIA** contra la **recurrente**, sobre incumplimiento de normas laborales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

1 Aplicable para el año 2022

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-117

CASACIÓN Nº 36581-2022 LIMA

Materia: PAGO DE DERECHOS LABORALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la parte demandante Eloy Manuel Sánchez Urbano**, contra la sentencia de vista de fecha once de abril de dos mil veintidós; el cual debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo (en adelante LPT). **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 inciso 1 de la LPT: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". **CUARTO.** El último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 00002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/460.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el diez de mayo de dos mil veintidós, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **QUINTO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía

mínima para acceder al Tribunal Casatorio, pues se advierte que la sentencia de vista confirma la apelada que declara infundada la demanda, habiendo emitido pronunciamiento solo respecto a pretensiones cuantificables (otorgamiento del incremento dispuesto en la Ley Nº 25981 con su respectiva incidencia en los beneficios sociales), cuyo monto fue determinado en el escrito de demanda en la suma de S/28,005.62, por tanto, incluso en el supuesto que se hubiese amparado lo pretendido, evidentemente la pretensión de este proceso no superaría el monto exigido en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, esta Sala Suprema debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandante Eloy Manuel Sánchez Urbano**, contra la sentencia de vista de fecha once de abril de dos mil veintidós; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Eloy Manuel Sánchez Urbano contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, sobre pago de derechos laborales; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

C-2246709-118

CASACIÓN Nº 41259-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICA

Lima, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de San Borja, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho de fecha doce de julio de dos mil veintidós, expedida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que resuelve: "(…) 1. CONFIRMAR la Sentencia Nº 80-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, que DECLARA FUNDADA la demanda de fecha 07 de octubre de 2021 (folios 03-14 del EJE) interpuesta por CHRISTIAN ALEXANDER PEREZ ZARATE contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA. 2. DECLARAR la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminada entre las partes, bajo el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo Nº 728, desde el 01 de mayo de 2015 en adelante.3. ORDENAR que la demandada inscriba al accionante en su planilla de pagos de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada plazo indeterminado a partir del 01 de mayo de 2015. 4. ORDENAR que la demandada pague a favor del actor la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 27/100 SOLES (S/ 18,386.27) por concepto de pago de beneficios sociales (asignación familiar gratificaciones, bonificación extraordinaria y vacaciones), más intereses legales.5. ORDENAR que la demandada se constituya en depositaria de la COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) del demandante del periodo octubre 2015; por tanto, la demandada deberá cumplir con mantener en custodia y pagar al finalizar la relación laboral este concepto en la suma de SETECIENTOS Y 38/100 SOLES (S/ 700.38), más los intereses financieros que se generen. ORDENAR que la demandada realice el depósito en la entidad bancaria de elección del actor la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 76/100 SOLES (S/4,483.76) por concepto de COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS). 7. CONDENAR a la demandada al pago de costos; SIN COSTAS (…)"; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 0002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 460.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 46,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de gratificaciones, bonificación extraordinaria, asignación familiar, escolaridad y compensación por tiempo de servicios; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de **S/23,570.41**. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare **la desnaturalización de contratos de locación de servicios y la invalidez de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de contratos de locación de servicios y la invalidez de los contratos de administrativos de servicios solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual

las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 Unidades de Referencia Procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Vera Lazo y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por demandada Municipalidad Distrital de San Borja, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho de fecha doce de julio de dos mil veintidós, expedida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Christian Alexander Pérez Zarate contra la Municipalidad Distrital de San Borja, sobre Incumplimiento de Normas Laborales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, VERA LAZO, SALAZAR LIZARRAGA, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

C-2246709-119

CASACIÓN Nº 41382-2022 LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, interpuesto por la demandada, **Grupo Mesyl Security SA,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución número siete de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que **confirmó** la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda sobre reintegro de horas extra y otros. Revocaron los extremos que ampararon el pago de horas extras por el periodo octubre 2017 a enero 2019, el reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por los años 2018 y 2019 y el pago de utilidades por el año 2018; y, **reformándolos:** los declararon infundados. Modificaron el monto total adeudado; en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con cancelar al actor la suma de S/ 20,701.94 (veinte mil setecientos uno con 94/100 soles), por los conceptos disgregados en el considerando 16 de la presente sentencia de vista. Nulo el pago de vacaciones por el periodo 2016-2017. Confirmaron los costos procesales, en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con cancelar por dicho concepto la suma de S/ 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles) más el 5% destinado para

el Colegio de Abogados de La Libertad. La confirmaron en lo demás que contiene. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley N°29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de horas extras, indemnización por despido arbitrario y beneficios sociales), ordenándose a la demandada el pago total de S/20,701.94; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/46,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°002-2022-CE-PJ publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2022 (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado. Por estas consideraciones declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Grupo Mesyl Security SA,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución número siete de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Rodney Esko Fernando Sifuentes Acuña contra Grupo Mesyl Security SA, sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.
C-2246709-120

CASACIÓN Nº 41407-2022/ LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, doce de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia apelada, la cual declara **fundada en parte** la demanda, **ordena** que la parte demandada pague, directamente, a favor de la parte accionante, una suma ascendente a **S/4,478.08**, por los conceptos de gratificaciones incluido el 9% de la bonificación extraordinaria derivada de la Ley Nº 29351- por el período que va julio de 2016 a noviembre de 2018; **dispone** que la entidad emplazada **cumpla** con depositar en la entidad bancaria en la que el trabajador actor tenga su "Cuenta CTS", una suma ascendente a **S/2,502.78**, por concepto de compensación por tiempo de servicios del período que va de mayo de 2016 a noviembre de 2018; más los intereses legales, bancarios y/o financieros; **fija** los honorarios profesionales en la suma de S/1,000.00; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo (en adelante LPT). **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34 de la LPT, esto es: **a)** La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, **b)** El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. **TERCERO.** Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; requisito que se ha cumplido en este caso porque la demandada, ahora casacionista, apeló la sentencia de primera instancia. Asimismo, debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, de acuerdo a los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 de la LPT. **CUARTO.** Conforme se aprecia de la demanda interpuesta, las pretensiones de condena son el reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por incidencia del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales; así como el pago de intereses y costos procesales. **QUINTO.** La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: **(i) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (ii) Infracción normativa del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y del artículo 19 literal a) del Decreto Supremo Nº 001-97-TR. (iii) Infracción normativa de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 y del artículo 19 de la Ley Nº 28112. SEXTO.** Identificadas las causales procesales y materiales postuladas, **se declara su improcedencia** por los fundamentos que exponemos a continuación: **vii.1.** La parte recurrente denuncia una supuesta vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales en el ítem (i), pero no expresa la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este extremo de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que los criterios adoptados por las instancias de mérito son insuficientes y atentan contra dichos principios constitucionales. Por tanto, más que una vulneración a las garantías constitucionales, la parte recurrente no se encuentra conforme con la decisión adoptada por la sala superior, pero ello no forma parte de la infracción normativa postulada. **vii.2.** Asimismo, respecto a las causales relacionadas a infracciones de normas materiales descritas en los ítems (ii) y (iii), si bien la parte recurrente ha precisado los dispositivos legales cuya infracción normativa alega en su recurso de casación, se puede advertir que los mismos han sido desarrollados en forma genérica, toda vez que estas no contienen argumentos que rebatan directa y concretamente el criterio contenido en la sentencia de vista, pues la entidad recurrente vuelve a postular los mismos argumentos ya desestimados por la instancia de mérito, y pierde de vista que en su recurso de casación correspondía expresar razones concretas y específicas del modo en que se habrían producido tales infracciones a fin de demostrar que el criterio adoptado por la sala de mérito de reconocer el carácter remunerativo del bono y las asignaciones excepcionales con su incidencia en el pago de beneficios sociales resulta jurídicamente errado; y, con ello, demostrar a este tribunal que su recurso puede tener incidencia en lo resuelto, nada de lo cual advertimos en este caso. Sin perjuicio de ello, precisamos que estas infracciones se basan en cuestionar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, pero existe jurisprudencia casatoria uniforme y reiterada[1] respecto a que estos conceptos son remunerativos, por tanto, lo expuesto en el recurso objeto de análisis no es una cuestión jurídicamente trascendente para ejercer control casatorio. **vii.3.** Por estas razones, las causales invocadas no cumplen con las exigencias señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la LPT, ni tampoco con los fines regulados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. **SÉTIMO.** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4 del artículo 36 de la LPT, de la revisión del recurso bajo calificación, se advierte que el pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, cumpliéndose con el propósito de dicha exigencia; lo que, no obstante, es insuficiente para la declaración de procedencia del recurso por los fundamentos expuestos en el considerando anterior. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la entidad demandada Poder Judicial** contra la sentencia de vista de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Paola Karín Rojas Cruzado contra el Poder Judicial, sobre pago de beneficios sociales y otros; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

[1] Casación Nº 10277-2016-Ica de fecha 08 de agosto de 2018.
Casación Nº 1112-2014-Lima de fecha 28 de abril de 2016.
Casación Nº 04265-2020-Ica de fecha 01 de diciembre de 2021.

C-2246709-121

CASACIÓN Nº 42416-2022 LA LIBERTAD

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, interpuesto por **la demandada Transportes Línea Sociedad Anónima**, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; el cual debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (pago de beneficios sociales), ordenando que la demandada pague a favor del demandante la suma de S/39,930.51; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/44,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa Nº 00393-2020-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Transportes Línea Sociedad Anónima**, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Marcos Rubén Gonzales Alvarado contra Transportes Línea Sociedad Anónima, sobre pago de beneficios sociales; **y los devolvieron. Ponente Señor Castillo León, Juez Supremo. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.**

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-122

CASACIÓN Nº 43386-2022 UCAYALI

Materia: INCUMPLIMIENO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **el demandado Gobierno Regional de Ucayali**; contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declara **fundada en parte la demanda** y **ordena** entre otros, a pagar la suma de S/ 6,943.36 por concepto de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, remuneraciones vacacionales y bonificación extraordinaria; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 0393-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificación por fiestas patrias y navidad, y Bonificación Ley Nº 29351; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/. 6,943.36. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se **declare la desnaturalización de los contratos de servicios de terceros**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de servicios de terceros solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas

laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de los contratos de servicios de terceros como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandado Gobierno Regional de Ucayali**; contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Mexita Icomena Ahuanari contra el Gobierno Regional de Ucayali, sobre Desnaturalización de contrato y otros; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA.**

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-123

CASACIÓN Nº 43473-2022 DEL SANTA

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **el demandante Jimmi Alfonso Díaz Villoslada**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, que **revoca** la sentencia de primera instancia y reformándola, declara **fundada en parte** la demanda, y **ordena**, entre otros, que la demandada cumpla con pagar a favor del demandante la suma de **S/2 879.65** por concepto de reintegro de remuneraciones por días impagos y su incidencia en gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, horas extras, bonificación nocturna, dominicales y utilidades; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición

Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44 000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el reintegro de remuneraciones y su incidencia en gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, horas extras, bonificación nocturna, dominicales, feriados y utilidades; los cuales han sido amparados en parte- por las instancias de mérito en el monto total de S/2,879.65. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de sus pretensiones, **la desnaturalización de contratos de trabajo intermitentes**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o invalidez de cualquier contratación, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de desnaturalización de contratos de trabajo intermitentes, no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo permanente que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de contratos no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de contratos de trabajo intermitentes solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la validez de la contratación como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 Unidades de Referencia Procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de desnaturalización de contratos postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de la contratación tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que el reconocimiento de un contrato laboral a plazo indeterminado constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de locación de servicios desnaturalizado, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente

caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandante Jimmi Alfonso Díaz Villoslada**; contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Jimmi Alfonso Villoslada Díaz contra Solmar Security Sociedad Anónima Cerrada y Tecnológica de Alimentos Sociedad Anónima, sobre Pago de Beneficios Sociales; **y los devolvieron. Ponente Señora Vera Lazo, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA**

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-124

CASACIÓN Nº 43500-2022 ICA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintidós de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Grocio Prado,** contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declara fundado en parte el extremo de reconocimiento de la relación laboral a plazo indeterminado sujeta al régimen del Decreto Legislativo Nº 728, y ordena entre otros, que la demandada pague por los conceptos de: gratificaciones la suma de S/1,300.00; vacaciones la suma de S/708.33 y compensación por tiempo de servicios la suma de S/722.23, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia. Sin costas, ni costos. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo-en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/460.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el tres de marzo del dos mil veintidós, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones; las cuales han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/2,730.56. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así, la alegación de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 – Cusco,** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los contratos de locación de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho Código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial, con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT, tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria Final de la LPT, que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de

casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7358-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos; sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP),** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de los contratos de locación de servicios como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad Distrital de Grocio Prado,** contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Breyda Giovanna Saravia Tasayco contra la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, sobre Incumplimiento de Normas Laborales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, **LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

C-2246709-125

CASACIÓN Nº 43937-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO LABORAL – LEY Nº 29497
EXPEDIENTE DIGITALIZADO – NO EJE

Lima, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, interpuesto por el demandado **Juan Abelardo Lagos Serrano** contra la sentencia de vista del catorce de febrero de dos mil veintidós; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N°29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 Unidades De Referencia Procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que se ordenó a la parte demandada al pago total de **S/18,711.21** a favor del demandante; es decir, la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal (S/46,000.00 soles), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00002-2022-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). Por estas consideraciones, conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE POR CUANTÍA** el recurso de casación interpuesto por el demandado **Juan Abelardo Lagos Serrano** contra la sentencia de vista del catorce de febrero de dos mil veintidós; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por el demandante **Cesar Jesús Paredes Villanueva** contra el **demandado recurrente**, sobre pago de beneficios sociales; **y los devolvieron**. **Ponente la Señora Vera Lazo, Jueza Suprema.- S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

[1] Regula los aranceles judiciales para el año judicial 2022

C-2246709-126

CASACIÓN Nº 44115-2022 LIMA ESTE

Materia: INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LABORALES PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinte de diciembre de dos mil veintidós.-

VISTOS; y **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Rosa Marleny Prieto Flores**, contra la resolución de vista de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, que resuelve: Nula la sentencia apelada que declara fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, y nulo todo lo actuado. En consecuencia, ordenaron al A quo emitir nuevo pronunciamiento. **SEGUNDO.** El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al artículo 35 inciso 1 de la Ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, se interpone: **"Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso** (…)". **TERCERO.** La Sala de vista mediante la resolución impugnada ha declarado la nulidad de la sentencia apelada y ordena al Aquo emitir nuevo pronunciamiento; en tal sentido, corresponde precisar que el recurso interpuesto no cumple con la exigencia contenida en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo pues la resolución recurrida no pone fin al proceso, **por ende no constituye una resolución casable.** Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **Rosa Marleny Prieto Flores**, contra la resolución de vista de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós; en los seguidos por Rosa Marleny Prieto Flores contra la Municipalidad Distrital de Ate, sobre Incumplimiento de Disposiciones Laborales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **C-2246709-127**

CASACIÓN Nº 45252-2022 LIMA ESTE

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintidós de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de Cieneguilla,** contra la sentencia de vista de fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, que **confirma y aclara** la sentencia de primera instancia, que declara fundada en parte la demanda, y ordena entre otros, el pago de los conceptos de: Compensación por tiempo de servicios, gratificación, vacaciones, asignación familiar y escolaridad más bonificación por riesgo de salud, a favor del actor por la suma de S/32,034.10, más intereses legales y costos procesales; además, ordena que la demandada se constituya como depositaria de la compensación por tiempo de servicios la suma de S/975.00 y deberá depositar en una entidad bancaria a elección del demandante, la compensación por tiempo de servicios por la suma de S/ 5,559.70, más los intereses financieros. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo-en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 002-2022-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 460.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el siete de junio del dos mil veintidós, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, bonificación extraordinaria y escolaridad; las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/38,568.80. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios e ineficacia de los contratos administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria Final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de

referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planillas y la contratación del seguro vida ley que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como pretensiones no cuantificables para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas y la contratación del seguro vida ley son consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N°001-98-TR y el Decreto Legislativo N°688. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas y contratar el seguro vida ley no constituyen pretensiones no cuantificables que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco,** tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de Cieneguilla**; contra la sentencia de vista de fecha treinta de mayo de dos mil veintidós; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Nilton Gustavo Salvatierra Quincho contra la Municipalidad de Cieneguilla, sobre Incumplimiento de Normas Laborales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema.** S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

---

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

C-2246709-128

CASACIÓN Nº 45494-2022 UCAYALI

Materia: PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **el demandado Gobierno Regional de Ucayali**; contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que **confirma** la sentencia de primera instancia, que declaró **fundada en parte** la demanda y entre otros, **ordena** a pagar la suma de S/3 562.49 por los conceptos de remuneraciones vacacionales, gratificaciones legales, y escolaridad; además **ordena** que la demandada se constituya en depositaria de la compensación por tiempo de servicios en la suma de S/1 325.34; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio

de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2021-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/440.00; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/44 000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones legales, remuneraciones vacacionales, escolaridad y asignación familiar, las mismas que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/7 887.83. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de sus pretensiones, **la desnaturalización de contratos de locación de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o invalidez de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, el reconocimiento del vínculo laboral, la desnaturalización o ineficacia de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de contratos de locación de servicios, no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo permanente que, a la luz de la primacía de la realidad, debe ser inevitablemente analizado por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de contratos no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización de contratos de locación de servicios, solicitada en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la validez de la contratación como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el **principio de pos remuneración** "que significa que el salario es pagado después de la prestación de los servicios, pero el pago no es inmediato, es periódico, después de un cierto tiempo"[2]; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de desnaturalización de contratos postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, la pretensión de inscripción en planillas que contiene la demanda, tampoco puede ser considerada como pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, constituye una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR, referido a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación Cusco 7853-2013**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de**

duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición, en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de contrato como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **el demandado Gobierno Regional de Ucayali**; contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Segundo Ramón Flores Arévalo contra el Gobierno Regional de Ucayali, sobre desnaturalización de contrato y otros; **y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

2 Mascaro Nascimento, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo. Editora LTDA. Brasil. 1999. Página 298.

C-2246709-129

CASACIÓN Nº 46329-2022 LIMA ESTE

Materia: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, quince de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la demandada, **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sedapal**, contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo de dos mil veintidós; el cual, debe ser objeto de control en cuanto a sus requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 29497 Ley Procesal del Trabajo. **SEGUNDO.** En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el inciso 1 del artículo 35 de la citada Ley Procesal Laboral, establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y establecen una condena que debe superar las 100 unidades de referencia procesal; de lo contrario, el recurso será declarado improcedente atendiendo que se trata de un presupuesto, cuya omisión, resulta manifiestamente insubsanable. **TERCERO.** En el presente caso, no se configura el presupuesto de la cuantía mínima para acceder al Tribunal Casatorio, por cuanto del fallo de la sentencia de vista recurrida se desprende que no existe pronunciamiento sobre pretensiones inapreciables en dinero, sino únicamente sobre cuantificables (beneficios sociales), ordenándose a Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- Sedapal al pago de S/22,750.08 a favor del demandante; es decir, **la condena representa un importe que no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal** (S/46,000.00), de acuerdo al valor de la URP establecido en la Resolución Administrativa N°00002-2022-CE-PJ[1] (vigente a la fecha de interposición del recurso). **CUARTO.** En consecuencia, en virtud al primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema declara **improcedente** el recurso de casación formulado por la demandada. Por estas consideraciones; declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandada, **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado – Sedapal,** contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo de dos mil veintidós; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Josué Céspedes Alarcón contra Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal, sobre Pago de Beneficios Sociales; **y los devolvieron. Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA.

---

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de enero de 2022.

C-2246709-130

CASACIÓN Nº 46564-2022 LIMA ESTE

Materia: DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
PROCESO ORDINARIO – LEY Nº 29497

Lima, trece de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de la Molina,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia, desnaturalizados los contratos de locación de servicios del periodo de 03 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2019. Declara ineficaz los contratos administrativos de servicios celebrados entre las partes por el período comprendido: 01 de julio de 2019 hasta el 01 de mayo de 2021. Declara la condición laboral del demandante como trabajador obrero con contrato de trabajo a plazo indeterminado regulado por el Decreto Legislativo Nº 728, en el régimen laboral de la actividad privada desde el 03 de abril del 2019 hasta el 01 de mayo de 2021. Ordena que la demandada cumpla con registrar en su libro de planillas de obreros estables, con la actividad de obrero Podador y Maquinista desde el 03 de abril del 2019 hasta el 01 de mayo de 2021. Declara fundada en parte la demanda en el extremo del pago de los conceptos de Compensación por Tiempo de Servicios, Gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9%, Vacaciones, Asignación Familiar y Asignación Escolar a favor del actor. Declara fundada la pretensión de otorgamiento de seguro de vida ley. Declara infundado el pago de los conceptos reclamados por convenios colectivos y laudos arbitrales. Ordena a la emplazada que cumpla con pagar al demandante la suma de 7,407.79 (siete mil cuatrocientos siete con 79/100 soles), más los intereses financieros. Ordena el pago de los intereses legales a la parte vencida, los cuales se calcularán en ejecución de sentencia. Se ordena que la Municipalidad Distrital de La Molina deposite en una entidad bancaria a elección del demandante, la compensación por tiempo de servicios del demandante por la suma de S/. 2,603.24 (dos mil seiscientos tres con 24/100 soles), más los intereses financieros. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley N°29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso

contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 002-2022-CE-PJ estableció dicho valor en S/ 460.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/46,000.00 soles; y, siendo que el recurso de casación fue presentado el 17 de mayo de 2022, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9%, vacaciones, asignación familiar y escolar; los mismos que han sido acogidos por las instancias de mérito en el monto total de S/10,011.03. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se **declare la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y administrativos de servicios**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización de cualquier forma de contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización de los servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización de los servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios y administrativos de servicios** solicitados en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización de los servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de desnaturalización de los servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización de los servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización de los servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para

brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentando, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización de los contratos y el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la Ley Nº 29497. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización de los contratos como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandada, **Municipalidad de la Molina,** contra la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por David Bernardo Sacsara Munaylla contra la Municipalidad de la Molina, sobre Desnaturalización de Contrato; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S. CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. **S. CABELLO MATAMALA. C-2246709-131**

CASACIÓN Nº 47927-2022 LIMA

Materia: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
PROCESO ORDINARIO LEY Nº 29497

Lima, veinte de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; y, **CONSIDERANDO**: **PRIMERO.** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores** y **demandante Fabio Curo Casapaico,** contra la sentencia de vista de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que **revoca** la sentencia apelada en el extremo que declara fundado el pago de los beneficios sindicales de los convenios colectivos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por concepto de costo vida, bonificación por escolaridad, bonificación por vacaciones, día del trabajador municipal, bonificación extraordinaria por cierre de pliego, racionamiento y movilidad, vales de alimento y canasta navideña, la que, **reformándola,** se declara infundada. Integra la sentencia en los extremos que declara fundado el pago de costos del proceso a la demandada, que se liquidará en ejecución de sentencia y la exoneración de las costas del proceso a la demandada, los que se confirman. **Confirma** la misma sentencia en el extremo que declara fundada en parte la demanda, reconociendo al actor un contrato de trabajo de duración indeterminada y de forma continua e ininterrumpida desde el 01 de junio de 2012 en adelante, bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728, ordena a la demandada cumpla con consignar en las planillas de pago de obreros al accionante como trabajador a plazo indeterminado y de forma continua e ininterrumpida desde el 01 de junio de 2012 en adelante, bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728. Ordena a la demandada que cumpla con abonar al actor la suma de S/16,454.17 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 17/100 soles) por el concepto de gratificaciones legales y asignación familiar, más intereses legales. Ordena a la demandada constituirse en depositaria de la suma de S/5,720.15 (cinco mil setecientos veinte con 15/100 soles) por concepto de compensación por tiempo de servicios, asimismo, que la demandada cumpla con depositar en la institución bancaria elegida por el actor la suma de S/2,802.92 (dos mil ochocientos dos con 92/100 soles) por compensación por tiempo de servicios; más el pago de intereses financieros. Confirma la sentencia en el extremo que declara infundada la demanda respecto al reconocimiento de la vinculación laboral por el periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2012, incorporación al haber básico del costo de vida, así como las vacaciones e indemnización vacacional. Para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29497 Ley Procesal del Trabajo-en adelante LPT-. **SEGUNDO.** Que, en atención a lo previsto en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT, contempla que: "El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento". También, es preciso señalar que el último párrafo de la Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 26846, señala que corresponde al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal (URP). En uso de tal facultad, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 393-2020-CE-PJ[1] estableció dicho valor en S/ 440.00 soles; por lo que, cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP) son equivalentes a S/ 44,000.00; y, siendo que el recurso de casación fue presentado los días: dieciocho y veinte de octubre de dos mil veintiuno, deben observarse los lineamientos instituidos en la mencionada resolución administrativa. **TERCERO.** En el caso en concreto, se advierte que lo discutido versa sobre pretensiones cuantificables, ello tomando en consideración que la pretensión busca que se ordene el pago de beneficios sindicales, beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones y asignación familiar; beneficios sociales que han sido acogidas por las instancias de mérito en el monto total de S/24,977.24. Ahora bien, resulta necesario señalar que la parte demandante solicita como una de las pretensiones, que, se declare la **desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de contratación CAS**, sin tomar en consideración que la misma constituye una situación fáctica, toda vez que, determinar la existencia de una relación laboral en el proceso constituye un **hecho que integra la causa de pedir, mas no una pretensión independiente**. Así lo ha expresado la Corte Suprema en la **Casación 7358-2013 Cusco**, en la medida que motivadamente sienta un criterio de interpretación respecto a la forma correcta de configuración de la pretensión procesal laboral. En efecto, en dicha doctrina jurisprudencial, esta Corte Casatoria ha establecido que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, no constituye una pretensión autónoma, sino un hecho jurídicamente relevante; es decir, la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, de por sí forma parte de la causa de pedir (causa petendi) de cualquier pretensión que tenga como causa el contrato de trabajo, como por ejemplo las demandas de pago de beneficios sociales o económicos, reposición, cese de hostilidades, entre otros. En efecto, toda pretensión laboral tiene como presupuesto fáctico (causa de pedir) el contrato de trabajo; siendo así la alegación de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no es otra cosa que la alegación precisamente de la existencia de un contrato de trabajo por fraude a la ley o simulación del acto jurídico, conductas ilícitas que, a la luz de la primacía de la realidad, deben ser inevitablemente analizadas por el juez, como estadio previo al discernimiento de cualquier derecho laboral. De ahí la trascendencia doctrinaria de la referida **Casación 7358-2013 Cusco** en cuanto señala de manera categórica que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios no constituye una pretensión procesal independiente, sino que integra la causa de pedir de cualquier pretensión judicial, cuyos hechos giren en torno al contrato de trabajo. **CUARTO.** Así las cosas, este Supremo Colegiado concluye que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios solicitado en la demanda de autos no tiene en puridad la calidad de pretensión procesal, sino de simple alegación de un hecho jurídicamente relevante para la resolución de la controversia; así las cosas, el órgano jurisdiccional laboral se

encuentra obligado a pronunciarse sobre la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como parte de su razonamiento para reconocer o denegar cualquier pretensión derivada del contrato de trabajo, tal y como se tiene del presente caso. En esa misma línea, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, puede interpretarse lo previsto en dicho código cuando considera nulo todo acto jurídico contrario al orden público (artículo V del Título Preliminar) y cuando impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad evidente del acto jurídico (artículo 220 del Código Civil); si esto ocurre en el campo civil, que regula derechos mayormente de contenido patrimonial con mayor razón tratándose de un conflicto laboral o de seguridad social, en los cuales, la normatividad está integrada, casi en su totalidad, por normas de carácter imperativo. **QUINTO.** Justo es decir que, la ratio legis del artículo 35 de la LPT tiene como fundamento finalista la naturaleza del conflicto laboral, el cual normalmente refleja la dialéctica de la relación laboral, la cual se explica en el principio del post numerativo, en virtud al cual, primero se ejecuta la prestación de servicios y después se efectúa el pago; de esta dialéctica se desprende que los conflictos laborales que se judicializan sean casi en su totalidad, obligaciones de dar suma de dinero, dado que, el trabajo es un derecho prestacional en el que normalmente la contraprestación del servicio es de conceptos económicos, pero de naturaleza social. Esta es la razón esencial por la cual las reglas de competencia previstas en la LPT tienen como baremo la cuantía. Verbigracia los artículos 1, 2 y 35 y la Sexta Disposición Transitoria final de la LPT que regulan la competencia del juez de paz letrado, de los tribunales unipersonales de segundo grado y de la propia Corte Casatoria, todas estas reglas tienen como elemento común o transversal la competencia por la cuantía, la misma que se explica, como acabamos de indicar, en la dialéctica esencial del conflicto de trabajo descrita supra. Por esta razón, las demandas laborales, que, en su mayoría son de beneficios económicos, explican sobradamente la ratio de la cuantía de 100 unidades de referencia procesal URP- para la procedencia del recurso de casación, salvo que se trate de pretensiones no cuantificables como por ejemplo las pretensiones de reposición o cese de hostilidades entre otras, calidad que señaladamente no posee la solicitud de declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios postulada en autos. **SEXTO.** En conclusión, el recurso de casación interpuesto es improcedente porque no supera la cuantía prevista en la norma procesal antes señalada y porque se ha comprobado que no se ha formulado en la demanda ni son materia de recurso, pretensiones no cuantificables que justifiquen la intervención extraordinaria y excepcional de este Supremo Tribunal, cuyo avocamiento a la causa solo se justifica para cumplir los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil y para absolver las causales de casación previstas en el artículo 34 de la LPT; de ahí que, el pedido de inscripción en planilla que contiene la demanda, tampoco puede ser considerado como una pretensión no cuantificable para efectos de la determinación de la competencia de este Supremo Tribunal, dado que, la incorporación en la planillas es una consecuencia jurídica consustancial a la existencia misma de un contrato de trabajo a estar por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR- norma reglamentaria relativa a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, constituyendo una obligación primaria de todo empleador diligente. De modo que, habiendo determinado la existencia de un contrato de trabajo, la inscripción en planillas no constituye una pretensión no cuantificable que habilita la competencia de este Supremo Tribunal. No existe, por lo tanto, ninguna razón válida para que este órgano jurisdiccional casatorio se avoque al conocimiento del presente proceso, en el cual ya se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución del Estado y en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **SÉPTIMO.** A mayor abundamiento la **Casación 7358-2013 Cusco**, tiene calidad de doctrina jurisprudencial, según el artículo 22 de la LOPJ que prescribe: "Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. (…)". Por ende, resaltamos que tanto su fundamentación como su ratio decidendi analizan y desarrollan la especial connotación del conflicto de trabajo y de la seguridad social, de cara especialmente a interpretar la forma correcta de formación de la pretensión procesal en el proceso laboral; doctrina jurisprudencial que si bien no niega la posibilidad de interponer ante el juez laboral pretensiones declarativas de derechos, sin embargo, niega tajantemente que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios tenga la calidad de pretensión declarativa válidamente formulada; definiendo por el contrario con meridiana claridad que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios constituye un hecho jurídico que integra la causa de pedir de cualquier pretensión laboral. Si bien es cierto, la referida casación y la doctrina jurisprudencial que contiene dio respuesta concreta a una pretensión de reposición de una trabajadora con contrato de servicios desnaturalizados, sin embargo, su ratio decidendi no se constriñe a las demandas de reposición sino a cualquier demanda laboral, por la sencilla razón de que la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios es un hecho común o transversal a todo conflicto laboral y no únicamente a los conflictos de reposición. **OCTAVO.** En el sentido antes indicado debe ser interpretado el texto de la referida casación que a continuación se trascribe, fundamento 9.2: "**NOVENO:** (…) **2)** Lo expuesto anteriormente, conlleva a este Colegiado Supremo a afirmar que, la **"existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada"**, cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por aplicación del principio de primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, **no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de ésta última,** existiendo para su verificación por parte del Juez, una norma específica que en el proceso laboral coadyuva a la misma (artículo 23.2 de la Ley Nº 29497) (…). (…) podemos afirmar que, **la existencia de una relación de trabajo de duración indeterminada, forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición,** en la medida que para nuestra legislación laboral la verificación de tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela restitutoria (readmisión en el empleo); de tal forma que, dicha "existencia", es parte indesligable de la solicitud de reposición, convirtiéndose en el seno de un proceso laboral, en un "**hecho jurídico"** que tendrá injerencia en la formación de la voluntad concreta de la ley para brindar la aludida tutela restitutoria (…)". Por lo tanto, como ya lo hemos venido sustentado, queda establecido que tanto la declaración de la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios, en puridad, es un **hecho** y no un petitorio; y, en tanto hecho, se integra a la pretensión procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir y no como petitum, como erradamente ha sido planteado en la demanda. **NOVENO.** Así, en el presente caso, como se tiene del primer considerando de la presente resolución, lo ordenado a pagar en la sentencia de vista es **un monto que evidentemente no supera las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP)** exigidas en el inciso 1 del artículo 35 de la LPT. En consecuencia, este Tribunal Supremo debe proceder de conformidad con la facultad que establece el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, esto es, declarar **improcedente** el recurso de casación formulado. En este punto los Jueces Supremos Cabello Matamala, Vera Lazo, Ampudia Herrera y Lévano Vergara, precisan su apartamiento de criterios jurisdiccionales expresados en procesos precedentes respecto a la desnaturalización e ineficacia de cualquier contratación de servicios como pretensión, en virtud a la aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención a los fundamentos ut supra. Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la LPT, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **la demandada Municipalidad Distrital de Miraflores** y por **la parte demandante Fabio Curo Casapaico,** contra la sentencia de vista de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Fabio Curo Casapaico contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre Incumplimiento de Normas Laborales; y los devolvieron. **Ponente, señora Ampudia Herrera, Jueza Suprema. S.S.** CASTILLO LEÓN, CABELLO MATAMALA, VERA LAZO, AMPUDIA HERRERA, LÉVANO VERGARA. **EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA CABELLO MATAMALA, ES COMO SIGUE:** La magistrada que suscribe el presente voto, comparte la decisión asumida en la parte resolutiva de la presente resolución, la cual dispone declarar improcedente la demanda por cuantía; sin embargo, no coincide con los criterios expuestos en los fundamentos Tercero, Cuarto y Octavo de la citada resolución. Al respecto este despacho estima que, la desnaturalización de los contratos de trabajo y/o el reconocimiento de la existencia de una contratación laboral a plazo indeterminado, forman parte del petitorio de la pretensión cuantitativa materia de casación, por lo que su examen de procedibilidad se sujeta a la pretensión cuantificable correspondiente. S. CABELLO MATAMALA.

[1] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de enero de 2021.

C-2246709-132

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Índice

CASACIÓN Nº 24044-2023 LIMA 160
CASACIÓN Nº 19961-2023 LIMA 162
CASACIÓN Nº 36235-2022 LIMA 165
CASACIÓN Nº 17826-2023 LIMA 172
CASACIÓN Nº 50697-2022 LIMA 176
CASACIÓN Nº 25455-2023 LIMA 180
CASACIÓN Nº 14762-2023 LIMA 183
CASACIÓN Nº 17301-2023 LIMA 186
CASACIÓN Nº 7493-2023 LIMA 191
CASACIÓN Nº 32647-2022 LIMA 198
CASACIÓN Nº 9200-2023 LIMA 205
CASACIÓN Nº 15663-2022 LIMA 210
CASACIÓN Nº 21022-2022 LIMA 219
CASACIÓN Nº 2541-2023 LIMA 231
CASACIÓN Nº 26485-2023 LIMA 238
CASACIÓN Nº 51562-2022 LIMA 241
CASACIÓN Nº 2633-2023LIMA 247
CASACIÓN Nº 44847-2022 LIMA 254
CASACIÓN Nº 26489-2023 LIMA 258
CASACIÓN Nº 17882-2023 LIMA 261
CASACIÓN Nº 20719-2022 LIMA 269
CASACIÓN Nº 19425-2023 LIMA 277
CASACIÓN Nº 19270-2023 LIMA 281
CASACIÓN Nº 23345-2023 LIMA 284
CASACIÓN Nº 26547-2023 LIMA 287
CASACIÓN Nº 26599-2023 LIMA 289
CASACIÓN Nº 55262-2022 LIMA 292
CASACION Nº 6745-2019 LIMA 297
CASACIÓN Nº 44387-2022 LAMBAYEQUE 298
CASACIÓN Nº 4789-2022 AREQUIPA 300
CASACIÓN Nº 45767 – 2022 LIMA 302
CASACIÓN Nº 46591-2022 DEL SANTA 303
CASACIÓN Nº 14259-2022 LAMBAYEQUE 305
CASACIÓN Nº 45759 – 2022 LIMA 307
CASACIÓN Nº 11561-2022 DEL SANTA 308
CASACIÓN Nº 43805-2022 DEL SANTA 309
CASACIÓN Nº 43012-2022 AREQUIPA 311

CASACIÓN Nº 24044-2023 LIMA

Lima, once de octubre de dos mil veintitrés

VISTOS Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el representante de la Procuraduría Pública de la **SUNAT**, mediante escrito de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos ochenta y cuatro del Expediente Judicial Electrónico), contra la sentencia de vista emitida con resolución número treinta y seis de fecha veintidós de abril de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos sesenta y seis a cuatrocientos setenta y nueve), que **confirma** la sentencia apelada, contenida en la resolución número veintinueve del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que declara **fundada en parte** la demanda (fojas cuatrocientos seis); en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00429-8-2015, del quince de enero de dos mil quince, por cuanto resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación interpuesta por la empresa demandante, y, se ordena remitir los actuados al Tribunal Fiscal para que emita pronunciamiento, bajo responsabilidad funcional. **CONSIDERANDO Primero:** Corresponde calificar si dichos recursos cumplen o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 386, 388, 391 y 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria en el proceso contencioso administrativo. **Fines del Recurso de Casación Segundo**: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador ha establecido a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia. **Aplicación de la norma bajo el Principio de Especialidad Tercero:** El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, "Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, señala que la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; y en concordancia con el inciso 1 del artículo 2 de la mencionada norma, ante defecto o deficiencia de la Ley, el Juez debe aplicar los principios del derecho administrativo y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Que, por el Principio de Especialidad de la norma, que señala que "la norma especial prima sobre la general", ante cualquier vacío, deficiencia, y/o antinomia, debe resolverse el conflicto bajo la lógica de este marco normativo, prevaleciendo la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. **Cuarto**: El artículo 35 primer párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, "Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo", aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, señala que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, ésta última ha sido modificada por la Ley Nº 31591[1], publicada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, introduciendo modificaciones respecto de los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de casación, entre otros, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo realizar el análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, en específico, de los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, señalando que se tomarán de forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo: el inciso 1[2] y literal c) del inciso 2[3] del artículo 386[4], los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil[5]. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos son el literal a. -respecto a la cuantía- y literal b. -respecto al pronunciamiento de segunda instancia que revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia- del inciso 2 del artículo 386[6] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil, los que han sido introducidos por la Ley Nº 31591 y que no serán de aplicación por encontrarse regulados en la ley de la especialidad. **Admisibilidad del recurso Quinto:** El artículo 391 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece requisitos de admisión del recurso de casación: 1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende. 2. El recurso se interpone: a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada. b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. **Sexto:** Efectuando la revisión de los requisitos de admisibilidad, se advierte que el recurso de casación de Sunat indica separadamente cada causal invocada, cita los preceptos legales que considera erróneamente aplicados o inobservados, precisa los fundamentos que sustentan sus respectivas pretensiones y expresa cuál es la aplicación que pretende; se ha interpuesto ante la sala superior que emitió la resolución impugnada, dentro del plazo de diez días de notificada; con relación al arancel judicial por concepto de casación, la entidad recurrente no cumple con adjuntarlo por encontrarse exonerada de su pago. Se establece, pues, que el recurso cumple con los requisitos de admisibilidad precisados en el quinto considerando de la presente resolución. **Procedencia del recurso Séptimo**: Cabe anotar que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece requisitos de procedencia del recurso de casación: 1.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2.- Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. **Octavo:** Efectuando la revisión de los requisitos de procedencia, se advierte que la entidad recurrente impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso, así como se advierte que el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio, cumpliéndose con los requisitos previstos en el séptimo considerando. Con respecto a los literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386, no son de aplicación conforme a los fundamentos expuestos en el cuarto considerando. **Improcedencia del recurso Noveno:** El artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece supuestos de improcedencia del recurso de casación: 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. Se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. El recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a) Carezca manifiestamente de fundamento; o, b) Se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. **Décimo**: Respecto a los supuestos de improcedencia previstos en el numeral 1 del modificado artículo 393 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se advierte que se cumple con los supuestos previstos en el artículo 391 del Código Procesal Civil, analizados en el sexto considerando, y con las causales establecidas en el artículo 388 del mismo cuerpo legal; se refiere a una resolución impugnable en casación. Asimismo, la entidad codemandada Sunat interpuso su respectivo recurso de apelación, conforme se aprecia de fojas cuatrocientos trece del expediente principal. Por lo tanto, corresponde dar por cumplida esta exigencia a la recurrente, al no dejar consentir la sentencia de primera

instancia por no serle favorable a sus intereses. **Décimo primero:** Se advierte que la entidad Sunat invoca las siguientes causales: **a) Vulneración de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución** La entidad Sunat sostiene que la sentencia de vista ha incurrido en las infracciones denunciadas debido a que contiene una motivación aparente, insuficiente e incompleta, lo cual se desprende de lo señalado en sus considerandos décimo, undécimo y duodécimo. Afirma la recurrente que la resolución de intendencia número 0230190011708 modificó la resolución de intendencia número 0230170282362, que aprobó el fraccionamiento, modificándola en cuanto a su monto, se encuentra referido al fraccionamiento de una deuda tributaria que el propio contribuyente incluyó en su solicitud de acogimiento, lo cual califica como un procedimiento no contencioso regulado en el segundo párrafo del artículo 162 del Código Tributario y si bien se ha declarado la prescripción de cierta deuda tributaria incluida en la solicitud de fraccionamiento, afirma que ello "únicamente se encuentra relacionado con la acción de la Administración Tributaria para exigir su pago". Señala que la sentencia de vista se equivoca al afirmar que la RTF 00429-8-2015 es una resolución de cumplimiento de la RTF 06918-4-2014 ya que no se dispuso que la Administración Tributaria cumpliera con alguna actuación administrativa. **b) Inaplicación del artículo 162 del Código Tributario** La recurrente Sunat argumenta que el propio Código Tributario establece en la norma denunciada un límite para los pronunciamientos en los que el Tribunal Fiscal es competente, señalando que las mismas serán resueltas de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Refiere que el Tribunal Fiscal ha señalado en diversos pronunciamientos que el otorgamiento o aprobación del fraccionamiento a que se refiere el artículo 36 del Código Tributario está destinado a facilitar el pago de deudas tributarias, por lo que no incide en la determinación de ningún tipo de obligación tributaria, ya que ésta fue determinada con anterioridad. **c) Aplicación errónea del artículo 101 del Código Tributario** La Sunat sostiene que la sentencia de vista contiene un pronunciamiento equivocado al concluir que la aprobación de una solicitud de fraccionamiento constituye un acto administrativo que tiene relación con la determinación de la obligación tributaria y que por consiguiente estaba obligado a resolver en última instancia el recurso de apelación contra la resolución de intendencia que modificó el monto de la solicitud de fraccionamiento y no debió inhibirse. Manifiesta la Sunat que en un fraccionamiento solicitado al amparo del artículo 36 del Código Tributario, es el propio contribuyente quien de manera voluntaria decide qué deuda incluir y en cuantas cuotas pagar, de modo que, constituye un mecanismo para facilitar el pago de la deuda tributaria y no incide en la determinación de la obligación tributaria. Análisis de las causales denunciadas**Décimo segundo:** Emitiendo pronunciamiento sobre la causal deducida en el **acápite a) del décimo primer considerando,** referida a que la sentencia de vista habría incurrido en motivación aparente, insuficiente e incompleta, lo cual se desprende de lo señalado en sus considerandos décimo, undécimo y duodécimo. Al respecto, observamos que tal como ha sido formulado el recurso de casación, el mismo contiene cuestionamientos al criterio expuesto en la sentencia de vista, sin describir con claridad y precisión la causal denunciada. Al respecto al analizar la causal deducida, se aprecia que más bien, que sus argumentos están referidos a que esta Sala Suprema analice el fondo del asunto, y emita un nuevo pronunciamiento, como si actuara como un tercer órgano revisor, lo cual no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, puesto que esta sede no es una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la sociedad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de criterios de la Corte Suprema. En tal sentido la causal denunciada por el Tribunal fiscal en el citado acápite a) resulta **improcedente**. **Décimo tercero:** Emitiendo pronunciamiento sobre la causal deducida en el **acápite b) del décimo primer considerando,** referida a la inaplicación del artículo 162 del Código Tributario. La recurrente argumenta que el otorgamiento o aprobación del fraccionamiento a que se refiere el artículo 36 del Código Tributario está destinado a facilitar el pago de deudas tributarias, por lo que no incide en la determinación de ningún tipo de obligación tributaria, ya que ésta fue determinada con anterioridad. Al respecto, se observa que tal como ha sido desarrollada esta causal deducida, la entidad recurrente no ha desarrollado cómo debió ser aplicado al caso la norma denunciada y cómo tal aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; de ahí que nuevamente se advierte que la impugnante pretende un nuevo pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema, lo que no se condice con la naturaleza del recurso de casación. En mérito a lo expuesto, la causal denunciada por el Tribunal Fiscal en el citado acápite b) resulta **improcedente**. **Décimo cuarto:** Emitiendo pronunciamiento sobre la causal deducida en el **acápite c) del décimo primer considerando,** referida a la aplicación errónea del artículo 101 del Código Tributario. La Sunat sostiene que la sentencia de vista contiene un pronunciamiento equivocado al concluir que la aprobación de una solicitud de fraccionamiento constituye un acto administrativo que tiene relación con la determinación de la obligación tributaria y que por consiguiente estaba obligado a resolver en última instancia el recurso de apelación contra la resolución de intendencia que modificó el monto de la solicitud de fraccionamiento y no debió inhibirse. Al respecto, observamos que la entidad recurrente, no desarrolla argumentativamente cuál sería la aplicación correcta de la norma denunciada en relación al tema materia de controversia. Nuevamente advertimos que dicha argumentación en el fondo busca prolongar el debate y análisis realizado por la Sala de mérito, dado que aun cuando invoca la infracción de disposiciones de carácter legal, en realidad pretende que se realice una revisión de hechos y medios probatorios ya analizados por las instancias de mérito lo que no cabe ser dilucidado por este Tribunal de Casación. En consecuencia, la causal denunciada por la Sunat en el **acápite c)** resulta **improcedente**. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, concordante con lo previsto en los artículo 386, 388, y 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el representante de la Procuraduría Pública de la SUNAT, mediante escrito de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés; contra la sentencia de vista emitida con la resolución número treinta y seis de fecha veintidós de abril de dos mil veintitrés, que confirma la sentencia apelada, contenida en la resolución número veintinueve del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00429-8-2015, del quince de enero de dos mil quince, por cuanto resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación interpuesta por la empresa demandante, y, se ordena remitir los actuados al Tribunal Fiscal para que emita pronunciamiento, bajo responsabilidad funcional. En los seguidos por INCA PISCO S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, y contra el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.- **Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Cabello Matamala. SS.** YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, **CABELLO MATAMALA,** PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR.

---

1 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones

2 "1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso."

3 "2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio."

4 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

5 Nótese que se aplica solo los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en: "1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. El recurso se interpone:
a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.
b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda.
c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código,

la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.

4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.

(...). 6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

6 Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en: "a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero; b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia".

C-2245460-1

CASACIÓN Nº 19961-2023 LIMA

Lima, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés

VISTO Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos, **i)** por la **representante de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos setenta y cuatro a seiscientos setenta y nueve del Expediente Judicial Electrónico - EJE[1]); y, **ii)** por el **Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal** mediante escrito del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas setecientos veintiuno a setecientos cuarenta y tres), contra la sentencia de vista del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos cincuenta y seis a seiscientos sesenta y ocho), que confirmó la sentencia de primera instancia del dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas quinientos setenta y seis a quinientos noventa y cinco), que declaró fundada la demanda en todos sus extremos. **CONSIDERANDOS Primero:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, el cual señala que, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú "tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados […]". En ese sentido, se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales, como son los sujetos procesales, como es la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes, la naturaleza de las actuaciones impugnables, las particularidades procesales como son los requisitos de admisibilidad y procedencia, la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar, la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, prevaleciendo la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00018-2003-AI/TC[2]. **Segundo:** Asimismo, resulta necesario señalar que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, dispone que: "[e]l Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley"; en ese marco, resulta pertinente indicar la Ley Nº 31591[3], publicada en el diario oficial El Peruano con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que introdujo, entre otros aspectos sustanciales, modificaciones respecto del trámite recurso de casación y su respectiva calificación. En ese orden, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, y en específico, al artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la referida Ley Nº 31591, deben ser tomadas en forma supletoria, teniendo presente los principios que regulan tal norma especial, que no debe ser desnaturalizado, menos aún las exigencias esenciales que lo caracterizan. **Requisitos de procedencia Tercero:** Resulta necesario señalar los siguientes artículos del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y su modificatoria introducido por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, los cuales son: **Artículo 388. Causales** Son causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. […] **Artículo 391. Interposición y admisión** 1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende. 2. El recurso se interpone: a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada. b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. […] **Artículo 393. Improcedencia** 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos. Además, sobre los requisitos de procedibilidad, resulta aplicable supletoriamente al recurso de casación del proceso contencioso administrativo, el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, en cuanto establece que el recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso, toda vez que, el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. **Cuarto:** Efectuada la revisión de los requisitos de procedibilidad, se advierte que el recurso impugna una resolución expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso, además, este no tiene un sentido anulatorio, respecto a la decisión, por ende, se cumple con los requisitos señalados en el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591. Asimismo, sobre los requisitos de admisibilidad contenidos en el inciso 2 del modificado artículo 391 del Código Procesal Civil, se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días de notificada (fojas setecientos cincuenta y uno [Tribunal Fiscal] y setecientos cincuenta y dos [SUNAT]), con relación al arancel judicial por concepto de casación, las partes recurrentes se encuentran exoneradas de presentar el referido arancel, al amparo del artículo 47 de la Constitución Política el Estado. Por tanto, se cumple con los requisitos precisados en este inciso de la referida norma. **Causales**

denunciadas Quinto: La representante de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (**SUNAT**), formula su recurso de casación por las siguientes causales: **a) Inaplicación de lo dispuesto por el artículo 141 del Código Tributario y del criterio recogido por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 01128-A-2007.** Señala que la Sala Superior a pesar que reconoce aplicable dicho dispositivo, lo inaplica en base a un mal entendido uso del principio de verdad material. Añade que se valida y reconoce medios probatorios extemporáneos, luego de culminado el procedimiento de duda razonable, de manera que vulnera dicho procedimiento que se encuentra amparado en norma nacional e internacional, como es el Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio y Reglamento Nacional de aplicación del Valor aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF y normas modificatorias. **b) Inaplicación de lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 571 emitida por la Comunidad Andina.** Indica que la Sala Superior inaplica dicho dispositivo, al señalar que la Administración Aduanera debía disponer medios probatorios para disipar las dudas que fluyen de la documentación presentada. Precisa que dicho dispositivo establece que la carga de la prueba corresponde al importador, porque este es quien conoce las particularidades de sus relaciones comerciales. Añade que atribuir la carga de la prueba a la Administración Aduanera, infringe los principios de Facilitación del Comercio Exterior y de la prevalencia de los controles posteriores. Además, indica que ello conlleva a someter a la Administración Aduanera a una actividad probatoria, tediosa, onerosa e impracticable. **c) Vulneración del numeral 5 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú por deficiencias en la motivación.** Alega que la Sala Superior infringe dicho principio, porque no ha expresado las razones, que le hacen concluir que la Administración Aduanera no motivó adecuadamente su decisión para no evaluar la documentación presentada extemporáneamente. Añade que tanto las resoluciones de la Administración Aduanera como el Tribunal Fiscal, no incurren en vicios de nulidad, porque analizaron la controversia en función a los hechos y marco normativo aplicable. Indica que, en el caso concreto, el importador no proporciono documentación suficiente que acredite el valor de lo declarado, dentro del procedimiento de duda razonable, de acuerdo al artículo 18 de la Decisión 571 de la Comunidad Andina, lo cual incluso fue requerido hasta en tres oportunidades por la Administración Aduanera. **Sexto:** El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del **Tribunal Fiscal,** formula su recurso de casación por las siguientes causales: **a) Inaplicación del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a un debido proceso.** Señala que la Sala Superior desvía las reglas del procedimiento de duda razonable, y no tiene en cuenta que la obligación de acreditar el valor de lo declarado en la DAM es del importador, quien tiene la carga de la prueba. Añade que el Colegiado Superior invierte la carga de la prueba, y no emplea en realidad la carga dinámica de la prueba, toda vez que esta última considera que la carga recae en quien tiene mejores condiciones profesionales, técnicas o de hecho para producirla en búsqueda de la verdad. En ese sentido añade, que es el importador como operador de comercio internacional quien sabe y conoce las peculiaridades de sus relaciones comerciales con sus proveedores. Agrega que el procedimiento de duda razonable, va de la mano con el principio de facilitación del comercio exterior, de manera que facilite y despache en el menor tiempo posible, el cual tiene como duración el plazo de 5 días. Indica que el importador no presentó oportunamente documentos que sustenten lo declarado, sino que lo hizo extemporáneamente por su propia negligencia, con lo que vulnera el artículo 141 del del Código Tributario. **b) Inaplicación de lo dispuesto por los artículos 1-b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y 18 de la Decisión Nº 571 y articulo 54 de la Resolución Nº 1684 emitidas por la Secretaria General de la Comunidad Andina.** Señala que la Sala Superior ha inaplicado el artículo 1-b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y el artículo 18 de la Decisión Nº 571, que establecen que la carga de la prueba para acreditar el precio pagado o por pagar, corresponde al importador o comprador de la mercancía. Añade que incluso el artículo 54 de la Resolución Nº 1684 (Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas) señala que además de la factura comercial, documento de transporte y de seguro, el importador deberá presentar otros documentos que se requieran en apoyo al valor de aduanas declarado. Indica que la Administración Aduanera no puede suplir ni sustituirse en la carga probatoria que le corresponde al importador, quien es responsable de los documentos que son materia de importación aduanera. **c) Inaplicación del artículo 141 del Código Tributario.** Alega que la Sala Superior ha inaplicado dicho dispositivo, que establece que no resultan admisibles los medios probatorios presentados extemporáneamente por el importador, esto más aún si el mismo poseía los mismos para la aplicación del primer método de valoración aduanera. Añade que la Orden de Depósito no es semejante a la Carta Fianza Bancaria o Financiera, que la Factura Invoice no tenía otro dato adicional que permita a la Administración Aduanera requerir información bancaria nacional (ya que tampoco el importador indicó en qué banco se había efectuado la transferencia) y que el mensaje Swift de transferencia tampoco tenía fecha. **d) Interpretación errónea del numeral 31 del Ítem V de las normas generales del Procedimiento Específico: valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la Organización Mundial de Comercio.** Indica que la Sala Superior interpretó erróneamente este dispositivo, al considerar que la SUNAT debió solicitar como obligación, información al banco para confirmar lo indicado por la importadora, al igual que debía solicitar también a la importadora para que presente documentación que sustente el pago efectuado. Añade que la interpretación correcta de dicho dispositivo es la literal y sistemática, en el sentido que dicha solicitud de información es facultativa y no obligatoria, toda vez que el verbo de la hipótesis señala una facultad (podrá), y no una obligación. Agrega que la demandante no presentó la documentación en la oportunidad que debía y que la Administración Aduanera no contaba con información adicional pese a haber sido requerida al importador y que nunca fue proporcionada por este. Añade que tampoco presentó carta fianza u otra garantía, y que los medios probatorios en tal caso resultan extemporáneos. **Séptimo:** Antes de proceder con el análisis del recurso de casación, es necesario reiterar que constituye un medio impugnatorio extraordinario de que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando separadamente cada causal invocada. **Octavo:** Respecto a las causales de carácter procesal descritas en el **literal c)** del quinto considerando y del **literal a)** del sexto considerando de la presente resolución, postuladas por la SUNAT y Tribunal Fiscal respectivamente, se debe señalar que entre los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentran el derecho a un proceso preestablecido y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, recogidos en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Carta Magna, por el cual se garantiza a las partes involucradas en una controversia el acceso a un proceso con reglas claras preestablecidas por ley y una respuesta del juzgador, que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellos dentro del proceso. En cuanto a la vulneración a su derecho al debido proceso, el Tribunal Fiscal no sustenta una violación a su derecho al debido proceso incurrido en instancia judicial, sino que se remite a actuaciones de la instancia administrativa, que a su consideración constituyen una desviación de las reglas del procedimiento de duda razonable (en valoración aduanera) en que se habrían incurrido en instancia administrativa. Esto significa, que el Tribunal Fiscal pretende que este colegiado supremo reevalúe la legalidad de las actuaciones administrativas, que han sido objeto de análisis y pronunciamiento por las instancias judiciales, y que han sido producto de una valoración probatoria. Sin embargo, no corresponde a este colegiado supremo analizar las conclusiones a que llegan las instancias de mérito sobre las cuestiones de hecho, ni las relativas a la valoración probatoria[4]. En cuanto a la vulneración al derecho a la motivación de resoluciones judiciales, se observa que en la sentencia de vista se explican y justifican las premisas factuales y jurídicas elegidas por el Colegiado de alzada, que le han servido para confirmar el fallo apelado, declarando fundada la demanda, expresando los fundamentos por los cuales consideró que

los actos administrativos impugnados adolecen de vicios de nulidad. Sin embargo, los fundamentos del recurso de casación de la SUNAT están dirigidos a cuestionar el criterio asumido por el colegiado superior, el cual se fundamenta en el principio de verdad material, y una valoración probatoria que le permiten arribar a su decisión. En consecuencia, las causales denunciadas se encuentran incursas en el supuesto de improcedencia señalado en el literal a) del numeral 2 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, deviniendo en **improcedentes. Noveno:** En relación con las causales descritas en los **literales a) y b)** del quinto considerando y **literales b) y c)** del sexto considerando de la presente resolución, postuladas por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, respectivamente. Se debe precisar que la inaplicación de una norma de derecho material, como causal del recurso de casación, se plantea cuando el juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, correspondiendo en ese escenario al recurrente demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las sentencias de las instancias de mérito y, cómo ello, incidió de modo directo en el resultado del juzgamiento. Sobre las causales de los literales a) del considerando quinto y c) del considerando sexto planteadas por la SUNAT y Tribunal Fiscal respectivamente, se debe señalar que el artículo 141 del Código Tributario, cuya inaplicación se denuncia, ha sido parte del análisis del colegiado superior en el sexto considerando de la sentencia de vista. De esa forma, la causal postulada carece de fundamento. En relación a las causales postuladas en el literal b) del considerando quinto y literal b) del considerando sexto se debe indicar que los dispositivos cuya inaplicación se denuncia, en común establecen que la carga de la prueba en el primer método de valoración aduanera corresponde al importador. Este contenido normativo ha sido el punto partida del análisis del colegiado superior a lo largo de la sentencia de vista, de la siguiente manera: **CUARTO. - EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE MERCANCIAS SEGÚN EL ACUERDO DEL VALOR DE LA OMC, RESPECTO A TRANSFERENCIAS BANCARIAS** […] A efectos de la determinación del valor en aduana basado en el Primer Método de Valoración o Método del Valor de Transacción**, el caudal probatorio dependerá en mayor medida de la documentación que el importador presente.** Así, en caso de existir dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, la Administración Aduanera podrá solicitar al importador, la remisión de una explicación complementaria respecto al importe realmente pagado o por pagar de las mercancías materia de importación. […] **SEXTO.-** […] no menos verdad es que, en atención a la naturaleza de la controversia, la Administración Aduanera debió tener en cuenta **que aún cuando la carga de la prueba en el contexto del Primer Método de Valoración recae en el importador,** es imperativo poner énfasis en la plena vigencia del principio de verdad material para el caso en autos; en cuyo mérito, la Administración se encontraba facultada a disponer la actuación de medios probatorios para disipar las dudas advertidas a través de la documentación presentada por la empresa importadora, a fin de sustentar el pago a través de transferencia bancaria; […] De esa forma, el colegiado superior ha empleado en su análisis el contenido normativo de los dispositivos cuya inaplicación se denuncia, sin embargo, el fundamento de su decisión se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y, en consecuencia, la valoración probatoria conjunta de los medios probatorios que obran en los actuados, y dichos aspectos no le competen analizar a esta Sala Suprema. Entonces ello importa, por un lado, una discrepancia con la decisión cuestionada por el hecho de ser contraria a los intereses de la entidad ahora impugnante y, de otro lado, un pedido de revaloración probatoria, lo que es ajeno a la función nomofiláctica del recurso de casación[5], que exonera a la labor casatoria, en principio, de la revaloración de pruebas y de los hechos fijados por las instancias de mérito, así como de juzgar las razones fácticas que formaron convicción para resolver en un sentido específico, lo que hace que las causales postuladas están incursas en el supuesto de improcedencia, señalado en el literal a) del numeral 2 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, deviniendo en **improcedentes. Décimo:** Emitiendo pronunciamiento sobre la causal contenida en el **literal d) del considerando sexto** de la presente resolución, postulada por el Tribunal Fiscal referente a la interpretación errónea de una norma material, se debe tener en cuenta que, para invocar dicha causal, es obligatorio señalar en qué consiste la interpretación errónea, cuáles son las consecuencias que acarrea ese error, y señalar su correcta interpretación[6]. Sin embargo, la referida propuesta de interpretación correcta debe poseer sustento jurídico, doctrinario o en la jurisprudencia, esto es, no puede ser ocurrente, arbitraria o antojadiza.[7] En ese contexto, en relación a la infracción denunciada se advierte que la propuesta de interpretación formulada por el recurrente, es subjetiva y no posee sustento en derecho, doctrina o en la jurisprudencia. Esto porque pretende restar mérito probatorio a medios presentados que, si bien fueron presentados extemporáneamente por la demandante, el colegiado superior los valora con base en el principio de verdad material, es decir, sustenta su posición con fundamentos de derecho. En ese sentido, la causal denunciada se encuentra incursa en el supuesto de improcedencia señalado en el literal a) del numeral 2 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, deviniendo en **improcedente**. Por último, la entidad recurrente Tribunal Fiscal invoca la aplicación del artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, solicitando a la Sala Suprema "meritue que el presente Recurso de Casación persigue como fin el resguardo de la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Supremo, así como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto […]", según expone esta parte recurrente. Sobre el particular, cabe precisar que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil establece que: "Excepcionalmente, es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386 cuando la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial"; no obstante, esta Sala Suprema no considera necesaria la aplicación del artículo en mención, toda vez que no se aprecia una inadecuada aplicación del derecho objetivo, ni la necesidad del desarrollo de la doctrina jurisprudencial para el presente caso. **Décimo primero:** En cuanto a los demás requisitos fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedentes las causales contenidas en el considerando quinto y sexto de la presente resolución. **DECISIÓN** Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, concordante con el literal a) del numeral 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, **DECLARARON IMPROCEDENTES** los recursos de casación interpuestos, **i)** por la **representante de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos setenta y cuatro a seiscientos setenta y nueve); y, **ii)** por el **Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal** mediante escrito del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas setecientos veintiuno a setecientos cuarenta y tres); contra la sentencia de vista del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos cincuenta y seis a seiscientos sesenta y ocho), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Cueros Superior Sociedad Anónima Cerrada contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** el señor Juez Supremo Pereira Alagón. SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, **PEREIRA ALAGÓN,** DELGADO AYBAR.

---

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 Publicada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis en el diario oficial El Peruano.

3 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

4 Casación Nº 487-2008 Lima, Publicada en el diario oficial El Peruano el cuatro de septiembre del dos mil ocho, pp. 23090-23091.

[5] Es pertinente señalar que este colegiado supremo, ha declarado improcedentes causales similares a las postuladas en la presente, como son las Casaciones Nº 15572-2023-Lima y 14765-2023-Lima, en incluso de la Casación Nº 10758-2023-Lima en la que litigaron las mismas partes procesales.

[6] Casación Nº 4033-2006-Callao, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de enero de dos mil siete.

[7] Casación Nº 240-2000-San Román, publicada en el diario oficial El Peruano el dos de febrero de dos mil, y Casación Nº 1354-2000-Callao, publicada en el diario oficial El Peruano el veintisiete de julio de dos mil.

C-2245460-2

CASACIÓN Nº 36235-2022 LIMA

TEMA: PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
SUMILLA: El inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta establece la obligación de los pagos a cuenta, señalando no solo la oportunidad sino también la forma prevista en la normativa tributaria; por lo cual, la modificación de la determinación de los pagos a cuenta a causa de declaraciones juradas rectificatorias ocasiona la variación del coeficiente para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta; lo cual, en el presente caso, permite verificar que la contribuyente no efectuó de manera correcta los pagos del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce y dos mil trece.
PALABRAS CLAVE: pagos a cuenta, intereses moratorios, variación del coeficiente para el cálculo de los pagos a cuenta

Lima, veinticinco de julio de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA **VISTA** La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la demandante, **Pesquera Hayduk Sociedad Anónima**, ha interpuesto recurso de casación el trece de septiembre de dos mil veintidós (foja cuatro mil doscientos treinta y uno del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciocho, del veintiséis de agosto de dos mil veintidós (foja cuatro mil doscientos cinco), que confirmó la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número doce, emitida el cinco de enero de dos mil veintidós (foja cuatro mil ciento cuarenta y cinco), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Antecedentes Demanda Mediante escrito del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja noventa y siete; subsanado a fojas doscientos setenta y cinco), la empresa **Pesquera Hayduk Sociedad Anónima** interpuso demanda contra el **Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, solicitando como petitorio lo siguiente: **Primera pretensión principal:** Nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07743-9-2019, respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce. **Primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal:** Nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 0150140014394, que confirmó las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0061841 y Nº 012-003-0061842, relativas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce. **Segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal:** Nulidad de las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0061841 y Nº 012-003-0061842, relativas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce. **Tercera pretensión accesoria a la primera pretensión principal:** Se ordene a la autoridad tributaria o a cualquier funcionario de esta, que devuelva, de ser el caso, todos los montos pagados en virtud de los actos administrativos materia de demanda más los intereses generados de acuerdo a ley hasta el momento en que la autoridad administrativa cumpla con realizar la devolución efectiva. **Segunda pretensión principal:** Nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07743-9-2019, respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil trece, por su abierta contravención a la ley. **Primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal:** Nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 0150140014389, que confirmó las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0082864 y Nº 012-003-0082865, relativas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil trece. **Segunda pretensión accesoria a la segunda pretensión principal:** Nulidad de las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0082864 y Nº 012-003-0082865, relativas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil trece. **Tercera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal**: De ampararse la segunda pretensión principal, la compañía solicita al Juzgado que ordene a la autoridad tributaria o a cualquier funcionario de esta, que devuelva, de ser el caso, todos los montos pagados en virtud de los actos administrativos materia de demanda más los intereses generados de acuerdo a ley hasta el momento en que la autoridad administrativa cumpla con realizar la devolución efectiva. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del cinco de enero de dos mil veintidós (foja cuatro mil veintiséis), el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros declaró **infundada la demanda** en todos sus extremos, por considerar que: a) Cuando el inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta hace referencia al "impuesto calculado" debe entenderse que se refiere a aquel "calculado de manera correcta" y al ser parte de la declaración jurada se encuentra sujeto a revisión por la administración tributaria. El afirmar que el "impuesto calculado" consista en la determinación del contribuyente de manera no correcta, ocasionaría que los contribuyentes declaren como impuesto calculado el que les resulte más favorable, a fin de pagar una menor cuantía en los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los meses de enero y febrero de dos mil doce y dos mil trece. b) La Sentencia de Casación Nº4392-2013 Lima establece reglas vinculantes sobre la interpretación de las normas tributarias. Asimismo, si la redeterminación de una deuda tributaria es efectuada por parte de la administración tributaria o por el propio contribuyente con la presentación de una declaración rectificatoria mediante la cual se modifica la declaración jurada anual que presentó el contribuyente en el ejercicio precedente al anterior (conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta), ello en el marco de la facultad prevista en el artículo 61 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; tal redeterminación tiene plena validez para el cálculo de los pagos a cuenta del ejercicio posterior. Por ende, no está prohibido tomar en cuenta el cálculo del procedimiento que haya efectuado la SUNAT respecto del ejercicio tributario precedente al anterior para aplicarlo a los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero de los ejercicios tributarios tanto de dos mil doce como de dos mil trece, acorde al artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. c) El Tribunal Fiscal ha procedido con arreglo al criterio establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 7308-2-2019, del catorce de agosto de dos mil diecinueve, que fue tomado en cuenta por el acto impugnado en este proceso judicial —Resolución del Tribunal Fiscal Nº 7743-9-2019, del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve—. El referido precedente de observancia obligatoria interpreta una norma y fue emitido al amparo del artículo 154 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, y como tal forma parte de las fuentes del procedimiento administrativo según el numeral 2.8 del artículo V del título preliminar de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que el Tribunal Fiscal al emitir el acto impugnado estaba obligado a observarla y aplicar su contenido. **Sentencia de vista** Mediante sentencia de vista del veintiséis de agosto de dos mil veintidós (foja cuatro mil doscientos cinco), la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió **confirmar** la sentencia apelada, que declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. Estos son sus argumentos: a) La empresa demandante no ha acreditado la invalidez de los actos administrativos en cuestión; de igual manera, en el caso concreto no se ha configurado en modo alguno la contravención del precedente vinculante establecido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, que establece reglas vinculantes referidas a las formas de interpretación de normas tributarias. b) Asimismo, refiere que ya se emitieron varias sentencias respecto a este tema aplicando el método de interpretación sistemático por ubicación de la norma y el teleológico, al inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y a los artículos 34 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, de cuya interpretación se infiere que no será suficiente cumplir con los pagos a cuenta en las fechas que la administración establezca, sino que ello deberá responder a la declaración correcta y sustentada que formule el contribuyente —en aplicación e interpretación literal y sistemática de las disposiciones invocadas—, a efectos de satisfacer la finalidad para la que fueron instituidos —

interpretación teleológica—. c) Por consiguiente, una concepción distinta propiciaría en la práctica que los contribuyentes declaren para fines del impuesto a la renta ingresos netos menores a los que corresponden en el ejercicio anterior y en el ejercicio precedente al anterior, con los consiguientes menores o nulos impuestos y, por ende, reducidos coeficientes a aplicarse a los futuros pagos a cuenta. Ello tendría un efecto negativo en la recaudación de esos conceptos y no acarrearía consecuencias para los contribuyentes, quienes en todo caso se limitarían únicamente a rectificar sus declaraciones tributarias, lo que sin duda vaciaría de contenido el precepto del inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que como se ha indicado estatuye la obligación de los pagos a cuenta no solo en cuanto a la oportunidad sino también a la forma prevista en la normativa tributaria. d) Asimismo, en los periodos enero y febrero de dos mil doce hubo concordancia entre lo declarado por la empresa contribuyente mediante sus declaraciones juradas rectificatorias y lo determinado por la administración tributaria en el procedimiento de fiscalización, lo que permite verificar que no existía controversia alguna respecto a la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta por los aludidos periodos. Materia controvertida en el presente caso Con relación a los hechos determinados por las instancias de mérito y en concordancia con las causales por las que fue admitido el recurso de casación interpuesto, concierne a esta Sala Suprema determinar: **i)** respecto a los periodos enero y febrero de dos mil doce: **a)** si corresponde la aplicación de los intereses moratorios por las omisiones referenciales de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero del dos mil doce, a que se refiere el artículo 34 del Código Tributario, como consecuencia de que la propia empresa contribuyente presentara declaraciones juradas rectificatorias del ejercicio dos mil diez y de los aludidos pagos a cuenta, las que fueron estimadas en el procedimiento de fiscalización, considerando los alcances de la Sentencia Casación Nº 4392-2013 Lima; **b)** si la presentación de las declaraciones juradas rectificatorias respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce ocasiona la imposibilidad de plantear recursos administrativos cuestionando la configuración de tales reparos; y **c)** si las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015 y Nº 7308-2-2019 resultan aplicables a los periodos cuestionados; y **ii)** respecto a los periodos enero y febrero del dos mil trece: si corresponde la aplicación de los intereses moratorios por las omisiones referenciales de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil trece, a que se refiere el artículo 34 del Código Tributario, a la diferencia determinada por la modificación de las bases de cálculo de los coeficientes aplicables a los pagos a cuenta de dichos periodos, como consecuencia de la fiscalización efectuada por la administración tributaria respecto del ejercicio dos mil once, considerando los alcances de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante auto de calificación del siete de diciembre de dos mil veintidós (foja cuatrocientos dieciocho del cuaderno de casación), la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Pesquera Hayduk Sociedad Anónima, por las siguientes causales: **a) Vulneración del inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, interpretación errónea del artículo 88 del Código Tributario e inaplicación de los artículos 59, 61 y 76 del mismo código** Sostiene que la norma citada establece el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Asimismo, que la Sala Superior interpretó erróneamente el artículo 88 del Código Tributario e inaplicó los artículos 59, 61 y 76 del mismo cuerpo normativo, pues ha convalidado una declaración rectificatoria errada de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce, cuando correspondía que se reconozca la correcta determinación de la obligación tributaria, al considerar que la rectificación constituye en todos los casos un acto propio. Agrega que el hecho de presentar una declaración jurada rectificatoria no ha sido calificado por el ordenamiento jurídico tributario como una aceptación y menos aún como una renuncia a recurrir (reclamación o apelación), toda vez que, según el artículo 61 del Código Tributario, la determinación de la obligación tributaria está sujeta a fiscalización por parte de la administración tributaria, la cual podrá modificarla. Asimismo, refiere que la empresa determinó y liquidó las obligaciones tributarias en forma correcta; sin embargo, con posterioridad, se emite la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, que demuestra que el tratamiento contenido en la declaración original era el correcto. En consecuencia, los valores emitidos por la administración tributaria eran errados, pues ya se emiten considerando las omisiones referenciales presentadas por la empresa. Siendo ello así, mediante el ejercicio legítimo del derecho a recurrir y el derecho de petición, impugnó en su debida oportunidad tanto los valores como la resolución de Intendencia con el propósito de que se determinen con corrección las obligaciones mensuales a su cargo por pagos a cuenta, mediante una adecuada aplicación del derecho objetivo. Esto no constituye en ningún sentido algún acto contradictorio o que pueda calificarse de contradictorio contra un acto propio, como erradamente señala la sentencia de vista, siendo que, en materia tributaria, la regla es lo contrario. **b) Inaplicación del artículo 154 del Código Tributario** Denuncia que la Sala Superior inaplicó la norma referida, toda vez que correspondía que se aplique la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015, a fin de considerar la ganancia total por diferencia de cambio en el denominador para efectos de determinar el coeficiente aplicable para calcular los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce conforme hizo la empresa, a fin de no generar distorsiones con el numerador, y así ordenar a la administración tributaria que efectúe el recálculo del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce en virtud de que las omisiones a los importes por los pagos a cuenta de dichos periodos se originaron como consecuencia de la modificación del coeficiente por parte de la administración tributaria; la cual excluyó del cálculo del coeficiente. **c) Interpretación errónea del literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Código Tributario** Refiere que la Sala Superior interpreta erróneamente las normas referidas, desconociendo que para la determinación del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta se debe tomar en cuenta el "impuesto calculado" por el contribuyente, es decir, lo que se tenía como cierto en el momento de liquidar los citados pagos a cuenta. Agrega que dicho criterio ha sido confirmado por el precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, y que la correcta interpretación del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta es que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta se determina con base en el impuesto calculado del ejercicio anterior, y que por excepción podría haber sido modificado por una declaración jurada rectificatoria presentada por el propio contribuyente. Si con posterioridad a esa fecha se produce una modificación del impuesto a la renta de referencia, este cambio ya no debería afectar el pago a cuenta debidamente cuantificado a partir de los datos existentes al momento de liquidar tal pago. Por lo cual, la correcta interpretación del artículo 34 del Código Tributario es que establece intereses moratorios únicamente en los casos de pagos a cuenta que no se hayan abonado oportunamente y en modo alguno por modificaciones realizadas posteriormente (como es el caso de la declaración jurada rectificatoria presentada por la compañía) y que supuestamente modifican la base sobre la cual se tiene que determinar el coeficiente aplicable a dichos pagos. **d) Aplicación indebida del artículo 88 del Código Tributario, así como del artículo 43 de la Constitución Política del Perú (invocando regulación implícita del principio de capacidad contributiva) e inaplicación de los artículos 1, 28 y 29 (inciso b) del Código Tributario** La parte recurrente indica que la Sala Superior aplicó indebidamente el artículo 88 del Código Tributario, pues la declaración jurada debe realizarse de manera correcta o asumir las consecuencias respecto de la determinación de la obligación tributaria. Agrega que el Código Tributario no comprende la determinación de anticipos o pagos a cuenta, pues la deuda u obligación tributaria viene dada por el tributo, los intereses y las multas, pero no así por los anticipos o pagos a cuenta, pues los pagos a cuenta no son tributos. Precisa que esta postura no es antojadiza, sino que ha sido plenamente reconocida por la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. **e) Apartamiento del precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima** La recurrente sostiene que la Sala Superior se apartó del precedente vinculante a pesar de que la postura de la empresa encuentra total respaldo en dicha jurisprudencia vinculante. Agrega que la citada sentencia ha indicado claramente que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta se determina con base en el "impuesto calculado" al momento del abono. Por tanto, resulta evidente que a la compañía no se le puede exigir el cobro de intereses por el no pago de una obligación que tiene como base una modificación realizada con posterioridad al momento del cumplimiento de la misma,

pues el núcleo del razonamiento del precedente vinculante consiste en afirmar que solo hay intereses moratorios en los pagos a cuenta cuando estos no se realizan oportunamente (es decir, mensualmente y en los plazos legales), lo que supone que no son afectados en ningún aspecto por las modificaciones posteriores en los datos que inciden en el cálculo de los coeficientes, que podrían provenir de declaraciones rectificatorias o de determinaciones de oficio. **f) Inaplicación del principio de legalidad** La recurrente sostiene que se produjo la inaplicación del principio de legalidad, ya que en virtud de lo señalado en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario, la parte recurrente señala que la Sala Superior ha vulnerado el principio de legalidad, pues la empresa no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al momento en que la compañía cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce y dos mil trece; pues el citado precedente vinculante señala claramente que el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que para efectos de establecer el coeficiente en cada oportunidad en que el contribuyente liquida sus pagos a cuenta del impuesto a la renta se debe tomar la cifra de "impuesto calculado" que el contribuyente tiene como cierta en ese momento, cifra que normalmente viene dada por el impuesto a la renta que figura en la autodeterminación del contribuyente, reflejada en la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio gravable precedente al anterior y que, por excepción, podría haber sido modificada por una declaración jurada rectificatoria presentada por el propio contribuyente o por un acto de determinación de la administración tributaria existente y con plenos efectos a la fecha de presentación de la declaración jurada del pago a cuenta. **g) Inaplicación de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario** La parte recurrente refiere que la Sala Superior ha desconocido la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, que prohíbe la interpretación extensiva en materia tributaria. La compañía no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al momento en que la empresa cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce, toda vez que se pretende extender el supuesto del literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual se refiere a que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta se debe calcular con base en el "impuesto calculado" y los "ingresos netos" del ejercicio precedente al anterior, y no sobre la base del impuesto redeterminado en un momento posterior a la liquidación de dicho impuesto **h) Inaplicación del principio de reserva de ley establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y la norma IV del título preliminar del Código Tributario** La parte recurrente refiere que la Sala Superior inaplicó el principio de reserva de ley, pues realizó una interpretación que no se encuentra en la norma, toda vez que en virtud de lo señalado expresamente en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario, la empresa no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al momento en que la compañía cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce y dos mil trece. **i) Inaplicación del artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS** Sostiene que dicha infracción se produjo al desconocer el carácter vinculante de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. La parte recurrente refiere que el pronunciamiento de la Sala Superior constituye una directa violación del artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, dado que formula una nueva interpretación del artículo 85 (inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta y deja de lado la interpretación del artículo 34 del Código Tributario porque erradamente considera que no sería parte de la controversia. Afirma que sobre dicho punto no indica nada, asumiendo que la interpretación correcta sobre el cálculo del coeficiente para pagos a cuenta no es la que contiene la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, sino su propia interpretación de la norma previamente anotada. Indica que el Juzgado realiza una interpretación literal del artículo 85 (inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta y que, por tal motivo, no contraviene el precedente vinculante. Pero está claro que una interpretación que indica que la base de cálculo del coeficiente no es aquello que emana de la literalidad de la norma —que dice: "impuesto calculado"— es una interpretación extensiva del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, prohibida por la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, pero además contraviene el artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. **j) Inaplicación del principio a la seguridad jurídica, principio consustancial al Estado constitucional de derecho** La parte recurrente indica que la Sala Superior inaplicó los referidos principios al apartarse de la Casación Nº 4932-2013 Lima y diversa jurisprudencia del Poder Judicial. CONSIDERANDOS **PRIMERO: El recurso de casación 1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. Análisis de las causales de naturaleza procesal **SEGUNDO: Vulneración del inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; interpretación errónea del artículo 88 del Código Tributario e inaplicación de los artículos 59, 61 y 76 del mismo cuerpo normativo; inaplicación del artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; e inaplicación del principio de seguridad jurídica 2.1.** Al advertirse que se declararon procedentes las causales de naturaleza procesal señaladas, corresponde realizar el análisis de los fundamentos que las sustentan, luego de lo cual se procederá a emitir pronunciamiento de manera conjunta. Para este fin, comencemos por citar los dispositivos cuya infracción se alega: Constitución Política del Perú Artículo 139°. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. […] Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo **Artículo 34.- Principios jurisprudenciales.**[4] Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, **constituyen precedente vinculante**. Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el

precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicará en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. (El subrayado es nuestro) Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS **Artículo 22. –** Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. **2.2.** En este sentido, iniciamos el análisis casatorio haciendo mención al debido proceso (o proceso regular), recogido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú[5], derecho complejo que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho, incluido el Estado, que pretenda hacer uso abusivo de sus prerrogativas. **2.3.** El derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez legal. **2.4.** El derecho al debido proceso comprende también, entre otros derechos, el de motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el numeral 5 del artículo 139 de la Carta Fundamental[6], esto es, obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil[7] y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS[8]. **2.5.** Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional[9]. **2.6.** El **proceso regular** en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: **a)** Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; **b)** Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; **c)** Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respalda en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y **d)** Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como la de no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común. **2.7.** Asimismo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones el principio de congruencia, establecido en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII del título preliminar del mismo cuerpo normativo, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud de lo cual los jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación, entonces, de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. **2.8.** En el sentido descrito, se tiene que la **observancia del principio de congruencia** implica que en toda resolución judicial exista **i)** coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa), y **ii)** armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 11 de la Sentencia Nº 1230-2003-PCH/TC. **2.9.** Entonces, el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión constituyen vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). **2.10.** Resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas, pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda de las peticiones ante él formuladas. **2.11.** Siendo ello así, se observa que la recurrente fundamenta las causales procesales declaradas procedentes señalando que el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso; asimismo, indica que la Sala Superior interpretó erróneamente el artículo 88 del Código Tributario e inaplicó los artículos 59, 61 y 76 del mismo cuerpo normativo, al convalidar con su fallo una declaración rectificatoria errada de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce, cuando correspondía que se reconozca la correcta determinación de la obligación tributaria, ello por considerar que la rectificación constituye en todos los casos un acto propio. Agrega que presentar una declaración jurada rectificatoria no ha sido calificado por el ordenamiento jurídico tributario como una aceptación y menos aún como una renuncia a recurrir (vía reclamación o apelación), toda vez que según el artículo 61 del Código Tributario la determinación de la obligación tributaria está sujeta a fiscalización por parte de la administración tributaria, la cual podrá modificarla. Siendo ello así, mediante el ejercicio legítimo del derecho a recurrir y el derecho de petición, la empresa impugnó en su debida oportunidad tanto los valores como la resolución de Intendencia, con el propósito de que se determine con corrección las obligaciones mensuales a su cargo por pagos a cuenta mediante la adecuada aplicación del derecho objetivo. Asimismo, agrega que el colegiado superior desconoce el carácter vinculante de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima y que el pronunciamiento de la Sala Superior constituye una directa violación del artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, dado que formula una nueva interpretación del artículo 85 (inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta, y deja de lado la interpretación del artículo 34 del Código Tributario, porque erradamente considera que no sería parte de la controversia,

asumiendo que la interpretación correcta sobre el cálculo del coeficiente para pagos a cuenta no es la que contiene la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, sino su propia interpretación de la norma anotada. **2.12.** En este orden de ideas, en atención a los cuestionamientos realizados por la recurrente, se advierte que el colegiado superior ha efectuado una valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas en sede administrativa, así como de los argumentos señalados por la demandante en su escrito de apelación, conforme se verifica de los considerandos quinto al undécimo de la sentencia de vista. Además, se constata que el mismo colegiado superior ha efectuado el análisis encaminado a determinar si la recurrente tiene o no derecho al crédito fiscal por enero a diciembre de dos mil quince, dado que legalizó su registro de compras con posterioridad al requerimiento de la SUNAT en el procedimiento de fiscalización, lo que trajo como resultado que los comprobantes de pago de tales periodos fuesen anotados extemporáneamente. Así, determinó en el presente caso que, de conformidad con el inciso c) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, modificado por el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Nº 29215, la recurrente no tiene derecho al crédito fiscal correspondiente al periodo de enero a diciembre de dos mil quince. **2.13** En ese sentido, de la revisión de la sentencia de vista y en mérito al sustento esbozado por la parte recurrente sobre los vicios de vulneración del derecho a defensa, desconocimiento del carácter vinculante de la Casación Nº 4392-2013 y vulneración del principio de seguridad jurídica, esta Sala Suprema advierte que la decisión adoptada por la Sala Superior se ha ceñido a lo aportado y probado en el proceso, de manera que su fallo no puede ser cuestionado por los vicios señalados, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas y con precisar las normas que le permitieron asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi. Asimismo, se verifica que la recurrente ha podido ejercer su derecho de defensa durante todo el proceso; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación. Además, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente contra las garantías procesales constitucionales. **2.14** En consecuencia, la sentencia de vista cumplió con la protección y la exigencia constitucional que permite a los justiciables defenderse adecuadamente porque expuso los fundamentos fácticos y jurídicos que justifican su decisión. Además, los cuestionamientos realizados no pueden ser analizados como causales de naturaleza procesal, como el argumento referido a que la Sala Superior vulneró su derecho de defensa e inaplicó el principio de seguridad jurídica, al apartarse de la Sentencia de Casación Nº 4932-2013 Lima, y que basó su decisión en una interpretación en virtud de la cual considera que la base de cálculo del coeficiente no es aquello que emana de la literalidad de la norma —que habla de "impuesto calculado"—, lo cual constituiría una interpretación extensiva del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, prohibida por la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, pero además contraviene el artículo 37 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; motivo por el cual, para resolver la controversia planteada en autos, se deben examinar las causales materiales, pues resulta necesario examinar los referidos artículos como los demás cuestionamientos de fondo de la controversia. Así pues, antes de proceder con este último análisis, **se declaran infundadas las presentes causales procesales.** Análisis de las causales de naturaleza material **TERCERO: Inaplicación del artículo 154 del Código Tributario 3.1.** Respecto al análisis de la presente causal, se advierte que la empresa recurrente denuncia la inaplicación del siguiente dispositivo: Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF **Artículo 154: Jurisprudencia de observancia obligatoria Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias**, las emitidas en virtud del Artículo 102, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, así como las emitidas por los Resolutores-Secretarios de Atención de Quejas por asuntos de materia de su competencia, **constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria**, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial. (El subrayado es nuestro) **3.2.** Asimismo, se tiene que la recurrente fundamenta la causal descrita señalando que, en virtud de la norma invocada, el Tribunal Fiscal se encontraba obligado a ordenar a la autoridad tributaria que aplicara lo dispuesto por la Resolución Nº 11116-4-2015, al haberse calificado como resolución de observancia obligatoria vinculante a todos los órganos de la administración tributaria; por lo que corresponde se efectúe el recálculo del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce, de acuerdo a lo dispuesto en dicha resolución. **3.3.** Respecto a este extremo, se observa que la propia recurrente, al fundamentar su causal, cita extractos del precedente vinculante contenido en la Resolución Nº 11116-4-2015, señalando que la misma establece, con carácter vinculante, lo siguiente: **"Las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente** aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, a que se refiere el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta" [énfasis agregado]. Asimismo, agrega que dicho precedente estableció entre sus fundamentos lo siguiente: […] **excluir las ganancias por diferencia de cambio del denominador implica una distorsión en el cálculo del referido coeficiente, dado que ello no repercute en el numerador**, en el que se mantendrá como parte del impuesto determinado en el ejercicio anterior o precedente al anterior, según corresponda, que recayó sobre la ganancia por diferencia de cambio, lo que **en algunos casos podría generar incluso que se exija como pago a cuenta un monto mayor a los ingresos mensuales que sirven de base de cálculo**, al romper la relación que debe existir en función a las variables tomadas. […] En tal sentido, **se considera que ésta [la ganancia por diferencia de cambio debe ser incluida en el divisor o denominador de la fórmula aplicable para el cálculo del coeficiente a usar para la determinación de los pagos a cuenta** para que no exista distorsión alguna al respecto, al haber sido incluida en el numerador de dicha fórmula. […] [Énfasis agregado] **3.4.** En este orden de ideas, se advierte que la recurrente denuncia la inaplicación del artículo 154 del Código Tributario por considerar que en el presente caso correspondía que se aplique las reglas vinculantes establecidas en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015, que constituye precedente vinculante administrativo; sin embargo, la recurrente no fundamenta las razones por las cuales considera obligatoria la aplicación de dicho precedente al presente caso, pues, conforme se puede observar en los párrafos anteriormente citados, dicho precedente se encuentra referido a las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, estableciendo que, para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, las ganancias derivadas de la diferencia de cambio deben ser consideradas en el divisor o denominador a efectos de calcular el coeficiente; mientras que el caso de autos, se advierte que la controversia se originó a causa de las variaciones producidas por la presentación de declaraciones juradas rectificatorias respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce, supuesto distinto al del referido precedente. **3.5.** Del mismo modo, se observa que la sentencia de vista, en su considerando décimo, estableció, respecto a la aplicación de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015, lo siguiente: DÉCIMO.- Que, en lo concerniente a que la presentación de las declaraciones juradas rectificatorias respecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero y febrero del dos mil doce ocasiona la imposibilidad de plantear recursos administrativos cuestionando la configuración de tales reparos, así como a la aplicación de las Resoluciones números 07308-2-2019 y 11116-4- 2015, aun cuando el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en el acto administrativo cuestionado considera que no existe controversia de acuerdo a los fundamentos comprendidos en la Resolución número 07308-2-2019, el cual en sentido estricto no resulta aplicable al caso concreto, al observarse que las declaraciones juradas rectificatorias de los aludidos pagos a cuenta fueron efectuadas antes del inicio del procedimiento de fiscalización […] de modo que, el contribuyente asume los efectos de su presentación y no puede negar un hecho aceptado anteriormente; por otra parte, **no corresponde aplicar al caso sub-judice la Resolución del Tribunal Fiscal número 11116-4-2015, del trece de noviembre del dos mil quince, ya que las Resoluciones de Determinación impugnadas en el procedimiento contencioso tributario fueron emitidas con monto cero, debido a que para los períodos enero y febrero del dos mil doce hubo concordancia entre lo**

declarado por la empresa contribuyente a través de sus declaraciones juradas rectificatorias y lo determinado por la Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización, lo que permite verificar que no existía controversia alguna respecto a la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por los aludidos períodos. [Énfasis agregado] **3.6.** Del considerando citado, se desprende que el colegiado superior concluyó que el referido precedente vinculante administrativo no resulta aplicable al presente caso, toda vez que las resoluciones de determinación impugnadas fueron emitidas con monto cero, a raíz de la información consignada por la recurrente en sus declaraciones juradas rectificatorias respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce; por lo cual la Sala Superior verificó que no existía controversia respecto a la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta por los periodos referidos. **3.7.** Hechas estas precisiones, en el presente caso, se observa que en la sentencia de vista se cumplió con examinar y fundamentar las razones por las cuales el precedente vinculante contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015 no resulta aplicable al presente caso, sin que los argumentos de la recurrente hayan logrado desvirtuar el análisis realizado por la Sala Superior ni tampoco se haya agregado fundamentos adicionales que justifiquen con meridiana claridad las razones por las cuales sí corresponde la aplicación de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11116-4-2015. En consecuencia, no se advierte inaplicación alguna de la norma denunciada, toda vez que la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos de la sentencia de vista ni señala de manera precisa los motivos por las cuales dicha norma debió aplicarse. En consecuencia, la presente causal deviene **infundada. CUARTO: Interpretación errónea del literal a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y del artículo 34 del Código Tributario; apartamiento del precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima; inaplicación del principio de legalidad[10]; inaplicación de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario; e inaplicación del principio de reserva de ley establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y la norma IV del título preliminar del Código Tributario 4.1.** Para iniciar el análisis de las presentes causales, corresponde citar las normas cuestionadas, que establecen lo siguiente: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF Artículo 85: Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán con arreglo a alguno de los siguientes sistemas: **a)** Fijando la cuota sobre la base de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. Los pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se fijarán utilizando el coeficiente determinado en base al impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. En este caso, de no existir impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior se aplicará el método previsto en el inciso b) de este artículo. En base a los resultados que arroje el balance del primer semestre del ejercicio gravable, los contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que se refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente será de aplicación para la determinación de los futuros pagos a cuenta. […] Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF **Título preliminar** NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancelarias. **(1)** Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. **(2) Párrafo sustituido por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 953, publicado el 5 de febrero de 2004. (3)** En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley. **(3) Párrafo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27335, publicada el 31 de julio de 2000.** NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo. Artículo 34.- CÁLCULO DE INTERESES EN LOS ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA El interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal. A partir de ese momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para el cálculo del interés moratorio. Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable incluso cuando, con posterioridad al vencimiento o determinación de la obligación principal, se hubiese modificado la base de cálculo del pago a cuenta o el coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su determinación, por efecto de la presentación de una declaración jurada rectificatoria o de la determinación efectuada sobre base cierta por la Administración". **(*) (*) Tercer párrafo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1528, publicado el 03 marzo 2022. Constitución Política del Perú** Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. **4.2.** Para sustentar las presentes causales, la recurrente sostiene, entre otros, que la Sala Superior interpretó erróneamente las normas referidas, desconociendo que para la determinación del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta se debe tomar en consideración el "impuesto calculado" por el contribuyente, es decir, lo que se tenía como cierto al momento de liquidar los citados pagos a cuenta. Asimismo, agrega que dicho criterio ha sido confirmado por el precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, y que la correcta interpretación del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta consiste en que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta debe determinarse con base en el impuesto calculado del ejercicio anterior, y que si con posterioridad a esa fecha se produce una modificación del impuesto a la renta de referencia, este cambio ya no debería afectar el pago a cuenta debidamente cuantificado en función de los datos existentes al momento de liquidar tal pago. Añade la recurrente que la correcta interpretación del artículo 34 del Código Tributario implica que los intereses moratorios se aplican únicamente en los casos de pagos a cuenta que no se hayan abonado oportunamente y que en modo alguno deben aplicarse por modificaciones realizadas posteriormente, como es el caso de la declaración jurada rectificatoria presentada por la compañía en el presente caso y que supuestamente modifica la base sobre la cual se tiene que determinar el coeficiente aplicable a dichos pagos. En este sentido, la recurrente sostiene que la Sala Superior se apartó del precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima y también incurrió en inaplicación del principio de legalidad, ya que, en virtud de lo señalado en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto

a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario, la empresa no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al momento en que la compañía cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero del dos mil doce y dos mil trece. Asimismo, en concepto de la recurrente, la Sala Superior habría desconocido la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, que prohíbe la interpretación extensiva en materia tributaria; de igual manera, sostiene que se inaplicó el principio de reserva de ley al realizar una interpretación que no se encuentra en la norma. **4.3.** En este orden de ideas, se advierte de autos que la Sala Superior estableció en el considerando sétimo de la sentencia de vista, lo siguiente: **SÉTIMO.-** […] la finalidad de los pagos a cuenta es, en lo fundamental, la recaudación anticipada e inmediata de recursos económicos por parte del Estado, para la atención de sus objetivos públicos, obligación que está a cargo de los contribuyentes en la forma y oportunidad establecidas en el acotado artículo 85, inciso a), del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 54, inciso b), de su Reglamento; y **vi)** de lo expuesto se infiere razonablemente que **no será suficiente cumplir con los pagos a cuenta en las fechas que la Administración establezca, sino que ello deberá responder a la declaración correcta y sustentada que formule el contribuyente** —en aplicación e interpretación literal y sistemática de las disposiciones invocadas—, a efectos de satisfacer la finalidad para la que fueron instituidos —interpretación teleológica—, **destacándose por consiguiente que una concepción distinta propiciaría en la práctica que los contribuyentes declaren para fines del Impuesto a la Renta ingresos netos menores a los que corresponden en el ejercicio anterior y en el ejercicio precedente al anterior, con los consiguientes menores o nulos impuestos y, por ende, reducidos coeficientes a aplicarse a los futuros pagos a cuenta, con efecto negativo en la recaudación de esos conceptos y sin consecuencias para los contribuyentes, quienes en todo caso se limitarían únicamente a rectificar sus declaraciones tributarias,** lo que sin duda vaciaría de contenido al precepto del artículo 85, inciso a), del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que como se ha indicado estatuye la obligación de los pagos a cuenta no solo en cuanto a la oportunidad sino también a la forma prevista en la normativa tributaria. Asimismo, en el considerando noveno de la sentencia de vista, el colegiado superior establece lo siguiente: **NOVENO.-** Que, […] en objetiva apreciación de lo actuado en sede administrativa, […] se concluye que en el caso sub-judice no se ha configurado en modo alguno la acusada contravención al precedente vinculante establecido en la sentencia Casación número 4392-2013 Lima, fundamento de fondo de las pretensiones postuladas a través de la demanda, encontrando por el contrario adecuada justificación los actos administrativos impugnados, por las siguientes razones: 1) en el caso concreto, la **empresa contribuyente no efectuó el abono correcto de los pagos a cuenta** del Impuesto a la Renta correspondientes a los períodos enero y febrero del dos mil doce y dos mil trece, **pues a efectos de calcular los coeficientes aplicables a dichos períodos, consideró un Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil diez y dos mil once distinto al determinado por la propia contribuyente en el dos mil diez y como resultado de la fiscalización del ejercicio dos mil once, según Declaración Jurada Rectificatoria PDT 668 número 750508066 y Resolución de Determinación número 012-003-0044817, respectivamente, generando omisiones de pagos a cuenta por dichos períodos, correspondiendo la aplicación de intereses moratorios a la diferencia determinada por la modificación de las bases de cálculo de los coeficientes aplicables a los pagos a cuenta, por la falta de pago oportuno**; 2) en estricto, las reglas del precedente vinculante invocado por la defensa técnica de la empresa accionante y a que se contrae la sentencia Casación número 4392-2013 Lima no tienen relación directa con el supuesto del caso sub-judice, según lo que se tiene explicitado; y 3) por último, […] los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y los aspectos vinculados a su determinación responden necesariamente y sin duda al deber de contribuir, implícitamente consagrado en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, así como al principio de capacidad contributiva, de capital trascendencia en materia tributaria […] ergo, **en los casos en que el contribuyente establezca el coeficiente a partir de una declaración jurada que no contenga una determinación correcta, se soslayará en rigor tanto el deber de contribuir como el propio principio de capacidad contributiva**, escenario en el que la Administración Tributaria estará facultada para modificar el coeficiente con una redeterminación correcta y recalcular las cuotas de los pagos a cuenta, sin perjuicio de la imposición de las multas a que hubiere lugar. [Énfasis agregado] **4.4.** Ante ello, se advierte de autos que los argumentos del recurso de casación, al fundamentar la presente casual, no logran desvirtuar los fundamentos de la Sala Superior, pues no refieren en modo alguno las razones por las que se considera que lo fundamentado por la Sala Superior en este extremo resulta erróneo; por el contrario, se insiste en señalar que la correcta interpretación del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta implica tener en cuenta que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta debe determinarse en función del impuesto calculado del ejercicio anterior, y que, si con posterioridad a esa fecha se produce una modificación del impuesto a la renta de referencia, dicho cambio no debería afectar el pago a cuenta debidamente cuantificado con base en los datos existentes al momento de su liquidación, pero no se señala el fundamento jurídico que avale tal afirmación. La recurrente tampoco expone en modo alguno los motivos por los cuales considera errado el fundamento de la Sala Superior, sobre el hecho de que en el presente caso se verificó que la contribuyente no efectuó el abono correcto de los pagos a cuenta, por lo cual la propia empresa efectuó declaraciones juradas rectificatorias, lo que a su vez ocasionó que se generen intereses moratorios sobre la diferencia determinada por la modificación de las bases de cálculo de los coeficientes a los pagos a cuenta por falta de pago oportuno. Por ende, debe desestimarse este extremo del recurso de casación. **4.5.** Adicionalmente, se observa que la recurrente sostiene en su recurso de casación que la Sala Superior se apartó del precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, al realizar una interpretación extensiva del literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario, argumentando que la empresa no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente acaecida con posterioridad al momento en que la compañía cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil doce y dos mil trece. Sin embargo, conforme se ha establecido antes, la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos de la Sala Superior respecto a la interpretación realizada sobre la modificación del coeficiente para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta a raíz de declaraciones juradas rectificatorias, motivo por el cual también debe desestimarse este extremo del recurso de casación, pues no se verifica tal apartamiento de precedente vinculante, más aún si las reglas vinculantes de este se encuentran referidas únicamente a los métodos de interpretación de las normas tributarias. **4.6.** En este orden de ideas, al no haber logrado desvirtuar los fundamentos de la Sala Superior, las **causales bajo análisis devienen infundadas**, pues no se verifica en modo alguno la configuración de algún tipo de transgresión de las normas invocadas ni el apartamiento del precedente vinculante a que se refiere. **QUINTO: Aplicación indebida del artículo 88 del Código Tributario, así como del artículo 43 de la Constitución Política del Perú (invocando regulación implícita del principio de capacidad contributiva) e inaplicación de los artículos 1, 28 y 29 (inciso b) del Código Tributario 5.1** La recurrente fundamenta esta causal sosteniendo principalmente que la Sala Superior no tomó cuenta que el Código Tributario no comprende a la determinación de anticipos o pagos a cuenta, pues la deuda u obligación tributaria viene dada por el tributo, los intereses y las multas, pero no así por los anticipos o pagos a cuenta; para la recurrente, los pagos a cuenta no son tributos y esta postura no sería antojadiza, sino ha sido plenamente reconocida por la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. **5.2** Al respecto, en cuanto a los pagos a cuenta, esta Sala Suprema emitió el **precedente vinculante contenido en la Casación Nº 6619-2021 Lima**, cuyas disposiciones vinculantes están referidas, entre otras, a las reglas de interpretación de las normas tributarias, así como a la naturaleza de los pagos a cuenta del impuesto a la renta y el tratamiento de los intereses moratorios, estableciendo en las reglas 5.4.1 y 5.4.2 lo siguiente: 5.4.1 **Entiéndase que la naturaleza jurídica de los "pagos a cuenta" es la de "obligaciones tributarias"**, toda vez que se vinculan a la obligación tributaria principal, integrándose finalmente al tributo del cual se derivan. Por tanto, **cuentan con reglas propias como son las que se derivan de su nacimiento y devengo, en consecuencia, la generación de intereses responde a dichas reglas propias que los informan.** 5.4.2

Corresponde el cobro de intereses moratorios a los pagos a cuenta del impuesto a la renta, cuando los mismos no fueron efectuados en la forma y el íntegro del monto que corresponda en cada oportunidad. [Énfasis agregado] **5.3** En este sentido, se aprecia que la decisión de la Sala Superior no ha sido emitida en contravención de la Sentencia de Casación Nº 6619-2021-Lima, del doce de enero de dos mil veintitrés, dado que desestimó el agravio formulado por la empresa recurrente en su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el extremo referido, y con ello convalidó lo resuelto por el juez de primera instancia, para lo cual estableció en el considerando undécimo de la sentencia de vista lo siguiente: […] **iii)** en lo relativo a que para la Corte Suprema debe configurarse dos supuestos de manera concurrente, **en el caso concreto, los pagos a cuenta por los períodos analizados no se realizaron manera oportuna**, acorde con lo establecido en el cronograma de pagos mensuales, y no se ha seguido el procedimiento legal para su cálculo, contrariamente a lo argüido por la empresa accionante; y **iv)** resulta pertinente enfatizar al respecto que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la sentencia Casación número 20907-2018 Lima, de fecha nueve de octubre del dos mil diecinueve, resolvió declarar infundado el recurso de casación que interpusiera la demandante, Andina Plast S.R.L., contra la sentencia de vista del dieciocho de julio del dos mil dieciocho, expedida por esta **Sala Superior, dejando establecido como criterio —que respalda sustancialmente la postura asumida— que en la Casación número 4392-2013 Lima, la Sala Suprema no prohíbe otros métodos de interpretación**, entre ellos, el método de interpretación sistemático, para establecer el sentido normativo del l**iteral a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, razón por la cual resulta correcto considerar que no solo basta con la aplicación de dichos artículos, sino que, además, corresponde aplicar de modo sistemático el conjunto de normas relacionadas con el cumplimiento de esa obligación, entre ellas, el artículo 88 del Código Tributario, que exige que las declaraciones realizadas por los contribuyentes para la determinación de sus obligaciones** contengan los datos solicitados por la Administración "en forma correcta y sustentada. [Énfasis agregado] **5.4** Siendo ello así, resulta importante precisar que los cuestionamientos formulados por la recurrente al fundamentar su causal no logran desvirtuar lo establecido por la Sala Superior; por el contrario, si bien la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima partía del análisis de considerar que los pagos a cuenta del impuesto a la renta no son obligaciones tributarias, dicho extremo no forma parte de las reglas vinculantes de la referida sentencia casatoria; por el contrario, resulta plenamente válida la aplicación del artículo 88 del Código Tributario al presente caso. Por tanto, corresponde desestimar la presente causal material. **5.5** Por todo lo expuesto, al haberse desestimado las causales procesales y materiales, corresponde declarar infundado el recurso de casación en todos sus extremos. **SEXTO:** Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se aprecia que sobre las reglas de capitalización de intereses, intereses moratorios e interpretación de las normas tributarias, esta Sala Suprema ha emitido un **precedente vinculante** contenido en la **Casación Nº 6619-2021 Lima**, mediante el cual **establece las reglas jurisprudenciales sobre la interpretación de las normas tributarias, entre otras**. En este orden de ideas, este colegiado supremo viene aplicando dicho criterio en los procesos referidos a cualquiera de las reglas vinculantes en ella señaladas. **DECISIÓN** Por tales fundamentos y de acuerdo con lo regulado, además, por el artículo 397 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, **SE RESUELVE: 1.- DECLARAR INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante Pesquera Hayduk Sociedad Anónima, del trece de septiembre de dos mil veintidós (foja cuatro mil doscientos treinta y uno). **2.-** En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciocho, del veintiséis de agosto de dos mil veintidós (foja cuatro mil doscientos cinco), que confirmó la sentencia de primera instancia. **3.- DISPONER** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la demandante Pesquera Hayduk Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo **Burneo Bermejo.** SS. **BURNEO BERMEJO,** BUSTAMANTE ZEGARRA, CABELLO MATAMALA, CORANTE MORALES, TOVAR BUENDÍA.

---

1 Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 HITTERS, Juan Carlos. (2002) Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 Si bien la recurrente formula la causal señalando que se produjo la "inaplicación del **artículo 37** de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo […]", conforme se observa en el numeral 4.9 del recurso de casación (foja cuatro mil trescientos dos), se observa que el contenido se encuentra referido al **artículo 34** de la mencionada ley, por lo que se consigna el contenido de dicho artículo.

5 **Constitución Política del Perú**
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

6 **Constitución Política del Perú**
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

7 **Código Procesal Civil**
Artículo 122°. Las resoluciones contienen: […] 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

8 **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**
Artículo 12°. Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.

9 El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado que:
[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios.

10 La recurrente formula dicha causal sosteniendo que, en virtud de lo señalado expresamente en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario, la compañía no debía pagar intereses moratorios derivados de una modificación del coeficiente ocurrida con posterioridad al momento en que la compañía cumplió con la obligación de abonar los pagos a cuenta.

C-2245460-3

CASACIÓN Nº 17826-2023 LIMA

TEMA: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL
SUMILLA: Al efectuar el control del debido proceso de la sentencia de vista, en la presente controversia, se advierte que la recurrida no dejó incontestados los agravios formulados por la empresa, pues los atendió del sétimo al décimo octavo considerando, sin que al hacerlo invocase la aplicación del precedente constitucional vinculante recaído en el Expediente Nº 3525-2021-PA/TC, que dispone la inaplicación de intereses moratorios ante la vulneración del derecho al plazo razonable. En consecuencia, advertimos que no se ha producido vulneración al derecho de debida motivación de la recurrente ni a su derecho al debido proceso, ni se ha vulnerado el principio de congruencia procesal.
PALABRAS CLAVE: debido proceso, principio de congruencia procesal, precedente constitucional vinculante recaído en el Expediente Nº 3525-2021-PA/TC, Sentencia de Casación Nº 6619-2021 Lima

Lima, dos de octubre de dos mil veintitrés

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS La causa número diecisiete mil ochocientos veintiséis, guion, dos mil veintitrés, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada por los señores Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), Burneo Bermejo, Cabello Matamala, Pereira Alagón y Delgado Aybar, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. ASUNTO** Viene a conocimiento de esta Sala

Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa **DANPER TRUJILLO S.A.C.**, mediante escrito del veinte de abril de dos mil veintitrés (fojas ochocientos noventa y uno del expediente principal), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y cuatro, del catorce de marzo de dos mil veintitrés (fojas ochocientos cincuenta y nueve del expediente principal), que confirma la sentencia emitida con resolución número ocho, del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas ciento noventa y uno del expediente principal), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **I.1. Antecedentes I.1.1 Demanda** El dos de agosto de dos mil dieciséis, DANPER TRUJILLO S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad total de la **Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02206-2-2018**, que revoca los reparos por exceso de costo/gasto por restitución de derechos arancelarios y la sanción calculada sobre la base de aquel, en el extremo que confirma los demás reparos impugnados. **Pretensión accesoria:** Se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 0650140000818/SUNAT, así como de la Resolución de Determinación Nº 062-003-0001024 y la Resolución de Multa Nº 062-002-001541, giradas por impuesto a la renta del ejercicio dos mil tres y por la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. La demandante sustenta sus pretensiones con los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: a) Sostiene que se dio inicio al procedimiento de fiscalización tributaria con la notificación del Requerimiento Nº 0621060001326, el cual debió estar debidamente motivado, lo que no se aprecia de su contenido, por lo que el mismo adolece de causal de nulidad. b) Precisa que dicho requerimiento ha sido emitido sin consignar el nombre y firma del auditor fiscal a cargo del procedimiento de fiscalización y solo contiene la firma del jefe de auditoría, lo que contraviene el procedimiento establecido en la Circular Nº 28-2001 - "Emisión y cierre de requerimientos formulados por el área de fiscalización", de fecha veinticuatro de agosto de dos mil uno, documento obtenido mediante la respectiva solicitud de acceso a la información pública mediante Carta Nº 245-2015/SUNAT, del veinte de mayo de dos mil cinco, por lo que al ser dicho documento vinculante para los funcionarios a cargo del procedimiento de fiscalización, su cumplimiento resultaba obligatorio. En tal sentido, el anotado requerimiento adolece de nulidad al haber sido emitido sin observar el procedimiento legal establecido; por ende, los actos derivados de aquel igualmente deben ser dejados sin efecto, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario. c) Solicita la nulidad del procedimiento de fiscalización y de todo lo actuado en él, siendo que, como resultado del mismo, se le efectuaron los siguientes reparos al impuesto a la renta del ejercicio dos mil tres: **i)** exceso de costo/gasto por restitución de derechos arancelarios; **ii)** depreciación no acreditada documentariamente y cargada a resultados; **iii)** fletes cargados al gasto cuando debieron formar parte del costo de existencias finales; **iv)** gastos por servicios de consultoría no acreditados; **v)** gastos de ventas - contratos no acreditados; **vi)** gastos por comisión de ventas - exportaciones no acreditadas; y **vii)** gastos de ventas - exterior no acreditados. Precisa que, como resultado del procedimiento de fiscalización anotado, la administración le emitió la Resolución de Determinación Nº 062-003-0001024, así como la Resolución de Multa Nº 062-002-001541, giradas por impuesto a la renta del ejercicio dos mil tres y por la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. I.1.2 Sentencia de primera instancia El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia emitida mediante resolución número ocho, del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, declara infundada la demanda. **Fundamentos** Sostiene el Juzgado que el requerimiento cuestionado por la demandante no constituye un acto administrativo, de modo que el hecho de que no se encuentre firmado por el auditor a cargo del procedimiento de fiscalización seguido a la demandante, pero sí por el jefe de auditoría, no implica afectación a la garantía de que el procedimiento esté debidamente llevado a cabo. En el considerando décimo cuarto de la sentencia de primera instancia, el Juzgado se pronuncia respecto a los reparos formulados a la demandante y a los medios probatorios aportados, concluyendo que los mismos se ajustan a derecho. Por tanto, decide declarar infundada la demanda. Asimismo, el Juzgado afirma que, en sede administrativa, no se ha vulnerado el debido procedimiento ni la debida motivación de las resoluciones. I.1.3 Recurso de apelación Mediante escrito del veinte de marzo de dos mil diecisiete, la empresa demandante expone los siguientes agravios: **i)** el juzgado incurre en motivación aparente al concluir que el acto de requerimiento no es un acto administrativo, siendo que los requerimientos de la entidad fiscal emitidos durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización producen efectos jurídicos directos e inmediatos en los contribuyentes aunque no puedan ser directamente impugnados; **ii)** al emitir la sentencia, el Juzgado incurre en motivación insuficiente, en cuanto no analiza si el Tribunal Fiscal **(a)** no valoró debidamente los hechos y pruebas ofrecidas, y si hubo o no vulneración al debido proceso; **(b)** no se analiza si hubo vulneración del principio de verdad material e impulso de oficio en la oportunidad de formulación de los reparos y en la etapa de su confirmación por el Tribunal Fiscal. I.1.4 Sentencia de vista La Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la sentencia de vista mediante resolución número treinta y cuatro, del catorce de marzo de dos mil veintitrés, que confirma la sentencia emitida con la resolución número ocho, de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (foja ciento noventa y uno del expediente principal), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Fundamentos:** La Sala revisora fundamenta su fallo principalmente en lo siguiente: a) Mediante la Sentencia de Casación Nº 10459-2020 Lima, emitida el ocho de noviembre de dos mil veintidós por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa y nula la sentencia de vista en cuestión, señalando que no se había dado cumplimiento a la primera sentencia de casación, con lo cual se señala que este superior colegiado debe emitir un nuevo pronunciamiento (debida motivación, falta de respuesta a todos los argumentos de la demanda). Por tanto, la Sala Superior señala que corresponde emitir una nueva sentencia de acuerdo al análisis efectuado por la Sala Suprema. Para lo cual, se tendrá en cuenta los agravios expuestos por la apelante y los medios probatorios aportados, ello dentro del contexto de los principios de congruencia procesal, doble instancia y autonomía e independencia judicial. b) La sentencia de vista sostiene que el Requerimiento Nº 0621060001326, emitido dentro de un procedimiento de fiscalización, sí tiene la calidad de acto administrativo en la medida que cumple con los cinco elementos que establece la Ley Nº 27444. De esta manera, se aprecia que el requerimiento en mención constituye un acto de trámite, ya que es un acto preparatorio que se ha emitido dentro de un procedimiento de fiscalización, el cual culmina con un acto definitivo. Asimismo, dicho acto establecería obligaciones, puesto que solicitó a la empresa que presente y/o exhiba documentación y/o información. En ese sentido, la falta de cumplimiento por parte de la empresa podría ocasionar que esta incurra en la comisión de una infracción susceptible de sanción, es decir, genera efectos jurídicos en los contribuyentes. En aplicación de los dispuesto en el artículo VII del título preliminar de la Ley Nº 27444, la Circular Nº 28-2001 constituye un elemento interno que, si bien fija parámetros para una adecuada organización del procedimiento a seguir, tampoco puede ser tomado como una norma de rango legal. Ello porque la circular en mención no posee dicha característica al ser una norma de menor jerarquía que la citada ley, la cual sí es aplicable de manera supletoria y no atenta contra lo dispuesto en el artículo 109 del Código Tributario, que regula los supuestos de nulidad. De otro lado, fundamenta que la circular no es aplicable al caso en concreto porque carece de jerarquía normativa legal; adicionalmente, mediante dicha circular solo se ha establecido el nombre y la firma del auditor y supervisor para los anexos del requerimiento, empero no para el requerimiento primigenio. Al analizar el Requerimiento Nº 0621060001326, la sentencia impugnada aprecia que, éste consigna el sello y firma de María Flores Santa Cruz, quien tiene el cargo de jefa de la División de Auditoría de la Intendencia Regional La Libertad, de lo cual se colige que es la responsable del área que tiene encargada dicha fiscalización. Por otro lado, si bien dicho documento no indica el auditor (o auditores) responsables de dicha diligencia, también es cierto que fue recibido en la misma fecha y a la misma hora que la Carta de Presentación Nº 060061139530-01 (veinte de setiembre

de dos mil seis a horas tres y cincuenta y seis de la tarde), conforme se puede apreciar en los acuses de notificación de dichos documentos (fojas dos mil trescientos noventa y siete del expediente administrativo). Refiere la sentencia de vista que, al analizar la Circular Nº 028-2001, se puede apreciar que en ningún extremo indica, de manera literal, que el requerimiento primigenio deba contener el nombre y firma del auditor fiscal que realizaría las diligencias propias del procedimiento de fiscalización. Por el contrario, se entiende que esto recién es exigido para el segundo y siguientes requerimientos y los anexos de estos. c) Sostiene la sentencia de vista que no se aprecia que se le haya causado perjuicio a la empresa, ya que esta ejerció plenamente su derecho de defensa durante el procedimiento de fiscalización, al ofrecer medios probatorios, los cuales fueron valorados, y obtuvo una respuesta fundada en derecho. d) En el vigésimo tercer considerando, la sentencia de vista da cuenta de los reparos al impuesto a la renta del ejercicio dos mil tres: **i)** depreciación no acreditada documentariamente y cargada a resultados; **ii)** fletes cargados al gasto cuando debieron formar parte del costo de existencias finales; **iii)** gastos por servicios de consultoría no acreditados; **iv)** gastos de ventas - contratos no acreditados; **v)** gastos por comisión de ventas - exportaciones no acreditadas; y **vi)** gastos de ventas - exterior no acreditados; y estima que los citados reparos se encuentran arreglados a derecho. e) En mérito a lo anteriormente expuesto, la sentencia de vista emite un pronunciamiento con el cual decide confirmar la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda. **I.2 Recurso de casación** El veinte de abril de dos mil veintitrés, la empresa **Danper Trujillo Sociedad Anónima Cerrada** interpone recurso de casación (fojas ochocientos noventa y uno del expediente principal), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y cuatro, del catorce de marzo de dos mil veintitrés (fojas ochocientos cincuenta y nueve del expediente principal). Sustenta su recurso en las siguientes infracciones: **b) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado**, puesto que incurrió en una motivación inexistente, ya que no se pronunció respecto a la solicitud de aplicar el precedente vinculante recaído en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC, en relación con la inaplicación de intereses moratorios generados fuera del plazo para resolver los recursos impugnatorios administrativos Sostiene que, solicitó expresamente a la Sala Superior que aplicase el precedente vinculante antes anotado, sin embargo, en todo el desarrollo de la sentencia de vista, la Sala superior no realizó ninguna observación, argumentación y/o decisión respecto a lo solicitado. **l) Inaplicación del artículo VI del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, así como la primera disposición Final de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional** Sostiene que, la Sala Superior desconoció su obligación de aplicar el precedente vinculante recaído en el Expediente Nº 3525-2021-PA/TC, el cual establece la inaplicación de los intereses moratorios devengados durante el tiempo en exceso en el que la administración tributaria y el tribunal fiscal hayan incurrido al resolver los respectivos recursos impugnatorios del procedimiento contencioso tributario. Agrega que, cumplió con solicitar a la Sala Superior el seis de marzo de dos mil veintitrés que aplique el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Fiscal se excedió en seis años, siete meses y tres días en resolver el recurso de apelación presentado por la compañía. **m) Infracción normativa por inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.** Sustenta que, se desconoció la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema referente a la inaplicación de la regla de capitalización de intereses moratorios, la misma que ha sido confirmada y declarada precedente vinculante a través de la sentencia de Casación Nº 6619-2021 LIMA. Agrega que no corresponde la capitalización de intereses, cuya aplicación implicaría un incremento excesivo de la deuda tributaria y, por ende, la transgresión a los principios de no confiscatoriedad y razonabilidad. **Auto calificatorio** Mediante auto calificatorio de fecha veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la Quinta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema declara **procedente** el recurso de casación de la empresa recurrente respecto de las infracciones normativas señaladas en el acápite anterior (fojas doscientos cincuenta y cinco del cuaderno de casación). **II. CONSIDERANDO Primero: Delimitación del petitorio 1.1** Es materia de pronunciamiento de fondo el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Danper Trujillo S.A.C. contra la sentencia de vista emitida en segunda instancia, que, poniendo fin al proceso, confirma la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda. **1.2** La empresa recurrente trae a casación las siguientes infracciones normativas: - Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado - Inaplicación del artículo VI del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, así como de la primera disposición final de la Ley Nº 28301 - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional - Infracción normativa por inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial **1.3** En tal sentido, en el presente caso, la línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver la causal procesal, examinando si la sentencia impugnada ha incurrido en infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, los mismos que comprenden los derechos al debido proceso y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Segundo: Sobre la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución **2.1** La empresa recurrente manifiesta, en suma, que la sentencia de vista incurrió en una motivación inexistente, ya que no se pronunció respecto a la solicitud de aplicar el precedente vinculante recaído en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC, en relación con la inaplicación de intereses moratorios generados fuera del plazo para resolver los recursos impugnatorios administrativos. Sostiene que solicitó expresamente a la Sala Superior que aplique el precedente vinculante antes anotado; sin embargo, en todo el desarrollo de la sentencia de vista no realizó ninguna observación, argumentación y/o decisión respecto a lo solicitado. **2.2** En el presente caso, se advierte que la causal denunciada se orienta a uno de los elementos esenciales del debido proceso, como es el derecho fundamental a la motivación de las decisiones judiciales, reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución[1], acogido en tratados sobre derechos humanos, e incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ha obtenido interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política del Estado), que establece que es un derecho que permite verificar la materialización del derecho a ser oído y que la argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos[2], que es un derecho a ser juzgado por las razones que el derecho suministra: […] la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática […]. **2.3** Asimismo, observamos que la norma procesal denunciada por la recurrente está referida al principio de juez y derecho, principio vinculado al derecho fundamental a la motivación de la decisión judicial (protegida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución y reconocido como derecho fundamental en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos), que obliga al juez a pronunciarse en congruencia con el petitorio de la demanda, proscribiendo en el proceso contencioso administrativo —por aplicación supletoria— los pronunciamientos infra y extra petita: **Juez y Derecho.- Artículo VII.-** El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. **2.4** Asimismo, conforme al criterio sostenido en la Sentencia de Casación Nº 2850-2021 Lima, emitida el diez de enero de dos mil veintitrés, por esta misma Sala Suprema, se ha dejado señalado que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones el **principio de congruencia**, establecido en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII del título preliminar del mismo cuerpo normativo, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud de lo cual los jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación, entonces, de pronunciarse sobre las alegaciones

expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, la mencionada sentencia de casación explica que la observancia del principio de congruencia implica que en toda resolución judicial exista **i)** coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa), y **ii)** armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 11 de la Sentencia Nº 1230-2003-PCH/TC. **2.5** Para determinar si la sentencia de vista ha incurrido en motivación inexistente, el examen a efectuarse debe partir necesariamente de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la sentencia impugnada, los que se pasa a detallar y analizar. **2.5.1** La sentencia de vista, en el acápite "II. Fundamentos del recurso de apelación", expresa los fundamentos de los agravios invocados por la empresa apelante, los mismos que son los siguientes: **II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:** El demandante **DANPER TRUJILLO S.A.C.** interpone recurso de apelación obrante de folios 293 a 356 del EP, a fin de que se declare nula y/o se revoque. Señala que la sentencia apelada adolece, concretamente, de los siguientes errores. **Agravios nulificantes:** 2.1.- La sentencia apelada adolece de una motivación aparente por concluir que el requerimiento emitido dentro de un procedimiento de fiscalización no tiene la calidad de un acto administrativo, basándose en premisas erróneas. 2.2.- La sentencia apelada adolece de una motivación insuficiente porque no analiza si el Tribunal Fiscal merituó debidamente los hechos y las pruebas aportadas, sin analizar si se violentó el debido proceso, valoración conjunta de medios probatorios y verdad material. **Agravios revocatorios:** 2.3.- La sentencia apelada afirma, erróneamente, que el requerimiento no constituye un acto administrativo porque no produce efectos jurídicos directos a la empresa, sí se encuentra subordinado a la emisión de un acto posterior y por no ser pasible de impugnación. 2.4.- La sentencia apelada vulnera el principio de legalidad por realizar una interpretación restrictiva del artículo 1 de la Ley Nº 27444, respecto al acto administrativo. 2.5.- El requerimiento en mención si es un acto administrativo y fue expedido sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido, por no considerar que el requerimiento se emitió si consignar la identificación ni la firma del funcionario de auditoría. 2.6.- La sentencia apelada convalida la nulidad en la que incurren los reparos efectuados, los cuales a su vez fueron convalidados por el Tribunal Fiscal, en base a una indebida valoración de los medios probatorios, falta al debido procedimiento y al principio de causalidad". **2.5.2** Cabe mencionar que los citados agravios fueron absueltos por la sentencia recurrida, conforme se advierte del sétimo al décimo octavo considerando, y que arribó a la conclusión de que **i)** el Requerimiento Nº 0621060001326, emitido dentro de un procedimiento de fiscalización, sí tiene la calidad de acto administrativo; **ii)** la Circular Nº 28-2001 no es aplicable al caso en concreto porque carece de jerarquía normativa legal, siendo que adicionalmente solo se ha establecido el nombre y la firma del auditor y supervisor para los anexos del requerimiento, empero no para el requerimiento primigenio; **iii)** no se aprecia que se le haya causado perjuicio a la empresa, ya que esta ejerció plenamente su derecho de defensa durante el procedimiento de fiscalización al haber ofrecido medios probatorios, los mismos que se valoraron dentro del contexto procedimental aplicable, se le permitió interponer medios impugnatorios y obtuvo una respuesta fundada en derecho, por lo que no resulta razonable considerar que dicho requerimiento adolezca de causal de nulidad. **2.5.3** Conforme se ha examinado, no se observa que, en el petitorio de segunda instancia, la recurrente hubiese formulado agravio alguno referido a aplicar el precedente vinculante recaído en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC, en relación con la inaplicación de intereses moratorios generados fuera del plazo para resolver los recursos impugnatorios administrativos, por lo que no corresponde amparar la causal denunciada por el recurso extraordinario de la empresa recurrente. **2.5.4** Asimismo, al revisar la pretensiones principal y accesoria de la demanda, las mismas se encuentran referidas a que se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02206-2-2018, y a que se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 0650140000818/SUNAT, así como la Resolución de Determinación Nº 062-003-0001024 y la Resolución de Multa Nº 062-002-001541, giradas por impuesto a la renta del ejercicio dos mil tres y por la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. En tal sentido, no se aprecia que, en el petitorio de la demanda, la empresa recurrente haya invocado la aplicación del precedente vinculante recaído en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC, en relación con la inaplicación de intereses moratorios generados fuera del plazo para resolver los recursos impugnatorios administrativos. En consecuencia, al efectuar el control del debido proceso de la sentencia de vista, en la presente controversia, se advierte que la recurrida no dejó incontestados los agravios formulados por la empresa al atenderlos en el sétimo al décimo octavo considerando; además, entre ellos no había invocación alguna para la aplicación del precedente constitucional vinculante recaído en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC. En consecuencia, advertimos que no se ha producido vulneración del derecho a la debida motivación de la recurrente ni a su derecho al debido proceso, ni se ha vulnerado el principio de congruencia procesal. Por ende, corresponde declarar **infundado** el recurso extraordinario en este extremo. **Tercero: Sobre las infracciones normativas sobre inaplicación del artículo VI del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, así como de la primera disposición Final de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y sobre la infracción normativa por inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 3.1** Con respecto a estas causales denunciadas, la empresa recurrente aduce, en esencia, que mediante escrito del seis de marzo de dos mil veintitrés, solicitó que se aplique el precedente vinculante emitido por sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 3525-2021-PA/TC, pues el Tribunal Fiscal se excedió en seis años, siete meses y tres días en resolver el recurso de apelación presentado; con lo cual la sentencia omitió pronunciarse sobre la inaplicación de los intereses moratorios devengados durante el tiempo en exceso que la administración tributaria y el Tribunal Fiscal se tomaron para resolver los respectivos recursos impugnatorios del procedimiento contencioso-tributario. Agrega la empresa recurrente que la sentencia de vista desconoció la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema, referente a la inaplicación de la regla de capitalización de intereses moratorios, cuya aplicación implicaría un incremento excesivo de la deuda tributaria y, por ende, la transgresión de los principios de no confiscatoriedad y razonabilidad, doctrina que ha sido confirmada y declarada precedente judicial vinculante mediante la sentencia de Casación Nº 6619-2021 Lima. **3.2** Sobre el particular, cabe señalar que esta Sala Suprema debe emitir pronunciamiento con arreglo al mencionado principio de congruencia, establecido en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII del título preliminar del mismo cuerpo normativo, esto es, que no corresponde emitir pronunciamiento respecto a la aplicación del precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 3525-2021-PA/TC, debido a la demora del Tribunal Fiscal en resolver su recurso de apelación en la etapa administrativa, ni sobre la inaplicación de la regla de capitalización de intereses moratorios, pues dichos aspectos no han sido parte de las pretensiones de la demanda ni del petitorio de segunda instancia al formular el respectivo recurso de apelación contra la sentencia emitida en primera instancia. En consecuencia, corresponde que la empresa recurrente haga valer los precedentes que invoca en las instancias correspondientes, en vía de cumplimiento de la presente sentencia casatoria. Por lo tanto, no corresponde amparar las causales denunciadas y, por ende, el recurso extraordinario de la recurrente deviene **infundado**. **DECISIÓN** Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 398 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa **DANPER TRUJILLO S.A.C.**, mediante escrito del veinte de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta

y cuatro, del catorce de marzo de dos mil veintitrés, que confirma la sentencia emitida con resolución número ocho, del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; en los seguidos por la empresa **DANPER TRUJILLO S.A.C.** contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre acción contencioso administrativa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Cabello Matamala**. SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, **CABELLO MATAMALA,** PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR.

---

[1] **Constitución Política del Perú**
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

[2] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009). Caso Tristán Donoso vs. Panamá; párrafo 153.

C-2245460-4

CASACIÓN Nº 50697-2022 LIMA

TEMA: DRAWBACK
SUMILLA: De conformidad con el precedente vinculante contenido en la sentencia de Casación Nº 466-2022, del once de mayo de dos mil veintitrés, esta Sala Suprema considera que resulta pertinente aplicar a la presente controversia, las reglas jurisprudenciales fijadas en este:
"6.5.1. Se reconoce que, ante el supuesto de que el Despachador Aduanero incurra en error omitiendo incluir el referido Código 13 cuando numere la Declaración Única de Aduanas-DUA, tratándose de una formalidad prevista normativamente para acogerse al beneficio aduanero Drawback, se puede subsanar o superar esta omisión si, en cualquier apartado de este mismo documento, es posible advertir alguna indicación del exportador sobre su voluntad de acogerse al procedimiento instaurado para solicitar la restitución de tales derechos arancelarios.
6.5.2. Se puede considerar como una forma de manifestación de voluntad de acogerse al régimen aduanero de Drawback, la consignada en las facturas comerciales que sustentan la Declaración Única de Aduanas, para cumplir con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento de Resituación Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF (…)".
PALABRAS CLAVE: acogimiento al Drawback, interpretación errónea, rectificación de DAM

Lima, ocho de agosto de dos mil veintitrés

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS La causa número cincuenta mil seiscientos noventa y siete, guion, dos mil veintidós, Lima; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada por los señores Jueces Supremos Burneo Bermejo (Presidente), Bustamante Zegarra, Cabello Matamala, Delgado Aybar y Tovar Buendía, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. ASUNTO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del dieciocho de octubre de dos mil veintidós (fojas doscientos treinta y seis del Expediente Judicial Electrónico, en adelante EJE), contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número once del veintidós de septiembre de dos mil veintidós (fojas doscientos dieciséis del EJE), que revocó la sentencia apelada emitida mediante resolución número siete del uno de junio de dos mil veintidós (fojas ciento sesenta y tres del EJE), que declaró fundada la demanda; y, reformándola, la declaró infundada en todos sus extremos. **I.1. ANTECEDENTES I.1.1 DEMANDA:** Con fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT** mediante su Procuraduría Pública interpone demanda contenciosa administrativa (fojas tres del EJE) contra el TRIBUNAL FISCAL y FUNDICIÓN CALLAO S.A. formulando la siguiente pretensión: **PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal – RTF Nº 03511-A-2021 de fecha veintiuno de abril dos mil veintiuno, que revoca la Notificación 118 3D6200-2019-010410 emitida el trece de setiembre de do mil diecinueve, por la Intendencia de Aduanera Marítima del Callao. **PRETENSIÓN ACCESORIA:** Solicita el reenvío al Tribunal Fiscal para que vuelva a resolver y declare improcedente la solicitud de rectificación de la DAM Nº 118-2019-41-78175. La demandante SUNAT sustenta su demanda en los siguientes fundamentos: Señala que mediante la solicitud presentada por la demandada Fundición Callao S.A ante la Administración Aduanera, a través de su agente de aduana, solicitó la rectificación de la DAM Nº 118-2019-41-78175 a fin de que incluya en el casillero 7.28, el "Código Nº 13 Restitución de Derechos Arancelarios". Sin embargo, lo solicitado no era propiamente una rectificación de error, sino una omisión ya que el añadido de un código era para acogerse al régimen de restitución de derechos arancelarios. Es por ello que la Aduana deniega el pedido, señalando que siendo la pretensión el acogimiento al régimen de restitución de derechos arancelarios, la adición del código en la DAM no procedía por cuanto debió hacerlo al momento de numerarla. El Tribunal Fiscal ha incurrido en error por cuanto dejó de considerar que la "rectificación" de la DUA, no era tal sino una adición de código; que tal adición tenía como finalidad acogerse al beneficio tributario-aduanero de restitución simplificada de derechos arancelarios; que tal beneficio está regulado en una norma especial que establece la forma de acogerse al beneficio tributario aduanero de restitución simplificada de derechos arancelarios, por lo cual no correspondía aplicar la norma general, ni el criterio jurisprudencial lo que causa perjuicio al Estado. El Tribunal Fiscal no ha autorizado propiamente una "rectificación" de error, sino ha subsanado una "omisión" expresamente establecida como requisito para acogerse al beneficio tributario-aduanero; quedando evidenciado con ello que lo decidido no fue propiamente la rectificación de un error en la declaración, sino la concesión de un beneficio tributario aduanero. Así, también el Tribunal Fiscal, omite hacer mención a la norma que regula la forma de expresar la voluntad para acogerse al beneficio establecido por el Decreto Supremo 104-95-EF.Tal omisión implica la nulidad de lo resuelto, dado que no sólo hay una norma especial que regula el procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios, sino que esta norma regula de forma expresa la forma de acogerse al beneficio tributario; y, sus normas complementarias, la forma como se rectifica errores vinculados el procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios. La Administración Tributaria estableció dos procedimientos complementarios, el Procedimiento General de Exportación Definitiva INTA-PG.02 (versión 6) aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 137-2009/SUNAT/A (modificado por Resolución de Intendencia Nacional Nº 03-2016/SUNAT/5F0000, procedimiento cuya nueva codificación como DESPA PG.02 fue aprobada por Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000), el Procedimiento General de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios INTA-PG.07 (versión 4), aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 118- 2014/SUNAT/300000, (modificado por la Resolución de Intendencia Nacional Nº 04-2016/SUNAT/5F0000, procedimiento cuya nueva codificación como DESPAPG. 07 fue aprobada por Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000). El artículo 7 del Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, dispone que el exportador expresa su voluntad de acogerse al beneficio del "Procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios" en la Declaración para exportar. Si bien es cierto que para su formulación se presentan otros documentos (entre ellos, la factura comercial), la norma es clara al disponer que el exportador expresa su voluntad de acogerse al beneficio del "Procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios" en la Declaración para exportar, no en otro documento. El Tribunal Constitucional señala en la STC 6567-2006-PA/TC que los beneficios tributarios se aplican e interpretan en forma restrictiva sólo a las personas y supuestos expresamente previstos en Ley no cabe su concesión ni su extensión vía jurisprudencia; así también mediante Casación Nº 17806-2015-Lima se asumió la posición que expresa la Administración Aduanera señalando que la empresa demandante no cumplió con expresar su acogimiento al mencionado régimen aduanero al momento de la numeración de la DUA, incluyendo el Código 13. El Tribunal Fiscal ha actuado en forma contraria a lo dispuesto por la Norma VIII del Código Tributario, pues no sólo ha omitido aplicar la normatividad especial para la concesión del beneficio tributario aduanero de restitución de derechos arancelarios sino además ha ordenado su acogimiento por una vía distinta de la

establecida en Ley. El Tribunal Fiscal causa perjuicio a la Administración Aduanera al no haberse consignado el Código 13 y tampoco haberse manifestado la voluntad de acogerse al Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios en la DAM. I.1.2 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia emitida mediante resolución número siete de fecha primero de junio de dos mil veintidós (fojas ciento sesenta y tres del EJE) que declara **fundada la demanda. Fundamento** a) El juzgado analiza la normativa aduanera aplicable arribando a la conclusión de que el momento para acogerse voluntariamente al beneficio del Procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios es el momento de la transmisión de la declaración de exportación, mas no cuando esta se haya regularizado, no dando lugar la norma a otro documento y momento para el acogimiento voluntario de dicho derecho de restitución de derecho arancelario. b) La rectificación de la DAM a fin que se incluya el código 13, sólo procede que se analice la información que consta en la DAM, más no aquella que se acompaña a la misma como la que registra la factura comercial, lo cual no resulta ajustado a Derecho pues se trata de un supuesto no previsto en la normatividad. c) En el caso de autos, de los actuados se advierte que la empresa exportadora no expresó su voluntad de acogerse al mencionado régimen aduanero al momento de la numeración de la DAM 40 (DAM provisional) ni en la DAM 41 (DAM definitiva), por tanto, se evidencia que incumplió con las disposiciones previstas tanto en el artículo 7° del Decreto Supremo 104-95-EF como en los Procedimientos Generales DESPA-PG.02 (versión 6) y DESPA-PG.07 (versión 4), que establecen la forma válida de manifestar la voluntad de acogimiento al Drawback. d) Concluye que No procede consignarse en forma posterior en una Declaración Única de Mercancías el Código 13 referente al Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelario, basándose en una factura en el que se manifestó la voluntad de acogimiento a dicha restitución, en razón a que no constituye el momento ni el documento en el que se debe consignar dicho código. I.1.3 SENTENCIA DE VISTA La Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la sentencia de vista mediante resolución número once de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós (fojas dos cientos dieciséis del EJE), que **revoca** la sentencia apelada expedida mediante Resolución Nº siete de fecha primero de junio de dos mil veintidós (fojas ciento sesenta y tres del EJE), que declaró fundada la demanda en todos sus extremos, y, **reformándola** la declara **infundada**. **Fundamentos** a) El Procedimiento General de Exportación Definitiva DESPA-PG.02 versión 6, en la parte VII Descripción, numeral 72 segundo párrafo consigna textualmente que "La rectificación del código del régimen de Reposición con Franquicia Arancelaria o del procedimiento simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios debe ser solicitada mediante expediente, y sólo procede siempre que en la numeración de la declaración conste alguna expresión que manifieste la voluntad de acogerse a dicho régimen o procedimiento."; sin embargo se debe indicar que, de acuerdo al Principio de Especialidad, y lo antes analizado, el Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, que versa únicamente sobre el "Drawback"; no se ha establecido, dentro de sus requisitos, que sea necesario señalar el Código 13 para acogerse a la restitución de derechos arancelarios. En cuanto a ello, cabe mencionar que el Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios o llamado Reglamento del Drawback, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF, señala dentro de sus artículos 6 y 7, señala los requisitos necesarios para gozar de dicho beneficio arancelario, siendo los más resaltantes: **i)** Las solicitudes de restitución deben ser numeradas dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles computados desde la fecha del término de embarque y **ii)** Los exportadores indiquen en la Declaración para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento. b) La Sala revisora entiende que existe la posibilidad de enmienda cuando las declaraciones no han sido formuladas de acuerdo a los documentos que las sustentan, lo cual ocurre en el presente caso por cuanto se desprende de la Factura Electrónica F015-0000211 que sustenta la DAM el haberse consignado "RESTITUCION DE DERECHOS DE ADUANA D.S. 104-95-EF", y siendo que la declaración no ha sido formulada de acuerdo a los documentos que la sustentan, corresponde aplicarse la rectificación. c) El colegiado de segunda instancia considera que la norma aplicable era la del Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios que versa únicamente sobre el "Drawback"; en el cual no se ha establecido, dentro de sus requisitos, sea necesario señalar el mencionado código para acogerse al régimen "Drawback", y por Principio de Jerarquía, por tanto, el anotado reglamento prevalece sobre la Resolución emitida por la Administración. **I.2 RECURSO DE CASACIÓN:** Mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Sunat a través de su Procuraduría Pública, interpone recurso de casación (fojas doscientos treinta y seis del EJE), sustenta su recurso en las siguientes infracciones normativas: a) **Interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 104-95-EF, Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios.** Señala que, para la Sala Superior, la consignación del código 13 en la declaración aduanera no es un requerimiento válido porque no se encuentra regulado en el acotado reglamento. Empero, dicha interpretación es totalmente incorrecta, ya que, según la propia norma, la manifestación de voluntad para acogerse al procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios se expresa únicamente en la declaración para exportar, esto es, no puede asumirse ni interpretarse que dicho requisito se habría cumplido con la expresión que consta en la factura comercial. Añade que, haciéndose referencia a la norma reglamentaria, en la sentencia de vista se ha mencionado que uno de los requisitos para acogerse al beneficio consiste en que los exportadores indiquen en la declaración para exportar la voluntad de tal acogimiento, lo cual ─considerando que la declaración aduanera es un documento electrónico y como tal debe contener de forma expresa la manifestación de voluntad para el acogimiento al beneficio─ puede realizarse con la consignación del código 13 o, como se indican en el Procedimiento General de Exportación Definitiva – INTA-PG.02 y el Procedimiento General de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios – INTA-PG.07, mediante cualquier otra forma de expresión de dicha voluntad, por ejemplo, expresando: "se acoge a la restitución de derechos arancelarios", "se acoge al Drawback" o "restitución de derechos arancelarios". b) **Omisión de aplicar el numeral 72 del Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02.** Sostiene que la Sala Superior ha omitido aplicar la normativa denunciada, limitándose a señalar que la expresión de voluntad para acogerse al procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios aparece en la factura comercial y no en la declaración aduanera. De esta forma, no ha verificado que, según el numeral 71 del Procedimiento de Exportación Definitiva, el requisito de la manifestación de voluntad para el acogimiento al beneficio no solo se cumple con la consignación del código 13 en la declaración sino con alguna expresión textual que permita entender ello; situación que a su vez es acorde con lo previsto en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 104-95-EF. c) **Ilegal interpretación extensiva del beneficio tributario a supuestos distintos de los señalados en la ley.** Alega que tanto el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF, como el numeral 72 del Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02 son claros y precisos; puesto que, expresamente señalan que el documento en el que se debe expresar la voluntad para acogerse al régimen de Drawback es la declaración aduanera y no la factura comercial. Ello debe interpretarse de forma restrictiva, conforme a la norma VIII del Código Tributario; sin embargo, el Tribunal Fiscal y la Sala Superior han realizado una interpretación extensiva de la norma. Agrega que la sentencia de vista se aparta de la norma legal e implícitamente crea nuevos supuestos para el acogimiento al beneficio aduanero y para los casos de rectificación de errores, lo que contraviene el ordenamiento jurídico vigente, específicamente la precitada norma VIII. **AUTO CALIFICATORIO** Mediante el Auto Calificatorio, de fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, se declara **PROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la Sunat, por las causales señaladas en el acápite anterior (fojas ciento once del cuaderno de casación). **II.- CONSIDERANDO: Primero: Delimitación del petitorio 1.1** Es materia de pronunciamiento de fondo, el recurso de casación interpuesto por el representante de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), contra la sentencia de vista emitida en segunda instancia, que, poniendo fin al proceso, revoca la sentencia apelada, que declara fundada su demanda contencioso administrativa, y, reformándola, la declara infundada. **1.2** La entidad Sunat trae a casación las siguientes infracciones normativas: **a)** Interpretación errónea del Decreto

Supremo Nº 104-95-EF, Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios; **b)** Omisión de aplicar el numeral 72 del Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02.; **c)** Ilegal interpretación extensiva del beneficio tributario a supuestos distintos de los señalados en la ley. c.3 En el presente caso, la línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver las causales materiales deducidas, siendo del caso enfatizar que la naturaleza del recurso de casación es ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que cumple función nomofiláctica por control del derecho. Esto implica que los cuestionamientos en que debe formularse el indicado recurso deben ser de índole jurídica y no fáctica o de revaloración probatoria, con lo cual, se asegura el cumplimiento de los fines de la casación, que son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Segundo: Sobre las infracciones normativas de interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 104-95-EF, Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, de omisión de aplicar el numeral 72 del Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02 y sobre la ilegal interpretación extensiva del beneficio tributario a supuestos distintos de los señalados en la ley. **2.1** La entidad recurrente Sunat aduce principalmente que, la consignación del código 13 en la declaración aduanera no es un requerimiento válido porque no se encuentra regulado en el acotado reglamento. Afirma que dicha interpretación es totalmente incorrecta, ya que, según la propia norma, la manifestación de voluntad para acogerse al procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios se expresa únicamente en la declaración para exportar, esto es, no puede asumirse ni interpretarse que dicho requisito se habría cumplido con la expresión que consta en la factura comercial. **2.1.1** Las infracciones normativas denunciadas por la entidad Sunat corresponde absolverlas en forma conjunta debido a que sus argumentos tienen conexidad respecto del beneficio de restitución de derechos arancelarios. **2.2** Sobre el particular, es pertinente previamente precisar que la causal de incorrecta o errónea interpretación se produce cuando la sala jurisdiccional elige la norma correcta para solucionar la controversia, sin embargo, la interpretación de la misma es errada[1]. Por su parte el autor Manuel Sánchez Palacios sostiene al respecto que: "El Juez ha elegido la norma pertinente, pero se ha equivocado sobre su significado, y por una interpretación defectuosa le da un sentido o alcance que no tiene [2]". **2.3** En esa línea, a fin de establecer si la sentencia de vista ha incurrido en las infracciones normativas denunciadas, se debe partir del texto legal de las disposiciones denunciadas. Así tenemos que: Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF Artículo 7 El artículo 7 del Decreto Supremo Nº 104-95-EF establece que: Para gozar de la restitución de los derechos arancelarios **los exportadores deberán indicar en la Declaración para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento"**. [Énfasis es nuestro] De acuerdo con el citado dispositivo, los exportadores que deseen acogerse al mencionado régimen de restitución de derechos arancelarios (Drawback) deberán consignar en la correspondiente declaración única de aduanas su voluntad de beneficiarse con el mismo; así se reconoce, en principio, que dicho documento constituye el instrumento que permite al exportador canalizar su pedido de acogimiento a dicho régimen aduanero. Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02 Es del caso mencionar que corresponde concordar las normas antes señaladas con las disposiciones del numeral 72, así como los numerales 73 y 75 del literal A. "Tramitación del régimen" del rubro VII "Descripción", del Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.02: VII. DESCRIPCIÓN A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN Numeración de la DUA […] **72.** El declarante puede rectificar (incluir o modificar) vía transmisión electrónica los datos consignados en la DUA (41); tratándose de errores que constituyen infracción, la rectificación está condicionada al previo pago de la multa, debiendo transmitir en el envío de la rectificación el archivo de autoliquidación (DUADOCAS). La rectificación del código del procedimiento simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios debe ser solicitada mediante expediente, y sólo procede siempre que a nivel de serie de la DUA (40) conste alguna expresión que manifieste la voluntad de acogerse a dicho procedimiento. Tratándose de rectificación de los documentos digitalizados, el despachador de aduana la solicita mediante expediente a efecto que el funcionario aduanero le habilite el acceso al sistema para la rectificación del archivo transmitido, situación que le es comunicada al despachador de aduana mediante notificación. **73.** Con posterioridad a la regularización del régimen, la rectificación de los datos consignados en la DUA o de los documentos digitalizados se solicita mediante expediente debidamente sustentado, en los casos que el error constituya infracción se debe adjuntar la autoliquidación de multa debidamente cancelada. De ser conforme, el funcionario aduanero rectifica los datos de la DUA en el SIGAD, tratándose de rectificación de los documentos digitalizados el funcionario aduanero habilita el sistema para que el despachador de aduana transmita la rectificación del documento digitalizado dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. […] **75.** La inclusión o modificación del código del procedimiento simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios con posterioridad a la regularización del régimen, procede siempre que a nivel de serie de la DUA (40) conste alguna expresión que manifieste la voluntad de acogerse a dicho procedimiento. b.4 Luego de citar las disposiciones normativas denunciadas por la entidad recurrente, corresponde acudir a las premisas fácticas fijadas por las instancias de mérito, las mismas que son las siguientes: b.4.1 El doce de septiembre de dos mil diecinueve la codemandada Fundición Callao S.A., presentó la solicitud de rectificación de su Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) (a foja ciento veintiocho del EJE) inclusión del Código 13 en la casilla 7.28 de la serie 1 respecto de la DAM Nº 118-2019-41-078175, acompañando como documento sustentatorio la Factura Electrónica F015-0000211 el B/L y Declaración Jurada. b.4.2 De la revisión de la de la Factura Electrónica F015-0000211 del veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve que ampara la exportación se aprecia que la codemandada ha manifestado su voluntad de acogimiento al régimen aduanero del Drawback mediante la consignación de la expresión: "Restitución de Derechos de Aduana D.S. 104-95-EF". b.4.3 Con fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve La Administración Tributaria, mediante la Notificación Nº 118-3D6200-2019-010410 (fojas ciento veintiséis del EJE), emite pronunciamiento declarando improcedente la solicitud de adicionar el Código 13, por no cumplir con lo establecido el Procedimiento de Exportación DESPA PG.02 versión 6 rubro VII Descripción, numeral 72 segundo párrafo al observarse que en la DAM Nº 118-2019-40-078175, no consta ninguna voluntad de acogerse a dicho régimen o procedimiento. b.4.4 El primero de octubre de dos mil diecinueve con el expediente Nº 118-URD112-2019-586479-9 la codemandada interpone recurso de apelación (a fojas ciento dieciséis del EJE) mediante el cual impugnó la Notificación Nº 118-3D6 200-2019-010410, siendo elevado el al Tribunal Fiscal. b.4.5 El Tribunal Fiscal mediante RTF Nº 03511-A-2021 de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno (fojas noventa y nueve EJE), revoca la Notificación Nº 118-3D6200-2019-010410 emitida por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. La citada RTF es materia de impugnación en el presente proceso judicial. b.5 La sentencia de vista resuelve declarando infundada la demanda, al arribar a la conclusión que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03511-A-2021 de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, no ha incurrido en causal de nulidad, en base a los datos fácticos subsumidos en las premisas normativas antes señaladas, la Sala revisora entiende que existe la posibilidad de enmienda cuando las declaraciones no han sido formuladas de acuerdo a los documentos que las sustentan, lo cual ocurre en el presente caso por cuanto se desprende de la Factura Electrónica F015-0000211 que sustenta la DAM el haberse consignado "RESTITUCION DE DERECHOS DE ADUANA D.S. 104-95-EF", y siendo que la declaración no ha sido formulada de acuerdo a los documentos que la sustentan, corresponde aplicarse la rectificación. Por ello, el colegiado de segunda instancia considera que la norma aplicable era la del Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios que versa únicamente sobre el "Drawback"; en el cual no se ha establecido, dentro de sus requisitos, sea necesario señalar el mencionado código para acogerse al régimen "Drawback", y por Principio de Jerarquía, por tanto, el anotado reglamento prevalece sobre la Resolución emitida por la Administración. b.6 Al realizar la labor interpretativa de las normas denunciadas corresponde tener en consideración la Norma VIII del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, que prevé que al aplicar las normas tributarias podrán usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho; sin embargo, en vía de interpretación, no se podrá crear tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones, ni extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Por lo tanto, la citada norma estableció, como regla general, que cualquier tipo de método de interpretación reconocido por el

derecho puede ser utilizado cuando se apliquen normas de índole tributaria; no obstante, restringe el uso de la interpretación extensiva cuando se pretenda otorgarle a este tipo de normas alcances distintos en cuanto a las personas sobre quienes deban recaer sus efectos o se vislumbren supuestos distintos a aquellos previstos en la norma. b.7 Estando a lo expuesto, es del caso señalar que los citados dispositivos del Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.02, establecen expresamente que resultará procedente la rectificación de la expresión de voluntad del despachador aduanero, vinculada con el acogimiento al procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios (Drawback), únicamente si en la misma declaración única de aduanas consta alguna indicación o expresión que permita dejar constancia de la intención que el importador tiene de beneficiarse con este procedimiento. Es decir, se reconoce que ante el supuesto de que el despachador aduanero incurra en error omitiendo incluir el referido código 13 cuando numere la declaración única de aduanas, tratándose de una formalidad prevista normativamente para acogerse al beneficio aduanero Drawback, es posible subsanar o superar esta omisión si, en cualquier apartado de este mismo documento, es posible advertir alguna indicación del exportador sobre su voluntad de acogerse al procedimiento instaurado para solicitar la restitución de tales derechos arancelarios. b.8 Resulta necesario enfatizar que, esta Sala Suprema en la sentencia emitida en la Casación Nº 21702-2019-Lima del doce de julio de dos mil veintidós, se ha establecido que: b.8.1 Uno de los requisitos indispensables para que se cumpla el procedimiento de restitución de derechos arancelarios es la manifestación de voluntad de acogerse a él; y así lo establece el artículo 7 del Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF. b.8.2 Sobre el particular, resulta importante señalar que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. La Corte Suprema señala que la primera se materializa "cuando se formula oralmente, por escrito o por cualquier otro medio directo", mientras la segunda, "cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia, no pudiendo considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa". b.8.3 Para el caso de autos, con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico, se requiere una manifestación de voluntad expresa, la misma que debe presentarse concretamente en la solicitud para acogerse a este procedimiento. Al respecto, corresponde mencionar que el numeral VI.22 del Procedimiento de Exportación Definitiva y el numeral VII.A.5.b del Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios establecen que se deben adjuntar copias de las facturas como documentos sustentatorios de la restitución. b.8.4 En consecuencia, si las facturas que sustentan la declaración única de aduanas presentan una manifestación de voluntad de acogerse al régimen del Drawback, su omisión en dicha declaración es susceptible de rectificación, toda vez que tal omisión constituye un vicio subsanable, más aún si queda acreditada la existencia de una manifestación de voluntad; es decir, la manifestación de acogerse presentada en las facturas. Con relación a este hecho, el numeral VII.A.72 del Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG-02 exige que conste alguna expresión de voluntad para acogerse al régimen de Drawback. b.8.5 Por ello, en segundo lugar, se advierte que basta con la manifestación de voluntad de acogerse al régimen aduanero de Drawback en las facturas comerciales que sustentan la declaración única de aduanas, para cumplir con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF. b.8.6 Es del caso igualmente necesario concordar las normas denunciadas con lo prescrito por el artículo 76 del Decreto Legislativo Nº 809 - Ley General de Aduanas, que establece lo siguiente: **Artículo 76.** Es el Régimen Aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. b.8.7 También es necesario señalar lo que contiene el Reglamento de Procedimientos de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF: **Artículo 1.** Son beneficiarios del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios las empresas productoras - exportadoras, cuyo costo de producción haya sido incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de materias primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos en la producción del bien exportado, siempre que no exceda de los límites señalados en el presente Decreto. Sin embargo, no se considerarán como materia prima los combustibles o cualquiera otra fuente energética cuando su función sea la de generar calor o energía para la obtención del producto exportado. Tampoco se considerarán materia prima los repuestos y útiles de recambio que se consuman o empleen en la obtención de estos bienes. **Artículo 2**. Los bienes exportados objeto de la restitución simplificada son aquellos en cuya elaboración se utilicen materias primas, insumos, productos intermedios, o partes o piezas importadas cuyo valor CIF o supere el 50% del valor FOB del producto exportado. Para este efecto, se entenderá como valor de los productos exportados el valor FOB del respectivo bien, excluidas las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación, en dólares de los Estados Unidos de América. **Artículo 3.** La tasa de restitución aplicable a los bienes definidos en los artículos precedentes será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOB de exportación de hasta los primeros US$ 20 000 000,00 (Veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América) anuales de exportación de productos por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, monto que podrá ser reajustado de acuerdo a las evaluaciones que realice el Ministerio de Economía y Finanzas. **2.9** La sentencia de vista objeto de control de derecho en sede casatoria fundamenta su decisión en el considerando décimo segundo en el cual explica que el Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, que versa únicamente sobre el "Drawback"; no se ha establecido, dentro de sus requisitos, que sea necesario señalar el Código 13 para acogerse a la restitución de derechos arancelarios. En cuanto a ello, cabe mencionar que el Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios o llamado Reglamento del Drawback, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF, señala dentro de sus artículos 6 y 7, señala los requisitos necesarios para gozar de dicho beneficio arancelario, siendo los más resaltantes: **i)** Las solicitudes de restitución deben ser numeradas dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles computados desde la fecha del término de embarque y **ii)** Los exportadores indiquen en la Declaración para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento. Asimismo, la decisión de la sentencia de vista se fundamenta en el considerando décimo tercero, del cual se advierte que la Sala Revisora entiende que existe la posibilidad de enmienda cuando las declaraciones no han sido formuladas de acuerdo a los documentos que las sustentan, lo cual ocurre en el presente caso por cuanto se desprende de la Factura Electrónica F015-0000211 que sustenta la DAM el haberse consignado "RESTITUCION DE DERECHOS DE ADUANA D.S. 104-95-EF", y siendo que la declaración no ha sido formulada de acuerdo a los documentos que la sustentan, corresponde aplicarse la rectificación. Por ello el colegiado de segunda instancia considera que la norma aplicable era la del Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios que versa únicamente sobre el "Drawback"; en el cual no se ha establecido, dentro de sus requisitos, sea necesario señalar el mencionado código para acogerse al régimen "Drawback", y por Principio de Jerarquía, por tanto, el anotado reglamento prevalece sobre la Resolución emitida por la Administración. En consecuencia, resulta claro que, en la presente controversia, conforme a la base fáctica asentada por las instancias de mérito, la empresa codemandada manifestó su voluntad de acogerse al régimen de restitución de derechos arancelarios (Drawback), en la Factura Electrónica F015-0000211 que sustenta la DAM el haberse consignado "RESTITUCION DE DERECHOS DE ADUANA D.S. 104-95-EF" **2.9.1** Para efectos de emitir pronunciamiento, corresponde tener en consideración que esta Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la Sentencia de Casación Nº 466-2022, del once de mayo de dos mil veintitrés[3], se establecieron los siguientes principios jurisprudenciales, de conformidad con el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS[4]: **"6.5.1.** Se reconoce que, ante el supuesto de que el Despachador Aduanero incurra en error omitiendo incluir el referido Código 13 cuando numere la Declaración Única de Aduanas-DUA, tratándose de una formalidad prevista normativamente para acogerse al beneficio aduanero Drawback, se puede subsanar o superar esta omisión si, en cualquier apartado de este mismo documento, es posible advertir alguna indicación del exportador sobre su voluntad de acogerse al procedimiento instaurado para solicitar la restitución de tales derechos arancelarios. **6.5.2.** Se puede considerar como una forma de manifestación de voluntad de acogerse al régimen aduanero de Drawback, la

consignada en las facturas comerciales que sustentan la Declaración Única de Aduanas, para cumplir con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento de Resituación Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF. **6.5.3.** El Drawback constituye una transferencia de recursos financieros por parte del Estado con el fin de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados, dado que no existe correspondencia entre lo pagado por derechos arancelarios y lo recibido en base en base al porcentaje establecido normativamente del valor FOB de la exportación respectiva". En virtud al citado precedente con carácter vinculante para esta Sala Suprema, resulta pertinente aplicar a la presente controversia, las reglas jurisprudenciales señaladas en los considerandos 6.5.1 y 6.5.2; en consecuencia, procede que la Administración efectúe la rectificación de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2019-41-78175 a fin de que incluya en el casillero 7.28, el "Código Nº 13 Restitución de Derechos Arancelarios", sustentado en la Factura Electrónica F015-0000211 del veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve que ampara la exportación se aprecia que la codemandada ha manifestado su voluntad de acogimiento al régimen aduanero del Drawback mediante la consignación de la expresión: "Restitución de Derechos de Aduana D.S. 104-95-EF". **2.9.2** En mérito a lo anteriormente expuesto, se aprecia que la sentencia de vista acoge el sentido interpretativo expuesto en las reglas jurisprudenciales antes señaladas, de modo que no se advierte que la recurrida haya cometido las infracciones normativas denunciadas por la entidad recurrente Sunat de interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 104-95-EF, Reglamento del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, de omisión de aplicar el numeral 72 del Procedimiento General – Exportación Definitiva, INTA-PG.02 y sobre la ilegal interpretación extensiva del beneficio tributario a supuestos distintos de los señalados en la ley. Por lo tanto, el recurso extraordinario de la entidad recurrente Sunat resulta **infundado**. **DECISIÓN** Por tales consideraciones; de conformidad con el artículo 398 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 31591, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el representante de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mediante escrito del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución número once de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que revoca la sentencia apelada expedida mediante resolución número siete de fecha primero de junio de dos mil veintidós, que declaró fundada la demanda en todos sus extremos, y, reformándola la declara infundada. En los seguidos por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), contra el Tribunal Fiscal y contra la empresa Fundición Callao S.A., sobre acción contenciosa administrativa. **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", conforme a Ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados.- Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Cabello Matamala**. SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, **CABELLO MATAMALA,** DELGADO AYBAR, TOVAR BUENDÍA.

---

1 LINARES SAN ROMAN JUAN JOSÉ
En: https://www.derechoycambiosocial.com/revista013/casacion%20penal.htm

2 SANCHEZ PALACIOS PAIVA, Manuel (1999). El Recurso de Casación Civil. Praxis Cultural Cuzco. S.A. Editores. Lima, 1999, pag. 63.

3 Sentencia publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de junio de 2023.

4 **Artículo 36.- Principios jurisprudenciales.**
Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante.
Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente.
El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.
De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.
(Texto según el artículo único del Decreto Legislativo Nº 1067)

C-2245460-5

CASACIÓN Nº 25455-2023 LIMA

Lima, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso extraordinario de casación presentado por la recurrente **Unión Andina de Cementos S.A.A.** mediante escrito del once de julio de dos mil veintitrés (folios 361 – 371 del EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número quince del veintiséis de junio de dos mil veintitrés (folios 334– 352 del EJE) que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número nueve, del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (folios 351 – 265 del EJE), que declaró infundada la demanda. **SEGUNDO:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que precisa que el Proceso Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concordado con el inciso 1 del artículo 2 del citado texto que dispone que en caso de defecto o deficiencia de la Ley, el Juez debe aplicar los principios del derecho administrativo, y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. En el sentido de lo antes indicado se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales-, como son los sujetos procesales: la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes; la naturaleza de las actuaciones impugnables; las particularidades procesales, como son los requisitos de admisibilidad y procedencia; la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar; la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, y debe prevalecer la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y en específico, de la reciente modificación que ha sufrido por la Ley Nº 31591[2], publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2022, que introdujo, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones respecto del recurso de casación, debemos evaluar si estas son compatibles con la naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo, conforme a lo señala la Primera Disposición Complementaria Final del mencionado Código Procesal. En ese orden, luego del análisis correspondiente, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativas, y en específico, a los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, se considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, que pueden ser tomadas en forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo son: el inciso 1[3] y literal c) del inciso 2[4] del artículo 386[5], así como los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil[6]. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos, estos son: Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386[7] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil introducidos por la Ley Nº 31591, no serán de aplicación por restringir derechos de las partes en este tipo de procesos, además de generar un gran impacto en el interés público (administrados y el estado). **TERCERO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 386 y 391 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una resolución expedida

por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso[8], siempre que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio[9]; **ii)** El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende[10]; **iii)** se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada[11]; **iv)** fue interpuesto dentro del plazo de diez (10) días de notificada a la recurrente con la resolución impugnada[12]; y, **v)** en cuanto a la tasa respectiva[13], no adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de casación, puesto que se encuentra exento del pago del mismo. **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que: **(i)** el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o las razones por las cuales se habría producido el apartamiento inmotivado del precedente judicial; **(ii)** recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de "transferir la queja expresiva de los agravios" y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, "por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse" y porque su estudio "se limita a la existencia del vicio denunciado"; **(iii)** la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye tercera instancia judicial. No es posible revaloración probatoria en sede casatoria; **(iv)** cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho, es decir, lo que se examina es saber si en ella existe argumentación racional conforme al ordenamiento jurídico; **(v)** tales infracciones deben describirse con claridad y precisión, debiéndose señalar que cuando la ley indica que se debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que menciona; y **(vi)** lo que debe discutirse en casación son las razones esenciales que fueron el soporte de la sentencia que se impugna; las motivaciones accesorias resultan intrascendentes en torno a la calificación del recurso. **QUINTO:** En cuanto a la declaración de improcedencia, el artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, el legislador señala que: "1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos." **SEXTO:** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, se verifica que la sentencia de vista materia de impugnación es pasible de ser recurrida vía casación; y en relación al literal c) del inciso 1 del artículo 393 del mismo cuerpo legal, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con impugnar la resolución de primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifica del escrito de apelación del ocho de julio de dos mil veintidós (folios 2992– 3014 del EJE). Infracciones denunciadas por la recurrente **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: 1) Vulneración de las garantías del debido proceso y tutela procesal efectiva Como argumentos que sustentan la referida infracción normativa señala lo siguiente: a) La sentencia de vista resuelve confirmar la apelada convalidando el avocamiento indebido del Juzgado, quien no fundamenta su fallo en relación a lo que es materia controvertida (las multas derivadas de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 2014), sino sobre los indicados pagos a cuenta, que son materia de otro proceso judicial en el expediente número 12139-2018, que ha sido de conocimiento de la misma Sala Superior, en el trámite de apelación de la sentencia de primera instancia, con intervención del mismo Magistrado Ponente en dicho proceso y en el que es materia del Recurso de Casación. Inclusive del cotejo de ambas sentencias (resolución número veintitrés del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno) del expediente número 12139-2018 se evidencia que casi en su totalidad es idéntica a la que es materia del presente recurso de casación, habiendo adicionado algunos considerandos; lo que afecta el debido proceso legal y la tutela procesal efectiva. b) Al no haberse emitido pronunciamiento sobre la materia controvertida previamente fijada en el proceso, aspecto medular, pero mediatizado por la sentencia de la Sala, se pretende justificar el vicio incurrido por la sentencia del Juzgado, que evidentemente vulnera la garantía del debido proceso y la tutela procesal efectiva. 2) Vulneración del Principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las multas Como argumentos que sustentan la infracción normativa señala lo siguiente: a) La recurrente, al tiempo de interponer la demanda invocó a su favor el precedente vinculante contenido en la Casación número 4392-2013-Lima, en relación a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, de los cuales derivó la imposición de las multas (Numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario), materia del proceso. Precisa que en antecedentes de la demanda hizo mención a los referidos pagos a cuenta, para contextualizar el origen de las multas impuestas; siendo inexacto lo señalado por la Sala Superior en la sentencia impugnada (considerando 5.12 página 17 del fallo), en tanto también justifica la omisión del Juzgado de pronunciarse sobre la materia controvertida, pese a la fijación de la misma en la etapa procesal correspondiente; y sin considerar el expediente administrativo actuado como medio de prueba de la demanda, oportunamente admitido. b) La sentencia de vista omite también pronunciarse sobre las multas e invoca sentencias referidas a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, reiterando la vulneración al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, como se verifica de su tenor. c) La Casación número 4392-2013 - Lima resultó aplicable al caso, en tanto ésta estuvo vigente. Sin embargo, la sentencia de vista señala que en reiteradas resoluciones ha afirmado que la Casación número 4392-2013-Lima no establece precedente vinculante sobre los intereses moratorios por la omisión de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, sino sobre la limitación de la interpretación extensiva y restrictiva de disposiciones (considerando 5.9 parte final), incidiendo en materia no controvertida en este proceso. d) Existe jurisprudencia de la Corte Suprema en el mismo sentido y contraria al mismo, debiendo destacar que el precedente vinculante contenido en Casación número 4392-2013-Lima no se aplicó a las multas, según sentencias de Salas Supremas, por ejemplo, en las casaciones números 21033-2019 y 21669-2019, ambas emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. e) En la Casación número 21669-2019 - Lima (páginas 53 - 54 considerando décimo octavo) la Sala Suprema señaló que la Casación número 4392-2013- Lima no analizó el extremo relacionado a las multas vinculadas por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. En consecuencia, si la recurrente realizó los pagos a cuenta teniendo en consideración los coeficientes aplicables al tiempo de su realización, las multas impuestas por presuntamente declarar cifras y datos falsos en la Declaración Jurada mensual de los mismos, no resulta acorde con el principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad; así como la correcta aplicación de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, al hacer interpretación extensiva para establecer sanciones contra la recurrente, en beneficio del Fisco, bajo invocación del deber de contribuir y la capacidad contributiva; en abierta vulneración al principio de no confiscatoriedad, reserva de

ley, además de los principios ya invocados. f) Por lo expuesto, el cobro de las multas vulnera el principio de legalidad, entre otros invocados en el presente. En efecto, la tipificación de la sanción debe considerar la naturaleza de los pagos a cuenta, o anticipos, que se integran en el impuesto anual determinado en la Declaración Jurada correspondiente, regulados como cuotas de una cantidad mayor determinada anualmente y no como financiamiento sin límites. Estos límites se encuentran en la regulación del artículo 85 inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta. g) Resultan aplicables la Primera Disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional número 28301, que establece que los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Análisis de las infracciones normativas planteadas por la recurrente **OCTAVO:** Respecto de la infracción normativa señalada **en el numeral 1) del séptimo considerando**, esta Sala Suprema debe precisar que la recurrente señala como fundamento principal que la sentencia de vista no ha emitido pronunciamiento sobre la materia controvertida previamente fijada en el proceso. Añade que del cotejo de la sentencia de vista con el expediente número 12139-2018 evidencia que casi en su totalidad es idéntica a la que es materia del presente recurso de casación, habiendo adicionado algunos considerandos; lo que afecta el debido proceso legal y la tutela procesal efectiva. Al respecto, la sentencia de vista concluyó que, tratándose de declaraciones de pagos a cuenta, el deudor tributario tiene la obligación de determinarlos y declararlos acorde a ley, en base a información real. Añade que, el error o la confusión del contribuyente detectado en el cálculo y la declaración jurada de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre de 2014, de manera alguna puede convalidar su proceder, para eximirlo de la aplicación de intereses moratorios y sanciones por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre 2014, en caso de que con posterioridad a la declaración jurada original acotada se hubiera modificado la base de cálculo del pago a cuenta o el coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su determinación, por efecto de la presentación de una declaración jurada rectificatoria del ejercicio tributario anterior o de la determinación efectuada por la Administración Tributaria sobre base cierta del ejercicio tributario anterior. En este contexto, esta Sala Suprema observa que los argumentos emitidos por la sentencia de vista están vinculados con la controversia establecida en el caso. Asimismo, la sentencia de vista sustenta las razones por las cuales se generaron los intereses moratorios de los pagos a cuenta del impuesto a la renta enero a diciembre de 2014 así como las multas vinculadas. Asimismo, se advierte que los argumentos que sustentan la infracción normativa procesal son genéricos y contradictorios en cuanto no es posible establecer con claridad y precisión los argumentos mínimos y necesarios que demuestran la infracción normativa del debido proceso y tutela procesal efectiva. Aunado, esta Sala Suprema verifica que los fundamentos que sustentan la vulneración normativa, reiteran los argumentos planteados en la instancia judicial los cuales ya fueron analizados debidamente por las instancias de mérito. Por estas consideraciones, esta Sala Suprema observa que no se cumple con los presupuestos para su procedencia, conforme lo prescriben el numerales 1 y 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591.Por lo tanto, corresponde declarar **improcedente** la infracción normativa de naturaleza procesal. **NOVENO:** Respecto de la infracción normativa señalada **en el numeral 2) del séptimo considerando**, la recurrente señala como fundamento principal que la Casación número 4392-2013 - Lima resultó aplicable al caso, en tanto ésta estuvo vigente. Precisa que, sin embargo, la sentencia de vista señala que en reiteradas resoluciones ha afirmado que la Casación número 4392-2013-Lima no establece precedente vinculante sobre los intereses moratorios por la omisión de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, sino sobre la limitación de la interpretación extensiva y restrictiva de disposiciones (considerando 5.9 parte final), incidiendo en materia no controvertida en este proceso. Al respecto, esta Sala Suprema debe precisar que el precedente vinculante recaído en la Casación número 4392-2013-Lima ha sido dejado sin efecto por esta Sala Suprema mediante Sentencia de Casación Nº 6619-2021 -LIMA, del doce de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, con relación a los intereses moratorios de los pagos a cuenta, esta Sala Suprema en dicho precedente vinculante establece determinadas reglas que constituyen precedentes vinculantes: 5.4.1 Entiéndase que la naturaleza jurídica de los "pagos a cuenta" es la de "obligaciones tributarias", toda vez que se vinculan a la obligación tributaria principal, integrándose finalmente al tributo del cual se derivan. Por tanto, cuentan con reglas propias como son las que se derivan de su nacimiento y devengo, en consecuencia, la generación de intereses responde a dichas reglas propias que los informan. 5.4.2 Corresponde el cobro de intereses moratorios a los pagos a cuenta del impuesto a la renta, cuando los mismos no fueron efectuados en la forma y el íntegro del monto que corresponda en cada oportunidad. Por lo tanto, si el contribuyente no abona el íntegro de los pagos a cuenta dentro de los plazos previstos en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, se generarán intereses moratorios que deberán ser pagados por el contribuyente, salvo que los reparos que le dieron origen hayan sido dejados sin efecto mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme. En efecto, existe una disposición normativa de comprensión literal inmediata que dispone que el interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal (artículo 34 del Código Tributario). Asimismo, las reglas establecidas como precedente en la Casación Nº 4392-2013-Lima, no han fijado como precedente vinculante la suspensión de los intereses moratorios de los pagos a cuenta como consecuencia de una modificación posterior como resultado de un procedimiento de fiscalización o por la propia voluntad del contribuyente (rectificación voluntaria). Por lo tanto, dichas reglas no pueden ser consideradas de obligatorio cumplimiento para el presente caso. En el mismo sentido, se ha pronunciado esta Sala Suprema, en la Sentencia de Casación Nº 6619-2021- Lima: […] Sin embargo, si bien las reglas con carácter de precedente vinculante no se pronuncian directamente sobre los intereses aplicables a la modificación de los pagos a cuenta, la interpretación de la Corte Suprema en el caso concreto fue efectuada sobre la base de dichas reglas, lo que la llevó a concluir que no resultan de aplicación los intereses por la modificación del coeficiente de los pagos a cuenta producida por la presentación de declaraciones rectificatorias del ejercicio precedente. En el mismo sentido se ha pronunciado la Casación Nº 12482-2019 Lima[14], mediante la cual la Corte Suprema ha señalado que la Casación Nº 4392-2013-Lima no es de aplicación a las multas por omisiones a los pagos a cuenta, pues estas se determinan de forma objetiva. En consecuencia, las causales denunciadas por la recurrente deben ser desestimadas dado que contravienen el precedente vinculante indicado, pues devienen **improcedentes**, conforme lo prescribe el numerales 3 y 5 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591. **DÉCIMO:** En cuanto a los demás requisitos de procedencia fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedente las causales contenidas en los considerandos séptimo y décimo de esta resolución. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación presentado por la demandante **Unión Andina de Cementos S.A.A.** mediante escrito del once de julio de dos mil veintitrés (folios 361 – 371 del EJE), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número quince del veintiséis de junio de dos mil veintitrés (folios 334– 352 del EJE) que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número nueve, del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (folios 351 – 265 del EJE), que declaró infundada la demanda; **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por Unión Andina de Cementos S.A.A. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y **el Tribunal Fiscal, sobre** acción contencioso administrativa; y los devolvieron. **Interviene como ponente la señora jueza Delgado Aybar. SS.** YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, **DELGADO AYBAR.**

---

1 Expediente Judicial Electrónico.

2 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

3 "1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso."

4 "2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio."

5 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

[6] Nótese que se aplica solo los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:
Código Procesal Civil
Artículo 391. Interposición y admisión
"1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. El recurso se interpone:
a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.
b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.
4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.
[…].
6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

[7] Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:
Artículo 386. Procedencia
a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;
b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia.

[8] Inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil

[9] Literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

[10] Inciso 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

[11] Literal a) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

[12] Literal b) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

[13] Literal c) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

[14] Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2020.

C-2245460-6

CASACIÓN Nº 14762-2023 LIMA

TEMA: INFRACCIÓN ADUANERA
SUMILLA: En la presente controversia, las instancias de mérito han corroborado que la empresa recurrente no tuvo la diligencia debida con el cuidado, control y traslado de la mercancía consistente en atún congelado a granel, al utilizar volquetes sin tolva como medio de transporte; razón por la cual ha cometido la infracción sancionable con multa, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, que señala: "Cometen infracciones sancionable con multa: […] f) Los almacenes aduaneros cuando: […] 5) se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad".
PALABRAS CLAVE: infracción aduanera, artículo 192 inciso f), numeral 5 de la Ley General de Aduanas, eximente de responsabilidad

Lima, veintisiete de setiembre de dos mil veintitrés

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS La causa número catorce mil setecientos sesenta y dos, guion, dos mil veintitrés Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada por los señores Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), Burneo Bermejo, Cabello Matamala, Pereira Alagón y Delgado Aybar, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. ASUNTO** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la empresa **CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS S.A.**, mediante escrito del once de abril de dos mil veintitrés (fojas ochocientos treinta y tres del expediente judicial electrónico - EJE), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fojas ochocientos quince del EJE), que confirmó la sentencia apelada, expedida por la resolución número nueve, del veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas setecientos veintisiete del EJE), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **I.1. Antecedentes I.1.1 Demanda** Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, **CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS S.A.** interpone demanda contencioso administrativa contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y contra el Tribunal Fiscal, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08276-A-2021, emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. **Pretensión principal**: Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08276-A-2021, que confirma la Resolución de División Nº 046-3K0100/2020-000021, que declaró infundada la reclamación contra la Resolución de División Nº 046 3K0400/2019-00297, que dispone sancionar a la empresa con una multa de US$ 18,543.99 (Dieciocho mil quinientos cuarenta y tres con 99 /100 dólares americanos), por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas. **Pretensión accesoria**: Se deje sin efecto legal la Resolución de División Nº 046 3K0400/2019-00297 y la Resolución de División Nº 046 3K0100/2020-000021. **Fundamentos** La demanda interpuesta se fundamenta principalmente en que: a) La demandante sostiene que su objeto social es brindar el servicio de almacenamiento y depósito, así como servicios de operador logístico y transporte; para ello cuenta con la Resolución Directoral Nº 703-2008-PRODUCE/DGEPP, por la cual se le otorgó la aprobación para que se dedique a la actividad de procesamiento de productos hidrobiológicos en plantas de congelado, de enlatados, y de harina de pescado. Además, mediante la Resolución de Intendencia Nº 046-3K000/2015-000030, se le otorgó la autorización para actuar como almacén aduanero, con el fin de recibir la importación de atún congelado de la embarcación F/V "PANCHITO L". De dicha resolución se extrae lo siguiente: "Que, con fecha programada del veinte de enero de do mil quince, arribará al Puerto de Paita la Nave F/V "PANCHITO L" con la mercancía consistente en quinientas cinco toneladas de producto ATÚN SKIP-BARRILETE CONGELADO A GRANEL, consignados en el B/L Nº 1, Manifiesto 37, y en la Factura Nº 15-017; mercancía que requiere almacenamiento en frio, no contando ninguno de los depósitos temporales de la jurisdicción dicho servicio, en ese sentido, solicitan la ampliación de zona primaria para almacenamiento debido a la naturaleza de la mercancía". b) El producto a almacenar es atún congelado a granel; el propietario de la mercancía TRI MARINE INTERNATIONAL S.DE R.L.; y la carga tiene como fecha de llegada el veinte de enero de do mil quince, como fecha de descarga el veintisiete de enero de dos mil quince, la carga manifestada es 505,000 miles de kilos, la carga desembarcada es 484 toneladas, la carga facturada es 457,186 miles de kilos, y la carga no facturada es 26,814 miles de kilos. c) Refiere que los barcos atuneros no solo capturan atún, sino que la pesca viene acompañada de otras especies, llamada "fauna acompañante". Toda la pesca es ingresada a las bodegas refrigeradas del barco para luego en el puerto ser desembarcada en su totalidad. El Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE contiene la lista de especies consideradas "fauna acompañante" del atún, por lo que se concluye que la cantidad de pesca que trae la embarcación no es toda de atún y en el caso de la carga de la embarcación "Panchito L" no todo es atún, una parte de ella es fauna acompañante y esto en conjunto es lo que conforma el peso de 484,000 miles de kilos. d) Afirma que el 2% como merma a una carga de este tipo es muy poco, al no tomar en cuenta que manipular estos productos en zonas como Piura, cuya temperatura oscila alrededor de 38 grados, genera una pérdida por descongelamiento mayor al 2%. e) Es el numeral 46 de la sección VII-A del Procedimiento INTA-PG.09 (versión 5) el que permitió separar el atún de la fauna acompañante y que no es materia de importación. Es así como se determina la cantidad exacta de atún importado, sobre el que se tiene la obligación de custodiar y rendir cuentas. f) El dueño de la mercancía desembarcada dispuso de la fauna acompañante (lo que no era atún), la misma que fue retirada del almacén aduanero y que consta en los registros que acompaña, perteneciente a la compañía de vigilancia Solmar Security SAC, quien se encarga de la custodia del local y control de entrada y salida de personas, vehículos y bienes del local. En estos registros, se aprecia los vehículos con los que se retiró la fauna acompañante, como por ejemplo el perico, del que no se tenía autorización para almacenar. Empero, no se tiene guías de remisión de la salida de la fauna acompañante, en razón de que el Reglamento de Comprobantes de Pago en su artículo 18 (numeral 1) indica que la guía de remisión la emite el poseedor de los bienes en punto de partida, y, en tal caso, en este punto de partida, la demandante no lo era. g) En la declaración aduanera de mercancías y el Manifiesto Nº 2015-

037, se informa que la fecha de tarja es el veintiocho de enero de dos mil quince y la cantidad de miles de kilos recibidos es 457,186, lo que fue informado a la SUNAT, quien dio la conformidad y permitió la continuidad de los trámites de importación, por lo que está probado que no corresponde la aplicación de multa alguna, al no existir pérdida de mercancía en el traslado de la mercancía, ya que toda la pesca congelada llegó al almacén aduanero y en el proceso de verificación solo se encontró 303,800.00 miles de kilos de atún, que es la especie para la que el almacén aduanero tenía autorización, por lo que no existe falta ni perdida de atún, pues la diferencia corresponde a la fauna acompañante. El almacén aduanero solo tiene autorización para almacenar atún y no otras especies marinas, porque de hacerlo sería pasible de una multa. La prueba de que no existe falta o pérdida de atún es el manifiesto que indica, sin generar observaciones, la cantidad exacta de atún verificado con la tarja h) Señala que registró el ingreso a su almacén de 457,186.00 miles de kilos, por lo que, como resultado del traslado desde el Puerto de Paita - Terminales Portuarios Euroandinos S.A. hacia el almacén aduanero, se produjo pérdida de mercancía, pues se dio un faltante de 26,814.00 (veintiséis mil ochocientos catorce kilos). Empero, de acuerdo al artículo 117 de la Ley General de Aduanas, no existe responsabilidad por la pérdida de mercancía cuando se trate de causa inherente a las mercancías y ello se acredita con el informe técnico elaborado por los ingenieros Hualter Leyton Masías y Darly Benigno Falla Roque, quienes concluyen que el porcentaje razonable de merma del 2% no es aplicable al caso por las características propias de la materia prima, y el porcentaje aplicable al peso del atún congelado debe ser como máximo 10%. I.1.2 Sentencia de primera instancia El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia emitida mediante resolución número nueve, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas setecientos veintisiete del EJE), declara **infundada** la demanda. La sentencia de primera instancia se fundamenta principalmente en lo siguiente: a) El Juzgado señala que, en la presente controversia, se aprecia que si bien sobre la mercancía consistente en atún congelado a granel que llegó al Puerto de Paita se manifestó una cantidad de 505 toneladas, empero el peso de la mercancía registrada por Terminales Portuarios Euroandinos S.A. fue de 484 toneladas, peso que coincide con la inspección realizada por los inspectores del Ministerio de la Producción (484 toneladas). Ahora bien, luego de ser transportada la mercancía al almacén aduanero de la demandante, se registró como ingreso la cantidad de 457,186 kilos, por lo que en el trayecto se extraviaron o perdieron un total de 26,814 kilos, lo que equivale al 5.54% del peso descargado en el punto de llegada. b) El Juzgado precisa que la razón por la cual se sanciona a la demandante es que en su almacén central no se registró los 484,000 kilos de atún congelado a granel sino solo 457,186 kilos, por lo que existía una pérdida de 26,814 kilos. Sobre ello, si bien la demandante refiere que esta pérdida no existe porque corresponde a la "fauna acompañante" y el descarte realizado luego de la selección, no existen medios de prueba (presentados en sede administrativa y en sede judicial) que acrediten de manera fehaciente que efectivamente la mercancía arribada al Puerto de Paita haya consistido no solo en atún a granel sino que este contenía la denominada "fauna acompañante", así como tampoco existe registro de la selección y descarte alegado. Si bien presenta unos reportes emitidos por la empresa de seguridad Solmar Security S.A.C., en los que se da cuenta del retiro del almacén aduanero de lo denominado "descarte", no existen otros medios de prueba que acrediten que ese "descarte" corresponda efectivamente a parte de la mercancía arribada al Puerto de Paita como atún a granel congelado o a la denominada "fauna acompañante", por lo que debe desestimarse lo alegado en este extremo. c) El Juzgado fundamenta que el artículo 117 de la Ley General de Aduanas establece los eximentes de responsabilidad cuando la pérdida de la carga a granel no exceda al 2%, si es que esta pérdida se debe a factores climatológicos, evaporación o volatilidad, y esto ha sido respetado por la administración aduanera en la determinación de la sanción que le corresponde a la demandante por la pérdida de la mercancía. No resulta atendible lo señalado por la demandante en cuanto a que en su caso debe ampliarse este porcentaje al 10%, por cuanto ello vulneraría lo dispuesto por las normas aduaneras. d) El informe técnico aportado por la parte demandante no resulta suficiente para acreditar que efectivamente se realizó una selección de la mercancía de atún a granel congelado o que esta contenía un porcentaje de la denominada "fauna acompañante". Además, el Juzgado sostiene que contiene conclusiones no sobre la base de elementos probatorios sino sobre indicios; por ejemplo, del reporte de ocurrencias del servicio de planta de la demandante, se indica en el informe que durante los días veintiocho a treinta y uno de enero de dos mil quince se retiraron los denominados "descartes" y ante ello se señala lo siguiente: "Por las fechas podemos asumir que se trata del descarte resultado la selección de la materia prima de las embarcaciones "PANCHITO L" y "YELISAVA". TOTAL DESCARTE: 60 3560 Kg.". Es decir, se llega a esta conclusión sin evaluar, con base en documentación cierta, si es que efectivamente lo retirado corresponde a parte de la mercancía arribada en la nave "PANCHITO L". **I.1.3 Sentencia de vista** La Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Lima emite la sentencia de vista con resolución número catorce, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fojas ochocientos quince del EJE), que **confirma** la sentencia apelada, que declaró **infundada** la demanda. La sentencia de vista se fundamenta, principalmente, en lo siguiente: a) La Sala revisora sostiene que, de la revisión de los actuados, se aprecia que la recurrente manifestó que realizó el traslado de la mercancía en volquetes, lo cual se ratifica con el Acta de Inspección Nº 032606, de fecha veintidós de enero de dos mil quince, emitida por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción y con el "Informe Técnico que respalda la necesidad de establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado", el mismo que señala en relación con este aspecto que: "Del análisis técnico del punto 8, el transporte se realiza en volquetes. - Es el medio más idóneo para transportarlo, se aplica en todas partes del mundo, teniendo en cuenta el tramo corto a ser trasladado y la facilidad de carga y descarga de la mercancía, consecuencia la pérdida por descongelamiento debido a la exposición del producto es causa inherente a la mercancía". Sin embargo, según se desprende de la Resolución de División Nº 046 3K0400/2019-00297, "el traslado de las mercancías debió realizarse en unidades de transporte que cuenten con medidas de seguridad; sin embargo, según lo consignado en el Acta de Inspección N' 032606, para el traslado se utilizó volquetes, vehículos que son abiertos en su tolva y no poseen un sistema de refrigeración; en consecuencia, los vehículos utilizados no prestan seguridad a la carga". En tal sentido, la responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción (en el Puerto de Paita - Terminales Portuarios Euroandinos S.A.), así como la falta, pérdida o daño de las mercancías recibidas, recaía en la empresa recurrente, quien de conformidad con el numeral 12 del literal A de la sección VII del Procedimiento General de Manifiesto de Carga - INTA-PG.091 (versión 5), se encontraba obligada a realizar el traslado de la mercancía en vehículos idóneos para tal fin, teniendo en cuenta que se trataba de mercancía congelada, por lo que lo alegado por la recurrente respecto a que no tiene responsabilidad por el faltante de 26,814 kilos de mercancía, dado que se habría producido dicho faltante debido a una causa inherente a la misma, carece de asidero legal, máxime si es la propia recurrente quien al pretender sustentar su postura se basa en el informe técnico mencionado precedentemente, mediante el cual existe un reconocimiento expreso respecto a que los volquetes no son isotérmicos, están descubiertos y sin medidas de seguridad, lo que ha ocasionado que se acelere e incremente la descongelación y evaporación de agua del pescado, lo cual evidencia su falta de diligencia en el transporte de la mercancía, así como su cuidado y control. En consecuencia, se configura la infracción sancionable con multa de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, que señala: "Cometen infracción sancionable con multa: […] f) Los almacenes aduaneros cuando: […] 5) se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad". b) De otro lado, al evaluar el medio probatorio aportado por la parte demandante, la sentencia de vista afirma que: El informe técnico no acredita por sí solo que efectivamente la mercancía que se encontraba bajo su responsabilidad haya contenido "fauna acompañante", máxime si la recurrente no presentó en sede administrativa ni judicial documentación adicional que acredite sus argumentos y la conclusión a la que se arriba en el informe técnico, pese a que le correspondía la carga de la prueba. Aunado a ello, cabe precisar que del Acta de Inspección Nº 032606 emitido por el inspector de la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA del Ministerio de la Producción, se aprecia que se constató la descarga de 484 toneladas de atún congelado a granel, es decir, no se advierte que se hubiese dejado constancia que en dicha descarga exista la presencia de fauna acompañante, por lo que lo alegado por la recurrente carece de sustento. **I.2 Recurso de**

casación Mediante escrito del once de abril de dos mil veintitrés (folios ochocientos treinta y tres del EJE), la empresa demandante **Conservera de las Américas S.A.** interpone recurso de casación contra la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fojas ochocientos quince del EJE), que confirmó la sentencia apelada, contenida en la resolución número nueve, del veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas setecientos veintisiete del EJE), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Sustenta su recurso en la siguiente infracción normativa: **a) Infracción normativa al artículo 117 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053.** Sostiene que la norma citada estuvo vigente a la fecha de ocurridos los hechos, que disponía que los almaceneros aduaneros o los dueños o consignatarios, según corresponda son responsables por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, pérdida o daño de las mercancías recibidas. Señala que la Sala Superior no ha tomado en cuenta al haber establecido que la conducta de la casacionista no encuadra dentro del supuesto de carencia de responsabilidad por causas inherentes a las mercancías (que han ocasionado que el peso de la mercancía descargada inicialmente difiera del peso de la mercancía recibida en el local de la recurrente), a pesar del mérito contenido en el Informe Técnico que respalda la necesidad de establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado, elaborado por los peritos Ing. Hualter Leyton Masías y Darly Benigno Falla Roque, la misma que ha sido evaluado de manera sesgada, antojadiza y subjetiva. Agrega que el Informe Técnico pericial concluye que las mermas se han producido durante todas las operaciones del proceso: descarga, pesado, transporte y almacenamiento temporal. Asimismo, señala que es necesario establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado, en el que se puede considerar un porcentaje de mermas normales y anormales adherentes al tipo de materia prima como es el caso del atún congelado de hasta un 10%, además se debe adicional el +-1.5% porcentaje de error determinado para este caso, producto del pesado en balanzas de características diferentes. Añade que se ha demostrado de manera práctica que el porcentaje de fauna acompañante real (basado en documentación existente) puede oscilar entre 10.66 y 4.13%, este porcentaje obtenido demostraría que lo que establece el Informe Nº 31-2014-SUNAT/5D1000 no es aplicable al presente caso, y que por lo tanto es necesario establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado. **Auto calificatorio** Mediante auto de calificación del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la Quinta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara **procedente** el recurso interpuesto por la empresa demandante, respecto de la causal indicada en el acápite anterior (fojas sesenta y uno del cuaderno de casación). **II. CONSIDERANDOS Primero: Delimitación del petitorio 1.1** Es materia de pronunciamiento de fondo, el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante **Conservera De Las Américas S.A.** contra la sentencia de vista emitida en segunda instancia, que, poniendo fin al proceso, confirma la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda. **1.2** La empresa recurrente trae a casación la siguiente denuncia normativa: **infracción normativa del artículo 117 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053.** c.3 Es del caso enfatizar que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. c.4 Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia, ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni supone la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **Segundo: Sobre la base fáctica asentada por las instancias de mérito 2.1** Las premisas fácticas fijadas por las instancias de mérito son las siguientes: 1.- Mediante Resolución de Intendencia Nº 046 3K0000/2015-000030, del veinte de enero de dos mil quince, se autorizó de manera excepcional la extensión de zona primaria solicitada para las instalaciones del almacén de la recurrente Conservera De las Américas S.A., autorizándose el traslado y almacenamiento temporal de la mercancía consistente en quinientas cinco toneladas de atún congelado a granel, amparadas en la Factura Nº 15-017. En su artículo tercero se señaló que la recurrente se encontraba obligada al cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades de los almacenes aduaneros establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1053 y las demás normas relacionadas de la materia, bajo apercibimiento de aplicársele las sanciones establecidas en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros, siendo también responsable por los daños y perjuicios de las mercancías ingresadas excepcionalmente a su almacén. 2.- Posteriormente, mediante Acta de Inspección Nº 032606, del veintidós de enero de dos mil quince, a la embarcación de nombre “PANCHITO L” emitida por el inspector de la Dirección de Supervisión y Fiscalización - PA del Ministerio de la Producción, se aprecia que se constató la descarga de cuatrocientos ochenta y cuatro toneladas de atún congelado a granel, lo cual se condice con el listado de tickets de salida de la mercancía de la nave “PANCHITO L” emitido por Terminales Portuarios Euroandinos S.A. respecto a la descarga realizada entre los días veintidós al veintisiete de enero de dos ml quince. 3.- Seguidamente, la recurrente, tras realizar el traslado de la mercancía desde Terminales Portuarios Euroandinos S.A. a sus almacenes ubicados en el jirón Los Pescadores Nº 1230 - Zona Industrial de Paita, Piura, realizó el registro de ingreso de carga al almacén, consignando únicamente 457,186 kilos; así se evidenció un faltante de 26,814 kilos, que equivale al 5.54% del peso descargado en el punto de llegada, esto es, cuatrocientos ochenta y cuatro toneladas. 4.- En tal sentido, la SUNAT, mediante la Resolución de División Nº 046 3K0400/2019-000297, debido a la pérdida de mercancía, y al incurrir la recurrente en la infracción tipificada en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, resuelve sancionarla con una multa de dieciocho mil quinientos cuarenta y tres dólares con noventa y nueve centavos (US$ 18,543.99), equivalente a cincuenta y seis mil setenta y siete soles con cero céntimos (S/ 56,077.00), infracción que fue reafirmada mediante la Resolución de División Nº 046 3K0100/2020-000021 y confirmada por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 08276-A-2021. 5.- La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda de la empresa casante. Al haber valorado los actuados en sede administrativa y los medios probatorios ofrecidos, arribó a la conclusión de que se encontraba acreditada la comisión de la infracción imputada y que el informe técnico aportado por la parte demandante no resultaba suficiente para acreditar lo que en él se afirma, debido a que sus conclusiones se basan en indicios. 6.- La sentencia de vista confirma la sentencia apelada, precisando que luego del análisis de lo actuado en sede administrativa y de los medios probatorios ofrecidos por la demandante, la infracción imputada se encuentra acreditada ante la falta de diligencia de la demandante en el traslado de la mercancía, al haber utilizado volquetes y no vehículos que cuenten con sistemas de refrigeración adecuados. **Tercero: Sobre la Infracción normativa del artículo 117 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 3.1** La empresa recurrente argumenta en esencia que la sentencia de vista se fundamenta en que la conducta de la casacionista no encuadra dentro del supuesto de carencia de responsabilidad por causas inherentes a las mercancías (que han ocasionado que el peso de la mercancía descargada inicialmente difiera del peso de la mercancía recibida en el local de la recurrente), a pesar del mérito contenido en el informe técnico que respalda la necesidad de establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado, elaborado por los peritos, ingenieros Hualter Leyton Masias y Darly Benigno Falla Roque, y que ha sido evaluado de manera sesgada, antojadiza y subjetiva. Agrega la empresa recurrente que el informe técnico pericial concluye que las mermas se han producido durante todas las operaciones del proceso: descarga, pesado, transporte y almacenamiento temporal. Asimismo, señala que es necesario establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado. Se puede considerar un porcentaje de mermas normales y anormales, propias del tipo de cada materia prima, que en el caso del atún congelado es de hasta un 10%; además, se debe adicional el +/-1.5% porcentaje de error determinado para este caso, producto del pesado en balanzas de características diferentes. Añade que se ha demostrado de manera práctica que el porcentaje de fauna acompañante real (basado en documentación existente) puede oscilar entre 10.66 y 4.13%; este porcentaje obtenido demostraría que lo que establece el Informe Nº 31-014-SUNAT/5D1000 no es aplicable al presente caso, y que por lo tanto es necesario establecer un porcentaje

de merma aplicable al peso del atún congelado. **3.2** La norma denunciada por la empresa recurrente es el **artículo 117 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, que establece lo siguiente: Artículo 117.- Responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías** Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios, según corresponda, son responsables por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, pérdida o daño de las mercancías recibidas. No existirá responsabilidad en los casos siguientes: […] **c)** Causa inherente a las mercancías; […] Todo traslado de mercancías a un almacén aduanero contemplado en el presente capítulo será efectuado de acuerdo con las condiciones y formalidades establecidas por la Administración Aduanera". **3.3** A fin de determinar si la sentencia de vista ha incurrido en la infracción denunciada, corresponde acudir a sus fundamentos. **3.3.1** En esa línea, tenemos que, en el considerando noveno, la recurrida emite pronunciamiento respecto a que la recurrente no se encuentra en el supuesto invocado sobre eximente de responsabilidad previsto en el inciso b) del citado artículo 117, al estar reconocida y comprobada su falta de diligencia en el traslado de la mercancía (atún congelado a granel), al utilizar medios de transporte que no son isotérmicos, razón por la cual la sentencia impugnada decide confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda. **3.3.2** Al respecto, el considerando noveno (segundo a quinto párrafo) señala lo siguiente: **NOVENO**: […] Al respecto, el acotado **artículo 117° de la Ley General de Aduanas** establece: "Los almacenes aduaneros […] son responsables por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, pérdida o daño de las mercancías recibidas. No existirá responsabilidad en los casos siguientes: […] b) Causa inherente a las mercancías. […] Todo traslado de mercancías a un almacén aduanero contemplado en el presente capitulo será efectuado de acuerdo con las condiciones y formalidades establecidas por la Administración Aduanera". A su vez, el **numeral 12 del literal A de la sección VII del Procedimiento General de Manifiesto de Carga – INTA-PG.091 (versión 5)**, vigente a la fecha de ocurridos los hechos, disponía que: "[…] El traslado de la mercancía del terminal portuario, terminal de carga del transportista aéreo o puesto de control en frontera al almacén aduanero debe realizarse en contenedores precintados o en unidades de transporte que cuenten con las medidas de seguridad que la autoridad aduanera determine". Asimismo, el **artículo 109° de la Ley General de aduanas**, señala: "Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios, según corresponda, son responsables por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, perdida o daño de las mercancías recibidas". En ese contexto normativo, de la revisión de los actuados se advierte que la recurrente, manifestó que realizó el traslado de la mercancía en volquetes, lo cual se ratifica con el Acta de Inspección Nº 032606 de fecha 22 de enero de 2015 emitida por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción y con el "Informe Técnico que respalda la necesidad de establecer un porcentaje de merma aplicable al peso del atún congelado", que señala en relación con este aspecto que: "Del análisis técnico del punto 8, el transporte se realiza en volquetes. - Es el medio más idóneo para transportarlo, se aplica en todas partes del mundo, teniendo en cuenta el tramo corto a ser trasladado y la facilidad de carga y descarga de la mercancía, consecuencia la pérdida por descongelamiento debido a la exposición del producto es causa inherente a la mercancía. Según se señala en cada uno de las Resoluciones de División, el traslado de la mercancía debió realizarse en unidades de transporte con medidas de seguridad..., para el traslado en los 3 casos se utilizó volquetes, vehículos que son abiertos en su tolva y no poseen un sistema de refrigeración, siendo esto último anti técnico por características propias de la materia prima ya que al llegar a muy bajas temperatura se solidifica convirtiéndose en una masa dura difícil de acomodar en compartimientos cerrados". Asimismo, la Administración Tributaria mediante Resolución de División Nº 046 3K0400/2019-00297 señaló: "Que, el traslado de las mercancías debió realizarse en unidades de transporte que cuenten con medidas de seguridad; sin embargo, según lo consignado en el Acta de Inspección N' 032606, para el traslado se utilizó volquetes, vehículos que son abiertos en su tolva y no poseen un sistema de refrigeración; en consecuencia, los vehículos utilizados no prestan seguridad a la carga" (…). En tal sentido, la responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción (en el Puerto de Paita - Terminales Portuarios Euroandinos S.A.), así como la falta, perdida o daño de las mercancías recibidas, recaía sobre la empresa recurrente, quien de conformidad con el numeral 12 del literal A de la sección VII del Procedimiento General de Manifiesto de Carga – INTA-PG.091 (versión 5), se encontraba obligada a realizar el traslado en vehículos idóneos para tal fin, teniendo en cuenta que se trataba de mercancía congelada, por lo que lo alegado por la recurrente respecto a que no tiene responsabilidad por el faltante de 26,814 kilos de mercancía, dado que se habría producido dicho faltante debido a una causa inherente a la misma, carece de asidero legal, máxime si es la propia recurrente quien al pretender sustentar su postura se basa en el Informe Técnico mencionado precedentemente, mediante el cual existe un reconocimiento expreso respecto a que los volquetes no son isotérmicos, están descubiertos y sin medidas de seguridad, lo que ha ocasionado que se acelere e incremente la descongelación y evaporación de agua del pescado, lo cual evidencia su falta de diligencia en el transporte de la mercancía, así como su cuidado y control; en consecuencia, se configura la infracción sancionable con multa de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 del inciso f) del Artículo 192° de la Ley General de Aduanas, que señala "Cometen infracciones sancionable con multa: […] f) Los almacenes aduaneros cuando: […] 5) se evidencie la falta o perdida de las mercancías bajo su responsabilidad". Finalmente, respecto a que el traslado en volquetes resultaría ser el medio más idóneo ya que se aplica en todas partes del mundo, teniendo en cuenta el tramo corto a ser trasladado, la facilidad de carga y descarga de la mercancía, y que el país no cuenta con infraestructura y equipos necesarios y apropiados de descarga, y que las fechas de descarga han coincidido con el verano; cabe precisar que dichos argumentos no hacen más que corroborar que la empresa recurrente no tuvo la diligencia debida con el cuidado, control y traslado de la mercancía, por lo que atendiendo a todo lo expuesto se desestiman los presentes agravios, debiendo confirmarse la recurrida. [Énfasis agregado] **3.3.3** La sentencia de vista observa, en su análisis, que la empresa recurrente incurrió en la infracción sancionable con multa de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, que señala que "cometen infracciones sancionable con multa: […] f) Los almacenes aduaneros cuando: […] 5) se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad", al encontrarse acreditada su falta de diligencia en el transporte de la mercancía, así como respecto de su cuidado y control. **3.3.4** Con respecto a los argumentos de la empresa casante, se tiene que ella sustenta su posición en mérito al informe técnico que aportó como medio probatorio. Sin embargo, ha obviado que en la sede casatoria no cabe realizar una nueva valoración de los medios probatorios, por lo que no corresponde estimar el recurso de la empresa recurrente. **3.4** En mérito a lo anteriormente expuesto, podemos colegir que la sentencia de vista no ha incurrido en infracción normativa denunciada, razón por la cual corresponde declarar **infundado** el recurso extraordinario de la empresa recurrente. **DECISIÓN** Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa **CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS S.A.,** mediante escrito del once de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia apelada, expedida en la resolución número nueve, del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; en los seguidos por la empresa **CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS S.A.** contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre acción contencioso administrativa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Cabello Matamala**. SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, **CABELLO MATAMALA,** PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR. **C-2245460-7**

CASACIÓN Nº 17301-2023 LIMA

TEMA: BASE DE CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS REGALIAS MINERAS

SUMILLA: La base de cálculo del mineral no metálico es posible determinarla, razonablemente, en función de su equivalencia al concentrado; por ello, no puede considerarse el valor del mineral en la cantera ni tampoco se puede partir del valor bruto de venta, pues en ninguno de esos casos se llega al equivalente al concentrado; siendo así, para calcular el equivalente al valor del concentrado, es válido establecer

que, cuando el mineral se encuentra en condiciones de fabricación del producto final, puede ser considerado como el equivalente al concentrado; En ese sentido, interesa hallar el valor del insumo para la elaboración de cemento, clinker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, king block, cuyo valor de mercado debidamente justificado puede ser determinado mediante distintos métodos, que no excluyen para su acreditación la posibilidad de hacerlo mediante el procedimiento aplicado por la empresa recurrente u otro más idóneo que permita llegar a dicho resultado. Dicho valor es el que se debe tomar como base de cálculo para la determinación de la regalía minera.
PALABRAS CLAVE: cemento, empresas integradas, regalías mineras

Lima, veinte de septiembre de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa **Unión Andina de Cementos S. A. A.,** mediante escrito del diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas mil cuatrocientos noventa y uno a mil quinientos dieciséis del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, del veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas mil cuatrocientos setenta y dos a mil cuatrocientos ochenta y dos), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número nueve, del treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y uno a mil trescientos sesenta y cinco), que declaró fundada la demanda; y, reformándola, declara infundada la demanda en todos sus extremos. **Antecedentes del recurso** De la demanda La empresa Unión Andina de Cementos S. A. A. interpone demanda contencioso administrativa mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (foja tres a treinta y nueve), postulando las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01175-4-2021, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, por la que se resolvió confirmar la Resolución de Intendencia Nº 0150140010931/SUNAT, del veintiocho de agosto del dos mil trece. **Pretensión accesoria:** Se ordene a la administración tributaria la devolución a favor de la demandante del importe de S/ 14'491,730.00 (catorce millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos treinta soles con cero céntimos), más los intereses compensatorios devengados hasta la fecha efectiva del pago. Como fundamentos de su demanda, señala que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01175-4-2021 incurre en motivación aparente al no realizar el análisis en lo que respecta a los costos de tratamiento y la base de cálculo de la regalía minera que debe pagar la demandante, sin explicar la situación legal de los costos posteriores que no forman parte de los costos de tratamiento; señala que, para el caso concreto, los costos posteriores son de mayor valor que el producto obtenido al final de los procesos de beneficio regulados por la Ley General de Minería. Sostiene que el Tribunal Fiscal omite explicar, fundamentar y precisar las razones o consideraciones de hecho y el sustento de derecho de la decisión, pues a criterio del Tribunal Fiscal hay otro método adicional al artículo 4 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera, artículo que solo permite deducir los costos de tratamiento, concepto que no comprende los costos posteriores a la obtención del producto refinado; el criterio del tribunal administrativo es, en concepto de la demandante, contrario a la jurisprudencia constitucional, por lo que resulta insuficiente. **Sentencia de primera instancia** El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número nueve, del treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y uno a mil trescientos sesenta y cinco), resolvió: **DECLARANDO FUNDADA,** la demanda obrante de folios 3 a 39, en consecuencia **nulas** la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01175-4-2021, la Resolución de Intendencia Nº 0150140010931 y las Resoluciones de Determinación Nº 0120030036971 a 0120030036982, de las Resoluciones de Multa N°s 0120020021929 a 01200 20021940 y las Resoluciones de Multa N°s 0120020021941 a 012002002 1952. Asimismo, **se ordena** a la SUNAT la devolución a favor de la demandante del monto efectivamente pagado por los valores emitidos más los intereses compensatorios devengados correspondientes hasta la fecha efectiva de pago. Expone los siguientes fundamentos: a) El Juzgado considera que el colegio administrativo cumplió con resolver el asunto controvertido de manera conforme y coherente a la ley, pues ha motivado las razones por las cuales decidió confirmar la determinación efectuada por la SUNAT, haciendo uso de la base legal pertinente, los hechos suscitados en el procedimiento de fiscalización, y el análisis de la forma de determinación de la regalía minera. Se advierte que el Tribunal Fiscal ha efectuado una interpretación que tiene como fundamento lo señalado por la normativa de la regalía minera, por lo que no incurre en motivación aparente. b) El Juzgado refiere que, si bien como indica la SUNAT, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1043-2013-PA/TC emite pronunciamiento sobre normas que fueron promulgadas en un ejercicio posterior al que es materia de autos, no es menos verdad que el máximo intérprete de la Constitución menciona información relevante para la resolución del caso en concreto que no puede ser evadida en el análisis de esta judicatura, la cual se encuentra referida al hecho de que para la determinación de la base de cálculo del pago de la regalía minera se debe considerar el valor del componente minero y no el valor del producto obtenido luego de procesos industriales o de manufactura. c) El Tribunal Constitucional consideró que actuar de manera contraria —como en este caso lo hacen la administración tributaria y el Tribunal Fiscal— se aparta de la naturaleza contraprestativa estipulada en el artículo 2 de la Ley de Regalía Minera, al establecerse un método de valoración basado en las ventas de productos sometidos a procesos industriales o de manufactura, con lo cual se estaría estableciendo un nuevo gravamen que recaería sobre el desarrollo de actividades posextractivas, disfrazado bajo la figura de un ingreso contraprestativo originario, lo que no ha sido dispuesto por ley y, por ende, atentaría contra el principio de reserva de la ley. **Sentencia de vista** Conocida la causa en segunda instancia, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte, mediante la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, del veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas mil cuatrocientos setenta y dos a mil cuatrocientos ochenta y dos), revolvió lo siguiente: **REVOCARON la sentencia apelada**, resolución número nueve, de fecha treinta de noviembre del dos mil veintidós, obrante de folios mil trescientos cincuentiuno a mil trescientos sesenticinco, por la que se resuelve declarar fundada la demanda, en consecuencia, nulas la Resolución del Tribunal Fiscal número 01175-4-2021, la Resolución de Intendencia número 0150140010931, las Resoluciones de Determinación números 012-003-0036971 a 012-003-0036982, y las Resoluciones de Multa números 012-002-0021929 a 012-002-0021940 y 012-002-0021941 a 012-002-0021952, y se ordena a la SUNAT la devolución a favor de la demandante del monto efectivamente pagado por los valores emitidos más los intereses compensatorios devengados correspondientes hasta la fecha efectiva de pago; y **REFORMÁNDOLA, declararon infundada la demanda en todos sus extremos.** Expone los siguientes argumentos: a) La Sala Superior refiere, considerando lo actuado en sede administrativa, que la empresa aplicó un procedimiento para determinar la base de cálculo para el pago de la regalía minera correspondiente a los periodos enero a diciembre de dos mil nueve, distinto al establecido para las empresas integradas, en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera y el numeral 4.1 del artículo 4 de su reglamento, toda vez que, según lo reconoció dentro del procedimiento de fiscalización, consideró únicamente el valor del componente minero (caliza), cuando le correspondía utilizar el valor bruto de venta del producto final, esto es, el valor de venta de sus productos —cemento clínker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, king block— y excluir los costos de tratamiento y demás ajustes, con sujeción a lo preceptuado en el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera. b) Asimismo, refiere que la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01043-2013-PA/TC, invocada por el Juzgado para declarar fundada la demanda y que ordena la inaplicación de la disposición contenida en el inciso h) del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, Reglamento de la Ley de Regalía Minera, según la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 180-2011-EF, a las empresas demandantes, no resulta aplicable al caso sub judice. Esto se debe, según el colegiado superior, a que el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional en el aludido proceso de amparo tiene relación con modificaciones al Reglamento de la Ley de Regalía Minera introducidas en el

año dos mil once, esto es, implica normas que no se encontraban vigentes en el periodo fiscalizado. c) Añade la Sala Superior que ya ha tenido oportunidad de emitir pronunciamientos de fondo desestimatorios sobre demandas similares —por ejemplo, mediante las sentencias del veintinueve de marzo y veintinueve de abril del dos mil veintiuno, recaídas en los procesos bajo Expedientes Nº 8497-2019 y Nº 10565-2019, respectivamente, las cuales quedaron firmes al haberse declarado improcedentes los recursos de casación interpuestos según autos de calificación de los Recursos de Casación Nº 3967-2021 Lima y Nº 8368-2021 Lima, de fechas diez de noviembre del dos mil veintiuno y diecinueve de enero del dos mil veintidós—, estableciendo que la Ley de Regalía Minera, para el caso de las empresas integradas, no ha previsto que la base imponible pueda ser determinada en función solo "al valor del componente minero". Del recurso de casación y el auto calificatorio Mediante auto calificatorio del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (fojas sesenta y cuatro a setenta y tres del cuaderno de casación), esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa Unión Andina de Cementos S. A. A., por la siguiente causal[2]: **a) Indebida aplicación del numeral 4.2 del artículo 4** [de] **la Ley Nº 28258 "Ley de Regalía Minera" y numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-EF** Sostiene la recurrente que la Ley de Regalía Minera grava el valor de los recursos minerales metálicos y no metálicos extraídos, mas no el proceso industrial, que tratándose de empresa productora de cemento que extrae minerales no metálicos que no pasan por un proceso de beneficio, la base de cálculo de la Regalía Minera no podría ser determinada según lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento, ya que éste se refiere al valor del concentrado o equivalente, en el caso de minerales metálicos, y el valor del componente minero, en el caso de minerales no metálicos, sujetos a un proceso de beneficio definido como tal en la Ley General de Minería. Que la recurrente es una empresa cementera que extrae caliza (mineral no metálico) y que no realiza un proceso de beneficio, por lo que no le es aplicable el procedimiento de cálculo descrito en el artículo 4.1 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera; que si bien se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Regalía Minera, el Reglamento no establece una metodología de cálculo aplicable a la recurrente, por lo que debe tomarse en cuenta el valor de la caliza y no el valor bruto del producto final industrial (cemento); señala que consideró el valor del componente minero (caliza) para el cálculo de la regalía minera correspondiente al año dos mil nueve, tomando en cuenta que para determinar el componente minero no debe incluirse el proceso industrial, estableciendo el valor de venta de la caliza en base a sus márgenes operativos, y sobre dicho valor aplicó la tasa del 1%, a efectos de cumplir con la Ley de Regalía Minera. CONSIDERANDO **Primero:** Contextualizado el caso, es pertinente hacer algunos apuntes acerca del recurso extraordinario de casación, que delimiten la actividad casatoria de esta Sala Suprema. **1.1.** El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. En materia de casación, es factible el control de las decisiones jurisdiccionales con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto. **1.2.** El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan haber cometido en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Constituye antes bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.3.** Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[4], por lo que, en tal sentido, si bien la causal supone una violación de la ley, también lo es que esta puede darse en la forma o en el fondo. **1.4** Se debe precisar: […] que al término "infracción" —en sentido general— lo podemos asimilar a lo que la doctrina procesal conoce como el error, dentro de él por cierto encontramos al error in iudicando, el error in procedendo y el error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un error en la decisión judicial, la cual —como ya dijimos— puede ser de naturaleza sustantiva o procesal […].[5] En el caso, se ha declarado procedente el recurso de casación por una infracción normativa material. En consecuencia, corresponde determinar si existió infracción en la decisión judicial respecto a las normas que la recurrente invoca, que, conforme se puede observar de los fundamentos que la sustentan, rigen la base de cálculo para el pago de las regalías mineras **Segundo: Controversia 2.1.** Previo al desarrollo de las causales que fueron declaradas procedentes, es oportuno anotar que la controversia consistió en determinar si la base de cálculo para el pago de las regalías mineras de los periodos de enero a diciembre del ejercicio dos mil nueve se ajusta a lo establecido para las empresas integradas en la Ley de Regalía Minera y su reglamento. **Análisis de la causal de naturaleza material Tercero: Respecto a la indebida aplicación del numeral 4.2 del artículo 4 la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y del numeral 4.1 del artículo 4 del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-EF. 3.1.** Se debe precisar que la parte recurrente señala que la Ley de Regalía Minera grava el valor de los recursos minerales metálicos y no metálicos extraídos, mas no el proceso industrial, y que tratándose de empresa productora de cemento que extrae minerales no metálicos que no pasan por un proceso de beneficio, la base de cálculo de la regalía minera no podría ser determinada según lo dispuesto en el artículo 4.1 del reglamento, ya que este se refiere al valor del concentrado o equivalente, en el caso de minerales metálicos, y el valor del componente minero, en el caso de minerales no metálicos, sujetos a un proceso de beneficio definido como tal en la Ley General de Minería. **3.2.** Asimismo, la parte recurrente refiere que es una empresa cementera que extrae caliza (mineral no metálico) y que no realiza un proceso de beneficio, por lo que no le es aplicable el procedimiento de cálculo descrito en el artículo 4.1 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera. Aduce que, si bien se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Regalía Minera, el reglamento no establece una metodología de cálculo aplicable a la recurrente, por lo que debe tomarse en cuenta el valor de la caliza y no el valor bruto del producto final industrial (cemento). Señala que consideró el valor del componente minero (caliza) para el cálculo de la regalía minera correspondiente al año dos mil nueve, tomando en cuenta que para determinar el componente minero no debe incluirse el proceso industrial, y estableció el valor de venta de la caliza con base en sus márgenes operativos, y sobre dicho valor aplicó la tasa del 1% a efectos de cumplir con la Ley de Regalía Minera. **3.3.** Citemos las infracciones normativas denunciada por la parte recurrente: Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera Artículo 4.- Determinación de la regalía minera […] 4.2 En el caso de las empresas integradas que transformen sus propios productos después del proceso de concentración de las partes valiosas de un agregado de minerales, la base de cálculo se obtendrá restando al valor bruto de venta del producto final los costos de tratamiento hasta llegar al valor de concentrado o su equivalente a su valor de mercado debidamente justificado. **Reglamento de la Ley de Regalía Minera - Decreto Supremo Nº 157-2004-EF** […] Artículo 4.- Base de referencia de la regalía 4.1 La base de referencia para el pago de la regalía minera por el mineral extraído de las concesiones mineras en explotación será el resultado de la diferencia de lo señalado en los literales a) menos b) que a continuación se indican, y considerarán los ajustes a que se refiere el literal c): **a.** El valor bruto de las ventas de concentrado o equivalente o del componente minero, en el caso que éstos sean productos que se comercialicen o, en su defecto, el valor bruto declarado por el titular. Tratándose de empresas integradas que transformen sus propios productos será el valor bruto de venta del producto

final. **b**. Las sumas por tasas, impuestos indirectos, seguros, costos de transporte, almacenamiento, embarque y estiba, así como otros costos o gastos asumidos por el exportador y pactados de acuerdo a los términos internacionales de comercio (INCOTERM), de ser el caso. Tratándose de las empresas integradas a que se refiere el literal anterior, la base de referencia tampoco incluirá los costos de tratamiento**". c**. Los ajustes provenientes de las liquidaciones finales, así como los provenientes de descuentos, devoluciones y demás conceptos de naturaleza similar que correspondan a la costumbre de la plaza, afectarán la base de referencia en el mes en el cual se otorguen o efectúen. Estos ajustes deberán constar en documentos emitidos según el Reglamento de Comprobantes de Pago. Cuando el monto de los ajustes de un mes determinado no sea absorbido en su integridad en dicho mes, el exceso constituirá un saldo arrastrable que se aplicará a partir del mes siguiente hasta su agotamiento. **3.4.** Al respecto, tenemos que la Sala Superior en el considerando undécimo realiza la siguiente interpretación de las referidas normas: **UNDÉCIMO.-** Que, a partir de los antecedentes reseñados se concluye que la empresa ahora demandante aplicó un procedimiento para determinar la base de cálculo para el pago de la regalía minera correspondiente a los períodos enero a diciembre del dos mil nueve, distinto al establecido para empresas integradas en el artículo 4, numeral 4.2, de la invocada Ley de Regalía Minera y el artículo 4, numeral 4.1, de su Reglamento, toda vez que según lo reconoció dentro del procedimiento de fiscalización, consideró únicamente el valor del componente minero (calisa) –el mismo que se obtuvo de una estimación del "posible valor de venta" del componente minero (calisa), en base a los márgenes operativos de la empresa, esto es, adicionando al costo de extracción el margen bruto de la empresa–, cuando le correspondía utilizar el valor bruto de venta del producto final, esto es, el valor de venta de sus productos cemento, clinker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, King block, y excluir los costos de tratamiento y demás ajustes, con sujeción a lo preceptuado en el artículo 4, numeral 4.1, del Reglamento de la Ley de Regalía Minera; ergo, el reparo formulado por la Administración Tributaria y confirmado por el Tribunal Fiscal por omisiones en el pago de las regalías mineras de los períodos enero a diciembre del dos mil nueve, resulta justificado y ceñido a derecho. **3.5.** Se observa que la Sala Superior, en el considerando noveno, efectúa el análisis del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, y del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera, indicando lo siguiente: […] de las disposiciones glosadas se colige que tratándose de empresas integradas, existía un procedimiento especifico para la determinación de la base de cálculo de la regalía minera, el cual parte del valor bruto de venta del producto final, al que se deducían los costos de tratamiento, así como las deducciones y ajustes detallados en los literales b) y c) del numeral 4.1 del articulo 4 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera […]. **3.6.** Por tanto, de la interpretación que la Sala Superior realiza de las normas denunciadas, se colige que reconoce un único método para las empresas integradas, ya que para llegar a la base cálculo para la determinación de la regalía minera, parte del valor bruto de venta del producto final hasta llegar al valor del concentrado o su equivalente a valor de mercado, análisis que la recurrente considera incorrecto. Pues bien, en dicho análisis, la Sala Superior considera la obtención del concentrado como una idea integral, sin parámetros de comparación entre el término "concentrado" o "equivalente", es decir, sin realizar distinción alguna entre la primera parte del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, que se refiere a la obtención del concentrado del mineral —lo que no es posible en el caso de la caliza por no existir un proceso para llegar al mineral no metálico o a su concentrado, como sí lo hay para el caso del mineral metálico—, y la segunda parte de esa misma norma, que refiere expresamente **"o su equivalente a su valor debidamente justificado".** Siendo así, la Sala desecha de plano la posibilidad de determinar la base imponible de la regalía minera mediante otros métodos, como propuso la recurrente en sede administrativa y judicial —tomando en cuenta el valor de venta de la caliza (valor de mercado del bien extraído) con base en sus márgenes operativos—, lo cual encontraría respaldo, a primera vista, en la normativa denunciada, en cuanto se refiere al valor debidamente justificado. **3.7.** Asimismo, se observa que la parte recurrente refiere lo siguiente: […] Si bien la definición del término "componente minero" recogido en esta disposición no alcanza a los minerales no metálicos extraídos de las canteras como la caliza (dado que respecto de los mismos no se lleva a cabo ningún proceso de beneficio conforme a la Ley General de Minería), la norma es relevante en cuanto establece que en el caso de minerales metálicos o no que no cuentan con cotización internacional, la base imponible de la Regalía Minera es equivalente al 1% del componente minero, esto es —en todo caso— el valor del mineral no metálico extraído sin incluir procesos posteriores de industria o manufactura. Así, la Sala Superior no sólo debió descontar todos los gastos y costos de tratamiento (inexistentes para UNACEMCORP), sino también la utilidad proveniente de la actividad industrial para llegar al "valor de mercado" de los minerales no metálicos que extraemos […]. De los fundamentos de la parte recurrente, se infiere que para realizar la determinación de la base de cálculo para el pago de las regalías consideró el valor del componente minero (caliza) y no incluyó los procesos industriales. **3.8.** Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos referidos en los párrafos anteriores, no resulta suficiente el análisis e interpretación que realiza la Sala Superior; ello en la medida que resulta necesario establecer la forma cómo debe entenderse la última parte vinculada a la justificación contenida en el artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, cuyo texto completo señala: […] 4.2. En el caso de las empresas integradas que transformen sus propios productos después del proceso de concentración de las partes valiosas de un agregado de minerales, la base de cálculo se obtendrá restando al valor bruto de venta del producto final los costos de tratamiento hasta llegar al valor del concentrado o **su equivalente a su valor de mercado debidamente justificado**. [Énfasis agregado] **3.9.** Es evidente que la Sala Superior no aplicó debidamente la normativa analizada, al considerar en su análisis únicamente la primera parte del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, que recoge como regla obtener como resultado el valor del concentrado, y omite la segunda parte, que posibilita, a partir de su texto ("o su equivalente a su valor de mercado debidamente justificado"), la admisión de otras formas de determinación de la base de cálculo para la regalía minera que resulten adecuadas para el caso de los minerales no metálicos, criterio que es recogido de manera similar en el texto del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley de Regalía Minera, que da cuenta también del valor bruto de las ventas de concentrado "o su equivalente". Por ello, en suma, en el pronunciamiento de la Sala Superior se vulneran las normas legales referidas al cálculo de la regalía minera, pues para establecerla, de acuerdo con la normativa legal prevista por la Ley de Regalía Minera, se debe tener presente su texto completo. En efecto, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera refiere: "[…] la base de cálculo se obtendrá restando al valor bruto de venta del producto final los costos de tratamiento hasta llegar al valor del concentrado o **su equivalente a su valor de mercado debidamente justificado"** [resaltado nuestro]. **3.10.** Por tanto, corresponde a esta Sala Suprema realizar la correcta interpretación de la referida normativa, análisis que debe realizarse en función a la naturaleza del producto que explota y comercializa la parte recurrente. Así, de la lectura de la norma se advierte que esta establece dos posibilidades para obtener la base de cálculo de la regalía minera y, para el caso de empresas integradas que exploten recursos naturales que constituyen minerales no metálicos, se debe considerar principalmente lo previsto por el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera: "Equivalente (al concentrado) a su valor de mercado debidamente justificado", del siguiente modo: "En el caso de las empresas integradas que exploten minerales no metálicos que transformen sus propios productos, la base de cálculo se obtendrá calculando **el equivalente al concentrado a su valor de mercado debidamente justificado"** [resaltado nuestro]. **3.11.** Esta interpretación obedece a un análisis integral de la normativa materia de análisis y que debe ser aplicada en tales términos, y es precisamente ese extremo el que no ha sido tomado en consideración por la Sala Superior, que ha realizado una interpretación sesgada de la misma, al aplicar a la recurrente una regla que no resulta compatible a su caso. En efecto, se debió interpretar la norma en términos que resulten de aplicación a esta parte, pues se trata de una **empresa integrada** que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Regalía Minera —artículo 2, inciso f)— "[…] es aquella que además de realizar actividades de explotación y beneficio hasta la obtención de concentrado o equivalente, o componente minero, realiza directamente o a través de terceros otros procesos metalúrgicos, industriales o de manufactura posteriores hasta la obtención de un producto comercial final". **3.12.** Pues bien, para determinar cuál es el punto del proceso en el cual la caliza constituye el equivalente al concentrado del mineral, es pertinente referirnos al proceso que atraviesa la misma hasta llegar al producto final. Al respecto, la recurrente ha expresado a lo largo del proceso que, una vez extraída de la naturaleza, la materia prima, que está constituida por el

material —en el caso, caliza en su estado natural—, pasa luego por procesos de preparación mecánica, entre otros, para llegar al estado de **insumo,** que viene a ser el producto cuyas modificaciones o procesos sufridos lo convierten en un bien apto para la creación de otros bienes; por lo tanto, el tipo de insumo dependerá del rubro y, para el caso, tal insumo es el elemento equivalente al concentrado, es decir, el material que se encuentra listo para servir en la fabricación del producto final. **3.13.** En esta línea de análisis, es pertinente puntualizar que, para el caso de la caliza, el proceso para llegar al producto final en cada caso o el equivalente al concentrado es el **insumo** para la fabricación del producto final, el mismo que debe ser determinado por su valor debidamente justificado, conforme lo establece la norma; ello, claramente, no excluye como método para determinar el valor de mercado debidamente justificado, el aplicado por la recurrente, siempre que resulte ser el más idóneo y cumpla con la obtención del resultado previsto en la normativa materia de análisis. **3.14.** Habiéndose establecido que la base de cálculo, para el caso, está determinada por el punto en el proceso de conversión del mineral no metálico para iniciar la fabricación del producto final, es decir, el punto en que se genera el **insumo,** podemos concluir lo siguiente: a) La parte recurrente es una **empresa integrada,** en la medida que, además de realizar actividades de explotación y beneficio hasta la obtención del concentrado o **equivalente al concentrado,** o componente minero, realiza directamente o a través de terceros otros procesos metalúrgicos, industriales o de manufactura posteriores hasta la obtención de un producto comercial final. b) Para ello, será necesario establecer el **valor equivalente al concentrado** del mineral que prevé el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, para el caso materia de autos. c) No resulta razonable que se establezca como base de cálculo para la regalía minera el **valor que pueda tener el mineral no metálico en la cantera de donde se extrae,** que representa la materia prima, pues este valor no refleja el equivalente al concentrado. d) Tampoco se puede considerar como base de cálculo del mineral no metálico el valor obtenido restando al valor bruto de venta del producto final los costos de tratamiento hasta llegar al valor del concentrado, como postula la administración, pues este valor considera como punto de partida el **valor de venta,** fórmula con la cual, en el caso, no se considera el valor agregado que se incluye para la fabricación de productos como cemento, clínker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, king block, valor que, de acuerdo a lo expuesto por ella, se encuentra incluido en la base de cálculo efectuada por la administración, es decir, el valor agregado referido no es objeto de la resta prevista en la fórmula aplicada; por tal razón, a través de este método, no es posible llegar al valor del concentrado, que, para el caso, es el **insumo** para la fabricación del producto final. **3.15.** Teniendo en consideración lo anteriormente señalado, razonablemente es posible determinar la base de cálculo del mineral no metálico, en función de su equivalencia al concentrado; por ello, no podemos considerar el valor del mineral en la cantera, así como tampoco se puede partir del valor bruto de venta, pues en ninguno de esos casos podemos llegar al equivalente al concentrado. Siendo así, para calcular el equivalente al valor del concentrado, resulta válido establecer que, cuando el mineral se encuentra en condiciones para la fabricación del producto final, puede ser considerado como el equivalente al concentrado. En ese sentido, interesa hallar el valor del **insumo para la elaboración de cemento, clinker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, king block,** cuyo valor de mercado debidamente justificado puede ser determinado mediante distintos métodos, que no excluyen para su acreditación la posibilidad de hacerlo mediante el procedimiento aplicado por la empresa recurrente u otro más idóneo que permita llegar a dicho resultado. Dicho valor es el que se debe tomar como base de cálculo para la determinación de la regalía minera**. 3.16.** Finalmente, corresponde en este caso concreto a la administración tributaria determinar el método más idóneo para llegar a establecer la base de cálculo de la regalía minera en el caso de la explotación de caliza para la elaboración de cemento, clínker, bloques, adoquines, ladrillos, bloques grass, pavimento, king block, en función del **valor del insumo** (equivalente al concentrado), que se obtenga por cualquier método idóneo, que, como hemos visto, no es posible mediante la resta prevista en la primera parte del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera o en el numeral 4.1 del artículo 4 de su reglamento, lo cual no excluye que se haga aplicando otros métodos o procedimientos, siempre que se respete lo dispuesto por la normativa denunciada, de acuerdo a lo previsto en los puntos precedentes. Es decir, en principio, no es posible excluir algún método de determinación de la regalía para el caso de los minerales no metálicos; en cualquier caso, dicho método debe responder a la finalidad de la misma. **3.17.** En el caso, conforme al análisis efectuado, la Sala de mérito ha infringido el numeral 4.2. del artículo 4 de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía Minera, al haber efectuado una aplicación indebida de este marco legal, dado que aplicó a la recurrente medidas que ambas normas aprobaban pero que eran ajenas al caso concreto, e inaplicó otras que sí resultaban exigibles, por lo que se estima la causal y, por lo tanto, el recurso de casación deviene **fundado.** Conforme a lo resuelto, al haberse determinado que la sentencia de vista infringe la Ley de Regalía Minera y su reglamento, **corresponde casar la sentencia de vista** y, actuando en sede de instancia, **confirmar la sentencia de primera instancia** solo en el extremo de la pretensión principal, que declaró fundada la demanda, y, en consecuencia, dispuso declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01175-4-2021, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, y de la Resolución de Intendencia Nº 0150140010931/SUNAT, del veintiocho de agosto del dos mil trece; y **revocar la sentencia de primera instancia** en cuanto amparó el extremo de la pretensión accesoria de la demanda, que solicitó se ordene a la administración tributaria la devolución a favor de la demandante del monto efectivamente pagado por los valores emitidos más los intereses compensatorios devengados correspondientes hasta la fecha efectiva del pago, **y, reformándola, declarar improcedente este extremo de la demanda**, pues este punto se encuentra pendiente de ser atendido previamente por la administración tributaria, ya que al haberse determinado qué normas resultaban aplicables del numeral 4.2. del artículo 4 de la Ley de Regalía Minera y del numeral 4.1 del artículo 4 de su reglamento, la SUNAT debe disponer el método más adecuado para la determinación, en el caso concreto, de la regalía minera para el caso de la caliza, a fin de que se elabore correctamente su cálculo. **DECISIÓN** Por estas consideraciones, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa **Unión Andina de Cementos S. A. A.**, mediante escrito del diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas mil cuatrocientos noventa y uno a mil quinientos dieciséis). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, del veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas mil cuatrocientos setenta y dos a mil cuatrocientos ochenta y dos), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de primera instancia. **Actuando en sede de instancia, CONFIRMARON** la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número nueve, del treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y uno a mil trescientos sesenta y cinco), solo en el extremo que declaró fundada la pretensión principal de la demanda y, en consecuencia, dispuso declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01175-4-2021, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, y de la Resolución de Intendencia Nº 0150140010931/SUNAT, del veintiocho de agosto del dos mil trece. Asimismo, **REVOCARON** la sentencia de primera instancia en cuanto amparó la pretensión accesoria de la demanda, que solicitó se ordene a la administración tributaria la devolución a favor de la demandante del monto efectivamente pagado por los valores emitidos más los intereses compensatorios devengados correspondientes hasta la fecha efectiva del pago, y, **REFORMÁNDOLA**, **DECLARARON IMPROCEDENTE** este extremo de la demanda, a fin de que la administración tributaria proceda según lo indicado en esta ejecutoria suprema. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, en los seguidos por Unión Andina de Cementos S. A. A. contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados Interviene como **ponente** el señor Juez Supremo Pereira Alagón. SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, **PEREIRA ALAGÓN,** DELGADO AYBAR.

---

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 Se transcribe la reseña elaborada en su oportunidad.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 Ibidem, p. 359.

5 CAVANI, Renzo (2016). Código Procesal Civil comentado por los mejores especialistas. Tomo III. Lima, Gaceta Jurídica; p. 342.

C-2245460-8

CASACIÓN Nº 7493-2023 LIMA

TEMA: ACREDITACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES
SUMILLA: El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta no establece una forma o nivel de probanza de la causalidad del gasto, sino solo dispone que haya quedado establecido que el gasto debe ser —además de necesario— indispensable, de modo que evidencie que fue precisamente dicho gasto el que generó la renta gravada. Sin embargo, en el presente caso, tenemos que la sentencia de mérito requiere la acreditación de la entrega comprobada de las muestras médicas a los profesionales de salud.
PALABRAS CLAVE: gastos deducibles, muestras médicas, impuesto a la renta, valoración probatoria, debido proceso

Lima, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA La causa siete mil cuatrocientos noventa y tres - dos mil veintitrés, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: **1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN** Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante **Grunenthal Peruana Sociedad Anónima**, mediante escrito del trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas seiscientos cincuenta y nueve a setecientos treinta y ocho del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós, del veintisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas seiscientos treinta y ocho a seiscientos cincuenta y tres), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **revoca** la sentencia apelada, contenida en la resolución número nueve, del treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos dieciséis), en cuanto resuelve declarar fundada en parte la demanda y en consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 7425-1-2017, del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, solo en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, y dejar sin efecto dicho reparo y por consiguiente reconocer la deducción del gasto por concepto de entrega de muestras médicas correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho; y, **reformándola, declara infundada** la demanda en el referido extremo. **1.2. Causales por las cuales se ha declarado procedente el recurso de casación 1.2.1.** Mediante resolución suprema del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja ciento cuarenta y uno del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema), se declaró **procedente** el recurso de casación interpuesto por la empresa Grunenthal Peruana Sociedad Anónima por las siguientes causales: 1) La Sala ha vulnerado el derecho a la debida motivación regulado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Como argumentos que sustentan la infracción normativa señala lo siguiente: a) La Sala ha vulnerado el derecho a la debida motivación de la empresa regulado en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil y en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, al motivar de forma aparente la sentencia de vista, al haber omitido pronunciarse sobre la totalidad de sus argumentos y al no efectuar un análisis conjunto de todos los medios probatorios ofrecidos por la empresa. b) La sentencia de vista ha omitido señalar, aun habiendo descrito los medios probatorios presentados, similares a los señalados en la Casación Nº 1249-2015 y en la Circular Nº 010-2014, el motivo por el cual no se ha acreditado la entrega de las muestras médicas, precisa que la Sala solo se limitó a listar y describir los documentos presentados, sin mencionar por qué dichos documentos revisados de manera conjunta no acreditan la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud. c) La sentencia de vista desmerece liminalmente los medios probatorios presentados por la empresa, al señalar que la empresa supuestamente no proporcionó documentación que acreditara la entrega efectiva o recepción de muestras médicas materia de reparo con fines promocionales a los profesionales médicos de la salud, desconociendo y desmereciendo el resto de los actuados en instancia administrativa y judicial. d) La empresa lleva un control de las muestras médicas entregadas a los representantes médicos y éstos a su vez las entregan a los profesionales de la salud, en función del producto y cantidad, dejando constancia así de su entrega con la respectiva boleta de venta y guía de remisión. Precisa que si se realiza una revisión conjunta de los medios probatorios presentados se podrá verificar que efectivamente la empresa entregó las muestras médicas a los representantes médicos y estos a su vez a los profesionales de la salud. e) Según el criterio expuesto en la Casación Nº 1249-2015, la entrega de las muestras médicas a favor de los profesionales de la salud se encuentra acreditada con un reporte de visitas realizadas y las guías de remisión emitidas a los representantes médicos, ambos documentos de control interno del contribuyente. f) La resolución impugnada incurre en una motivación aparente, toda vez que la Sala si bien parece que examinará el petitorio contenido en la demanda y apelación, finalmente concluye que la empresa no presentó "reportes de visitas médicas, el cronograma de visitas mensual de cada representante médico, el formato de distribución mensual", documentación que no fue requerida durante el procedimiento de fiscalización 2) La sala ha vulnerado el derecho a la igualdad de la empresa contenido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Como argumentos que sustentan la referida infracción normativa señala lo siguiente: a) La Sala ha vulnerado el derecho a la igualdad contenido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, debido a que no ha aplicado el criterio seguido por la propia SUNAT durante los procedimientos de fiscalización realizados a empresas del sector farmacéutico respecto de gastos por muestras médicas, ni ha seguido el criterio contenido en la Casación Nº 01249-2015, pese a que en dicha sentencia la controversia también se limitaba a determinar si la empresa demostró de manera fehaciente la entrega efectiva de muestras médicas a profesionales de la salud durante la etapa de fiscalización. b) Resulta evidente que se está otorgando un trato diferenciado frente a situaciones similares; toda vez que, aplica un criterio distinto para determinar la deducibilidad de los gastos por entrega de las muestras médicas cuando se trata de ejercicios previos a la emisión de la Circular Nº 010-2014, aun cuando entre los ejercicios 2008 y 2014 no hubo ninguna modificación o precisión respecto al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, respecto a la deducción de gastos por entrega de muestras médicas a favor de los profesionales de la salud, toda vez que, a la fecha no resulta razonable que el agente fiscalizador de la SUNAT requiera la presentación de un cargo de recepción firmado por un profesional de la salud, siendo suficiente la acreditación de la entrega de las muestras médicas a los representantes médicos mediante la información señalada en la Circular, la cual es similar a la información presentada por la empresa. c) La Sala mediante la Sentencia de Vista desconoce la entrega de las muestras médicas al considerar que no se contaba con un cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud, evidenciando así un criterio distinto al señalado en la Casación Nº 1249-2015, en la cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema había señalado que resultaba desproporcional e irrazonable solicitar un cargo de recepción de las muestras médicas a los profesionales de la salud, dado que resultaba suficiente para acreditar la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud mediante guías de remisión y un reporte de visitas realizadas por los visitadores médicos. d) En el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad de la empresa pues, pese a que esta actuó de forma diligente, proporcionando a la SUNAT incluso mayores medios probatorios que los presentados por el contribuyente PRODUCTOS ROCHE, y, en consecuencia, sustentó el gasto por muestras médicas, sin embargo, la Sala de forma arbitraria, ha mantenido dicho reparo bajo el argumento de que la empresa no habría proporcionado documentación que acreditara la entrega de las muestras médicas con fines promocionales a los profesionales médicos de la salud, tal como se indica en el considerando DÉCIMO TERCERO de la Sentencia de Vista. e) De la revisión del íntegro de la Sentencia de Vista, la Sexta Sala desconoce de plano la aplicación de la Casación Nº 1249-2015, esto evidencia que a todas luces la Sala no habría actuado con la debida diligencia revisando el íntegro del expediente. Dado que de haberlo hecho habría advertido que en el caso no solo se presentaron los mismos medios probatorios que en el caso que citamos, sino inclusive mayor documentación, lo cual fue reconocido por el agente fiscalizador durante el procedimiento de fiscalización, así como por el propio Tribunal Fiscal. f) Existe una evidente vulneración al derecho de seguridad jurídica de la empresa por parte de la Sala, como es el caso resuelto mediante la Casación Nº 1249-2015, dado que coexisten fallos contradictorios sobre

la misma situación controvertida, sobre los cuales la Sala no se ha pronunciado ni verificado su aplicabilidad al caso concreto, en aras de garantizar la uniformidad jurisprudencial y la plena protección de los derechos del justiciable. 3) La Sala ha vulnerado el derecho a la defensa, previsto en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Como argumento principal que sustenta la infracción normativa señala lo siguiente: a) La Sala ha vulnerado el derecho a la defensa de la empresa previsto en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú al restringir que la empresa exprese sus argumentos contra la supuesta falta de acreditación de la entrega de muestras médicas a los profesionales de la salud, dado que ello nunca fue materia de discusión en el procedimiento contencioso administrativo, sino la necesidad de presentar un cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud para acreditar la entrega de las muestras médicas. b) En el considerando décimo tercero de la Sentencia de Vista, la Sala señala que la empresa no cumplió con acreditar fehacientemente la relación de causalidad entre los gastos de muestras médicas por el importe de S/ 2´808,674.00 (dos millones ochocientos ocho mil seiscientos setenta y cuatro soles con cero céntimos) y la generación de renta gravada o mantenimiento de su fuente productora, toda vez que no proporcionó documentación sustentatoria que acreditara la entrega de muestras médicas con fines promocionales a los profesionales de la salud, ergo, el reparo formulado por la SUNAT se encuentra debidamente justificado y ceñido a derecho. c) Durante la etapa de fiscalización la empresa no solo cumplió con poner a disposición del agente fiscalizador diversos medios de prueba, sino que inclusive otorgó la mayor información posible con la finalidad de acreditar la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud; sin embargo, la Sala no ha efectuado una revisión rigurosa de los medios probatorios actuados durante el procedimiento administrativo, limitándose a indicar que la empresa no había acreditado la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud. d) Señalar que la empresa no presentó medios de prueba suficientes para acreditar la entrega de muestras médicas a favor de los profesionales de la salud sin hacer un contraste con el criterio de la Corte Suprema en la Casación Nº 1249-2015 o señalar cuáles son los medios probatorios que deberían haber sido presentados para acreditar este gasto, limita el derecho de defensa de la empresa de poder rebatir esta afirmación en base a los actuados en las instancias previas y a lo ya reconocido por la propia SUNAT y por el Tribunal Fiscal. 4) Vulneración del principio de congruencia reconocido en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil y el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Como argumento principal que sustenta la infracción normativa señala lo siguiente: a) La Sala ha vulnerado el principio de congruencia reconocido en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil y el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, al alejarse del motivo del reparo, esto es, la acreditación de la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud por medio de un cargo de recepción y no la trazabilidad de la entrega de las muestras médicas a favor de los profesionales de la salud y no que el concepto del gasto sea deducible. b) La Sala ha vulnerado el principio de congruencia procesal debido a que no ha se ha pronunciado sobre el motivo del reparo, esto es, si la empresa había acreditado la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud por medio de un cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud, limitándose a señalar en la página 10 de la Sentencia de Vista que, la empresa no proporcionó documentación que acreditara la entrega efectiva de muestras médicas materia de reparo con fines promocionales a los profesionales de la salud. c) La Sentencia de Vista lejos de pronunciarse sobre la obligación de presentar un cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud para acreditar la entrega de las muestras médicas, se limitó a indicar de manera general que la empresa no había presentado medios probatorios que acrediten la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud, lo cual no fue objeto de discusión en la demanda; sin embargo, en el escrito de demanda se expusieron y desarrollaron cada uno de los medios probatorios presentados durante el procedimiento de fiscalización los cuales acreditan la entrega de las muestras médicas a favor de los profesionales de la salud. d) La Sala, ha cuestionado: i) la presentación de la información proporcionada, por más que la SUNAT y el Tribunal Fiscal han listado ampliamente todos los medios probatorios que la empresa puso a disposición del agente fiscalizador; y ii) la presentación de un cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud, requisito que no es exigible a criterio de la propia Corte Suprema, por más que dicho hecho ya había sido acreditado por parte de la empresa, debe declararse la nulidad de la Sentencia de vista, al vulnerar el principio de congruencia procesal. 5) **La Sala ha efectuado una interpretación errónea del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF.** Como argumento principal que sustenta la infracción normativa señala lo siguiente: a) La Sala ha efectuado una interpretación errónea del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, al condicionar la deducción del gasto por muestras médicas a la presentación de un medio probatorio que no ha sido establecido como requisito en la norma. En efecto, la Sala ha condicionado el reconocimiento de la fehaciencia del gasto y, en consecuencia, su deducción, a la presentación de un cargo de recepción que contenga la firma y el sello del profesional de la salud que recibió las muestras médicas. Evidentemente, esta es una interpretación errónea de la norma que la contraviene. b) La infracción normativa al artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta se origina por una errónea interpretación de este texto legal por parte de la Sala, la cual se manifiesta en el desconocimiento del derecho de los contribuyentes para acreditar la fehaciencia del gasto por entrega de muestras médicas a través de diversos medios probatorios con los que cuenten, en virtud de su derecho a la libertad de empresa. c) La imposición de implementar una prueba determinada para efectos de acreditar la deducibilidad del gasto por entrega de muestras médicas representaría una intromisión a la libertad de organización interna de decidir implementar, según sus particulares necesidades e intereses, el soporte documentario que mejor se adecúe a su operatividad. En tal sentido, el hecho que la empresa no cuente con un determinado medio de prueba no constituye una causal prevista en la ley para el desconocimiento del gasto en el año 2008, ya que la única condición que debe tomarse en cuenta es que el gasto se encuentre respaldado en un mínimo de elementos de prueba que de forma conjunta y con una apreciación razonada acrediten la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud. La Sala debió tener presente que al cierre de la fiscalización la empresa presentó diversos medios de prueba que fueron actuados por la SUNAT y reconocidos por el Tribunal Fiscal, los cuales fueron listados en la infracción normativa número uno. Por lo tanto, resulta totalmente equivocado sostener que fue incumplida la regla de causalidad contemplada en el primer párrafo del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. d) La interpretación de la Sala Superior deviene en una interpretación no sólo incorrecta, sino también arbitraria e ilegal, pues contraviene lo dispuesto en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y lo indicado en la Norma VIII del título preliminar del Código Tributario, según la cual en vía de interpretación no podrán extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la Ley. **II. CONSIDERANDOS PRIMERO. Antecedentes del caso** A efecto de determinar si en el caso concreto se ha incurrido o no en las infracciones normativas denunciadas por la parte recurrente, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Tribunal Supremo con el recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así, tenemos que: **1.1. Demanda:** Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas setenta y siete), la empresa Grunenthal Peruana S. A. (como absorbente de ABL Pharma Perú S. A. C.) interpuso **demanda contencioso administrativa,** con el siguiente petitorio: **Primera pretensión principal:** Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017 en cuanto (i) confirma el reparo por concepto de gasto por vales de consumo y atenciones a médicos, debido a que supuestamente no se acreditó la causalidad del gasto, por la suma de S/ 239,692.00 (doscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y dos soles con cero céntimos); y (ii) confirma el reparo por concepto de gasto por entrega de muestras médicas a favor de los profesionales de la salud al considerar que no se acreditó la fehaciencia de la entrega de las mismas mediante un documento emitido y/o firmado por los profesionales de la salud o por terceros en su nombre o representación, por la suma de S/ 2'808,674.00 (dos millones ochocientos ocho mil seiscientos setenta y

cuatro soles con cero céntimos), correspondiente al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho, así como la multa vinculada. **Segunda pretensión principal:** Solicita pronunciamiento de plena jurisdicción en el que se reconozca la deducción del gasto por concepto de vales de consumo, atenciones a médicos, y por la entrega de muestras médicas, correspondiente al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho, debido a que la causalidad y fehaciencia de los gastos ha sido debidamente acreditada. **Pretensión subordinada a las pretensiones principales:** Solicita la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, que regula el interés moratorio de los tributos impagos, respecto de los periodos del procedimiento administrativo que excedieron el plazo previsto en el artículo 150 del citado código. La empresa demandante señala como los principales argumentos de su demanda los siguientes: **a) Sobre los gastos por concepto de atenciones a médicos**, se afirma que existe causalidad puesto que los vales de consumo son entregados al personal farmacéutico con la finalidad de que recomienden los productos de la demandante. El mecanismo que utiliza para promocionar sus productos en forma indirecta es a través del convencimiento del médico de las cualidades de sus productos, lo que permite justificar la deducción de los gastos para enviar a los médicos a congresos internacionales y los gastos de viajes, y que el beneficio se ve reflejado en la eventual prescripción de sus productos farmacéuticos, lo que aumentará sus ventas. **b) Sobre el gasto por concepto de vales de consumo**, sostiene que estos están destinados a generar incentivos en el personal de las farmacias, quienes tienen un trato directo con los consumidores recomendando el producto y sirven para llegar al consumidor de manera indirecta. El reparo se sustenta en el hecho de que la empresa no acreditó la entrega de los vales de consumo a las farmacias, pero afirma que dentro del procedimiento de fiscalización se proporcionó diversa documentación que demuestra que efectivamente se realizó la entrega de los vales y se proporcionó el detalle de las ventas de los productos para acreditar que estas son producto o consecuencia de la entrega de vales. El Tribunal Fiscal no valoró todos los medios probatorios proporcionados. **c) Respecto a los reparos por muestras médicas**, la demandante señala que cumplió con presentar la documentación necesaria que demuestra que la entrega de muestras médicas realmente se produjo, y que ellas fueron recibidas por los profesionales de la salud; sin embargo, esta documentación no fue evaluada por la administración tributaria de forma razonada al señalar que no se acreditó la entrega de las muestras médicas a los profesionales al no contar con un cargo de recepción. El Tribunal Fiscal no señaló expresamente los motivos por los cuales considera que los medios probatorios ofrecidos resultaron insuficientes, con lo cual vulnera el derecho al debido procedimiento, la debida valoración de las pruebas ofrecidas y el derecho a obtener un fallo debidamente motivado. **d) Sobre la vulneración del principio de igualdad**, alega que no se tuvo en consideración la Circular Nº 010-2014-600000, la cual estableció un procedimiento a seguir por el agente fiscalizador dentro de un procedimiento de fiscalización a las empresas del sector farmacéutico, en el que no se requiere se presente un cargo de recepción firmado por el médico a efectos de acreditar la entrega de la muestra médica. Si bien dicha circular no estuvo vigente en el ejercicio 2009, la empresa demandante presentó documentación similar a la señalada en la circular y por ello debe ser valorada a efectos de acreditar la fehaciencia de la entrega de muestras médicas, en la medida que se trata de supuestos similares; no hacerlo lleva a supuestos de desigualdad injustificada. **e) Sobre la segunda pretensión de plena jurisdicción**, sostiene que los gastos han cumplido con los requisitos que exige la Ley del Impuesto a la Renta para su deducción y han sido sustentados fehacientemente, por lo que su derecho no debe ser restringido por el incumplimiento de la presentación de un documento emitido o firmado por los profesionales de la salud; respecto a ellos, la demandante no tiene poder de coerción suficiente que permita obligarlos a emitir y/o firmar los documentos requeridos por el Tribunal Fiscal para deducir el gasto. **f) Respecto de la pretensión subordinada**, sostiene que el Tribunal Fiscal ha excedido largamente los plazos previstos en la ley para resolver el recurso de apelación y su dilación ha perjudicado a la parte actora al punto de que los intereses se han incrementado exponencialmente, de manera que la deuda actualizada al dos de octubre de dos mil diecisiete asciende a S/ 2'270,499.00 (dos millones doscientos setenta mil cuatrocientos noventa y nueve soles con cero céntimos), monto que resulta irrazonable y desproporcionado teniendo en cuenta que los montos de la deuda en la resolución de determinación y en la de multa ascienden a S/ 953,875.00 (novecientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cinco soles con cero céntimos) y S/ 859,636.00 (ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y seis soles con cero céntimos). Por ello, resulta inconstitucional y desproporcionado el cobro de intereses durante el tiempo de exceso respecto al plazo legal, y el derecho de recaudación puede llegar a afectar su derecho de propiedad pues la dilación genera el incremento de intereses de forma indebida e irrazonable. **1.2. Contestación de la demanda 1.2.1**. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas ciento noventa y siete), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria contestó la demanda. **1.2.2.** Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas doscientos veinte), la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal contestó la demanda. **1.3. Sentencia de primera instancia**: Mediante resolución número nueve, del treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos dos), el Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada en parte la demanda, por lo que declaró nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017 solo en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, mantuvo los reparos referidos a la entrega de vales de consumo y atenciones a médicos y dejó sin efecto el reparo a los gastos por entrega de muestras médicas, por lo que reconoció la deducción del gasto por concepto de entrega de muestras médicas correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio 2008. El Juzgado de primera instancia expuso entre sus principales fundamentos lo siguiente: **a) Sobre las atenciones a los médicos,** se debió demostrar que los desembolsos por viajes y congresos fueron realizados con el objeto de que la empresa demandante sea representada fuera de sus establecimientos; en tal sentido, se establece que no se exhibió ningún documento, programa o similar que demuestre que en dichos congresos se habló específicamente de los productos de la demandante. Asimismo, tampoco se han evidenciado pruebas fehacientes de la relación entre los gastos efectuados y mantener o mejorar su posición en el mercado y tampoco ha logrado probar una repercusión directa o indirecta en sus ventas y operaciones. **b) Sobre los gastos por concepto de vales de consumo**, establece que, de la revisión del expediente administrativo, se aprecian requerimientos de compra de vales de consumo de Hipermercados Metro y una relación de los montos relacionados a dichos conceptos, pero no se aprecia documentación que pruebe la entrega de los vales de consumo; por lo que si bien se alega que los desembolsos realizados por la demandante tuvieron por finalidad promocionar los productos relacionados a la marca e incrementar las ventas de la recurrente, no muestra documentación específica que acredite tal hecho ni que los vales aludidos hayan sido, efectivamente, entregados. **c) Respecto a los reparos por muestras médicas**, se establece que la empresa contribuyente ejerció su derecho a probar, por lo que no se vulneró su derecho a la prueba, pues pudo aportar y producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Sobre la valoración de la prueba aportada, se determina que si bien la administración tributaria precisa que no se ha cumplido con presentar documentación alguna que sea emitida y/o firmada por los beneficiarios de las muestras médicas donde se deje acreditada su debida recepción; sin embargo, considera que la disponibilidad del elemento probatorio que solicita la administración tributaria no depende de la recurrente, en tanto no puede obligar a un tercero a firmar un cargo de recepción y/o emitir una constancia de recepción al momento de recibir las muestras médicas. Para el Juzgado, resulta exagerado que la administración tributaria exija los cargos y/o constancias de recepción de las muestras médicas entregadas por la recurrente, cuando presentó documentación que es suficiente. **d)** Sobre el argumento referido a la vulneración del principio de igualdad, al no tenerse en cuenta que se presentó documentación que se asemeja a la señalada en la Circular N°010-2014-600000, del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, que estableció el procedimiento a seguir por el agente fiscalizador dentro de un proceso de fiscalización al sector

farmacéutico vinculado a la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría y referido a la determinación del gasto deducible por concepto de muestras médicas, se establece que la circular citada no se encontraba vigente al momento del desarrollo de los actuados, pero la documentación que se solicita coincide con la presentada por la parte demandante, por lo que debe existir una razón para solicitarla, ya que de lo contrario no habría sido incluida en la circular citada, emitida con posterioridad; así pues, se ampara este argumento. **e) Sobre la pretensión de plena jurisdicción**, se establece que se ha emitido pronunciamiento de fondo sobre los reparos, confirmando los reparos hechos por el Tribunal Fiscal sobre los gastos por concepto de vales de consumo y atenciones a médicos y reconociendo la deducción del gasto por muestras médicas, con lo que se encuentra satisfecha dicha pretensión. **f)** Sobre la pretensión subordinada, se establece que, amparando en parte las pretensiones principales formuladas, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la misma. **1.4. Primera sentencia de vista:** Emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas quinientos dieciocho), **revoca** la sentencia apelada en cuanto resuelve declarar fundada en parte la demanda y en consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017 solo en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, dejar sin efecto dicho reparo, por consiguiente, reconocer la deducción del gasto por concepto de entrega de muestras médicas correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho; y, **reformándola, declara infundada** la demanda en el referido extremo. **1.5. Recurso de casación.** Fue interpuesto por la empresa demandante Grunenthal Peruana S. A. mediante escrito del diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas quinientos treinta y seis). **1.6. Sentencia de Casación Nº 26876-2019 Lima:** Emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el uno de septiembre de dos mil veintidós (fojas quinientos noventa), declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Grunenthal Peruana S.A., en consecuencia, nula la sentencia de vista del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas quinientos dieciocho), y ordenó que la Sala Superior emita nuevo fallo. Expresa la Sala Suprema entre sus principales razonamientos que pese a haberse detallado y señalado la prueba documental presentada por la empresa demandante, se concluyó que no se acreditó fehacientemente la relación de causalidad entre los gastos por adquisiciones de muestras médicas y la generación de renta gravada o mantenimiento de su fuente productora, al no haber documentación que acredite la entrega de muestras médicas y la efectiva recepción por los profesionales médicos. Por ende, se evidencia una falta de coherencia lógica entre las apreciaciones y conclusiones de la sentencia, al no expresarse cómo se llega a la conclusión de que no se acreditó los fines promocionales de las muestras médicas, y que se aprecia una valoración parcial y no conjunta de todos los medios probatorios, por lo que se vulneró el derecho a la motivación y al debido proceso en su expresión del derecho a probar. **1.7. Sentencia de vista.** Emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la citada corte el veintisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas seiscientos treinta y ocho), revoca la sentencia apelada en cuanto resolvió declarar fundada en parte la demanda y en consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017 del veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, solo en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, y dejó sin efecto dicho reparo, por consiguiente, reconoció la deducción del gasto por concepto de entrega de muestras médicas correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho; y, reformándola, declara infundada la demanda en el referido extremo. La Sala Superior empieza por establecer que ha quedado consentida la sentencia de primera instancia en cuanto declaró infundada la demanda, respecto de las dos pretensiones principales postuladas y con relación a los reparos referidos a la entrega de vales de consumo y atenciones a médicos, así como en cuanto establece que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la pretensión planteada como subordinada, al no haber sido impugnada en tales extremos por la empresa accionante. Establece que de la revisión de la prueba documental obrante en el expediente administrativo se aprecia que la demandante: no proporcionó documentación que acreditara la entrega de muestras médicas con fines promocionales a los profesionales médicos de la salud, pues los documentos denominados "Política de Muestras Médicas" y "Política de Literatura", únicamente dan cuenta que la contribuyente tenía como política otorgar a sus principales compradores muestras médicas […]; además, la copia del Acta designación de representantes médicos 2008, sólo hace referencia a la distribución de ochentinueve representantes médicos y ocho supervisores, a las labores de éstos y a la existencia de un sistema Web en el cual se reportaban las visitas médicas –sistema que no fue puesto a disposición y/o presentado durante la fiscalización–; asimismo, los reportes de Costo de Ventas de muestras médicas y literaturas de enero a diciembre del dos mil ocho, la relación de muestras médicas y literaturas de enero a diciembre del dos mil ocho, y las Boletas de Ventas emitidas el once de enero del dos mil ocho, no consignan las fechas de las visitas efectuadas por los representantes médicos (empleados de la empresa accionante) ni identifican a los médicos beneficiarios de las muestras médicas, limitándose a detallar el código, nombre del producto (muestra médica o literatura), nombre del representante, número de guía, saldo, costo y total, entre otros, por lo que no permiten evidenciar que los productos observados hubieran sido efectivamente recepcionados por los profesionales médicos, pese a que, conforme al contenido de los documentos denominados Política de Muestras Médicas y Acta designación de representantes médicos 2008, la citada empresa contribuyente debía contar con un cronograma de visitas mensual de cada uno de los representantes médicos a las clínicas, hospitales, entre otros, un formato de distribución mensual de las muestras médicas entregadas por éstos y un sistema Web de las visitas realizadas –los cuales tampoco fueron exhibidos y/o presentados en la fiscalización–; ergo, el reparo formulado por la Administración Tributaria se encuentra debidamente justificado y ceñido a derecho, […] Asimismo, establece que la Circular Nº 010-2014-600000, del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, que contiene el procedimiento a seguir por el agente fiscalizador dentro de un procedimiento de fiscalización al sector farmacéutico en lo vinculado a la determinación de impuesto a la renta de tercera categoría, referido a la determinación de gasto deducible por concepto de muestras médicas, no resulta aplicable al caso sub judice, en tanto la fiscalización a la empresa ahora demandante y los valores emitidos ocurrieron mucho antes que la circular entre en vigencia; y que dicha circular establece que, en caso no se cuente con los documentos que acrediten la entrega de las muestras, corresponde efectuar el reparo en caso no se acredite que las muestras médicas fueron destinadas a los profesionales de la salud. Por último, la Sala Superior se pronuncia sobre los argumentos del recurso planteado por la empresa demandante en su oportunidad. **SEGUNDO. Consideraciones previas sobre el recurso de casación: 2.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. **2.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial. Supone el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resolvieron de acuerdo a la normatividad jurídica. Por ende, corresponde a los jueces de casación cuidar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **2.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto, ni supone la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte

Suprema de Justicia de la República. **2.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **2.5** De otro lado, atendiendo que en el caso particular se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de infracción normativa procesal y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal, desde que si por ello se declarase fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, supuesto en el cual carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada por la parte recurrente en el escrito de su propósito, y si, por el contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción material. **TERCERO. Anotaciones sobre la motivación de resoluciones judiciales 3.1.** Hechas las precisiones que anteceden y antes de ingresar propiamente al examen de la causal de naturaleza procesal, es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios legales que emergen del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil (principio de congruencia procesal), que permitirán una mejor labor casatoria de esta Sala Suprema con relación a los agravios denunciados. Así, tenemos: **3.2**. El numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración[4]. **3.3**. El derecho al **debido proceso** no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de garantías. Dos de los principales aspectos del mismo son el debido proceso sustantivo —que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales—, y el debido proceso adjetivo o formal —que implica las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales—. Es decir, el ámbito sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia. Este derecho se manifiesta, entre otros, en el derecho de defensa, a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, al proceso preestablecido por ley, a la cosa juzgada, al juez imparcial, a la pluralidad de instancia, de acceso a los recursos, al plazo razonable, a la motivación, entre otros. **3.4**. Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, Roger Zavaleta Rodríguez[5] precisa que: Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. […] **3.5.** Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, ha puntualizado que: […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, […] el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. **3.6**. De acuerdo al artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil, este contempla en su segundo párrafo el **principio de congruencia procesal**. Del mismo texto normativo, se extrae que en toda resolución judicial debe existir: **i)** coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir, alterar o excede las pretensiones (congruencia externa) y **ii)** armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna). En otras palabras, la plena actuación del principio en mención implica el límite del contenido de una resolución judicial; de allí que el juez al momento de resolver debe atenerse a los hechos de la demanda, de su contestación, así como de lo alegado en los recursos impugnatorios. La transgresión de este principio procesal acarrea la nulidad de la resolución judicial, conforme señalan el artículo VII del título preliminar y los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. **3.7**. Ahora bien, respecto del principio de congruencia procesal, precisamos que integra la esfera de la debida motivación, cuya vulneración configura el llamado vicio de incongruencia, que ha sido definido como el "desajuste" entre el fallo y los términos en que las partes han formulado sus argumentos de defensa o sus pretensiones. Esta anomalía puede clasificarse en incongruencia omisiva, cuando el órgano jurisdiccional no se pronuncia sobre alegaciones fundamentales formuladas oportunamente y, en incongruencia por exceso, cuando el órgano judicial otorga algo no postulado por las partes o se pronuncia sobre una alegación no expresada y la incongruencia por error, en la que se presenta ambos tipos de incongruencias, esto es, cuando la sentencia recae sobre un aspecto ajeno a lo planteado por las partes, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. **Pronunciamiento respecto a las infracciones normativas de carácter procesal CUARTO.** En atención al marco referencial enunciado en los anteriores considerandos, tenemos que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación, precisando que los hechos y los medios probatorios del proceso sub materia solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. **4.1.** Ingresando al análisis de las infracciones normativas sobre: **i)** vulneración del derecho a la debida motivación regulado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; **ii)** vulneración del derecho a la defensa, previsto en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; **iii)** vulneración del principio de congruencia reconocido en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil y el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; se advierte que ellas guardan estrecha relación porque se refieren a la vulneración del derecho al debido proceso tanto en su dimensión sustantiva como procesal; por ese motivo, y en aplicación además del principio de concentración y dirección procesal, estas

causales se revisarán en conjunto y se emitirá un pronunciamiento también en conjunto. **4.2.** En ese propósito, tenemos de la sentencia recurrida que la misma ha respetado el principio de motivación, toda vez que ha identificado los agravios del recurso de apelación y luego ha delimitado la materia controvertida, procediendo a emitir pronunciamiento absolviendo los agravios, como se desprende del desarrollo lógico jurídico que emerge del sexto al décimo quinto considerando de la misma, no sin antes haber identificado los antecedentes administrativos y trazado el marco legal relacionado a lo que es asunto de controversia. Además, ha justificado las **premisas fácticas** (que se inició el procedimiento de fiscalización respecto al impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable del 2008; que se reparó la renta neta imponible del impuesto a la renta por el concepto de gastos de muestras médicas, entre otros) y **jurídicas** (artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; inciso a), numeral 1) del artículo 62, del Texto Único Ordenado del Código Tributario), lo que le permitió llegar a la **conclusión** de que el reparo efectuado por la administración tributaria referido a los gastos por muestras médicas tiene sustento al no haberse acreditado de forma suficiente con la documentación presentada la entrega o recepción por parte de los profesionales de la salud de las muestras médicas. **4.3.** Ahora bien, en torno a la **justificación externa** de la decisión superior, este Tribunal Supremo considera que la justificación externa realizada por la Sala de alzada es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas precitadas en el punto anterior contienen proposiciones verdaderas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional; además de haber absuelto el grado de acuerdo a los agravios que sustentaron la pretensión impugnatoria, de conformidad con la competencia funcional que le otorga al juez superior el artículo 370 del Código Procesal Civil. En consecuencia, estando a la corrección de las premisas normativa y fáctica, la conclusión a la que arribó la Sala Superior fue la adecuada. En esa perspectiva, la sentencia recurrida explica y justifica las premisas factuales y jurídicas elegidas por el colegiado superior, y, en ese escenario, queda claro que la justificación interna ha sido satisfecha. Por tanto, no se observa la infracción del derecho de motivación de las resoluciones judiciales. **4.4.** Sobre la base de lo glosado, se tiene que la Sala Superior ha expuesto suficientemente las razones que sustentan la decisión de revocar la sentencia de primera instancia en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, exponiendo argumentos que surgieron como consecuencia de las alegaciones expuestas por las partes y de la valoración de la prueba documental aportada al proceso —como la obrante en el expediente administrativo—. Se aprecia que la sentencia recurrida explicó y justificó las premisas factuales y jurídicas elegidas por el colegiado superior. Cumplió con realizar una comparación o contraste con lo establecido por la Casación Nº 1249-2015 y estableció claramente que los medios probatorios obrantes en autos, a diferencia de lo ocurrido en la ejecutoria suprema antes mencionada, no son suficientes para acreditar el gasto, pues de la revisión de las políticas de la empresa, el acta de designación de representantes médicos, reportes de costo de ventas de muestras médicas y literaturas, así como de las boletas de ventas, no se puede concluir que las muestras médicas fueron recibidas por los profesionales médicos. Esto evidencia que se respetó el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al efectuarse una valoración conjunta de la prueba documental admitida. Por tal motivo, el argumento de la causal procesal referido a la motivación aparente carece de sustento y se evidencia que, en realidad, lo que pretende la parte recurrente es cuestionar el criterio de la Sala Superior, lo cual no puede ser amparado vía la presente causal, que no puede ser utilizada como mecanismo para efectuar una revaloración probatoria. **4.5.** Asimismo, respecto a la vulneración del principio de congruencia procesal, cabe señalar que este se encuentra íntimamente ligado al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, pues establece que en toda resolución judicial debe existir coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse en lo solicitado. Dicho esto, corresponde establecer que la alegada omisión de pronunciamiento sobre el motivo del reparo, consistente en determinar si se acreditó con un documento o cargo de recepción firmado por los profesionales de la salud la entrega de las muestras médicas, es necesario reiterar que la Sala Superior cumplió con pronunciarse sobre el reparo y sobre la documentación presentada, con lo cual estableció que ella no era suficiente para acreditar la entrega de las muestras médicas, por lo que se puede apreciar que el colegiado superior sí desarrolló una motivación adecuada al exponer razones suficientes que lo llevaron a establecer que no se acreditó la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud. Por estos motivos, corresponde desestimar los argumentos referidos a la vulneración del principio de congruencia procesal y a una motivación aparente, al verificarse que dio respuesta a los alegatos de las partes y se efectuó una valoración adecuada de los medios probatorios exponiendo una motivación adecuada y suficiente[6]. **4.6.** Ingresando al análisis de la infracción al debido proceso por vulneración al derecho de defensa, es conveniente recordar los fundamentos que la respaldan, en tal sentido, los argumentos que dan sustento a la causal consisten medularmente en que no se habría efectuado una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios actuados durante el procedimiento administrativo limitándose a indicar que no se acreditó la entrega de muestras médicas, sin señalar que los medios probatorios que debió haber presentado ni efectuado un contraste con el criterio fijado en la Casación Nº 1249-2015 . **4.7**. De esta manera, a efectos de poder determinar si se ha vulnerado el derecho a defensa de la parte recurrente, es pertinente tener en cuenta que el debido proceso implica el cumplimiento dentro de un proceso judicial de los derechos y garantía mínimos con que debe contar todo justiciable para que una causa pueda resolverse con justicia. Así, tenemos que dentro de estas garantías mínimas se encuentra el derecho de defensa, el mismo que se vulnera cuando el titular o titulares del derecho "se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, […], se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos de defensa".[7] **4.8**. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se comprueba que la parte recurrente no se ha visto impedida de poder aportar y producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión y, por otro lado, como se ha dejado establecido en los acápites que anteceden, la Sala Superior cumplió con efectuar una valoración conjunta y razonada de los documentos obrantes en el expediente administrativo, gracias a lo cual señaló que los mismos no son suficientes ni idóneos para acreditar la entrega de las muestras médicas a los profesionales de la salud. De igual manera, en la sentencia materia de alzada se tiene que el colegiado superior cumplió con establecer que en el presente caso, a diferencia de lo ocurrido en la Casación Nº 1249-2015, no se cumplió con acreditar la entrega de las muestras médicas, de modo tal que los argumentos referidos a la vulneración del derecho a la defensa carecen de sustento y, por el contrario, ponen de manifiesto una vez más que la infracción normativa se sustenta en el desacuerdo de la parte recurrente con el criterio de los jueces superiores; por lo que se puede concluir que no se afecta el derecho de defensa al desestimar la pretensión de la empresa recurrente[8] mediante una decisión que evidencia haber sido emitida con una debida motivación, en tanto expresa los fundamentos de hecho y derecho que justifican su decisión. **4.9.** De esta forma, este Tribunal Supremo concluye que la Sala Superior ha expuesto suficientemente las razones que sustentan la decisión de revocar la sentencia apelada —que declaró fundada en parte la demanda y nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017 sobre el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas— y, reformándola, declarar infundada la demanda en dicho extremo, observando, cautelando y respetando el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, este último desde que la sentencia de la Sala de revisión cumple con exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que dan cuenta del fallo adoptado. Por tal motivo, los argumentos de las causales procesales denunciadas carecen de sustento, pero se evidencia además que, en realidad, lo que pretende la parte recurrente es cuestionar el criterio de la Sala Superior, lo cual no puede ser amparado vía recurso de casación. Por tanto, las infracciones normativas procesales propuestas deben ser declaradas **infundadas. 4.10**. Refuerza lo esgrimido considerar que la motivación, como parte del debido proceso, no exige el acogimiento a una determinada técnica argumentativa, sino la expresión de buenas razones, sustentos fácticos y jurídicos y la corrección lógica formal del razonamiento judicial. Se observa que en el caso que nos convoca todos estos pasos, lineamientos y parámetros se han visto realizados en el texto de la sentencia de vista cuestionada, al guardar ella una coherencia lógica y congruente con la pretensión demandada y responder a los

agravios denunciados, como ya se explicó. **Pronunciamiento respecto de las infracciones normativas de carácter material QUINTO. Respecto a la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF 5.1.** En tal contexto, a fin de establecer si ha existido la infracción normativa denunciada, debemos partir citando su contenido normativo, para luego relacionarlo con los hechos con relevancia jurídica materia del presente caso, fijados por las instancias de mérito. Así, tenemos: **Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta** Artículo 37. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia, son deducibles: […] Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de este artículo, entre otros. **5.2.** Ahora bien, las premisas fácticas (hechos) fijadas por las instancias de mérito (conforme al expediente administrativo), son las siguientes: 1. Mediante Carta de Presentación Nº 120011384230-01-SUNAT y Requerimiento Nº 0122120002336, la administración tributaria inició un procedimiento de fiscalización respecto al impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable del dos mil ocho. 2. En dicho procedimiento de fiscalización, se reparó la renta neta imponible del impuesto a la renta dos mil ocho por conceptos de vales de consumo, atenciones a médicos y gastos de muestras médicas que no cumplen con el principio de causalidad; por lo que se emitió la Resolución de Determinación Nº 022-003-0031221, en tanto no había quedado demostrado que, efectivamente, se entregaron dichas muestras médicas a los profesionales de la salud, así como la Resolución de Multa Nº 022-002-0012787 por la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 3. Al no encontrarse conforme, la recurrente interpuso recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado por la Resolución de Intendencia Nº 0250140018114/SUNAT. 4. Acto seguido, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Resolución de Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017, notificada a la demandante el dos de octubre de dos mil diecisiete, que confirma la resolución de Intendencia antes señalada. **5.3.** En ese panorama y de acuerdo a los antecedentes administrativos detallados, se desprende que el debate en sede administrativa versó, entre otros, en determinar si el reparo por los gastos de muestras médicas fue debidamente acreditado y si las muestras médicas fueron entregadas a los profesionales de la salud. **SEXTO.** Ahora bien, a efectos de emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa materia de análisis, referida al reparo por gastos de muestras médicas, conviene recordar los argumentos de la empresa. Estos consisten en que se ha realizado una interpretación errónea del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta al condicionar la deducción del gasto por muestras médicas a la presentación de un documento en que conste que las muestras médicas fueron recibidas por los profesionales de la salud. Añade que dicho documento no ha sido establecido como requisito en la norma y que de una apreciación razonada de la documentación aportada se puede concluir que las muestras médicas fueron entregadas. Sobre el particular, es pertinente tener en cuenta lo siguiente: a) El primer párrafo del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, prescribe que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por dicha ley. Seguidamente, en el último párrafo de dicho dispositivo normativo, se establece que los gastos deben ser necesarios para producir y mantener la fuente, y cumplir con el criterio de razonabilidad. b) Como vemos, el citado artículo 37 regula el **principio de causalidad**, en virtud del cual toda empresa debe estar en condiciones de demostrar que el gasto que pretende deducir para efectos del impuesto a la renta es razonablemente necesario y que está destinado a contribuir con la generación de las rentas gravadas de dicha empresa y con el mantenimiento de su fuente. Por tal motivo, resulta necesario acreditar, en primer lugar, el gasto efectuado, que en el caso de autos se configura en la entrega de la muestra médica. **6.1**. De esta manera, el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta no establece una forma o nivel de probanza de la causalidad del gasto, sino solo dispone que haya quedado establecido que el gasto debe ser —además de necesario— indispensable, de modo que evidencie que fue precisamente dicho gasto el que generó la renta gravada. Sin embargo, en el presente caso tenemos que la sentencia de mérito requiere la acreditación de la entrega comprobada de las muestras médicas a los profesionales de salud. Por consiguiente, corresponde verificar si el gasto por muestras médicas ha sido debidamente acreditado, de modo que se evidencia su causalidad. **6.2** Así, tenemos que se aprecia que en el Anexo Nº 4 de la Resolución de Determinación (fojas 305 del tomo 8 del expediente administrativo), la administración tributaria reconoce que la empresa recurrente exhibió documentación consistente en: **i)** las Políticas de Muestras Médicas; **ii)** Políticas de Literaturas; **iii)** costo de ventas de muestras médicas por detalle de cada producto (enero a diciembre); **iv)** costo de venta de material promocional (literaturas) por detalle de cada producto (enero a diciembre); **v)** detalle de salidas de muestras médicas por representante y unidades con su respectivo comprobante de pago (boleta de venta), enero a diciembre; **vi)** detalle de salidas de material promocional (literaturas) por representante y unidades con su respectivo comprobante de pago (boleta de venta), enero a diciembre; para luego concluir la administración tributaria que reconoce que el gasto por muestras médicas es susceptible de ser destinado a la promoción de ventas, pero que efectúa el reparo bajo el argumento de que no se logró acreditar la entrega final de las muestras médicas a los profesionales de la salud. Esto es, la administración tributaria reconoce que se ha acreditado la del gasto; sin embargo, exige se acredite la causalidad del referido gasto. **6.3** Ahora bien, en la Política de Literatura del Departamento de Marketing de ABL Pharma (fojas 573 del tomo IV del expediente administrativo), la empresa estableció una estrategia para promocionar y publicar las bondades de sus productos. Dicha estrategia tuvo incidencia directa en "los agentes que intervienen de manera decisiva" en la compra de los productos, vale decir, en el personal médico que prescribe los medicamentos a los pacientes. Así, se aprecia: B. ALCANCE En efecto, a fin de promocionar y publicitar nuestros productos, se plantea recurrir a un tipo de difusión particular a fin de dar a conocer las bondades de nuestros productos entre los agentes que Intervienen de manera decisiva en el proceso de compra de los mismos, resultando éstos, en cierta forma más Importantes que los propios consumidores directos (pacientes), quienes los adquieren por prescripción médica. Así, resulta preponderante que el médico tenga a su alcance y de manera permanente, la mayor Información sobre nuestros productos, así como la calidad del proceso seguido por nuestro laboratorio en su fabricación; este conocimiento redundará en el Incremento de nuestra ventas ya que las mismas se miden, entre otros factores, por el incremento en el recetaje que estos utilizan; así como en un mejor desempeño profesional en beneficio de sus pacientes, que tendrán acceso a medicamentos y tratamientos Innovadores y de calidad. **6.4**. Por consiguiente, la empresa recurrente ha acreditado el gasto mediante la documentación que puso a disposición de la administración tributaria. Y, además, se evidencia de la política de literatura que la causalidad de dicho gasto está vinculada al incremento de las ventas mediante el aumento del "recetaje" que realizan los médicos a quienes se ha proporcionado las muestras médicas, y, con ello, el incremento de la renta gravada. Por consiguiente, la sentencia de alzada **infringe el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta**, al requerir un requisito no establecido en el texto del dispositivo, de modo que le atribuye un sentido equivocado, que ha determinado que se arribe a una errada conclusión. **De ese modo, corresponde estimar esta infracción normativa. SÉTIMO. Sobre la infracción normativa referida a la vulneración del derecho a la igualdad contenido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política 7.1.** A efectos de emitir pronunciamiento sobre esta infracción normativa, corresponde tener en cuenta, a modo de resumen, los argumentos en que la empresa recurrente sustenta la causal. Consisten en que se le ha dado un trato diferenciado frente a situaciones similares, pues no resulta razonable que se le requiera la presentación de un cargo de recepción firmado por un profesional de la salud, cuando es suficiente la acreditación de la entrega de las muestras médicas a los

representantes médicos mediante la información presentada por la empresa, que es similar a la señalada en la Circular Nº 010-2014-600000; asimismo, indica que debió aplicarse el criterio establecido en la Casación Nº 1249-2015. **7.2.** Sobre el particular, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido que una diferencia de trato que se realiza sobre bases objetivas y razonables no puede ser considerada como una vulneración del principio de igualdad. De esa forma, si la situación resulta similar, esta desigualdad constituye necesariamente una discriminación. Así, tenemos que en los Expedientes Nº 00009-2007-PI/TC y Nº 0010-2007-PI/TC (expedientes acumulados), estableció lo siguiente: Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.[9] **7.3.** De esta manera, la recurrente argumenta que no resulta razonable que se le requiera documentación que no se encuentra en la Circular Nº 010-2014-600000, en contravención del criterio de la Casación Nº 1249-2015[10]. En ese sentido, esta última jurisprudencia, en concepto de la recurrente, debió ser considerada como el término de comparación para juzgar si se vulneró el principio constitucional de igualdad al tratarse de un caso en el que también estuvo en controversia la acreditación de la entrega de muestras médicas por parte de una empresa farmacéutica, por lo que se trata de un caso similar o análogo. **7.4.** Ahora bien, la Casación Nº 1249-2015 estableció que no correspondía requerir la acreditación de entrega de cargo a los profesionales de salud (médicos), en tanto dicho personal no depende de la empresa fiscalizada: 5.2. [...] En ese sentido, se señala que para la entrega de muestras de medicamentos, conforme a los actuados, éstas son repartidas a profesionales de la salud, los mismos que no tienen una relación de dependencia con la empresa comercializadora que realiza la entrega, razón por la cual dichos profesionales no se encontraban en la obligación de firmar o emitir algún comprobante, recibo o guía de remisión en la cual permita acreditarse fehacientemente que dichas entregas de medicamentos hayan sido repartidas a las personas correspondientes, razón por la cual no resulta razonable la exigencia de la Administración Tributaria de documentación adicional. **7.5.** Teniendo en cuenta lo antes expuesto y habiéndose establecido en los considerandos precedentes que en el caso de autos la empresa acreditó la causalidad de las muestras médicas a los profesionales de la salud, se puede concluir que la Sala Superior no ha interpretado de manera adecuada el principio de causalidad, con atención a una valoración conjunta de los actuados, conforme se desprende del articulo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, sino que exige la acreditación excesiva de un extremo fáctico (cargo de entrega de muestras medicas) no vinculante y no establecido en la norma, y soslaya acervo documentario adicional recabado en instancia administrativa pertinente a la acreditación de la causalidad. De esa forma, se habría vulnerado el principio de igualdad al establecerse un trato diferenciado respecto al criterio establecido en la ejecutoria suprema antes referida, pues dicha ejecutoria suprema y el caso de autos son similares y ha quedado establecido, de forma objetiva, que la documentación presentada en cada caso contiene idoneidad y calidad probatoria, lo cual incluso ha sido reconocido por el colegiado superior de mérito en la sentencia de vista. En ese sentido, deviene **fundada** esta infracción. **OCTAVO**. Por tanto, en atención a que se ha estimado el recurso de casación en el extremo de la infracción normativa del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y la vulneración del derecho a la igualdad contenido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política. En consecuencia, corresponde casar la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, confirmar la sentencia de primera instancia en dicho extremo. **III. DECISIÓN** Por tales consideraciones, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Grunenthal Peruana Sociedad Anónima**, mediante escrito del trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas seiscientos cincuenta y nueve a setecientos treinta y ocho). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, del veintisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas seiscientos treinta y ocho a seiscientos cincuenta y tres), y, **actuando en sede de instancia, CONFIRMARON** la sentencia apelada, contenida en la resolución número nueve, del treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos dieciséis), que declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, declara nula la resolución del Tribunal Fiscal Nº 07425-1-2017, solo en el extremo referido a los gastos por entrega de muestras médicas, dejó sin efecto dicho reparo y, por consiguiente, reconoció la deducción del gasto por concepto de entrega de muestras médicas correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por Grunenthal Peruana Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** el señor Juez Supremo Pereira Alagón. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, **PEREIRA ALAGÓN,** DELGADO AYBAR, TOVAR BUENDÍA.

---

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 HITTERS, Juan Carlos (2002). Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión consultiva OC-9/87 del seis de octubre de mil novecientos ochenta y siete "Garantías Judiciales en Estados de Emergencia", párr. 28.

5 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E (2014). La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica. Lima, Editora y Librería Jurídica Grijley; pp. 207-208.

6 Sentencia recaída en el Expediente Nº 05601-2006-PA/TC, del dieciséis de julio de dos mil siete; fundamento jurídico 3.

7 Sentencia recaída en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, del catorce de noviembre de dos mil cinco; fundamento jurídico 24.

8 [...] No se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de defensa cuando se desestima una pretensión luego de ponderar la prueba y arribar a la improbanza de su causa petendi, salvo que se denuncie en forma debida que [...] la valoración fue arbitraria (vulnerando los principios del derecho probatorio) o que existen errores del razonamiento judicial (errores in cogitando).
CASACIÓN Nº 128-01-Cono Norte, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de julio de dos mil uno.

9 Publicada el trece de septiembre de dos mil siete en el diario oficial El Peruano, fundamento 20

10 La situación jurídica propuesta como término de comparación debe ostentar propiedades que, desde un punto de vista fáctico y jurídico, resulten sustancialmente análogas a las que ostenta la situación jurídica que se reputa discriminatoria. Desde luego, ello no implica exigir que se trate de situaciones idénticas, sino tan solo de casos entre los que quepa, una vez analizadas sus propiedades, entablar una relación analógica prima facie relevante.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0012-2010-PI/TC, publicada el siete de enero de dos mil doce en el diario oficial El Peruano, fundamento jurídico 6 b).

C-2245460-9

CASACIÓN Nº 32647-2022 LIMA

TEMA: CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
SUMILLA: El literal c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario no establece que el inicio de una fiscalización por el impuesto a la renta del ejercicio sea causal de interrupción respecto del cómputo del plazo de prescripción del impuesto a la renta del ejercicio 2007; además, el artículo 40 del Código Tributario no obliga a la administración tributaria a compensar de oficio una deuda tributaria, sino que ello es una potestad de la administración.
PALABRAS CLAVE: prescripción, impuesto a la renta, compensación de deuda tributaria, impuesto temporal a los activos netos - ITAN

Lima, dieciocho de julio de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la demandante **Interseguro Compañía de Seguros S.A.**, mediante escrito del diecisiete

de mayo de dos mil veintidós (folios 189-253 del expediente judicial No EJE[1] - tomo I), presentó recurso de casación contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, del veintinueve de abril de dos mil veintidós (folios 165-181), que **confirmó** la sentencia apelada contenida en la resolución número catorce, del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, que declaró **infundada** la demanda. Antecedentes Demanda Mediante escrito del tres de marzo de dos mil diecisiete, Interseguro Compañía de Seguros Sociedad Anónima interpuso demanda contencioso administrativa (folios 343-379, Internacional Accounting Standarda Committee las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10040-1-2016, en cuanto: **1.** Confirma las Resoluciones de Intendencia de números 0150140011779 0150140011780 y 0150140011782 (del 27 de febrero de 2015), que declararon infundadas las reclamaciones formuladas contra las Resoluciones de Intendencia Nº 012-180-0007260/SUNAT y Nº 012-180-0007261/SUNAT (ambas del 19 de setiembre de 2014), que declararon improcedentes las solicitudes de devolución de los pagos a cuenta en exceso del impuesto a la renta de enero a diciembre de 2008 y del saldo no aplicado del Impuesto temporal a los activos netos - ITAN del ejercicio 2008, y contra las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0048450 a Nº 012-003-48462, giradas por los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de 2008 y por el impuesto a la renta del ejercicio 2008. **2.** Se pronuncia sobre la Resolución de Intendencia Nº 0150140011778 (que declaró infundada la reclamación contra la Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007259/SUNAT, que declaró improcedente la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2008), convalidando el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2008, conforme a la determinación y cálculo que del mismo efectúa la administración tributaria. **Segunda pretensión principal:** Solicita se emita pronunciamiento de plena jurisdicción que disponga: **1**. Se declare que la acción para efectuar compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre del ejercicio 2008, no se encontraba prescrita al 19 de diciembre de 2013, debido a que el inicio del procedimiento de fiscalización relativo al impuesto a la renta 2009 en el año 2012, configuró la causal de interrupción del plazo de prescripción del plazo de prescripción del literal c) numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario (acción dirigida a solicitar devolución o efectuar compensación). **2.** Se reconozca expresamente que la compañía compensó válidamente la deuda tributaria asociada a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre del ejercicio 2008, contra el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 207, ascendente a S/ 4'655,574.00 (cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro soles con cero céntimos), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Tributario. **Pretensión accesoria a la segunda pretensión principal:** Solicita que: **1.** Se disponga que la autoridad tributaria proceda a devolver el saldo del impuesto temporal a los activos netos - ITAN del ejercicio 2008 no aplicado, ascendente a S/ 1'271,149.00 (un millón doscientos setenta y un mil ciento cuarenta y nueve soles con cero céntimos) más los intereses correspondientes a la fecha de la devolución efectiva. **2.** Se disponga que la autoridad tributaria devuelva los pagos indebidos y/o en exceso realizados en efectivo, por lo pagos a cuenta del impuesto a la renta. **3.** Se disponga que la autoridad tributaria devuelva el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2008 por S/ 5'709,587.00 (cinco millones setecientos nueve mil quinientos ochenta y siete soles con cero céntimos) más los intereses correspondientes a la fecha en que se haga efectiva la devolución Sus argumentos son los siguientes: a) En el presente caso, la controversia se centra en determinar si la facultad para compensar el saldo a favor del impuesto a la renta 2007 estaba prescrita al 19 de diciembre de 2013, como señalan la administración tributaria y el Tribunal Fiscal o si esta no había prescrito en la fecha en mención por la configuración de la causal de interrupción de la prescripción por el inicio de la fiscalización del impuesto a la renta 2009. b) La administración tributaria tiene por práctica común compensar de oficio las deudas tributarias contra los créditos tributarios de los contribuyentes, sin ningún orden temporal razonable para su aplicación, aplicando los créditos más nuevos y dejando de lado los más antiguos, a fin de provocar la prescripción de los últimos y con ello apropiarse indebidamente de los mismos, no obstante que son de titularidad y propiedad indiscutible del contribuyente. c) Ante la determinación de deuda por el ejercicio 2009 (en el año 2012), la administración tributaria bien pudo compensar de oficio dicha deuda contra el saldo a favor - SAF del impuesto a la renta 2007; sin embargo, solo compensa la deuda contra el SAF del impuesto a la renta de 2008; el fin de esto era dejar pasar el tiempo a fin de que prescriba el SAF del impuesto a la renta 2007 y así apropiarse del mismo. No obstante, no contaba con que el propio inicio de la fiscalización por el impuesto a la renta 2009 que concluye en la determinación de deuda tributaria por dicho periodo implicaba la configuración de causal de interrupción de prescripción tributaria del SAF del impuesto a la renta 2007. **Contestaciones de la demanda** El **Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, mediante su Procuraduría Pública**, contesta la demanda (folios 483-494, tomo I), bajo los siguientes fundamentos: a) La determinación de una deuda tributaria en el periodo fiscalizado y la posible compensación con un saldo a favor es consecuencia derivada del incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, incumplimiento que es detectado en el procedimiento de fiscalización, pero de ninguna manera es la finalidad de este. b) El numeral 4 del artículo 55 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que el saldo a favor originado por rentas de tercera categoría generado en el ejercicio inmediato anterior deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y no se solicite su devolución, y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquel en que se presente la declaración jurada donde se consigne dicho saldo y en ningún caso podrá ser aplicado contra el anticipo adicional. c) El artículo 62 del Código Tributario y el Reglamento de Fiscalización señalan que la única finalidad del inicio de una fiscalización es verificar o revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las contribuyentes y no, como erróneamente señala la demandante, que su finalidad sea encontrar deudas para compensar con los créditos o saldos a favor de los contribuyentes. d) La compensación es una consecuencia de la fiscalización, mas no su finalidad, mientras que la finalidad de la fiscalización es verificar o hacer el control de las obligaciones tributarias de las contribuyentes, y que la determinación de una deuda y una posible compensación solo son consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. e) La fiscalización del 2012 respecto del impuesto a la renta de 2009 no es el supuesto regulado en el inciso c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario; en consecuencia, la compensación efectuada por la demandante realizada el 19 de diciembre de 2012 no surtió efectos, puesto que para dicha fecha la prescripción de la acción de compensar ya había prescrito. f) No existe norma, tal como lo reconoce la demandante en su demanda, que establezca que la administración está obligada a efectuar la compensación de oficio con los saldos a favor más antiguos. **La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante su Procuraduría Pública, contesta la demanda (folios 428-438, tomo I) con los siguientes fundamentos: a) La acción de la empresa demandante para compensar el saldo a favor 2007 estaba prescrita al 19 de diciembre de 2013. b) De la revisión del artículo 62 del Código Tributario y del Reglamento de Fiscalización, Decreto Supremo Nº 085-2007-EF, se tiene que la única finalidad del inicio de una fiscalización es verificar o revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y no, como erróneamente señala la demandante, encontrar deudas para compensar con los créditos o saldos a favor de los contribuyentes. c) La determinación de una deuda tributaria en el periodo fiscalizado y la posible compensación con un saldo a favor es una consecuencia derivada del incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, incumplimiento que es detectado en el procedimiento de fiscalización, pero de ninguna manera es la finalidad de este. Refiere que la administración no estaba en la obligación de efectuar la compensación de oficio respecto a la deuda tributaria del ejercicio 2009 contra el saldo a favor del ejercicio 2007. d) La demandante no cuestionó la compensación de oficio efectuada por la administración de la deuda tributaria del ejercicio 2009 contra el saldo a favor del ejercicio 2008; con ello la consintió. **Sentencia de primera instancia** Mediante sentencia del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (folios 603-665), el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró **infundada** la demanda. Expuso los siguientes fundamentos: […] se observa que con la presentación de las segundas declaraciones rectificatorias de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría de los periodos tributarios de marzo a diciembre de 2008 realizadas con fechas 23 y 26 de mayo del 2014, la demandante eliminó la compensación o aplicación del saldo a favor del ejercicio anterior (2007) contra las mencionadas obligaciones, no

obstante, pretendió su deducción como pagos previos. Habiéndose verificado que no existen en los reportes de la Administración Tributaria los citados pagos por los citados pagos por los tributos mencionados, de lo que también se dejó constancia en las resoluciones de determinación impugnadas, tal como da cuenta en el anexo a la Resolución de Determinación 012-003-0048461 y los anexos 1 y 3 de la resolución de determinación 012-003-0048462, no procedía admitir la deducción declarada por concepto de "pagos previos". […] Conforme a los hechos antes detallados anteriormente, se tiene que el cómputo de la prescripción para solicitar la compensación, así como para solicitar su devolución del saldo a favor del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2007 se inició el día 01 de enero del 2009 y de no mediar actos de interrupción o suspensivos, finalizaría el 01 de enero del 2013, reflejándose ello en la presentación de la declaración jurada (formulario 660 Nº de orden 72076 de fecha 26 de marzo del 2008). […] la devolución del saldo a favor solicitada por la demandante tuvo su origen en el ejercicio 2007, lo que queda acreditado con la declaración jurada anual del impuesto a la renta del aludido ejercicio, y que el mencionado saldo a favor se acreditó en la fecha de presentación de la citada declaración, hecho que ocurrió el día 28 de marzo de 2008 , siendo además que el siendo además que el plazo de prescripción del indicado saldo a favor se plazo de prescripción del indicado saldo a favor se inició el 01 de enero de 2009, el cual – de no existir causales de interrupción y/o suspensión, culminaría el primer día hábil del año 2013. culminaría el primer día hábil del año 2013. En consecuencia, dado que no obra en autos algún acto que interrumpa o suspenda el plazo de prescripción antes aludido es entonces que al 19 de diciembre de 2013, fecha en que la demandante presentó las declaraciones juradas rectificatorias mensuales de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre de 2008, el plazo prescriptorio antes aludido ya había operado. Finalmente, se observa también que la demandante en su declaración jurada del impuesto a la renta del año 2007 marcó la opción 1 en el casillero 137 de su declaración jurada anual, correspondiente a la devolución, sin que esta haya presentado la solicitud de devolución respectiva; además, se observa también que si bien la demandante pudo modificar la opción elegida, no realizó ningún acto tendiente a ejecutar el cambio de dicha opción a la de compensación antes del término prescriptorio. […] Conforme se aprecia de las declaraciones detalladas con las segundas rectificaciones, la demandante eliminó la aplicación del ITAN pagado en el ejercicio, no obstante presentó con fecha 26 de mayo de 2014 otras rectificatorias en las que se aplica íntegramente el saldo del ITAN. Respecto a la regulación del citado impuesto, además de presentar la declaración jurada anual original del impuesto a la renta del ejercicio gravable 2008 presentó con fechas 20 de diciembre de 2013 y 23 de mayo del 2014, las declaraciones rectificatorias por los mismos periodos, en donde rectificó con la primera el crédito del ejercicio 2008 al agregar saldo no aplicado del ITAN la suma de S/ 1'271149.00, determinando con ello un crédito con derecho a devolución en el ejercicio 2008. Sin embargo, con la segunda rectificatoria presentada, eliminó el monto declarado con el saldo de ITAN no aplicado y agregó un importe de pagos efectuados con anterioridad, no resultando por tanto, un pago en exceso que devolver por ITAN del ejercicio 2008. […] De los hechos comprobados del trámite del procedimiento administrativo – conforme se detalla en el considerando quinto de la presente resolución, no corresponde amparar la pretensión de plena jurisdicción planteada por la demandante, tanto más si lo que en realidad propone la inaplicación de una norma – en el presente caso lo establecido en el en el literal c) numeral 4 del artículo 45° del Código Tributario en favor de lo descrito en el artículo 92° del mismo cuerpo legal – lo cual resulta del todo contrario al principio de legalidad y razonabilidad establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pues no se puede tolerar ni menos consentir la inaplicación de una norma legal en favor de un interés particular que no tenga un sustento jurídico más allá del mero interés económico y que no suponga a la vez una vulneración de un bien jurídico superior por parte de quien la invoca. **Sentencia de vista** Mediante sentencia de vista número diecinueve, del veintinueve de abril de dos mil veintidós (folios 165-181, tomo II), la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, **confirma** la sentencia apelada contenida en la resolución número catorce, del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. Señala los siguientes fundamentos: Examinados los actuados administrativos se aprecia que el saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007 que se acredita con la presentación de la declaración jurada anual del citado impuesto, esto es, fecha 26 de marzo del 2008, por ello, de acuerdo al artículo 43 y numeral 5 del artículo 44 inciso del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el cómputo del término prescriptorio para solicitar la compensación de dicho saldo a favor del ejercicio 2007 se inició el 01 de enero del 2009, culminando -de no existir actos interruptorios y suspensivos- el primer día hábil del 2013, sin embargo, la demandante aduce que existen actos interruptorios de la prescripción, como el inicio del procedimiento de fiscalización del ejercicio 2009, razón por la cual -afirma- no ha prescrito la acción para solicitar tal compensación. Al respecto, el inicio del procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2009 no se encuentra contemplado como supuesto de interrupción del plazo prescriptorio como lo alega la demandante conforme se ha desarrollado en el considerando cuarto de la presente sentencia, por ende, a la fecha en que la demandante presentó las declaraciones juradas rectificatorias mensuales del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008, esto es, el 19 de diciembre del 2013, la acción para solicitar la compensación de dicho saldo a favor del ejercicio 2007 se encontraba prescrita. Si bien es cierto de los actuados se advierte que como producto de la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2009, se emitió la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030033 en el año 2012, en la que se ha determinado la compensación de la deuda tributaria del aludido ejercicio con el saldo a favor del 2008, sin embargo, es de señalar que la fiscalización no necesariamente implica que dicho acto busque siempre la compensación de una deuda tributaria, como en el presente caso, que la demandante pretende que obligatoriamente la Administración compense de oficio el saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007 con las deudas del Impuesto a la Renta del ejercicio 2009, al ser un crédito más antiguo, máxime si las propias normas del Impuesto a la Renta contempla que solo se puede compensar el saldo a favor contra los pagos a cuenta del ejercicio siguiente, esto es, del ejercicio 2008, siempre y cuando se exteriorice en la declaración jurada consignando la opción compensación, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, puesto que en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007, con PDT 662 Nº 312340-62 del 03 de abril del 2009, la accionante optó por la opción de devolución de dicho saldo a favor del 2007, esto es, la actora manifestó su voluntad de que se aplique la devolución mas no la compensación. Ante ello, la demandante en sus declaraciones rectificatorias de los pagos a cuenta de los meses marzo a diciembre 2008 recién con fecha 19 de diciembre del 2013, al solicitar la compensación de dicho saldo a favor del Impuesto a la renta del ejercicio 2007, sin embargo, ello ya no resulta posible, toda vez que ya había operado la prescripción, por lo que carece de asidero los agravios de la demandante. […] Al respecto, se debe señalar que: i) en la declaración jurada original de los pagos a cuenta de marzo a diciembre del 2008, se consigna el Saldo del ITAN aplicado, ii) en la primera rectificatoria de la mencionada declaración se elimina el saldo del ITAN, iii) en la segunda rectificatoria, la demandante sí aplica íntegramente el saldo del ITAN. Sin embargo, en las rectificatorias de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008 se aprecia que en la primera rectificatoria se consigna el saldo no aplicado del ITAN, mientras que en la segunda rectificatoria se eliminó el monto declarado por saldo de ITAN no aplicado, agregando los pagos efectuados con anterioridad, por ello, se evidencia que no existe pagos en exceso del saldo no aplicado por ITAN. En ese sentido, atendiendo que producto del procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008 se emitió la Resolución de Determinación Nº 012-003-0048462, en la cual se aprecia que ya no existe saldo del ITAN pendiente de aplicación, la determinación efectuada en dicho valor resulta válido y eficaz mientras no se deje sin efecto judicialmente conforme lo dispone los artículos 7 y 192 de la Ley Nº 27444, en consecuencia, se debe desestimar dicho agravio, por lo que corresponde desestimar la primera pretensión principal de la demanda. Finalmente, en cuanto al agravio iv) de la apelante, es de manifestar que atendiendo a que en la presente sentencia se ha emitido un pronunciamiento de fondo en cuanto a los extremos que también son materia de controversia en la segunda pretensión principal, en la cual se ha desestimado la primera pretensión principal de la demanda, por lo que corresponde desestimar también la segunda pretensión principal, en consecuencia, carece de asidero dicho agravio. **Materia controvertida en el presente caso** Con relación a los hechos determinados por las instancias de mérito y en concordancia con las causales por la que fueron admitidos los recursos de casación interpuestos —infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución

Política del Estado; infracción normativa material del literal c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario y del principio de razonabilidad en sede administrativa; infracción normativa material del literal c) del numeral 4 del artículo 45 y del artículo 40 del Código Tributario, así como del principio de razonabilidad en sede administrativa y del derecho de propiedad de la empresa; infracción normativa material del artículo 92 del Código Tributario; infracción normativa material del artículo 38 del Código Tributario; infracción normativa material del inciso b) del artículo 92 del Código Tributario, así como de los artículos 70 y 74 de la Constitución Política del Estado—, concierne a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió las normas citadas, al confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante auto de calificación del treinta de noviembre de dos mil veintidós (folios 307-316 del cuaderno de casación), la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Interseguro Compañía de Seguros Sociedad Anónima, por las siguientes causales: a) Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado b) Infracción normativa material del literal c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario y del principio de razonabilidad en sede administrativa c) Infracción normativa material del literal c) del numeral 4 del artículo 45 y del artículo 40 del Código Tributario, así como del principio de razonabilidad en sede administrativa y del derecho de propiedad de la empresa d) Infracción normativa material del artículo 92 del Código Tributario e) Infracción normativa material del artículo 38 del Código Tributario f) Infracción normativa material del inciso b) del artículo 92 del Código Tributario, así como de los artículos 70 y 74 de la Constitución Política del Estado **CONSIDERANDO PRIMERO. El recurso de casación 1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **Análisis de la causal procesal planteada por la demandante SEGUNDO. Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 2.1.** Para proceder con el análisis, corresponde citar el dispositivo legal cuya infracción se alega: **Constitución Política del Estado** Artículo 139. - PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. **2.2.** Como argumentos que sustentan la infracción normativa, la recurrente señala que la Sala Superior incurre en una inexistente motivación respeto al agravio del enriquecimiento indebido por parte de la administración tributaria previsto en el artículo 1954 del Código Civil en perjuicio de la empresa, pues se solicitaba que la Sala Superior "diera respuesta a cada uno de los argumentos que sustentan [el] recurso de apelación". La parte recurrente menciona que buscaba que se dé respuesta a cada uno de los agravios, ya que el colegiado superior debe expresar por qué los rechaza. En el argumento en cuestión se expresa lo siguiente: el Juzgado no consideró que la administración tributaria tenía el deber de compensar de oficio el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 con la deuda tributaria del impuesto a la renta del ejercicio 2009 determinada mediante la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030033, ello en atención al orden temporal razonable de imputación de los créditos tributarios. Sobre este agravio no se dijo nada, por lo que en la sentencia hay ausencia absoluta de pronunciamiento y ello afecta el derecho a la motivación. **2.3.** El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y que, entre otros, comprenden el deber de los jueces de observar los derechos procesales de las partes y el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquier etapa del proceso. **2.4.** El debido proceso comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, ello en concordancia con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **2.5.** Con relación a la infracción del deber de motivación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, se ha pronunciado de la siguiente manera: 77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. **2.6.** En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Primer Pleno Casatorio, Casación Nº 1465-2007 Cajamarca, ha asumido similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido de que: La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente. **2.7.** La motivación de lo que se decide es interna y externa. La primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en sentido estricto[4], con implicancia en el control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[5]. En esa perspectiva, la justificación externa requiere **i)** que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; **ii)** que toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y **iii)** que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión[6]. **2.8.** En el marco conceptual descrito, la motivación puede mostrar diversas patologías, que, en estricto, son: **i)** la motivación omitida, **ii)** la motivación insuficiente, y **iii)** la motivación contradictoria. La primera hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es, cuando no hay rastro de la motivación misma. La segunda se presentará cuando exista motivación parcial que vulnera el requisito de completitud; comprende la motivación implícita, que se da cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se hace inferir de otra decisión del juez, y la motivación por relación, cuando no se elabora una justificación independiente sino se remite a razones contenidas en otra sentencia; asimismo, la motivación insuficiente se presentará

principalmente cuando no se expresa la justificación de las premisas, que por tanto no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra. Finalmente, estaremos ante una motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es contradictoria. **2.9.** El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC señala que el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. **2.10.** De esta manera, al juez supremo no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez superior ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. **Análisis del caso concreto 2.11.** En el caso concreto, se advierte que los argumentos de la recurrente se basan en señalar que en la sentencia de vista no habría existido pronunciamiento respecto de un extremo del recurso de apelación, referido al enriquecimiento indebido por parte de la administración tributaria, previsto en el artículo 1954 del Código Civil; ello, debido a que considera, que, de acuerdo a lo que aparece en el recurso de apelación, se estaría desconociendo el derecho de solicitar la compensación del saldo a favor del ejercicio gravable 2007, con los pagos a cuenta del ejercicio 2008, al sostener que el mismo se encontraba prescrito. **2.12.** Lo expuesto por la empresa recurrente, nos lleva a examinar si el colegiado de mérito se pronunció acerca de la prescripción, pues, atendiendo a ello, se determinará si existe o no un enriquecimiento por parte de la administración tributaria. Respecto a ello, en la resolución se aprecia lo siguiente: **6.1** Examinados los actuados administrativos se aprecia que el saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007 que se acredita con la presentación de la declaración jurada anual del citado impuesto, esto es, fecha 26 de marzo del 2008, por ello, de acuerdo al artículo 43 y numeral 5 del artículo 44 inciso del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el cómputo del término prescriptorio para solicitar la compensación de dicho saldo a favor del ejercicio 2007 se inició el 01 de enero del 2009, culminando -de no existir actos interruptorios y suspensivos- el primer día hábil del 2013, sin embargo, la demandante aduce que existen actos interruptorios de la prescripción, como el inicio del procedimiento de fiscalización del ejercicio 2009, razón por la cual -afirma- no ha prescrito la acción para solicitar tal compensación. **6.2** Al respecto, el inicio del procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2009 no se encuentra contemplado como supuesto de interrupción del plazo prescriptorio como lo alega la demandante conforme se ha desarrollado en el considerando cuarto de la presente sentencia, por ende, a la fecha en que la demandante presentó las declaraciones juradas rectificatorias mensuales del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008, esto es, el 19 de diciembre del 2013, la acción para solicitar la compensación de dicho saldo a favor del ejercicio 2007 se encontraba prescrita. **2.13.** De esa manera, se evidencia que la Sala Superior pudo establecer que en el caso concreto sí se ha producido la prescripción para solicitar la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007, pues considerando que el inicio del cómputo del plazo de produjo el 01 de enero de 2009, al momento en que se presentaron las declaraciones juradas rectificatorias del ejercicio 2008, ocurrido el 19 de diciembre de 2013, ya había prescrito la acción para solicitar la compensación de dicho saldo a favor del ejercicio 2007. En ese sentido, de acuerdo al criterio de la Sala de mérito, se puede concluir que —como consecuencia de la prescripción de la compensación, que opera por el solo transcurso del tiempo y por la conducta negligente de la parte, que deja pasar el tiempo sin accionar lo que considere pertinente a sus derechos— no se ha producido un enriquecimiento indebido por parte de la administración tributaria; por lo que resultaba lógico no analizar aquel agravio propuesto en el recurso de apelación. Por consiguiente, no se aprecia afectación alguna al principio de motivación. **2.14.** Conforme a ello, debemos señalar que la Sala Superior ha expuesto las razones que sustentaron la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda. Se cauteló y respetó el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, porque la sentencia del colegiado superior cumplió con exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que determinaron su decisión, constatándose además que los fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y congruentes con las pretensiones planteadas. **2.15.** Por tanto, corresponde declarar **infundada** la causal procesal denunciada por la empresa recurrente. **Análisis de las causales de naturaleza sustantiva** TERCERO. Infracción normativa del literal c) del numeral 4 del artículo 45, y del artículo 40 del Código Tributario, del principio de razonabilidad en sede administrativa y del derecho a la propiedad de la empresa; e infracción de los artículos 38 y 92 del Código Tributario **3.1.** A efecto de dar respuesta a las causales invocadas por la recurrente, se debe citar dichas normas: **Código Tributario** Artículo 38.- DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO Las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período comprendido entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva, de conformidad con lo siguiente: a) Tratándose de pago indebido o en exceso que resulte como consecuencia de cualquier documento emitido por la Administración Tributaria, a través del cual se exija el pago de una deuda tributaria, se aplicará la tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 33. b) Tratándose de pago indebido o en exceso que no se encuentre comprendido en el supuesto señalado en el literal a), la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN), publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el último día hábil del año anterior, multiplicada por un factor de 1,20. Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33. Tratándose de las devoluciones efectuadas por la Administración Tributaria que resulten en exceso o en forma indebida, el deudor tributario deberá restituir el monto de dichas devoluciones aplicando la tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 33, por el período comprendido entre la fecha de la devolución y la fecha en que se produzca la restitución. Tratándose de aquellas devoluciones que se tornen en indebidas, se aplicará el interés a que se refiere el literal b) del primer párrafo. Artículo 40.- COMPENSACIÓN La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A tal efecto, la compensación podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: […] 2. Compensación de oficio por la Administración Tributaria: a) Si durante una verificación y/o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente de pago y la existencia de los créditos a que se refiere el presente artículo. b) Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la SUNAT sobre declaraciones y pagos se detecta un pago indebido o en exceso y existe deuda tributaria pendiente de pago. La SUNAT señalará los supuestos en que opera la referida compensación. En tales casos, la imputación se efectuará de conformidad con el artículo 31. Artículo 45.- INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN […] 4. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución se interrumpe: […] c) Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio. El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio. **3.2.** Como argumentos que sustentan las infracciones normativas, se señala lo siguiente: a) La Sala Superior indica que ha prescrito el plazo para solicitar la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007, pues no considera que dicho plazo se interrumpió en el año dos mil doce con el inicio del procedimiento de fiscalización del ejercicio 2009. Asimismo, argumenta que la Sala Superior ha desconocido que la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030033 fue emitida por la deuda correspondiente al impuesto a la renta del ejercicio gravable 2009, "la cual fue compensada de oficio con el saldo a favor del ejercicio 2008, en el mismo acto administrativo". Por lo que, dicha actuación administrativa fue una acción dirigida a efectuar una compensación de oficio y, en consecuencia, "los actos del procedimiento de fiscalización interrumpieron el plazo de prescripción para solicitar la devolución o efectuar compensación de todos los créditos", entre los cuales se encontraban los créditos por saldo a favor del impuesto a la renta de los ejercicios dos mil siete y dos mil ocho, y no únicamente de este último ejercicio. Adicionalmente, la recurrente menciona que el inicio de la fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio 2009 "configura la causal de interrupción de la prescripción de la facultad para efectuar la

compensación prevista en el literal c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario, al ser este un acto de la Administración Tributaria dirigido a efectuar una compensación de oficio". Solicita se considere que, "para que opere la compensación de oficio debe haber previamente un procedimiento de fiscalización, de donde se concluye que este último constituye un acto de la Administración Tributaria dirigido a efectuar una compensación de oficio". b) La Sala Superior no ha advertido lo indicado en el recurso de apelación, pues el Tribunal Fiscal, respecto a la apelación de la Resolución de Intendencia Nº 150140011782 (sobre pagos a cuenta de enero a diciembre y la regularización del impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho), desconoce la compensación efectuada por la empresa del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho, porque supuestamente el primer día hábil del dos mil trece había operado la prescripción de compensar el saldo a favor del impuesto a la renta de 2007. Alega la empresa que, según el Tribunal Fiscal, no se ha producido ni acreditado acto alguno que hubiera interrumpido el plazo de prescripción; y que no sería posible que la fiscalización por el ejercicio 2009 constituya un acto dirigido a efectuar una compensación de oficio del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007, solo porque este último responde a un importe y ejercicio diferente a aquel contra el cual finalmente se termina compensando el impuesto a la renta de 2009 (saldo a favor del impuesto a la renta dos mil ocho). Sin embargo, afirma que se interrumpió el plazo prescriptorio de la facultad para compensar el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 en el año 2012, a raíz de que en este año la administración tributaria inicia a la empresa un procedimiento de fiscalización que culmina con la determinación de la deuda tributaria pendiente de pago para el impuesto a la renta del ejercicio 2009. Asimismo, conforme al primer párrafo del artículo 40 del Código Tributario, la deuda tributaria no se compensa contra el crédito tributario proveniente del periodo anterior de la deuda, sino con relación a cualquier otro crédito tributario no prescrito o que coexista con aquella, según señala la casacionista. c) La Sala Superior, al denegar que no existió prescripción de la facultad de compensar el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio dos mil siete, deja de reconocer la consecuencia jurídica prevista por el ordenamiento jurídico (orden de devolución) para el supuesto en que se produzca el pago indebido; pues al compensar válidamente el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 contra los pagos a cuenta de marzo a diciembre de 2008, se configuran pagos en exceso o indebidos al crédito por el impuesto temporal a los activos netos - ITAN pagado por el ejercicio 2008. d) La Sala Superior debía declarar que el saldo a favor del impuesto a la renta de 2007 no había prescrito en la oportunidad en que se presentaron las rectificatorias, por lo que la empresa compensó aquel contra los pagos a cuenta de marzo a diciembre de 2008 y los pagos realizados en efectivo y vía compensación de ITAN por estos pagos a cuenta de 2008, por lo que ellos debieron ser devueltos. La Sala Superior incurre en error al pretender desconocer la compensación efectuada por la empresa, debido a que en la declaración jurada anual del ejercicio gravable 2007 se declaró expresamente que se solicitaría la devolución del saldo a favor. La administración tributaria indicó en su oportunidad que la empresa no presentó declaración jurada rectificatoria en la cual modificase dicha situación; sin embargo, la Sala Superior no ha tomado en cuenta en consideración el Informe Nº 239-2009/SUNAT, el cual establece que no resulta necesario el cambio de devolución a compensación mediante una declaración jurada anual del impuesto a la renta. Asimismo, se debe tener en cuenta que la empresa optó en su declaración jurada por la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta dos mil siete, aunque "nunca presentó efectivamente una solicitud de devolución de dicho saldo", por lo cual resultaba procedente la compensación del saldo a favor del ejercicio 2007 contra los pagos a cuenta del ejercicio 2008, conforme argumenta la casacionista. **3.3.** Antes del análisis de las infracciones normativas, es pertinente detallar los hechos acontecidos durante el procedimiento de fiscalización, los mismos que obran en el expediente administrativo: - Mediante escritos del 26 de diciembre de 2013, la demandante solicitó la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta 2008. - Según Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007260/SUNAT, de fecha 19 de setiembre de 2014, la administración tributaria resolvió declarar improcedente la solicitud de devolución presentada por la contribuyente —ahora demandante— Interseguro Compañía de Seguros S.A., por concepto de pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los periodos marzo a diciembre de 2008. - Asimismo, según Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007261/SUNAT, del 19 de setiembre de 2014, se resolvió declarar improcedente la solicitud de devolución presentada por la contribuyente Interseguro Compañía de Seguros S.A., mediante Expediente Nº 3958630, por concepto de saldo no aplicado del impuesto temporal a los activos netos – ITAN correspondiente al ejercicio gravable 2008. - Así también, según Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007259/SUNAT, del 19 de setiembre de 2014, la administración tributaria resolvió declarar improcedente la solicitud de devolución presentada por la contribuyente Interseguro Compañía de Seguros Sociedad Anónima, mediante Expediente Nº 3958631, por concepto de saldo a favor del impuesto a la renta, tercera categoría, regularización, correspondiente al ejercicio gravable 2008. - Ante el recurso de reclamación presentado por la demandante contra la Resolución de Intendencia Nº 012-1800007259/SUNAT, la Resolución de Intendencia Nº 0150140011778, de fecha 27 de febrero de 2015, resolvió en su artículo 1 declarar infundada la reclamación interpuesta por Interseguro Compañía de Seguros S.A. mediante el Expediente Nº 0150340013548 de fecha 20 de octubre de 2014, y en su artículo 2 resolvió confirmar la Resolución de Intendencia Nº 012180-0007259/SUNAT, de fecha 19 de setiembre de 2014, que declaró improcedente la solicitud de devolución presentada mediante el Expediente Nº 3958631, por concepto del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio gravable 2008. - La Resolución de Intendencia Nº 0150140011779, del 27 de febrero de 2015, resolvió en su artículo 1 declarar infundado el recurso de la reclamación interpuesto por Interseguro Compañía de Seguros S.A., mediante el Expediente Nº 0150340013549, de fecha 20 de octubre de 2014, y en su artículo 2 decidió confirmar la Resolución de Intendencia Nº 012180-0007260/SUNAT, del 19 de setiembre de 2014, que declaró improcedente la solicitud de devolución presentada mediante los Expedientes de números 3761947, 3761946, 3811475, 3993156, 3958629, 3811474, 3993154, 3993153, 3993152 y 3993151, por la devolución de los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondientes a los periodos marzo a diciembre de 2008, por la suma de S/ 3'384,425.00.(tres millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco y 00/100 nuevos soles) - Por medio de la Resolución de Intendencia Nº 0150140011780, de fecha 27 de febrero de 2015, se resolvió en el artículo 1 declarar infundada la reclamación interpuesta por Interseguro Compañía de Seguros S.A., mediante el Expediente Nº 0150340013550, de fecha 20 de octubre de 2014, y en su artículo 2 confirmó la Resolución de Intendencia Nº 012-180-0007261/SUNAT, de fecha 19 de setiembre de 2014, que declaró improcedente la solicitud de devolución presentada mediante el Expediente Nº 3958630, por la devolución del saldo no aplicado del impuesto temporal a los activos netos – ITAN, correspondiente al ejercicio 2008, por la suma de S/ 1'271,149.00. - La Resolución de Intendencia Nº 0150140011782, de fecha 27 de febrero de 2015, decidió en su artículo 1 declarar infundada la reclamación interpuesta por Interseguro Compañía de Seguros S.A., mediante el Expediente de Reclamación Nº 0150340013547, de fecha 17 de octubre de 2014, y en su artículo 2 confirmó las Resoluciones de Determinación de números 0120030048460, 0120030018461, 0120030048450, 0120030048451, 0120030048452, 0120030048453, 0120030048454, 0120030048455, 0120030048456, 0120030048457, 0120030048458, 0120030048459 y 0120030048462. - Según Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10040-1-2016, del 25 de octubre de 2016, se resolvió acumular los procedimientos seguidos con los Expedientes de números 5540-2015, 5541-2015, 5542-2015 y 5543-2015; y confirmar las Resoluciones de Intendencia de números 0150140011779, 0150140011780 y 0150140011782, del 27 de febrero de 2015, y revocar la Resolución de Intendencia Nº 1501400111778, de fecha 27 de febrero de 2015. **3.4.** De los argumentos que aparecen en el recurso de casación, se advierte que la controversia se centra en establecer si la fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio 2009, que data de 2012, interrumpió el plazo de prescripción para solicitar la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007, plazo que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario[7], inició el 01 de enero de 2009, y culminaría el primer día hábil de enero de 2013; se ha establecido que el plazo para ejercer la acción de solicitar la devolución o compensación se interrumpe con cualquier acción de la administración dirigida a efectuar la compensación de oficio. **3.5.** Ahora bien, como se aprecia, el argumento de la demandante se centra en establecer si el procedimiento de fiscalización iniciado mediante Orden de Fiscalización Nº 110011348980-01-SUNAT y que tuvo como resultado la emisión de la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030033, que fue notificada el día 09 de julio del 2012, correspondiente al ejercicio gravable del año 2009, constituye

un acto interruptorio del cómputo de la prescripción para solicitar la compensación del saldo a favor del ejercicio 2007. Para este fin, la recurrente señala que se ha inobservado lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 45 del Texto Único del Código Tributario, que señala que el plazo prescriptorio se suspende "por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio", lo cual en el caso evidentemente no ocurre. **3.6.** Al respecto, cabe destacar que, en la resolución de determinación antes mencionada, la cual contiene diversos reparos a la base imponible del tributo materia de análisis, tal como se detalla en los anexos 1 a 4 de la mencionada resolución, no se advierte que la administración haya efectuado compensación de oficio respecto del saldo a favor del ejercicio 2007, pues únicamente se consideró como crédito el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2008, que la propia contribuyente optó por compensar contra dicho impuesto (compensación automática) según se observa de las declaraciones juradas presentadas respecto al impuesto a la renta del ejercicio 2009. En consecuencia, no resulta posible considerar el inicio de la fiscalización efectuada respecto del ejercicio 2009 como un acto interruptorio del cómputo de la prescripción para la compensación correspondiente al ejercicio 2007. **3.7.** A mérito del análisis precedente, el saldo a favor cuya compensación solicita la demandante corresponde al ejercicio 2007 y el plazo prescriptorio para solicitar dicha compensación inició el 01 de enero de 2009, por lo que concluyó el primer día hábil de 2013, al no existir causales de interrupción y/o suspensión, y en el caso se aprecia que no se produjeron hechos que generen la interrupción o suspensión. Al respecto, es preciso puntualizar que, la demandante presentó su declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2007, mediante PDT 662 Nº 312340-62, en el cual consta que eligió la opción de solicitar la devolución del saldo a favor correspondiente al ejercicio 2007, pedido que resulta excluyente de la opción de compensación automática contra futuros pagos a cuenta, como pretende. Es por ello que, cuando la contribuyente presentó las declaraciones por los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2008, mediante PDT 621 dentro de los plazos de vencimiento, no le correspondía aplicar el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007. Posterior a ello, con fecha 19 de diciembre del 2013, la demandante presentó las declaraciones rectificatorias por los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2008, en las cuales modifica la forma de cancelar dichos pagos a cuenta al efectuar la compensación según el casillero 303 del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 por el importe de S/ 4'655,574.00 a partir del mes de marzo del 2008 hasta agotarlo en el mes de diciembre de dicho año y al saldo por pagar no compensado le fue aplicado el pago de impuesto temporal a los activos netos - ITAN por S/ 85,043.00. Con fecha 26 de mayo del 2014, la demandante presentó nuevamente las declaraciones rectificatorias de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría de los meses de marzo a diciembre del 2008, consignando en el casillero 303 como saldo a favor del periodo anterior el importe cero (S/ 0.00), eliminando la compensación del saldo a favor del ejercicio 2007 contra los pagos a cuenta de los meses de marzo a diciembre de 2008 y declarando en el casillero 317 como "pagos previos" el importe del saldo a favor del ejercicio 2007 más los pagos originalmente realizados. **3.8.** De los hechos descritos, se aprecia que la contribuyente optó inicialmente por la devolución del saldo a favor del ejercicio 2007, tal como aparece en la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2007; para luego, con fecha 19 de diciembre de 2013, presentar las declaraciones rectificatorias por los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2008; pues bien, atendiendo a que el plazo de prescripción se computa desde el 01 de enero de 2009 hasta el primer día hábil de enero de 2013, es evidente que, en el caso concreto, se ha producido la prescripción de la acción de la contribuyente para solicitar la compensación del saldo a favor del ejercicio 2007, sin que haya concurrido causal de suspensión o interrupción de dicho plazo, como pretende la recurrente. **3.9.** Al respecto, conforme ya se ha mencionado, la Sala de mérito aplicó correctamente lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 45 del Código Tributario, por lo que las alegaciones de la recurrente en este extremo son inadmisibles. **3.10.** Atendiendo a lo señalado, y en relación con el cuestionamiento de la afectación a su derecho de propiedad, pues indebidamente se estaría desconociendo la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2007 con el ejercicio 2008; se debe anotar, como se ha señalado en los párrafos anteriores, que, en el caso que nos ocupa, se ha producido la prescripción de la posibilidad de compensar del saldo a favor del impuesto a la renta de 2007, que opera por el solo transcurso del tiempo, y no era obligación de la administración aplicar de oficio la compensación, pues el artículo 40 del Código Tributario no establece un mandato imperativo para ello. Por consiguiente, de lo desarrollado, se puede concluir que al momento de emitirse la sentencia de vista no se han vulnerado las normas cuestionadas, y, por tanto, debe declararse **infundado el recurso** en este extremo **CUARTO. Infracción normativa material del inciso b) del artículo 92 del Código Tributario, así como de los artículos 70 y 74 de la Constitución Política del Estado 4.1** Los argumentos de la recurrente están referidos a que la Sala Superior no habría contemplado que la no devolución y/o compensación del saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio dos mil siete correspondiente a la empresa "implica que se vulnere su derecho a la propiedad" y a la no confiscatoriedad, pues la empresa pierde un crédito tributario cuando se le impide que se pueda aplicar válidamente en el plazo de su prescripción. **4.2.** Estando a lo señalado, corresponde describir lo que regulan las normas materia de la presente infracción normativa. Así, tenemos: Código Tributario Artículo 92.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS Los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: […] b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo con las normas vigentes. **Constitución Política del Perú** Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. **4.3.** Acerca de ello, en la sentencia de vista el colegiado de mérito sostiene lo siguiente: […] Al respecto, se debe señalar que: i) en la declaración jurada original de los pagos a cuenta de marzo a diciembre del 2008, se consigna el Saldo del ITAN aplicado, ii) en la primera rectificatoria de la mencionada declaración se elimina el saldo del ITAN, iii) en la segunda rectificatoria, la demandante sí aplica íntegramente el saldo del ITAN. Sin embargo, en las rectificatorias de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008 se aprecia que en la primera rectificatoria se consigna el saldo no aplicado del ITAN, mientras que en la segunda rectificatoria se eliminó el monto declarado por saldo de ITAN no aplicado, agregando los pagos efectuados con anterioridad, por ello, se evidencia que no existe pagos en exceso del saldo no aplicado por ITAN. 6.6 En ese sentido, atendiendo que producto del procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008 se emitió la Resolución de Determinación Nº 012-003-0048462, en la cual se aprecia que ya no existe saldo del ITAN pendiente de aplicación, la determinación efectuada en dicho valor resulta válido y eficaz mientras no se deje sin efecto judicialmente conforme lo dispone los artículos 7 y 192 de la Ley Nº 27444, en consecuencia, se debe desestimar dicho agravio, por lo que corresponde desestimar la primera pretensión principal de la demanda. **4.4.** De lo que aparece en los fundamentos que sustentan la causal invocada, no se aprecia que la empresa actora haya verificado correctamente los argumentos contenidos en la sentencia de vista, pues en ella claramente se ha concluido que no existe saldo del ITAN pendiente de aplicación; por lo tanto, al evidenciarse que lo expuesto por la recurrente terminan siendo alegaciones genéricas, la infracción normativa propuesta debe declararse **infundada. DECISIÓN** Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el artículo 396 del Código Procesal Civil, **DECLARARON**

INFUNDADO el recurso de casación planteado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós (folios 189-253), interpuesto por la empresa **Interseguro Compañía de Seguros Sociedad Anónima**. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, del veintinueve de abril de dos mil veintidós (folios 165-181), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la empresa Interseguro Compañía de Seguros Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Delgado Aybar.** SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, CABELLO MATAMALA, **DELGADO AYBAR,** TOVAR BUENDÍA.

---

1 En adelante, todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 ATIENZA, Manuel (2006). Las razones del derecho. Derecho y argumentación. Lima, Palestra Editores; p. 61.

5 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184

6 IGARTUA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima, Palestra-Temis; p. 2

7 **Texto Único Ordenado del Código Tributario**
Artículo 44.- Cómputo de los plazos de prescripción
El término prescriptorio se computará:
[…]
5.- Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior.
[…]

C-2245460-10

CASACIÓN Nº 9200-2023 LIMA

TEMA: FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN MINERA
SUMILLA: La Sala Superior, para absolver los agravios y determinar si la empresa demandante se encontraba obligada a las aportaciones al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, introduce conceptos normativos que no se encuentran contenidos en el ámbito de aplicación que señala dicho cuerpo normativo, sino que se remite de manera errada al Reglamento de la Ley de Regalía Minera y a la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 01043-2013-PA/TC, sobre las modificaciones a la Ley de Regalía Minera.
PALABRAS CLAVE: vulneración del derecho a la debida motivación, justificación externa, fondo complementario de jubilación minera, Ley de Regalía Minera

Lima, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** Se trata de los recursos de casación calificados como procedentes el treinta de mayo de dos mil veintitrés, interpuestos por **i)** el Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del **Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,** mediante escrito del seis de enero de dos mil veintitrés (fojas setecientos noventa y nueve a ochocientos trece del expediente judicial electrónico - EJE[1]) y **ii)** por la Procuraduría Pública de la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),** mediante escrito del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas ochocientos diecinueve a ochocientos treinta), contra la sentencia de vista contenida en la resolución veinte, del catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas setecientos ochenta a setecientos noventa y tres), que **revoca** la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución trece, del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas seiscientos setenta y cinco a seiscientos noventa y dos), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; y, reformándola, **declara** fundada la demanda. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante resolución suprema del treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas sesenta y cuatro a setenta y cuatro del cuaderno de casación), se declaró procedentes los recursos de casación interpuestos por el Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, y por la SUNAT, por las siguientes causales: Por parte del Tribunal Fiscal **a) Vulneración de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto por el artículo VII del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional.** Indica que la Sala Superior incurre en una motivación aparente, por cuanto no ha efectuado un análisis adecuado de los actuados en sede administrativa, ya que de haberlo realizado, se hubiera percatado que en el ejercicio 2013, la demandante contaba con concesiones mineras en explotación de varias unidades económicas administrativa U.E.A.[2], concesiones de beneficio, así como del denuncio virgen de Fátima, de las cuales se extrajeron minerales como caliza y puzolana, por tanto, si estaría realizando actividades pertenecientes al rubro de la industria minera conforme al artículo VI del título preliminar de la Ley General de Minería, en consecuencia, se encontraría dentro del supuesto de hecho establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 29741 y el artículo 1 de su reglamento, estando afecta al aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. **b) Inaplicación del artículo VI del título preliminar de la Ley General de Minería.** Señala que la Sala Superior incurriría en error, por cuanto no aplica el artículo VI del título preliminar de la Ley General de Minería, al considerar que la principal actividad de la demandante sería la producción y comercialización de Clinker, cemento y afines, sosteniendo que la accionante no tendría la obligación de aportar al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Asimismo, alega que la demandante se encontraba realizando actividades pertenecientes a la industria minera, por cuanto contaba con concesiones mineras en explotación de varias U.E.A., concesiones de beneficio, así como del denuncio de Virgen de Fátima, de las cuales se extrajeron minerales como caliza y puzolona; por lo tanto la demandante se encontraba obligada al pago del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica correspondiente al ejercicio 2013, por lo que la determinación efectuada por la administración tributaria se encuentra conforme a ley. **c) Inaplicación del artículo 1 de la Ley Nº 29741 y del artículo 1 de su reglamento.** Denuncia que la Sala Superior, habría inaplicado dicho dispositivo, que establece que el fondo se constituiría con el aporte del 0,5% de la renta neta anual de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, antes de impuestos. Agrega que, según el artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29741, la empresa minera sería aquella que realiza actividades de la industria minera, ejecutadas ya sea por sistema de concesiones, y añade que, el dispositivo no haría distinción, en cada una de las actividades ya sea de exploración, explotación, labor general, beneficio y transporte minero. Considera que el titular de la actividad minera, es la persona natural o jurídica, que posee la concesión minera, e indica que, en el caso, la empresa posee concesiones mineras tales como: Agrupamiento Andino A de Huancayo, Agrupamiento Andino B de Huancayo, Atocongo, Chilca, Las Dunas, Pucara y el Denuncio Virgen de Fátima, siendo la empresa contratista minera San Martín Contratista Generales S.A. la que realizó actividades de la industria minera, extrayendo piedra caliza y puzolana componente minero utilizado como materia prima para la fabricación de clínker y cemento, ya sea para su autoconsumo o venta. Finalmente señala que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, la empresa realizaría actividades de la industria minera (no metálicas) y como tal le correspondería realizar los aportes al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Por parte de la SUNAT **a) Arbitrariedad manifiesta en la que incurre la sentencia de segundo grado, en agravio del derecho fundamental a la debida motivación y debido proceso.** Señala que la Sala Superior, efectúa una fundamentación jurídica que no corresponde, porque invocaría la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01043-2013-PA/TC, la Ley Nº 28258 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF modificado por los Decretos Supremos Nº 180-2011-EF y Nº 209-2011-EF, los cuales estarían referidas al concepto de regalías mineras; cuando, según señala, correspondía sujetarse a las normas legislativas y jurisprudenciales referidas al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica creada por Ley Nº 29741. Agrega que la naturaleza jurídica de la regalía minera, sería distinta a la del Fondo Complementario de Jubilación Minera,

Metalúrgica y Siderúrgica, y que la decisión de la Sala Superior, sería arbitraria. **b) Interpretación errónea del artículo 1 de la Ley Nº 29741.** Indica que la Sala Superior, interpreta erróneamente el artículo 1 de la Ley Nº 29741, al establecer que el aporte al Fondo, solo sería aplicable a empresas que efectúen únicamente, actividades propias de la minería, y cuyos ingresos constituyen la base de la rentabilidad anual obtenida. Indica que este aspecto considerado por la Sala Superior, no habría sido establecido en el dispositivo, y que dicho dispositivo, solo establecería la tasa o alícuota del aporte y el concepto sobre el cual se aplicaría. De igual manera sostiene, que el acápite a) del numeral 6 del artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29741, solo señalaría que son sujetos al aporte del referido fondo las empresas que realizan actividad minera, y no discrimina si la actividad minera que realice la empresa, sería su actividad principal, secundaria o complementaria, tal como la Sala Superior considera y da relevancia, para sustentar su fallo. Finalmente añade, que estaría acreditado que la demandante poseía concesiones mineras, en la cuales habría realizado actividades de explotación en el periodo dos mil trece, y como consecuencia la empresa habría declarado renta de dicho periodo; y sin embargo, producto de la interpretación errónea, la Sala Superior habría dispuesto se inaplique el pago del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, a pesar de calificar como empresa que realiza actividad de la industria minera y que es el sujeto obligado al pago de dicho aporte. **ANTECEDENTES Demanda:** Mediante escrito del ocho de octubre de dos mil veinte (fojas tres a treinta y tres), la demandante Unión Andina de Cementos S. A. A. interpuso demanda contencioso administrativa y solicitó en su petitorio lo siguiente: **Pretensión principal**: Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03250-1-2020, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150140015241, del veinte de diciembre de dos mil diecinueve. **Pretensión accesoria:** Se ordene a la SUNAT la inmediata devolución a favor de la contribuyente de la suma de S/ 2'749,991.00 (dos millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y un soles con cero céntimos), más los intereses compensatorios devengados hasta la fecha efectiva del pago a favor de Unión Andina de Cementos S. A. A. **Contestación de la demanda** La Procuraduría Pública de la SUNAT, con escrito del veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas ochenta y dos a noventa y dos), contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Sostiene que la Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera solo establece como requisito que el contribuyente haya obtenido renta y califique como empresa minera. De acuerdo a ello, señala que la empresa percibió renta, que se desprende de su declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio dos mil trece, y que además contó con concesiones mineras en el año dos mil trece, que le permitió extraer caliza y puzolana, producto de actividades de la industria minera. La Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, con escrito del veintinueve de octubre de dos mil veinte (folios ciento uno a ciento dieciocho), contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Alega que, conforme al artículo 1 de la Ley Nº 16581 - Ley de Minería, también las empresas cementeras que cuenten con concesiones mineras están obligadas al pago del Fondo Complementario de Jubilación Minera. Añade de ese modo que carece de validez que la demandante alegue que el hecho de que realice actividades industriales y contribuya al SENATI y, a su vez, también pague el referido fondo vulnera el principio de legalidad. Indica que la resolución del Tribunal Fiscal impugnada está debidamente motivada, pues ha sido emitida por órgano competente y respetando el debido procedimiento. **Sentencia de primera instancia** Mediante resolución número trece, del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas seiscientos setenta y cinco a seiscientos noventa y dos), el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. La sentencia señaló los siguientes fundamentos: a) El Juez señala que la Ley Nº 29741 - Ley que Crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) establece que el sujeto pasivo del aporte son las empresas titulares de las actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas. Añade que el reglamento de la referida ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-TR, señala que la empresa minera es aquella que realiza actividades de la industria minera reguladas en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM. De acuerdo a ello, señala que el artículo IV del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería señala que son actividades mineras las siguientes: cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. Asimismo, añade que el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería señala que son atribuciones de los titulares de las concesiones contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas inscritas en la Dirección General de Minería. También refiere que el Decreto Supremo Nº 005-2018-EM (sobre reestructuración del registro de empresas especializadas de contratistas mineros) indica que la titularidad de las actividades recae en las empresas concesionarias, no en las empresas contratistas. b) Indica que se desprende del numeral 6 del artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29741, que el aporte de las empresas mineras que realizan actividades de industria minera (de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería), se constituye cuando se trate de empresas mineras y que cuenten con renta anual. Además, precisa que las actividades de la industria minera, según los artículos VI y VII del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, se realizan exclusivamente por concesiones, y son exploración, explotación, labor general, beneficio y transporte minero. De igual forma, precisa que el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería señala que la concesión de beneficio otorga al titular el derecho de extraer o concentrar la parte valiosa del valor agregado. c) Señala que las pruebas documentales actuadas evidencian que Unión Andina de Cementos S. A. A., además de producir y comercializar clínker y cemento, también es titular de derechos mineros. Añade que también acreditan que contrataba a terceros para realizar la extracción y/o explotación del mineral en sus concesiones mineras. De ese modo, señala el Juez que se desvirtúa lo que alega la demandante, en el sentido de que debía recaer en los concesionarios la obligación de declarar y pagar el aporte al fondo. Indica el Juez que está acreditado que la empresa tuvo renta neta, de su declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2013, PDT 684 Nº 750612238. Además, no es requisito para que la empresa aporte al fondo, que cuente con trabajadores que realicen directa o indirectamente labores mineras. d) Indica el Juez que el colegiado administrativo ha justificado la calidad de sujeto pasivo del fondo y que, si bien no ahonda en la naturaleza de la renta, ello no constituye causal de nulidad. Alega que el aporte al fondo no exige que las rentas obtenidas en el ejercicio provengan de la actividad minera, como erróneamente reitera la recurrente, sino únicamente exigía que la empresa sea titular de actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, y que generen renta en el ejercicio fiscalizado. Añade que, durante el procedimiento de fiscalización, la administración tributaria no ha negado que la empresa demandante también haya realizado actividades industriales, sino que dicha situación no la excluye de ser sujeto pasivo del aporte. **Sentencia de vista** Mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, del catorce de diciembre de dos mil veintidós (folios setecientos ochenta a setecientos noventa y tres), la Sétima Sala en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la referida corte, **revoca la sentencia apelada** —que declaró infundada la demanda en todos sus extremos— y, reformándola, declara fundada la demanda. Señala los siguientes fundamentos: a) Señala el colegiado superior que el artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29741, modificado con Decreto Supremo Nº 001-2003-TR, establece que el aporte del trabajador es el 0.5% de la remuneración bruta mensual, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Indica que dicho reglamento considera en el referido fondo a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que laboren en minas subterráneas, o que realicen labores extractivas en minas a tajo abierto. b) Indica también que el artículo VI del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, señala que las actividades mineras son cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero; y que su artículo 8 indica que la explotación es la actividad de extracción de los minerales de los yacimientos. c) Afirma que el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 28258

- Ley de Regalía Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, define a la empresa integrada como una empresa concesionaria que realiza actividades de explotación y beneficio directamente o por terceros, mediante concesiones o canteras de donde extrae minerales no metálicos. Señala el colegiado superior que la obligación de una empresa integrada para el aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera está limitada solo a la actividad minera, metalúrgica o siderúrgica, y no a rentas de otras fuentes productivas. d) Indica el colegiado superior que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 01043-2013-PA/TC, se pronunció sobre las modificaciones al Reglamento de la Ley de Regalía Minera efectuadas con los Decretos Supremos Nº 180-2011-EF y Nº 209-2011EF. Adujo que dichas modificaciones establecían que la base de cálculo aplicable a la regalía minera, podrían provenir de la utilidad de recursos minerales metálicos y no metálicos en el estado que se encuentren y que, en el caso de las empresas integradas, podría provenir de la utilidad que derive de componentes distintos a los de minerales o concentrados. e) Señala que el Tribunal Constitucional concluyó, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 01043-2013-PA/TC, con relación a la referida modificación al Reglamento de la Ley de Regalía Minera, que se había ampliado su base imponible a actividades distintas a la minera y que, anteriormente, dicho tribunal indicó, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, que la regalía tenía carácter contraprestativo por la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos por el aprovechamiento de recursos minerales. El Tribunal Constitucional, en ese sentido, concluyó que estaba mal que se establezca alguna contraprestación por conceptos ajenos al uso o aprovechamiento de recursos minerales. f) Añade el colegiado superior que en la Sentencia Nº 01043-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional también concluyó que la modificación no cumplía con los parámetros establecidos en la sentencia emitida en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC e implicaba el establecimiento de un nuevo gravamen por el desarrollo actividades post extractivas, el cual, al haber sido establecido por disposición reglamentaria, vulneraba el principio de reserva de ley, lo que afectaba gravemente el patrimonio de los particulares. g) Describe el colegiado superior que **i)** obran las Constancias de Vigencia Nº 140-2018 a Nº 163-2018-INGEMMET/DDV, que describen que a la fecha de su emisión la empresa mantenía concesiones mineras metálicas y no metálicas; **ii)** obra la novena adenda al contrato de desarrollo y explotación minera entre la empresa actora y San Martín Contratistas Generales S. A. en su condición de concesionaria titular de derechos mineros; y **iii)** obra el resumen estadístico de fiscalización, de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual describe que el objeto social de la empresa actora es la elaboración de clínker, cemento y otros materiales. h) Alega el colegiado superior que la empresa es titular de concesiones minerales no metálicas, de las cuales extrae caliza y puzolana, para producir y comercializar clínker, cemento y otros materiales de construcción. Concluye que no debe ser tratada como una empresa netamente minera, porque no extrae y vende directamente mineral, para que sea considerada como sujeto del aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. **CONSIDERANDO PRIMERO. El recurso de casación 1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[3], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[4], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **1.5.** De otro lado, atendiendo que en el caso particular se han declarado procedentes los recursos de casación por causales de infracción normativa procesal y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal —de orden constitucional y legal—, desde que si por ello se declarase fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, supuesto en el cual carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada por las partes recurrentes; y si, por el contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción material. **Pronunciamiento respecto a las infracciones normativas de carácter procesal postuladas por la SUNAT y el Tribunal Fiscal** SEGUNDO: Anotaciones sobre el principio del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales Hechas las precisiones que anteceden, es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios involucrados que permitirán una mejor labor casatoria de este Tribunal Supremo. Así, tenemos: **2.1.** El derecho al **debido proceso** no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de garantías. Dos de sus principales aspectos son el debido proceso sustantivo —que protege a los ciudadanos de las actos arbitrarios y leyes contrarias a los derechos fundamentales—, y el debido proceso adjetivo o formal —que implica las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales—. Es decir que el ámbito sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia[5]. Este derecho se manifiesta, entre otros, en el derecho de defensa, derecho a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, al proceso preestablecido por ley, a la cosa juzgada, al juez imparcial, a la pluralidad de instancia, de acceso a los recursos, al plazo razonable, a la motivación, entre otros. **2.2.** Sobre la **motivación de las resoluciones judiciales**, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado que: [E]l derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, [...] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, [...] el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y

objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. **2.3.** Así, se entiende que habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales siempre que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, y que la motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica —o congruencia— entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una suficiente justificación de lo que se decide u ordena. Así, se entiende que la motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 (inciso 6), 122 (inciso 3) del Código Procesal Civil, y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho deber implica que los juzgadores precisen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico al que esta los ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia. Además, aquello debe concordarse con lo establecido en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[6], que regula el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. **TERCERO:** En atención al marco glosado en los anteriores considerandos, tenemos que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al debido proceso en su elemento esencial de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación. Las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sub materia solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. **3.1.** Iniciamos resumiendo los argumentos expuestos por los recurrentes que sustentan la **infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en tanto se afecta el debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones judiciales.** La SUNAT sostiene que la Sala Superior efectúa una fundamentación jurídica que no corresponde, basada en jurisprudencia y normativa referida a la regalía minera, cuando lo que se encuentra en debate está referido al Fondo Complementario de Jubilación Minera, cuya naturaleza es distinta a la regalía. Por su parte, el Tribunal Fiscal indica que la Sala Superior no se ha pronunciado con un debido análisis de los actuados administrativos. Precisa que, de haberlo efectuado, habría tenido en cuenta que la demandante contaba con concesiones mineras, de manera que se estaba realizando actividades mineras, las cuales se encuentran afectas al aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera. **3.2.** Teniendo en cuenta los términos que respaldan la infracción procesal, corresponde que este Tribunal Supremo verifique si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a la conclusión a que se arriba ha sido lógica o deductivamente válido, sin devenir dicha conclusión en contradictoria, dentro del marco de actuación descrito en el primer párrafo del presente considerando. **3.3.** Encaminados en ese propósito, tenemos, de la sentencia recurrida, que ha vulnerado el principio del debido proceso e intrínsecamente el de motivación y congruencia, toda vez que si bien en el tercer considerando cumplió con identificar los agravios expuestos por la empresa recurrente, y en el segundo considerando identifica las pretensiones propuestas en la demanda, al emitir pronunciamiento y absolver los agravios planteados, con base en la valoración de los hechos, **se sustenta en una premisa jurídica errada**, que invalida la justificación externa de la decisión de la Sala Superior y la hace llegar a una conclusión no adecuada. **3.4** Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 2 de la Ley Nº 29741 - Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) delimita su ámbito de aplicación y establece que dicho fondo corresponde a los trabajadores jubilados bajo los alcances de la Ley Nº 25009 - Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros y la Ley Nº 27252 – "Ley que establece el derecho de jubilación anticipada para trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud". Veamos: **Artículo 2. Ámbito de aplicación** Los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones Administrado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) que se jubilen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25009, Ley de Jubilación de los Trabajadores Mineros, y en la Ley 27252, Ley que Establece el Derecho de Jubilación Anticipada para Trabajadores Afiliados al Sistema Privado de Pensiones que Realizan Labores que Implican Riesgo para la Vida o la Salud, tienen derecho a percibir el beneficio del fondo complementario creado en el artículo 1. El beneficio se hará extensivo a los pensionistas mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que se hayan jubilado bajo el régimen de la Ley 25009 y de la Ley 27252. No genera devengados hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo 8. **3.5** Se debe precisar que tanto la Ley Nº 25009 - Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros como la Ley Nº 27252 – "Ley que establece el derecho de jubilación anticipada para trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud" tienen como fundamento o razón de sus ordenamientos normativos el otorgar dicho beneficio a los trabajadores por los riesgos para la vida o la salud debido a la toxicidad, peligrosidad e insalubridad de las labores en dichos rubros. Esto se puede apreciar de sus siguientes artículos: Ley Nº 25009 - Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros Artículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los (45) y cincuenta (50) años de edad, respectivamente. Los trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y cincuenta y cinco (55) años de edad, **siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.** según la escala establecida en el reglamento de la presente ley. Se incluyen en los alcances de la presente ley los trabajadores que laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos. **Ley Nº 27252 - "Ley que establece el derecho de jubilación anticipada para trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud"** Artículo 1º- Del objeto de la Ley **1.1** Los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que **realicen labores en condiciones que impliquen riesgo para la vida o la salud proporcionalmente creciente a su edad** y cuenten con los requisitos mínimos que señale el Reglamento de la presente Ley, podrán acceder a los beneficios de jubilación anticipada en el ámbito del Sistema Privado de Pensiones. **1.2** El Reglamento establecerá las condiciones de acceso a los beneficios de la jubilación anticipa da a que se refiere el párrafo anterior, debiendo para ello determinar las exigencias y, de ser el caso, loa aportes complementarios a la cuenta individual de capitalización del fondo de pensiones de los afiliados, así como otros mecanismos que hagan posible su financiamiento. [Énfasis agregados] **3.6** Ahora bien, la Sala Superior, para absolver los agravios y determinar si la empresa demandante se encontraba obligada o no a las aportaciones al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, en los fundamentos octavo y noveno de la sentencia de vista, introduce conceptos normativos que no se encuentran contenidos en el ámbito de aplicación que señala dicho cuerpo normativo, sino que se remite al Reglamento de la Ley de Regalía Minera y a la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 01043-2013-PA/TC, sobre las modificaciones a la Ley de Regalía Minera. Es pertinente indicar que la Sala Superior, en el fundamento séptimo de su sentencia de vista, parte del análisis de la denominada "renta neta anual", regulada en el artículo 1 de la Ley de la Ley Nº 29741 - Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS); sin embargo, luego justifica su premisa normativa en el ordenamiento normativo de la regalía minera. **3.7** Con base en ello, se aprecia, del considerando octavo, que la Sala Superior realiza una distinción no establecida en el ámbito de aplicación en la Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS). Dicha distinción proviene del concepto de "empresa integrada" que establece el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera. De esa forma, el colegiado superior determina, en la parte final de su considerando noveno, que existen **rentas que solamente provienen de la actividad minera y rentas que provienen de otras fuentes productivas**, para concluir que solo las primeras se encuentran afectas al aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica; sin embargo, no tiene en cuenta el ámbito de aplicación ni la razón y fundamento de la Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (norma vinculada a los hechos en controversia).

3.8 En efecto, el artículo 2 de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29788, señala que la regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales. Esto es, su razón o fundamento es la contraprestación por el uso de los recursos naturales del Estado, y tal naturaleza es distinta al fundamento o razón del Fondo Complementario de Jubilación Minera, ya que este busca otorgar un beneficio a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos por los riesgos para la vida o la salud, por la toxicidad, peligrosidad e insalubridad que implican sus labores. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 06788-2015-PA/TC, ha señalado, con relación a la naturaleza de los aportes al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, lo siguiente: En consecuencia, los aportes empresariales al fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica no tienen naturaleza tributaria, sino, al ser aportes a la seguridad social, constituyen una exacción parafiscal, justificada en la especial vulnerabilidad de los trabajadores que laboran en dichos sectores, quienes necesitan del referido fondo, con la finalidad de afrontar el futuro deterioro a su salud, generado, justamente, por las actividades realizada.[7] **3.9** De esa forma, el colegiado superior aplica una premisa normativa equivocada, que no es pertinente al objeto de controversia y que trae como consecuencia que no se haya efectuado un análisis adecuado de los actuados en sede administrativa, como también denuncia el Tribunal Fiscal. Todo ello trajo como consecuencia que la Sala Superior realice distinciones que no establece la Ley Nº 29741 - Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS), y que tampoco prescribe el mismo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28258 - Ley General de Minería, en el numeral I de su título preliminar, toda vez que este tampoco efectúa la distinción entre las actividades mineras y otras actividades productivas. Veamos: **Texto Único Ordenado de Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92 Título preliminar I.** La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo. Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de guano, los recursos geotérmicos y las aguas minero-medicinales. Más bien, se advierte que la Ley General de Minería establece su competencia normativa a todo lo relativo al aprovechamiento de sustancias minerales del suelo y subsuelo. En ese sentido, es pertinente señalar que en el presente caso se ha establecido como un hecho acreditado que el material que ha sido aprovechado por la empresa demandante ha sido la caliza y puzolana, los cuales son insumos para producir y comercializar clínker, cemento y otros materiales de construcción. **3.10** Con relación a la vulneración al debido proceso y al derecho a una debida motivación, Roger Zavaleta Rodríguez[8] explica que no basta solo con la corrección formal de la inferencia, sino que también es preciso que dicha inferencia se funde en premisas válidas (premisa fáctica y premisa normativa). Veamos: Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. […] **3.11** De esto modo, al haber este colegiado supremo determinado que la sentencia de vista se encuentra incursa en vicio con sanción de nulidad, carece de objeto pronunciarse sobre las demás causales de carácter material denunciadas por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, referidas a infracciones normativas del artículo 1 de la Ley Nº 29741 - Ley del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, y el artículo 1 de su respectivo reglamento, así como la inaplicación del artículo VI del título preliminar de la Ley General de Minería. Por otro lado, el Tribunal Fiscal también señala en su causal la vulneración de lo dispuesto en el artículo VII del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional; sin embargo, no desarrolla la fundamentación respectiva. En ese sentido, al haberse estimado las causales por vulneración del derecho a la debida motivación, como derecho implícito del derecho al debido proceso, el extremo referido a la vulneración del artículo VII del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, no resta fundamento o justificación a la presente decisión. **3.12** En consecuencia, el colegiado superior, para absolver y estimar los agravios planteados por la demandante, justificó la decisión de la sentencia de vista recurrida en una premisa normativa inadecuada. Esto significa que la justificación externa de su decisión contiene una premisa normativa no justificada debidamente con incidencia en la valoración fáctica y probatoria, que determinó que la Sala Superior arribe a una conclusión que vulnera el debido proceso y el derecho a una debida motivación. Conforme a ello y sobre la base de lo glosado, las infracciones normativas de carácter procesal postuladas por el Tribunal Fiscal y por la SUNAT devienen **fundadas. DECISIÓN** Por tales consideraciones, **DECLARARON FUNDADOS** los recursos de casación interpuestos por **i)** el Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del **Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,** mediante escrito del seis de enero de dos mil veintitrés (fojas setecientos noventa y nueve a ochocientos trece) y **ii)** por la Procuraduría Pública de la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),** mediante escrito del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas ochocientos diecinueve a ochocientos treinta). En consecuencia, **DECLARARON NULA** la sentencia de vista contenida en la resolución veinte, del catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas setecientos ochenta a setecientos noventa y tres), y **ORDENARON** al colegiado superior de la causa que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** el señor Juez Supremo Pereira Alagón. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, **PEREIRA ALAGÓN,** DELGADO AYBAR, TOVAR BUENDÍA.

---

1 En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

2 **UEA:** Agrupación de dos o más concesiones mineras incorporadas al Catastro Minero Nacional con carácter definitivo, de una misma clase de sustancias y de un mismo titular o cesionario minero, para el cumplimiento de sus obligaciones de producción.
Definición disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ingemmet/informespublicaciones/2022230-formacion-de-unidad-administrativa-economica-u-e-a

3 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

4 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

5 NOWAK, John y ROTUNDA, Ronald (1995). Constitutional law, St. Paul, Minn., Editorial; pp. 380-451; HART ELY, John (1996). On constitutional ground. New Jersey, Princeton University Press; pp. 311 y ss.; SAGÜÉS, Néstor Pedro (1993). Elementos de derecho constitucional. Tomo 2. Buenos Aires, Astrea; pp. 328 y ss. Todos ellos, citados por LANDA, César (2002). "Título del artículo". En Pensamiento Constitucional, año VIII, Nº 8; pp. 445-461.

6 **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**
Artículo 22. Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

7 Sentencia del doce de enero de dos mil veintiuno, caso Compañía Minera Poderosa S. A. y otros.

8 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger (2014). La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica. Lima, Editora y Librería Jurídica Grijley; pp. 207-208.

C-2245460-11

CASACIÓN Nº 15663-2022 LIMA

TEMA: BENEFICIO DE TASA DE DEPRECIACIÓN EN PROGRAMA DE INVERSIÓN
SUMILLA: Respecto al tema relacionado al cómputo de intereses durante el trámite del procedimiento contencioso-tributario, el Tribunal Constitucional resalta que toda persona tiene derecho a cuestionar asuntos que considere controvertidos; y, posteriormente, concluye que "[…] el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones […]".
PALABRAS CLAVE: motivación de las resoluciones judiciales, tasa de depreciación, programa de inversión, interés moratorio, procedimiento de fiscalización

Lima, uno de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, han interpuesto los siguientes recursos de casación: **i)** la empresa demandante, **Compañía Minera Antapaccay S.A.**[1], mediante escrito del veinte de mayo de dos mil veintidós (folios 959-967 del expediente judicial electrónico - EJE[2]); **ii)** el codemandado **Tribunal Fiscal**, representado por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escrito del diecisiete de mayo de dos mil veintidós (folios 902-952); y **iii)** la codemandada **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del veinte de mayo de dos mil veintidós (folios 972-1044), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del veintinueve de abril de dos mil veintidós, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima (folios 875-894), que **confirma en parte** la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2021 (folios 711-742), en el extremo que declaró infundada la demanda respecto a la primera y tercera pretensión principal, y declaró fundada la segunda pretensión principal; y **revoca en parte** la referida sentencia, en cuanto declaró **infundada la demanda** respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal; y, **reformándola, declara fundada la demanda en dicho extremo** y, en consecuencia y en ejercicio de plena jurisdicción, se reconoce a la demandante el derecho de aplicar a las inversiones adicionales en activos fijos, la tasa regular de depreciación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2002. **Antecedentes Demanda** El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la empresa **Compañía Minera Antapaccay S.A.** interpuso demanda contencioso administrativa contra el **Tribunal Fiscal** y la **SUNAT** (folios 426-469), con las siguientes pretensiones: **a) Primera pretensión principal:** Solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04788-10-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, en el extremo que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 095-014- 0000680/SUNAT emitida por la SUNAT respecto del reparo denominado "Beneficio de tasa de depreciación de hasta el 20% aplicable solo a los activos fijos comprendidos en el Programa de Inversión (Proyecto Tintaya)", por el cual se negó el derecho de la demandante a utilizar la tasa de depreciación del 20% sobre los bienes que excedieran de la inversión aprobada en el proyecto Tintaya (proyecto Sulfuros) y, como consecuencia de lo anterior, se declare, por Plena Jurisdicción, que la demandante puede aplicar la tasa de depreciación del 20% respecto de los bienes que excedieran la inversión aprobada en el proyecto Tintaya. **b) Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal**: Que, en el supuesto que no se ampare la pretensión principal, solicita que por Plena jurisdicción, el Juzgado declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04788-10-2019, en el extremo que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 095-014-0000680/SUNAT, respecto al reparo a la depreciación denominado "Beneficio de tasa de depreciación de hasta el 20% aplicable solo a los activos fijos comprendidos en el Programa de Inversión (Proyecto Tintaya)" y, como consecuencia de ello, se declare que la demandante tiene derecho a aplicar, respecto de las inversiones adicionales en activos fijos, la tasa regular de depreciación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta, con el fin de que la demandante no pierda el derecho a la depreciación de los activos fijos establecida bajo el régimen general del Impuesto a la Renta. Asimismo, agrega que aquello sea reconocido en los ejercicios 2003 en adelante. **c) Segunda Pretensión Principal**: Se solicita que el Juzgado declare que no corresponde el cobro de intereses moratorios generados luego de vencidos los plazos que tenían la SUNAT y el Tribunal Fiscal para resolver el recurso de reclamación y el de apelación, respectivamente, interpuestos por la demandante, de conformidad con lo establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes números 04532-2013-PA/TC y 04082-2012-PA/TC. **d) Tercera Pretensión Principal**: Se disponga la inaplicación de los intereses moratorios devengados desde la interposición de su demanda hasta la fecha en que se expida un fallo definitivo con calidad de cosa juzgada, debido a que ello afectaba a su derecho de acceso a la jurisdicción y su derecho de defensa. Los argumentos principales de su demanda son los siguientes: a) **Los beneficios tributarios se aplican a la totalidad de la inversión realizada en el Proyecto Sulfuros:** En la medida que el Estado suscribe con la empresa Tintaya el contrato de estabilidad respecto del Proyecto de Sulfuros, para fomentar la inversión, resulta coherente que la estabilidad tributaria sea aplicada respecto del íntegro de la inversión realizada en dicho proyecto minero y no solo respecto de la aprobada en el "Estudio de factibilidad", el cual únicamente constituye un documento preliminar y necesario para la suscripción del contrato de estabilidad. b) **La Ley General de Minería no limita los beneficios de la estabilidad tributaria a la inversión prevista en el "Estudio de factibilidad":** Es preciso señalar que las normas contenidas en la Ley General de Minería o en su reglamento no han limitado los beneficios de la estabilidad tributaria a la inversión prevista en el "Estudio de factibilidad". Dichas normas solo han establecido un monto mínimo de inversión para gozar de la estabilidad tributaria otorgada por el Estado. En efecto, no existe norma minera de la que pueda extraerse una limitación de los beneficios tributarios al importe previsto en el "Estudio de factibilidad". c) **La falta de comunicación de las variaciones al "Estudio de factibilidad" no implica la pérdida de la estabilidad tributaria:** El artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Minería señala que el "Estudio de factibilidad" podrá ser modificado una o más veces en el curso de su ejecución, siempre y cuando no se afecte el objeto final del mismo. Asimismo, señala que las modificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección General de Minería, dentro de un plazo de treinta días. De esta manera, si bien el citado artículo 20 impone a los titulares de la actividad minera la obligación formal de comunicar cualquier variación del "Estudio de factibilidad", no se señala que el incumplimiento de tal deber formal deba ser sancionado con la pérdida de la estabilidad tributaria. d) **Respecto a los intereses moratorios:** La demandante señala que la administración tributaria y el Tribunal Fiscal han excedido el plazo previsto en los artículos 142 y 150 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por lo que no se deben aplicar los intereses moratorios devengados durante el plazo en exceso para resolver los recursos impugnatorios en atención a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 04082-2012-PA/TC y Nº 4523-2013-AA/TC. e) **Los beneficios tributarios del convenio de estabilidad jurídica**: Se aplican a la totalidad de la inversión realizada en el Proyecto Sulfuros, ya que la Ley General de Minería no limita los beneficios de la estabilidad tributaria a la inversión prevista en el "Estudio de factibilidad". Interpretar las normas de manera distintas implicaría vulnerar el principio de legalidad. La falta de comunicación de las variaciones al "Estudio de factibilidad" no implica la pérdida de la estabilidad tributaria y la aplicación de la sanción de perder la estabilidad, al no encontrarse prevista en una norma con rango de ley, vulnera el principio de tipicidad. Los contratos de estabilidad tributaria fueron creados por el Poder Ejecutivo con la clara intención de fomentar la inversión en el sector minero. En el presente caso, la demandante decidió realizar una expansión de su planta de sulfato. **Contestaciones de la demanda** La **SUNAT,** representada por su Procuraduría Pública, contesta la demanda (folios 489-513), bajo los siguientes fundamentos: **a) El beneficio de tasa de depreciación de hasta el 20% solo es aplicable a los activos fijos comprendidos en el Proyecto Tintaya:** Las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, en concordancia con su reglamento, califican al estudio de factibilidad técnico económico no solo como un requisito para acceder a la suscripción del convenio de estabilidad jurídica sino como un instrumento técnico de gestión que es esencial tener en cuenta para evaluar y medir el grado de inversión realizado por el titular de la actividad minera. Sostiene que las modificaciones al "Estudio de factibilidad" debieron estar debidamente

fundamentadas, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Incluso el incumplimiento del aludido "Estudio de factibilidad" puede dar lugar a la resolución del convenio de estabilidad conforme lo prescribe el artículo 38 del Decreto Supremo Nº 024-93-EM. Agrega que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Sentencia de Casación Nº 5212-2016-Lima, emitió pronunciamiento manifestando que el contenido del estudio de factibilidad es determinante para evaluar los efectos del convenio de estabilidad jurídica y su funcionalidad en todo el diseño del esquema contractual propuesto para que el estado otorgue la garantía del referido convenio. En este sentido, los bienes adquiridos fuera del monto de la inversión aprobado en el "Estudio de factibilidad" vinculado al Proyecto Tintaya, no se encuentran dentro del beneficio de la tasa global de depreciación otorgada por el contrato de estabilidad suscrito entre el Estado peruano y la demandante, debido a que la modificación del monto no fue debidamente comunicada ni fundamentada. **b) Sobre la inaplicación de los intereses moratorios:** La demandante no ha ejercido su derecho según las normas tributarias que regulan el recurso de queja tributaria y el silencio administrativo, por lo que ahora no puede denunciar un exceso del plazo para resolver contraviniendo sus actos propios. La desnaturalización del derecho a un plazo razonable no autoriza a que se inaplique los intereses moratorios. La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en las Casaciones Nº 4544-2015-Lima y Nº 5476-2016-Lima, ha establecido que los intereses moratorios tienen sustento legal y como tal no pueden dejar de cobrarse. Los intereses moratorios tienen naturaleza compensatoria y no sancionatoria. En el presente caso, si las reglas que regulan los intereses moratorios en sede tributaria son razonables para conseguir los fines que se proponen (en consonancia con las normas legales y jurisprudenciales precedentemente citadas), es decir, para que el Estado, como acreedor tributario sea compensado por la mora en el pago de la deuda que le es debida, no hay justificación alguna para que se exonere a la contribuyente de los intereses moratorios a la demandante. El **Tribunal Fiscal**, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, contesta la demanda (folios 595-620) con los siguientes fundamentos: **a) El beneficio de tasa de depreciación de hasta el 20% solo es aplicable a los activos fijos comprendidos en el Proyecto Tintaya:** La demandante reconoce que también incluyó en el beneficio de depreciación del 20% al exceso de la inversión comprendida en el Proyecto Sulfuros; sin embargo, reitera que el contrato de estabilidad no limita la aplicación de sus beneficios a lo señalado en el "Estudio de factibilidad", para lo cual invoca lo regulado por los artículos 79 y 83 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. Pero ello no se encuentra de acuerdo a los términos del contrato de estabilidad tributaria materia del presente caso y de la normatividad aplicable; por tanto, el reparo efectuado por la administración, que fue confirmado por el Tribunal Fiscal, a la tasa de depreciación respecto de los activos fijos no comprendidos en el Programa de Inversión del Proyecto Tintaya se encuentra conforme a ley. **b) Las modificaciones al estudio de factibilidad deben ser aprobadas por la Dirección General de Minería:** Según lo previsto por el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Minería, el estudio de factibilidad puede ser modificado en el curso de su ejecución, siempre que ello no afecte el objeto final del mismo, siendo que estas modificaciones deben ser aprobadas por la Dirección General de Minería. La posibilidad de modificar el estudio de factibilidad se estableció en el contrato de estabilidad respecto al Proyecto Tintaya, pues en el apartado 4.2 de la cláusula cuarta se señala que: "Si algún cambio se requiriera hacer, podrá procederse respecto de las obras y labores pendientes de ejecutar, siempre que no se afecte el objeto final del Plan de Inversiones; y siempre también que el titular presente previamente a la Dirección General de Minería la solicitud de aprobación de tales modificaciones y/o ampliaciones y sin perjuicio también, de la aprobación por parte de dicha Dirección General para que las modificaciones y/o ampliaciones efectuadas queden convalidadas y sean incluidas en el Plan de Inversiones". **c) La aprobación del "Estudio de factibilidad técnico económica" para el Proyecto Tintaya se realizó el 17 de noviembre de 1995 mediante la Resolución Directoral Nº 286-95-EM/DGM:** En el presente caso, en el marco de lo que señala la cláusula segunda del contrato de estabilidad, no se observa que la demandante hubiera realizado modificaciones o ampliaciones al plan de inversiones contenido en el "Estudio de factibilidad" que hubieran sido aprobadas por la Dirección General de Minería. En los documentos que fueron analizados tanto por la administración tributaria como por el Tribunal Fiscal se aprecia que, desde un inicio, tanto la demandante como el Estado peruano delimitaron los alcances y el objeto del contrato de estabilidad, comprometiéndose a realizar una serie de prestaciones que debían ser cumplidas por ambas partes. En consecuencia, los bienes adquiridos fuera del periodo y monto de la inversión aprobada, vinculados al referido Proyecto Tintaya, no se encuentran dentro del beneficio de la tasa global de depreciación otorgada por el contrato de estabilidad suscrito entre el Estado peruano y la demandante, por lo que el reparo efectuado se encuentra arreglado a ley. **Sentencia de primera instancia** Mediante sentencia del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró **fundada en parte la demanda** (folios 711-742), en el extremo de la **segunda pretensión principal** de la demanda referida a la **suspensión de intereses moratorios computados por el exceso del plazo para resolver por la administración tributaria y el Tribunal Fiscal** los recursos de reclamación y apelación; asimismo, ordenó a la administración tributaria reliquidar la deuda tributaria y, de ser el caso, la restitución de lo abonado con sus respectivos intereses hasta su devolución, en cuanto a los intereses moratorios computados por el exceso del plazo al resolver los recursos de reclamación y apelación, en atención a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución; e **infundada la demanda en todo lo demás** que esta contiene. Expone los siguientes fundamentos: **11.3 Respecto a la Primera Pretensión Principal de la demanda:** […] 11.3.9 […], el artículo 81 de la mencionada Ley General de Minería estableció que aquellos titulares de la actividad minera que pretendan gozar de tales beneficios (señalados en el artículo 79 de la Ley General de Minería) debían presentar ante la Dirección General de Minería el programa de inversiones con plazo de ejecución, en ese mismo sentido, el artículo 85 de la Ley General de Minería condiciona el hecho de que para gozar de los beneficios señalados anteriormente, los titulares de la actividad minera debían presentar un estudio de factibilidad técnico- económico, con carácter de declaración jurada, el cual debía ser aprobado por la Dirección General de Minería. Respecto al Estudio de Factibilidad técnico- económico, esta judicatura advierte que no puede considerársele como un documento meramente formal, pues la Ley General de Minería condiciona su presentación a fin de acceder a los beneficios de los convenios de estabilidad tributaria, del mismo modo, la citada Ley dispone que la fecha de la aprobación del Estudio será el momento que regirá como fecha de estabilidad del régimen tributario y las garantías aplicables. Aunado a lo señalado anteriormente, el artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Minería tenía dispuesto que el Estudio de Factibilidad debía contener diversa información como la adquisición de maquinaria y equipo que se utilizaría en el proyecto y el monto de la inversión desagregado, es decir que este Estudio debía contar con información debidamente determinada por el titular de las concesiones mineras, la cual sería revisada y aprobada por la Dirección General de Minería, por lo que debía brindarse los datos completos y verificados por los titulares de la concesión minera, y en caso hubiera algún tipo de modificación, el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Minería establecía que éste podría ser modificado una o más veces en el curso de su ejecución siempre y cuando no se afectara el objeto final del mismo y que las modificaciones debían ser aprobadas por la Dirección General de Minería. […] 11.3.11 En ese sentido, se advierte que al haberse celebrado un convenio de estabilidad jurídica, la demandante y el Estado Peruano se encontraban conminados a respetar y cumplir lo estrictamente acordado en el convenio de estabilidad jurídica, así como lo previsto en la normativa especial de la Ley General de Minería conjuntamente con su Reglamento, advirtiéndose que, la demandante no cumplió con informar a la Dirección General de Minería sobre el aumento de la inversión a lo inicialmente informado en su Estudio Fáctico - Técnico (Estudio de Factibilidad), el cual era parte de la solicitud para acceder a los beneficios tributarios que otorgaba el convenio de estabilidad jurídica, por lo tanto, el beneficio referido a la facultad de depreciar de manera acelerada los bienes del activo fijo, con una tasa máxima anual del 20%, se aplicaba solo a los activos fijos e inversiones que fueron presentadas en el Estudio de Factibilidad y el Plan de Inversiones que fue presentado por la demandante con fecha 31 de julio de 1998, el cual servía como base para determinar las inversiones materia del contrato de estabilidad jurídica. Que, si bien la demandante señala que la Ley General de Minería no limitaba los beneficios de la estabilidad tributaria a la inversión prevista en el Estudio de Factibilidad, no es menos verdad que, conforme al análisis

efectuado en los párrafos anteriores, de acuerdo a una interpretación conjunta de la Ley General de Minería y su Reglamento, así como la lectura del convenio de estabilidad jurídica celebrado por la demandante, puede observarse que la inversión establecida en el Estudio de Factibilidad es considerada como información relevante y por la cual se otorgaron los beneficios de la estabilidad jurídica tributaria, ya que, en caso contrario, la normativa de la Ley General de Minería, su Reglamento y el convenio de estabilidad jurídica no habrían condicionado la validez de las modificaciones a la inversión inicial realizadas con posterioridad a que se informe de ellas previamente a la Dirección General de Minería y que éstas sean aprobadas e incluidas en la inversión inicial; es decir que no se advierte que la Ley General de Minería o su Reglamento hayan autorizado que los titulares de las actividades mineras que hayan celebrado convenios de estabilidad jurídica con el Estado modifiquen el monto de las inversiones originales previstas en sus estudios de factibilidad en cualquier momento, sino que lo que correspondía era una previa comunicación a la entidad administrativa y una autorización de ésta para que los incrementos en la inversión original sean incluidos en el beneficio de estabilidad tributaria, situación que no se advierte que haya ocurrido en el caso de autos, pues la demandante no ha explicado con los fundamentos pertinentes la razón por la cual no cumplió con informar respecto a la mayor inversión efectuada en el Proyecto "Tintaya". Por todo lo expuesto no se advierte que la actuación de la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal hayan vulnerado el Principio de Legalidad, así como no se advierte que se haya aplicado una sanción a la demandante y por ello se haya vulnerado el principio de tipicidad, en tal sentido, corresponde desestimar la primera pretensión principal de la demanda. […] **11.4 Respecto a la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal:** […] 11.4.2 Al respecto, corresponde señalar que el inciso f) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-99-EF aplicable al caso de autos, establecía que para establecer la renta neta de tercera categoría se deduciría de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, entre éstas deducciones se encontraban las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo, ello debido a que se busca que los contribuyentes recuperen el costo de la inversión en que incurrieron al adquirir los activos fijos. Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, se advierte que con relación a la determinación de la obligación tributaria, según el artículo 59 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, aplicable en el ejercicio 2002, en adelante Código Tributario, ésta correspondía ser efectuada por a la demandante, quien tenía la facultad de aplicar la tasa máxima del 20% anual solo a los activos fijos que se detallaron en el Estudio de Factibilidad presentado ante la Dirección General de Minería; y a los activos fijos, adquiridos posteriormente, cuya adquisición o mayor inversión no fue informada a la mencionada Dirección, se les debió aplicar la depreciación referida en el mencionado inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, correspondiente con la tasa establecida en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para los ejercicios posteriores, por lo tanto, corresponde que la demandante efectúe la rectificación del cálculo del Impuesto a la Renta del ejercicio 2002 y de los ejercicios posteriores, aplicando la depreciación correcta (conforme a lo previsto en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento) a los activos fijos que no fueron materia del Estudio de Factibilidad. 11.4.3 Por tanto, al tratarse de un error propiciado por la propia demandante, correspondía que ésta rectifique las declaraciones juradas de tercera categoría del Impuesto a la Renta del ejercicio 2002 y posteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 88° del Código Tributario, con lo cual no puede ampararse la pretensión subordinada de la demanda, máxime, si el Tribunal Fiscal en la resolución materia controvertida no desconoció que hubiera una diferencia temporal por el reparo denominado "Beneficio de tasa de depreciación de hasta el 20% aplicables solo a los activos fijos comprendidos en el Programa de Inversión (Proyecto Tintaya)", y en su escrito de contestación, el Tribunal Fiscal ha señalado que corresponde a la demandante subsanar el error en que incurrió; por lo tanto, esta judicatura no considera que deba declararse la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04788-10-2019, al no haber desconocido esta resolución que la demandante tenía el derecho a aplicar, respecto de las inversiones adicionales en activos fijos, la tasa regular de depreciación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, en tal sentido, corresponde desestimar la pretensión subordinada a la primera pretensión principal de la demanda. […] **11.5 Sobre la Segunda Pretensión Principal:** 11.5.8 En consecuencia, debe concluirse que ni la Administración Tributaria ni el Tribunal Fiscal han señalado causa alguna que justifique el exceso del tiempo para resolver el recurso de apelación, lo cual ha generado una dilación indebida e imputable a éstas entidades administrativas, dilación que afectó a la demandante debido a que se ha producido un incremento injustificado de intereses moratorios por todo el plazo en que la SUNAT y el Tribunal Fiscal se retrasaron en resolver los recursos de reclamación y apelación, lo que, según el criterio esbozado por el Tribunal Constitucional, resulta una afectación a la tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad. De lo expuesto, debe estimarse la segunda pretensión principal a la demanda, por la cual se solicita la inaplicación de la regla de capitalización de intereses y la suspensión de los intereses moratorios devengados por el plazo en exceso que la SUNAT y el Tribunal Fiscal demoraron en resolver los recursos de reclamación y apelación interpuestos por la demandante. […] **11.6 Sobre la Tercera Pretensión Principal:** 11.6.1 La demandante solicita que se disponga la inaplicación de los intereses moratorios devengados desde la interposición de la presente demanda hasta la fecha en que se expida un fallo definitivo con calidad de cosa juzgada, debido a que ello afecta su derecho de acceso a la jurisdicción y su derecho a la defensa. Que, si bien esta judicatura ha tomado en consideración y aplicado el criterio recurrente del Tribunal Constitucional referido a la inaplicación de los intereses moratorios, debe señalarse que este criterio solo ha sido tomado para aquellos casos en los cuales exista una dilación indebida por parte de los organismos administrativos (Administración Tributaria y Tribunal Fiscal) para resolver los recursos impugnatorios interpuestos por los contribuyentes, como los recursos de reclamación y apelación, y el Supremo intérprete de la Constitución no ha emitido pronunciamiento alguno referido a si la suspensión del devengo de los intereses moratorios deba aplicársele también a los procesos judiciales. Del mismo modo, la demandante solo enuncia lo referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho de acceso a la jurisdicción, así como señala que de no ampararse su pretensión eso sería un desincentivo para acudir a la jurisdicción y tutelar sus derechos constitucionales, sin embargo, no se advierte que se hayan vulnerado los mencionados derechos invocados, pues la demandante no ha explicado de qué forma éstos han sido restringidos, tampoco se observa que la demandante no haya acudido al órgano jurisdiccional, por el contrario se advierte que esta ha presentado su demanda, la cual es materia controvertida en el presente proceso judicial. Por todo lo expuesto no corresponde estimar lo solicitado por la demandante en la tercera pretensión principal de su demanda. **Sentencia de vista** Mediante sentencia de vista número diecisiete, del veintinueve de abril de dos mil veintidós (folios 875-894), la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, **confirma en parte** la sentencia en el extremo que declaró **infundada la demanda respecto a la primera y tercera pretensión principal**, y **fundada la segunda pretensión principal**; y **revoca en parte** la sentencia en cuanto declaró **infundada la demanda respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal**, que buscaba que en el ejercicio de plena jurisdicción se reconozca a la demandante el derecho de aplicar a las inversiones adicionales en activos fijos, la tasa regular de depreciación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2002; y, **reformándola,** declara **fundada la demanda en dicho extremo**; en consecuencia y en ejercicio de plena jurisdicción, se reconoce a la demandante el derecho de aplicar a las inversiones adicionales en activos fijos, la tasa regular de depreciación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2002. Estos son sus argumentos: **OCTAVO**.- […] En relación a que no existe norma que limite el beneficio de la depreciación del 20% a los activos fijos obtenidos del monto en exceso de la inversión, cabe señalar que de conformidad con el Artículo 82 de la Ley General de Minería, se señala en su primer párrafo "(…) los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de quince años. Contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación según sea el caso", esto es, los beneficios derivados de los convenios alcanzarán a la inversión originalmente aprobada en el estudio de factibilidad y las posteriores ampliaciones producto de las modificatorias convalidadas por la Dirección General de Minería. En consecuencia, la utilización de la tasa global de depreciación para bienes del activo fijo adquiridos por el monto en exceso de la inversión aprobada para los contratos de garantías

materia del caso, no corresponde ser reconocida, al no existir previamente una convalidación de dicha variación en el Estudio de Factibilidad aprobado por la Dirección General de Minería mediante Resolución Directoral Nº 286-95-EM-DGM y Resolución Directoral Nº 314-2002-EM/DGM; y por tanto corresponde confirmar la apelada en este extremo. […] **NOVENO**.- Habiéndose rechazado la pretensión principal, corresponde analizar la pretensión postulada como subordinada, en dicho efecto, la accionante solicita que de considerarse la aplicación de las tasas generales de depreciación previstas en la Ley del Impuesto a la Renta (y no la tasa de depreciación acelerada del 20%), se declare que tiene derecho a deducir el monto de la depreciación rechazada en el ejercicio 2002 en los siguientes ejercicios. Sobre el particular, es de mencionar que mediante sentencias recaídas en la Casación Nº 25942-2018 de 03 de noviembre de 2020 y la Casación Nº 19024-2017 de fecha 08 de julio de 2021 referido a la misma controversia detallada en el presente caso de la Compañía Minera Antapaccay S.A, la Corte Suprema refirió en el ítem 6.5 del Considerando SEXTO, lo siguiente "ya que si se ha denegado la aplicación de la depreciación acelerada al amparo de los mencionados contratos de estabilidad suscritos entre la recurrente y el Estado Peruano, entonces bajo el principio de igualdad ante la ley contenido en el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado, le corresponde la depreciación del régimen general del Impuesto a la Renta". Es así, que, bajo el mismo lineamiento, corresponde proceder a revocar la sentencia apelada en este extremo. […] **DÉCIMO**.- **INTERESES DURANTE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO** […] el derecho al plazo razonable, no se encuentra expresamente establecido en la Constitución Política; sin embargo, no queda duda alguna de su protección y reconocimiento constitucional. Respecto al mismo, el Tribunal Constitucional precisa en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 295-2012-PH/TC, que el plazo razonable "constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución. El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes.". En tal sentido, el plazo razonable no es igual o equivalente al plazo legalmente establecido para resolver la generalidad de los casos, sino que depende en gran medida de las circunstancias especiales de cada caso en concreto. Así, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente Nº 3778-2004-AA/TC, estableció que: "(…) el carácter razonable de la duración de un proceso se debe apreciar según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta: a) la complejidad del asunto; b) el comportamiento del recurrente; c) la forma en que el asunto ha sido llevado por las autoridades administrativas (es decir, lo que ordinariamente se demora en resolver determinado tipo de procesos), y d) las consecuencias que la demora produce en las partes." En esa misma línea interpretativa, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC, señaló que: "(...) No puede presumirse la mala fe del contribuyente y reprimirse con una sanción el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales, máxime cuando el trámite del procedimiento se extendió por un largo periodo de tiempo por razones ajenas al administrado […] el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa […]", siendo que dicho pronunciamiento fue ratificado a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4532-2013-PA/TC, en la que se precisó que para analizar una presunta vulneración al derecho al plazo razonable debe evaluarse la complejidad del proceso y la conducta asumida por las partes involucradas. […] **UNDÉCIMO**.- […] se aprecia que con fecha 24 de julio de 2007, la actora presentó recurso de reclamación contra las Resolución de Determinación Nº 092-003-0001629, y la Resolución de Multa Nº 092-002-2319, siendo que el referido recurso fue resuelto mediante la Resolución de Intendencia Nº 095-014-0000680/SUNAT de fecha 28 de noviembre de 2008 (inserta de fojas 110 a 384 del EJE), advirtiéndose que la Administración Tributaria excedió el plazo regulado en el artículo 142 del Código Tributario. Asimismo, la accionante interpuso Recurso de Apelación el cual ingresó al Tribunal Fiscal con fecha 20 de febrero de 2009 (según obra a foja 11191 del expediente administrativo) y fue resuelto a través de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04788-10-2019 de fecha 24 de mayo de 2019, advirtiendo que el referido órgano resolutor excedió el plazo previsto en el artículo 150° del Código Tributario. En dicho contexto, se observa que sí se ha vulnerado el derecho de la accionante a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, dado que no se aprecia alguna causal que justifique la demora incurrida por los órganos resolutores. En consecuencia, del análisis expuesto corresponde la inaplicación de los intereses moratorios durante el tiempo en exceso que se demoró el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria en resolver los recursos impugnatorios interpuestos por la demandante, en la etapa administrativa. Materia controvertida en el presente caso Con relación a los hechos determinados por las instancias de mérito y en concordancia con las causales por las que fueron admitidos los recursos de casación interpuestos por la empresa demandante **Compañía Minera Antapaccay S.A.** y las codemandadas **SUNAT** y **Tribunal Fiscal**, concierne a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió las normas denunciadas como tales: **i)** afectación al deber de motivación y al principio de congruencia; **ii)** vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; **iii)** vulneración del numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; **iv)** vulneración del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional; **v)** Incurrir en una motivación insuficiente y aparente; **vi)** inaplicación de la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Nº 30230 y el Decreto Legislativo Nº 981; **vii)** infracción normativa por apartamiento de los artículos 43, 44, 59 a 61 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; **viii)** aplicación indebida del control difuso previsto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado; y **ix)** inaplicación del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Al confirmar y revocar en parte la sentencia. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante auto de calificación de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedentes los recursos de casación interpuestos: **Recurso de casación de Compañía Minera Antapaccay S.A. Afectación al deber de motivación y al principio de congruencia.** La recurrente fundamenta su causal señalando los siguientes argumentos: **a)** La demandante solicitó al Poder Judicial que, en ejercicio de su poder de plena jurisdicción y ante la negativa de aplicar la tasa de depreciación acelerada de sus bienes aplicando el 20%, disponga la aplicación de las tasas de depreciación generales dispuestas en la Ley del Impuesto a la Renta y que pueda ser admitida por la SUNAT para el ejercicio dos mil dos y los ejercicios siguientes. **b)** La Sala Superior ha emitido un pronunciamiento infra petita por limitar la aplicación de la tasa regular de depreciación en la Ley del Impuesto a la Renta únicamente para el ejercicio dos mil dos, dado que lo solicitado por la recurrente era que la declaración recaiga en el ejercicio 2002 y ejercicios siguientes; así se vulnera el deber de motivación y específicamente el principio de congruencia procesal. **Recurso de casación de la SUNAT Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial a)** La Sala Superior ha incurrido en una motivación aparente e insuficiente, dado que no ha efectuado el test de proporcionalidad a fin de realizar el control difuso (inaplicación) de la regla de capitalización de intereses y aplicación de intereses, de acuerdo con lo contenido en el precedente vinculante recaído en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04293-2012-PA/TC y la doctrina jurisprudencial vinculante contenida en la Consulta Nº 1618-2016-Lima Norte. **b)** La sentencia de vista incurre en una falta de motivación externa y vulnera el principio de prohibición de arbitrariedad al partir de la premisa falsa de que las Sentencias Nº 4082-2012-PA/TC y Nº 4532-2014-PA/RC, constituyen doctrina jurisprudencial vinculante, pese a que el Tribunal Constitucional ha señalado que no poseen tal calidad. **c)** Incurre en una motivación insuficiente al no haber analizado los aspectos esenciales para determinar la afectación del derecho al plazo razonable, tales como la complejidad del asunto, la conducta del contribuyente o la acreditación del perjuicio económico que se alega. **d)** Incurre en una motivación inexistente, dado que no se ha pronunciado sobre diversos argumentos centrales planteados en el recurso de apelación, con lo que vulnera el debido proceso. **e)** No ha justificado su apartamiento de las Sentencias de Casación Nº 4544-2015 Lima y Nº 5476-2016 Lima, incurriendo en una motivación inexistente sobre este argumento. **Infracción por incurrir en una motivación insuficiente y aparente** a) La Sala Superior ha incurrido en una motivación insuficiente y aparente, dado

que la única argumentación a efectos de aplicar la depreciación del régimen general del impuesto a la renta es un único párrafo en el que se cita la Casación Nº 25942-2018 y la Casación Nº 19024-2017, sin considerar que dichas casaciones se encuentran pendientes de ser ejecutoriadas por la administración y no son precedentes de observancia obligatoria. Inaplicación de la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Nº 30230 y el Decreto Legislativo Nº 981 **a)** La Sala Superior ha inaplicado la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Nº 30230 y el Decreto Legislativo Nº 981, pese a que dicha norma establece una disposición mandataria de cumplimiento obligatorio respecto a cómo y desde cuándo debe aplicarse la regla de la suspensión de los intereses moratorios. En ese sentido, resulta incuestionable que ninguna autoridad debía suspender los intereses moratorios en instancia de apelación antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30230. **b)** Si la Sala Superior no ha hecho su labor de control difuso no podía inaplicar dichas normas y, como tal, tampoco liberar a la demandante de su obligación de pagar los intereses moratorios, intereses que se generaron por su propia conducta omisiva con su obligación tributaria. **Infracción normativa por apartamiento de los artículos 43, 44, 59 a 61 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario** a) No se ha analizado ni justificado su apartamiento de los artículos 43, 44 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, dado que se pronuncia sobre el derecho de depreciar en virtud del régimen general del impuesto a la renta ha prescrito o no, ello en virtud del artículo 43 y 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y el cumplimiento del demandante vía su declaración jurada. b) Sobre lo dispuesto por los artículos 59, 60, 61 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, refiere sobre la aplicación de la depreciación en el régimen general del impuesto a la renta, que la Sala debía analizar si la demandante cumplió con comunicar este hecho vía su declaración jurada. **Recurso de casación del Tribunal Fiscal** Vulneración del artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto por el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional **a)** La Sala Superior ha incurrido en una motivación aparente, en tanto no ha efectuado un análisis adecuado de lo expuesto en el recurso de apelación, específicamente en cuanto a los criterios para verificar si se produjo la vulneración del plazo razonable. **b)** No ha motivado debidamente el extremo que declara fundada la pretensión subordinada a la pretensión principal, dado que únicamente se remite a las Sentencias de Casación Nº 25942-2018 y Nº 19024-2017, que no constituyen precedente vinculante; y con base en ella se declara que la demandante tiene derecho a deducir el monto de la depreciación rechazada en el ejercicio 2002 en los siguientes ejercicios. **c)** Omite considerar la alta complejidad del caso y no verificó la omisión incurrida por la demandante durante la etapa administrativa, dado que no presentó un recurso de queja. **d)** La sentencia recaída en el Expediente Nº 4532-2013-PA/TC no constituye precedente vinculante y la Sala Superior no cumple con el análisis pormenorizado de los 4 criterios que han sido establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en dicho pronunciamiento. Aplicación indebida del control difuso previsto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado a) El ad quem, sin cumplir los parámetros mínimos que lo habilitan, efectúa un control difuso muy gravoso. Al afectar la obligatoriedad del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se estaría afectando la obligatoriedad de las leyes, por lo que el ejercicio del control difuso no puede ser realizado sin tomar en cuenta los parámetros de compatibilidad constitucional. b) La segunda disposición final de la Ley Nº 28301 - Nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que los jueces en los procesos judiciales a su cargo deben preservar la primacía de la norma constitucional y deben considerar la presunción de validez constitucional de las normas legales. En ese sentido, se debe partir de la presunción de constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario o acudir al test de proporcionalidad como estrategia argumentativa que sirve para solucionar conflictos de derechos. c) Se limitó a señalar los criterios contenidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 04532-2013-PA/TC, y reconocer de este modo la inaplicación de intereses moratorios por la demora en resolver los recursos de reclamación y apelación. Inaplicación del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario a) La sentencia de vista, como consecuencia del incorrecto ejercicio de control difuso, ha inaplicado el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, pese a ser una norma constitucional y de encontrarse en vigor, dado que no ha sido declarada inconstitucional y tampoco existe norma jurídica que ordene la inaplicación de los intereses moratorios. b) El artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario fue modificado por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 981, vigente desde el primero de abril de dos mil siete hasta el doce de julio de dos mil catorce, fecha en que entra en vigencia la modificatoria de la Ley Nº 30230. El citado artículo 6 circunscribía la suspensión del cobro de intereses al tiempo en exceso que se toma la administración tributaria para resolver la reclamación y no respecto al recurso de apelación, y recién con la Ley Nº 30230 se modifica el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y se permite la suspensión del cómputo de intereses por el tiempo en exceso que el Tribunal Fiscal se demore en resolver los recursos de apelación. CONSIDERANDO PRIMERO. El recurso de casación **1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[3], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[4], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. Análisis de las causales de casación de naturaleza procesal SEGUNDO. Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y del numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; vulneración del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional; infracción consistente en incurrir en una motivación insuficiente y aparente; afectación al deber de motivación y al principio de congruencia; aplicación indebida del control difuso previsto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado **2.1.** Se declararon procedentes los recursos de casación presentados por los recurrentes, Compañía Minera Antapaccay S.A., SUNAT y Tribunal Fiscal, por causales de naturaleza adjetiva que denuncian la infracción de normas de carácter procesal. Corresponde, pues, realizar el análisis de los fundamentos que sustentan el medio impugnatorio, luego de lo cual se procederá a emitir el pronunciamiento correspondiente. Para este fin, corresponde citar los dispositivos legales cuya infracción se alega: Código Procesal Constitucional **Artículo VII del Título Preliminar Control difuso e interpretación constitucional** Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango

de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Constitución Política del Estado **Artículos 51.- PREVALENCIA DE LA CONSTITUCIÓN** La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. **Artículos 138.- POTESTAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA** La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. **Artículo 139.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 6. La pluralidad de la instancia. […] 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad Código Procesal Civil **Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:** […] 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial **Artículo 12.- Motivación de Resoluciones**. Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo estos reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado. **2.2.** El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y, entre otros, comprenden el deber de los jueces de observar los derechos procesales de las partes y el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquier etapa del proceso. **2.3.** El debido proceso comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, ello en concordancia con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **2.4.** Con relación a la infracción del deber de motivación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, se ha pronunciado de la siguiente manera: 77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. **2.5.** En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Primer Pleno Casatorio, Casación Nº 1465-2007 Cajamarca, ha asumido similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido de que: La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente. **2.6.** La motivación de lo que se decide es interna y externa. La primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en sentido estricto[5], con implicancia en el control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[6]. En esa perspectiva, la justificación externa requiere **i)** que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; **ii)** que toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y **iii)** que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión[7]. **2.7.** En el marco conceptual descrito, la motivación puede mostrar diversas patologías, que, en estricto, son: **i)** la motivación omitida, **ii)** la motivación insuficiente y **iii)** la motivación contradictoria. La primera hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es, no hay rastro de la motivación misma. La segunda se presentará cuando exista motivación parcial que vulnera el requisito de completitud; comprende la motivación implícita, que se da cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se hace inferir de otra decisión del juez, y la motivación por relación, cuando no se elabora una justificación independiente sino que se remite a razones contenidas en otra sentencia; asimismo, la motivación insuficiente se presentará principalmente cuando no se expresa la justificación de las premisas, que por tanto no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra. Finalmente, estaremos ante una motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es contradictoria. **2.8.** El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC señala que el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. **2.9.** De esta manera, al juez supremo no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez superior ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. **Análisis de la sentencia de vista cuestionada 2.10.** En el caso concreto, cabe resaltar los argumentos de los recurrentes sobre las denuncias por vulneración a normas procesales: i. La empresa recurrente solicitó al Poder Judicial que, en ejercicio de su poder de plena jurisdicción y ante la negativa de aplicar la tasa de 20% para depreciación acelerada de sus bienes, disponga la aplicación de las tasas de depreciación generales dispuestas en la Ley del Impuesto a la Renta y que pueda ser admitida por la SUNAT para el ejercicio dos mil dos y los ejercicios siguientes; sin embargo, manifiesta que la Sala Superior ha emitido un pronunciamiento infra petita por limitar la aplicación de la tasa regular de depreciación en la Ley del Impuesto a la Renta únicamente para el ejercicio 2002, cuando lo solicitado por la recurrente era que la declaración recaiga en el ejercicio 2002 y ejercicios siguientes; así, se vulnera el deber de motivación y, específicamente, el principio de congruencia procesal. ii. La codemandada SUNAT argumenta su recurso en que la Sala Superior ha incurrido en una motivación aparente e insuficiente, dado que no ha efectuado el test de proporcionalidad a fin de realizar el control difuso (inaplicación) de la regla de capitalización de intereses y aplicación de intereses, de acuerdo con lo contenido en el precedente vinculante recaído en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04293-2012-PA/TC y la doctrina jurisprudencial vinculante contenida en la Consulta Nº 1618-2016-Lima Norte. Precisa que la sentencia de vista incurre en una falta de motivación externa y vulnera el principio de prohibición de arbitrariedad al partir de la premisa falsa de que las Sentencias Nº 4082-2012-PA/TC y Nº 4532-2014-PA/RC constituyen doctrina jurisprudencial vinculante, pese a que el Tribunal Constitucional ha señalado que no poseen tal calidad. Menciona que la Sala Superior ha citado de forma escueta la Casación Nº 25942-2018 y la Casación Nº 19024-2017, sin considerar que dichas casaciones se encuentran pendientes de ser ejecutoriadas por la administración y que dichas casaciones no son precedentes de observancia obligatoria. Advierte que la Sala Superior incurre en una motivación insuficiente al no haber analizado los aspectos esenciales para determinar la afectación del derecho al plazo razonable, tales como la complejidad del asunto, la conducta del contribuyente o la acreditación del perjuicio económico que se alega. Señala que la Sala Superior incurre en una motivación inexistente, dado que no se ha pronunciado sobre diversos argumentos centrales planteados en el recurso de apelación, con lo que vulnera el debido proceso. Señala que la Sala Superior no ha justificado su apartamiento de las Sentencias de Casación Nº 4544-2015 Lima y Nº 5476-2016 Lima e incurre así en una motivación inexistente sobre este argumento. iii. La codemandada Tribunal Fiscal manifiesta que la Sala Superior ha incurrido en una motivación aparente, en tanto no ha efectuado un análisis adecuado de lo expuesto en el recurso de apelación, específicamente en cuanto a los criterios para verificar si se produjo la vulneración del plazo razonable. Precisa que la Sala Superior no ha motivado debidamente el

extremo que declara fundada la pretensión subordinada a la pretensión principal, dado que únicamente se remite a las Sentencias de Casación Nº 25942-2018 y Nº 19024-2017, que no constituyen precedente vinculante y sobre las que se declara que la demandante tiene derecho a deducir el monto de la depreciación rechazada en el ejercicio dos mil dos en los siguientes ejercicios. Añade que la Sala Superior omite considerar la alta complejidad del caso y que no verificó la omisión incurrida por la demandante durante la etapa administrativa, dado que no presentó un recurso de queja. Advierte que la sentencia recaída en el Expediente Nº 4532-2013-PA/TC no constituye precedente vinculante y la Sala Superior no cumple con el análisis pormenorizado de los 4 criterios que han sido establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en dicho pronunciamiento. Refiere que el ad quem, sin cumplir los parámetros mínimos que lo habilitan, efectúa un control difuso muy gravoso; al afectar la obligatoriedad del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se estaría afectando la obligatoriedad de las leyes; el ejercicio del control difuso no puede ser realizado sin tomar en cuenta los parámetros de compatibilidad constitucional. Advierte que, de la segunda disposición final de la Ley Nº 28301 - Nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los jueces en los procesos judiciales a su cargo deben preservar la primacía de la norma constitucional y deben considerar la presunción de validez constitucional de las normas legales; en ese sentido, se debe partir de la presunción de constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario o acudir al test de proporcionalidad como estrategia argumentativa que sirve para solucionar conflictos de derechos. Señala que el ad quem, se limitó a señalar los criterios contenidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 04532-2013-PA/TC y reconocer de este modo la inaplicación de intereses moratorios por la demora en resolver los recursos de reclamación y apelación. **2.11.** En cuanto al argumento de los tres recurrentes sobre la vulneración de las normas procesales, se observa en el contenido de la sentencia de vista que en el noveno y el décimo considerando la Sala Superior fundamentó su decisión en lo siguiente: **NOVENO.-** Habiéndose rechazado la pretensión principal, corresponde analizar la pretensión postulada como subordinada, en dicho efecto, la accionante solicita que de considerarse la aplicación de las tasas generales de depreciación previstas en la Ley del Impuesto a la Renta (y no la tasa de depreciación acelerada del 20%), se declare que tiene derecho a deducir el monto de la depreciación rechazada en el ejercicio 2002 en los siguientes ejercicios. Sobre el particular, es de mencionar que mediante sentencias recaídas en la Casación N°25942-2018 de 03 de noviembre de 2020 y la Casación Nº 19024-2017 de fecha 08 de julio de 2021 referido a la misma controversia detallada en el presente caso de la Compañía Minera Antapaccay S.A., la Corte Suprema refirió en el ítem 6.5 del Considerando SEXTO, lo siguiente "ya que si se ha denegado la aplicación de la depreciación acelerada al amparo de los mencionados contratos de estabilidad suscritos entre la recurrente y el Estado Peruano, entonces bajo el principio de igualdad ante la ley contenido en el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado, le corresponde la depreciación del régimen general del Impuesto a la Renta". Es así, que, bajo el mismo lineamiento, corresponde proceder a revocar la sentencia apelada en este extremo. **DÉCIMO.-** […] Ahora bien, el derecho al plazo razonable, no se encuentra expresamente establecido en la Constitución Política; sin embargo, no queda duda alguna de su protección y reconocimiento constitucional. Respecto al mismo, el Tribunal Constitucional precisa en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 295-2012-PH/TC, que el plazo razonable "constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado. El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes.". En tal sentido, el plazo razonable no es igual o equivalente al plazo legalmente establecido para resolver la generalidad de los casos, sino que depende en gran medida de las circunstancias especiales de cada caso en concreto. Así, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 3778-2004-AA/TC, estableció que: "[…] el carácter razonable de la duración de un proceso se debe apreciar según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta: a) la complejidad del asunto; b) el comportamiento del recurrente; c) la forma en que el asunto ha sido llevado por las autoridades administrativas (es decir, lo que ordinariamente se demora en resolver determinado tipo de procesos), y d) las consecuencias que la demora produce en las partes." En esa misma línea interpretativa, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC, señaló que: "[…] No puede presumirse la mala fe del contribuyente y reprimirse con una sanción el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales, máxime cuando el trámite del procedimiento se extendió por un largo periodo de tiempo por razones ajenas al administrado […] el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa […]", siendo que dicho pronunciamiento fue ratificado a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4532-2013-PA/TC, en la que se precisó que para analizar una presunta vulneración al derecho al plazo razonable debe evaluarse la complejidad del proceso y la conducta asumida por las partes involucradas. Por consiguiente, el derecho a un plazo razonable ha merecido un singular análisis y el establecimiento de específicos criterios y constantes por parte del Tribunal Constitucional a través de las sentencias de fechas 10 de mayo del 2016 y 16 de agosto del 2018, emitidas en los Expedientes números 04082-2012-PA/TC y 04532-2013-PA/TC. **2.12.** De lo expuesto en la sentencia de vista, se evidencia que la Sala de mérito ha cumplido con dar respuesta argumentativa sustentada en criterios establecidos en sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias casatorias y normas especiales, a los agravios señalados por la demandante y las entidades codemandadas; por lo tanto, es cierto que se hace referencia a una afectación de los derechos enunciados, pero se observa en la sentencia de vista que, si bien las citadas resoluciones no forman parte de la jurisprudencia vinculante, ello no quita mérito al estudio y aplicación de dichas sentencias para resolver el presente caso, más aún si se aplicaron los criterios de conformidad con la Constitución y las leyes especiales de forma correcta con el control difuso. No basta con alegar una afectación a determinados derechos o principios, sino que se debe precisar aquello que se alega. Por ende, los cuestionamientos a la sentencia de vista, respecto a la supuesta vulneración de normas procesales presentadas por las recurrentes, deben ser desestimados. **2.13.** Respecto al argumento referido por la demandante sobre un pronunciamiento infra petita, por el que la Sala Superior habría limitado la aplicación de la tasa regular de depreciación en la Ley del Impuesto a la Renta únicamente para el ejercicio dos mil dos, dado que lo solicitado por la recurrente era que la declaración recaiga en el ejercicio 2002 y ejercicios siguientes, con lo que se ha vulnerado el deber de motivación y específicamente el principio de congruencia procesal; es preciso tener presente que, para efectos de resolver la controversia, la Sala de mérito evidentemente tuvo en consideración el ámbito temporal delimitado en la fiscalización, la misma que se circunscribió al ejercicio 2002. Por tanto, resulta coherente el pronunciamiento efectuado respecto a dicho período; lo contrario sería exceder el límite de los hechos propuestos en las instancias de mérito y que fueron materia de pronunciamiento. Consecuentemente, la sentencia de vista materia del recurso ha sido dictada con arreglo a ley y a los hechos que fueron materia de fiscalización y pronunciamiento, en la medida que el período fiscalizado fue el 2002; por lo cual no se advierte que la sentencia recurrida haya incurrido en causal de nulidad. Por tanto, corresponde declarar **infundados** los recursos respecto a las causales procesales denunciadas. **Análisis de las causales de naturaleza sustantiva de los codemandados SUNAT y Tribunal Fiscal respecto a la aplicación de intereses moratorios en el lapso que las instancias administrativas excedieron el plazo para resolver** TERCERO. Inaplicación de la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Nº 30230 y el Decreto Legislativo Nº 981; infracción normativa por apartamiento de los artículos 43, 44, 59 a 61 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; e inaplicación del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario **3.1.** Se declaró procedente el recurso de casación presentado por la SUNAT y por el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, por causales de naturaleza sustantiva. Corresponde, pues, realizar el análisis de los fundamentos que sustentan dichos medios impugnatorios. Para este fin, se citan los dispositivos legales cuya infracción de alega: **Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 30230 CUARTA.- Recursos de apelación interpuestos antes de la vigencia de la presente ley** Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,

la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, será aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones interpuestas. Para efectos de acelerar la resolución de procedimientos a cargo del Tribunal Fiscal, este está facultado excepcionalmente para organizar los expedientes asignando y programando su resolución en función al monto y la antigüedad de la deuda materia de controversia. **Decreto Legislativo Nº 981 Artículo 6.- INTERESES MORATORIOS** Incorpórese como, cuarto, quinto, sexto y sétimo párrafos del artículo 33° del Código Tributario, los siguientes textos: "Artículo 33°.- INTERESES MORATORIOS […] La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en el Artículo 142° hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación fuera por causa imputable a esta. Durante el periodo de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios. La suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa". **Código Tributario Artículo 33.- INTERESES MORATORIOS** El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el Artículo 29 devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. La SUNAT fijará la TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación estuviera a su cargo. En los casos de los tributos administrados por los Gobiernos Locales, la TIM será fijada por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT. Tratándose de los tributos administrados por otros Órganos, la TIM será la que establezca la SUNAT, salvo que se fije una diferente mediante Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. […] Artículo 43.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el Agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años. Artículo 44.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. 2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior. […] **Artículo 59.- DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA** Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. **Artículo 61.- FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO** La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria. Artículo 88.- DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA **88.1 Definición, forma y condiciones de presentación** La declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. La Administración Tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá autorizar la presentación de la declaración tributaria por medios magnéticos, fax, transferencia electrónica, o por cualquier otro medio que señale, previo cumplimiento de las condiciones que se establezca mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la obligación de presentar la declaración en las formas antes mencionadas y en las condiciones que señalen para ello. Los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la Administración Tributaria. Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada. **88.2 De la declaración tributaria sustitutoria o rectificatoria** La declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma. Vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva. Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna. La presentación de declaraciones rectificatorias se efectuará en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria. La declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. […] **3.2.** Iniciamos el análisis casatorio haciendo mención a que la idea de aplicación de una disposición normativa implica no solo la interpretación de una disposición normativa, sino también la comprobación de los hechos de la causa (que en nuestro sistema son aquellos determinados por las instancias de mérito), la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. Así, refiere Guastini[8]: Aplicación e interpretación son cosas evidentemente diferentes. Mientras que el verbo "interpretar" concuerda con cualquier sujeto (ya que cualquiera puede desempeñar la actividad interpretativa), el verbo "aplicar" concuerda solo con aquellos sujetos que designan —precisamente— órganos llamados de aplicación: principalmente jueces y funcionarios administrativos (principalmente, pero no exclusivamente: muchas normas constitucionales, para poner el ejemplo más obvio, son aplicadas por los supremos órganos constitucionales y algunas solo por ellos). Se puede decir de un jurista, o de un ciudadano cualquiera, que "interpreta" el derecho; pero no sería apropiado decir que un jurista, o un ciudadano, "aplica" el derecho. Ver G. Tarello, "Orientamenti analitico-linguistici e teoría del´interpretazione giuridica", en U. Scarpelli (ed.), Diritto e analisi dellinguaggio, Milano, 1976. Por otra parte, el término "aplicación", especialmente si se refiere a órganos jurisdiccionales, designa comúnmente un conjunto de operaciones que no se extinguen con la interpretación, ya que incluyen junto con la interpretación propiamente dicha (y la construcción jurídica, claro): la comprobación de los hechos de la causa, la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. **3.3**. De esta manera, la denuncia de una causal por inaplicación de una norma debe implicar como sustento, por lo menos, lo siguiente: a) La interpretación [correcta] de la disposición normativa cuya aplicación se pretende[9]. b) La descripción de los hechos determinados por las instancias de mérito, los mismos que no pueden ser objeto de revaloración en sede casatoria. c) La calificación de los hechos de la causa y la subsunción dentro del supuesto de hecho de la norma. **3.4.** En el caso, resulta relevante lo desarrollado por el Tribunal Constitucional con relación a la regla de capitalización de intereses y los intereses moratorios: **3.4.1. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4082-2012-PA/TC (caso Medina de Baca)** En este pronunciamiento se delimitó como controversia objeto de análisis, la constitucionalidad de la regla de capitalización de intereses y la no suspensión del cómputo de estos durante el trámite del procedimiento contencioso administrativo; no obstante, en el desarrollo de la sentencia, se brinda mayor énfasis al primer tema. Respecto a la aplicación de la capitalización de intereses, se concluye que esta es inconstitucional, en tanto transgrede el principio de razonabilidad, principalmente porque "[…] es una forma de acentuar la sanción por la mora en el cumplimiento de una obligación". Según el Tribunal Constitucional, independientemente de que los intereses moratorios no tengan naturaleza de tributo sino de sanción tributaria, deben respetar el principio de razonabilidad reconocido en vasta jurisprudencia (Expedientes Nº 02192-2004-AA/TC y Nº

005352009PA/TC, entre otros) y reconocido en la Ley Nº 27444. Asimismo, con relación a la aplicación de la regla de capitalización de intereses y el incremento del monto de la deuda tributaria, en los fundamentos 43 y 44 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 40822012PA/TC, se estableció que el principio de no confiscatoriedad se transgrede "[…] cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantiza constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad", y en el fundamento 54 se indicó que: "[…] la aplicación de la capitalización de intereses moratorios es claramente excesiva, pues incrementa la deuda tributaria al punto quintuplicarla […]". Por otro lado, respecto al tema relacionado al cómputo de intereses durante el trámite del procedimiento contencioso-tributario, el Tribunal Constitucional resalta que toda persona tiene derecho a cuestionar asuntos que consideren controvertidos; y, posteriormente, concluye que "[…] el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones […]". Por último, cabe precisar que en esta sentencia se consideraron las modificaciones incorporadas al artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, dispuestas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 981 y el artículo 7 de la Ley Nº 30230. **3.4.2 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 45322013PA/TC (caso Icatom S.A.)** En este caso, se ahonda en el tema del cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso-tributario, para lo cual se parte del análisis de la vulneración del principio de razonabilidad. El Tribunal Constitucional reconoce que el derecho a impugnar no tiene carácter absoluto y que, en algunas oportunidades, puede restringirse; por tal motivo, concluye que el cobro de intereses moratorios es constitucionalmente legítimo, siempre que estos se generen durante los plazos legales que la autoridad administrativa tributaria tiene para resolver los recursos administrativos. Añade que: "Lo que sí resulta inconstitucional es su cobro injustificado o irrazonable en el tramo en el que la autoridad administrativa excede el plazo legal por causas atribuibles a ella". En ese orden de ideas, se observa que en el criterio jurisprudencial no se hace diferenciación entre el plazo trascurrido en exceso para resolver recursos impugnatorios en instancia administrativa (ya sea en reclamación o apelación); por tanto, dicha situación permite asumir que la conclusión a la que arriba el supremo intérprete de la Constitución respecto a la suspensión de intereses moratorios devengados, es aplicable a ambos casos, es decir, a los recursos de reclamación y a los de apelación. Ahora bien, en los fundamentos 30 a 50 de la sentencia que venimos reseñando, se analiza la garantía del plazo razonable como elemento del derecho al debido procedimiento administrativo, y se señala que para determinar la violación de dicha garantía es necesario evaluar criterios como **i)** la complejidad del asunto, **ii)** la actividad o conducta procedimental del administrado, **iii)** la conducta de la administración pública, y **iv)** las consecuencias que la demora produce en la situación jurídica del interesado[10]. En el caso concreto, que originó la emisión del referido pronunciamiento, el tribunal analiza cada uno de los criterios y concluye que **las autoridades administrativas a cargo del procedimiento administrativo no actuaron de forma diligente y célere a fin de resolver la controversia en un plazo razonable, con lo cual incurrieron en violación del derecho a que el procedimiento dure un plazo razonable**. Por último, se debe resaltar que en este pronunciamiento se insta a la SUNAT y al Tribunal Fiscal (como partes codemandadas) —y demás entidades competentes[11]— a que, en adelante, no incurran en acciones u omisiones similares a las que motivaron la demanda de amparo. Por ello, en los fundamentos jurídicos 51 a 53 se desarrollan criterios que "deben tomarse en cuenta para la resolución de controversias similares"[12]: […] 5. Sobre los efectos del criterio establecido en el Expediente 040822012PA/TC 51. Finalmente, advertida la existencia de controversias similares a la dilucidada en el Expediente 04082-2012-PA/TC, este Tribunal considera necesario, en aplicación del principio de previsión de consecuencias, precisar los alcances de la aplicación de esta decisión a casos sustancialmente iguales. Con el criterio allí establecido no se ha pretendido revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas con la Sunat. Ello en mérito a dos razones fundamentales: i) al tratarse de un proceso de control concreto, los efectos de lo resuelto sólo vinculan a las partes del mismo, y ii) el razonamiento allí desarrollado no puede ser aplicado retroactivamente, sino sólo a partir de la publicación de la aludida sentencia. 52. En ese sentido, dicho criterio no resulta aplicable a aquellos procedimientos contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto es aquellos en los que los mecanismos de cobro de la deuda tributaria se hayan agotado en sede administrativa sin que haya existido de por medio recurso administrativo alguno que fuera ejercido por el contribuyente en contra de estos actos de cobranza, o que habiendo existido algún recurso, este haya sido denegado sin que posteriormente el contribuyente haya judicializado su cuestionamiento. Asimismo, tampoco resulta aplicable a aquellos procesos judiciales (contenciosos administrativos o procesos constitucionales) que, con anterioridad a la publicación de dicha sentencia, cuenten con resolución judicial firme respecto al cálculo de intereses moratorios. 53. **Sí corresponderá, en cambio, la aplicación de estos criterios en aquellos casos** en los que, luego de publicada la sentencia, ya sea que se trate de **procedimientos contenciosos tributarios o procesos judiciales, aún se encuentren en trámite o pendientes de resolución firme, incluyendo para tal efecto la fase de ejecución del procedimiento o proceso en la que se suele proceder a la liquidación de los intereses moratorios.** [Énfasis nuestro] **3.5**. El criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Nº 4082-2012-PA/TC, respecto a la vulneración del derecho al plazo razonable y al principio de razonabilidad de las sanciones, ha sido ratificado con la sentencia emitida en el Expediente Nº 4532-2013-PA/TC; y se ha indicado en este último pronunciamiento que las reglas jurídicas mencionadas son aplicables por las entidades estatales para casos similares, en trámite o pendientes de resolución firme; entendiéndose que la inclusión —respecto a los efectos de esta sentencia— referida a su aplicación en fase de ejecución del procedimiento o del proceso judicial, no debe atentar contra la cosa decidida y la cosa juzgada. **3.6**. Asimismo, dentro de un escenario de justificación de las decisiones judiciales, debemos establecer que la ratio decidendi o las razones esenciales que justifican un precedente, cuando están razonablemente motivadas, además de contribuir con los principios de igualdad y seguridad jurídica, alivian la carga argumentativa que le corresponde al juez al motivar su decisión. En ese orden de ideas, se debe mencionar que esta Sala Suprema ha señalado en la Sentencia de Casación Nº 6619-2021, en calidad de regla con carácter de precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, lo siguiente: […] 5.2.4. Corresponde la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, esto es, la aplicación de la regla de capitalización de intereses, así como la suspensión de intereses moratorios devengados por la demora en resolver los recursos impugnatorios en sede administrativa, por vulnerar los principios de razonabilidad y no confiscatoriedad. […] **3.7**. En esa línea y de la revisión de la sentencia materia de impugnación, tenemos que, conforme a lo señalado en los considerandos décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, referida a que no se cobre intereses moratorios por el periodo que en exceso los codemandados se demoraron en resolver los recursos impugnatorios en sede administrativa, se verifica que el colegiado superior, en efecto, inaplicó la norma denunciada, en tanto queda acreditada la demora del órgano administrativo en resolver y por causa atribuible a él, lo que ha generado un incremento de la deuda tributaria, afectando así el principio de razonabilidad. **3.8**. De igual forma, la Sala Superior ha sustentado su decisión en lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4532-2012-AA/TC, que ordenó que se aplique en todos los casos el criterio contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4082-2012-PA/TC, según el cual es inconstitucional el cobro de estos intereses y su capitalización vulnera el principio de razonabilidad. **3.9**. Cabe precisar que, en el presente caso y como advierte la sentencia de vista, la SUNAT y el Tribunal Fiscal han excedido los plazos para resolver los recursos de reclamación y de apelación, de acuerdo a lo previsto en los artículos 142 y 150 del Código Tributario, que señalan que el plazo máximo para resolver el recurso de reclamación es de nueve meses y para resolver la apelación, doce meses; por lo que se lesiona el derecho al plazo razonable, más aún cuando ha sido por causa atribuible al órgano administrativo. Por tal motivo, se colige que la sentencia de vista no comete infracción por inaplicación el artículo 33 del Código Tributario y los demás dispositivos legales sustantivos denunciados como infringidos por la Sala Superior. En consecuencia, devienen infundadas las causales sustantivas denunciadas. **CUARTO. Análisis del caso concreto_4.1.** Respecto a las causales de naturaleza sustantiva y adjetiva, sobre intereses moratorios aplicados fuera de los plazos legales para que las instancias administrativas emitan pronunciamiento, atendiendo al contexto dentro del cual se resolvió el procedimiento contencioso-tributario, se debe tener presente lo desarrollado en los considerandos segundo y tercero de la presente

resolución. En conclusión, en el caso de autos, respecto a la existencia de vicios de nulidad en la sentencia recurrida que, a la luz de lo desarrollado en el considerando segundo de la presente, no existen; y al haberse advertido el exceso del plazo en que incurrieron las instancias administrativas para resolver la controversia, como han determinado las instancias de mérito, no corresponde la aplicación de los intereses moratorios durante los periodos del exceso. En ese sentido, advirtiendo que la Sala de mérito lo ha determinado así de manera correcta, corresponde declarar **infundados** los recursos de los demandados en relación con los intereses moratorios. **4.2.** Por todas las consideraciones antes expuestas, corresponde declarar **infundados** los recursos respecto de las infracciones normativas de naturaleza sustantiva y adjetiva denunciadas por los recurrentes SUNAT y el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal. **DECISIÓN:** Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el artículo 397 del Código Procesal Civil, **DECLARARON INFUNDADOS** los recursos de casación interpuestos **i)** por la empresa demandante **Compañía Minera Antapaccay S.A.**[13], mediante escrito del veinte de mayo de dos mil veintidós (folios 959-967); **ii)** por el codemandado **Tribunal Fiscal,** representado por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escrito del diecisiete de mayo de dos mil veintidós (folios 902-952); y **iii)** por la codemandada **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria**, mediante escrito del veinte de mayo de dos mil veintidós (folios 972-1044). En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del veintinueve de abril de dos mil veintidós, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima (folios 875-894). Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la empresa **Compañía Minera Antapaccay S.A**. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Delgado Aybar.** SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, CABELLO MATAMALA, **DELGADO AYBAR,** TOVAR BUENDÍA.

---

1 Antes Xstrata Tintaya.

2 En adelante, todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

3 HITTERS, Juan Carlos (2002). Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

4 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

5 ATIENZA, Manuel (2006). Las razones del derecho. Derecho y argumentación. Lima, Palestra Editores; p. 61.

6 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184.

7 IGARTUA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima, Palestra-Temis; p. 2

8 GUASTINI, Ricardo (2014). Interpretar y argumentar, Madrid, CEPC; p. 249

9 La interpretación implica atribuir sentido a un texto o a una disposición normativa. Esta atribución o dotación de significado a una disposición normativa, en un escenario de ambigüedad y vaguedad del lenguaje, está vinculado al uso de técnicas, criterios o métodos de interpretación y construcción, tales como la interpretación literal, teleológica, sistemática entre otras.
GUASTINI, Riccardo (2015). "Interpretación y construcción jurídica". En Isonomía, Nº 43.
http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf

10 Específicamente, tales criterios se mencionan y desarrollan en el fundamento jurídico 33 de la acotada sentencia del Tribunal Constitucional.

11 Conforme al numeral 3 de la parte resolutiva de la referida sentencia.

12 Este criterio también ha sido corroborado con la Sentencia del Expediente Nº 2051-2016-PA/TC, del doce de noviembre de dos mil veinte (caso Paramonga), y la Sentencia del Expediente Nº 225-2017-PA/TC, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno (caso Telefónica).

13 Antes Xstrata Tintaya.

C-2245460-12

CASACIÓN Nº 21022-2022 LIMA

TEMAS: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA INTERESES MORATORIOS DE PAGOS A CUENTA

SUMILLA: Respecto a la prescripción de la acción de la administración tributaria, corresponde la aplicación del inciso 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, pues no se trató de tributos autodeterminados. Asimismo, respecto al reparo por provisión de cobranza dudosa, se evidencia que la parte recurrente no la acreditó, conforme a lo que indican expresamente el literal 2.a del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso i) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Finalmente, respecto a los intereses moratorios de pagos a cuenta, de una interpretación sistemática de los artículos 85 de la Ley del Impuesto a Renta y el artículo 34 del Código Tributario, corresponde el pago de los intereses moratorios; además, el precedente vinculante de la Casación Nº 4293-2013-Lima únicamente exigía no utilizar algunos métodos interpretativos.
PALABRA CLAVE: prescripción, provisión de cobranza dudosa, intereses moratorios de pagos a cuenta

Lima, ocho de junio de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por **Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.,** mediante escrito del veintisiete de junio de dos mil veintidós (fojas dos mil trescientos ochenta y cuatro a dos mil cuatrocientos sesenta y uno del expediente judicial electrónico - EJE[1]); contra la sentencia de vista del ocho de junio de dos mil veintidós (fojas dos mil trescientos cincuenta y cuatro a dos mil trescientos setenta y cinco), que **confirma** en parte la sentencia de primera instancia, del veintiocho de febrero de dos mil veintidós (fojas mil seiscientos cuarenta y siete a mil seiscientos sesenta y nueve), en el extremo que resuelve declarar infundada la demanda respecto a la primera y a la segunda pretensión principal, así como a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal, y en el extremo referido a la nulidad parcial de los actos administrativos impugnados que confirmaron el reparo por provisión de cobranza dudosa; y **revoca** en parte la misma sentencia de primera instancia, en cuanto declaró improcedente la pretensión subordinada a la primera pretensión principal en el extremo relativo a la nulidad parcial de los actos administrativos impugnados, que confirmaron el cobro de los intereses moratorios vinculados a la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre del dos mil nueve, y, reformándola, **declara** infundada la demanda en cuanto a este último extremo. **Antecedentes del recurso De la demanda** Mediante escrito del cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas cincuenta y dos a noventa y uno), la empresa Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. interpone demanda contencioso administrativa, postulando las siguientes pretensiones: **Primera pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08816-9-2018, del doce de noviembre de dos mil dieciocho, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0063074 a Nº 012-003-0063086 giradas por el impuesto a la renta del ejercicio 2009 y los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de 2009, y las Resoluciones de Multa Nºos. 012-002-0026588 a 012-002-0026600 giradas por la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. **Pretensión subordinada a la primera pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08816-1-2018 en el extremo que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 0150140012 637. **Segunda pretensión principal:** Se declare que la acción de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las resoluciones de determinación y multa antes referidas, se encuentra prescrita. En ese sentido, solicita se establezca que ha prescrito la acción de la administración tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0063074 a Nº 012-003-0063086, giradas por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de dos mil nueve, y las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0026588 a Nº 012-002-0026600, giradas por la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Como fundamentos de su demanda, refiere que la resolución del Tribunal Fiscal impugnada es nula, pues declaró improcedente su solicitud de prescripción amparándose en la aplicación de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421,

pues el colegiado administrativo indica que carece facultad para ejercer control difuso e inaplicar dicha ley. De ello, se desprende que el Tribunal Fiscal reconoció implícitamente que dicha primera disposición complementaria transitoria es susceptible de someterse al control difuso. Agrega que la referida norma es inconstitucional al pretender modificar con efectos retroactivos el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria, que en su caso ya se encontraba prescrita antes de la notificación de las resoluciones de determinación y multa impugnadas, notificadas el veintisiete de octubre de dos mil quince. **Respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal** El Tribunal Fiscal ha vulnerado el literal i) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso f) del artículo 21 de su Reglamento al señalar que la petición del procedimiento arbitral presentada por la empresa no acredita la realización de gestiones de cobranza realizadas por la empresa respecto de su cliente deudor Doe Run. Agrega que en el año dos mil siete celebró contratos de compraventa de mineral con el referido cliente Doe Run; no obstante, como consecuencia del incumplimiento de pago incurrido por el cliente por S/ 32,149,544.00 y luego de exigirle el pago mediante requerimientos notariales, se vio obligada a iniciar un arbitraje con fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve mediante la "petición dirigida a la Secretaría General del Centro de Arbitraje de la CCL", en aplicación de la cláusula 11 del convenido arbitral de los contratos antes referidos. Por lo que carece de sustento que el Tribunal Fiscal cuestione el procedimiento arbitral solo por el hecho de que dicha petición no fue dirigida al cliente deudor, sin tener en cuenta las normas especiales que regulan un proceso arbitral. Agrega que el proceso arbitral iniciado mediante la petición siguió su curso, hecho que se demuestra con la demanda arbitral presentada por su empresa en febrero de dos mil diez, con lo cual se acredita las gestiones de cobranza iniciadas con la "petición". Si bien el Tribunal Fiscal no emitió pronunciamiento definitivo respecto de la modificación del coeficiente aplicado para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, tomando como sustentos los reparos del impuesto a la renta de los ejercicios dos mil siete y dos mil ocho, sí estableció de forma definitiva que no corresponde aplicar el criterio vinculante vertido en la Casación Nº 4392-2013-Lima, toda vez que existe una jurisprudencia de observancia obligatoria de dicho colegiado administrativo, que adoptó una posición contraria a la casación, por lo que en este extremo la resolución impugnada ha causada estado. Con relación al fondo de la controversia, agrega que su caso de subsume en los hechos desarrollados en la citada casación, por lo que no se le deben cobrar intereses moratorios respecto de sus pagos a cuenta del periodo dos mil nueve. **Respecto a la segunda pretensión principal** Solicita que en aplicación del principio de plena jurisdicción, se declare que la acción de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las resoluciones de determinación y de multa antes referidas se encuentra prescrita. **Sentencia de primera instancia** El Juez del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número dieciocho, del veintiocho de febrero de dos mil veintidós (fojas mil seiscientos cuarenta y siete a mil seiscientos sesenta y nueve), declaró infundada la demanda e improcedente en el extremo de los intereses moratorios vinculados a los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. La sentencia de primera instancia expone los siguientes fundamentos: a) El Juzgado refiere, respecto a la prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria del ejercicio dos mil nueve y los pagos a cuenta de diciembre de dos mil nueve, que se inició el cómputo del plazo de prescripción el primero de enero de dos mil once y hubiera culminado el primero de enero de dos mil quince; asimismo, para determinar el cómputo de plazo de pago a cuenta de enero a noviembre de dos mil nueve, inició el cómputo del plazo el primero de enero de dos mil diez y hubiera culminado el primero de enero de dos mil catorce. Sin embargo, se interrumpió con la notificación del inicio de fiscalización el diecinueve de noviembre de dos mil trece, por lo que se inició nuevamente el cómputo de plazo de prescripción el veinte de noviembre de dos mil trece y culminaría el veinte de noviembre de dos mil diecisiete. Nuevamente, se dio por interrumpido el plazo prescriptorio, pues se notificó las resoluciones de determinación y multa el veintisiete de octubre de dos mil quince, por lo que el cómputo del plazo de prescripción inició el veintiocho de noviembre de dos mil quince y culminaría el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; por lo que al momento de la solicitud de prescripción el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no se encontraba prescrita la acción de la administración tributaria para cobrar. b) Respecto al reparo de provisión de cobranza dudosa, el Juzgado refiere que el escrito de petición de arbitraje presentado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve ha sido dirigido a la Secretaría General del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y no directamente a la empresa Doe Run Perú S.R.L. Además, el contenido no permite verificar los números de los comprobantes de pago para verificar que el monto sea el mismo. Respecto a la demanda de obligación de dar suma de dinero, del once de febrero de dos mil diez, fue realizada en fecha posterior del ejercicio, pues el carácter de toda deuda incobrable deberá verificarse en el ejercicio en que se efectúa la provisión contable. Finalmente, respecto a los intereses moratorios de los pagos a cuenta, el procedimiento administrativo fue retrotraído hasta la nueva etapa de reclamación para que la administración proceda a efectuar nuevo cálculo de los pagos a cuenta. **Sentencia de segunda instancia** La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la referida corte superior, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veintiséis, del ocho de junio de dos mil veintidós (fojas dos mil trescientos cincuenta y cuatro a dos mil trescientos setenta y cinco), resolvió lo siguiente: **CONFIRMARON** en parte la sentencia apelada, resolución numero dieciocho, de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós, obrante de folios mil seiscientos cuarentisiete a mil seiscientos sesentinueve, por la que se resuelve declarar infundada la demanda respecto a la primera y segunda pretensiones principales, así como a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal y en el extremo referido a la nulidad parcial de los actos administrativos impugnados que confirmaron el reparo por provisión de cobranza dudosa; **REVOCARON** en parte la misma sentencia apelada, en cuanto declara improcedente la pretensión subordinada a la primera pretensión principal en el extremo relativo a la nulidad parcial de los actos administrativos impugnados que confirmaron el cobro de los intereses moratorios vinculados a la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre del dos mil nueve; y **REFORMÁNDOLA,** declararon infundada la demanda en cuanto a este último extremo. La sentencia de vista presenta los siguientes fundamentos: a) La Sala Superior refiere que, respecto a la prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda, se constata que el plazo de prescripción de la acción de la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria (impuesto a la renta de enero a diciembre de 2009, pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de 2009 y multas vinculadas) inició el veintiocho de octubre de dos mil quince (es decir, al día siguiente de notificada la Resolución de Determinación Nº 012-003-0063074 a Nº 012-003-0063086 y las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0026588 a Nº 012-002-0026600), por lo que a la fecha en que se solicitó la prescripción, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no había operado. Asimismo, refiere que las notificaciones de los actos administrativo se realizaron al domicilio fiscal, calle Las Begonias Nº 415, interior p-19, distrito de San Isidro, Lima, de lo que da fe el comprobante de información registrada - CIR. b) Respecto a la provisión de cobranza dudosa del ejercicio dos mil nueve, según el inciso 1 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, reconoce que son deducibles los castigos por deudas incobrables y precisa que algunas deudas no tienen el carácter de deuda incobrable. Asimismo, el artículo 21, inciso f), numeral 1, del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo Nº 122-94-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 134-2004-EF, refiere reglas para efectuar la provisión de cobranza dudosa: **a)** deuda vencida y dificultades financieras del deudor (análisis de créditos concedidos o por otros medios); **b)** morosidad del deudor (gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, protesto de documentos o inicio de procedimientos judiciales de cobranza o que hayan transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación; **c)** que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. c) La Sala Superior refiere que la carta notarial no detalla la deuda y no especifica los comprobantes de pago que comprenden la deuda, sin lo cual no es posible aceptar la deducción. Sumado a ello, la deuda pendiente de pago corresponde a las facturas de enero de dos mil nueve y de octubre a diciembre de dos mil ocho, las cuales suman 3,810,544.92

dólares, monto que difiere de los 5,833,660.70 dólares consignados en la carta notarial; del mismo modo, la cantidad 5,332.583 Toneladas Métricas Húmedas de concentrado entregadas difiere de las 3,875.98 Toneladas Métricas Húmedas referidas en la carta notarial. Se tiene en cuenta las cartas de respuesta por Doe Run aceptando la deuda, así como el cumplimiento del inicio del pago. d) Asimismo, refiere que respecto al inicio de procedimiento judicial de cobranza, presenta copia de la petición de arbitraje institucional, presentada a la Secretaría General del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima el veintiocho de septiembre de dos mil nueve. El procedimiento arbitral motivó el embargo en forma de inscripción de tres inmuebles del deudor, por el monto que garantiza la totalidad de la deuda incobrable (S/ 32,149,544.00; treinta y dos millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro soles con cero céntimos) y la medida cautelar ejecutada por la suma de US$ 12'000,000.00 (doce millones de dólares americanos con cero centavos). e) Agrega que respecto a los intereses moratorios de pagos a cuenta corresponde la aplicación de los intereses moratorios a la diferencia determinada por la modificación de la base de cálculo de los coeficientes aplicables a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos de enero a diciembre de dos mil nueve, por falta de pago oportuno. **Del recurso de casación y el auto calificatorio** La parte recurrente Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. interpone recurso de casación, el mismo que es declarado procedente por esta Sala Suprema mediante auto calificatorio del siete de septiembre de dos mil veintidós (fojas trescientos cincuenta y nueve a trescientos ochenta y cuatro del cuaderno de casación), por las siguientes causales: Causales vinculadas a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Primera infracción normativa Vulneración al derecho a la motivación de las Resoluciones judiciales (motivación insuficiente), contenido en el inciso 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Sobre la controversia de la prescripción de la acción de la SUNAT para exigir el pago de la deuda tributaria del impuesto a la renta, pago a cuenta y multas vinculadas, refiere que la Sala Superior ha omitido pronunciarse sobre los agravios invocados por la recurrente respecto del análisis del artículo 3 del Código Tributario, de los artículos 164, 172, 180 y 182 del Código Tributario y de la casación Nº 12335-2017, como marco legal y jurisprudencial aplicables para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias e infracciones vinculadas en el caso concreto. […] **Segunda infracción normativa** Infracción normativa por indebida aplicación del numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario […] Los argumentos de la recurrente en torno a esta causal son los siguientes: a) Sobre la prescripción de la acción de cobro de SUNAT, señala que la Sala Superior aplicó indebidamente el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario dado que dicha norma se aplica solo para deudas que deben ser "determinadas por parte de la Administración Tributaria" pero no para el caso del impuesto a la renta anual ni pagos a cuentas , ni multas vinculadas que no requieren para su exigibilidad de un acto de determinación de la Administración Tributaria, dado que el Impuesto a la Renta y los pagos a cuentas son deudas autodeterminadas por el contribuyente cuya exigibilidad surge con el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas correspondientes; y, en el caos de las multas vinculadas, éstas son exigibles a partir de que se incurre en la infracción respectiva, por ello corresponde que, para el inicio del cómputo del plazo de prescripción para "exigir" el pago de tales obligaciones, se apliquen los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 del Código Tributario y no el numeral 7. […] **Tercera infracción normativa** Inaplicación normativa de los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú y de la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario. […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Señala que, la Sala Superior ha inaplicado los artículos 103, 109 y la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario dado que al señalar que resulta de aplicación el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario a deudas autodeterminables por el contribuyente, está modificando situaciones ya consumadas como son la condición de "exigibilidad" de las deudas en cuestión (impuesto a la renta anual, pagos a cuentas y multas vinculadas) y el correspondiente "inicio del plazo" de prescripción para exigir su pago, toda vez que tales deudas no pueden " volver a ser exigibles" con la notificación de los actos de la Administración (Resolución de Determinación y Resolución de Multa) a fin de dar inicio a un nuevo plazo de prescripción respecto de las mismas deudas imponiendo requisitos no previstos legalmente al momento en que se consumaron la condición de "exigibilidad" y el inicio del plazo de prescripción para exigir el pago. b) Refiere que, la Sala Superior ha desestimado las pretensiones vinculadas con la culminación del plazo de prescripción de la acción para exigir el cobro de la deuda amparándose en la aplicación de la modificación introducida por el Decreto Legislativo Nº 1113 al caso concreto, y ello llevo a considerar una exigibilidad e inicio de cómputo del plazo prescriptorio distinto. c) Precisa que con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1113 ya el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria se encontraba regulado en el Código Tributario. […] **Cuarta infracción normativa** Inaplicación normativa y consecuente vulneración de lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario Los argumentos del recurrente son los siguientes: a) Refiere que, la Sala Superior ha inaplicado el artículo 170 del Código Tributario en tanto ha desestimado la pretensión respecto al cómputo del plazo de prescripción en aplicación de lo contenido en el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario y no haber advertido que, en torno a dicha norma, se ha configurado – con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda - los supuestos de dualidad de criterio y duda razonable, previstos en los numerales 1 y 2 del referido artículo 170. Ello se verifica de su pronunciamiento inhibitorio contenido en el considerando décimo octavo de la sentencia de vista. b) Advierte que, la recurrente solicitó de forma expresa la aplicación el artículo 170 del Código Tributario en la primera oportunidad que tuvo dado que los actos que demuestran la ocurrencia de la dualidad de criterio y la duda razonable se emitieron con posterioridad a la interposición de la demanda (el criterio señalando en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza aclaratoria del Decreto Legislativo Nº 1421). **Causales vinculadas al reparo por provisión de cobranza dudosa Quinta infracción normativa** Vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. […] Los argumentos del recurrente son los siguientes: a) Señala que, la Sala Superior ha incurrido en una motivación inexistente dado que ha omitido pronunciarse sobre los agravios invocados por la recurrente invocados en el recurso de apelación, respecto a la primera pretensión impugnatoria subordinada a la pretensión impugnatoria principal, en el extremo referido al cuestionamiento al reparo por provisión de cobranza dudosa. b) Sobre la motivación incongruente incurrida por el Juzgado al incorporar nuevos argumentos que desviaron el debate procesal en torno a la acreditación de la gestión de cobro con la petición de arbitraje. c) Respecto a la motivación insuficiente, señala que la Sala Superior no efectúa el análisis correspondiente para establecer si la anotación de un embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble tiene o no la naturaleza de un derecho real de garantía respecto al reparo por provisión de cobranza dudosa y su posible deducción en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. […] **Sexta infracción normativa** El recurrente señala como infracción normativa la inaplicación del artículo 166 y del numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y del artículo 197 del Código Procesal Civil […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Establece que, la Sala Superior ha inaplicado los artículos 166 y numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como el artículo 197 del Código Procesal Civil porque no ha realizado una valoración conjunta y razonada de las pruebas presentadas durante la etapa administrativa que acreditan las gestiones de cobranza al cliente Doe Run Perú S.R.L. en el ejercicio dos mil nueve. b) Advierte que, la recurrente optó por acreditar la morosidad del deudor mediante las gestiones de cobro con la finalidad de deducir la provisión de cobranza dudosa de la deuda del cliente Doe Run Perú S.R.L. por medio del proceso de arbitraje seguido en contra de dicha empresa; es decir, la medida más drástica dentro de las referidas gestiones de cobro así como la carta notarial de cinco de marzo de dos mil nueve conforme a lo señalado en la casación Nº 17677-2015. […] **Séptima infracción normativa** Interpretación errónea del numeral II, inciso i del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y la Norma IV y VIII del Título Preliminar del Código Tributario […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Señala que, la Sala Superior ha interpretado erróneamente el numeral ii del inciso i del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, al señalar que la existencia de embargos en forma de inscripción sobre 3 inmuebles de Doe Run Perú S.R.L. es suficiente para desconocer la deducción

por provisión de cobranza dudosa; en ese sentido, la Sala Superior interpreta que, contar con deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía es lo mismo que contar con deudas garantizadas con medidas de embargo en forma de inscripción inmueble, para efecto del numeral ii del inciso i del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. b) Advierte que el embargo en forma de inscripción no constituye una garantía de carácter real; por tanto, la deuda no se encontraba garantizada y sí calificaba como incobrable, según los parámetros establecidos en la normativa reseñada de la Ley del Impuesto a la Renta. […] **Causales vinculadas a la inaplicación de intereses moratorios Octava infracción normativa** Vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación congruente), contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el Principio de Congruencia Procesal contenido en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Sobre la inaplicación de intereses moratorios vinculados a la determinación de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil nueve y la aplicación del criterio establecido por la Casación Nº 4392-2013 Lima, refiere que la Sala Superior ha incurrido en una motivación incongruente en la sentencia de vista porque ha desviado el debate procesal incorporando una pretensión revocatoria no planteada en el recurso de apelación y pronunciándose de manera indebida sobre el fondo de la materia controvertida, dado que la recurrente únicamente invocó una pretensión nulificante contra la sentencia de primera instancia. […] **Novena infracción normativa** Apartamiento inmotivado del precedente vinculante de la Casación Nº 4392-2013-LIMA. Los argumentos de la recurrente vinculados a dicha infracción son los siguientes: a) Advierte que, la Sala Superior ha incurrido en un apartamiento inmotivado del precedente vinculante a que se refiere la Casación Nº 4392-2013 LIMA, dado que el presente caso corresponde a la misma fundamentación fáctica a que se contrae dicho precedente, esto es, la recurrente realizó el pago oportuno de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, es decir, dentro del plazo establecido, no resultando relevante si el pago a cuenta fue modificado posteriormente por la fiscalización de la Administración Tributaria o la rectificatoria del contribuyente. […] **Décimo infracción normativa** Interpretación errónea del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario […] Los argumentos de la recurrente son los siguientes: a) Refiere que, la Sala Superior ha incurrido en una interpretación errónea del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario al preferir una interpretación extensiva, sistemática y teleológica en lugar de una interpretación literal de las indicadas normas, conforme así lo dispuso el precedente vinculante a que se refiere la Casación Nº 4392-2013 LIMA. b) Advierte que, en virtud de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, corresponde que los preceptos normativos bajo desarrollo sean interpretados según la literalidad de ambas disposiciones, sin efectuar una interpretación extensiva o restrictiva de las mismas. c) Señala que, se debe tener en cuenta que la determinación de los Pagos a Cuenta del impuesto a la renta obecede a una norma que tiene una finalidad estimatoria del impuesto a la renta que debería pagar un contribuyente al cierre del ejercicio gravable, en función del margen de utilidad del negocio en el ejercicio precedente al anterior (meses de enero y febrero) o ejercicio anterior (marzo a diciembre), asumiendo que no debería sufrir variaciones sustanciales de un ejercicio a otro. CONSIDERANDOS **Primero:** Contextualizado el caso, es pertinente hacer algunos apuntes acerca del recurso extraordinario de casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. **1.1.** El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. En materia de casación, es factible el control de las decisiones jurisdiccionales con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto. **1.2.** El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan haber cometido en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Constituye antes bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.3.** Por causal de casación, se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[2], que debe sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[3], por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **1.4** En el caso en concreto, se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de infracción normativa procesal y de tipo material. En ese sentido, corresponde, en primer lugar, proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal —de orden constitucional y legal—, desde que, si por ello se declarara fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, supuesto en el cual carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada por la parte recurrente en el escrito de su propósito; y si, por el contrario, se declarara infundada la infracción procesal, corresponderá emitir pronunciamiento respecto de la infracción material planteada. **1.5.** Asimismo se debe precisar: […] que al término "infracción" —en sentido general— lo podemos asimilar a lo que la doctrina procesal conoce como el error, dentro de él por cierto encontramos al error in iudicando, el error in procedendo y el error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un error en la decisión judicial, la cual —como ya dijimos— puede ser de naturaleza sustantiva o procesal […].[4] En consecuencia, corresponde determinar si existió infracción en la decisión judicial respecto a las normas que la parte recurrente invoca, que, conforme se puede observar de los fundamentos que la sustentan, son normas que rigen la prescripción de la acción de la administración tributaria para cobrar la deuda, la provisión de cobranza dudosa y los intereses moratorios de pagos a cuenta. **Segundo: Controversia 2.1.** Previo al desarrollo de las causales que fueron declaradas procedentes, es oportuno anotar que la controversia consistió en que **i)** la prescripción de la acción de la SUNAT para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0063074 a Nº 012-003-0063086, emitidas por la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve y pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos enero a diciembre de dos mil nueve, y en las Resoluciones de Multa N.º012-002-0026588 a Nº 012-002-0026600, emitidas por los mismos periodos, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, y, por tanto, si en el caso concreto operó la prescripción; **ii)** respecto al reparo por provisión de cobranza dudosa, si se cumplió con acreditar la existencia de dificultades financieras que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad de la deuda; y **iii)** respecto a los pagos a cuenta, si corresponde la aplicación de los intereses moratorios derivados de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los meses de enero a diciembre de dos mil nueve, en aplicación del precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. Tercero: Análisis de la causales procesales: por vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación insuficiente), contenido en los incisos 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú (vinculada a la prescripción de la acción de la administración tributaria); vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución

Política del Perú (vinculada al reparo por provisión de cobranza dudosa); vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación congruente), contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el principio de congruencia procesal contenido en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil (vinculada a la inaplicación de intereses moratorios) **3.1.** Se debe precisar que el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política[5] consagra como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones puestos a consideración. **3.2.** Uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, consagrado por el numeral 5 del artículo 139 de la Carta Política[6], por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y del derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. **3.3.** Así, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones que llevaron al juez a decidir una controversia en un determinado sentido; implica, por ello, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia específica en los distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas normas de carácter legal, como el inciso 6 del artículo 50 y el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil[7], y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[8], por los que se exige que la decisión del juzgador cuente con una exposición ordenada y precisa de los hechos y el derecho que justifiquen la decisión. **3.4.** Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la sentencia emitida en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC[9], del once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la vulneración del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación; sino que basta que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, suficiente y congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento, para considerar que la decisión se encuentra adecuadamente motivada. **3.5.** Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional. Asimismo, en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, se señala que: […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios. [10] **3.6.** Además, resulta pertinente señalar que el derecho a la motivación garantiza a las partes el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente la decisión, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y del derecho aplicable al caso, y que resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. **3.7.** Aunado a ello, se debe precisar que este derecho no tiene relevancia únicamente en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que además tiene valoración esencial dentro del sistema de justicia en su conjunto, dado que la debida motivación de resoluciones constituye una garantía del proceso judicial que hace que sea factible conocer cuáles son las razones que sustentan la decisión tomada por el juez a cargo del caso desarrollado. **3.8.** Así también, la aludida exigencia de motivación suficiente permite al juez que elabora la sentencia percatarse de sus errores y precisar conceptos, lo que facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras[11], todo ello dentro de la función endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control democrático de los jueces, que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma[12]. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura[13], todo lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la motivación. **3.9.** La justificación racional de lo que se decide es, entonces, interna y externa. La primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en sentido estricto[14] y tiene implicancias en el control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[15]. En esa perspectiva, la justificación externa requiere **i)** que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; **ii)** que toda motivación sea completa; y **iii)** que toda motivación sea suficiente, lo que significa que es necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión.[16] **3.10.** Con los alcances legales y jurisprudenciales efectuados, corresponde analizar si la Sala Superior cumplió o no con expresar las razones de hecho y de derecho por las cuales confirma en parte la sentencia de primera instancia en el extremo que declaró infundada la demanda, y revoca el extremo que declaró improcedente la demanda respecto a los intereses moratorios vinculados a los pagos a cuenta y, reformándola, declara infundada la demanda en tal extremo. Ello implica dar respuesta a los argumentos que expone la parte recurrente como omisión por parte de la Sala Superior. **3.11.** La parte recurrente, respecto al tema de la prescripción de la acción de la administración tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria del impuesto a la renta, de los pagos a cuenta y de las multas vinculadas, refiere que la Sala Superior **omitió pronunciarse sobre los agravios invocados por la empresa** respecto al análisis del artículo 3 del Código Tributario, de los artículos 164, 172, 180 y 182 del Código Tributario y de la Casación Nº 12335-2017, como marco legal y jurisprudencial aplicable para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias e infracciones vinculadas al caso en concreto. **3.12.** De la revisión integral de la sentencia de vista materia de casación, se aprecia que ha cautelado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha delimitado la controversia que fue objeto de pronunciamiento conforme a las pretensiones planteadas, como se desprende de los considerandos sexto al décimo octavo, y se ha cumplido con emitir decisión sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación —los que previamente se han identificado en la expresión de agravios de la sentencia impugnada—, tal como se desglosa del desarrollo lógico jurídico que emerge del segundo considerando de la citada sentencia, invocando el marco regulatorio, como se aprecia en el desarrollo de los considerandos relacionados a lo que es asunto de controversia. **3.13.** Respecto a dichos argumentos, tenemos que la Sala Superior, en torno a la legalidad de la resolución impugnada, desarrolló en el décimo octavo considerando lo siguiente: Que, incidiendo en los demás argumentos esgrimidos por la defensa técnica de la empresa accionante como fundamentación de su recurso impugnativo que motiva la alzada, cabe enfatizar: i) en lo atinente a los escritos que no se habrían valorado en la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente número 0004-2019-PI, al no haberse alcanzado los cinco votos conformes por la inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada -Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo número 1421-, declaró

infundada la demanda, y en ese sentido, resulta impertinente emitir pronunciamiento acerca de su alegada inaplicación, al igual que en relación con lo preceptuado en el artículo 44, numeral 7. del Código Tributario incorporado por Decreto Legislativo número 1113, sin perjuicio de lo cual cabe reiterar lo ya enfatizado con antelación, en cuanto a que no se está en el caso concreto ante una autodeterminación de la obligación tributaria, en sentido estricto, pues con sujeción a lo previsto en el artículo 61 del Código Tributario, la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa, supuesto que precisamente se ha configurado en el caso sub-judice, al apreciarse que la determinación efectuada por la empresa contribuyente mereció una fiscalización por parte de la Administración y por la que se han emitido los valores impugnados; ii) de otro lado, en lo que respecta a la solicitud de inaplicación de intereses y multas con invocación de lo prescrito en el artículo 170, numerales 1 y 2, del Código Tributario, cabe destacar que la misma no ha sido materia de una pretensión postulada en este proceso, según el petitum de la demanda y tal como incluso lo admite la defensa técnica de la empresa accionante, razón suficiente para no emitir pronunciamiento al respecto, sin perjuicio de lo cual sólo se destaca, de modo reiterativo, que resulta aplicable lo preceptuado en el artículo 44, numeral 7, del Código Tributario, por razón de temporalidad y acorde a las particularidades del caso sub-examine, no habiéndose producido vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sumado a que, en la sentencia de Casación número 12357-2017 Lima de fecha nueve de mayo del dos mil diecinueve se reafirma la aplicación del citado dispositivo legal. **3.14.** Se observa entonces que, respecto al tema de prescripción de la acción de la administración tributaria, la Sala Superior argumenta los motivos por los cuales el plazo de prescripción de la acción de la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria relativa al impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre del dos mil nueve y las multas vinculadas, no habría operado; señalando las normas por las cuales motiva su decisión. Asimismo, la Sala Superior señala las razones por las cuales no resulta pertinente emitir pronunciamiento respecto a los escritos presentados por la parte demandante —escritos en los cuales se puede observar que la recurrente considera que se debe valorar la sentencia recaída en el Expediente Nº 0004-2019-PI, emitida por el Tribunal Constitucional y considerar diversos artículos del Código Tributario— pues refiere que en el caso en concreto no se está ante una autodeterminación tributaria. **3.15.** Asimismo, esta Sala Suprema considera que las Casaciones Nº 12335-2017 Lima y Nº 12357-2017 Lima no constituyen precedentes de observancia obligatoria, por lo que el criterio establecido en las referidas casaciones no resulta de obligatoria aplicación para los jueces. Por lo tanto, podemos inferir que la Sala Superior no vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación insuficiente), contenido en los incisos 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, pues se aprecia que realizó una debida motivación y no se advierte que la parte recurrente haya sido privada de su derecho de defensa. **3.16.** Respecto al tema sobre el reparo por provisión de cobranza dudosa, la recurrente refiere que la Sala Superior **incurre en motivación inexistente** al omitir pronunciarse sobre los agravios invocados en su recurso de apelación en el extremo referido al cuestionamiento al reparo por provisión de cobranza dudosa. Respecto a dichos argumentos, se verifica que la Sala Superior conforme señalamos en el **considerando 3.12**, se pronuncia sobre los agravios invocados por la parte recurrente, incluido el reparo de provisión de cobranza dudosa, citando la normativa pertinente para el caso en concreto y analizando lo actuado en sede administrativa. Por lo tanto, no incurre en motivación inexistente. **3.17.** Asimismo, refiere que **incurre en motivación incongruente** al incorporar nuevos argumentos que desviaron el debate procesal en torno a la acreditación de la gestión de cobro con la petición de arbitraje. Respecto a dicho argumento, se verifica que la Sala Superior no efectuó un nuevo argumento sobre la acreditación de la gestión de cobro con la petición de arbitraje, pues los argumentos de la Sala Superior son conforme a lo actuado en sede administrativa, considerando la fiscalización definitiva seguida a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.; los documentos presentados por la empresa; la conclusión contenida en el punto 2 del anexo 2 a la Resolución de Determinación Nº 012-003-0063074; la reclamación presentada mediante escrito del veinticuatro de noviembre de dos mil quince; la Resolución de Intendencia Nº 0150140012637, del veintiuno de julio de dos mil dieciséis, incluido el Informe Nº 005-2016-SUNAT-6D4100-RDCA, que sirvió de sustento; los requerimientos realizados a la empresa y las respuestas a dichos requerimientos; de todo lo cual concluye la Sala Superior que los medios probatorios ofrecido para acreditar las gestiones de cobranza —consistentes en la carta notarial, copia de petición de arbitraje institucional y el inicio del procedimiento arbitral— no resultan suficientes para acreditar las dificultades que hagan previsible la incobrabilidad de la deuda. Por lo tanto, se verifica que la Sala Superior no incurre en motivación incongruente, pues no se verifica un nuevo debate procesal. **3.18.** Así también, refiere que **incurre en motivación insuficiente**, pues no efectúa el análisis correspondiente para establecer si la anotación de un embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble tiene o no la naturaleza de un derecho real de garantía respecto al reparo por provisión de cobranza dudosa y su posible deducción en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. Respecto a dichos argumentos, se debe precisar que la Sala Superior estableció que la controversia respecto a la previsión de cobranza dudosa era determinar si se cumplió con acreditar la existencia de dificultades financieras que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad de la deuda; por lo tanto, si el reparo trata sobre provisión de cobranza dudosa la Sala Superior considero aplicar el artículo 37, inciso i), de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF; y el artículo 21, inciso f), numeral 1), del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 134-2004-EF, el cual prescribe que para efectuar la provisión de deuda incobrable a que se refiere el inciso i) del artículo 37 de la Ley, se deberá tener en cuenta las siguiente reglas: 1) el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable, 2) para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: a) que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha, y b) que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada. **3.19.** Es así que la Sala Superior, al analizar los medios probatorios presentados por la parte recurrente, considera dichos requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que infiere que la parte recurrente no ha desvirtuado en modo alguno los fundamentos del reparo por provisión de cobranza dudosa, pues según la Sala Superior no han transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la deuda sin que esta haya sido satisfecha; así como que los documentos presentados no acreditaban las dificultades que hicieran previsible la incobrabilidad de la deuda, al estar garantizada con medidas cautelares de embargo en forma de inscripción sobre tres bienes inmuebles de propiedad de su cliente deudor, la empresa Doe Run Perú S.R.L. Por lo tanto, se verifica que la Sala Superior no incurrió en motivación insuficiente, pues analizó lo correspondiente al tema de provisión de cobranza dudosa, no estando en debate establecer si la anotación de un embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble tiene o no la naturaleza de un derecho real de garantía. **3.20.** En lo concerniente a los intereses moratorios, la parte recurrente refiere que la Sala Superior ha **incurrido en una motivación incongruente** porque ha desviado el debate procesal incorporando una pretensión revocatoria no planteada en el recurso de apelación y pronunciándose de manera indebida sobre el fondo de la materia controvertida, dado que la recurrente únicamente invocó una pretensión nulificante contra la sentencia de primera instancia. Al respecto, tenemos que la Sala Superior se pronuncia conforme al argumento principal de la parte recurrente, pues este refiere que existe una contravención del precedente vinculante establecido en la Sentencia Casación Nº 4392-2013 Lima al considerar que le corresponde el pago de los intereses moratorios de los pagos a cuenta. **3.21.** Es así que la Sala Superior considera

pronunciarse respecto al fondo de la controversia, pues refiere que, en torno al tema abordado, el colegiado ya ha tenido oportunidad de emitir pronunciamiento en diferentes sentencias, concordando en principio con las dos reglas establecidas en la Casación Nº 4392-2013; y que en debido ejercicio de la función jurisdiccional y analizando lo actuado tanto en sede administrativa como en este proceso, arriba a la convicción acerca de la existencia y aplicabilidad de otros métodos de interpretación de las acotadas disposiciones legales para dilucidar adecuadamente la controversia, como es el sistemático por ubicación de la norma y el teleológico, considerando así el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, y los artículos 34 y 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con lo que la Sala Superior concluye que le corresponde pagar intereses moratorios de pagos a cuenta a la parte recurrente. **3.22.** De lo expuesto, esta Sala Suprema verifica que la Sala Superior no ha incurrido en una motivación incongruente, pues se entiende que por razones de economía y celeridad procesal, y al tener criterio establecido respecto al tema en controversia, resuelve teniendo en cuenta los agravios denunciados y todo lo actuado en sede administrativa y judicial. Por lo tanto, esta Sala Suprema infiere que la Sala Superior realizó el análisis siguiendo los criterios de la debida motivación y el debido proceso, cumpliendo con exponer las razones de hecho y derecho por las cuales confirma en parte la sentencia apelada y la revoca en el extremo que declaró improcedente la pretensión subordinada a la primera pretensión principal, el cual declara infundado; con lo que permite conocer cuál fue el razonamiento empleado para llegar a la referida conclusión. En consecuencia, corresponde declarar **infundadas** estas causales. **Cuarto: Análisis de las causales casatorias de naturaleza material** Habiéndose desestimado las causales de naturaleza procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto a las causales casatorias de naturaleza material **Sobre las causales materiales denunciadas vinculadas a la prescripción de la acción de la administración tributaria: infracción normativa por indebida aplicación del numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario; inaplicación normativa de los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú y de la norma X del título preliminar del Código Tributario; e inaplicación normativa y consecuente vulneración de lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario 4.1.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior aplicó indebidamente el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, dado que dicha norma se aplica solo a deudas que deben ser "determinadas por parte de la Administración Tributaria", pero no al caso del impuesto a la renta anual, a los pagos a cuentas, ni a las multas vinculadas, que no requieren para su exigibilidad de un acto de determinación de la administración tributaria, dado que el impuesto a la renta y los pagos a cuentas son deudas autodeterminadas por el contribuyente cuya exigibilidad surge con el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas correspondientes; y, en el caso de las multas vinculadas, estas son exigibles a partir de que se incurre en la infracción respectiva. Por ello, corresponde que, para el inicio del cómputo del plazo de prescripción para "exigir" el pago de tales obligaciones, se apliquen los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 del Código Tributario y no el numeral 7. **4.2.** Asimismo, la casacionista señala que la Sala Superior ha inaplicado los artículos 103, 109 y la norma X del título preliminar del Código Tributario, al desestimar las pretensiones vinculadas con la culminación del plazo de prescripción de la acción para exigir el cobro de la deuda, amparándose en la aplicación de la modificación introducida por el Decreto Legislativo Nº 1113 al caso concreto, lo cual llevó a considerar una exigibilidad y un inicio de cómputo del plazo prescriptorio distinto. Asimismo, refiere que la Sala Superior ha inaplicado el artículo 170 del Código Tributario, en tanto ha desestimado la pretensión respecto al cómputo del plazo de prescripción en aplicación de lo contenido en el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario y no haber advertido que, en torno a dicha norma, se han configurado —con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda— los supuestos de dualidad de criterio y duda razonable, previstos en los numerales 1 y 2 del referido artículo 170. Ello se verifica de su pronunciamiento inhibitorio, contenido en el considerando décimo octavo de la sentencia de vista. En ese sentido, resulta conveniente citar las referidas normas: Código Tributario Título preliminar **Norma X: VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS** Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de este Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la Resolución de Superintendencia, de ser el caso. Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de aplicación general, deberán ser publicadas en el Diario Oficial. […] **Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF Artículo 44. COMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN** El término prescriptorio se computará: 1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. 2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior. 3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores. 4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria detectó la infracción. 5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior. 6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 7. Desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ellas. (*) (*) Numeral incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1113, publicado el 5 de julio de 2012, que entró en vigencia a los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación. […] **Artículo 170.- IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE INTERESES, DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y DE SANCIONES** No procede la aplicación de intereses, la actualización en función al Índice de Precios al Consumidor de corresponder, ni la aplicación de sanciones si: 1. Como producto de la interpretación equivocada de una norma, no se hubiese pagado monto alguno de la deuda tributaria relacionada con dicha interpretación hasta la aclaración de la misma, y siempre que la norma aclaratoria señale expresamente que es de aplicación el presente numeral. A tal efecto, la aclaración podrá realizarse mediante Ley o norma de rango similar, Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, resolución de superintendencia o norma de rango similar o resolución del Tribunal Fiscal a que se refiere el Artículo 154. Los intereses que no procede aplicar son aquéllos devengados desde el día siguiente del vencimiento de la obligación tributaria hasta los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario Oficial El Peruano. Respecto a las sanciones, no se aplicarán las correspondientes a infracciones originadas por la interpretación equivocada de la norma hasta el plazo antes indicado. La actualización en función al Índice de Precios al Consumidor que no procede aplicar es aquella a que se refiere el artículo 33 del presente código o el artículo 151 de la Ley General de Aduanas que corresponda hasta los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario Oficial El Peruano. 2. La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio anterior estuvo vigente. **Constitución Política del Perú Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho Artículo 103.-** Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivo; salvo, en ambos supuestos, en material penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho. […] **Vigencia y obligatoriedad de la Ley Artículo 109.-** La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

4.3. Es importante señalar que, para determinar el cómputo del plazo de prescripción de la administración tributaria, resulta necesario diferenciar si estamos ante una autodeterminación o ante una determinación por parte de la administración tributaria, conforme lo prevé el artículo 60 del Código Tributario; pues de ello dependerá el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Asimismo, también es pertinente precisar que, en materia de prescripción de la obligación tributaria, es importante distinguir las acciones que puede ejercer la administración tributaria y que estarían sujetas a la prescripción, según lo previsto en el artículo 43 del Código Tributario: **i)** para determinar la obligación tributaria, **ii)** para exigir el pago, **iii)** para aplicar sanciones. En el caso en concreto, se verifica que el plazo que fue analizado es el plazo para exigir el pago; en la norma se encuentra textualmente establecido que, en forma general, dicho plazo prescribe en cuatro años. **4.4.** Asimismo, es necesario advertir que la aplicación del inciso 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario es para los casos en los que la administración tributaria determinó el tributo. Asimismo, el plazo se computará desde el día siguiente de notificado el contribuyente con la resolución de determinación y multa. Es así que, en el caso en concreto, para la aplicación correcta de las normas, corresponde verificar si se trata de una autodeterminación o de una determinación por parte de la administración tributaria. Del estudio de autos, se advierte que el procedimiento administrativo inicia con la fiscalización del ejercicio dos mil nueve por parte de la administración tributaria; a consecuencia de ello y con los requerimientos realizados, la administración tributaria emite Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0063074 a Nº 012-003-0063086, emitidas por la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve y los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos enero a diciembre de dos mil nueve, y las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0026588 a Nº 012-002-0026600, emitidas por los mismos periodos, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del código Tributario. **4.5.** A pesar de que el cobro que exige la administración tributaria es respecto al impuesto a la renta, a los pagos a cuenta y a las multas vinculada, que pueden ser autodeterminadas, ello no impide a la administración tributaria pueda realizar la determinación a consecuencia de encontrar irregularidades en el ejercicio, conforme lo previsto en el artículo 61 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, pues la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la administración tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada. Por lo tanto, se advierte que, en el caso en concreto, se trata de una determinación de la administración tributaria iniciada mediante un procedimiento de fiscalización. **4.6.** Por lo tanto, tratándose de una determinación de la administración tributaria, correspondía verificar desde qué fecha corre el plazo para el cómputo de la prescripción de la administración tributaria para exigir el pago. Al respecto, la Sala Superior mencionó lo siguiente: **SÉTIMO.-** Que, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, es importante destacar que el artículo 44, numeral 7, del acotado Código, incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1113, publicado el cinco de julio del dos mil doce, establece que el término prescriptorio se computará desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ellas; asimismo, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo número 1421, publicado el trece de setiembre del dos mil dieciocho, puntualiza que tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución, el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación o para aplicar sanciones se inició hasta el uno de enero del dos mil doce, notificadas a partir del veintiocho de setiembre del dos mil doce dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario; **OCTAVO.-** Que, en esa línea, atendiendo a las particularidades del caso concreto, se constata que el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria Relativa al Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil nueve, los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre del dos mil nueve y las multas vinculadas, tuvo como término inicial el veintiocho de octubre del dos mil quince –esto es, al día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación números 012-003-0063074 a 012-003-0063086 y las Resoluciones de Multa números 012-002-0026588 a 012-002-0026600–, por lo que a la fecha en que se planteó la referida solicitud de prescripción por parte de la empresa contribuyente ahora accionante, el cinco de noviembre del dos mil dieciocho, esta última no había operado; […] Conforme lo expuesto, la Sala Superior refiere que el Decreto Legislativo Nº 1421 puntualiza que, tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución, el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación o para aplicar sanciones se inició hasta el uno de enero de dos mil doce, notificadas a partir del veintiocho de setiembre del dos mil doce dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. Por lo tanto, se advierte que la Sala Superior no estaría inaplicando el artículo 103 y 109 de la Constitución Política del Perú ni la norma X del título preliminar del Código Tributario, pues se desprende del análisis realizado por la Sala Superior que en el caso en concreto, al ser notificada la parte recurrente con las resoluciones de determinación y multa, el veintisiete de octubre de dos mil quince, se aplicaría el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, pues esta norma fue incorporada el cinco de julio de dos mil doce y, conforme se aprecia del Decreto Legislativo Nº 1421, se aplica para procedimientos que se encuentren en trámite desde el uno de enero de dos mil doce. **4.7.** Asimismo, conforme a lo analizado, se infiere que resulta aplicable el numeral 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario para establecer el cómputo del plazo de prescripción solicitado por la parte recurrente. Se aprecia que la Sala Superior al momento de realizar el conteo de las fechas de notificación de las resoluciones de determinación y de multa, toma en consideración que el inicio del plazo prescriptorio sea desde el día siguiente de notificadas las referidas resoluciones; por lo que el cómputo del plazo de prescripción inició el veintiocho de octubre de dos mil quince y culminaría el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve; y siendo que la parte recurrente presentó su solicitud de prescripción el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no habría operado el plazo prescriptorio. **4.8.** Asimismo, respecto de la inaplicación del artículo 170 del Texto Único Ordenado del Código Tributario la Sala Superior, refiere lo siguiente: […] de otro lado, en lo que respecta a la solicitud de inaplicación de intereses y multas con invocación de lo prescrito en el artículo 170, numerales 1 y 2, del Código Tributario, cabe destacar que la misma no ha sido materia de una pretensión postulada en este proceso, según el petitum de la demanda y tal como incluso lo admite la defensa técnica de la empresa accionante, razón suficiente para no emitir pronunciamiento al respecto, sin perjuicio de lo cual sólo se destaca, de modo reiterativo, que resulta aplicable lo preceptuado en el artículo 44, numeral 7, del Código Tributario, por razón de temporalidad y acorde a las particularidades del caso sub-examine, no habiéndose producido vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sumado a que, en la sentencia de Casación número 12357-2017 Lima de fecha nueve de mayo del dos mil diecinueve se reafirma la aplicación del citado dispositivo legal. […] Es así que, conforme lo advertido en las pretensiones de la demanda, no se observa que la parte recurrente haya denunciado la inaplicación de intereses y multas conforme lo señalado por el artículo 170 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno, conforme lo desarrolla la Sala Superior. Por lo tanto, se aprecia que no existe una inaplicación o aplicación indebida de las normas en referencia, por lo que corresponde declarar **infundadas** dichas causales. Quinto: Respecto a las causales vinculadas al reparo por provisión de cobranza dudosa: infracción normativa por inaplicación del artículo 166 y del numeral 1.11 del artículo IV del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y del artículo 197 del Código Procesal Civil; e interpretación errónea del numeral II, inciso i, del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y de las normas IV y VIII del título preliminar del Código Tributario **5.1.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior ha inaplicado los artículos 166 y el numeral 1.11 del artículo IV del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como el artículo 197 del Código Procesal Civil, porque no ha realizado una valoración conjunta y razonada de las pruebas presentadas durante la etapa administrativa y que acreditan las gestiones de cobranza al cliente Doe Run Perú S.R.L. en el ejercicio dos mil nueve. Advierte la

recurrente que optó por acreditar la morosidad del deudor mediante las gestiones de cobro con la finalidad de deducir la provisión de cobranza dudosa de la deuda del cliente Doe Run Perú S.R.L. por medio del proceso de arbitraje seguido en contra de dicha empresa —es decir, la medida más drástica dentro de las referidas gestiones de cobro—, así como la carta notarial de cinco de marzo de dos mil nueve, conforme a lo señalado en la Casación Nº 17677-2015. **5.2.** Asimismo, la parte recurrente refiere que la Sala Superior ha interpretado erróneamente el numeral (ii) del inciso i) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, al señalar que la existencia de embargos en forma de inscripción sobre tres inmuebles de Doe Run Perú S.R.L. es suficiente para desconocer la deducción por provisión de cobranza dudosa. En ese sentido, la Sala Superior interpreta que contar con deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía es lo mismo que contar con deudas garantizadas con medidas de embargo en forma de inscripción inmueble, para efectos del numeral (ii) del inciso i) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Advierte que el embargo en forma de inscripción no constituye una garantía de carácter real; por tanto, la deuda no se encontraba garantizada y sí calificaba como incobrable, según los parámetros establecidos en la normativa reseñada de la Ley del Impuesto a la Renta. **5.3.** Al respecto, tenemos que las referidas normas regulan lo siguiente: **Ley N. º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Título preliminar Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo** […] **1.11. Principio de verdad material. -** En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. […] **Artículo 166.- Medios de prueba** Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 1. Recabar antecedentes y documentos. 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones por escrito. 4. Consultar documentos y actas. 5. Practicar inspecciones oculares. Código Procesal Civil **Valoración de la prueba.- Artículo 197.-** Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. **5.4.** Se verifica que estas normas regulan la valoración de medios probatorios y que estos deben ser verificados conforme a los hechos ocurridos, debiendo ser valorados por el juez en forma conjunta. Respecto a ello, la parte recurrente refiere que optó por acreditar la morosidad del deudor por medio del proceso de arbitraje seguido en contra la empresa Doe Run Perú S.R.L., así como la carta notarial del cinco de marzo de dos mil nueve. De lo argumentado por la parte recurrente, se aprecia que hace referencia a los medios probatorios presentados y que la Sala Superior no los valoró conjuntamente. Conforme se puede observar de las normas materiales denunciadas y de los argumentos de la parte recurrente, se infiere que pretende la valoración de los medios probatorios presentados. Sin embargo, en sede casatoria la valoración de medios probatorios no es posible, dado que la arbitrariedad fáctica se presenta cuando no se han valorado los medios probatorios admitidos y actuados de conformidad con los principios procesales que rigen la actividad probatoria. **5.5.** De lo argumentado, tenemos que ya se han establecido criterios, conforme podemos apreciar del noveno considerando de la Casación Nº 2434-2010-Del Santa[17], que refiere lo siguiente: Este Supremo Tribunal no está impedido de revisar la actividad procesal en materia de la prueba cuando se ignoran hechos relevantes en la controversia como ha sucedido en el presente caso, lo que configura la afectación del derecho al debido proceso del impugnante. Por lo que uno de los supuestos que habilita tal competencia se configura cuando se denuncia una causal de infracción normativa procesal. En este caso en concreto, no obstante, la parte recurrente denuncia como una causal de infracción normativa material, es decir, busca un reexamen de estos. Sin embargo, la finalidad del recurso de casación es nomofiláctica y uniformadora, es decir, con este recurso extraordinario se busca la uniformización de la jurisprudencia y la adecuada aplicación del derecho material y procesal, pues no se está ante una tercera instancia. Por ende, corresponde desestimar la infracción normativa denunciada por la inaplicación del artículo 166 y del numeral 1.11 del artículo IV del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y del artículo 197 del Código Procesal Civil. **5.6.** Asimismo, tenemos que la empresa denuncia las siguientes infracciones normativas: **Ley del Impuesto a la Renta Artículo 37.-** […] i)Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: (i) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. (ii) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra venta con reserva de propiedad. (iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. **Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF Título preliminar Norma IV PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY** Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancelarias. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley. […] **Norma VIII.- INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS** Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo. **5.7** Respecto a la referida norma, corresponde hacer algunas precisiones respecto a la provisión de cobranza dudosa. En esencia, son reservas hechas en previsión de posibles pérdidas. Se entiende por cobranza dudosa aquella respecto de la cual no existe certeza o seguridad sobre su posible recuperación, ya sea porque el deudor no se acerca a cancelar su obligación con el acreedor o porque este se encuentra en una mala situación económica que le impide realizar cualquier tipo de pago de deudas, en perjuicio del acreedor de la operación realizada. Las deudas de cobranza dudosa se generan porque una empresa considera que, de las cuentas por cobrar que mantiene, una parte no va a poder cobrarse pese a todas las gestiones efectuadas[18]. Asimismo, puede ser definida como provisiones que representan pérdidas no realizadas, obligaciones contraídas o posibles obligaciones. **5.8.** De lo señalado, cabe precisar que, de acuerdo al primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, aplicable al caso en concreto, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley; y, de acuerdo al inciso i) de la mencionada norma, son deducibles los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que correspondían. Asimismo, este inciso refiere que no se reconoce el carácter de deuda incobrable a **i)** las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas; **ii)** las deudas afianzadas por empresas

del sistema financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compraventa con reserva de propiedad; y **iii)** las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresas. Por su parte, el inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 134-2004-EF, precisa que para efectuar la provisión de cobranza dudosa se deberá tener en cuenta: 1) el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. 2) para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: a) que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha, y b) que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada. […] **5.9.** Por lo tanto, la norma establece reglas para considerar que efectivamente existe riesgo de incobrabilidad o morosidad del deudor, pues dicho marco normativo exige que se demuestre que las deudas se encuentran vencidas, el riesgo de incobrabilidad, la morosidad de la deuda, el protesto de documentos, el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, que transcurran más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que esta haya sido satisfecha, y que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. **5.10.** En el caso en concreto, la Sala Superior refiere lo siguiente: **DUODÉCIMO.-** Que, incidiéndose en los antecedentes reseñados, se evidencia que el reparo formulado por la Administración Tributaria se ajusta a lo previsto en el invocado artículo 21, inciso f), del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, concordante con el artículo 37, inciso i), de la acotada Ley, toda vez que, durante el procedimiento de fiscalización, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. no cumplió con acreditar la deducción de la provisión de la deuda de la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L., pese a haber sido expresamente requerida para tal fin mediante los Requerimientos números 0122140001600 y 0122150001440, máxime si se considera que a partir de los elementos de juicio explicitados, aquélla no ha desvirtuado en modo alguno los fundamentos de dicho reparo, consistentes en que no había transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la deuda sin que la misma haya sido satisfecha, así como que los documentos presentados no acreditaban las dificultades que hagan previsible la incobrabilidad de la deuda, al estar garantizada con medida cautelares a través de embargo en forma de inscripción sobre tres bienes inmuebles de propiedad de su cliente deudor, la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L.; por ende, los argumentos esgrimidos por la defensa técnica de la empresa accionante como fundamentación del recurso impugnativo que motiva la alzada, relacionados con el reparo en referencia, carecen de asidero. **5.11.** Se deber advertir que la Sala Superior considera que la parte recurrente no acredita las provisiones de cobranza dudosa, pues refiere expresamente —después de considerar lo actuado en sede administrativa y considerando los medios probatorios presentados por la parte recurrente— que "no había transcurrido mas de doce meses desde la fecha de vencimiento de la deuda sin que la misma haya sido satisfecha". Se verifica que este requisito se encuentra regulado en el numeral 2.a del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual expresamente establece: "[…] hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que esta haya sido satisfecha […]". **5.12.** Asimismo, la Sala Superior refiere que "los documentos presentados no acreditaban las dificultades que hagan previsible la incobrabilidad de la deuda, al estar garantiza con medida cautelares a través de embargo en forma de inscripción sobre tres bienes inmuebles de propiedad de su cliente deudor., la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L" y se verifica que este requisito se encuentra regulado en el numeral 2.a del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual expresamente establece: "Que la deuda se encuentra vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad […]". **5.13.** Esta Sala Suprema infiere que la Sala Superior considera que los medios probatorios presentados por la parte recurrente no resultan suficientes para acreditar la provisión de cobranza dudosa, pues no acreditan el riesgo de incobrabilidad de la deuda conforme a lo regulado por el artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; por lo tanto, no se verifica análisis alguno por parte de la Sala Superior que considere que las deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía es lo mismo que contar con deudas garantizadas con medidas de embargo en forma de inscripción inmueble. Por lo tanto, no se aprecia análisis alguno del numeral ii del inciso i del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que carece de objeto analizar si la medida cautelar es o no un derecho real de garantía, pues se estaría originando un nuevo debate procesal. En consecuencia, no se aprecia interpretación errónea del numeral II, inciso i del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y de las normas IV y VIII del título preliminar del Código Tributario; por lo que corresponde declarar infundadas dichas causales. Sexto: Respecto al apartamiento inmotivado del precedente vinculante de la Casación Nº 4392-2013-Lima y la interpretación errónea del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario **6.1.** En este considerando, se efectuará un pronunciamiento sobre la causal material de infracción normativa por interpretación errónea del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. El análisis de las normas denunciadas se realizará de manera conjunta, ello en atención a que se encuentran sustentadas esencialmente en que la empresa estaría obligada a pagar intereses moratorios por los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos de enero a diciembre de 2009, al considerar tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT que, con la declaración rectificatoria, se modificó el coeficiente de cálculo de los pagos de cuenta, lo que generó la obligación de pago de intereses moratorios. **6.2.** La parte recurrente argumenta que la Sala Superior ha incurrido en una interpretación errónea del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Código Tributario, al preferir una interpretación extensiva, sistemática y teleológica, en lugar de una interpretación literal de las indicadas normas, conforme lo dispuso el precedente vinculante a que se refiere la Casación Nº 4392-2013 Lima. Asimismo, advierte que, en virtud de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, corresponde que los preceptos normativos bajo desarrollo sean interpretados según la literalidad de ambas disposiciones, sin efectuar una interpretación extensiva o restrictiva de las mismas. Además, señala que se debe tener en cuenta que la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta obedece a una norma que tiene una finalidad estimatoria del impuesto a la renta que debería pagar un contribuyente al cierre del ejercicio gravable, en función del margen de utilidad del negocio en el ejercicio precedente al anterior (meses de enero y febrero) o ejercicio anterior (marzo a diciembre), asumiendo que no debería sufrir variaciones sustanciales de un ejercicio a otro. **6.3** Al respecto, debemos mencionar que el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, de acuerdo con el texto vigente en el periodo tributario objeto de debate, establece lo siguiente: **Artículo 85.-** Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente: a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. […] A su vez el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece lo siguiente: Artículo 34.- Cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta El interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal. A partir de ese momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para el cálculo del interés moratorio. **6.4** En esa línea, es preciso indicar que los intereses moratorios tienen naturaleza indemnizatoria, puesto que su objeto es resarcir al Estado por el retraso en el cumplimiento de una obligación.

No obstante, en materia tributaria, su finalidad no solo es indemnizatoria, sino que busca fortalecer la puntualidad y corrección en el cumplimiento del pago de los tributos, pues más que suplir la pérdida del poder adquisitivo del dinero dejado de pagar, busca resguardar los recursos del Estado contra los riesgos de morosidad o de falta de pago de los tributos por parte de los contribuyentes, compensándolo y resarciéndolo por el costo de oportunidad que representa el no contar oportunamente con el pago de los tributos. En buena cuenta, los intereses adquieren una naturaleza resarcitoria del capital que permanece en manos del administrado por un tiempo que excede al permitido. **6.5** En efecto, en el caso de los pagos a cuenta, del texto de la citada normativa —artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario—, interpretado sistemáticamente con lo previsto en el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, se colige que el legislador tributario castiga con el pago de intereses moratorios al contribuyente que no haya cancelado oportunamente el íntegro de esta obligación tributaria; ello es así porque la falta de pago o el pago parcial de este concepto (pago a cuenta) también implicará que el Estado no cuente tempranamente con el monto determinado por ley para su desembolso, esto es, desde la oportunidad en que resultaba exigible al contribuyente pagarlo o cancelarlo de forma integral, con lo que genera un retraso de la entrega de ese dinero al Estado hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal. Por ende, resulta válido establecer, mediante el pago de intereses moratorios, un resarcimiento a su favor por no haber dispuesto oportunamente de dicho capital. **6.6** Además, se advierte que una interpretación como la planteada por la parte recurrente, en el sentido de librar del pago de intereses moratorios a quienes meramente efectúen dentro de los plazos algún pago por este concepto, así sea menor, conduciría a un incentivo para que los contribuyentes puedan, en mérito a modificaciones o rectificaciones particulares de la base de cálculo de los pagos a cuenta (a partir de, por ejemplo, los coeficientes), pagar montos menores o diminutos a los establecidos por ley, sustentados únicamente en que realizaron los pagos a cuenta dentro de los periodos mensuales fijados para depositarlos. Ello propiciaría un escenario en que los contribuyentes podrían válidamente postergar a la fecha de vencimiento de la obligación principal del tributo, el pago casi integral del mismo, lo que generaría indudablemente un desbalance económico temporal de los recursos financieros del fisco. Por lo analizado precedentemente, ello supone un escenario que no compartimos. **6.7** Asimismo, es necesario señalar que estos argumentos se refuerzan con el artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el cual exige que las declaraciones realizadas por los contribuyentes para la determinación de sus obligaciones tributarias contengan los datos solicitados por la administración "en forma correcta y sustentada". Así pues, esta Sala Suprema se encuentra de acuerdo con el análisis sistemático que realiza la Sala Superior al considerar que dicho artículo establece pautas para la realización de la declaración jurada, la cual debe ser realizada correctamente y con el debido sustento. **6.8.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior ha incurrido en un apartamiento inmotivado del precedente vinculante a que se refiere la Casación Nº 4392-2013 Lima, dado que el presente caso corresponde a la misma fundamentación fáctica a que se contrae dicho precedente, esto es, la recurrente realizó el pago oportuno de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, es decir, dentro del plazo establecido, y no resulta relevante —en su concepto— si el pago a cuenta fue modificado posteriormente por la fiscalización de la administración tributaria o por la declaración rectificatoria del contribuyente. **6.9.** Es necesario tener en consideración que, en el marco del Estado constitucional de derecho, las disposiciones legales deben ser interpretadas en compatibilidad con los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, en el literal b) de su artículo 29, consagra que: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] **limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes** o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. [Énfasis nuestro] **6.10** Acorde con la precitada norma convencional, es menester poner de relieve que, para la efectivización de la labor interpretativa, esta debe estar armonizada con el principio de legalidad recogido en el artículo 9[19] de la mencionada convención y en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, por lo que este principio se constituye en aspecto límite para el Estado, en especial en lo referente a la potestad tributaria. **6.11.** En principio, debemos considerar que, en materia tributaria, prevalece el principio de reserva de ley, que se recoge en la Constitución Política del Estado, cuando en su artículo 74 establece que: Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. […] Por su lado y siendo una norma de desarrollo constitucional, el Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, en la norma IV del título preliminar, señala que: Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10. […] Debe agregarse que la anotada norma VIII del título preliminar del mismo Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF señala que: Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. […] **6.12.** En ese sentido, es necesario señalar que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho[20], en el cual las normas supremas constituyen parámetros de validez y corrección de las normas legales y orientan su debida interpretación, guardando compatibilidad y sumisión a la supremacía de las normas del bloque de constitucionalidad[21]. **6.13.** Estas consideraciones alcanzan y comprenden la interpretación de las disposiciones legales de la especialidad tributaria, las que no están exentas de ser interpretadas conforme a las normas constitucionales, por lo que resulta necesario y exigible orientar el rumbo hacia una interpretación constitucional de las disposiciones tributarias, garantizando así su "legitimidad constitucional y la legalidad de su ejercicio"[22]. **6.14.** Teniendo en cuenta lo señalado, es preciso mencionar que la potestad tributaria y el carácter coactivo de los tributos y obligaciones tributarias se rige, primero, por la Constitución Política del Perú, y luego por las leyes y lo previsto en las normas reglamentarias. Como se puede apreciar, el artículo 74 de la Constitución no solo reconoce la potestad tributaria, sino que también establece que esta debe ser ejercida respetando los principios de reserva de ley, igualdad y no confiscatoriedad, y los derechos fundamentales y la no confiscatoriedad. Asimismo, establece que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establecen exoneraciones por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades y por decreto supremo en los casos de tasas y aranceles. En ese orden, la supremacía de las normas constitucionales y el carácter obligatorio de las normas legales —conforme a la norma constitucional del artículo 109— obligan tanto a autoridades como a administrados. **6.15** Asimismo, el criterio vinculante aprobado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente en la Casación Nº 4392-2013-Lima, tiene el tenor siguiente: 5.2.1. La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía tampoco de la interpretación extensiva ni la restrictiva, admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de la norma anotada, resultando para ello muy importante que el juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar. 5.2.2. No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para normas que establecen obligaciones como el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta previstos en el inciso a) del artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario. […] **6.16.** De su lectura, se verifica que la mencionada sentencia estableció reglas acerca de cómo debe interpretarse la normativa tributaria, en atención a lo dispuesto en la norma VIII del título preliminar del Código Tributario; en ese sentido, señala en un primer momento que el uso de la analogía como método de interpretación debe ser limitado. Por dicha razón, resalta la labor del juez a efectos

de seleccionar el método más adecuado al tipo de disposición tributaria que se desea interpretar. **6.17.** De la misma manera, en el referido precedente vinculante, se tiene que la mencionada **Sala Suprema excluyó expresamente los métodos de interpretación extensivo y restrictivo** para analizar aquellas normas que restringen derechos y establecen obligaciones. Al respecto y en relación con la resolución del presente caso, se debe señalar que si bien en el citado precedente vinculante ha mencionado como ejemplos al inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y al artículo 34 del Código Tributario, no les otorga un sentido o contenido interpretativo vinculante ni señala qué reglas jurídicas deban extraerse de sus enunciados, para resultar aplicables por todos los operadores jurídicos, por lo que se puede concluir que determinó únicamente cómo abordar el análisis de estas disposiciones legales. **6.18.** En ese sentido, no resulta admisible lo expuesto por la parte recurrente, cuando señala sobre la Casación Nº 4392-2013-Lima: […] estableció que, habiéndose cumplido con determinar los pagos a cuenta siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 85 de la Ley del IR, y habiéndose efectuado el pago del monto así determinado dentro el plazo establecido, no corresponde la aplicación de intereses moratorios cuando de forma posterior – ya sea producto de un procedimiento de fiscalización o de forma voluntaria- ocurra un recalculo de los referidos pagos a cuenta como consecuencia de la presentación de la declaración rectificatoria de una declaración jurada o la modificación de la determinación por parte de la Administración Tributaria a raíz de un procedimiento de fiscalización. Toda vez que en dicha jurisprudencia casatoria no se aprueba algún sentido interpretativo con carácter vinculante u obligatorio que deba necesariamente ser tomado en cuenta al aplicar las normas, sino qué métodos de interpretación no pueden servir para extraer reglas de sus enunciados considerando su naturaleza de normas que restringen derechos y establecen obligaciones. **6.19.** Por otro lado, debemos referirnos a si la postura adoptada en segunda instancia —respecto a que el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario determinan que los contribuyentes **deben pagar intereses moratorios por las omisiones en el caso que no cumplan con cancelar íntegramente los pagos a cuenta del impuesto a la renta en la oportunidad establecida por ley— supone una contravención al criterio vinculante aprobado en la Casación Nº 4392-2013-Lima.** Al respecto, de conformidad con lo desarrollado en el apartado anterior, la postura jurídica acogida en esta instancia descansa en una interpretación sistemática de las mencionadas normas materiales invocadas, dado que el artículo 34 del Código Tributario establece intereses moratorios ante los "[…] pagos a cuenta no pagados oportunamente […]"; y, por su parte, el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que los contribuyentes deberán abonar al fisco "[…] con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario […]". Por consiguiente, de un análisis conjunto de estas normas, se establece la obligación de efectuar el abono oportuno de los pagos a cuenta del impuesto a la renta para quienes obtengan rentas de tercera categoría. **6.20.** Sobre el pago como concepto, uno de los principios que lo inspiran como forma de extinguir las obligaciones es el principio de integridad, por el cual se entiende efectuado el pago solamente cuando este se cumpla y este cumplimiento implique la realización completa del dar, hacer o no hacer prometidos, principio que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1220 del Código Civil. En materia tributaria, esta forma de entender el pago se aprecia en el primer párrafo del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando se establece bajo qué términos legales se debe realizar. **6.21.** En este sentido, el pago parcial o incompleto no podrá ser considerado oportuno, desde que no logra extinguir la totalidad de lo adeudado dentro del plazo establecido legalmente, lo cual implica que el pago que pueda efectuar un contribuyente, cuando haya realizado una liquidación errónea de la obligación tributaria al momento de calcularla, como sería el caso del monto a depositar por pagos a cuenta del impuesto a la renta, no podrá servir para sostener que se cumplió con pagar lo adeudado al fisco en la oportunidad en que debía hacerlo, por no tratarse de un pago completo o integral. **6.22.** A partir de lo expuesto, se aprecia que no se efectuó un análisis del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Código Tributario bajo los métodos de interpretación extensiva o restrictiva, pues se partió de una interpretación sistemática de los enunciados y expresiones que cada una de estas disposiciones legales recogen **al regular los pagos a cuenta del impuesto a la renta,** en particular, sobre el pago como categoría jurídica y qué involucra el concepto de pago oportuno, lo **que impide sostener que la anotada postura contravenga los criterios vinculantes aprobados en la Casación Nº 4293-2013-Lima, que únicamente exigían no utilizar alguno de dichos métodos interpretativos.** En consecuencia, estas causales planteadas devienen en **infundadas. 6.23.** Asimismo, se debe precisar que el Tribunal Fiscal ha referido en sus argumentos que para efectuar el nuevo cálculo de los coeficientes aplicables a los pagos a cuenta del impuesto a la renta del periodo de enero a diciembre del dos mil nueve, la administración deberá considerar lo resuelto en la Resoluciones Nº 08360-1-2018 y Nº 08266-4-2018, así como en las resoluciones de cumplimiento que se emitan. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta lo referido, para el momento de la ejecución de la presente resolución. En consideración a los argumentos expuestos, se concluye que la sentencia objeto de casación no incurrió en las infracciones denunciadas por la parte recurrente; por tanto, la decisión de la Sala Superior se encuentra acorde al derecho y a la justicia. Corresponde, pues, declarar infundado el recurso de casación. DECISIÓN Por estas consideraciones, **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., mediante escrito del veintisiete de junio de dos mil veintidós (fojas dos mil trescientos ochenta y cuatro a dos mil cuatrocientos sesenta y uno). En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista del ocho de junio de dos mil veintidós (fojas dos mil trescientos cincuenta y cuatro a dos mil trescientos setenta y cinco), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre nulidad de acto administrativo. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, DELGADO AYBAR, CORANTE MORALES, **TOVAR BUENDÍA.**

---

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

3 Ibidem, p. 359.

4 CAVANI, Renzo (2016). Código Procesal Civil comentado por los mejores especialistas. Tomo III. Lima, Gaceta Jurídica; p. 342.

5 **Constitución Política del Perú**
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
3. La observación al debido proceso y la Tutela Jurisdiccional

6 **Constitución Política del Perú**
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan

7 **Código Procesal Civil**
Artículo 50.- Deberes
Son deberes de los Jueces en el proceso:
[…]
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
Artículo 122.- Las resoluciones contienen:
[…]
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

8 **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**
Artículo 12.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

9 Publicada en el portal web de la mencionada institución el veintinueve de agosto de dos mil siete.

10 Publicada el dos de octubre de dos mil siete en el diario oficial El Peruano.

11 ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones judiciales. Madrid, Marcial Pons; pp. 157-158.
GUZMÁN, Leandro (2013). Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires, Astrea; pp. 189-190.

12 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p 15.

13 TARUFFO, Michele (2006). La motivación de la sentencia civil. México D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pp. 309-310.

14 ATIENZA, Manuel (1991). Las razones del derecho. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales; p. 61

15 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184.

16 IGARTUA SALAVERRÍA, op. cit., p. 26

17 Publicada en el diario oficial El Peruano el dos de enero de dos mil doce.

18 ARIAS COPITÁN, Pablo (2017). Estimación de cobranza dudosa. Lima, Gaceta Jurídica; p. 5.
ARIAS COPITÁN, Pablo (2016). "La cobranza dudosa y su incidencia en el Impuesto a la Renta". En Contadores & Empresas, Nº 287; p. 10

19 **Convención Americana de Derechos Humanos**
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

20 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo, no nos limitamos a una referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado constitucional, más aún al derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo:
No se puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el ordenamiento jurídico en su faz dinámica.
VIGO, Rodolfo Luis (2005). De la ley al derecho. México D.F., Editorial Porrúa; p. 17

21 **Constitución Política del Perú**
Supremacía de la Constitución
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

22 LANDA ARROYO, César (2005). Los principios tributarios en la Constitución de 1993. Una perspectiva constitucional. Lima, Fondo editorial PUCP; p. 37.

C-2245460-13

CASACIÓN Nº 2541-2023 LIMA

TEMA: APLICACIÓN DE LA NORMA EN EL TIEMPO
SUMILLA: Se debe tener en cuenta que las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigor y carecen de efectos retroactivos. Esto significa que para aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas desde su entrada en vigor, para los hechos acaecidos dentro de su marco de temporalidad. Conforme a ello, en el caso concreto, la adquisición efectiva de las mercancías (realizada el seis de agosto de dos mil dieciocho) por parte de Interloom S. A. C., se realizó antes de la entrada en vigencia del gravamen arancelario adicional del 10% previsto en el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR (vigente desde el siete de agosto del dos mil dieciocho).
PALABRAS CLAVE: aplicación de la norma en el tiempo, ultraactividad benigna aduanera, incremento de derechos arancelarios

Lima, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA La causa dos mil quinientos cuarenta y uno guion dos mil veintitrés, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN** Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante **Interloom Sociedad Anónima Cerrada**, mediante escrito del trece de diciembre de dos mil veintidós (fojas seiscientos trece a seiscientos cincuenta y ocho del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas quinientos noventa y tres a seiscientos seis), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **confirmó** la sentencia apelada, contenida en la resolución número nueve de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós (fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos noventa y dos), que declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. **1.2. Causales por las cuales se ha declarado procedente el recurso de casación 1.2.1.** Mediante resolución del auto de calificación del diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas ochenta y siete del cuaderno de casación), se declaró **procedente** el recurso de casación interpuesto por la recurrente, por las siguientes causales: **a) Vulneración al debido proceso y derecho de defensa, reconocidos en el numeral 3 y numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.** Sostiene que la sala superior consideró erradamente como premisa de discusión la regulación del gravamen arancelario adicional vía el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, cuando lo que fue materia de litis es la aplicación del principio de ultraactividad benigna contenida en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053. **b) Inaplicación del principio de jerarquía normativa contenido en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú e inaplicación del literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas.** Sostiene que la sala superior ha inaplicado el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas , norma con rango de ley que regula el principio de ultraactividad benigna en materia aduanera, que a través de la aplicación indebida del principio de competencia normativa, en detrimento del principio de jerarquía normativa, debe priorizarse la aplicación del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR sobre lo dispuesto en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, la materia arancelaria se encuentra excluida del principio de reserva de ley, debiendo regularse exclusivamente mediante Decreto Supremo. II. CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes del caso Previo al análisis y evaluación de las causales expuestas en el recurso de casación, resulta menester realizar un breve recuento de las principales actuaciones procesales: **1.1. Demanda.** El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas treinta y dos a cincuenta y siete), la empresa **Interloom Sociedad Anónima Cerrada** interpuso demanda contenciosa administrativa con el siguiente petitorio: **Primera pretensión principal**: Conforme a lo dispuesto por el artículo 5, inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, se declare la Nulidad Total de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06171-A-2021 de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, que resuelve Confirmar lo resuelto por la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7100/2020-000295, que desestimó el reclamo interpuesto contra el artículo único de la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7200/2019-001020. Señala que la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7200/2019-001020 declaró improcedente la solicitud de devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente tramitada con Expediente Nº 118-URD157-2019-194335, ascendente a US$ 19,775.00 (diecinueve mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos) más intereses de ley por concepto del gravamen arancelario adicional pagado indebidamente bajo la Declaración Aduanera de Mercancía de importación para el consumo Nº 118-2018-10-445006 que amparo la nacionalización de azúcar refinada colombiana. **Pretensión accesoria a la primera pretensión principal:** Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, solicita que se declare la nulidad del artículo único de la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7200/2019-001020, así como de la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7100/2020-000295, mediante las cuales se declaró improcedente su solicitud de devolución por concepto de pago indebido de gravamen arancelario adicional. **Segunda pretensión principal:** Como pretensión de plena jurisdicción se declare la devolución del monto de US$ 19,775.00 (diecinueve mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos) más intereses de ley por concepto de pago indebido cancelado bajo la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2018-10-445006. Entre los fundamentos que sustentan la demanda son los siguientes: a) Señala que, el seis de agosto de dos mil dieciocho, a través de la carta de crédito confirmada e irrevocable Nº 0850551110220187 de misma fecha, INTERLOOM adquirió del proveedor colombiano TOPPER TRADING CORPORATION la mercancía consistente en azúcar refinada, clasificada en la subpartida arancelaria nacional (SPN) 1701.99.90.00. b) Con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, con posterioridad a la fecha de adquisición del azúcar por INTERLOOM, entro en vigencia el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, a través del cual se dispuso la ejecución de la sanción autorizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contra la República de Colombia, hecho que significó la aplicación de un gravamen arancelario adicional del 10% a la importación de determinadas mercancías de origen colombiano, entre las cuales se encontró la mercancía clasificada en la SPN 1701.99.90.00. c) Agrega que, con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, la agencia de aduanas AUGUSTO BEDOYA S.A. en representación de su compañía, número la Declaración Aduanera de Mercancía Nº 118-2018-10-445006, a efectos de

destinar al régimen de importación el azúcar, mercancía cuya adquisición efectiva por INTERLOOM fue realizada al ampro de la carta de crédito Nº 0850551110220187 de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho. d) Indica, que según consta en el casillero 7.38 Observaciones del Formato A de la DAM Nº 118-2018-10-445006, su compañía dejo constancia de la fecha de adquisición del azúcar y de su voluntad de acogerse al principio de ultraactividad benigna consagrado en el inciso a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, e inciso a) del artículo 208 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF. e) Alega que el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR obedece a una norma legal que aumentó los derechos arancelarios a la importación de mercancías clasificadas en la subpartida nacional 1701.99.90.00, y que la adquisición efectiva (seis de agosto dos mil dieciocho) del azúcar por Interloom S.A.C., mediante Carta de Crédito Confirmada e Irrevocable Nº 0850551110220187, se realizó antes de la entrada en vigencia del gravamen arancelario adicional del 10%. Sostiene que estos hechos acreditan plenamente la aplicación del principio de ultraactividad benigna aduanera regulado en la Ley General de Aduanas y, complementariamente, en su respectivo reglamento. Indica que la agencia de aduanas Augusto Bedoya S.A., en representación de Interloom S.A.C., canceló bajo protesto el gravamen arancelario adicional por un valor ascendente a US$ 19,775,00 (diecinueve mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos), y que luego solicitó su devolución, acogiéndose al principio de ultraactividad benigna. Dicha solicitud fue declarada improcedente. f) Refiere que el Tribunal Fiscal, al resolver, se centró en un único argumento respecto de la aplicación de una norma especial (el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR), en detrimento de la aplicación de una norma de mayor jerarquía normativa, como lo es la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053. Ello contraviene flagrantemente lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, puesto que aplica arbitrariamente el principio de especialidad en un caso en el que a todas luces debe imperar la aplicación del principio de jerarquía normativa, dado que resulta contrario a derecho el priorizar el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR en detrimento del Decreto Legislativo Nº 1053. g) Refiere que el principio de ultractividad benigna consagrado en el artículo 144 de la Ley General de Aduanas resulta totalmente aplicable al presente caso, puesto que el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR se trató de una norma que incrementó la aplicación de derechos arancelarios aplicables a mercancías que habían sido previamente adquiridas por la demandante. **1.2. Contestaciones:** Por escrito del tres de setiembre de dos mil veintiuno (fojas sesenta y ocho), el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del **Ministerio de Economía y Finanzas**, en representación del Tribunal Fiscal, contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada. Del mismo modo, la Procuraduría Pública de la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, por escrito del dieciséis de setiembre de dos mil veintiuno (fojas noventa y nueve), también contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada. **1.3. Sentencia de primera instancia.** Emitida por el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número nueve de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós (fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos noventa y dos) declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. El juzgado sostiene: i. Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú reconoce a los tratados internacionales que se incorporan al derecho nacional. Añade que el Perú es miembro de la Comunidad Andina, cuyo estatuto establece que ella puede sancionar a un país miembro que no acatare las obligaciones impuestas. En ese sentido, por Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el cumplimiento de la sanción impuesta a la República de Colombia, sanción que consiste en la imposición temporal de un gravamen arancelario adicional de hasta 10% a las importaciones de hasta diez (10) mercancías, identificadas cada una de ellas en una subpartida Nandina, que provengan de importaciones de dicho país. ii. Que, la aplicación del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR no infringe el principio de jerarquía normativa, porque está destinado al cumplimiento de una sanción impuesta a la República de Colombia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y que el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas prevé un supuesto normativo sobre la aplicación general de la normativa aduanera. Considera el Juez que ambas normas tienen naturaleza jurídica diferente y que la antinomia solo se puede dar en caso de normas del mismo ordenamiento jurídico e igual jerarquía normativa que se hacen incompatibles por tener el mismo ámbito de validez. iii. Indica el Juez que, de la revisión de la documentación presentada ante la Administración Aduanera por la demandante, adjunta a su solicitud de devolución de pagos indebidos y/o en exceso, de fecha 14 de mayo de 2019, se aprecia que obra copia de la Carta de Crédito Nº I199475 confirmada e irrevocable de fecha 6 de agosto de 2018, la misma que se encuentra consignada en la DAM Nº 118-2018-10-421602-01-9-00 que sustenta la importación realizada por la demandante. En este sentido, y teniendo en cuenta que el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR entró en vigencia el 7 de agosto de 2018, es decir, con posterioridad a la adquisición de la mercancía importada, entonces, corresponde al presente caso la aplicación del beneficio establecido en literal a) del artículo 144° de la Ley General de Aduanas y literal a) del artículo 208° de su Reglamento, lo que equivale a que no resultaba aplicable a la importación realizada el gravamen arancelario adicional establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR. iv. Alega el Juez que, en cuanto a la pretensión de plena jurisdicción, sobre la devolución del monto pagado, se remite a los mismos argumentos. **1.4. Sentencia de Vista.** Expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte mediante resolución número diecisiete de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas quinientos noventa y tres a seiscientos seis), confirma la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Sostiene que: i. Señala el colegiado superior que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 2689-2004-AA/TC determinó que la Constitución Política del Perú estableció una reserva relativa de la ley en materia arancelaria, toda vez que se otorga al Poder Ejecutivo la potestad de regular dicha materia mediante decretos supremos, y de crear, modificar o derogar aranceles y tasas. En ese sentido, para resolver en materia arancelaria se debe recurrir al principio de competencia normativa y no al de jerarquía normativa. ii. Añade el colegiado superior que la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR solo establece dos supuestos de aplicación de la ultractividad benigna: **1)** en caso que a la fecha de entrada en vigencia del dispositivo hayan sido embarcadas la mercancía desde Colombia con destino al Perú, y **2)** en caso que la mercancía se encuentre en zona primaria aduanera y no haya sido destinada a algún régimen aduanero. Precisa el colegiado superior que en el caso concreto la mercancía importada de Colombia, consignada en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2018-10-445006, no se encuentra en ninguno de tales supuestos normativos, porque fue embarcada el quince de octubre de dos mil dieciocho, esto es, tiempo después de que entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, el siete de agosto de dos mil dieciocho. iii. Señala que no tiene asidero como argumento el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no haya señalado en su resolución (auto) los supuestos de ultractividad benigna (que luego, sin embargo sí fueron establecidos en la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR), para luego concluir que la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR es arbitraria, más aún si no se ha cuestionado su validez mediante los mecanismos pertinentes. iv. Añade que el argumento que señala que la apelada no tiene en cuenta la naturaleza jurídica de un derecho arancelario no tiene sustento, porque no está en debate dicho aspecto. También, indica que no se sostiene el argumento que busca cuestionar la sentencia apelada por descartar la aplicación de la ultractividad benigna; ello porque no correspondía la aplicación del supuesto del ultractividad benigna contenido en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, por el principio de jerarquía normativa, sino que corresponde el supuesto de ultractividad benigna previsto en la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, cuya pertinencia se determina por el principio de competencia normativa, al tratarse de materia arancelaria. **SEGUNDO. Consideraciones previas sobre el recurso de casación 2.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia

de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo en lo decidido. **2.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial. La corte de casación efectúa el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisa si los casos particulares se resolvieron de acuerdo a la normatividad jurídica. Así, corresponde a los jueces de casación cuidar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **2.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **2.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **TERCERO. Anotaciones sobre la motivación de resoluciones judiciales** Hechas las precisiones que anteceden, es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios constitucionales y legales involucrados. Así, tenemos que: **3.1.** En cuanto al **derecho al debido proceso**, diremos que este no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de garantías. Dos son los principales aspectos del mismo: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de los actos arbitrarios contrarios a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. Es decir, el ámbito **sustantivo** se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el ámbito **adjetivo** alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia. El derecho al debido proceso adjetivo se manifiesta, entre otros, en el derecho a la defensa, a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, al proceso preestablecido por ley, a la cosa juzgada, al juez imparcial, a la pluralidad de instancia, de acceso a los recursos, al plazo razonable y a la motivación. **3.2.** El Tribunal Constitucional, en el fundamento 48 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00023-2005-AI/TC, ha puntualizado que: […] para determinar el contenido constitucional del derecho al debido proceso, podemos establecer, recogiendo jurisprudencia precedente, que este contenido presenta **dos expresiones: la formal y la sustantiva.** En la de **carácter formal**, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión **sustantiva**, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. [Énfasis nuestro] **3.3.** Asimismo, en el fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 3421-2005-PH/TC, se estableció lo siguiente: […] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso no solo se manifiesta en una **dimensión adjetiva** —que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales—, sino también en una **dimensión sustantiva** —que protege los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular—; en consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios. [Énfasis nuestro] **3.4.** En ese sentido, tenemos que el debido proceso en su dimensión formal o procesal hace referencia a todas las formalidades y pautas que garantizan a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos, y dado que el debido proceso no solo requiere de una dimensión formal para obtener soluciones materialmente justas —pues ello no será suficiente—, la dimensión sustantiva, también llamada sustancial, exige que todos los actos de poder —ya sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales— sean justos, esto es, que sean razonables o respetuosos de los derechos fundamentales, de los valores supremos y demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por consiguiente, el debido proceso sustantivo se traduce en una exigencia de razonabilidad de todo acto de poder. **3.5.** Sobre la **motivación de las resoluciones judiciales**, Roger Zavaleta Rodríguez[4] precisa que: Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. […] **3.6.** El Tribunal Constitucional, en el fundamento 2 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, ha puntualizado que: [El] derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, [...] deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, [...] el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. **3.7.** Así, se entiende que el deber de motivación de las resoluciones judiciales, que es regulado por el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el análisis que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley. En tal sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales siempre que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, y que la motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una suficiente justificación de lo que se decide u ordena. Así, se entiende que la motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 (inciso 6), 122 (inciso 3) del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y dicho deber implica que los juzgadores precisen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico al que esta los ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia. **CUARTO. Vulneración al debido proceso y**

derecho de defensa reconocidos en el numeral 3 y numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú En atención al marco glosado en los anteriores considerandos, tenemos que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al debido proceso, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación. Las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sub materia solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. **4.1.** Antes de emitir pronunciamiento respecto de la causal procesal, es necesario precisar que la recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho a defensa, pues los artículos 74 y 118 (numeral 20) de la Constitución Política del Perú no regulan la aplicación de la ultractividad benigna, que sí se establece y se regula en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas. Agrega que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ningún extremo del fallo contenido en el auto del veintiocho de junio de dos mil dieciocho estableció los supuestos de ultractividad benigna que se regulan en la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, que fueron dispuestos de manera unilateral y exclusiva por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur. Asimismo, considera que la argumentación expuesta en la sentencia de vista resulta deficiente, lo que también vulnera su derecho de defensa y al debido proceso. **4.2**. En ese propósito, habiéndose señalado en la causal propuesta un defecto de motivación que contendría la sentencia de vista, tenemos que la recurrida ha respetado el principio del debido proceso y motivación de las resoluciones, toda vez que, tras señalar lo que es materia de apelación, así como los agravios contenidos en el recurso de apelación, la Sala Superior, del cuarto al duodécimo considerando, expone un desarrollo lógico-jurídico vinculado a la pretensión, no sin antes trazar el marco legal relacionado a lo que es asunto de controversia. Además justifica las **premisas fácticas**, (consistente en que, en el caso sub judice, mediante el cuestionado acto administrativo, cuyo ejemplar obra de folios catorce a diecinueve como anexo de la demanda, el Tribunal Fiscal resolvió confirmar la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7100/2020-000295, emitida el trece de febrero de dos mil veinte por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, por la que se declaró infundado el recurso de reclamación contra la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7200/2019-001020, del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, que a su vez declaró improcedente la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso respecto de la aplicación de un gravamen arancelario adicional del 10% (sobretasa adicional) cancelado en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2018-10-445006) y las **premisas jurídicas** (artículo 144 de la Ley General de Aduanas; artículo 1 y única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR; artículo 74 y 118 (numeral 20) de la Constitución Política del Perú; artículos 4 y 91 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), que le han permitido llegar a la **conclusión** de que la regulación arancelaria establecida por el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR ha sido emitida conforme a la propia habilitación constitucional y al principio de reserva de la ley en materia tributario arancelaria, así como al principio de competencia normativa, esto es, en el ejercicio de la potestad tributaria y los principios constitucionales tributarios consagrados por la Carta Magna, acorde con lo dispuesto en sus artículos 74 y 118 (inciso 20); máxime si se tiene en cuenta que con el citado Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, publicado el seis de agosto del dos mil dieciocho y vigente a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, se da cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante el auto del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, emitido con motivo del segundo procedimiento sumario iniciado contra la República de Colombia por el desacato a la sentencia del catorce de abril del dos mil cinco recaída en el Proceso 118-AI-2003. Agrega la Sala Superior que, al evidenciarse que en la única disposición complementaria final de la norma en comento se han previsto solo dos supuestos de aplicación de la ultractividad benigna, y en el caso concreto la mercancía importada de Colombia con código 1701999000 (azúcar), consignada en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2018-10-445006, numerada el siete de noviembre del dos mil dieciocho, no se encuentra en ninguno de tales supuestos normativos, específicamente el primero en referencia, toda vez que su embarque fue realizado el once de octubre del dos mil dieciocho, es decir, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR —siete de agosto del dos mil dieciocho— dicha mercancía aún no había sido embarcada desde Colombia con destino al Perú; al evidenciarse ello, el gravamen arancelario adicional establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR debía aplicarse a la mercancía importada por la empresa ahora demandante. **4.3.** Ahora bien, en torno a la justificación externa de la decisión superior, este Tribunal Supremo considera que la justificación externa realizada por la Sala de alzada es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas precitadas en el punto anterior contienen proposiciones verdaderas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional; además de ser las correctas para resolver lo que ha sido materia de revisión, al haber absuelto el grado de acuerdo a los agravios que sustentaron la pretensión impugnatoria, de conformidad con la competencia funcional que le otorga el artículo 370 del Código Procesal Civil. En esa perspectiva, la sentencia recurrida explica y justifica las premisas factuales y jurídicas elegidas por el colegiado superior, cumpliendo así con la exigencia de logicidad en la justificación interna de la resolución examinada. Por tanto, no se cometieron las infracciones al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales. **4.4.** Respecto de lo expuesto por la recurrente en el sentido de que, en la sentencia de vista, el análisis se habría centrado en lo dispuesto en los artículos 74 y 118 (numeral 20) de la Constitución, para afirmar la aplicación del principio de competencia normativa; y, por ende, aplicar el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR en lugar de lo dispuesto en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas; plantea la recurrente que con ello se vulnera su derecho a defensa contemplado en el numeral 14[5] del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En torno a ello, la Sala Superior señala lo siguiente: **UNDECIMO.-** Que, en esta línea de análisis, se advierte que la regulación arancelaria establecida por el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR ha sido emitida conforme a la propia habilitación constitucional y al principio de reserva de la ley en materia tributario arancelaria, así como al principio de competencia normativa, esto es, en el ejercicio de la potestad tributaria y los principios constitucionales tributarios consagrados por nuestra Carta Magna, acorde con lo dispuesto en sus artículos 74° y 118° inciso 20; máxime, si se tiene en cuenta que a través del citado Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, publicado el 06 de agosto de 2018 vigente a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano", se da cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante el Auto del 28 de junio de 2018, emitido con motivo del Segundo Procedimiento Sumario iniciado contra la República de Colombia por el desacato a la Sentencia del 14 de abril de 2005 recaída en el Proceso 118-AI-2003, por el que se decide, en su apartado primero, "modificar la sanción vigente en contra de la República de Colombia y autorizar a los países miembros la imposición temporal de un gravamen arancelario adicional de hasta el diez por ciento (10%) a las importaciones de hasta diez (10) mercancías, identificadas cada una de ellas en una subpartida NANDINA (de ocho a diez dígitos del código numérico que corresponda), de libre elección -dentro de los productos listados en las Secciones II, III y IV del Capítulo II del Anexo de la Decisión 812 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina - NANDINA- originarias de Colombia. (…)" lo cual le confiere especial relevancia jurídica, por tratarse de la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente de su notificación y aplicable en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de homologación o exequátur, acorde con lo prescrito en el artículo 91° concordante con el artículo 4°, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; ergo, queda dilucidado lo relativo a la antinomia o conflicto normativo suscitado en el caso sub judice, resultando de aplicación lo preceptuado en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 003-2018- MINCETUR, en virtud del invocado principio de competencia normativa, deviniendo impertinente para tal propósito el principio de jerarquía normativa propuesto por la empresa demandante. **4.5.** Entonces, de lo desarrollado por la instancia de mérito, se evidencia que en su sentencia se ha justificado las razones por las cuales considera que el artículo 74 y el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú resultan aplicables al caso concreto, así como el principio de competencia normativa, concluyendo que el

Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR surgió como consecuencia del cumplimiento de una sanción establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contra la República de Colombia. De esa manera, lo expuesto por la recurrente no implica una afectación de su derecho a defensa, como lo propone, pues, ha podido interponer su demanda, presentar escritos correspondientes al ejercicio de su derecho, y ha podido también interponer recurso de casación en contra de la sentencia de vista que le fue adversa. Por lo tanto, se evidencia que en el presente proceso se ha respetado su derecho a la defensa. Asimismo, en cuanto a que el artículo 74[6] y el numeral 20[7] del artículo 118 de la Constitución Política del Perú no regularían la aplicación de la ultractividad benigna aduanera, al contrario de lo que establece el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, más bien observamos que los artículos de la Constitución mencionados se relacionan con las facultades del Presidente de la República para regular las tarifas arancelarias mediante decreto supremo. Esto es, resulta erróneo pretender que se analice un supuesto distinto a lo que regulan el artículo 74 y el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, para el caso de la ultractividad benigna aduanera, y que dichos dispositivos constitucionales constituyen la base para que se emita el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, y no la base para la aplicación de la ultractividad benigna en materia aduanera. **4.6.** Ahora bien, se aprecia también que en la sentencia de vista no se pretende desconocer los alcances del literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, sino, por el contrario, la decisión adoptada por la Sala de mérito surgió de analizar tanto el principio de competencia normativa con el principio de jerarquía, tal como aparece en el décimo cuarto considerando de la sentencia de vista recurrida: **DECIMO CUARTO.-** […] pues como se ha enfatizado, no correspondía en el caso concreto la aplicación del invocado supuesto de ultractividad benigna contenido en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, al responder- en la tesis de la defensa técnica de la empresa demandante- al principio de jerarquía normativa, sino más bien y precisamente lo previsto en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, cuya pertinencia se determina por el principio de competencia normativa, al tratarse de materia arancelaria. **4.7.** El hecho de que la parte recurrente no coincida con la conclusión a la que arriba la Sala Superior con base en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se expusieron, no significa que dicho colegiado haya incurrido en vulneración del principio del debido proceso y derecho de defensa de la parte recurrente. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que los argumentos expuestos también sustentan las causales de naturaleza material, serán analizados por esta Sala Suprema en los considerandos siguientes de esta ejecutoria suprema. **4.8.** Entonces, se tiene que la Sala Superior ha cumplido con exponer suficientemente las razones que sustentan la decisión adoptada, observando, cautelando y respetando el derecho al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales como el derecho de defensa, esto desde que la sentencia de la Sala de revisión cumple con exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos por los que confirma la sentencia impugnada. Así pues, por estas razones, las infracciones normativas de carácter procesal devienen **infundadas. 4.9.** Refuerza lo esgrimido considerar que la motivación como parte del debido proceso no exige el acogimiento a una determinada técnica argumentativa, sino la expresión de buenas razones, sustentos fácticos y jurídicos y la corrección lógico-formal del razonamiento judicial. Se observa que, en el caso que nos convoca, todos estos pasos, lineamientos y parámetros se han visto realizados en el texto de la sentencia de vista cuestionada, al guardar ella una coherencia lógica y congruente con las pretensiones incoadas en la demanda y responder a todos los agravios denunciados, por lo que se verifica que la sentencia de vista no vulnera su derecho al debido proceso ni derecho de defensa, como arguye la recurrente. **4.10.** Del mismo modo, cabe anotar que la causal procesal está reservada únicamente para vicios trascendentales en el proceso. En tal sentido, se evidencia que lo que en realidad pretende la parte recurrente es cuestionar el criterio empleado por la Sala Superior, y no en estricto vicios o defectos trascendentales de la resolución recurrida. Se debe tener presente que en casación no es permisible una nueva valoración de los hechos, como se pretende, aspecto generalmente ajeno al debate en sede extraordinaria si se atiende a las finalidades del recurso de casación previstas en el artículo 384 del Código Procesal Civil, delimitadas a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **QUINTO. Infracción normativa por inaplicación del principio de jerarquía normativa contenido en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú e inaplicación del literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas. 5.1.** Como se observa de los argumentos que justifican la causal que nos ocupa, la misma se encuentra dirigida a establecer que en la sentencia de vista se habría inaplicado una norma con rango de ley, como es el Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas, ello como consecuencia de no haberse aplicado el principio de jerarquía normativa. **5.2.** Cabe precisar que **inaplicar** una norma jurídica consiste en prescindir de la misma para resolver un caso en el que tenía vocación de ser aplicada; esto es, se resuelve el caso concreto sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El Tribunal Constitucional ha señalado sobre el particular en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00025-2010-PI/TC, del diecinueve de diciembre de dos mil once, que: 10. Con la expresión 'inaplicación' habitualmente se hace referencia a la acción de un operador jurídico consistente en 'no aplicar' una norma jurídica a un supuesto determinado. La base de este efecto negativo en el proceso de determinación de la norma aplicable puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre semejantes. Puede ser corolario de un problema de desuetudo -cuando este es tolerado en un ordenamiento jurídico en particular, que no es el caso peruano-; obedecer a una "vacatio legis"; constituir el efecto de la aplicación de ciertos criterios de solución de antinomias normativas […] o, entre otras variables, ser el resultado o efecto de una declaración de invalidez previa, esto es, de una constatación de ilegalidad/inconstitucionalidad, en caso se advierta la no conformidad de la norma controlada con otra de rango superior, o la afectación del principio de competencia como criterio de articulación de las fuentes en un sistema normativo. **5.3.** Ahora bien, para verificar si en el caso concreto se ha inaplicado el principio de jerarquía normativa contemplado en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, se debe describir lo que contiene la norma en comento. Así, tenemos: **Artículo 51.-** La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. **5.4.** Uno de los argumentos de la demandante consiste en establecer que el principio de competencia normativa señalado en la sentencia de vista no guarda relación con la ultractividad benigna; además, aduce que el Tribunal Fiscal en la resolución cuestionada en la demanda priorizó el principio de especialidad, ello al aplicar el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR sobre la Ley General de Aduanas. **5.5.** Estando a ello, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0047-2004-AI/TC, respecto del principio de jerarquía y del principio de competencia, señala: 59. De lo expuesto se colige que el principio de jerarquía es el único instrumento que permite garantizar la validez de las normas jurídicas categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la consecuencia necesaria de la infracción de tal principio. […] En efecto, para que una norma categorialmente superior cumpla su función, es vital que no pueda ser desvirtuada por aquella cuya producción regula. En resumen, el principio de jerarquía implica la determinación por una norma de la validez de otra, de allí que la categorialización o escalonamiento jerárquico se presente como el único modo posible de organizar eficazmente el poder normativo del Estado. […] 62. Dicho principio –principio de competencia- implica la relación existente entre normas de diferentes ordenamientos (internacional, nacional, regional, local). El principio de competencia afecta directamente el acto de producción de la norma, siendo este lo que lo diferencia del principio de jerarquía, el cual concierne directamente a la validez de la norma. En ese orden de ideas, las normas de competencia son aquellas que de modos diversos establecen "el ámbito de materia" sobre el que puede ejercerse una competencia normativa y que, en consecuencia, condicionan la validez de los actos normativos, y, derivadamente, la de las disposiciones o normas creadas por ellos. […] El principio de competencias otorga título habilitante para que un ordenamiento constitucional delimite extensión y alcances determinados. **5.6.** Entonces, para determinar si en el caso de autos correspondía aplicar el principio de jerarquía o el principio de competencia, respecto de lo regulado en el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR o el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, es necesario tener presente la parte considerativa del decreto supremo mencionado: Que, mediante Auto de fecha 5 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispuso: "Declarar que la República de Colombia continuó en desacato de la Sentencia del 14 de abril de 2005 dictada en el marco del Proceso 118-AI-2003 durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 y 31 de mayo de 2018, por lo que deberá adoptar las medidas

necesarias para hacer cesar el incumplimiento y abstenerse de emitir nuevas medidas restrictivas del comercio del arroz o de efecto equivalente, sin perjuicio del derecho de los afectados por el incumplimiento para que puedan perseguir en la vía interna colombiana la reparación de los daños y perjuicios que pudieran corresponder"; Que, en ese contexto, mediante Auto de fecha 28 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha autorizado a los Países Miembros a aplicar una sanción contra la República de Colombia por el desacato de la Sentencia del 14 de abril de 2005 consistente en la imposición temporal de un gravamen arancelario adicional de hasta 10% a las importaciones de hasta diez (10) mercancías, identificadas cada una de ellas en una subpartida NANDINA (de ocho a diez dígitos del código numérico que corresponda), de libre elección -dentro de los productos listados en las Secciones II, III y IV del Capítulo II del Anexo de la Decisión 812 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la CAN-, originarias de la República de Colombia. Conforme a lo referido por dicho Tribunal, el nivel máximo del arancel aplicado a terceros países sobre la base del principio de Nación Más Favorecida (NMF) no constituirá un límite para la aplicación de la medida autorizada. **5.7.** Ahora bien, es conveniente mencionar que el decreto supremo ya mencionado surgió como consecuencia de un pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del cual forman parte Perú y Colombia. Asimismo, el artículo 119 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Decisión 500 establece: **Artículo 119.- Sanciones** Si un País Miembro no acatare las obligaciones impuestas en la sentencia de incumplimiento, el Tribunal podrá sumariamente determinar cómo sanción, y conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 27 del Tratado, los límites dentro de los cuales el país reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso. Por su parte, el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina prescribe lo siguiente: **Artículo 27.-** Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el País Miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor de noventa días siguientes a su notificación. Si dicho País Miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de la Secretaría General, determinará los límites dentro de los cuales el país reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso. En todo caso, el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si la restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena agravare la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El Estatuto del Tribunal precisará las condiciones y límites del ejercicio de esta atribución. […] **5.8.** Por lo tanto, de lo descrito, se evidencia que la dación del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, en el extremo de la sanción (artículos 1, 2 y 3), tiene vinculación con los tratados internacionales suscritos por el Perú, como es el caso del Acuerdo de Cartagena - Acuerdo de Integración Subregional Andino[8], donde se crea la "Comunidad Andina", y con ello, al Tribunal de Justicia antes señalado. Por lo tanto, se desprende que estamos ante una norma con alcances determinados y temporales[9] y que, como se observa, fue el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el que autorizó al Gobierno del Perú imponer la sanción del incremento del 10% de los derechos arancelarios. **5.9** Asimismo, el artículo 144 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, señala que toda norma legal que aumente los derechos arancelarios no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los siguientes casos: **i)** que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el reglamento; **ii)** que se encuentren embarcadas con destino al país, antes de la entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el reglamento; **iii)** que se encuentren en zona primaria y no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero antes de la entrada en vigencia. **5.10** El referido artículo 144 de la Ley General de Aduanas, regula los límites temporales dentro de los cuales debe ocurrir la modificación legislativa que aumenta los derechos arancelarios, así como los supuestos fácticos que acreditan el inicio o el término de dichos límites temporales. Al respecto, se debe precisar que si bien la Ley General de Aduanas establece de forma general los supuestos para la aplicación de la figura de ultractividad benigna, en el caso concreto, la razón de la decisión se justifica en mandato expreso (norma especial y específica) para los casos en que se aumenten los derechos arancelarios, mandato contenido en la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, a consecuencia de una sanción que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina impuso a la República de Colombia. **5.11** Por consiguiente, esta Sala Suprema advierte que el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR es una norma específica que regula la aplicación de una sanción contra la República de Colombia por el desacato de la sentencia del catorce de abril de dos mil cinco. En tal sentido, no es posible aplicar el principio de jerarquía normativa con relación a lo previsto en la Ley General de Aduanas; por lo que los argumentos de la recurrente en este extremo relacionados con la vulneración del artículo 51 de la Constitución Política del Perú deben desestimarse y **se debe declarar infundada la infracción normativa propuesta en este extremo. 5.12.** Asimismo, se observa que la causal que nos ocupa se respalda en la Casación Nº 4017-2014[10], proceso en el cual se habría cuestionado la aplicación de un decreto supremo versus un decreto legislativo; sin embargo, lo resuelto en aquella casación no constituye precedente vinculante, por lo que no vincula a este proceso. En consecuencia, aquellos argumentos también deben desestimarse**. 5.13.** Por otro lado, la recurrente también considera que a su caso se debió aplicar el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, y no lo dispuesto en la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR por su aplicación temporal. **5.14.** Ahora bien, para determinar si la norma aludida resultaba aplicable al caso concreto, se debe tener presente que, la parte considerativa del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, tiene este contenido: […] mediante Auto de fecha 28 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha autorizado a los Países Miembros a aplicar una sanción contra la República de Colombia por el desacato de la Sentencia del 14 de abril de 2005 consistente en la imposición temporal de un gravamen arancelario adicional de hasta 10% a las importaciones de hasta diez (10) mercancías, identificadas cada una de ellas en una subpartida NANDINA (de ocho a diez dígitos del código numérico que corresponda), de libre elección -dentro de los productos listados en las Secciones II, III y IV del Capítulo II del Anexo de la Decisión 812 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la CAN-, originarias de la República de Colombia. Conforme a lo referido por dicho Tribunal, el nivel máximo del arancel aplicado a terceros países sobre la base del principio de Nación Más Favorecida (NMF) no constituirá un límite para la aplicación de la medida autorizada; […] **5.15.** Asimismo, cabe resaltar que el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, respecto a la vigencia de la norma, establece que: **Artículo 103.-** […] La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. […] **5.16.** Estando a ello, a efectos de emitir un pronunciamiento válido, es necesario describir lo que contiene cada una de las normas cuestionadas por la empresa demandante. Así, tenemos:

Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas	Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR
Publicado el veintisiete de junio de dos mil ocho	Publicado el seis de agosto de dos mil dieciocho
Artículo 144.- Aplicación especial Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios, no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los siguientes casos: a) Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el Reglamento	Única.- Mercancías embarcadas y en zona primaria Las mercancías listadas en el anexo del presente Decreto Supremo que a la fecha de entrada en vigencia del mismo hayan sido embarcadas desde la República de Colombia con destino a la República del Perú o se encuentren en zona primaria aduanera y no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero, no están sujetas a la sanción dispuesta en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

5.17. Por su parte, la sentencia de vista, en su duodécimo considerando, respecto de la aplicación de la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, sostiene que: **DUODÉCIMO.-** Que, a partir de tal premisa, incidiéndose en el asunto de fondo, es menester establecer si la mercancía importada por la empresa accionante se encuentra gravada o no con el gravamen arancelario adicional; sobre el particular, cabe considerar que si bien es cierto el artículo 1 del Decreto Supremo número 003-2018-MINCETUR dispone la ejecución de la sanción

autorizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Auto del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, consistente en la aplicación de un gravamen arancelario adicional del 10%, a diez (10) mercancías importadas por la República del Perú desde la República de Colombia, de acuerdo al Anexo que forma parte del mismo Decreto Supremo, no menos verdad es que en su Única Disposición Complementaria Final preceptúa que "las mercancías listadas en el anexo del presente Decreto Supremo que a la fecha de entrada en vigencia del mismo hayan sido embarcadas desde la República de Colombia con destino a la República del Perú o se encuentren en zona primaria aduanera y no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero, no están sujetas a la sanción dispuesta en el artículo 1 del presente Decreto Supremo", evidenciándose así que se han previsto sólo dos supuestos de aplicación de la ultractividad benigna, y en tal virtud, en el caso concreto, corresponde destacar que la mercancía importada de Colombia con código 1701999000 (azúcar), consignada en la Declaración Aduanera de Mercancías 118-2018-10-445006, numerada el siete de noviembre del dos mil dieciocho, no se encuentra en ninguno de tales supuestos normativos, específicamente el primero en referencia, toda vez que su embarque fue realizado el once de octubre del dos mil dieciocho, es decir, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo número 003-2018-MINCETUR – siete de agosto del dos mil dieciocho– dicha mercancía aún no había sido embarcada desde Colombia con destino al Perú; ergo, el gravamen arancelario adicional establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo número 003-2018-MINCETUR debía aplicarse a la mercancía importada por la empresa ahora demandante. […] **5.18.** Entonces, se puede establecer que la dación del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR ha respetado los artículos 74 y 118 (numeral 20) de la Constitución Política del Perú, concordantes con el artículo 55 de la misma norma, sobre la vigencia de los tratados, pues la misma se ha emitido para regular un supuesto determinado, surgido de un proceso sancionatorio a la República de Colombia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo tanto, estamos ante una norma de vigencia temporal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 144 del Decreto Legislativo Nº 1053. Es por ello que, en el caso concreto, la discusión debe resolverse atendiendo a lo previsto por el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, sobre la vigencia de la norma, pues atendiendo a los hechos que se cuestionan se determinará qué norma resulta aplicable a la empresa demandante. **5.19.** Sobre la vigencia de las normas tributarias, la norma X del título preliminar del Código Tributario señala lo siguiente: NORMA X: VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de este Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la Resolución de Superintendencia, de ser el caso. Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de aplicación general, deberán ser publicadas en el Diario Oficial. **5.20.** De dicho dispositivo, se aprecia que la regla establecida señala que las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigor y carecen de efectos retroactivos. De ese modo, al aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos de acuerdo al principio de aplicación inmediata. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha señalado que: "[…] nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes"[11]. **5.21.** Asimismo, la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el veintisiete de junio de dos mil ocho, vigente al momento de ocurridos los hechos del caso, ha regulado en el artículo 144 lo siguiente: Artículo 144.- Aplicación especial Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios, no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los siguientes casos: a) Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el Reglamento […] **5.22.** En concordancia con lo señalado con este último dispositivo, el artículo 208 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, prevé que no serán aplicables las normas legales que aumenten los derechos arancelarios a las mercancías que, entre otros, calcen en el siguiente supuesto: Artículo 208.- Aplicación especial No serán aplicables las normas legales que aumenten los derechos arancelarios a las mercancías, en los siguientes casos: a) Cuando **hayan sido adquiridas antes de la entrada en vigencia de la norma**, acreditándose tal situación mediante carta de crédito confirmada e irrevocable, orden de pago, giro, transferencia o cualquier otro documento, canalizado a través del Sistema Financiero Nacional que pruebe el pago o compromiso de pago correspondiente. Para tal efecto, el dueño o consignatario deberá presentar un documento emitido por la entidad financiera interviniente que confirme la fecha y monto de la operación; […]. [Énfasis agregado] **5.23.** Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, publicado el seis de agosto de dos mil dieciocho, entró en vigencia el siete de agosto de dos mil dieciocho. Dicho dispositivo normativo dispuso la ejecución de la sanción autorizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contra la República de Colombia. Así, mediante el artículo 1 de dicha norma se dispuso la ejecución de la sanción autorizada por el mencionado tribunal mediante auto del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, consistente en la aplicación de un gravamen arancelario adicional del 10% a diez (10) mercancías importadas por la República del Perú desde la República de Colombia, de acuerdo al anexo que forma parte del referido decreto supremo. **5.24.** Dentro del marco propuesto, el mencionado Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR ha precisado en su única disposición complementaria los siguientes supuestos de inaplicación del incremento de gravamen arancelario: Única. - Mercancías embarcadas y en zona primaria **Las mercancías listadas en el anexo del presente Decreto Supremo que a la fecha de entrada en vigencia del mismo** hayan sido embarcadas desde la República de Colombia con destino a la República del Perú o se encuentren en zona primaria aduanera y no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero, no están sujetas a la sanción dispuesta en el artículo 1 del presente Decreto Supremo. [Énfasis agregado] **5.25.** No obstante, dicha disposición no puede ser aplicada a las mercancías que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, esto conforme lo dispone el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, considerando la vigencia del referido decreto supremo. **5.26.** Con relación a las premisa fácticas establecidas en el proceso, se debe señalar que es un hecho que no ha sido negado por las entidades demandadas que, en el caso concreto, con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante la Carta de Crédito Confirmada e Irrevocable Nº 0850551110220187 de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, la empresa Interloom S. A. C. **adquirió** de su proveedor colombiano TOPPER TRADING CORPORATION, la mercancía consistente en azúcar refinada, clasificada en la subpartida nacional 1701.99.90.00; entonces, considerando lo regulado en el literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, el artículo 208[12] del Decreto Supremo Nº 010-2009-EF - Reglamento de la Ley General de Aduanas, en concordancia con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, cuando la empresa demandante **adquirió** la mercancía (azúcar) se encontraba vigente lo previsto en el literal a) del artículo 144 de la ley antes acotada; así, la empresa recurrente pretende una aplicación de la ultraactividad benigna, pero, de acuerdo a lo señalado, la demandante se encontraba protegida por lo regulado en el artículo 144; por lo tanto, considerando que el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR recién entró en vigencia el siete de agosto de dos mil ocho, esto es, un día después de la adquisición de la mercancía, no resultaba aplicable al caso de la empresa demandante. Por consiguiente, la presente infracción normativa debe declararse **fundada. SEXTO. Actuación en sede de instancia 6.1.** Habiéndose declarado fundada una infracción normativa de carácter material, corresponde actuar en sede de instancia. En atención a ello, como aparece de lo actuado, las entidades consideran que al caso que nos ocupa resulta de aplicación el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR y los presupuestos dados en su última disposición complementaria final, ello como consecuencia de que al momento en que se embarcó la mercancía ya se encontraba vigente el mencionado decreto supremo, sobre el incremento de los derechos arancelarios de productos provenientes de Colombia. Sin embargo, como se ha señalado en los considerandos precedentes, al momento en que se adquirió la mercancía, esto es, el seis de agosto de dos mil dieciocho, la empresa actora ya se encontraba protegida por los alcances del literal a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas y el literal a) del artículo 208 del reglamento de esta ley. De esa manera, a la demandante no le

resulta aplicable el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR. **6.2.** En ese sentido, se debe tener en cuenta que las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigor y carecen de efectos retroactivos. Esto significa que para aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas desde su vigencia para los hechos acaecidos dentro de su marco de temporalidad. Conforme a ello, en el caso concreto, la adquisición efectiva de las mercancías (realizada el seis de agosto de dos mil dieciocho) por parte de Interloom S. A. C. se realizó antes de la entrada en vigencia del gravamen arancelario adicional del 10% previsto en el Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR (vigente desde el siete de agosto de dos mil dieciocho). Por lo tanto, ha quedado acreditado plenamente que corresponde la aplicación del marco legal vigente hasta antes de la entrada en vigor del referido decreto supremo, por lo cual resultaba de aplicación lo dispuesto por el inciso a) del artículo 144 de la Ley General de Aduanas, en concordancia con el artículo 208 del Decreto Supremo Nº 010-2009-EF. En dicho contexto, no resulta aplicable al presente caso la única disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR, vigente desde el siete de agosto de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a la adquisición de las mercancías cuestionadas. **6.3.** Por lo tanto, se debe casar la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia, que a su vez declaró infundada la demanda interpuesta; y, actuando en sede de instancia, corresponde revocar la referida sentencia apelada, emitida mediante la resolución número nueve, del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y, reformándola, declarar fundada la demanda; de ese modo, devienen nulas la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06171-A-2021, la Resolución Jefatural de División Nº 1183D7100/2020-000295 y la Resolución Jefatural de División Nº 118 3D7200/2019-001020, relacionadas a la improcedencia de la solicitud de devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente. Asimismo, debe ordenarse a la administración aduanera que ampare la solicitud de devolución de pago indebido presentada por la demandante, por el monto de US$ 19,775.00 (diecinueve mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos) más los intereses correspondientes, por lo fundamentos expuestos en la presente ejecutoria. **III. DECISIÓN** Por tales consideraciones, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Interloom Sociedad Anónima Cerrada**, mediante escrito del trece de diciembre de dos mil veintidós (fojas seiscientos trece a seiscientos cincuenta y ocho). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas quinientos noventa y tres a seiscientos seis), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **actuando en sede de instancia**, **REVOCARON** la sentencia apelada emitida mediante la resolución número nueve, del dieciséis de agosto de dos mil veintidós (fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos noventa y dos), emitida por el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte, que declaró infundada la demanda, y **REFORMÁNDOLA, DECLARARON fundada la demanda**; en consecuencia, **DECLARARON NULA** la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06171-A-2021 y, accesoriamente a ella, las Resoluciones Jefaturales de División Nº 1183D7100/2020-000295 y Nº 118 3D7200/2019-001020. Asimismo, **ORDENARON** a la administración aduanera que ampare la solicitud de devolución de pago indebido presentada por la demandante el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve por el monto de US$ 19,775.00 (diecinueve mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos), más los intereses correspondientes. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por Interloom Sociedad Anónima Cerrada contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, **TOVAR BUENDÍA.**

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 HITTERS, Juan Carlos (2002). Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición, Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. (2014). La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica. Lima, Editora y Librería Jurídica Grijley; pp. 207-208.

5 **Constitución Política del Perú**
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

6 **Constitución Política del Perú**
Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. […]

7 **Constitución Política del Perú**
Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
[…]
20. Regular las tarifas arancelarias.

8 Del veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

9 De acuerdo al artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2022-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el quince de noviembre de dos mil veintidós, se suspendió la ejecución de la sanción dispuesta con Decreto Supremo Nº 003-2018-MINCETUR y autorizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

10 Dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

11 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0606-2004-AA/TC, del veintiocho de junio de dos mil cuatro; fundamento 2.

12 **Decreto Supremo Nº 010-2009-EF - Reglamento de la Ley General de Aduanas**
Artículo 208.- Aplicación especial
No serán aplicables las normas legales que aumenten los derechos arancelarios a las mercancías, en los siguientes casos:
a) **Cuando hayan sido adquiridas antes de la entrada en vigencia de la norma, acreditándose tal situación mediante carta de crédito confirmada e irrevocable**, orden de pago, giro, transferencia o cualquier otro documento, canalizado a través del Sistema Financiero Nacional que pruebe el pago o compromiso de pago correspondiente. Para tal efecto, el dueño o consignatario deberá presentar un documento emitido por la entidad financiera interviniente que confirme la fecha y monto de la operación; […]. [Énfasis agregado]

C-2245460-14

CASACIÓN Nº 26485-2023 LIMA

Lima, veintitrés de octubre de dos mil veintitrés

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante **Beagle Agentes de Aduana S.A.** del once de julio de dos mil veintitrés (folios 2361 - 2383 del Expediente Judicial Electrónico[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintisiete, del veintisiete de junio de dos mil veintitrés (folios 2333 - 2351), emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número dieciocho, del ocho de marzo de dos mil veintitrés (folios 1860 - 1875), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **SEGUNDO:** Preliminarmente, se debe mencionar que las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general". Es decir, debe primar la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que precisa que el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la administración pública, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concordado con el inciso 1 del artículo 2 de la citada ley, que dispone que, en caso de defecto o deficiencia de una ley, el juez debe aplicar los principios del derecho administrativo y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa, como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos procedimientos administrativos, incluidos los especiales. En ese orden de ideas, se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza, tomando en cuenta que tiene

características propias -diferentes a otras instituciones procesales-, como son los sujetos procesales: la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes; la naturaleza de las actuaciones impugnables; las particularidades procesales, como son los requisitos de admisibilidad y procedencia; la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar; la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia o antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, y debe prevalecer la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y en específico, de la reciente modificación que ha sufrido por la Ley Nº 31591[2], publicada en el diario oficial El Peruano el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que introdujo, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones respecto del recurso de casación, debemos evaluar si estas son compatibles con la naturaleza del proceso contencioso administrativo, conforme lo señala la primera disposición complementaria final del mencionado código procesal. De este modo, luego del análisis correspondiente, este colegiado supremo, con base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, y en específico, de los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, introducidas por la Ley Nº 31591 que pueden ser tomadas en forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo son el inciso 1[3] y el literal c) del inciso 2[4] del artículo 386[5], así como los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del mismo código[6]. Asimismo, precisamos que los requisitos de admisibilidad omitidos –literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386[7] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591–, no serán de aplicación por restringir derechos de las partes en este tipo de procesos, y por generar un gran impacto en el interés público (tanto de los administrados y como del estado). **TERCERO:** El recurso objeto de análisis cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 386 y 391 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso[8], y ello en tanto el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio[9]; **ii)** el recurso de casación se indica separadamente cada causal invocada y cita concretamente los preceptos legales que se considera erróneamente aplicados o inobservados; se precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustentan su pretensión y se expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende[10]; **iii)** se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada[11]; **iv)** fue interpuesto dentro del plazo de diez (10) días de notificada a los recurrentes con la resolución impugnada[12]; y **v)** en cuanto a la tasa respectiva[13], adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de casación (folio 2384). **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que: **(i)** el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o las razones por las cuales se habría producido el apartamiento inmotivado del precedente judicial; **(ii)** recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de "transferir la queja expresiva de los agravios" y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, "por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse" y porque su estudio "se limita a la existencia del vicio denunciado"; **(iii)** la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye tercera instancia judicial. No es posible revaloración probatoria en sede casatoria; **(iv)** cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho, es decir, lo que se examina es saber si en ella existe argumentación racional conforme al ordenamiento jurídico; **(v)** tales infracciones deben describirse con claridad y precisión, debiéndose señalar que cuando la ley indica que se debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que menciona; y **(vi)** lo que debe discutirse en casación son las razones esenciales que fueron el soporte de la sentencia que se impugna; las motivaciones accesorias resultan intrascendentes en torno a la calificación del recurso. **QUINTO:** En cuanto a la declaración de improcedencia, en el artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, el legislador señala que: 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos. **SEXTO:** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, se verifica que la sentencia de vista materia de impugnación es pasible de ser recurrida vía casación; y con relación al literal c) del inciso 1 del artículo 393 del mismo cuerpo legal, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con impugnar la resolución de primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifica del escrito de apelación (folios 1881 - 1930). **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia como causales casatorias las siguientes: **a) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado por vulneración de la garantía del debido proceso y del derecho a probar** Sostiene que la Sala Superior ha vulnerado el derecho a probar al no haber admitido ni valorado los medios probatorios extemporáneos; alega que las Resoluciones de Requerimiento ofrecidas como pruebas extemporáneas en el recurso de apelación, debieron ser admitidas por la Sala Superior y puestas en conocimiento de las demandadas puesto que sí se referían a hechos nuevos, en tanto, se trata de Resoluciones (Resultados de Requerimiento) emitidos por la propia Sunat, en casos similares al que es materia de esta causa (y que por lo tanto se encuentran relacionados a ella, específicamente a la existencia y reconocimiento por parte de la propia Sunat de la duplicidad de criterio respecto a la clasificación de los Cigarritos Pall Mall en la Subpartida 2402.10.00.00), y que fueron expedidos con posterioridad, no solo al inicio de esta causa, sino incluso con posterioridad a la etapa postulatoria. **b) Infracción normativa por indebida aplicación del numeral 5, literal b del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativa N°1053** Señala que la Sala Superior incurrió en una indebida aplicación de la norma citada, porque no ha tomado en consideración que antes de realizar dicha importación, la empresa importadora de dicho producto (British American Tobacco del Perú) sometió a decisión de la propia Sunat la subpartida arancelaria en la que debía consignarse dicha mercancía. Sin embargo, la División de Importaciones de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, mediante Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001000 de fecha 14 de diciembre de 2018, señaló que se habría configurado una incorrecta asignación de la subpartida arancelaria y dispuso la modificación de la subpartida declarada a la subpartida de Cigarrillos – SPN 2402.20.20.00. Alega que la recurrente actuó sobre la base de la Resolución de División Nº 000-395200-2016-000569, que determinó que los "Cigarritos Pall Mall" correspondía clasificarlos en la subpartida 2402.10.00.00, agrega que la sanción que fue impuesta es ilegal, dado que a quien correspondía modificar la clasificación ya establecida era a la División de Clasificación Arancelaria y no a la de Importaciones. **c) Infracción normativa por inaplicación del numeral 2 del artículo 170 del Texto Único**

Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF El recurrente alega que de acuerdo a la Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001000 de fecha 14 de diciembre de 2018, la Administración Aduanera estableció que el producto que estaba importando le correspondía ser clasificado en la subpartida 2402.20.20.00., resultando ilegal (porque la modificación de la clasificación correspondía dictarla a la División de Clasificación Arancelaria) y siendo que se contraponía al criterio uniforme que había tenido la Aduana respecto a otras importaciones del mismo producto realizadas por la Agencia de Aduanas TLI, en las que se consignó la misma subpartida arancelaria que consignó la recurrente, es decir 2402.10.00.00 sin que mereciera observación y menos sanción por parte de Aduanas. Añade que se encuentra frente a la denominada "Dualidad de Criterio" al pronunciarse la Aduana de manera dispar sobre la subpartida en la que correspondía consignar al producto "Cigarritos Pall Mall". Agrega que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07957-A-2015 que tiene de carácter de precedente de observancia obligatoria, ha establecido que no procede imponer sanción al administrado, por consignar una subpartida arancelaria distinta, en aquellos casos en que haya reconocido, con anterioridad, que al mismo producto le correspondía una subpartida arancelaria distinta; en consecuencia el recurrente señala que no le correspondía la sanción impuesta pues tal como acreditó desde el procedimiento administrativo mismo, la Aduana aceptó en tres DAM de importaciones distintas, sometidas a canal rojo y naranja, que a los Cigarritos / Puritos le correspondía la subpartida arancelaria 2402.10.00.00. **d) Infracción normativa por inaplicación del artículo VI numeral 2 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y del artículo 257 numeral 1 e de la misma ley** Sostiene que la Administración Aduanera fue quien indujo a error a la recurrente, a través de sus actos propios, cuando determinó con anterioridad a las importaciones del producto Cigarritos Pall Mall que a éstos le correspondía la subpartida arancelaria 2402.10.00.00. Agrega que, al haber la Aduana establecido un segundo criterio de clasificación, no correspondía que se aplicara sanción alguna, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 257 de la norma acotada, el error al que fue llevada la recurrente constituye una eximente de responsabilidad. **OCTAVO:** Respecto de la infracción normativa señalada **en el literal a) del sétimo considerando**, si bien la recurrente denuncia la vulneración al debido proceso por una supuesta afectación al derecho a probar, su fundamentación no especifica cuales serían los vicios sustanciales en que habrían incurrido la resolución objeto del recurso; puesto que, únicamente se ha limitado a exponer en este punto de su recurso una serie de cuestionamientos de fondo con el propósito de demostrar que la interpretación efectuada por las instancias de mérito para la valoración de los medios probatorios es contraria a derecho, pero sin describir específicamente cómo así los argumentos expuestos por la Sala de mérito en este extremo infringen las reglas lógicas de la correcta argumentación. Sin perjuicio de ello, este Colegiado de la revisión minuciosa del contenido de la sentencia impugnada advierte las razones fácticas y jurídicas que lo llevó a determinar lo resuelto en la impugnada conforme se puede apreciar del considerando décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de la impugnada; es más, los fundamentos del recurso de casación han sido expuestos como si se tratara de un recurso de apelación, circunstancia que no se subsume en la causal invocada, pues si bien señala que habría una vulneración al debido proceso, la recurrente no ha señalado un nuevo fundamento a los señalados en su recurso de apelación, siendo así se enfatiza que esta Sala Suprema no es una tercera instancia. Además, esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, ha sostenido que vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación. En ese sentido, esta Sala Suprema observa que la recurrente no cumple con describir bajo qué nuevo fundamento se sustenta la infracción normativa que invoca. En ese sentido, la causal invocada deviene **improcedente**, conforme a lo establecido en el literal a del numeral 2 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591. **NOVENO:** En cuanto a las causales materiales contenidas en **los literales b), c) y d) del considerando sétimo**, corresponde resaltar que en casación el control es del derecho objetivo y no de las actuaciones de la entidad tributaria demandada, agregando que cuando se recurre a un recurso técnico como es el de casación, resulta imperativo el cumplimiento de las exigencias de procedencia, por lo que no se trata de efectuar alegaciones ni cuestionamientos, sino en esencia de desarrollar jurídicamente las infracciones que hubiere incurrido la sentencia impugnada, precisando en qué extremos y bajo qué razonamientos, se habrían configurado las infracciones, y no pretender como en este caso, sustentar el recurso en sus discrepancias con la recurrida. La recurrente pretende rebatir aspectos sin orientarse a un adecuado desarrollo con claridad y precisión que configuren la infracción normativa denunciada, explicando el o los silogismos jurídicos de la recurrida en los cuales, las normas que aportan a la solución del caso controvertido, correspondan a las que denuncia. Bajo dicho escenario, se colige que las infracciones normativas analizadas carecen de fundamentación suficiente y que, además, no se condice con los diversos pronunciamientos emitidos por esta Sala Suprema, motivo por el cual, devienen **improcedentes**. **DÉCIMO:** Del mismo modo, cabe resaltar lo señalado en la Sentencia Nº 00802-2020-PA/TC de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fundamento jurídico 19 que establece: Ahora bien, corresponde dejar establecido que la casación, aun cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. **Y es extraordinario porque su viabilidad se encuentra circunscrita solo a determinadas resoluciones judiciales y por específicas causales legalmente preestablecidas, y porque en su formulación deben satisfacerse requisitos de forma que, en contraste con los recursos ordinarios**, resultan ser altamente especializados, de modo tal que impone como carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso. […]. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Beagle Agentes de Aduana S.A.** del once de julio de dos mil veintitrés (folios 2361 - 2383 del Expediente Judicial Electrónico), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintisiete, del veintisiete de junio de dos mil veintitrés (folios 2333 - 2351); **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por Beagle Agentes de Aduana S.A. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y **el Tribunal Fiscal, sobre** acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Juez Supremo Delgado Aybar. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, **DELGADO AYBAR,** CORANTE MORALES.

---

1 Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

3 1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso.

4 2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que:
[…] c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio.

5 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

6 **Código Procesal Civil**
Artículo 391.Interposición y admisión
1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. El recurso se interpone:
a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.
b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda.
c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.
4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.
[…].
6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

7 **Artículo 386.Procedencia**

a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;
b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia.

8 Inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.
9 Literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.
10 Inciso 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.
11 Literal a) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.
12 Literal b) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.
13 Literal c) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

C-2245460-15

CASACIÓN Nº 51562-2022 LIMA

TEMA: CRÉDITO TRIBUTARIO POR REINVERSIÓN EN EDUCACIÓN
SUMILLA: El crédito por reinversión en educación fue derogado por la Ley Nº 29766, publicada el veintitrés de julio de dos mil once, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, la cual dispone la caducidad de dicha exoneración, la misma que debe entenderse que opera desde el ejercicio dos mil doce, de acuerdo a la interpretación establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente Nº 02053-2013 PA/TC.
PALABRAS CLAVE: beneficio tributario, crédito por reinversión en educación, impuesto a la renta.

Lima, veintidós de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **OBJETO DEL RECURSO** Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos **i)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal**, mediante escrito del veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos dieciséis a tres mil seiscientos treinta y seis del expediente judicial electrónico - EJE[1]); y **ii)** por la **Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos ochenta a tres mil setecientos trece), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos a tres mil seiscientos diez), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **revoca** la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número diez, del veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas tres mil cuatrocientos noventa y cuatro a tres mil quinientos cuatro), que declaró infundada la demanda; y, **reformándola**, **declara** fundada la demanda. **Antecedentes del recurso** De la demanda La parte demandante, **John von Neumann Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada**, interpone demanda contencioso administrativa mediante escrito presentado el primero de julio de dos mil veintiuno (fojas tres a cincuenta) y subsanado mediante escrito del veinte de julio de dos mil veintiuno (fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y cuatro). Postuló las siguientes pretensiones: **- Pretensión principal:** Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02681-8-2021, que confirma la Resolución de Intendencia Nº 025-014-0025233/SUNAT, en cuanto al reparo por desconocimiento del crédito por reinversión en la educación. - **Primera Pretensión accesoria:** Solicita se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 025-014-0025233/SUNAT. - **Segunda pretensión accesoria:** Se declare la nulidad de la Resolución de Determinación Nº 112-003-0014850 y de la Resolución de Multa Nº 112-002- 0010210. - **Tercera pretensión accesoria**: Se ordene a las entidades demandadas disponer la adopción de todas las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de sus derechos, reconociéndose, en consecuencia: **i)** la nulidad de pleno derecho de cualquier acto administrativo emitido o por emitirse por parte de la administración, en el que pretenda desconocer la validez del crédito por reinversión en la educación correspondiente al ejercicio dos mil catorce; y **ii)** se ordene a las entidades demandadas a que procedan a la devolución de las cantidades pagadas que tengan origen en el desconocimiento del crédito por reinversión en educación correspondiente al ejercicio dos mil catorce, incluyendo los intereses moratorios calculados aplicando la tasa de interés moratorio - TIM a que se refiere el artículo 38 (inciso a) del Código Tributario, toda vez que los pagos se han efectuado mediando un documento emitido por la administración tributaria, puesto que los pagos se han efectuado mediante amenaza de embargo, según Resolución de Ejecución Coactiva Nº 021-006-0222982, del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, efectuados mediante las Boletas de Pago 1662 Nº 971701786 y Nº 971701787, con las que se efectúa la cancelación total de la Resolución de Determinación Nº 112-003-0014850 y de la Resolución de Multa Nº 112-002-0010210. Como fundamento de la demanda, señala lo siguiente: **a)** La resolución impugnada sustenta el reparo únicamente respecto de la vigencia de las normas que regularon el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882 sobre crédito por reinversión en la educación, sin tener en cuenta que las normas que lo rigieron fueron derogadas expresamente recién a partir del ejercicio dos mil diecisiete, con la dación de la Ley Nº 30512, publicada el dos de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que las normas que regularon el crédito por reinversión aplicable a los institutos y escuelas de educación superior rigieron hasta el ejercicio dos mil dieciséis. **b)** Agrega que las normas tributarias que derogan beneficios tributarios no tienen fuerza ni efectos retroactivos, por lo que el primer párrafo de la Ley Nº 29766 es inaplicable al presente caso por contravenir la Constitución Política del Perú. **c)** Agrega que la administración pretende desconocer los actos administrativos en los que se aprobó de manera automática la ejecución de los programas de reinversión; y que la interpretación constitucional de la ley debió ser respetada y aplicada por la SUNAT. Sin embargo, la administración optó arbitrariamente y sin justificación alguna por una interpretación distinta que la del Tribunal Constitucional, ignorando plenamente su deber de respetar la Constitución. **d)** Finalmente, sostiene que la Ley Nº 29766 no busca precisar el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, sino que su finalidad es derogar un determinado beneficio tributario de manera retroactiva, pues la ley fue publicada el veintitrés de julio de dos mil once, por lo cual resulta inaplicable al presente caso por ser inconstitucional. **Sentencia de primera instancia** El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número diez, del veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas tres mil cuatrocientos noventa y cuatro a tres mil quinientos cuatro), declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Como fundamento de la sentencia de primera instancia, señala lo siguiente: **a)** La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, aprobada por Decreto Legislativo Nº 882, estableció condiciones y garantías para la promoción de la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo, ampliar la oferta y la cobertura. Asimismo, en su artículo 13 estableció que, cuando las instituciones educativas particulares, entre ellas las universidades, reinvirtieran total o parcialmente su renta en sí mismas o en otras, constituidas en el país, tenían derecho a un crédito tributario equivalente al 30% del monto reinvertido. De acuerdo con lo establecido en la quinta disposición final del precitado decreto legislativo, se tiene que el crédito por reinversión en educación entró en vigencia el primero de enero de mil novecientos noventa y siete; y estuvo en vigor hasta el periodo dos mil ocho, ello de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1087, que aprueba normas en educación para el mejor aprovechamiento de los acuerdos de promoción comercial, publicado el veintiocho de junio de dos mil ocho. **b)** La Ley que Precisa el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 - Ley Nº 29766, publicada el veintitrés de julio de dos mil once, en su artículo único "precisó" que el citado beneficio tributario caducó a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1087, es decir, el veintinueve de junio de dos mil ocho. **c)** Señala que, conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, la ley es obligatoria desde el día siguiente de su población en el diario oficial y se debió tener en consideración que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, se infiere válidamente que el crédito por reinversión en educación se encontró vigente hasta el año dos mil once y por ende hasta el cierre de tal ejercicio, por disposición expresa de la ley, máxime tratándose de un tributo de periodicidad anual, como es el impuesto a la renta, que rige desde el siguiente año calendario, en virtud de la norma X del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. **Sentencia de vista** Conocida la causa en segunda instancia, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con

Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte, mediante la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos a tres mil seiscientos diez), resolvió lo siguiente: REVOCARON la sentencia emitida mediante Resolución Nº 10 del 27 de julio de 2022, de folios 3494 a 3504, que declara infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia, nulas parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02681-8-2021, la Resolución de Intendencia Nº 025-014-0025233/SUNAT, la Resolución de Determinación Nº 112-003-0014850 y la Resolución de Multa Nº 112-002-0010210 en el extremo referido al reparo por desconocimiento del crédito por reinversión en la educación, así como, la nulidad de los actos administrativos emitidos o por emitirse por parte de la Administración en virtud a la RTF Nº 02681-8-2021; ORDENARON a la Administración Tributaria la devolución de lo abonado respecto al crédito por reinversión en la educación correspondiente al ejercicio 2014, previa verificación de los pagos que se hubiesen efectuados. Como fundamentos, la Sala Superior señaló lo siguiente: **a)** El crédito por reinversión en educación fue aprobado por el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882, del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que el colegiado considera pertinente evaluar si existe algún dispositivo normativo que hubiese derogado el referido beneficio tributario. En dicho contexto, resalta que las disposiciones de naturaleza tributaria no pueden ser derogadas de forma tácita, toda vez que la norma VI del título preliminar del Código Tributario establece que la derogación debe operar en virtud de una declaración expresa, mediante una norma del mismo rango o jerarquía superior. **b)** El Decreto Legislativo Nº 882 fue expresamente derogado por la décimo tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 30512 - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, publicada el dos de noviembre de dos mil dieciséis. Siendo ello así, se colige que el crédito por reinversión en educación se encontró vigente al cierre del ejercicio dos mil dieciséis, toda vez que las normas que establecen disposiciones vinculadas a la determinación del impuesto a la renta tienen periodicidad anual. Precisa que, de conformidad con los artículos 74 y 109 de la Constitución, y con lo dispuesto en la norma VI del título preliminar del Código Tributario, se desprende que la accionante se encontraba expedita para aplicar el crédito por reinversión en educación en la determinación de su impuesto a la renta correspondiente al ejercicio dos mil catorce, toda vez que el beneficio aprobado por el Decreto Legislativo Nº 882 resultaba aplicable hasta el ejercicio dos mil dieciséis inclusive, en atención a que dicho régimen fue expresamente derogado a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30512, publicada el dos de noviembre del dos mil dieciséis. **Del recurso de casación y el auto calificatorio** Mediante auto calificatorio del diez de abril de dos mil veintitrés, esta Sala Suprema declaró procedentes los recursos de casación interpuestos por las siguientes causales[2]: **Tribunal Fiscal a) Infracción normativa por interpretación errónea de la Ley Nº 29766 y la única disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30220 - Ley universitaria.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior interpreta erróneamente dichos dispositivos normativos pues dichas normativas dispusieron la caducidad del beneficio del crédito tributario por reinversión en educación a que se refería el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882, es decir, dicho beneficio no se encontraba vigente en para el periodo 2014, pues sólo tuvo vigencia hasta el ejercicio 2011. Asimismo, la Sala Superior no ha tenido en cuenta que, el precitado Decreto Legislativo Nº 882, no sólo ha regulado el beneficio tributario del crédito de reinversión en educación, sino también ha contemplado normas de carácter general que rigen las relaciones de las personas naturales y jurídicas propietarias de una institución educativa particular para con el Estado. Entonces se tiene que, cuando la Ley Nº 29766 dispone declarar la caducidad del referido beneficio tributario delimitando su periodo de vigencia, ello no incluyó a la totalidad de disposiciones que conformaban el precitado Decreto Legislativo Nº 882, pues expresamente dicha Ley solo se refiere al beneficio tributario. Por tanto, cuando en la Ley Nº 30220 se dispone dejar sin efecto el Decreto Legislativo Nº 882, ello se entiende en relación a aquellas disposiciones que no están relacionadas con el crédito tributario por reinversión en educación, dado que, cuando se emitió la Ley Nº 29766 se dispuso mediante declaración expresa la caducidad de dicho beneficio tributario, según arguye el casacionista. **b) Infracción normativa por inaplicación de la norma VI del título preliminar del Código Tributario.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior ha inaplicado la citada Norma VI del Título Preliminar del Código Tributario, por cuanto según se advierte de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Universitaria – Ley Nº 30220, dicha norma no contiene una declaración expresa de derogación del beneficio tributario de reinversión en educación establecido en el Decreto Legislativo Nº 882, siendo que dicho beneficio tributario ya no estuvo vigente desde la emisión de la Ley Nº 29766, que si contiene una declaración expresa de caducidad de dicho beneficio tributario. **c) Infracción normativa por vulneración a los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como del articulo VII del título preliminar del Código Procesal Civil al haberse vulnerado su derecho a obtener una decisión debidamente motivada.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior no ha motivado debidamente la misma, dado que no ha tenido en cuenta que la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria en su artículo único derogatorio no dejó sin efecto de forma expresa el beneficio tributario de reinversión en educación a partir del dos mil quince, siendo que la Sala Superior no ha tenido en cuenta lo señalado en los escritos presentados por la parte recurrente, así como los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2681-8-2018, dado que la citada Ley Universitaria se limitó a dejar sin efecto el Decreto Legislativo Nº 882 en lo que se refiere al ámbito universitario, y ello es así, porque lo referido al beneficio tributario de reinversión en educación, ya había sido derogado en forma expresa por la Ley Nº 29766, por lo que dicho beneficio solo tuvo vigencia hasta el ejercicio dos mil once y no en el ejercicio dos mil catorce como se sostiene en la sentencia de vista. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria **a) Infracción Normativa por vulneración al artículo 74 y las normas III y VII del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario e interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 y, en consecuencia, de la Ley Nº 29766 respecto del crédito tributario por reinversión a que se refería el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882.** La parte recurrente refiere que, el juez no puede atribuir a la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario un contenido que no se desprende directamente del texto literal (palabras) que emplea el dispositivo que es objeto de análisis. De esta manera, señala la casacionista que, forzoso es concluir que la sentencia de segunda instancia ha incurrido en otra infracción que consiste en la interpretación errónea de la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, llegando al extremo de modificar este dispositivo legal. Asimismo, arguye que, el Decreto Legislativo Nº 1087 no prorroga por sí mismo el beneficio establecido en el Decreto Legislativo Nº 882, sino que permite que a través de otra norma se prorrogue por más de una sola vez, y solo para el caso de las Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos Privados en las áreas económicas-productivas de agroindustria, metalmecánica, gas, energía, minería, pesquería y artesanía, no así para el caso de la universidades privadas con fines de lucro (como el caso de la codemandada), las cuales gozaron del beneficio tributario solo hasta el ejercicio mil novecientos noventa y nueve, no habiéndose emitido alguna norma que lo prorrogue de manera expresa. **b) Infracción Normativa por vulneración al derecho a una motivación adecuada.** La parte recurrente refiere que la Sala Superior debió analizar y aplicar las normas legales y jurisprudenciales aplicables al caso, y no basarse en una simple mención de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional para fundamentar la ampliación del plazo de vigencia de un beneficio tributario, además de omitir responder a los argumentos que expuso como parte de su defensa. Asimismo, arguye que, la Sala Superior debió motivar adecuadamente su decisión, efectuando la identificación plena de los elementos que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional que alude la misma Sala Superior, a efectos de identificar el contenido de una norma interpretativa, y recién a partir de ello, proceder a afirmar lo que concluye. Agrega que, vulnera los principios de legalidad y reserva de ley; puesto que se otorgó un beneficio tributario mediante una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y no mediante una ley. Asimismo, no pueden ser consideradas ambas como doctrina jurisprudencial vinculante, toda vez que el mismo Tribunal Constitucional no le ha dado tal condición, según expone la parte recurrente. CONSIDERANDO: **Primero:** Contextualizado el caso, resulta pertinente hacer algunos apuntes sobre el recurso extraordinario de casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. **1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego

examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo en lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial. La corte de casación efectúa el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[3], y revisa si los casos particulares resolvieron de acuerdo a la normatividad jurídica. Así, corresponde a los jueces de casación cuidar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[4], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **Segundo: Análisis de las causales casatorias de naturaleza procesal** Tribunal Fiscal - Infracción normativa por vulneración a los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil al haberse vulnerado su derecho a obtener una decisión debidamente motivada SUNAT - Infracción normativa por vulneración del derecho a una motivación adecuada **2.1. Sobre el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional**. El derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional ha sido objeto de interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política del Estado), la cual ha establecido: […] en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de las normas contrarias a su objeto y fin […].[5] **2.2.** En ese sentido, cabe señalar: […] que las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención, también conocidas como garantías procesales, este Tribunal ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho […], es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo la consideración judicial […]. [6] Asimismo, se precisa que las garantías procesales mínimas deben observarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las partes. Resulta necesario manifestar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que: es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas […]. [7] **2.3.** El numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado consagra como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en este, las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración. Del mismo modo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los lineamientos del debido proceso legal, que se refiere al "[…] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos […]"[8]. **2.4.** El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha precisado el Tribunal Constitucional, es un derecho continente, pues comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. El referido tribunal señala que: El derecho al debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación, etc. En las de carácter sustantiva o, estas están básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A través de esto último, se garantiza el derecho que tienen las partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas. [9] **2.5. Sobre el derecho fundamental a la motivación** El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución. También encuentra amparo en los tratados internacionales sobre derechos humanos y está incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fundamental es uno de los derechos que conforman el derecho fundamental al debido proceso, el cual se encuentra, a su vez, reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. **2.6.** Además, resulta pertinente señalar que, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, y tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez legal. **2.7.** Así también, el derecho al debido proceso comprende a su vez, entre otros derechos, el de **motivación de las resoluciones judiciales,** previsto en el **numeral 5 del artículo 139 de la Carta Fundamental**[10], esto es, el de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil[11] y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[12]. Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional[13]. **2.8.** El proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende el Tribunal Constitucional[14], que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: **a)** Falta de motivación propiamente dicha: Cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; **b)** Motivación aparente: Cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; **c)** Motivación insuficiente: Cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en

pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y **d)** Motivación defectuosa en sentido estricto: Cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como la de no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común. **2.9.** Asimismo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones al **principio de congruencia,** legislado en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII del título preliminar del mismo cuerpo normativo, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud de lo cual los jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso y menos fijada como punto controvertido, o, a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de congruencia "exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas"[15]. **2.10.** Entonces, el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas, pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. **2.11.** En atención al marco glosado, tenemos que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho constitucional al debido proceso, en su elemento esencial de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación, precisando que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. **2.12.** De la revisión integral de la sentencia de vista materia de casación, se aprecia que la misma ha respetado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha delimitado la controversia que será objeto de pronunciamiento conforme a las pretensiones planteadas, como se desprende de los considerandos segundo y sexto de la referida sentencia. Asimismo, se ha cumplido con emitir decisión sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación, los que previamente se han identificado —expresión de agravios— en el **cuarto** considerando, invocando el marco regulatorio relacionado a lo que es asunto de controversia, descrito en el tercer considerando, en el cual la Sala Superior ha delimitado la materia de controversia: determinar si el beneficio del crédito tributario por reinversión a la educación se encontraba vigente o no en el ejercicio dos mil catorce. **2.13.** Se trasluce entonces que para absolver y desvirtuar los agravios planteados en el respectivo recurso, la Sala de mérito efectuó una valoración conjunta y razonada de los hechos y de los medios probatorios aportados al proceso; en estricto, de lo actuado en el expediente administrativo formado por la administración tributaria con motivo del procedimiento de fiscalización definitiva del cumplimiento de obligaciones tributarias vinculadas al impuesto a la renta del ejercicio gravable dos catorce que corresponde a John von Neumann Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, particularmente en lo concerniente al reparo "crédito por reinversión en la educación", así como a las deducciones efectuadas mediante declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos mil trece. En efecto, ha justificado las **premisas fácticas** (la demandante dedujo el concepto de crédito por reinversión en la educación, mediante declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce), así como las **premisas jurídicas** (artículo 13 del capítulo II - Disposiciones tributarias, del Decreto Legislativo Nº 882; artículos 5 y 8 del Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-97-EF; y el primer párrafo del artículo único de la Ley Nº 29766), lo que le ha permitido llegar a la **conclusión** de que es correcta la deducción efectuada por la parte demandante John von Neumann Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada por el crédito por reinversión en la educación aprobado por el Decreto Legislativo Nº 882, pues tal beneficio estuvo vigente hasta que fue expresamente derogado por la Ley Nº 30512 del dos de noviembre de dos mil dieciséis. La Sala Superior precisa que el crédito por reinversión en educación estuvo vigente hasta el cierre del ejercicio dos mil dieciséis, y la parte demandante se encontraba habilitada a utilizar el referido beneficio en la determinación del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio dos mil catorce. **2.14.** Ahora bien, en torno a la justificación externa de la decisión superior, este Tribunal Supremo considera que la realizada por la Sala de mérito es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas contienen proposiciones sustentadas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional, las que resultan pertinentes para resolver la materia en controversia fijada por las instancias, atendiendo a los términos de lo que fue objeto debatible y los puntos controvertidos. En atención a las premisas normativas y fácticas expuestas, el colegiado superior sustenta de modo suficiente su postura frente a la normativa aplicable al caso concreto, arribando a una conclusión motivada. **2.15.** Sin perjuicio de lo indicado, no se debe confundir debida motivación de las resoluciones judiciales con debida aplicación del derecho objetivo. En el primer caso, se examinan los criterios lógicos y argumentativos referidos a la decisión de validez, la decisión de interpretación, la decisión de evidencia, la decisión de subsunción y la decisión de consecuencias, en tanto que en el segundo caso debe determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido aplicada de manera debida. Por tanto, el hecho de que las partes recurrentes no concuerden con la conclusión a que se arriba con base en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se expusieron, no significa que el colegiado revisor haya incurrido en una vulneración del debido proceso, motivación y valoración de medios probatorios. Tales discrepancias serán revisadas al analizar la causal de orden material, que, en efecto, se ha denunciado en autos y será materia de pronunciamiento oportuno. **2.16.** En consecuencia, al no configurarse la infracción normativa por vulneración a los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil al vulnerar su derecho a obtener una decisión debidamente motivada, planteada por el Tribunal Fiscal; y la infracción normativa por vulneración del derecho a una motivación adecuada, planteada por la SUNAT, las causales procesales bajo examen devienen **infundadas. 2.17.** Habiéndose desestimado la causal de naturaleza procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto a las causales casatorias de naturaleza material. **Tercero: Análisis de las causales casatorias de naturaleza material 3.1.** Es importante identificar en el presente caso, como lo tienen señalado las instancias de mérito, que la pretensión de la demanda contencioso administrativa es la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02681-8-2021, en el extremo que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 025-014-0025233/SUNAT en cuanto al reparo por desconocimiento del crédito por reinversión en la educación, y la resolución de multa referida al reparo imputado por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce. **3.2.** Para proceder a la interpretación de las normas en cuestión, es necesario tener en consideración que, dentro del marco del Estado constitucional de derecho, las disposiciones legales deben ser interpretadas en compatibilidad con los derechos fundamentales, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 29 (literal b) consagra que: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. **3.3.**

Acorde con la precitada norma convencional, es menester poner de relieve que la efectivización de la labor interpretativa debe estar en armonía con el principio de legalidad recogido en el artículo 9[16] de la mencionada convención y en el artículo 74 de la Constitución Política, concibiéndose este principio en aspecto límite para el Estado, en especial en lo referente a la potestad tributaria. **3.4.** Debemos considerar que, en materia tributaria, prevalece el principio de reserva de ley, que se recoge en la Constitución Política del Estado, cuando establece que: Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. […] **3.5.** En consecuencia, tenemos que efectuar una interpretación sistemática de las normas tributarias pertinentes y para ello haremos el análisis de las causales materiales. **Cuarto: Análisis de las infracciones materiales planteadas por el Tribunal Fiscal y la SUNAT Tribunal Fiscal** - Infracción normativa por interpretación errónea de la Ley Nº 29766 y la única disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria - Infracción normativa por inaplicación de la norma VI del título preliminar del Código Tributario SUNAT - Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 y, en consecuencia, de la Ley Nº 29766, respecto al crédito tributario por reinversión a que se refería el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882. **4.1.** El Tribunal Fiscal señala que la Sala Superior interpreta erróneamente dichos dispositivos normativos pues estos dispusieron la caducidad del beneficio del crédito tributario por reinversión en educación a que se refería el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882, es decir, dicho beneficio no se encontraba vigente para el periodo dos mil catorce, pues solo tuvo vigencia hasta el ejercicio dos mil once. Agrega que la Sala Superior no ha tenido en cuenta el precitado Decreto Legislativo Nº 882. **4.2.** La entidad recurrente SUNAT arguye que el Decreto Legislativo Nº 1087 no prorroga el beneficio establecido en el Decreto Legislativo Nº 882, sino que permite que a través de otra norma se prorroga por una sola vez y solo para el caso de los centros de educación técnico productiva e institutos superiores tecnológicos privados en las áreas económico-productivas de agroindustria, metalmecánica, gas, energía, minería, pesquería y artesanía, y no así para las universidades privadas con fines de lucro (como el caso de la codemandada), las cuales gozaron del beneficio tributario solo hasta el ejercicio mil novecientos noventa y nueve, no habiéndose emitido alguna norma que lo prorrogue de manera expresa. **4.3.** De lo expuesto, se debe precisar que ambos recursos de casación interpuesto por las partes recurrentes denuncian la infracción normativa de la Ley Nº 29766, la cual en su artículo único regula lo siguiente: Precísase que los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, Decreto Legislativo que aprueba Normas en Educación para el Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos de Promoción Comercial, respecto de aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en dicho artículo, caducaron a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1087 y respecto del impuesto a la renta al 31 de diciembre del ejercicio 2008 por tratarse de un tributo de periodicidad anual. Los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, y ratificados en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, para los centros de educación técnico productiva e institutos superiores tecnológicos privados precisados en la citada norma, se sujetan a los términos y plazos de la norma VII del título preliminar del Código Tributario. Asimismo, la parte recurrente Tribunal Fiscal denuncia la inaplicación de la norma VI del título preliminar del Código Tributario. **4.4.** Las infracciones normativas serán desarrolladas en forma conjunta, debido a que están referidas a la deducción del concepto de crédito por reinversión en la educación, mediante declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce. **4.5.** Para tal efecto, corresponde tener en cuenta la concepción sobre la interpretación. Para tal efecto, citaremos a Guastini[17], que refiere lo siguiente: Podemos llamar "disposición" a todo enunciado perteneciente a una fuente del derecho y reservar el nombre de "norma" para designar el contenido de sentido de la disposición, su significado, que es una variable dependiente de la interpretación. En este sentido, la disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa y la norma su resultado […] La norma es una disposición interpretada […] En esa línea de análisis y de acuerdo con Tarello, con la palabra "interpretación" nos referimos algunas veces a una actividad (o a un proceso) y otras al resultado o producto de tal actividad[18]. **4.6.** Así, estaremos frente a esa forma de infracción cuando la disposición legal elegida para la solución de la controversia, es la correcta, reconociéndose su existencia y validez para la solución del caso; sin embargo, la interpretación que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un sentido y alcance que no tiene[19]. **4.7.** Teniendo en cuenta las posiciones en debate, no resulta suficiente utilizar el método de interpretación literal; por ello, pasaremos a utilizar el método de interpretación sistemática de las normas, pues resulta ser el idóneo en este caso, en tanto queremos extraer del texto de la norma cuya infracción se invoca un enunciado cuyo sentido se encuentre acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Interpretarla de manera aislada, solo con los términos que expresa, en su articulación sintáctica, puede llevar a conclusiones inexactas o contrarias a su verdadera intención; ya que el artículo normativo a analizar forma parte de un todo y no puede tener un significado distinto al de los demás, sino que sobre todo debe ser racional, coherente y objetivo. **4.8.** De esta forma, se puede establecer que la cuestión materia de análisis consiste en determinar si, con la precisión realizada por el artículo único de la Ley Nº 29766, se derogó o no el crédito tributario por reinversión en la educación a que se refiere el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882 o si, por el contrario, dicho crédito fiscal fue derogado por la única disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30220 y, con ello, determinar si correspondía aplicar para el ejercicio del dos mil catorce el citado beneficio tributario a favor de la demandante John von Neumann Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. **4.9.** De los actuados administrativos tenemos que la administración tributaria inició procedimiento de fiscalización a la empresa con relación a sus obligaciones tributarias vinculadas con el impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce. Como consecuencia de ello, la administración tributaria reparó el crédito por reinversión en educación por el monto ascendente a S/ 258,529.00 (doscientos cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve soles con cero céntimos), emitiendo la Resolución de Determinación Nº 112-003-0014850, girada por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil catorce, y la Resolución de Multa Nº 112-002-0010210, girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. **4.10.** Anotada esta precisión, pasamos a citar las siguientes normas: El artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882 señala que: Las Instituciones Educativas Particulares, que reviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30 % del monto reinvertido. La reinversión sólo podrá realizarse en infraestructura y equipamientos didácticos, exclusivos para los fines educativos y de investigación que corresponda a sus respectivos niveles o modalidades de atención, así como para las becas de estudios […]. El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 indica que: […] Los Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos Privados que desarrollen actividades de Formación Técnica Profesional en las áreas económicas-productivas de Agroindustria, Metalmecánica, Gas, Energía, Minería, Pesquería y Artesanía, que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo Nº 882, estarán exceptuados de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 977. El artículo único de la Ley Nº 29766 dispuso: Precísase que los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, Decreto Legislativo que aprueba Normas en Educación para el Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos de Promoción Comercial, respecto de aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en dicho artículo, caducaron a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1087 y respecto del impuesto a la renta al 31 de diciembre del ejercicio 2008 por tratarse de un tributo de periodicidad anual. Los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, y ratificados en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, para los centros de educación técnico productiva e institutos superiores tecnológicos privados precisados en la citada norma, se sujetan a los términos y plazos de la norma VII del título preliminar del Código Tributario. La única disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria señala que: Deróganse la Ley 23733, Ley Universitaria, y sus modificatorias; la Ley 26439, Ley que Crea el Consejo Nacional para la Autorización

de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y sus modificatorias; y déjanse sin efecto el Decreto Legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. **4.11.** Encaminados a dilucidar si el crédito por reinversión en la educación estaba vigente o no en el año dos mil catorce, corresponde realizar una interpretación sistemática de las normas a que se ha hecho mención en el acápite anterior, que es entendida como: [T]oda interpretación que deduzca el significado de una disposición de su colocación en el 'sistema' del derecho: unas veces, en el sistema jurídico en su conjunto; más frecuentemente, en un subsistema del sistema jurídico total, es decir, en el conjunto de disposiciones que disciplinan a una determinada materia o una determinada institución.[20] **4.12.** De esta forma, se desprende que este método interpretativo puede dividirse en dos distintos. Por un lado, el método sistemático por ubicación de la norma, que da significado a la norma "por la aplicación del contexto de las normas dentro de las cuales se halla ubicada la que estamos interpretando"[21], esto es, teniendo en consideración el subsistema en que se encuentra; y el método sistemático por comparación con otras normas, en el que "se interpreta una norma atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas de su mismo conjunto normativo pero que no quedan claramente expresados en ella"[22], como es el caso cuando se recurre a otras normas del sistema jurídico. **4.13.** Así, comencemos señalando que mediante el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882 se otorgó de forma general un beneficio tributario por reinversión a todas las instituciones educativas particulares que revirtiesen total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras instituciones educativas. Posteriormente, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 reconoció la vigencia del beneficio tributario haciendo mención expresa a determinadas instituciones educativas privadas, como son los centros de educación técnico-productiva e institutos superiores tecnológicos privados que desarrollen actividades de formación técnica profesional en determinadas áreas económicas productivas, pero omitió declarar la caducidad del beneficio tributario respecto de otras instituciones educativas —como las universidades privadas— comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 882, por lo que el crédito tributario por reinversión en educación no caducó a la entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo Nº 1087 y, respecto del impuesto a la renta, al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, como lo señaló la Ley Nº 29766. **4.14.** Ahora bien, sobre los efectos de la citada Ley Nº 29766**,** debe tenerse presente lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 02053-2013-PA/TC[23], que establece lo siguiente: […] 30. De lo expuesto se deduce que no se trataba de una norma propiamente interpretativa, sino de una reforma a lo originariamente dispuesto en la regulación sobre crédito por reinversión. Siendo así, esta no podía ser aplicable retroactivamente, pues resulta aplicable el artículo 109 de la Constitución en cuanto establece que: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". 31. La Ley Nº 29766 fue publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 2011 y, como no precisa un plazo distinto, su entrada en vigencia se produjo al día siguiente, es decir desde el 24 de julio del 2011. 32. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución establece "La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos" 33. Este Tribunal entiende, conforme a lo sustentado, que el legislador no podía, dentro del marco constitucional vigente, disponer la caducidad retroactiva del crédito por reinversión aplicable a las universidades privadas. […] **4.15.** De ello se infiere que la Ley Nº 29766 no brinda un sentido interpretativo, sino que establece un límite temporal para la vigencia del crédito por reinversión que no se encontraba en el Decreto Legislativo Nº 1087, por lo que, en atención a lo establecido en los artículos 109 y 103 de la Constitución, la citada Ley Nº 29766 no podía ser aplicable retroactivamente, sino desde su entrada en vigencia; por lo tanto, se infiere que el crédito por reinversión estuvo vigente hasta el año dos mil once, como ya se ha establecido en las Casaciones Nº 1070-2022 y Nº 977-2021, emitidas por esta Sala Suprema. **4.16.** En conclusión, se puede establecer que, atendiendo a que la Ley Nº 29766, publicada el veintitrés de julio de dos mil once, entró en vigencia desde el día veinticuatro del mismo mes y año, el beneficio del crédito tributario por reinversión en la educación, contemplado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882, no se encontraba vigente a partir del ejercicio dos mil doce, toda vez que el plazo de caducidad a que se refiere la citada ley recién entró a regir desde el ejercicio dos mil doce, ya que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, conforme al segundo párrafo de la norma X del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario[24], que establece que tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la norma IV del título preliminar del mencionado Código Tributario, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. **4.17.** Por otro lado, se puede observar que la Sala Superior centra su fundamentación en la décimo tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 30512, por lo que se debe precisar que lectura de dicha disposición normativa, en un primer momento, puede llevar a entender que el Decreto Legislativo Nº 882 recién fue derogado por la indicada ley (y con él, el beneficio tributario contenido en su artículo 13), toda vez que su texto establece expresamente: Derógase el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, en lo que respecta a los institutos y escuelas de educación superior; la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, excepto los artículos 11, 28, 41, 54, 55, 56, 57 y 58, que mantienen su vigencia en lo que respecta a los IESP, hasta el término del plazo para la adecuación que se establezca en el reglamento de la presente ley; y la Ley 28340, Ley que crea el Sistema de Información de Educación para el Trabajo. De lo expuesto, corresponde tener en cuenta la conclusión del acápite que antecede, esto es, que fue a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29766 que el crédito por reinversión fue derogado y que, por tanto, el Decreto Legislativo Nº 882 no pudo ser derogado posteriormente por la Ley Nº 30512, ya que resulta ilógico que una norma sea derogada dos veces, lo que evidencia que la Sala Superior incurrió en una interpretación errónea de la décimo tercera disposición complementaria Final de la Ley Nº 30512. **4.18.** Por tanto, no correspondía aplicar el crédito por reinversión en la educación a favor de la parte demandante para el ejercicio del año dos mil catorce. Se colige, pues, que la Sala Superior al establecer que el beneficio tributario contenido en el Decreto Legislativo Nº 882 no fue derogado por la Ley Nº 29766 incurrió en la infracción normativa por interpretación errónea denunciada y no observó el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 02053-2013-PA/TC, donde se dispone que la Ley Nº 29766 que regula la derogación del crédito por reinversión, ha sido publicada el veintitrés de junio de dos mil once, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, corresponde declarar **fundadas** las citadas causales, en consecuencia casar la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y, actuando en sede de instancia, confirmar la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número diez, del veintisiete de julio de dos mil veintidós, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Quinto: Respecto a la infracción normativa por vulneración del artículo 74 y de las normas III y VII del título preliminar del Código Tributario, denunciada por la SUNAT**. A fin de analizar estas infracciones normativas, esta Sala Suprema debe partir del contenido del artículo 74 de la Constitución Política del Perú mencionado precedentemente. Asimismo, la norma IV del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario[25] establece lo siguiente: NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; […] **5.1.** Los dispositivos citados establecen presupuestos para crear, modificar, suprimir aspectos de los tributos y otros, entre los cuales se encuentran los beneficios tributarios. Sobre la creación de estos últimos, corresponde señalar que el beneficio tributario del crédito por reinversión en educación fue establecido con norma con rango de ley, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y consistía, según el artículo 13 del dispositivo en mención, en que: Las Instituciones Educativas Particulares, que reviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. […] **5.2.** Ello significa que, en cuanto a su concesión, dicho beneficio es acorde con el ordenamiento constitucional, ya que ha sido regulado con norma con rango de ley, como lo establecen la Constitución Política del Perú y el Código Tributario. Sin embargo, los fundamentos que alega la SUNAT no están referidos a aspectos de su creación, que tienen base normativa en el

artículo 74 de la Constitución Política del Perú, sino que estarían dirigidos a la vigencia del beneficio. Entonces, la reserva de ley que denuncia se habría infringido no es pertinente al objeto en controversia en el proceso, porque los argumentos aluden a la vigencia del beneficio tributario. **5.3.** Con respecto a la vulneración de las normas III y VII del título preliminar del Código Tributario, denunciada por la SUNAT, cabe precisar que, conforme al recurso interpuesto, esta parte recurrente no desarrolla cómo es que la sentencia de vista vulnera específicamente dichas normas. Se debe tener presente que no basta con indicar de forma genérica la vulneración de determinada norma, sino que es deber de la parte recurrente demostrar que el pronunciamiento de la Sala de mérito incurrió en la infracción normativa denunciada y su influencia en la decisión impugnada, razón por la cual este extremo de la causal debe ser desestimado. En consecuencia, corresponde declarar **infundada** la citada causal. DECISIÓN Por estas consideraciones, **DECLARARON FUNDADOS** los recursos de casación interpuestos **i)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal**, mediante escrito del veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos dieciséis a tres mil seiscientos treinta y seis); y **ii)** por la **Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria**, mediante escrito del siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos ochenta a tres mil setecientos trece). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas tres mil seiscientos a tres mil seiscientos diez), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y, **actuando en sede de instancia, CONFIRMARON** la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número diez, del veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas tres mil cuatrocientos noventa y cuatro a tres mil quinientos cuatro), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Por último, **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por John Von Neumann Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, **TOVAR BUENDÍA.**

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 Se transcriben las reseñas elaboradas en su oportunidad.

3 HITTERS, Juan Carlos (2002). Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

4 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México". Sentencia del veintiséis de noviembre de dos mil diez; párr. 225.

6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso J. vs. Perú". Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece; párr. 258.

7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá". Sentencia del dos de febrero de dos mil uno; párr. 127.

8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Casa Nina vs. Perú". Sentencia del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; párr. 88.

9 Resolución recaída en el Expediente Nº 02467-2012-PA/TC, publicada en el portal web de la mencionada institución el diecinueve de enero de dos mil quince.

10 **Constitución Política del Estado**
Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

11 **Código Procesal Civil**
Artículo 122.- Las resoluciones contienen: […]
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

12 **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**
Artículo 12.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

13 El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, publicada el dos de octubre de dos mil siete en el diario oficial El Peruano, ha puntualizado que:
[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios.

14 Resolución del referido tribunal recaída en el Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC, publicada en el portal web de la mencionada institución, el veintitrés de octubre de dos mil ocho.

15 Resolución del referido tribunal recaída en el Expediente Nº 00356-2022-PHC/TC, publicada el quince de junio de dos mil veintitrés en el diario oficial El Peruano.

16 **Convención Americana de Derechos Humanos**
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad.
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

17 GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; p. 26.

18 Por ejemplo, en enunciados del tipo "Tal disposición es ambigua de modo que requiere interpretación", la palabra "interpretación" denota evidentemente una actividad (podría ser sustituida por el sintagma "actividad interpretativa"). Por el contrario, en enunciados del tipo "De tal disposición el Tribunal de Casación hace una interpretación restrictiva", la misma palabra claramente denota no una actividad, sino más bien su resultado, es decir, un significado. La "interpretación" en cuanto actividad es un proceso mental. La "interpretación" en cuanto producto de tal proceso es más bien un discurso. Las distinciones que siguen se refieren a la interpretación en cuanto actividad o proceso.
Tarello citado por GUASTINI, Riccardo. (2015) Interpretación y construcción jurídica. En Isonomía, Nº 43; pp. 11-48.

19 Casación Nº 9654-2015 Lima, del tres de agosto de dos mil diecisiete.

20 GUASTINI, Riccardo (1990). Estudios sobre sobre la interpretación jurídica. Traducción de Gascón y M. Carbonell. México D.F., UNAM; pp. 43-44. http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10567

21 RUBIO CORREA, Marcial y ARCE, Elmer (2017) Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; p. 117.

22 Ibidem, p. 115

23 Publicada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis en el diario oficial El Peruano.

24 Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de junio de dos mil trece.

25 Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de junio de dos mil trece.

C-2245460-16

CASACIÓN Nº 2633-2023LIMA

TEMA: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
SUMILLA: De acuerdo al marco regulatorio que rige el procedimiento contencioso- tributario, cuando se trata de resoluciones de cumplimiento, la controversia tributaria se encuentra circunscrita a la verificación de la labor de la autoridad tributaria, esto es, si la administración ha dado o no cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal.
PALABRAS CLAVE: reliquidación, cumplimiento de resolución, validez y eficacia

Lima, trece de junio de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: OBJETO DEL RECURSO Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante **EXSA Sociedad Anónima,** mediante escrito del doce de diciembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos sesenta y ocho a mil quinientos veintinueve del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y dos a mil trescientos sesenta y dos), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, que confirmó la sentencia apelada, del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas mil ochenta y cuatro a mil ciento diez), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos e improcedente la pretensión subordinada a la pretensión principal, por imposibilidad jurídica del petitorio. Antecedentes Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas tres a ciento setenta y nueve), **EXSA S. A.**

postuló las siguientes pretensiones: **- Pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021; de la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640, emitida en pretendido cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020; y de la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735, girada por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. **- Pretensión accesoria a la pretensión principal**: Se ordene a la administración tributaria: **i)** Se proceda con la devolución de cualquier pago indebido efectuado, incluyendo compensaciones que se hubieran efectuado, debido a la incorrecta reliquidación de la deuda tributaria vinculada al impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, más intereses moratorios devengados y calculados a la fecha de devolución efectiva. **ii)** Se reconozcan créditos y/o saldos a favor, incluyendo el mayor saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve declarado por la compañía y/o pérdidas, como consecuencia de revocar la reliquidación confirmada y/o dejar sin efecto los reparos impugnados. **- Pretensión subordinada a la pretensión principal**: Se emita un pronunciamiento de plena jurisdicción mediante el cual reconozca el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la compañía y, en virtud del artículo 320 del Código Procesal Civil, se suspenda el presente proceso y se esté a lo que se resuelva de forma definitiva en el expediente judicial signado con Expediente Nº 00664-2021-0-1801-JR-CA-20, tramitado ante el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, proceso en el cual se discute la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020, con lo cual se evitará que la resolución del Tribunal Fiscal materia de demanda adquiera la calidad de cosa decidida, inimpugnable, y no pueda oponerse a la eficacia de la sentencia definitiva que se emita en el Expediente Nº 00664-2021. La parte recurrente en el escrito de su demanda argumentó lo siguiente: a) Señala que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021 impugnada ha vulnerado el principio de no ejecutoriedad, toda vez que no ha tomado en cuenta que los reparos confirmados vinculados al impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, están siendo discutidos en sede judicial; sin embargo, el Tribunal Fiscal emitió pronunciamiento confirmando el cumplimiento sobre la base de actos administrativos que no se encuentran firmes ni consentidos, con lo cual vulnera el principio de no ejecutoriedad. b) Respecto al reparo por gasto por custodia policial, señala que el Estado, con la finalidad de evitar, entre otros, los riesgos que puede generar el transporte de explosivos, exigen que sean trasladados bajo custodia policial. Dicha obligación recae en el propietario y fabricante de los explosivos, quien al tenerlos en su propiedad y tomar la decisión de transportarlos, coloca en riesgo los bienes jurídicos que el Estado busca tutelar sus normas especificas, lo que concuerda con la regulación legal y opiniones de la DISCAMEC. Agrega que el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) no desestiman el hecho de que la compañía — como empresa productora de explosivos— esté obligada a pagar por los servicios de custodia policial, tal como en efecto ha ocurrido en el presente caso, sino que exigen que se sustente el desembolso por custodia policial. Precisa que el Tribunal Fiscal, pese a que la parte demandante presentó información suficiente para acreditar la fehaciencia de la operación, la desconoció por no contar con el comprobante de pago emitido por el transportista. Así, se vulnera el derecho a deducir un gasto real, al no valorar en forma debida la documentación presentada. c) Señala que la Resolución Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021 debe ser declarada nula, toda vez que le exige que sustente el gasto por el servicio de custodia policial con la presentación de un comprobante de pago; sin embargo, desconoce que el pago realizado califica como una tasa, siendo que la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al numeral 1.2 del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago, se halla exenta de emitir comprobantes de pago por los ingresos percibidos. d) Agrega que el pago por concepto de "servicio de custodia policial en el transporte de explosivos" constituye un tributo de la especie tasa. En efecto, el pago por servicio de custodia policial constituye una prestación pecuniaria —dineraria— impuesto por la voluntad unilateral del Estado mediante sus normas, sin que participe la voluntad del obligado. Precisa que el pago por servicio de custodia policial cumple con el requisito de tener como entidad acreedora al Estado, el cual se ve personificado en la DICSCAMEC. e) Señala que será servicio toda aquella prestación realizada a favor de un tercero, menos aquellas que hayan sido realizadas por el Sector Público Nacional y cuya contraprestación tenga la naturaleza de tasa. En este último supuesto —servicios que califican como tasas, de acuerdo con los artículos 1 y 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago, no existirá la obligación de emitir comprobante de pago. Así, ante una prestación de servicio que califique como tasa realizada por una entidad del Sector Público Nacional, no serán requisito para su deducibilidad, a fin de determinar la renta neta, los comprobantes de pago que sustentan el servicio. f) En el supuesto negado de que el gasto observado no califique como tasa, el órgano resolutor debe advertir se incurrió en él, en el marco de un reembolso de gastos, razón por la cual no existe la obligación de emitir comprobantes de pago. Agrega que la compañía se limitaba solo a reembolsar los gastos en que incurrían los proveedores, de acuerdo a lo estipulado en las liquidaciones de pago de custodia policial, que eran documentos que señalaban los datos de fecha de viaje, lugar de origen, destino, guía de tránsito, guía de remisión, nombre del personal policial, días pagados, pago por día, especie valorada, pasaje de retorno y total a pagar por custodio, información que ha sido verificada por la administración. g) El servicio de custodia policial no califica como un servicio de acuerdo con la definición adoptada por el reglamento de comprobantes de pago; por ello, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del inciso 1 del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, al no existir obligación de presentar comprobante de pago alguno para sustentar dicho gasto, por lo que tampoco es exigible la presentación de un comprobante de pago. h) Con referencia al reparo al gasto por operaciones forward no deducible, confirmado por la resolución del Tribunal Fiscal impugnada, arguye que existen dos tipos de operadores económicos que contratan instrumentos financieros derivados - IFD: **i)** los que contratan para cubrir un riesgo de su negocio y **ii)** los que contratan con fines especulativos (asumiendo el riesgo). Precisa que si se tiene en cuenta que la volatilidad del tipo de cambio de moneda constituye un riesgo para la compañía y que los contratantes de un IFD buscan "coberturar" sus riesgos, entonces debemos entender que efectivamente una empresa puede acceder a dicho IFD para proteger los riesgos causados por la volatilidad del tipo de cambio de moneda, tal cual sucede en el caso de la compañía. Agrega que la operación de forward realizada por la compañía cumple con los parámetros establecidos en el artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta y que ella cumplió con presentar diversa documentación sustentatoria que acredita que las operaciones forward tienen una finalidad de cobertura. i) El Tribunal Fiscal reconoció que tiene obligaciones jurídicas en moneda extranjera y, como es de conocimiento del Juzgado, el solo hecho de tener obligaciones en moneda extranjera habilita automáticamente a contratar forwards. Al respecto, al tener obligaciones pendientes en moneda extranjera, no es necesario identificar operación por operación, ya que el riesgo es evidente. En ese sentido, el hecho de que un forward no identifique de forma específica sino genérica su cobertura no significa que sea un forward especulativo, toda vez que sería especulativo cuando no se tiene deuda en moneda extranjera pero igual se lo contrata. Señala que la compañía cumplió con presentar documentación que permitiría identificar que las operaciones estaban "coberturadas" y de esta manera cumplió con cada uno de los requisitos del inciso b) del artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta. Así, demostró que los IFD contratados con el Banco de Crédito del Perú el nueve de marzo y el diecisiete de abril de dos mil nueve califican como cobertura. Precisa que el Juzgado deberá advertir que la celebración de los IFD forward tuvo como finalidad cubrir el riesgo de una posible variación en el tipo de cambio que pudiera generar un impacto negativo en los flujos de caja de la compañía, que impida que esta pueda cumplir con sus obligaciones jurídicas como tal; máxime si la tendencia del tipo de cambio de los meses precedentes a la celebración del IFD forward era al alza. j) Señala que el Tribunal Fiscal parte de la errada suposición de que, porque la compañía mantenía cuentas por cobrar superiores a las cuentas por pagar en dólares en sus estados financieros con corte al treinta de marzo dos mil nueve, mantenía una cobertura natural de su riesgo cambiario, y, por lo tanto, podría eventualmente pagarlas sin perjuicio ni riesgo, sin tener que recurrir a los mercados financieros. En tal sentido, asumir que por el solo hecho de mantener acreencias en dólares por un monto mayor al de las cuentas por pagar implica que la empresa se encontraba "coberturada" naturalmente y por ende ya no era necesaria la suscripción de contratos forward a fin de cubrirse de este tipo de riesgo, solo evidencia un análisis sesgado y tendiente a la arbitrariedad cuya única finalidad es confirmar la posición de la SUNAT sin mayor sustento ni motivación del

acto administrativo. k) En esa línea, el Tribunal Fiscal denota un análisis deficiente en tanto asume que la compañía mantendría una cobertura natural del riesgo cambiario por todo el dos mil nueve, únicamente apreciando la situación económica de la compañía a marzo de dos mil nueve, sin evaluar el movimiento completo de los estados financieros por lo menos hasta abril de dos mil nueve, que es la fecha de ejecución de los contratos forward. Sentencia de primera instancia El Juez del Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución trece, del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas mil ochenta y cuatro a mil ciento diez), declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Sentencia de segunda instancia** La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la referida corte, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y dos a mil trescientos sesenta y dos), resolvió lo siguiente: CONFIRMARON la sentencia apelada, resolución número trece, de fecha treintiuno de agosto del dos mil veintidós, obrante de folios mil ochenticuatro a mil ciento diez, por la que se resuelve declarar infundada la demanda en todos sus extremos, entendiéndose como improcedente la pretensión subordinada a la pretensión principal, por imposibilidad jurídica del petitorio. Del recurso de casación y auto calificatorio El recurso de casación presentado por **EXSA S. A.** fue declarado procedente por esta Sala Suprema, mediante auto calificatorio del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por las siguientes causales[2]: **a) Afectación al derecho al debido proceso, en su manifestación al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, concretizado en la inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, numeral 6 del artículo 50 y numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.** Señala la casacionista que, la Sala Superior ha realizado una motivación aparente al no pronunciarse sobre las principales alegaciones de la parte recurrente. Agrega que, la Sala Superior solo indicó que la defensa técnica de la compañía cuestiona aspectos de fondo de los reparos por gasto por operaciones forward y gasto de custodia policial, los mismos que no han sido materia de pronunciamiento en el acto administrativo impugnado. Asimismo, argumenta que, se vulneró el principio de debida motivación, consistente en la manifestación detallada y fundamentada de los argumentos que sustenten su decisión; por lo que, en efecto, no responder a las alegaciones de la compañía resulta una manifiesta vulneración al derecho de esta, de obtener una decisión debidamente motivada, según señala la parte recurrente. **b) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 156 del Código Tributario.** Señala la casacionista que, la sentencia de vista no ha realizado un análisis de la obligación tributaria por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, que se pretende dar cumplimiento mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021, "con lo cual se pretende validar una reliquidación que no tiene sustento en el ordenamiento jurídico", puesto que solo correspondería dar cumplimiento a la correcta liquidación de la obligación tributaria. Agrega que, el artículo 156 del Código Tributario debe ser entendido como aquella determinación de la obligación tributaria que se ajuste a la ley y a la Constitución. Argumenta que, en el considerando octavo de la sentencia de vista, concluyó que en virtud del artículo 156 del Código Tributario la controversia se encuentra limitada a determinar si la Administración ha cumplido con realizar la reliquidación ordenada, siendo esta una interpretación errónea, ello a que se estaría avalando la incorrecta reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, en tanto no refleja la correcta ni definitiva determinación de la obligación tributaria conforme al ordenamiento legal y a la Constitución. **c) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1 y 105 del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 019-71/IN, el artículo 1 de la Ley Nº 28256, la Resolución Directoral Nº 03-2008-IN-1701 "Normas y Procedimientos para la Custodia de Transporte de Explosivos, Insumo, Conexos y todo Material Sujeto a Control por la DICSCAMEC".** Señala la casacionista que, la sentencia de vista inaplicó las normas mencionadas, debido a que no se tomó en cuenta que la parte recurrente en su calidad de propietaria de los bienes transportados (explosivos y similares) tiene la obligación legal de asegurar que el transporte de la mercancía cuente con custodia policial, en tal sentido, por mandato legal le corresponde asumir los gastos incurridos en su nombre por las empresas de transporte por el servicio de custodia policial. Agrega que, la Sala Superior inaplicó los artículos 1 y 105 del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 019-71/IN, el artículo 1 de la Ley Nº 28256, la Resolución Directoral Nº 03-2008-IN-1701 - Normas y Procedimientos para la Custodia de Transporte de Explosivos, Insumo, Conexos y todo Material Sujeto a Control por la DICSCAMEC, ello al convalidar la reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, sin considerar que dicha reliquidación debe reflejar la correcta liquidación de la obligación tributaria, debiendo ser considerado como gasto de custodia policial, toda vez que el gasto policial es un requisito por mandato legal. Precisa que, la propiedad e interés de la parte recurrente por realizar el transporte de mercancías es con la rendición de gasto de viaje emitidos por la DICSCAMEC, en los cuales se evidencia que es la compañía la encargada de asumir el costo de la custodia policial, según expone esta parte procesal. **d) Infracción normativa por inaplicación del inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario,** y **en consecuencia el numeral 1.2 del artículo 6 del Reglamento de Comprobante de Pago.** Señala la recurrente que, la sentencia de vista inaplicó el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, toda vez que la Sala Superior avaló la reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve sin observar que el pago realizado por custodia policial califica como tributo de la especie tasas y, por tanto, se encuentra exento de emitir comprobantes de pago de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago. Agrega que, el pago por servicio de custodia policial constituye una prestación pecuniaria -dineraria- impuesta por la voluntad unilateral del Estado a través de sus normas, sin que participe la voluntad del obligado; y argumenta que, el Estado es el acreedor del pago por servicio de custodia policial en el transporte de explosivos. Agrega que, entidad encargada de custodiar el transporte de los explosivos es la Policía Nacional de Perú de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105 del Decreto Supremo Nº 019-71-IN. Arguye que, el hecho generador responde a la prestación de un servicio individualizable y público; precisa que el pago observado constituye un tributo de la especie tasa, dado que reúne en este las características previamente señaladas, estas son: (i) se origina a causa de un servicio, (ii) el servicio prestado es público, y, (iii) el servicio es individualizable. g) **Infracción normativa por inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 62 del Código Tributario.** Señala la parte recurrente que, la sentencia de vista inaplicó las referidas normas en mención, debido a que no resulta razonable exigir a la parte recurrente que presente medios probatorios que se encuentran en poder de terceros (documentos asociados al servicio por custodia policial emitidos a las empresas de transporte), cuando es la Administración Tributaria quien en ejercicio de sus facultades de fiscalización está en mejor posición de recabar la información. Agrega que, la sentencia de vista ha convalidado la inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 62 del Código Tributario, realice cruces de información con las empresas de transporte (proveedores), toda vez que ellas fueron las usuarias del servicio de custodia policial por parte de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, precisa que no se posible que se exija a la compañía que cumpla con presentar documentos asociados al servicio por custodia policial que se encuentran en posesión de terceros (proveedores). **i) Infracción normativa por inaplicación del artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta.** Arguye la casacionista que, la sentencia de vista inaplicó las normas en mención, toda vez que la Sala Superior avaló la reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, desconociendo el gasto por operaciones forward, a pesar que la pérdida generada en el marco de la contratación de instrumentos financieros derivados - IFD con fines de cobertura realizada por la compañía, sí cumplió con todos los parámetros legales, en tanto que buscó coberturar los riesgos por la volatibilidad del tipo de cambio respecto a sus cuentas por pagar en dólares (pasivos). Agrega que, los IFD tienen fines de cobertura cuando son contratados en el curso ordinario del negocio, con el objetivo potencial de evitar, atenuar o eliminar el riesgo por efecto de futuras fluctuaciones, entre otros supuestos, en diferencias de cambio que pueden recaer sobre: i) activos y bienes destinados a generar rentas o ingresos gravados con el Impuesto y que sean propios del giro del negocio; u ii) obligaciones u otros pasivos incurridos para ser destinados al giro del negocio, empresa o actividad. **j) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en concordancia con el**

numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y el artículo 197 del Código Procesal Civil. Señala la recurrente que, la sentencia de vista realizó una interpretación errónea del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que reconoce la deducibilidad de todos aquellos gastos que se encuentren vinculados a la generación de rentas gravadas o al mantenimiento de la fuente. Arguye que, la deducción del gasto por operaciones forward y de custodio policial, se encuentran vinculadas a la generación de rentas gravadas y mantenimiento de la fuente, y ello ha sido razonablemente acreditado en el presente proceso. Agrega que la compañía es una empresa de explosivos que tiene como actividad principal la fabricación de productos químicos en general y en especial explosivos para uso industrial, a efecto generar rentas gravadas, contrató servicios de empresas de transporte para que se encarguen del traslado de sus productos, toda vez que, como una condición de venta, es que los productos serían entregados en los almacenes de los clientes. Precisa que, el pago por custodia policial se encuentra directamente vinculado a la generación de rentas gravadas, pues dicho pagó permitió que se incrementen las ventas de los productos que comercializa la compañía. Señala que, la compañía obtuvo contratos forward para que de esta manera logre atenuar el riesgo a la fluctuación del tipo de cambio en el que se encontraba como consecuencia de las obligaciones en dólares que tenía que cubrir, esto con el fin de mantener la fuente productora de renta. Precisa que, la Sala Superior equivocadamente convalidó la reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve sin considerar una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios. CONSIDERANDOS **Primero: Delimitación del pronunciamiento casatorio** Contextualizado el caso, resulta pertinente hacer algunos apuntes sobre el recurso extraordinario de casación que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. **1.1.** El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. En materia de casación, es factible el control de las decisiones jurisdiccionales con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto. **1.2.** El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan haber cometido en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Constituye antes bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.3.** Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso,[3] que debe sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[4], por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **1.4.** En el caso concreto, se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de infracciones normativas procesales y materiales. En ese sentido, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal —de orden constitucional y legal—, desde que, si por ello se declarara fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, supuesto en el cual carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre las infracciones normativas materiales invocadas por la casacionista en el escrito de su propósito; y si, por el contrario, se declarara infundada la infracción procesal, corresponderá emitir pronunciamiento respecto de las infracciones materiales planteadas por la parte recurrente. **Segundo: Análisis de las causales casatorias de naturaleza procesal** La parte recurrente planteó las siguientes infracciones, que serán materia de desarrollo en el presente considerando. - Afectación del derecho al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, concretizado en la inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, del numeral 6 del artículo 50 y del numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil - Infracción normativa del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y del artículo 197 del Código Procesal Civil. (extremo) 2.1. Sobre el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional ha sido objeto de interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política del Estado), la cual ha establecido: […] en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de las normas contrarias a su objeto y fin […].[5] **2.2.** En ese entender, cabe señalar: […] que las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención, también conocidas como garantías procesales, este Tribunal ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho […], es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo la consideración judicial […]. [6] Asimismo, cabe precisar que las garantías procesales mínimas deben observarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las partes. Resulta necesario manifestar que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que: Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas […]. [7] **2.3.** El numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado consagra como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en este, las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración. Del mismo modo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los lineamientos del debido proceso legal, que se refiere al "[…] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos […]"[8]. **2.4.** El derecho fundamental al debido proceso, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional, es un derecho continente, pues comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. El referido tribunal señala que: El derecho al debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la

motivación, etc. En las de carácter sustantiva o, estas están básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A través de esto último, se garantiza el derecho que tienen las partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas. [9] **2.5. Sobre el derecho fundamental a la motivación** El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución. También encuentra amparo en los tratados internacionales sobre derechos humanos y está incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fundamental es uno de los derechos que conforman el derecho fundamental al debido proceso, el cual se encuentra, a su vez, reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. **2.6.** Además, resulta pertinente señalar que, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez legal. **2.7.** Así también, el derecho al debido proceso comprende a su vez, entre otros derechos, el de **motivación de las resoluciones judiciales,** previsto en el **numeral 5 del artículo 139 de la Carta Fundamental**[10], esto es, el de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por los artículos 122 (inciso 3) y 197[11] del Código Procesal Civil, y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[12]. Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional[13]. **2.8.** Sobre el proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende el Tribunal Constitucional[14] que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: **a)** Falta de motivación propiamente dicha: Cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; **b)** Motivación aparente: Cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; **c)** Motivación insuficiente: Cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir, el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respalda en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y **d)** Motivación defectuosa en sentido estricto: Cuando se vulnera las leyes del hacer/pensar, tales como la de no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común. **2.9.** Asimismo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones el **principio de congruencia,** legislado en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII del título preliminar del mismo cuerpo normativo, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud de lo cual los jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso y menos fijada como punto controvertido, o, a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de congruencia "exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas"[15]. **2.10.** Entonces, el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas, pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. **2.11.** En atención al marco glosado, tenemos que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho constitucional al debido proceso en su elemento esencial de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación, precisando que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. **2.12.** De la revisión integral de la sentencia de vista materia de casación, se aprecia que ha respetado el derecho al debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales, al determinar si la administración tributaria, con la emisión de la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640, ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 05266-3-2020, y si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021 incurrió en algún vicio que amerite declarar su nulidad y es o no conforme a derecho. De la revisión integral de la sentencia de vista, se aprecia que ha cautelado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha delimitado la controversia que fue objeto de pronunciamiento conforme a las pretensiones planteadas, como se desprende de los considerandos sexto al duodécimo de la sentencia de vista, y se ha cumplido con emitir decisión sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación —los que previamente se han identificado en el segundo considerando de la impugnada—, tal como se desglosa del desarrollo lógico-jurídico que emerge del desarrollo de la sentencia. **2.13.** Se trasluce entonces que para absolver y desvirtuar los agravios planteados en el respectivo recurso, la Sala de mérito efectuó una valoración conjunta y razonada de los hechos y de los medios probatorios aportados al proceso; en estricto, de lo actuado en el expediente administrativo formado por la SUNAT. Así, ha justificado las **premisas fácticas** (verificar si la administración tributaria, mediante la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640, dio estricto cumplimiento a lo previamente ordenado mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020) y las **premisas jurídicas** (artículos 156 y 157 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; y artículos 16 (numeral 16.1) y 203 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General), que le ha permitido llegar a la **conclusión** de que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021, cuestionada en el presente proceso, es de cumplimiento, y la fundamentación alegada por la parte recurrente, que sustenta su pedido de nulidad, radica en argumentos de fondo que resultan ajenos a los aspectos materia de cumplimiento en cuanto fueron materia de pronunciamiento mediante la resolución del Tribunal Fiscal originaria, por lo cual la Sala Superior confirma la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos e improcedente la pretensión subordinada a la

pretensión principal. Asimismo, se advierte que existe en trámite un proceso judicial recaído en el Expediente Judicial Nº 00664-2021-0-1801-JR-CA-20, tramitado ante el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cual se está ventilando la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020, del veintiocho de setiembre de dos mil veinte, en el extremo que resolvió confirmar la Resolución de Intendencia Nº 0150140010622, del treinta y uno de enero de dos mil trece, que declaró infundada la reclamación contra la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735, emitida por concepto del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve (reparos por gastos de custodia policial y de pérdida por operaciones forward no deducible), el cual está siendo en materia casatoria ante este Tribunal Supremo. **2.14.** Ahora bien, en torno a la justificación externa de la decisión superior, este Tribunal Supremo considera que la realizada por la Sala de mérito es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas contienen proposiciones sustentadas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional, las que resultan pertinentes para resolver la materia en controversia fijada por las instancias, atendiendo a los términos de lo que fue objeto debatible y los puntos controvertidos. En atención a las premisas normativas y fácticas expuestas, el colegiado superior sustenta de modo suficiente su postura frente a la normativa aplicable al caso concreto, luego de lo cual arriba a una conclusión motivada. **2.15.** Sin perjuicio de lo indicado, no debe confundirse debida motivación de las resoluciones judiciales y debida aplicación del derecho objetivo. En el primer caso, se examinan los criterios lógicos y argumentativos referidos a la decisión de validez, la decisión de interpretación, la decisión de evidencia, la decisión de subsunción y la decisión de consecuencias, en tanto que en el segundo caso debe determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido aplicada de manera debida. Por tanto, el hecho de que la parte recurrente Exsa S. A. no concuerde con la conclusión a que se arriba con base en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento, y en las razones que se expusieron, no significa que el colegiado revisor haya incurrido en las infracciones alegadas. En consecuencia, al no haber afectación al derecho al debido proceso, en su manifestación de derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, devienen **infundadas** las causales procesales planteadas. **Tercero: Análisis de las causales casatorias de naturaleza material 3.1.** Habiéndose desestimado las causales de naturaleza procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto a las causales casatorias de naturaleza material planteadas por la demandante Exsa S.A.: - Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 156 del Código Tributario - Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1 y 105 del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-71/IN, el artículo 1 de la Ley Nº 28256, la Resolución Directoral Nº 03-2008-IN-1701 - "Normas y procedimientos para la custodia de transporte de explosivos, insumo, conexos y todo material sujeto a control por la DICSCAMEC". - Infracción normativa por inaplicación del inciso c) de la norma II del título preliminar del Código Tributario y, en consecuencia, del numeral 1.2 del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago. - Infracción normativa por inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 62 del Código Tributario_- Infracción normativa por inaplicación del artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta - Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta **3.2.** De los argumentos que justifican las causales denunciadas descritas precedentemente, se aprecia que se encuentran relacionadas a la pretensión principal, a la pretensión accesoria y a su subordinada. Asimismo, las causales planteadas por la parte recurrente serán analizadas en forma conjunta, ello debido a que están referidas al cumplimiento de la resolución administrativa. **3.3.** En tal sentido, del expediente administrativo, se advierte lo siguiente: **a)** Como consecuencia del resultado del procedimiento de fiscalización realizado por concepto del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio dos mil nueve, la administración tributaria emitió la Resolución de Determinación Nº 012-003-003073. **b)** La empresa actora, no estando conforme con ello, presentó recurso de reclamación en contra de los valores emitidos, el cual fue declarado infundado mediante Resolución de Intendencia Nº 0150140010622/SUNAT, del treinta y uno de enero de dos mil trece. Esta última resolución fue apelada por la demandante. **c)** Mediante la **Resolución Nº 05266-3-2020,** del veintiocho de setiembre de dos mil veinte, el Tribunal Fiscal declaró nula la mencionada resolución de Intendencia en el extremo referido a la modificación del reparo por gasto extraordinario por ajuste del costo de alquiler de planta, dejando sin efecto la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735 en cuanto al citado reparo; y la **confirmó** en lo demás que contenía. **d)** En cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020, la SUNAT expidió la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640/SUNAT el veintidós de enero de dos mil veintiuno, que reliquidó el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, excluyendo para tal efecto el referido reparo por gasto extraordinario por ajuste al costo de alquiler de planta, y, en consecuencia, rectificó el saldo a favor contenido en la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735. **e)** El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640/SUNAT, la misma que fue confirmada por la **Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021**, del treinta de abril de dos mil veintiuno. Esta es objeto de cuestionamiento en el proceso contencioso administrativo. **3.4.** Con relación a las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF[16], establece lo siguiente: Artículo 143.- Órgano competente El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera. […] Artículo 153.-Solicitud de corrección, ampliación o aclaración Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa. […] Artículo 156.- Resoluciones de Cumplimiento Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la administración tributaria, bajo responsabilidad. En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emitir informe, se cumple con el trámite en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles de notificado el expediente a la Administración Tributaria, debiendo iniciarse la tramitación de la resolución de cumplimiento dentro de los quince (15) primeros días hábiles del referido plazo, bajo responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale plazo distinto. Contra la resolución de cumplimiento se podrá interponer recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó su notificación. En este caso la controversia únicamente estará destinada a determinar si se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, por lo que los alegatos que no estén relacionados con dicho cumplimiento se tienen por no presentados. El Tribunal Fiscal resolverá la apelación dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal Fiscal. […] **3.5.** Del marco normativo expuesto, se advierte que la norma tributaria reconoce al Tribunal Fiscal como el órgano de máxima autoridad para resolver las controversias tributarias en última instancia administrativa; y conforme a lo establecido en el artículo 156 referido, en caso se requiera expedir una resolución de cumplimiento, la administración tributaria la emitirá a fin de cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, bajo responsabilidad. Contra la resolución de cumplimiento, se podrá interponer recurso de apelación, que tendrá por finalidad determinar si la administración tributaria dio cumplimiento al mandato previamente dispuesto y no la reevaluación de la controversia resuelta mediante anterior resolución del mismo tribunal. **3.6.** Así también, se tiene que el artículo 157 del Texto Único Ordenado del Código Tributario señala que, agotada la vía administrativa, la resolución del Tribunal Fiscal podrá impugnarse mediante el proceso contencioso administrativo. La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. **3.7.** Siendo así, el administrado que se sienta afectado por un acto administrativo, puede recurrirlo en la vía judicial, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, según el cual: "Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa". **3.8.** En el caso de autos, la recurrente planteó como primera pretensión principal que se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021, que confirma en vía de apelación la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640/SUNAT, emitida en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020. Por ello, se debe tener en cuenta que, de acuerdo al marco regulatorio que rige el procedimiento contencioso tributario, la controversia tributaria en dicha etapa del procedimiento contencioso tributario se encuentra circunscrita a la verificación de la labor de la autoridad tributaria, esto es, se busca determinar si ha dado o no cumplimiento a lo

dispuesto por el Tribunal Fiscal. **3.9.** Tal limitación de la controversia no es arbitraria, sino que se desprende del artículo 156 del Código Tributario, el cual no implica desconocer los hechos suscitados en sede administrativa y la controversia que fue objeto de pronunciamiento en las resoluciones administrativas cuestionadas en sede judicial y que en el caso particular se ha circunscrito a lo dispuesto en el artículo 156 del Código acotado, etapa procedimental en la que no se admite que la administración tributaria reevalúe la controversia anteriormente resuelta por el Tribunal Fiscal. De esta manera, corresponde en sede judicial emitir un pronunciamiento congruente con los hechos suscitados en sede administrativa, los que no pueden ser descontextualizados, garantizándose con ello el respeto a los principios y garantías de un debido proceso. **3.10.** En el caso concreto, la recurrente sostiene que la Sala Superior no ha realizado un análisis de la obligación tributaria por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, que se pretende dar cumplimiento mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021, "con lo cual se pretende validar una reliquidación que no tiene sustento en el ordenamiento jurídico", puesto que solo correspondería dar cumplimiento a la correcta liquidación de la obligación tributaria. Agrega que el artículo 156 del Código Tributario debe ser entendido como aquella determinación de la obligación tributaria que se ajuste la ley y a la Constitución. Sin embargo, en su concepto, en el considerando octavo de la sentencia de vista, se concluyó que en virtud del artículo 156 del Código Tributario la controversia se encuentra limitada a determinar si la administración ha cumplido con realizar la reliquidación ordenada, lo que es una interpretación errónea, debido a que se estaría avalando la incorrecta reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, en tanto no refleja la correcta ni definitiva determinación de la obligación tributaria conforme al ordenamiento legal y a la Constitución. **3.11.** Estando al marco normativo sobre el procedimiento contencioso tributario y las resoluciones de cumplimiento, de acuerdo a los antecedentes expuestos del expediente administrativo, se advierte que la resolución administrativa recurrida a nivel judicial en el presente proceso fue emitida por el Tribunal Fiscal. Esta se pronuncia sobre el recurso de apelación contra una resolución de cumplimiento emitida por la administración tributaria. **3.12.** Las causales planteadas por la parte recurrente son la infracción normativa por inaplicación de los artículos 1 y 105 del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 019-71/IN, del artículo 1 de la Ley Nº 28256, y de la Resolución Directoral Nº 03-2008-IN-1701 - "Normas y procedimientos para la custodia de transporte de explosivos, insumo, conexos y todo material sujeto a control por la DICSCAMEC"; infracción normativa por inaplicación del inciso c) de la norma II del título preliminar del Código Tributario, y en consecuencia del numeral 1.2 del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago; infracción normativa por inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 62 del Código Tributario; a la infracción normativa por inaplicación del artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta; infracción normativa por inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 62 del Código Tributario; infracción normativa por inaplicación del artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta; e infracción normativa por interpretación errónea del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Las infracciones planteadas por la parte recurrente están referidas a cuestionar los reparos "gasto por operaciones forward no deducible" y "gasto de custodia policial no deducible", el cual es materia de cuestionamiento en sede judicial en el Expediente Judicial Nº 00664-2021; por lo que resulta relevante tener en cuenta el pronunciamiento vertido en la primera Resolución Nº 05266-3-2020, emitida por el Tribunal Fiscal, a fin de comprender la resolución emitida en cumplimiento, así como el estado a nivel judicial de la impugnación de la referida resolución por medio del Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial. Se advierte lo siguiente: a) La Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020 declaró nula la apelada en el extremo que modifica el fundamento del reparo por gasto extraordinario por ajuste al costo de alquiler de planta y deja sin efecto la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735 en cuanto al citado reparo; y confirma la apelada en lo demás que contiene (reparos al gasto por custodia policial y al gasto por operaciones forward no deducible); por lo que debía la administración reliquidar la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735. b) La resolución del Tribunal Fiscal mencionada en el párrafo precedente fue impugnada por la empresa recurrente en el Expediente Nº 664-2021, en los extremos que confirma los reparos del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. c) Dicho expediente fue tramitado ante el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. d) Actualmente, cuenta con un recurso de casación en reserva interpuesto por la empresa recurrente contra la sentencia de vista número veintiuno, del veintiocho de junio de dos mil veintidós, que confirma la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Dicho recurso está siendo ventilado en sede casatoria ante este Supremo Tribunal, el cual tiene la condición de reservado. **3.13.** En el caso de autos, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03791-3-2021, cuya nulidad se pretende, **resuelve confirmar la Resolución de Intendencia Nº 0150150002640/SUNAT**, que reliquidó el impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve, excluyendo para tal efecto el referido reparo por gasto extraordinario por ajuste al costo de alquiler de planta, y, en consecuencia, rectificó el saldo a favor contenido en la Resolución de Determinación Nº 012-003-0030735, teniendo en cuenta lo resuelto en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020. Sin embargo, de los fundamentos expuestos por la recurrente, tanto en su demanda como en los recursos interpuestos, se advierte que cuestiona los reparos que fueron confirmados por la Resolución Nº 05266-3-2020, que vienen siendo impugnados en el proceso judicial recaído en el Expediente Nº 00664-2021, y no el cumplimiento de la reliquidación dispuesta por el Tribunal Fiscal. Sus argumentos son manifiestamente incongruentes con lo que fue objeto de controversia por parte del Tribunal Fiscal en la resolución administrativa impugnada. **3.14.** Además, reiteramos que la apelación en sede administrativa de una resolución de cumplimiento debe tener como finalidad que el Tribunal Fiscal verifique si la administración tributaria dio o no cumplimiento al mandato previamente dispuesto, conforme a lo establecido en el artículo 156 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. **3.15.** Asimismo, resulta válido que la administración tributaria haya efectuado la reliquidación ordenada mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05266-3-2020, pese a que actualmente se encuentra cuestionada a nivel judicial bajo el Expediente Judicial Nº 00664-2021, pues dicha resolución surte efectos y es ejecutable conforme a lo establecido en el artículo 157 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en tanto las decisiones expresadas en tal pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal no sean revocadas o anuladas por el órgano jurisdiccional, lo que no se advierte que haya ocurrido en el caso concreto, al encontrarse en trámite el referido expediente judicial. **3.16.** Al respecto, la Sala Superior señaló lo siguiente en el considerando octavo de la sentencia recurrida: […] en el caso de autos, se encuentra limitada a determinar si la Administración ha cumplido con realizar la reliquidación ordenada explícitamente por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución número 05266-3-2020, no correspondiendo, por tanto, realizar un análisis de fondo respecto a los reparos por gasto por operaciones forward y gasto de custodia policial acotados al Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil nueve, los mismos que han sido analizados en la citada Resolución número 05266-3-2020, no así en la Resolución número 03791-3-2021, que es impugnada precisamente a través del presente proceso contencioso administrativo; y ii) en lo atinente a los demás argumentos esgrimidos, reseñados en los ítems iv) a xiii) del Considerando Segundo de esta sentencia, es necesario hacer hincapié en que la defensa técnica de la empresa accionante cuestiona aspectos de fondo de los reparos por gasto por operaciones forward y gasto de custodia policial […]. **3.17.** Este colegiado supremo concuerda con el criterio desarrollado en la sentencia de vista impugnada, toda vez que la finalidad de la impugnación contra una resolución de cumplimiento se orienta a que el Tribunal Fiscal verifique si la administración tributaria ha dado o no cumplimiento a sus pronunciamientos; y dado que la recurrente no se encuentra en estado de indefensión pues ha tenido la oportunidad de cuestionar la decisión de la Sala Superior en el Expediente Judicial Nº 00664-2021, como ha hecho al interponer recurso de casación contra la sentencia de vista, el cual tiene la condición de reservado. En consecuencia, devienen **infundadas** estas causales planteadas por la parte recurrente. Por lo expuesto, se concluye que la sentencia objeto de casación no incurrió en las causales denunciadas por la parte recurrente, por lo cual la decisión de la Sala Superior se encuentra acorde al derecho y a la justicia. **DECISIÓN** Por tales consideraciones, **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante **EXSA Sociedad Anónima,** mediante escrito del doce de diciembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos sesenta y ocho a mil quinientos veintinueve). En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia

de vista contenida en la resolución número veinte, del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas mil trescientos cincuenta y dos a mil trescientos sesenta y dos), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por Exsa Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, CABELLO MATAMALA, DELGADO AYBAR, **TOVAR BUENDÍA.**

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 En todos los casos, se transcriben las reseñas elaboradas en su oportunidad por la mencionada sala.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 Loc. cit.

5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México". Sentencia del veintiséis de noviembre de dos mil diez; párr. 225.

6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso J. vs. Perú". Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece; párr. 258.

7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá". Sentencia del dos de febrero de dos mil uno; párr. 127.

8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Casa Nina vs. Perú". Sentencia del veinticuatro de setiembre de dos mil veinte; párr. 88.

9 Resolución recaída en el Expediente N. ° 02467-2012-PA/TC, publicada en el portal web de la mencionada institución el diecinueve de enero de dos mil quince.

10 **Constitución Política del Estado**
Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

11 **Código Procesal Civil**
Artículo 122.- Las resoluciones contienen: […]
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
Artículo 197. Valoración de la prueba
Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

12 **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**
Artículo 12.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

13 El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente Nº 1480-2006-AA/TC, publicada el dos de octubre de dos mil siete en el diario oficial El Peruano, ha puntualizado que:
[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios.

14 Resolución del referido tribunal recaída en el Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC, publicada el ocho de noviembre de dos mil ocho en el diario oficial El Peruano.

15 Resolución del referido tribunal recaída en el Expediente Nº 00356-2022-PHC/TC publicada el quince de junio de dos mil veintitrés en el diario oficial El Peruano.

16 Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de junio de dos mil trece.

C-2245460-17

CASACIÓN Nº 44847-2022 LIMA

TEMA: PRESCRIPCIÓN ADUANERA
SUMILLA: Atendiendo a lo dispuesto en el precedente vinculante contenido en la Casación Nº 7275-2021-Lima, el Código Tributario sí resulta aplicable para establecer el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 155 de la Ley General de Aduanas.
PALABRAS CLAVE: prescripción aduanera, precedente vinculante, facultad para exigir el pago

Lima, tres de agosto de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la Procuraduría Pública de la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del tres de octubre de dos mil veintidós (folios 936 a 958 del expediente judicial electrónico - EJE[1]), presentó recurso de casación contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticinco, del diecinueve de setiembre de dos mil veintidós (folios 918 a 930 del EJE), que **confirmó** la sentencia apelada, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós (folios 774 a 791 del EJE), que declaró **infundada** la demanda. Antecedentes Demanda Mediante escrito del quince de julio de dos mil veinte (subsanada por escritos del seis y once de agosto del dos mil veinte), la SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa (folios 03 a 17 del EJE). Señala las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1111-A-2020, en lo referente al artículo primero, que revoca la Resolución de División Nº 000-323200/2018-00179 en el extremo referido a la prescripción de la facultad para exigir el pago de tributos determinados. **Pretensión accesoria:** Se declare la validez de la resolución de División mencionada, tanto en cuanto al tema de fondo como a la improcedencia de la prescripción de la facultad para cobrar las deudas materia del caso. Sus argumentos son los siguientes: a) La posición del Tribunal Fiscal es errada, por cuanto la determinación de la deuda tributaria aduanera y la exigibilidad de su pago no tienen un origen simultáneo, sino secuencial. b) La obligación tributaria nació el año dos mil siete, cuando Interloom S.A.C. numeró las declaraciones aduaneras de mercancías fiscalizadas, en las que se verificó una incorrecta liquidación de tributos. La deuda tributaria aduanera fue determinada en dos momentos, primero, al momento de la numeración de la declaración y, segundo, al concluir la fiscalización efectuada entre diciembre de dos mil once a marzo de dos mil doce, cuando verificó una incorrecta liquidación de tributos derivados del Acuerdo de Complementación Económica Nº 58. c) El Tribunal Fiscal entiende erradamente que el cómputo del plazo para exigir el pago también inicia desde el primero de enero de dos mil ocho, simultáneamente con el nacimiento de la obligación tributaria, pues no aplica ningún acto de interrupción ni suspensión de plazos de prescripción; a pesar de que, a ese momento, la deuda —vale decir, los montos de los tributos y la multa— ni siquiera existía. d) La denunciante considera que, primero, debe determinarse la deuda tributaria y aplicar la sanción de multa; luego puede exigirse su pago, conforme lo indica el diseño normativo de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario. El inicio del cómputo del plazo de prescripción para exigir el pago de la deuda determinada en la fiscalización debe comenzar desde que se emita la resolución de determinación y la resolución de multa, siendo que desde ese momento puede hablarse de cómputo del plazo de prescripción para exigir el pago, no antes. Con ello, se verifica que, a la fecha de presentación del escrito, la facultad de cobro se podía ejercer válidamente, pues el plazo de cuatro años aún no había transcurrido. e) Desde la interrupción válida del acto para la determinación de la deuda (13 de diciembre de 2011) hasta la fecha de notificación de la resolución que determinó la diferencia de tributos dejados de pagar (02 de marzo de 2012), transcurrieron dos meses y diecinueve días. Si contamos el plazo de cuatro años para cobrar a partir del acto de interrupción aquí señalado, tenemos que la SUNAT aún contaba con tres años, nueve meses y once días para cobrar la deuda válidamente. **Contestaciones de la demanda El Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, mediante su Procuraduría Pública**, contesta la demanda (folios 41 a 54), con los siguientes fundamentos: a) El inicio del cómputo del plazo de prescripción para exigir el pago requiere necesariamente que la deuda exista, que haya sido determinada, que su monto por concepto de tributos y multa se conozca; ya que, de no existir, no habría nada por cobrar y mucho menos algún plazo de prescripción por iniciar. Por ello, primero debe determinarse la deuda tributaria —en este caso, determinar la deuda tributaria y aplicar la sanción de multa— y luego puede exigirse su pago. b) Las declaraciones aduaneras de mercancías fueron numeradas en el año dos mil siete, por lo que los plazos de prescripción se iniciaron el primero de enero de dos mil ocho y vencían el primer día hábil de dos mil doce, siendo que, a la fecha en que fue determinada (02 de marzo de 2012), el plazo ya había prescrito. c) Los plazos para determinar la deuda y

para cobrarla comienzan en momentos simultáneos y no diferentes, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 155 de la Ley General de Aduanas. d) La SUNAT no ha mencionado y menos probado cuál sería el acto que interrumpía la prescripción, pues entre los años 2008 y 2012 no existe ningún acto administrativo por parte de la parte demandante destinado a hacer efectivo el cobro de la deuda aduanera. e) El artículo 1933 del Código Civil no prevalece sobre el artículo 155 de la Ley General de Aduanas por el principio de especialidad, por lo que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1111-A-2020 ha sido emitida de acuerdo a ley y no se encuentra afectada de causal de nulidad. La empresa **Interloom Sociedad Anónima Cerrada** contesta la demanda (folios 59 a 75) con los siguientes argumentos: a) No existe discusión sobre el plazo de prescripción aplicable, sino sobre el momento en que dicho plazo inició. Para ello, basta revisar las normas específicas sobre el plazo de prescripción en materia aduanera vigente al momento de la numeración de las declaraciones aduaneras de mercancías de importación, es decir, el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 129-2004-EF. b) La obligación tributario-aduanera nació en la fecha de la numeración de la declaración aduanera y el plazo de prescripción de la acción de SUNAT para cobrar dicha deuda inició el uno de enero del año siguiente a la fecha de la numeración. Solo queda revisar si hubo algún supuesto de interrupción o suspensión del plazo que se haya verificado entre el primero de enero de dos mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil once. c) Coincide en que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once no hubo ningún supuesto de interrupción o suspensión del plazo de prescripción de la facultad de la SUNAT para cobrar una deuda. Por eso, la facultad de SUNAT prescribió el uno de enero del dos mil doce. d) En el supuesto negado de que se acepte la postura de la SUNAT, es decir, que recién a partir de dos mil doce podría exigirse el pago de esta deuda y, consecuentemente, computarse el plazo de prescripción, señala que, a la fecha en que se exigió el pago coactivo de la deuda, la facultad de la SUNAT para cobrar la deuda de autos ya se encontraba prescrita. **Sentencia de primera instancia** Mediante sentencia del treinta y uno de enero de dos mil veintidós (folios 774 a 791), el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró **infundada** la demanda. La sentencia señaló los siguientes fundamentos: […] el cómputo del plazo de prescripción de acción de la SUNAT para aplicar determinar y cobrar tributos inició el 01 de enero de 2008 y culminaría el 01 de enero de 2012 de no presentarse actos que interrumpan o suspendan el plazo de prescripción. […] en vista que el artículo 12° de la Ley General de Aduanas, aplicable al caso, señalada en su inciso a) que la obligación tributaria aduanera en el caso de la importación nace en la fecha de numeración de la declaración, entonces, por efecto del inciso a) del artículo 21° de la referida Ley, la acción de la Administración Aduanera PARA DETERMINAR Y COBRAR LOS TRIBUTOS prescribe a los cuatro años computados a partir del primero de enero del año siguiente de la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera. En el caso materia de análisis el computo del plazo inicio a partir del primero de enero de dos mil ocho y culminó el primero de enero de dos mil doce, por lo que la Administración Aduanera durante dicho plazo tenía habilitadas sus facultades de primero determinar la obligación tributaria aduanera y luego exigir el cobro de la misma, debido que a partir del dos de enero de dos mil doce operaba la prescripción de dichas acciones. Ello si es que durante el plazo antes señalado no se presentaban actos que interrumpan o suspendan el plazo de prescripción. […] se aprecia que mediante la Carta de Presentación Nº 893-2011-SUNAT/3B2000 y el Primer Requerimiento Nº 1770-2011-SUNAT-3B2200, notificadas el 13 de diciembre de 2011, se inició el procedimiento de fiscalización, y producto de ello se emitió la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2012-000063 notificada el 02 de marzo de 2012, a través de la cual la Administración Aduanera dispone la cobranza a INTERLOOM S.A.C. de los tributos dejados de pagar, como consecuencia de la incorrecta liquidación de los tributos aplicables a las 19 DUAs efectuadas en el año 2007, por la suma de US$ 65,764.00 más intereses; sin embargo, de acuerdo al numeral 2 del artículo 45° del Código Tributario, con la notificación del acto que da inicio al procedimiento de fiscalización (Carta de Presentación) no se interrumpe el plazo de prescripción de la acción de la Administración Aduanera para exigir el pago de la obligación tributaria […]. […] si bien la prescripción se suspende durante la tramitación del proceso contencioso tributario, sin embargo, en el caso de autos dicho proceso se inició con la interposición del recurso de reclamación por parte del administrado contra el acto reclamable emitido por la Administración Aduanera, el cual data del 20 de marzo de 2012, esto es, fue presentado cuando ya la deuda se encontraba prescrita. Asimismo, situación similar ocurre con el pago parcial de la deuda efectuada por la recurrente de fecha 10 de abril de 2012, la cual si bien es una causal de interrupción prevista en el literal c) del numeral 2 artículo 45° del Código Tributario; sin embargo, el citado acto fue realizado cuando ya la deuda se encontraba prescrita. **Sentencia de vista** Mediante sentencia de vista número veinticinco, del diecinueve de setiembre de dos mil veintidós (folios 918 a 930 del EJE), la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, **confirmó** la sentencia apelada, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós (folios 774 a 791 del EJE), que declaró **infundada** la demanda. Señala los siguientes fundamentos: […] en el presente caso no corresponde la aplicación del Código Tributario y en especial del Decreto Legislativo Nº 1113, pues como ya se ha mencionado, debe resolverse conforme a lo regulado por la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y el Decreto Legislativo Nº 1053. En esa línea, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley General de Aduanas dispone que: "En lo no previsto en la presente Ley o el Reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Tributario", sin embargo, en el presente caso existe normativa especial – Ley General de Aduanas, advirtiéndose así que en el caso concreto no resulta de aplicación del numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. […] Como es de verse, el Decreto Legislativo Nº 1433 modifica la Ley General de Aduanas, similarmente como el Decreto Legislativo Nº 1113 modifica al Código Tributario, pues ambas normas modificaron el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la facultad de cobrar tributos, disponiendo que tal inicio debe computarse desde el día siguiente de la notificación de la resolución de determinación, consagrándose de esta manera que en cada caso la prescripción del cobro de la deuda tributaria es posterior a la determinación de la misma, circunstancia que demuestra lo cuestionable que resulta pretender la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1113 a la Ley General de Aduanas, no solo porque no se advierte la exigencia de supletoriedad de esta última, sino porque altera cada ordenamiento, pretendiendo aplicarse sin sustento una norma destinada a dispositivo legal. **Materia controvertida en el presente caso** Con relación a los hechos determinados por las instancias de mérito y en concordancia con las causales por la que fue admitido el recurso de casación interpuesto —infracción normativa por interpretación errónea de los incisos a) y c) del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053: e infracción normativa por inaplicación de lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la Ley General de Aduanas y del numeral 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, numeral incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1113—, concierne a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió las normas citadas, al confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante auto de calificación del dieciocho de enero de dos mil veintitrés (folios 146-156 del cuaderno de casación), la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, por las siguientes causales: a) Infracción normativa por interpretación errónea de los incisos a) y c) del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 b) Infracción normativa por inaplicación de lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la Ley General de Aduanas y del numeral 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, numeral incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1113. CONSIDERANDO **PRIMERO. El recurso de casación 1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor

casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, se debe precisar que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **Análisis de las causales planteadas por la recurrente SEGUNDO. Infracción normativa por interpretación errónea de los incisos a) y c) del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053; e infracción normativa por inaplicación de lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la Ley General de Aduanas y del numeral 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, numeral incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1113 2.1.** Citemos los dispositivos legales cuya infracción se alega: **Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053** Artículo 155.- Plazos de prescripción La acción de la SUNAT para: **a)** Determinar y cobrar los tributos, en los supuestos de los incisos a), b) y c) del artículo 140 de este Decreto Legislativo, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera; […] **c)** Aplicar sanciones y cobrar multas, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la SUNAT detectó la infracción; **Disposiciones complementarias finales** Segunda.- En lo no previsto en la presente Ley o el Reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Tributario. **Código Tributario** Artículo 44.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN El término prescriptorio se computará: […] **7.** Desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ellas. **2.2.** Como argumentos que sustentan las infracciones normativas, señala lo siguiente: a) La Sala Superior efectúa una interpretación normativa errada del referido dispositivo, al considerar el cómputo simultáneo de los plazos prescriptorios para determinar tributos y sancionar multas, y para el cobro de los referidos conceptos. Asimismo, indica que, a consideración de la referida Sala Superior, dichos plazos correrían de manera simultánea a partir del uno de enero siguiente al nacimiento de la obligación tributaria o de la comisión y/o detección de la infracción correspondiente. Arguye que dicha conclusión errada se sustentaría en una interpretación literal, la cual conduciría a imposibles jurídicos y materiales tales como: **i)** que la administración aduanera estaría facultada a cobrar tributos que no han sido determinados ni han sido cuantificados; **ii)** que se podrían cobrar tributos y/o multas sin que el deudor tenga oportunidad de ejercer su derecho de contradicción; **iii)** que la administración aduanera podría cobrar tributos que no tienen el carácter de exigibles tributariamente; **iv)** que acontecerían causales de interrupción del plazo de prescripción que extienden el plazo para determinar tributos, pero que, al no detener el plazo para su cobro, perderían su propósito; **v)** que la administración aduanera se encontraría imposibilitada de cobrar los tributos, pese a que sean impuestos válidamente y dentro del plazo de prescripción para determinarlos y aplicarlos. b) Agrega que, conforme a esta errada interpretación literal, ocurriría que: **i)** la SUNAT debió cobrar a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil once los tributos y multas cuantificados recién en marzo de dos mil doce, es decir, debió cobrar una deuda que en ese momento no existía, lo cual resultaría un imposible material; **ii)** la notificación del inicio de la fiscalización como causal de interrupción del plazo de prescripción para determinar los tributos reiniciaría el cómputo del plazo para efectuar dicha determinación y sancionar; pero dicha notificación no tendría ningún efecto en el plazo de prescripción para cobrar la deuda, pues este último transcurriría inexorablemente; y **iii)** tal razonamiento —que el plazo de prescripción para cobrar y el plazo para determinar se inician simultáneamente— conduciría a que la administración aduanera se encuentre impedida de cobrar tributos y/o multas aun cuando estos fueron determinados y sancionados válidamente dentro del plazo de prescripción, porque supuestamente el plazo de prescripción para su cobro habría vencido antes de que siquiera el acreedor hubiera tenido la posibilidad legal y real de cobrarla. La recurrente sostiene que correspondería efectuar una interpretación sistemática, considerando las facultades para determinar y cobrar la deuda, lo cual se desprendería de la forma en que regula la Ley General de Aduanas (aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053), en la parte referida al régimen tributario aduanero (sección sexta), en el título I (referido a la obligación tributaria), en donde primero se regularía el nacimiento de la obligación tributaria, luego su determinación, seguidamente su exigibilidad y finalmente su extinción. c) Con base en ello, el cómputo debería iniciarse de forma secuencial, es decir, el cobro de la deuda a continuación de su determinación, desde el uno de enero del año siguiente del nacimiento de la obligación, o bien de la comisión o detección de la infracción; de manera tal que solo posteriormente a que se determine la deuda, se iniciaría el plazo de prescripción para su cobro. d) Antes de la modificación de la Ley General de Aduanas mediante Decreto Legislativo Nº 1433, el texto consolidaba en un mismo inciso la facultad para determinar y cobrar, pero de forma conjunta y sucesiva, es decir, si se determinaba tributos, la siguiente acción era cobrarla. Agrega que el Código Tributario también contenía preceptos y orden de ejercicio de facultades similares, antes de su modificatoria con el Decreto Legislativo Nº 1113. e) Asimismo, fundamenta su posición en lo que describe sobre la prescripción el artículo 1993 del Código Civil y el voto de la Magistrada Marianella Ledesma en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2019-PI/TC, en el sentido de que la prescripción debería comenzar a correr desde el día en que se podría ejercitar la acción, y no podría efectuarse cómputo simultáneo de los plazos de prescripción de las facultades de determinar tributo y/o sancionar con multas, así como de cobrar tales tributos o multas, ya que necesariamente sus determinaciones tendrían que preceder a sus cobros. Concluye indicando que la SUNAT efectuó fiscalización en diciembre de dos mil once, en la cual verificó omisión de pagos determinados en marzo de dos mil doce, por lo cual: **i)** la SUNAT se encontraría habilitada a cobrar luego de marzo de dos mil doce, cuando los tributos fueron determinados; **ii)** la notificación del inicio de fiscalización interrumpiría el plazo para determinar tributos, lo que también afectaría el plazo de prescripción de la facultad para cobrarlos, cuyo cómputo naturalmente se retrasaría; **iii)** los tributos determinados en marzo de dos mil doce podrían ser válidamente cobrados siempre que se efectúen dentro del plazo de prescripción; y **iv)** la codemandada podía ejercer sus actos impugnatorios y, como consecuencia, la SUNAT suspendería el ejercicio de su cobro, en tanto queden firmes las resoluciones. f) La Sala Superior inaplica los referidos dispositivos, ya que opina que no correspondería recurrir a la norma supletoria, como es el Código Tributario, pues, a consideración de dicha instancia, la controversia podría ser resuelta aplicando exclusivamente lo dispuesto en la Ley General de Aduanas. Ello para la recurrente resultaría errado, dado que el Código Tributario contiene una regulación general, aplicable de manera supletoria. g) Por el contrario, indica la entidad recurrente que la Ley General de Aduanas, a la fecha de los hechos, no contemplaría expresamente el momento a partir del cual inicia el cómputo del plazo de prescripción para ejercer la facultad de cobranza para deudas determinadas en la fiscalización, pero tal previsión sí estaba regulada en el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, numeral incorporado mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1113, publicado el cinco de julio del dos mil doce. Finalmente, agrega que la sentencia de vista no habría evaluado su aplicación, lo cual ha determinado un cálculo

errado del plazo prescriptorio y que se declare erróneamente prescrita la facultad de la SUNAT. **2.3.** Es pertinente señalar que por **interpretación errónea** la doctrina indica que: "Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una forma de violarla"[4]. Así, estaremos frente a esa forma de infracción cuando la norma legal elegida para la solución de la controversia es la correcta, reconociéndose su existencia y validez para la solución del caso; sin embargo, la interpretación que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un sentido y alcance que no tiene. Con relación a la infracción normativa sobre **inaplicación**, la misma radica en inaplicar a un hecho la regla que le corresponde[5] y se puede presentar de dos maneras: en sentido positivo, vulnerando el alcance del precepto[6], y en sentido negativo, por desconocimiento o inaplicación del mismo; la segunda consiste en darle a una norma un sentido distinto al que correctamente le corresponde. Corresponde, pues, identificar las premisas fácticas determinadas en la sentencia de vista, a efectos de establecer si a ellas corresponde aplicarles el enunciado normativo cuestionado. La aplicación indebida se presenta cuando una norma sustantiva se ha aplicado a un caso distinto para el que está prevista; es decir, no existe una conexión lógica entre la norma y el hecho al cual se aplica. **2.4.** Estando a ello, resulta conveniente describir el trámite administrativo que originó el presente proceso. Así, tenemos: 1. Por Carta de Presentación Nº 893-2011-SUNAT/3B2000, del veintiuno de noviembre de dos mil once, la administración aduanera pone de conocimiento de Interloom S.A.C. el inicio de la acción de fiscalización con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras; la acción alcanza a las declaraciones únicas de aduanas del año 2007. 2. Se emite la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2012-000063, de fecha nueve de febrero de dos mil doce, con la cual se resuelve la cobranza a Interloom S.A.C. del importe ascendente a US$ 65,764.00 (sesenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro dólares americanos con cero centavos), más los intereses que se detallan en el cuadro anexo de dicha resolución; ello al haberse verificado la incorrecta liquidación de tributos en las importaciones de mercancías contenidas en el anexo I del Acuerdo de Complementación Económica Nº 58, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3 del acuerdo, precisado en el numeral 4.5 de la Circular Nº 14-2006-SUNAT/A. 3. No estando conforme con la decisión, el veinte de marzo de dos mil doce, Interloom S.A.C. interpone recurso de reclamación parcial contra la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2012-000063, en el extremo referido a los intereses moratorios que a decir de la contribuyente ascenderían a la suma de US$ 29,185.00 (veintinueve mil ciento ochenta y cinco dólares americanos con cero centavos), y de los montos que se vengan devengando hasta la fecha de resolución del recurso. 4. El veintisiete de diciembre de dos mil doce, la administración aduanera emite la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2012-000614, resolviendo declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto contra la Resolución de Intendencia Nº 000 3B2000/2012-000063, disponiendo se proceda a realizar la imputación de los pagos efectuados a través de las liquidaciones detalladas en el cuadro II de la referida resolución, a las deudas reclamadas contenidas en las liquidaciones de cobranza que precisa en el cuadro I, y se prosiga con la cobranza del saldo pendiente de cancelar con los intereses moratorios que se devenguen hasta la fecha de cancelación efectiva. 5. Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03436-A-2018, del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se confirma la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2012-000614. 6. Con el Memorándum Nº 353-2018-SUNAT/323200, del quince de noviembre de dos mil dieciocho, se comunica al jefe de la División de Recaudación Aduanera para que disponga el inicio de las acciones de cobranza respecto de las deudas tributario-aduaneras registradas en las liquidaciones que allí se señala, y se hace mención a la existencia de pedidos de prescripción interpuestos con los Expedientes Nº 000-URD106-2018-471273-6 y Nº 000-URD003-2018-470559-3, precisando que dicha tramitación no impide que la administración inicie las acciones de cobranza correspondientes. 7. Mediante escrito presentado del dos de agosto de dos mil dieciocho, tramitado en el Expediente Nº 000-URD003-2018-470559-3, se observa que Interloom S.A.C. solicita se declare prescrita la acción para exigir el pago de la deuda tributaria aduanera pendiente (y sus intereses), luego del pago parcial realizado por la empresa el once de abril de dos mil doce vinculado a las deudas tributarias aduaneras indicadas, originadas por mercancías que fueron destinadas al régimen de importación para el consumo. 8. Con escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho, tramitado en el Expediente Nº 118-URD106-2018-471273-6, Interloom S.A.C. solicita la prescripción de la acción de la administración aduanera para exigir el pago de la deuda tributaria aduanera vinculada con la Resolución de Intendencia Nº 000-3B0000-2012-000063. 9. Mediante Resolución de División Nº 000 323000/2018-000179, del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, sustentada en el Informe Nº 286-2018-SUNAT-323200, del quince de noviembre de dos mil dieciocho, la administración aduanera declaró infundada la solicitud presentada. 10. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, la empresa Interloom S.A.C. presenta recurso de apelación. Es resuelto por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01111-A-2020, de fecha treinta de enero de dos mil veinte, que dispone revocar la Resolución de División Nº 000 323200/2018-000179, emitida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho por la Intendencia Nacional de Control Aduanero, en el extremo referido a la facultad de la Aduana de exigir el pago de las deudas materia de este caso; y confirmar la Resolución de División Nº 000 323200/2018-000179, emitida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por la Intendencia Nacional de Control Aduanero, en cuanto a la facultad de la Aduana para determinar la deuda materia de las declaraciones aduaneras objeto de este caso. **2.5.** Al respecto, se debe tener en consideración que la Sala de mérito, en la sentencia de vista recurrida, sostiene lo siguiente: **SEXTO:** Es importante enfatizar que en el presente caso no corresponde la aplicación del Código Tributario y en especial del Decreto Legislativo Nº 1113, pues como ya se ha mencionado, debe resolverse conforme a lo regulado por la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y el Decreto Legislativo Nº 1053. En esa línea, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley General de Aduanas dispone que: "En lo no previsto en la presente Ley o el Reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Tributario", sin embargo, en el presente caso existe normativa especial – Ley General de Aduanas, advirtiéndose así que en el caso concreto no resulta de aplicación del numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. **2.6.** Ahora bien, a efectos de dar respuesta a las infracciones normativas propuestas, se debe considerar que esta Sala Suprema, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitió la Casación Nº 7275-2021-Lima, fijando como precedente vinculante, lo siguiente: **6.1.1** Para efectos de la interpretación de los alcances del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, en aplicación de la segunda disposición complementaria final, se permite la remisión a las normas contenidas en el Código Tributario, respecto al inicio del cómputo de los plazos de prescripción; lo cual resulta acorde a la norma IX del título preliminar del citado código. **6.1.2.** De acuerdo a la interpretación sistemática de los artículos 43, 44, 45 y 46 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria (aduanera) y aplicar sanciones, así como para exigir el pago de estas, no acontece de forma simultánea, sino en dos momentos diferentes e identificables; por lo que el inicio del cómputo del plazo prescriptorio de ambas facultades se realiza de forma secuencial. **6.1.3.** El inciso 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, respecto al inicio del cómputo del plazo prescriptorio de la facultad de la administración para exigir el pago de la obligación tributaria aduanera, se aplica ante la determinación de tributos y aplicación de sanciones que se hubieran dado después de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1113. **2.7.** Por lo tanto, considerando lo desarrollado en el precedente vinculante antes señalado, se observa que, atendiendo a lo establecido en la segunda disposición complementaria final de la Ley General de Aduanas, el Código Tributario sí resulta aplicable para determinar el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 155 de la mencionada ley. Por tanto, el caso concreto se debe resolver considerando lo regulado en el numeral 7 del artículo 44 del código señalado. No obstante ello, en la sentencia de vista recurrida se ha indicado que el aludido código no resulta aplicable, lo que evidencia que la interpretación dada por el colegiado de mérito se contrapone al precedente vinculante antes precisado, evidenciándose la interpretación errónea de la norma denunciada como tal, motivo por el cual el recurso en este extremo resulta **fundado. 2.8.** A mayor abundamiento, el artículo 45 del Código Tributario, relacionado con la interrupción de la prescripción, señala: 1. El plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria **para determinar la obligación tributaria** se interrumpe: […] c) Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria para la

determinación de la obligación tributaria, con excepción de aquellos actos que se notifiquen cuando la SUNAT, en el ejercicio de la citada facultad, realice un procedimiento de fiscalización parcial. 2. El plazo de prescripción de la acción para **exigir el pago de la obligación** tributaria se interrumpe: a) Por la notificación de la orden de pago. […] **2.9.** De los dos numerales contenidos en el artículo antes mencionado, se observa dos supuestos claramente definidos en los que procede la interrupción del plazo de la prescripción, pero conviene precisar qué se entiende por "determinación de la obligación tributaria" y "exigibilidad del pago de la obligación". Así, se tiene que la **determinación de la obligación tributaria** se da cuando aún se desconoce el monto que debe pagar el contribuyente; esto se encuentra relacionado con la inacción por parte de la administración tributaria para iniciar la fiscalización, que culminará con la dación de un valor tributario. En cuanto a la **exigibilidad del pago de la obligación**, se entiende que, en ese caso, ya existe un monto que el contribuyente se encuentra obligado a cancelar y el mismo ya ha sido puesto en su conocimiento (mediante una resolución de determinación y/o de multa); sin embargo, la administración tributaria no procura efectuar dicho cobro. **2.10** Por consiguiente, de aquellos supuestos, se puede verificar que estamos ante dos momentos diferentes y fácilmente identificables: **el primero** implica la etapa de fiscalización y **el segundo** es la culminación de la labor de fiscalización, la cual se da a través de la emisión de valores tributarios que el contribuyente se encuentra obligado a cancelar; esto último concuerda con el artículo 75 del Código Tributario, el cual señala: "Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si fuera el caso. […]". Entonces, se puede concluir que la facultad de la SUNAT **para exigir el cobro** de los tributos recién puede ser ejercida desde la notificación de la obligación tributaria, la misma que ha sido **determinada** mediante la fiscalización tributaria. **2.11** Como se recuerda, Interloom S.A.C. importó mercancías amparadas en las Declaraciones Únicas de Aduanas de números 019618, 031770, 039011, 045184, 060754, 065050, 068112, 072857, 074484, 079293, 089477, 097897, 111621, 120075, 130015, 133557, 138036, 152479, 159015, las cuales fueron numeradas en el año 2007; por lo que el cómputo del plazo de prescripción inició el **01 de enero de 2008** y vencería el **01 de enero de 2012**, siempre que no concurran las causales de interrupción previstas en el numeral 1 del artículo 45 del Código Tributario. Sin embargo, se aprecia de lo actuado que, con fecha **13 de diciembre de 2011**, se notifica a la administrada la Carta de Presentación Nº 893-2011-SUNAT-3B2000[7] y el Primer Requerimiento Nº 1770-2011-SUNAT-3B2200[8], que comunican el inicio de la acción de fiscalización y le requieren información y documentación aduanera. Por lo tanto, aquella actuación administrativa se enmarca como causal de suspensión prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 45 del Código Tributario, lo que evidencia que no se ha producido la prescripción para la determinación de la obligación tributaria. **2.12** Habiéndose comunicado el inicio del procedimiento de fiscalización, se tiene que desde el 13 de diciembre de 2011 se inicia el cómputo del plazo de prescripción **para la determinación de la obligación tributaria**, el mismo que **vencía en diciembre de 2015**; pero, como se advierte de los autos, con fecha **02 de marzo de 2012, se notifica** a la administrada con la Resolución de Intendencia Nº 000-3B0000/2012-0063[9], la cual dispuso el cobro de tributos dejados de pagar, circunstancia que evidencia que el cómputo del plazo prescriptorio también se vio interrumpido con la aludida notificación. **2.13** Por su parte, no encontrándose conforme con la resolución de Intendencia señalada, el **20 de marzo de 2012** interpone recurso de reclamación[10], el mismo que fue resuelto por medio de la Resolución de Intendencia Nº 000-3B0000/2012-614[11], del veintisiete de diciembre de dos mil doce; tras ello, interpone recurso de apelación[12] (21 de febrero de 2013), que da origen a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03436-A-2018[13], del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que confirma la resolución de Intendencia antes señalada. Así, de conformidad con lo prescrito por el literal a) del numeral 1 del artículo 46 del Código Tributario, se suspende el cómputo del plazo de prescripción durante la tramitación del procedimiento contencioso-tributario; esto es, el plazo de prescripción quedó suspendido desde la interposición del recurso de reclamación hasta la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal antes aludida (desde el 20 de marzo de 2012 hasta el 04 de marzo de 2018). **Actuación en sede de instancia TERCERO. 3.1** Pues bien, si bien es cierto que en agosto de dos mil dieciocho[14] la empresa demandante solicitó la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria aduanera, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, se evidencia que en el caso concreto no se ha producido la prescripción solicitada, pues existieron causales de interrupción conforme a lo precisado, por lo que es posible determinar que en el caso, se ha interpretado erróneamente la norma invocada como tal, y corresponde **casar la sentencia de vista. 3.2** Por tanto, de lo que aparece en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1111-A-2020, que es materia de cuestionamiento en el presente proceso, el Tribunal Fiscal revoca la Resolución de División Nº 000 3232000/2018-000179, emitida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho por la Intendencia Nacional de Control Aduanero, en el extremo referido a la facultad de la Aduana de exigir el pago de las deudas. Sin embargo, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, se advierte que en el caso concreto no se ha producido la prescripción solicitada por la administrada, por lo que, la denegatoria de aquel pedido que fue declarado infundado por medio de la resolución de División antes aludida se encuentra conforme a ley; por tal razón, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1111-A-2020 se encuentra inmersa en causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº 27444, por lo que corresponde, actuando en sede de instancia, **revocar la sentencia de primera instancia apelada y**, reformándola, **declarar fundada** la demanda. **DECISIÓN:** Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el artículo 396 del Código Procesal Civil, se Resuelve: **DECLARAR FUNDADO** el recurso de casación planteado el tres de octubre de dos mil veintidós (folios 936 a 958 del expediente judicial electrónico), interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En consecuencia, **CASAR** la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticinco, del diecinueve de setiembre de dos mil veintidós (folios 918 a 930), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **actuando en sede se instancia, REVOCAR** la sentencia de primera instancia, del treinta y uno de enero de dos mil veintidós (fojas 774 a 791), que declaró infundada la demanda, y, **REFORMÁNDOLA, DECLARAR FUNDADA** la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01111-A-2020 y válida la Resolución de División Nº 000-323200/2018-00179. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria contra el Tribunal Fiscal y contra Interloom S.A.C., sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Delgado Aybar.** SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, CABELLO MATAMALA, **DELGADO AYBAR,** TOVAR BUENDÍA.

---

1 En adelante, todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.
2 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.
3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.
4 CARRIÓN LUGO, Jorge (2003). El recurso de casación en el Perú. Volumen I. Segunda edición. Lima, Grijley; p. 5.
5 HITTERS, Juan Carlos (1984). Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. La Plata, Librería Editora Platense; p. 276.
6 Loc. cit.
7 Foja 367
8 Foja 362
9 Foja 241
10 Foja 227
11 Foja 128
12 Foja 116
13 Foja 620
14 Fojas 523 y 557

C-2245460-18

CASACIÓN Nº 26489-2023 LIMA

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés

VISTOS Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Beagle Agentes de Aduana Sociedad Anónima, mediante escrito presentado de fecha once de julio de dos mil veintitrés (fojas mil ochocientos setenta y tres del Expediente Judicial Electrónico - EJE), contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número veintiséis, de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés (fojas mil ochocientos cincuenta del EJE),que confirma la sentencia apelada emitida mediante resolución

número dieciocho, de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés (fojas mil quinientos setenta y nueve del EJE) que declara infundada la demanda. CONSIDERANDO **Primero:** Se debe proceder a calificar si dicho recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 386, 388, 391 y 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria en el proceso contencioso administrativo. Fines del Recurso de Casación **Segundo**: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador ha establecido a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia. **Causales Tercero:** El artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece las causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. **Aplicación de la norma bajo el Principio de Especialidad Cuarto:** El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, "Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, señala que la acción contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; y en concordancia con el inciso 1 del artículo 2 de la mencionada norma, ante defecto o deficiencia de la Ley el Juez debe aplicar los principios del derecho administrativo y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Que, por el Principio de Especialidad de la norma, que señala que "la norma especial prima sobre la general", ante cualquier vacío, deficiencia, y/o antinomia, debe resolverse el conflicto bajo la lógica de este marco normativo, prevaleciendo la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. **Quinto**: El artículo 35 primer párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, "Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo", aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, señala que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, ésta última ha sido modificada por la Ley Nº 31591[1], publicada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, introduciendo modificaciones respecto de los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de casación, entre otros, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo realizar el análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, en específico, de los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, señalando que se tomarán de forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo: el inciso 1[2] y literal c) del inciso 2[3] del artículo 386[4], los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil[5]. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos son el literal a. –respecto a la cuantía– y literal b. –respecto al pronunciamiento de segunda instancia que revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia– del inciso 2 del artículo 386[6] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil, los que han sido introducidos por la Ley Nº 31591 y que no serán de aplicación por encontrarse regulados en la ley de la especialidad. **Admisibilidad del recurso Sexto:** El artículo 391 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece los requisitos de admisión del recurso de casación: 1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende. 2. El recurso se interpone: a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada. b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. **Séptimo:** Efectuando la revisión de los requisitos de admisibilidad, se advierte que el recurso de casación indica separadamente cada causal invocada, cita los preceptos legales que considera erróneamente aplicados o inobservados, precisa los fundamentos que sustentan su pretensión y expresa cuál es la aplicación que pretende; se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días de notificada. En relación al arancel judicial por concepto de casación, la recurrente ha cumplido con adjuntar el pago del arancel respectivo, (véase fojas mil ochocientos noventa y seis del EJE). Se establece, pues, que se cumple con los requisitos precisados en el sexto considerando de la presente resolución. **Procedencia del recurso Octavo**: Cabe anotar que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece requisitos de procedencia del recurso de casación: 1.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2.- Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. **Noveno:** Efectuando la revisión de los requisitos de procedencia, se advierte que los recurrentes impugnan una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso, así como se advierte que el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio, cumpliéndose con los requisitos previstos en el séptimo considerando. Con respecto a los literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386, no son de aplicación conforme a los fundamentos expuestos en el quinto considerando. Improcedencia del recurso **Décimo:** El artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, establece los supuestos de improcedencia del recurso de casación: 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: c. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; d. Se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, e. El recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a) Carezca manifiestamente de fundamento; o, b) Se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. **Décimo primero**: Respecto a los supuestos de improcedencia previstos en el numeral 1, y 3 del modificado artículo 393 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se advierte que habiéndose cumplido con los requisitos señalados en el artículo 391 del Código Procesal Civil - analizados en el sexto considerando-, y las causales procesales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 388 del mismo cuerpo legal, señalados en el tercer considerando, así como evidenciándose que la resolución es impugnable en casación y que la recurrente apeló la resolución emitida en primera instancia porque le fue desfavorable a su pretensión, conforme se verifica en el recurso de apelación (de fojas mil seiscientos dieciséis del EJE), las causales denunciadas por infracción procesal y material son susceptibles de calificación; se procede por tanto, con analizar las causales denunciadas por la empresa recurrente. Causales denunciadas **Décimo segundo:** La Empresa Beagle Agentes de Aduana Sociedad Anónima, sustenta su recurso de casación en las siguientes causales: a) Vulneración del debido proceso y del derecho a probar Sostiene que la Sala Superior no ha admitido ni valorado la prueba extemporánea ofrecida como prueba en el recurso de apelación consistente en resultados de

requerimientos, en las cuales se establece la duplicidad de criterio incurrida por la Administración Aduanera respecto del producto Cigarrito Pall Mall, señalando los resultados de requerimiento que se había establecido un primer criterio de clasificación al haberse despachado la importación de dichos productos consignándolos en la Subpartida Arancelaria 2402.10.00.00, lo que refiere el recurrente hacía inducir a error a los administrados respecto a la partida que se debía consignar, que en atención a ello, no correspondía sancionarse al administrado con multa ni pago de intereses. Asimismo, señala que las Resoluciones de Requerimiento ofrecidas como pruebas extemporáneas en el recurso de apelación, debieron ser admitidas y valoradas por la Sala Superior por hacer referencia a hechos nuevos y en las que existía reconocimiento por parte de la propia Administración sobre la duplicidad de criterio respecto a la clasificación de los Cigarritos Pall Mall en la SubPartida 2402.10.00.00, sin embargo, no han sido admitidas ni valoradas por la Sala Superior indicando que los documentos fueron ofrecidos hasta en dos oportunidades en los escritos de ampliación de la demanda y que fueron rechazados por el juez. b) Indebida aplicación del numeral 5, literal b) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053. Refiere que, la Agencia de Aduanas, consignó que a los productos importados por cuenta de British American Tobacco del Perú le correspondían ser clasificados en la Subpartida 2402.10.00.00, sin embargo, efectuada la importación en base a la indicada clasificación, la División de Importaciones de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, mediante la Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001001 de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, señaló que se habría configurado una incorrecta asignación de la subpartida arancelaria y dispuso la modificación de la subpartida declarada a la subpartida de CIGARRILLOS-SPN 2402.20.20.00, resultando ilegal ya que a quien correspondía modificar la clasificación era a la División de Clasificación arancelaria y no a la de Importaciones. Señala que teniendo en consideración que BEAGLE actuó sobre la base de la Resolución de División Nº 000-395200-2016-000569, que determinó que a los "CIGARRITOS PALL MALL" correspondía clasificarlos en la subpartida 2402.10.00.00, la sanción que se le impuso deviene en ilegal, por lo que se aplicó indebidamente la infracción prevista en el numeral 5 del inciso b) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas. c) Inaplicación del numeral 2 del artículo 170 del T.U.O. del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF Precisa que existe una duplicidad de criterio en la clasificación arancelaria del producto denominado comercialmente "Cigarritos Pall Mall". Que de acuerdo a la Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001001 de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Administración Aduanera estableció que al producto que se importaba le correspondía ser clasificado en la Sub Partida 2402.20.20.00, decisión que resulta ilegal porque la modificación de la clasificación correspondía dictarla a la División de Clasificación Arancelaria, lo que constituyó, en todo caso, un segundo criterio de clasificación, el primero fue el de la Resolución emitida por la División de Clasificación, a lo que refiere que la Sala ha inaplicado el numeral 2 del artículo 170 del T.U.O. del Código Tributario, que establece que no procede aplicar intereses ni sanciones si la Administración Tributaria ha tenido duplicidad criterio en la aplicación de la norma. d) Inaplicación del artículo VI numeral 2 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y del artículo 257 numeral 1 e) de la misma ley. Sostiene que la Administración tuvo un primer criterio al determinar que los productos Cigarritos Pall Mall debían ser consignados en la Subpartida Arancelaria 2402.10.00.00 mediante Resolución de División Nº 000-395200-2016-000569, posteriormente, analizados los Resultados de Requerimiento que ofreció como pruebas extemporáneas, se tiene que adoptó un segundo criterio al señalar que esos productos debían ser consignados en la Subpartida Arancelaria 2402.20.00.00, a lo que refiere que se ha inaplicado la norma contenida en el numeral 2 Artículo VI del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la que, si bien se reconoce la facultad de la Administración para modificar sus criterios, también se establece que los efectos de dicha modificación no podrán aplicarse retroactivamente en perjuicio del Administrado, habiendo sido la Aduana la que indujo a error a la recurrente a través de sus propios actos cuando señaló que a los Cigarrrillos Pall Mall le correspondía la Subpartida Arancelaria 2402.10.00.00. Asimismo, señala que al haber la Aduana establecido un segundo criterio de clasificación, no correspondía que se le aplicara sanción alguna conforme lo dispuesto en el artículo 257 de la norma acotada, por constituir el error un eximente de responsabilidad. Análisis de las causales denunciadas **Décimo tercero:** Emitiendo pronunciamiento respecto a la causal denunciada en el **acápite a)** del décimo segundo considerando, sobre vulneración del debido proceso y del derecho a probar, esta Sala Suprema advierte que no cumple con las exigencias de precisión y claridad, pues si bien denuncia vulneración a la debida motivación de resoluciones judiciales, sin embargo, se advierte que ha sido formulada sin cumplir las exigencias técnicas en la formulación del recurso con precisión y claridad, en tanto no se centra en la forma como se habría producido la infracción de las normas procesales a efectos de permitir el control de derecho, sino en alegaciones y en cuestionamientos al pronunciamiento de la sentencia de vista, al señalar que la Sala Superior no ha admitido ni valorado la prueba extemporánea ofrecida como prueba con el recurso de apelación en las cuales se establece la duplicidad de criterio incurrida por la Administración Aduanera respecto del producto Cigarrito Pall Mall, señalando que debieron ser admitidas y valoradas por la Sala Superior por hacer referencia a hechos nuevos y en las que existía reconocimiento por parte de la propia Administración sobre la duplicidad de criterio; sumado a ello, que el recurso lo destina a que se anule la sentencia de vista, sin embargo lo orienta a infracciones de norma sustantiva, no resultando claro en el desarrollo de su recurso, ni hay precisión en si la vulneración trata de falta de motivación o sobre infracción a norma sustantiva; por todo ello, la causal denunciada resulta **improcedente. Décimo cuarto:** Emitiendo pronunciamiento respecto a las causales denunciadas en los literales **b)**, **c) y d)** sobre infracciones materiales, se advierte que contienen los mismos fundamentos, y que han sido denunciadas en forma dispersa ya que en las tres se cuestiona que la multa impuesta fue ilegal debido a que hubo duplicidad de criterio, señalando en el **acápite b)** que la Agencia de Aduanas consignó que a los productos importados por cuenta de British American Tobacco del Perú le correspondían ser clasificados en la Subpartida 2402.10.00.00, sin embargo, la División de Importaciones, mediante la Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001001 señaló que se habría configurado una incorrecta asignación de la subpartida arancelaria y dispuso la modificación de la subpartida declarada a la subpartida de CIGARRILLOS - SPN 2402.20.20.00, lo que refiere resulta ilegal ya que a quien correspondía modificar la clasificación era a la División de Clasificación Arancelaria y no a la de Importaciones, por lo que la sanción que se le impuso deviene en ilegal; así mismo, señala en el **acápite c)** que existe duplicidad de criterio en la clasificación arancelaria del producto denominado comercialmente "Cigarritos Pall Mall" ya que de acuerdo a la Resolución de División Nº 118-3D5100/2018-001001, la Administración Aduanera estableció que correspondía ser clasificado en la SubPartida 2402.20.20.00, lo que refiere resulta ilegal porque la modificación de la clasificación correspondía dictarla a la División de Clasificación Arancelaria, lo que constituyó, un segundo criterio de clasificación, y no procede que se le aplique intereses ni sanciones; y finalmente en el **acápite d**) señaló que la Administración tuvo un primer criterio al determinar que los productos Cigarritos Pall Mall debían ser consignados en la Subpartida Arancelaria 2402.10.00.00 mediante Resolución de División Nº 000-395200-2016-000569, posteriormente, adoptó un segundo criterio al señalar que esos productos debían ser consignados en la Subpartida Arancelaria 2402.20.00.00, y que habiendo sido la Aduana la que indujo a error a la recurrente a través de sus propios actos, no correspondía que se le aplicara sanción alguna. Al respecto, es del caso, resaltar que en casación el control es del derecho objetivo y no de las actuaciones de la entidad aduanera demandada, agregando que cuando se recurre a un recurso técnico como es el de casación, resulta imperativo el cumplimiento de las exigencias de procedencia, por lo que no se trata de efectuar alegaciones ni cuestionamientos, sino en esencia de desarrollar jurídicamente las infracciones que hubiere incurrido la sentencia impugnada, precisando en que extremos y bajo que razonamientos, se habrían configurado las infracciones, y no pretender como en este caso a sustentar el recurso en sus discrepancias con la recurrida, que en su considerando décimo cuarto concluye que respecto a la duplicidad de criterio, la Resolución de División Nº 000-395200/2016-000569 versa sobre CIGARRITOS RICHMOND en la que se establece que el producto es cigarrito, contrario al producto cuestionado en el presente caso donde ha quedado acreditado que no corresponde a un cigarrito, sino, a un cigarrillo, presentando los CIGARRITOS RICHMOND característicos diferentes a la mercancia que es materia de controversia, señalando que no se aprecia que se hayan importado mercancías con las mismas características que la

presente bajo la SPN aplicable a los puros y puritos, ni tampoco que la Resolución de División Nº 000 395200/2016- 000569 constituya un criterio de clasificación aplicable a las mercancías materia del presente proceso, por lo que no se configura duplicidad de criterio, así como tampoco, existe fundamento para que se le exima a la recurrente del pago ordenado; aspectos que pretende rebatir la recurrente sin orientarse a un adecuado desarrollo con claridad y precisión que configuren infracciones normativas, explicando el o los silogismos jurídicos de la recurrida en los cuales, las normas que aportan a la solución del caso controvertido, correspondan a las que denuncia; por lo que las causales invocadas resultan **improcedentes**. DECISIÓN Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, concordante con lo previsto en los artículo 386, 388, 391 y 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por Beagle Agentes de Aduana Sociedad Anónima, mediante escrito presentado de fecha once de julio de dos mil veintitrés (fojas mil ochocientos setenta y tres del EJE) contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número veintiséis, de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés (fojas mil ochocientos cincuenta del EJE), y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.-Interviene la Jueza Suprema Ponente **Cabello Matamala**. SS. BURNEO BERMEJO, **CABELLO MATAMALA,** PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, CORANTE MORALES.

---

1 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones

2 "1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso."

3 "2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que:
(…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio."

4 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

5 Nótese que se aplica solo los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:
"1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. El recurso se interpone:
a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.
b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda.
c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.
4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.
(…). 6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

6 Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:
"a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;
b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia".

C-2245460-19

CASACIÓN Nº 17882-2023 LIMA

TEMA: APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA
SUMILLA: De la literalidad del texto del artículo 168 del Código Tributario, se verifica que la referida norma contempla la irretroactividad de las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones; no obstante, del mismo texto normativo se aprecia que sus alcances no se extienden a las sanciones por infracciones tributarias que se encuentren en trámite o en ejecución. Así, la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que cuando se hace referencia a sanciones que se encuentren en trámite, se alude a las sanciones por infracciones que han sido imputadas al administrado mediante la notificación de los valores y que se encuentran pendientes de resolución definitiva o de absolución de la impugnación realizada; y cuando se trata de sanciones en ejecución, se refiere a la ejecución de la sanción en caso la sanción fuere no pecuniaria o, en el caso de una sanción pecuniaria, cuando esta se encuentre en la etapa de cobranza coactiva. En el caso, en estricta aplicación del artículo 168 del Código Tributario, la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878 es inaplicable, pues a la fecha de entrada en vigor del citado dispositivo legal no existía ningún procedimiento en trámite o en ejecución que tuviese como finalidad la determinación o cobro de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario.
PALABRAS CLAVE: principio de irretroactividad de las normas tributarias, principio de retroactividad benigna, multa, infracción tributaria

Lima, dos de octubre de dos mil veintitrés

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN** En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la empresa demandante **San Fernando S. A.**, mediante escrito del nueve de mayo de dos mil veintitrés (folios 577-607 del expediente judicial electrónico - EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veintidós de abril de dos mil veintitrés (folios 552-508), que confirmó la sentencia de primera instancia, emitida mediante la resolución número diez, del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (folios 486-495), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Antecedentes Demanda Mediante escrito del veintidós de julio de dos mil veintiuno (folios 3-22), la empresa demandante **San Fernando S.A**. interpuso demanda contencioso administrativa. Señaló las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02257-9-2021, únicamente en el extremo que desestima el pedido relacionado a la aplicación del principio de retroactividad benigna en materia de sanciones tributarias y confirma la validez de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878. **Pretensión accesoria:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución de Intendencia Nº 0150140015027 y la nulidad parcial de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, emitida por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. **Segunda pretensión accesoria**: Se ordene a la SUNAT le devuelva la suma de S/ 2'403,283.00 (dos millones cuatrocientos tres mil doscientos ochenta y tres soles con cero céntimos), la cual fue abonada para cancelar la deuda tributaria contenida en la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, incluidos los intereses que se generarán, calculados en ejecución de sentencia y hasta la fecha efectiva de devolución. Sus argumentos son los siguientes: a) El principio de retroactividad, al estar reconocido para el ámbito penal en virtud del artículo 103 de la Constitución, es aplicable también para el ámbito administrativo sancionador en materia tributaria, en virtud del literal d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. b) La multa impuesta en virtud del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario (antes, numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario), debe ser eliminada en virtud de la retroactividad benigna en materia sancionatoria tributaria y la aplicación de la modificación normativa de la citada norma (desarrollada en la nota 21 de la tabla de infracciones y sanciones del mismo cuerpo normativo), realizada por el Decreto Legislativo Nº 1311. c) A partir de la modificación introducida por el Decreto Legislativo Nº 1311, el ordenamiento tributario solo sanciona la declaración de saldos, créditos o pérdidas indebidamente declaradas, siempre y cuando exista un perjuicio al fisco, el cual se manifiesta con la existencia de un tributo omitido en el periodo en que se realiza la declaración incorrecta. d) Este tributo omitido es el que debe servir para la determinación de la multa aplicable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, calculada aplicando el 50 % de la mencionada omisión. Las modificaciones pertinentes del referido Decreto Legislativo Nº 1311 entraron en vigencia el 1 de enero de 2017.

Contestaciones de la demanda El nueve de agosto de dos mil veintiuno, la **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante su Procuraduría Pública, contesta la demanda (fojas 318-324), con los siguientes fundamentos: a) La norma aplicable para determinar y aplicar la sanción tributaria es la vigente a la fecha en que se configuró la infracción tributaria, esto es, la fecha en que se cometió la infracción tributaria, sin que exista posibilidad de una aplicación retroactiva de normas tributarias sancionatorias. b) Si bien mediante Decreto Legislativo Nº 1272 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General se reconoce la aplicación del principio de retroactividad benigna en materia administrativa, ello no resulta aplicable en materia tributaria, en que, por el principio de especialidad del que goza el derecho tributario, resultan aplicables las normas establecidas en el Código Tributario. c) Los casos en los que se discuta la aplicación de las normas en el tiempo respecto a sanciones de carácter tributario deben ser resueltos en mérito del principio de especialidad de la norma, es decir, a partir de lo señalado en el artículo 168 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no solo por su carácter especial, sino porque existe una regulación expresa en ese sentido que rige el principio de irretroactividad de las normas sancionatorias tributarias. El seis de agosto de dos mil veintiuno, el **Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal**, en calidad de codemandado, contesta la demanda (folios 291-305) y sostiene que la resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley. Sus argumentos son los siguientes: a) No es posible la aplicación del principio de retroactividad benigna, por cuanto al momento de la infracción materia de autos, el Decreto Legislativo Nº 1311, publicado el 30 de diciembre de 2016, no se encontraba vigente en el tiempo. El periodo fiscalizado era el 2014 y en esa fecha no se encontraba vigente en el tiempo el Decreto Legislativo Nº 1311. b) Conforme a los hechos expuestos, la empresa es pasible de sanción por la infracción al numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, que señala que constituye infracción "[…] declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias […]". Así, la multa impuesta fue determinada en la tabla I del Código Tributario, la cual menciona que la sanción es la siguiente: "50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente, o 15% de la pérdida indebidamente declarada o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución". c) En consecuencia, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna del Decreto Legislativo Nº 1311, que modificó el texto original del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, porque, además, el contribuyente canceló la multa impuesta y no ha cuestionado en ningún punto los reparos efectuados por la administración, con lo que se entiende está conforme con ellos. **Sentencia de primera instancia** Mediante resolución número diez, del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (folios 486-495), el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró **infundada** la demanda en todos sus extremos. Señaló los fundamentos siguientes: 5.12 Esta Judicatura considera que la interpretación del artículo 168° del TUO del Código Tributario debe ser realizada de conformidad con lo regulado en el artículo 103° de la Constitución Política que establece que ninguna ley tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. 5.13 Al respecto, el artículo 164° del TUO del Código Tributario dispone la infracción tributaria requiere la comisión de una acción u omisión que implique la violación de normas tributarias. En ese sentido, en aplicación del artículo 103° de la Constitución Política, la sanción debe ser impuesta en atención a las normas que se encontraban vigentes al momento de la comisión de la infracción, dado que en materia tributaria las normas no tienen efectos retroactivos. 5.14 Asimismo es preciso advertir que para la imputación de una sanción no es necesario que la infracción cometida hubiese sido detectada durante el desarrollo de un procedimiento específico. En ese sentido, el hecho de que al momento de entrar en vigencia el Decreto Legislativo 1311 aún no se había iniciado un procedimiento de fiscalización no otorga a dicha norma efectos retroactivos, siendo que la imputación de una sanción debe ser evaluada en atención al marco normativo que se encontraba vigente al momento de comisión de la infracción. 5.15 Ahora bien, bajo dicha premisa, debe interpretarse que una infracción se encuentra "en trámite o ejecución" a partir del momento en el que la infracción es cometida por el contribuyente, dado que a partir de dicha oportunidad la Administración Tributaria se encuentra habilitada a ejercer sus facultades en materia sancionadora, la cual puede ser canalizada a través del procedimiento de fiscalización, el inicio de acciones inductivas o validando el régimen de gradualidad al que accede el contribuyente mediante una subsanación de carácter voluntario. 5.16 En ese sentido, si determinado contribuyente comete una infracción, la misma deberá ser evaluada en atención a la normativa que se encontraba vigente en dicha oportunidad sin que sea admisible que dicho marco normativo sea soslayado por la aplicación de normas emitidas con posterioridad. Como lógica consecuencia, si al momento de la comisión de una infracción ya se encuentra vigente un nuevo marco normativo, no será jurídicamente posible que las infracciones sean evaluadas en atención a las normas ya derogadas. 5.17 En ese orden de ideas, en el caso de autos dado que la infracción vinculada se materializó en la fecha de presentación de la declaración jurada anual del IR del ejercicio 2014, es decir en el mes abril del 2015, por ende es obvio que no corresponde aplicar retroactivamente el Decreto Legislativo 1311, que recién entró en vigencia a partir del 31 de diciembre 2016, por lo que la pretensión formulada por la demandante debe ser desestimada. **Sentencia de vista** La sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veintidós de abril de dos mil veintitrés (folios 552-568), emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, **confirma** la sentencia apelada, contenida en la resolución número diez, del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (folios 486-495), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Señala los siguientes fundamentos: […] DÉCIMO: En cuanto al segundo agravio relacionado a la interpretación del artículo 168° del Código Tributario y la Casación Nº 2448-20 14-LIMA. Al respecto, del artículo 168° del TUO del Código Tributario que establece: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS SANCIONATORIAS.- Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución", se desprende que en materia tributaria como regla general opera el principio de irretroactividad y de manera excepcional el principio de retroactividad benigna únicamente en los supuestos en que las sanciones no se encuentren en trámite ni en ejecución. Se debe indicar que, en el noveno considerando de la Casación Nº 2448-2014- LIMA, en relación al artículo 168° del TUO del Código Tributario, que establece que opera la irretroactividad cuando la sanción se encuentra en trámite o ejecución, se señala que por trámite "se entiende a las sanciones por infracciones que han sido imputadas al administrado, a través de la notificación correspondiente y que se encuentran pendientes de resolución definitiva o de absolución de la impugnación realizada"; y, por ejecución "se refiere a la ejecución de la sanción en caso fuere no pecuniaria o cuando, en el caso de una sanción pecuniaria, esta se encuentre en la etapa de cobranza coactiva". De similar manera, Huamaní Cueva sostiene que "[…] si se dictan normas que supriman o reduzcan las sanciones por infracciones tributarias, estas normas tendrán vigencia a futuro y no tendrán efecto alguno sobre las sanciones que se encuentren en trámite (es decir, sanciones cuyos actos ya se hayan emitido o notificado pero que se encuentren dentro del plazo para ser impugnados y, eventualmente, mientras se encuentre en trámite alguna impugnación planteada contra las mismas) o en ejecución (cuando se encuentre dentro de un procedimiento de cobranza coactiva o cuando se esté ejecutando la sanción no pecuniaria". Aunado a ello, Robles Moreno indica que: "En todo caso, el art. 168 del Código Tributario establece dos restricciones sobre el particular. En primer lugar, la norma benigna no se puede aplicar a las sanciones que ya se encuentran en trámite en la fecha que inicia su vigencia; es decir que esta norma no debe ser aplicable respecto de las sanciones que son objeto de un procedimiento contencioso (reclamación y apelación) o proceso contencioso ya iniciado. En segundo lugar, la norma benigna tampoco se puede aplicar a las sanciones que ya se encuentran en ejecución en la fecha que inicia su vigencia; es decir, que esta norma no debe ser aplicable respecto de las sanciones que son objeto de un procedimiento administrativo ya iniciado […]. Una conclusión adicional […] es que si – luego de cometida cierta infracción tributaria-la respectiva sanción no ha sido todavía determinada por el administrado y tampoco por la Administración Tributaria, entonces cabe la aplicación retroactiva de la ley posterior que suprime o rebaja esta sanción; toda vez las excepciones previstas […] suponen la existencia de una sanción ya determinada". Por lo expuesto, se tiene que para que una sanción se encuentre en trámite,

debe haber sido debidamente notificada una vez culminado el procedimiento de fiscalización, procedimiento que como se sabe es la facultad con la que cuenta la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias respecto de los contribuyentes, siendo que dicho procedimiento inicia con un requerimiento y cartas autorizadas y termina con la emisión de la Resolución de Determinación mediante el cual se establece las deudas tributarias y también con la Resolución de Multa que se emiten cuando se detectan infracciones tributarias. Entonces, es evidente que mientras no se haya culminado con el procedimiento de fiscalización, no se puede considerar que una sanción se encuentre en trámite y mucho menos en ejecución. A mayor abundamiento, los únicos supuestos que deben evaluarse para determinar si opera la retroactividad benigna en materia sancionadora tributaria son que la "sanción" no se encuentre "en trámite" ni "en ejecución", esto quiere decir, que la norma tributaria no ha previsto en ningún extremo que para aplicar la retroactividad benigna se deba tener en consideración la fecha en que se cometió la infracción, una interpretación contraria transgrediría la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que refiere "(…). En vía de interpretación no podrá crearse tributos […], ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la Ley. […]", así como el principio de legalidad previsto en la Norma IV del Título Preliminar y el artículo 171° del TUO del Código Tributario. Por último, se añade que la referencia hecha a la Casación Nº 2448-2014-LIMA resulta pertinente para resolver el caso concreto, en la medida que desarrolla el artículo 168° del TUO del Código Tributario, posición que también se sustenta en los principios de igualdad y seguridad jurídica. En atención a ello, debe estimarse el presente agravio bajo el razonamiento aquí desarrollado. […] **Materia controvertida en el presente caso** Con relación a los hechos determinados por las instancias de mérito y en concordancia con las causales por las que fue admitido el recurso de casación interpuesto —**a)** vulneración de las garantías procesales constitucionales, al inobservar los principios de congruencia, tantum devolutum quantum apellatum, principio de reformatio in peius, recogido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, así como el derecho a la defensa, contenido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil; **b)** vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil; **c)** vulneración del principio de legalidad, al desconocer lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Tributario, y el artículo 45 de la Constitución Política del Perú; y **d)** vulneración del principio de legalidad, al inaplicar el principio de retroactividad benigna recogido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú—, concierne a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió las normas citadas al confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **Causales procedentes del recurso de casación** Mediante auto de calificación del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante **San Fernando S. A.**, por las siguientes causales: a) Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil b) Vulneración de las garantías procesales constitucionales, al inobservar los principios de congruencia, tantum devolutum quantum apellatum, principio de reformatio in peius, recogido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, así como del derecho a la defensa, contenido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil c) Vulneración del principio de legalidad, al desconocer lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Tributario y el artículo 45 de la Constitución Política del Perú d) Vulneración del principio de legalidad, al inaplicar el principio de retroactividad benigna recogido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú **CONSIDERANDO PRIMERO. El recurso de casación 1.1.** En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido. **1.2.** En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos. **1.3.** Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **1.4.** Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], que debe sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. **Análisis de las causales planteadas por la recurrente SEGUNDO. Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil; vulneración de las garantías procesales constitucionales, al inobservar los principios de congruencia, tantum devolutum quantum apellatum, principio de reformatio in peius, recogido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, así como del derecho a la defensa, contenido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil** 2.1. Corresponde, antes de iniciar el análisis, citar los dispositivos legales cuya infracción se alega: **Constitución Política del Estado** Artículo 139. - PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. […] 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial** Artículo 12.- Motivación de resoluciones Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. Código Procesal Civil Artículo 122.- Las resoluciones contienen: […] 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; […] Artículo VII.- Juez y Derecho El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio

ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Artículo 370.- Competencia del juez superior El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa. Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior solo alcanza a este y a su tramitación. 2.2. Como argumentos que sustentan la infracción normativa, señala lo siguiente: a) La parte recurrente refiere que la Sala Superior incurre en vicios de motivación, pues ha basado su pronunciamiento en una premisa fáctica sin sustentar cuál sería la base legal u otro instrumento que dispondría la supuesta imposibilidad de cuestionar una resolución de multa o invocar la aplicación del principio de retroactividad benigna, frente a un pago hecho bajo protesto antes de su emisión, con el único fin de evitar la generación de mayores intereses moratorios o acceder a un beneficio de reducción o gradualidad frente al ilegal cobro de la SUNAT. b) La parte recurrente refiere que la Sala Superior ha vulnerado gravemente todos los principios de congruencia, el principio de reformatio in peius y el derecho a la defensa, toda vez que se aleja de los argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por la parte recurrente y del debate traído a sede jurisdiccional y elevado a segunda instancia; y termina fallando contra de la empresa en atención a un aspecto no controvertido que ni siquiera fue invocado como sustento de su decisión por el Juzgado al emitir sentencia de primera instancia y menos aún por la SUNAT y/o por el Tribunal Fiscal. c) La Sala Superior ha basado su decisión en el hecho de que la empresa habría pagado la multa durante el procedimiento de fiscalización; es decir, antes de que esta sea notificada con la resolución de multa. Para la Sala Superior, este hecho (haber efectuado un pago anticipado imputado por SUNAT a la resolución de multa que emitió y notificó, no negado nunca por la empresa) haría imposible la aplicación del principio de retroactividad benigna, lo cual vulnera el debido proceso. d) Refiere que la Sala Superior, sin citar base legal alguna que sustente su posición (en el sentido de que el pago bajo protesto previo a la resolución de multa impediría la aplicación del principio de retroactividad benigna), niega toda posibilidad de defensa, con lo que vulnera el principio de pluralidad de instancias. 2.3. El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y que, entre otros, comprenden el deber de los jueces de observar los derechos procesales de las partes y el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquier etapa del proceso. 2.4. El debido proceso comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, ello en concordancia con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.5. Con relación a la infracción del deber de motivación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, se ha pronunciado de la siguiente manera: 77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 2.6. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Primer Pleno Casatorio, Casación Nº 1465-2007 Cajamarca, ha asumido similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido de que: La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente. 2.7. La motivación de lo que se decide es interna y externa. La primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en sentido estricto[4], con implicancia en el control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[5]. En esa perspectiva, la justificación externa requiere **i)** que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; **ii)** que toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y **iii)** que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión[6]. 2.8. En el marco conceptual descrito, la motivación puede mostrar diversas patologías, que, en estricto, son: **i)** la motivación omitida, **ii)** la motivación insuficiente, y **iii)** la motivación contradictoria. La primera hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es, cuando no hay rastro de la motivación misma. La segunda se presentará cuando exista motivación parcial que vulnera el requisito de completitud; comprende la motivación implícita, que se da cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se hace inferir de otra decisión del juez, y la motivación por relación, cuando no se elabora una justificación independiente sino se remite a razones contenidas en otra sentencia; asimismo, la motivación insuficiente se presentará principalmente cuando no se expresa la justificación de las premisas, que por tanto no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra. Finalmente, estaremos ante una motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es contradictoria. 2.9. El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC señala que el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. 2.10. De esta manera, al juez supremo no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez superior ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. 2.11. En el caso concreto, esta Sala Suprema verifica que la recurrente sustenta la infracción normativa procesal señalando que la Sala Superior ha vulnerado gravemente todos los principios de congruencia, el principio de reformatio in peius y el derecho a la defensa, toda vez que se aleja de los argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por la parte recurrente y del debate traído a sede jurisdiccional y elevado a segunda instancia; y termina fallando contra la empresa en atención a un aspecto no controvertido que ni siquiera fue invocado como sustento de la decisión por el Juzgado al emitir sentencia de primera instancia y menos aún por la SUNAT y/o por el Tribunal Fiscal. 2.12. Sobre el particular, la sentencia de vista señala que la demandante decidió realizar el pago de la multa antes de que la administración tributaria finalice el procedimiento de fiscalización, lo que generó un hecho consumado. Por ende, concluyó que ya no podría entrar en debate o controversia si la demandante se encuentra o no dentro de uno de los supuestos que permite la aplicación de la retroactividad benigna. Ello, por el simple hecho de que con el pago ya se estaría cerrando el procedimiento de fiscalización por parte de la accionante. En consecuencia, concluyó que en el caso concreto no corresponde aplicar la retroactividad benigna contemplada en el Decreto Legislativo Nº 1311. 2.13. Sobre lo resuelto por la Sala Superior, es pertinente puntualizar que en el procedimiento contencioso administrativo tributario, en ninguna de las instancias (reclamación y apelación), la administración tributaria y el Tribunal Fiscal, respectivamente, han centrado el análisis de la controversia en el pago de la multa antes de que la administración tributaria finalice el procedimiento de fiscalización. Por el contrario, ambos órganos resolutores centraron la controversia en si era pertinente o no la aplicación del principio de retroactividad benigna de las normas que disminuyen o suprimen sanciones en materia tributaria. En efecto, la controversia en este caso se centra en determinar si correspondía dejar sin efecto la resolución de multa materia de análisis en aplicación del principio de retroactividad benigna, toda vez que el Decreto Legislativo Nº 1311 suprimió la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario vigente en la fecha de la comisión de la infracción sancionada. 2.14. Lo señalado con anterioridad es coherente con el argumento principal que ha planteado la recurrente durante el proceso contencioso administrativo y judicial, en tanto la recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878 en aplicación del principio de retroactividad benigna, toda vez que, en su concepto, el Decreto Legislativo Nº 1311 suprimió la infracción regulada en

el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario vigente en la fecha de la comisión de la infracción sancionada. 2.15. Asimismo, es pertinente señalar que tanto la administración tributaria como el Tribunal Fiscal declararon infundados los recursos de reclamación y apelación planteados por la recurrente en tanto consideraron que, en materia tributaria, incluyendo las infracciones y sanciones comprendidas en dicho ámbito, se aplican las normas vigentes al momento en que se producen los hechos; así, concluyeron que en materia sancionatoria se aplica la norma vigente a la fecha en que se incurre en la infracción. 2.16. Del mismo modo, dichos órganos administrativos precisaron que no cabe la aplicación retroactiva de las normas que disminuyen o suprimen sanciones en materia tributaria, como pretende el recurrente. Añadieron que el artículo 168 del Código Tributario, cuando establece que las normas tributarias que suprimen o reducen sanciones no extinguirán o reducirán las que se encuentren en trámite o ejecución —es decir, las infracciones cometidas durante un determinado régimen jurídico serán sancionadas conforme lo establecía dicho régimen aun cuando la sanción no hubiera sido aplicada—, los términos "en trámite" o "en ejecución", tratándose de multas, aluden a todas aquellas que no estén pagadas. 2.17. Finalmente, los órganos resolutivos concluyeron que la infracción que dio lugar a la emisión de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878 fue cometida el día 7 de abril de 2015 y el Decreto Legislativo Nº 1311 que la recurrente pretende que se le aplique, publicado el 30 de diciembre de 2016, entró en vigencia desde el 31 de diciembre de 2016, por lo que dicho valor se encuentra conforme a ley. 2.18. Por todas las consideraciones antes expuestas, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista ha vulnerado el principio de congruencia procesal en tanto se aleja de la controversia y de los argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por la recurrente. Asimismo, se verifica que la sentencia de vista centra su fallo en un aspecto que no fue controvertido ni invocado como sustento de la resolución del Juzgado y menos aún por la SUNAT y el Tribunal Fiscal. 2.19. En ese sentido, se declaran fundadas las infracciones normativas procesales vinculadas con la vulneración del principio de congruencia. 2.20. Sin perjuicio de lo antes expuesto, esta Sala Suprema se pronunciará respecto del fondo de la controversia, es decir, se evaluarán las infracciones normativas de carácter sustancial vinculadas con la aplicación del principio de retroactividad benigna. En efecto, en virtud del principio de congruencia procesal[7], este Supremo Tribunal se pronunciará de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por la demandante a fin de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. 2.21. Lo antes expuesto se sustenta en el principio de tutela jurisdiccional efectiva que consiste en el derecho de acudir ante un juez en procura de justicia a fin de obtener una sentencia justa y motivada susceptible de los recursos previstos en las leyes, junto con la exigencia de que el proceso se sustancie con rapidez y dentro de plazos razonables[8]. Siendo esto así, la tutela jurisdiccional efectiva asegura el acceso a los diversos mecanismos que habilita el ordenamiento jurídico, según el tipo de pretensión, y busca garantizar que el resultado obtenido se materialice con cierta eficacia[9]. 2.22. Asimismo, a criterio de esta Sala Suprema, el proceso contencioso administrativo en la actualidad ha superado el paradigma de que el Poder Judicial se limita a controlar la legalidad de los actos administrativos emitidos por la administración pública, en tanto, en virtud del principio de plena jurisdicción[10], el órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre cualquier acto emitido por la administración y poner fin al conflicto de fondo. 2.23. Respecto de los demás argumentos que sustentan la infracción del deber de motivación, se verifica que la infracción de carácter procesal invocada —si bien denuncia la vulneración del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales—se sustenta en argumentos de fondo vinculados a la controversia; es decir, la recurrente no cuestiona la vulneración del deber de motivación, sino el criterio de valoración de los hechos empleado por la instancia de mérito. En efecto, no debe confundirse la debida motivación de las resoluciones judiciales con la debida aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 2.24. Por tanto, el hecho de que la parte recurrente no coincida con la conclusión a la que arriba la Sala Superior con base en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se expusieron, no significa que dicho colegiado haya incurrido en una indebida motivación. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que los argumentos expuestos también sustentan las causales de naturaleza material, serán analizados por esta Sala Suprema en los considerandos siguientes de esta ejecutoria suprema. 2.25. Por todas las consideraciones antes señaladas, corresponde amparar la infracción procesal por vulneración del principio de congruencia procesal e infundadas las demás infracciones de naturaleza procesal invocadas por la recurrente. Análisis de las causales de naturaleza sustantiva **TERCERO. Vulneración del principio de legalidad, al desconocer lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Tributario y el artículo 45 de la Constitución Política del Perú; y vulneración del principio de legalidad, al inaplicar el principio de retroactividad benigna recogido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú** 3.1. Para este fin, corresponde citar los dispositivos normativos cuya infracción se alega: Texto Único Ordenado del Código Tributario Artículo 135.- ACTOS RECLAMABLES Puede ser objeto de reclamación la Resolución de Determinación, la Orden de Pago y la Resolución de Multa. También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos y las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda Tributaria. Asimismo, serán reclamables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y aquéllas que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular. Artículo 137.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes: 1. Se deberá interponer a través de un escrito fundamentado. 2. Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución recurrida. De no interponerse las reclamaciones contra las resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y contra los actos vinculados con la determinación de la deuda dentro del plazo antes citado, dichas resoluciones y actos quedarán firmes. Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará en el plazo de cinco (5) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó la resolución recurrida. En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, de no interponerse el recurso de reclamación en el plazo antes mencionado, éstas quedarán firmes. La reclamación contra la resolución ficta denegatoria de devolución podrá interponerse vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del artículo 163. 3. Pago o carta fianza: Cuando las Resoluciones de Determinación y de Multa se reclamen vencido el señalado término de veinte (20) días hábiles, deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por nueve (9) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, con una vigencia de nueve (9) meses, debiendo renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la Administración Tributaria. Los plazos de nueve (9) meses variarán a doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, y a veinte (20) días hábiles tratándose de reclamaciones contra resoluciones de multa que sustituyan a aquellas que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes. **Constitución Política del Perú** Ejercicio del poder del Estado Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho Artículo 103.-Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece

al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho. 3.2. Como argumentos que sustentan las infracciones normativas, la recurrente señala lo siguiente: a) La Sala Superior emite un único fundamento para desestimar el recurso de apelación de la empresa (y, consecuentemente, la demanda). Ello supone una vulneración del principio de legalidad en tanto desconoce que, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del Código Tributario, toda resolución de determinación o multa es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de reclamación y demás medios impugnatorios, incluyendo la demanda contencioso administrativa. b) La vulneración del principio de legalidad se torna más grave aún si se advierte que la resolución del Tribunal Fiscal impugnada vulnera, además, el principio jurídico ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, conforme al cual no se puede hacer distinciones allí donde la ley no las hace. Asimismo, refiere la parte recurrente que esta prohibición es una consecuencia directa del principio constitucional de reserva de ley, declarado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y la norma IV del Código Tributario. c) A partir de una interpretación literal del artículo 135 del Código Tributario, y respetando el principio interpretativo según el cual no debe distinguirse donde la ley no distingue, se concluye que sí son actos reclamables las resoluciones de multa emitidas en fiscalización donde exista un previo pago hecho con el único fin de evitar mayores intereses moratorios o de acceder a una rebaja por "pronto pago". Asimismo la Sala Superior agrega que el Código Tributario permite la impugnación luego del pago previo brindando, incluso un mayor plazo al contribuyente (artículos 137 —inciso 3— y 146 del Código Tributario). d) Con relación al principio de retroactividad, la Sala Superior reconoce su plena aplicación al derecho sancionador tributario; asimismo, reconoce que conforme lo dispuesto por el artículo 168 del Código Tributario, corresponde la aplicación de la modificación del artículo 178 y de la nota 21 del Código Tributario hecha por Decreto Legislativo Nº 1311, siendo procedente anular toda sanción impuesta por la administración tributaria con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho decreto; esto es, al uno de enero de dos mil diecisiete. e) Solicita que se declare la indebida inaplicación del principio de retroactividad benigna al caso en concreto, en tanto en este caso se cumplen con todas las premisas establecidas por la Sala Superior para que dicha aplicación sea procedente; incluso en plena observancia del artículo 168 del Código Tributario. f) Constituye un hecho no controvertido que existió propiamente una infracción y sanción imputadas por la administración tributaria a la empresa con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1311. Además, refiere que no se determinó omisión por concepto de impuesto por pagar, sino únicamente un mayor saldo a favor del impuesto a la renta declarado indebidamente, que fue reducido luego de los reparos al monto de S/ 4'859,148.00 (cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho soles con cero céntimos). 3.3. En dicho contexto, antes de ingresar en el análisis de la indebida aplicación de las disposiciones normativas en cuestión, esta Sala Suprema debe establecer que la aplicación de una disposición normativa implica no solo la interpretación de una disposición normativa, sino también la comprobación de los hechos de la causa (que en nuestro sistema son aquellos determinados por las instancias de mérito), la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. Así, refiere Guastini[11]: Aplicación e interpretación son cosas evidentemente diferentes. Mientras que el verbo "interpretar" concuerda con cualquier sujeto (ya que cualquiera puede desempeñar la actividad interpretativa), el verbo "aplicar" concuerda solo con aquellos sujetos que designan -precisamente- órganos llamados de aplicación: principalmente jueces y funcionarios administrativos (principalmente, pero no exclusivamente: muchas normas constitucionales, para poner el ejemplo más obvio, son aplicadas por los supremos órganos constitucionales y algunas solo por ellos). Se puede decir de un jurista, o de un ciudadano cualquiera, que "interpreta" el derecho; pero no sería apropiado decir que un jurista, o un ciudadano, "aplica" el derecho. Ver G. Tarello, "Orientamenti analitico-linguistici e teoría dell'interpretazione giuridica", en U. Scarpelli (ed.), Diritto e analisi dellinguaggio, Milano, 1976. Por otra parte, el término "aplicación", especialmente si se refiere a órganos jurisdiccionales, designa comúnmente un conjunto de operaciones que no se extinguen con la interpretación, ya que incluyen junto con la interpretación propiamente dicha (y la construcción jurídica, claro): la comprobación de los hechos de la causa, la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. 3.4. De esta manera, la indebida aplicación de la ley se presenta cuando la norma de derecho en su alcance y significado es aplicada a un caso que ella no regula, es decir, cuando se aplica una ley impertinente al asunto que es materia de la decisión. En tal sentido, cuando exista una aplicación indebida de la norma, se ataca la impertinencia de la aplicación de la norma a la relación fáctica establecida[12]. Tratándose de la aplicación indebida de la ley, el juez puede incurrir en errores in iudicando o in procedendo. Los vicios in iudicando son los yerros en que incurre el juez al dirimir el conflicto, sea porque elige mal la norma sustancial, lo que lo lleva a aplicar un texto impertinente, sea por aplicar el que corresponde, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no tiene; o por aplicar de manera incorrecta un dispositivo legal que no corresponde al caso. 3.5. Antes de analizar las infracciones normativas señaladas por la recurrente, esta Sala Suprema debe precisar los hechos relevantes del caso, los cuales han sido probados y no han sido cuestionados por las partes. a) Mediante Carta de Presentación Nº 170011541910-01-SUNAT y Requerimiento Nº 0121170000054, notificados el 13 de febrero de 2017, la administración tributaria puso en conocimiento de la recurrente el inicio de la fiscalización definitiva del impuesto a la renta del ejercicio 2014. b) Como consecuencia del procedimiento de fiscalización, la administración tributaria emitió, entre otros, la Resolución de Determinación Nº 012-003-0100102, del **29 de noviembre de 2018 (notificada el 17 de diciembre de 2018),** la cual contiene los siguientes reparos: **i)** mermas de travesía en importación de productos; **ii)** desmedros y eliminaciones contabilizados como costo y/o gasto del ejercicio 2014 que no cumplen con requisitos para ser deducibles; **iii)** provisiones, primas de opción, pérdidas y ganancias por contratos de instrumentos financieros derivados que no son de cobertura; y **iv)** gastos inherentes a rentas no gravadas o "deducción en declaración jurada renta 2014 de ingresos exonerados e inafectos". c) Asimismo, la administración tributaria expidió, entre otros, la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, del **29 de noviembre de 2018 (notificada el 17 de diciembre de 2018)**, por la comisión de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. En ella se estableció lo siguiente:

Determinación de la multa	Importe	% Sanción	Multa
Saldo a favor aumentado indebidamente	5,195,956.00	50%	2,597,978.00
Tributo omitido	2,662,019.00	50%	1,331,010.00
Total	7,857,975.00		3,928,988.00

Multa determinada	S/ 3,928,988.00
Intereses moratorios al 19.11.2018	S/ 2,079,220.00
Deuda Tributaria total	S/ 6,008,208.00
Menos:	
Rebaja régimen de gradualidad (60%)	S/ 3,604,925.00
Deuda tributaria total rebajada	S/ 2,403,283.00
Multa pagada el 19.11.2018	S/ 2,403,283.00
Total	S/ 0.00

d) El 16 de enero de 2019, la recurrente interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por Resolución de Intendencia Nº 0150140015027, del 11 de setiembre de 2019, que declaró fundado en parte el reclamo, pero solo en el extremo relacionado al reparo por deducción en la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio 2014 de ingresos exonerados e inafectos. a) El 2 de octubre de 2019, la recurrente interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2257-9-2021, de fecha 9 de marzo de 2021, que **revocó** la Resolución de Intendencia Nº 0150140015027, en el extremo referido a las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0100102 y Nº 012-003-0100115, y a la Resolución de Multa Nº 012-003-0031878, por lo que la administración debía proceder conforme lo expuesto en la resolución del colegiado administrativo; y **confirmó** lo demás que contenía la resolución de Intendencia. Así se dio por agotada la vía administrativa. 3.6. En el caso, la recurrente alega la vulneración del principio de legalidad, dado que la sentencia de vista desconoce lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Tributario y el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, se verifica que los argumentos que sustentan dichas infracciones normativas reiteran lo ya analizado por esta Sala Suprema en la infracción normativa procesal por inobservancia del principio de congruencia. Asimismo, es pertinente reiterar que en ninguna de las instancias la controversia se ha centrado en el análisis del pago de la multa antes de que la administración tributaria finalice el procedimiento de fiscalización. Por lo tanto, dichas infracciones deben ser declaradas infundadas. 3.7. De otro lado, la recurrente alega la vulneración del principio de legalidad, dado que la sentencia de vista inaplicó el principio de retroactividad benigna recogido en el artículo

103 de la Constitución Política del Perú. 3.8. Ahora bien, con relación a la aplicación de las normas en el tiempo (principio de irretroactividad de las normas), en nuestro ordenamiento jurídico existen límites, tanto constitucionales como legales. Respecto a los límites constitucionales, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú señala que "la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo […]". 3.9. Por su parte, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú señala que: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". 3.10. Ahora bien, el numeral 9.3.1 del precedente vinculante contenido en la sentencia de casación número 11947-2022 señala que por el principio de aplicación inmediata de la norma, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes desde su entrada en vigor, por lo que no tiene fuerza ni efectos retroactivos (salvo en materia penal) y, por ende, entra en vigencia y es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, salvo que se postergue su vigencia en todo o en parte por la misma ley, conforme lo previsto en el artículo 103 y 109 de la Constitución Política del Perú. 3.11. En el ámbito tributario, la vigencia de las normas se regula por el artículo X del título preliminar del Código Tributario en los siguientes términos: NORMA X: VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de este Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la Resolución de Superintendencia, de ser el caso. Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de aplicación general, deberán ser publicadas en el Diario Oficial. 3.12. Conforme a la normativa antes expuesta, como regla, las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigor y carecen de efectos retroactivos. Por tanto, para aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y consecuentemente el principio de aplicación inmediata de las normas. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: "[…] nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes"[13]. 3.13. De otro lado, con relación al ámbito de la aplicación temporal de las normas que supriman o reduzcan sanciones en materia tributaria, el texto del artículo 168 del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece lo siguiente: "Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución". 3.14. Ahora bien, de la literalidad del texto del artículo 168 del Código Tributario, se verifica que la referida norma contempla la irretroactividad de las normas tributarias que **supriman o reduzcan sanciones**; no obstante, del mismo texto normativo se aprecia que sus alcances no se extienden a las sanciones por infracciones tributarias que se encuentren **en trámite** o **en ejecución**. Así, la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que cuando se hace referencia a sanciones que se encuentren **en trámite** se entiende a las sanciones por infracciones que han sido imputadas al administrado mediante la notificación de los valores y que se encuentran pendientes de resolución definitiva o de absolución de la impugnación realizada; y cuando se trata de sanciones **en ejecución**, se refiere a la ejecución de la sanción en caso la sanción fuere no pecuniaria o, en el caso de una sanción pecuniaria, cuando esta se encuentre en la etapa de cobranza coactiva[14]. 3.15. En el caso, la recurrente señala que corresponde la aplicación del principio de retroactividad benigna a la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, del **29 de noviembre de 2018**, por la comisión de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Es decir, la recurrente argumenta que constituye un hecho no controvertido que existió propiamente una infracción y una sanción imputadas por la administración tributaria a la empresa con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1311. Además, refiere que no se determinó omisión por concepto de impuesto por pagar, sino únicamente un mayor saldo a favor del impuesto a la renta declarado indebidamente, que fue reducido luego de los reparos al monto de S/ 4'859,148.00 (cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho soles con cero céntimos). 3.16. Al respecto, esta Sala Suprema advierte que el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario vigente hasta el 30 de diciembre de 2016, así como la tabla I del mismo Código, establecían que la infracción y sanción para la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario era la siguiente:

INFRACCIÓN NORMATIVA	SANCIÓN
Numeral 1 del artículo 178 No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.	50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente, o 15% de la pérdida indebidamente declarada o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución

3.17. No obstante, el 30 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1311, cuyo artículo 4 modificó tanto la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario como la sanción correspondiente, en los siguientes términos:

INFRACCIÓN NORMATIVA	SANCIÓN
Numeral 1 del artículo 178 No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.	50% del tributo por pagar omitido, o, 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares

3.18. De lo antes expuesto, se verifica que el Decreto Legislativo Nº 1311 modificó la infracción regulada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario vigente en la fecha de la comisión de la infracción sancionada. En efecto, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1311 trae consigo una modificación que establece una condición más favorable al contribuyente en cuanto a la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario y la correspondiente aplicación de sanción. 3.19. En el caso concreto, se advierte que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 1311 (31 de diciembre de 2016), no existió ningún procedimiento en trámite o ejecución vinculado a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. En efecto, la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878 fue notificada el 17 de diciembre de 2018, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 1311. 3.20. De los hechos antes señalados y en estricta aplicación del artículo 168 del Código Tributario, la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878 es inaplicable, pues a la fecha de entrada en vigor del citado dispositivo legal no existía ningún procedimiento en trámite o ejecución que tuviese como finalidad la determinación o cobro de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. 3.21. El fundamento de lo antes expuesto radica en que "si luego de la comisión de la falta, el legislador considera suficiente una menor intervención gravosa sobre los bienes jurídicos de quien comete el ilícito, carece de sentido que el Estado siga sosteniendo la regla anterior en aras de la seguridad jurídica, cuando lo considera innecesario ya"[15]; pues no resultaría congruente que se aplique la ley más severa vigente al momento de la comisión, cuando es el propio legislador quien ha reconocido a través de una nueva norma lo innecesario que era sacrificar en determinada intensidad los bienes jurídicos de los ciudadanos; razonamiento que se encuentra en línea con lo establecido por el artículo 168 del Código Tributario. 3.22. Por tanto, la justificación de esta peculiar excepción al

principio general de irretroactividad de las normas presupone esencialmente la existencia de dos normas legales distintas, que contengan a su vez tratamientos disímiles dados por el legislador a una misma conducta, la cual, en un primer momento, es reprochada por la ley con una sanción que, luego, es reducida o dejada sin efecto por una norma posterior. 3.23. En ese sentido, es la existencia de esta distinta valoración del legislador sobre una misma conducta, más severa en un primer momento y más tolerante en la norma posterior, la que faculta al administrado a exigir que su caso sea resuelto por la administración —en tanto no exista pronunciamiento firme— con base en un juicio valorativo más actual que el legislador ha efectuado sobre la conducta realizada, en tanto, como es obvio, este último juicio le sea más favorable; pues nada justifica que se imponga una sanción más severa a la que actualmente el legislador considera proporcionada a su conducta, más aún, se le reproche un acto que ya no es considerado infracción. 3.24. En línea con lo antes señalado, la resolución de multa cuestionada en este proceso resulta inaplicable en tanto fue dejada sin efecto mediante el Decreto Legislativo Nº 1311. Asimismo, a la fecha de entrada en vigor de la citada norma, no existía ningún procedimiento en trámite o ejecución que tuviese como finalidad la determinación de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. 3.25. De acuerdo al análisis efectuado, resulta válida la aplicación de la excepción a la regla de irretroactividad de la norma tributaria prevista por el artículo 168 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Por lo tanto, corresponde que se aplique en favor de la demandante la modificatoria establecida en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1311, norma que dejó sin efecto las multas por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. 3.26. Por todas las consideraciones antes expuestas, se declara fundada la infracción normativa del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Actuación en sede de instancia 3.27. En consecuencia, corresponde casar la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, se revoca la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; y, reformándola, se declara fundada la demanda en todos sus extremos; en consecuencia, nula la Resolución de Tribunal Fiscal Nº 02257-9-2021, únicamente en el extremo que desestima el pedido relacionado a la aplicación del principio de retroactividad benigna y confirma la validez de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878. Asimismo, se declara la nulidad parcial de la Resolución de Intendencia Nº 0150140015027 y la nulidad parcial de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, emitida por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Además, se ordena a la SUNAT la devolución de la suma de S/ 2'403,283.00 (dos millones cuatrocientos tres mil doscientos ochenta y tres soles con cero céntimos), la cual fue abonada para cancelar la deuda tributaria contenida en la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, incluidos los intereses que se generarán, calculados en ejecución de sentencia y hasta la fecha efectiva de devolución, de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario, y se dispone que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución tomando en cuenta los argumentos expuestos en esta ejecutoria suprema. **DECISIÓN** Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el artículo 396 del Código Procesal Civil, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante **San Fernando S. A.**, mediante escrito del nueve de mayo de dos mil veintitrés (folios 577-607). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, del veintidós de abril de dos mil veintitrés (folios 552-508) y, **actuando en sede de instancia**, **REVOCARON** la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (folios 486-495), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; y, **REFORMÁNDOLA, DECLARARON FUNDADA la demanda en todos sus extremos**; en consecuencia, nula la Resolución de Tribunal Fiscal Nº 02257-9-2021, únicamente en el extremo que desestima el pedido relacionado a la aplicación del principio de retroactividad benigna y confirma la validez de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878. Asimismo, **se declara** la nulidad parcial de la Resolución de Intendencia Nº 0150140015027 y la nulidad parcial de la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, emitida por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario; y **se ordena** a la SUNAT que devuelva la suma de S/ 2'403,283.00 (dos millones cuatrocientos tres mil doscientos ochenta y tres soles con cero céntimos), la cual fue abonada para cancelar la deuda tributaria contenida en la Resolución de Multa Nº 012-002-0031878, incluidos los intereses que se generarán, calculados en ejecución de sentencia y hasta la fecha efectiva de devolución de conformidad con lo establecido en el Código Tributario; y **DISPUSIERON** que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución tomando en cuenta los argumentos expuestos en esta ejecutoria suprema. Por último, **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por San Fernando S.A. contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Delgado Aybar.** SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, **DELGADO AYBAR.** EL VOTO SINGULAR DEL DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO YAYA ZUMAETA, ES COMO SIGUE: Comparto la posición final de mi distinguida colega ponente, agregando las siguientes consideraciones: **Primero:** Mediante la Casación Nº 11947-2022-Lima del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, emitida por esta Sala Suprema, que constituye precedente vinculante, se fija –entre otros- como criterio jurisprudencial que "no se puede alegar una aplicación de retroactividad benigna respecto del Decreto Legislativo Nº 1311, sino la aplicación inmediata de la norma respecto de aquellos casos en los que no se ha notificado con anterioridad a la vigencia de la citada norma el acto administrativo sancionador, como lo es una resolución de multa, en tanto que tal notificación se haya producido durante la vigencia del mencionado decreto legislativo, conforme al artículo 168 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y al principio de aplicación inmediata de la norma". **Segundo:** Si bien en diversa jurisprudencia[16] se ha reconocido que –en principio- la norma sancionatoria aplicable es aquella vigente a la fecha de la comisión de la infracción que se atribuye al administrado, se debe tener en cuenta que estando al criterio vinculante antes mencionado, concretamente referido a la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1311 sobre actos administrativos sancionadores (como una resolución de multa), considerando la fecha de su notificación, es pertinente precisar que dicho criterio resulta aplicable al caso concreto, con atención al valor de los bienes jurídicos que resguardan el principio de predictibilidad y confianza legítima que los ciudadanos exigen de parte de este Poder del Estado, lo que consideramos necesario afianzar -a pesar de eventuales posiciones distintas en casos similares- y expresar de modo puntual, en virtud a lo que prevé el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a fin de brindar un mejor servicio de justicia. **SS**. **YAYA ZUMAETA**

---

1 Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

4 ATIENZA, Manuel (2006). Las razones del derecho. Derecho y argumentación. Lima, Palestra Editores; p. 61.

5 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184

6 IGARTUA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima, Palestra-Temis; p. 2

7 **Título preliminar del Código Procesal Civil**
Artículo VII.- El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes.

8 BIDART CAMPOS, Germán (1969). Derecho constitucional. Tomo II. Buenos Aires, Ediar; pp. 473 y ss.

9 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 763-2005-PA/TC; fundamento 6.

10 Inciso 2 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo

11 GUASTINI, Ricardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, CEPC; p. 249

12 Considerando cuarto del auto calificatorio de la Casación Nº 5707-2011 Arequipa.

13 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0606-2004-AA/TC, del 28 de junio de 2004; fundamento jurídico 2.

14 Considerando noveno de la Sentencia de Casación Nº 2448-2014 Lima, del 15 de septiembre de 2016.

15 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2009). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, Gaceta Jurídica; p. 712.

16 Casaciones Nº 10113-2012 y Nº 2448-2014, 15701-2015 y 17817-2018, emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente; y Casación Nº 9851-2017, emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, de esta Corte Suprema de Justicia, entre otras.

C-2245460-20

CASACIÓN Nº 20719-2022 LIMA

TEMA: EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE LA RECUPERACIÓN DE CAPITAL INVERTIDO
SUMILLA: La Sentencia de Casación Nº 10227-2021 declaró infundados los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de vista emitida en el Expediente Judicial Nº 8186-2019, que declaró la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3582-9-2019 y reconoció que el numerador de la fórmula de cálculo prevista en el inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta está referido al costo de adquisición de las participaciones canceladas, mas no a su valor nominal, ello para efectos de determinar el costo computable de participaciones emitidas como consecuencia de una reorganización empresarial.
En el presente caso, es materia de controversia la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 9304-8-2019 —que resuelve la apelación contra la resolución de Intendencia emitida en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3582-9-2019—, que ha mantenido el procedimiento aplicado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para determinar el costo computable de cada participación recibida por la compañía en US$ 116.55, convertida posteriormente en moneda nacional; sin embargo, atendiendo a la Sentencia de Casación Nº 10227-2021 y a la sentencia de vista emitida en el Expediente Judicial Nº 8186-2019, la que ha quedado firme, el procedimiento aplicado por la SUNAT para el cálculo del costo computable no se encuentra arreglado a ley, por lo que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 9304-8-2019 ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº 27444.
PALABRAS CLAVE: recuperación de capital invertido, costo computable, reorganización empresarial

Lima, treinta de mayo de dos mil veintitrés

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS La causa número veinte mil setecientos diecinueve - dos mil veintidós Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada por los señores Jueces Supremos Burneo Bermejo (presidente), Bustamante Zegarra, Cabello Matamala, Delgado Aybar y Tovar Buendía, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **ASUNTO** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP) mediante escrito del quince de junio de dos mil veintidós (fojas mil novecientos ochenta y uno del expediente judicial electrónico - EJE), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas mil novecientos cincuenta y cinco del EJE), que revoca la sentencia apelada emitida mediante resolución número once, del primero de marzo de dos mil veintidós (fojas mil setecientos cincuenta y seis del EJE), que declara infundada la demanda en todos sus extremos, y, reformándola, declara improcedente la demanda en todos sus extremos. **I.1. Antecedentes I.1.1 Demanda** El treinta y uno de enero de dos mil veinte, la empresa BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP) interpone demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) formulando como pretensiones: **Pretensión principal:** Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, en cuanto mantiene el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), sobre la base del valor nominal de las participaciones canceladas, en pretendido cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019. **Pretensión accesoria a la primera pretensión principal:** De ampararse la pretensión principal, pide se anule la resolución de Intendencia y se ordene a la administración tributaria y/o cualquier funcionario de esta que proceda a determinar correctamente el costo computable asociado a cada participación recibida por la compañía y se ordene expresamente la certificación del capital invertido erróneamente reparado por veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 28'769,585.91). **Pretensión subordinada a la pretensión principal:** En el supuesto de que se declare infundada la pretensión principal, solicita se emita pronunciamiento de plena jurisdicción mediante el cual, reconociendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se suspenda el presente proceso ordenando al Tribunal Fiscal y a la administración tributaria que sujete la reliquidación a lo que se resuelva de forma definitiva en el Expediente Judicial Nº 8186-2019, cuyo resultado impactará directamente en la determinación del costo computable de las participaciones emitidas en favor de la compañía producto de la reorganización societaria; así se evitará que se produzcan fallos contradictorios y que la resolución del Tribunal Fiscal adquiera la calidad de cosa decidida, inimpugnable, y no pueda oponerse a la eficacia de la sentencia definitiva que se emitirá en el citado expediente judicial. Fundamentos a) La demandante sostiene que mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 se revocó la reliquidación que la administración tributaria hizo mediante la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, lo que supone únicamente reconocer como costo computable la suma de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles con cero céntimos (S/ 129'699,900.00), cuando el costo asciende a la suma de ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 158'469,485.91). b) Sostiene que la resolución del Tribunal Fiscal es nula porque desconoce el procedimiento establecido en la Ley de Impuesto a la Renta para establecer el costo computable de las participaciones que la compañía recibió de BPZ Norte Oil, emitidas como consecuencia de la escisión (reorganización empresarial) de BPZ E&P y que luego vendió a Pacific Stratus Energy, cometiendo la infracción del inciso f) del numeral 21.1. del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, y vulnerando el principio de reserva de ley, la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, la regla jurisprudencial vinculante contenida en la Casación Nº 4392-2013, así como el principio de capacidad contributiva. c) También es nula porque convalidó el desconocimiento que hizo la administración tributaria respecto a una parte del costo computable de las participaciones que la compañía recibió de BPZ NORTE OIL, sin señalar la base legal del reparo y el procedimiento legalmente establecido para determinar el costo computable de participaciones emitidas como consecuencia de una reorganización empresarial. I.1.2 Sentencia de primera instancia El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, por sentencia emitida mediante resolución número once, del primero de marzo de dos mil veintidós (fojas mil setecientos cincuenta y seis del EJE), declara **infundada** la demanda en todos los extremos. **Fundamentos** a) El a quo argumenta que es objeto de controversia en el presente proceso judicial el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 03582-9-2019, ya que la administración había utilizado el tipo de cambio vigente a la fecha de la realización de la Junta General de Socios, cuando, en concepto de la empresa demandante, correspondía que se considerara el tipo de cambio vigente a la fecha de la inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos. La demandante pretende la revisión de hechos vinculados a la controversia desarrollada en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019 respecto a si el importe que la administración señaló como costo computable de las participaciones adquiridas en virtud de la reorganización empresarial se ajustaron o no a ley. También pretende que se evalúe la Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT al señalar que la administración tributaria ha modificado por completo la base legal aplicable y el procedimiento para determinar el costo computable de las participaciones de la compañía, sin advertir que la administración tributaria expidió la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 03582-9-2019. b) Con respecto a la pretensión subordinada a la pretensión principal, que busca que se suspenda el presente proceso y se ordene al Tribunal Fiscal y a la administración tributaria sujeten la reliquidación a lo que se resuelva de forma definitiva en el Expediente Judicial Nº 8186-2019 por impactar el resultado en la determinación del costo computable de las participaciones emitidas a favor de la compañía producto de la reorganización societaria, señala el a quo que, del Sistema Judicial de Expedientes, aprecia que en el Expediente Nº 8186-2019 es materia de controversia lo resuelto en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, resolución que es válida mientras no haya sido declarada su nulidad; que si bien el Código Tributario regula la suspensión del acto administrativo tributario en el procedimiento de cobranza coactiva, en el recurso de reclamación y en el recurso de apelación, sin embargo no ocurre lo mismo con la demanda contencioso administrativa, debido a que el penúltimo párrafo del artículo 157 del Código Tributario establece que la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria y que no existe norma legal que desconozca la ejecutividad y/o ejecutoriedad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, en cuanto a la

determinación del costo computable de las participaciones recibidas por reorganización societaria, entre otros, y por ende tampoco de la Resolución de Intendencia de cumplimiento Nº 0120240001834/SUNAT, en mérito a la sola interposición de la demanda en el Expediente Judicial Nº 8186- 2019, salvo que exista medida cautelar, conforme lo establece el artículo 159 del Código Tributario. I.1.3 Sentencia de vista La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emite la sentencia de vista mediante resolución número diecisiete, del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas mil novecientos cincuenta y cinco del EJE), que revoca la sentencia de primera instancia —que declaró infundada la demanda en todos sus extremos— y, reformándola, declara improcedente la demanda en todos los extremos. **Fundamentos** a) Argumenta el ad quem que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, materia de controversia, ha resuelto la apelación de la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, emitida en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, por lo que la controversia debe girar sobre el cumplimiento estricto por parte de la administración sobre lo ordenado por el Tribunal Fiscal. Señala que las pretensiones de la demanda están referidas a cuestionar el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía sobre la base del valor nominal de las participaciones canceladas, cuestionando el procedimiento seguido por la administración tributaria para establecer el costo computable; sin embargo, la fundamentación fáctica y jurídica no se encuentra dirigida a cuestionar el pronunciamiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018, sino el reparo de fondo sobre la validez de la determinación del costo computable de cada participación en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), lo que refiere no guarda conexidad con la materia controvertida en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018, por lo que la demanda deviene improcedente. b) Respecto a que se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, en cuanto mantiene el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), sobre la base del valor nominal de las participaciones canceladas, en pretendido cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, y accesoriamente, se anule la resolución de Intendencia mencionada y se ordene a la administración tributaria que proceda a determinar correctamente el costo computable asociado a cada participación recibida por la compañía y emita la certificación del capital invertido erróneamente reparado por veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un centavos (S/ 28'769,585.91); respecto a ello, señala el ad quem que esta pretensión por el mismo periodo es objeto de revisión en el Expediente Nº 08186-2019, donde se cuestiona el costo computable para efectos de la emisión del certificado de la recuperación de capital invertido, y que si bien en el Expediente Nº 08186-2019 la demandante solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-20219 y en el caso de autos solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, en ambos procesos se trata de los mismos argumentos, lo que genera dos procesos idénticos por tener la misma controversia de fondo y que implica que exista un doble pronunciamiento. La demandante en este proceso judicial se encontraría impedida de peticionar tutela jurisdiccional al carecer manifiestamente de interés para obrar al solicitar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, por lo que deviene improcedente. c) Respecto a la pretensión subordinada a la pretensión principal, sobre suspender el presente proceso y ordenar al Tribunal Fiscal y a la administración tributaria que sujeten la reliquidación a lo que se resuelva de forma definitiva en el Expediente Judicial Nº 8186-2019; argumenta el ad quem que resulta contraproducente que se postule como pretensión la suspensión del proceso, por lo que deviene improcedente por imposibilidad jurídica al configurarse la causal prevista en el artículo 427 (inciso 5) del Código Procesal Civil. Argumenta que, para evitar que se produzcan fallos contradictorios con el proceso seguido en el Expediente Nº 08185-2019 y vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, correspondía que la parte procesal solicite la acumulación objetiva sucesiva de procesos, conforme al artículo 88 (inciso 3) del Código Procesal Civil, en el modo y oportunidad previstos en el artículo 90 del invocado código adjetivo. **I.2 Recurso de casación I.2.1** BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP), mediante escrito del quince de junio de dos mil veintidós (fojas mil novecientos ochenta y uno del EJE), formula recurso de casación respecto de las siguientes infracciones normativas sustantivas y procesales: a. **Inaplicación del artículo 370 del Código Procesal Civil** Sostiene que la Sala Superior vulneró el principio de reforma en peor, toda vez que, en perjuicio de la empresa recurrente reformó el fallo material —o de "fondo"— emitido por la primera instancia a uno inhibitorio, es decir, declaró improcedente la demanda. Agrega que a través de la sentencia de primera Instancia el Juzgado declaró infundada la demanda, con un contenido de fondo en relación con el debate procesal, situación que permitió a la recurrente seguir discutiendo este último; no obstante, el fallo inhibitorio emitido por la Sala Superior elimina dicha posibilidad, pues impide cualquier tipo de pronunciamiento sustantivo, siendo que incluso obstaculiza el propio acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. b. **Aplicación indebida del inciso 7 del artículo 22 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y de los incisos 2 y 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil** Indica que la compañía sí ostenta interés para obrar en el medio, toda vez que lo pretendido únicamente puede discutirse a través del proceso contencioso administrativo, pues la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 es irrecurrible en sede administrativa, en tanto, ha sido emitida por la última instancia administrativa. Esto es, que no existe otra vía por la cual la empresa recurrente pueda recurrir a fin de solicitar la debida tutela de sus derechos violentados. Además, señala que resulta imperativa la demanda contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 -que sin ninguna duda causa estado-, pues de consentir la Resolución del Tribunal Fiscal la situación jurídica de la empresa jamás retornará al estatus anterior a la impugnación, por lo que se estaría desconociendo el importe revocado por la administración tributaria ascendente a S/. 28´769,585.91 (veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y uno céntimos), extremo por el cual se declaró la improcedencia de la solicitud de certificación de capital invertido de la Compañía. Agrega que se debe advertir que la empresa a su vez ostenta interés para obrar en el resultado, ya que lo pretendido con la interposición de su demanda y su resultado, es únicamente que se expulsen del ordenamiento jurídico los pretendidos actos de cumplimiento emitidos por la administración tributaria, que fueron ——ilegalmente— validados por el Tribunal Fiscal, en el extremo referido a que convalidó el ilegal accionar de la administración tributaria al no utilizar el método de costo promedio ponderado, aplicando erróneamente el inciso f) del artículo 21.2 de la Ley del Impuesto a la Renta, correspondiente al método para calcular el costo computable de las participaciones recibidas, como consecuencia de la reorganización de sociedades. c. **Inaplicación del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, del numeral 6 del artículo 50 y del numeral 3 del artículo 122, así como del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil** Señala que para la Sala Superior no corresponde emitir pronunciamiento, por cuanto advierte que "no hay nada verificable por esta instancia" en virtud de que al revocar el Tribunal Fiscal la resolución de intendencia que evaluó su cabal cumplimiento, ya no existiría materia controvertida. Lo cual no es correcto pues lo que hizo el Tribunal Fiscal es convalidar el tipo de cambio que fuera indicado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 582-9-2019, convalidando así que la administración tributaria desconociera parte del costo computable de las participaciones recibidas por la empresa consecuencia de la reorganización empresarial, citando como supuesta base legal de su reparo al inciso e) del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y el inciso e) del artículo 11 del reglamento de la ley (que aluden al costo promedio ponderado de participaciones). Arguye que la Sala Superior omite pronunciarse sobre cada uno de sus argumentos destinados a demostrar el correcto procedimiento de determinación del costo computable de las participaciones recibidas por la Compañía BPZ Norte Oil S.R.L. Asimismo, refiere que la incongruencia omisiva entre lo planteado por la compañía a través de su escrito de demanda y lo resuelto por el Juzgado por medio de la sentencia impugnada, improcedente en el caso de autos, deviene en un defecto de motivación, que ha sido reconocido de manera expresa por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Nº 728-2018-PHC/TC (Caso Llamoja). d. **Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva** Indica que la sentencia de vista vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la empresa, toda vez que no advirtió que la resolución del Tribunal Fiscal materia de demanda puede adquirir la calidad de cosa juzgada e inimpugnable, y no pueda oponerse a la eficacia de la sentencia definitiva que conllevará el expediente de casación Nº 10227-2021-0-5001-SUDC-01, lo que es sumamente grave, dado que en dicho proceso la recurrente ya tiene un fallo favorable. e. **Vulneración al principio de seguridad jurídica** Señala que cuando se emiten fallos contradictorios se vulnera la seguridad

jurídica, puesto que al haberse dado dos pronunciamientos por parte del órgano jurisdiccional sobre aspectos de un mismo caso que se contradicen mutuamente, se atenta contra dicho principio fundamental del ordenamiento constitucional. Siendo así, la Sala Superior ha inaplicado el principio de seguridad jurídica puesto que correspondía suspender y sujetar el presente proceso a lo que se resolviera en el proceso judicial signado con expediente Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01, el cual se encuentra pendiente de resolución ante esta Corte Suprema de Justicia de Lima, en el cual se discute la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, a fin de evitar la posibilidad de la emisión de fallos contradictorios, toda vez que ambos procesos se encuentran indefectiblemente vinculados e incluso en el otro la compañía ya tiene un fallo favorable. f. **Inaplicación del artículo 320 del Código Procesal Civil** Refiere que el Juzgado ha inaplicado la norma mencionada, puesto que correspondía suspender y sujetar el presente proceso a lo que se resolviera en el expediente de casación No. 10227-2021-0-5001- SU-DC-01, en el cual se viene discutiendo la utilización del valor de las participaciones canceladas para efectos del cálculo del capital invertido solicitado por la Compañía; a fin de evitar la posibilidad de la emisión de fallos contradictorios y sobre todo teniendo en consideración que ambos procesos se encuentran indefectiblemente vinculados, siendo el primero el original y el presente su cumplimiento. g. **Infracción por inaplicación del artículo 127 del Código Tributario** Precisa que la Sala Superior ha omitido pronunciarse sobre el cambio de fundamento legal de la administración tributaria respecto al reparo original al interior del procedimiento contencioso tributario. Pues la controversia del proceso no consistió en determinar si la administración dio cumplimiento o no a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, ello resulta completamente negligente pues es imposible que un reparo ilegal sea tomado como base para la reliquidación. Precisa que el imposible jurídico ocurrió en la Resolución del Tribunal Fiscal materia de demanda pues ahí la autoridad administrativa avala el cambio de fundamento legal de la administración tributaria. Señala que originalmente la administración tributaria desconoce parte del costo computable de las participaciones recibidas por la compañía producto de la reorganización empresarial citando como supuesta base legal de su reparo al inciso e) del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y el inciso e) del artículo 11 del Reglamento de la Ley (que aluden al costo promedio ponderado de participaciones); los que de ninguna manera guardan relación con el actual fundamento de reparo que vienen discutiendo y que, solo en cumplimiento, ha invocado y modificado la administración tributaria. Por lo que, al carecer de sustento para desconocer una parte del costo computable a la compañía, el Tribunal Fiscal declaró posteriormente su nulidad, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento. En virtud de dicho mandato, es precisamente mediante la Resolución de Intendencia No. 0120240001515/SUNAT, que la Administración Tributaria no utilizó más el método del costo promedio ponderado, sino que esta vez aplicó otra base legal, el inciso f) del artículo 21.2 de la Ley de Impuesto a la Renta, correspondiente al método para calcular el costo computable de participaciones recibidas, como consecuencia de reorganización de sociedades. Lo que, no es otra cosa, que un cambio flagrante de fundamento de la administración tributaria que ha sido irregularmente convalidado por el Tribunal Fiscal e instancias judiciales y sobre el cual la sentencia de vista ha guardado absoluto silencio, convalidando el ilegal accionar de la administración tributaria. h. **Infracción por inaplicación del inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta** La Sala Superior omite pronunciarse sobre este extremo invocado por la compañía, pues convalida el ilegal accionar de la administración tributaria, el cual además es avalado por el Tribunal Fiscal y el Juzgado, ya que, se consideró como costo computable de las participaciones canceladas producto de la escisión -que constituye el numerador de la referida fórmula prevista en el inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta- el importe consignado en la Escritura Pública Nº 1092 6, ascendente a S/ 129´699,900.00 (ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles con cero céntimos), que corresponde al valor nominal de las participaciones a la fecha de escisión del bloque patrimonial (diez de diciembre de dos mil doce). Asimismo, señala que se debe apreciar que la Compañía ha seguido el procedimiento establecido en el inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, ha determinado el costo computable de las participaciones recibidas en BPZ NORTE OIL como consecuencia de la escisión aplicando la fórmula establecida en dicha norma. Además conforme a dicha disposición, el costo computable no debe ni puede equivaler al valor nominal de las participaciones que constituyen el bloque patrimonial transferido, sino que éste debe ser el mismo que tuvieron las participaciones canceladas como consecuencia de la escisión; sin embargo, ello no ha sido observado por el Tribunal Fiscal ni en las instancias judiciales. i. **Vulneración del principio de reserva de ley, de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario y la regla jurisprudencial vinculante 5.2.1 contenida en la Casación Nº 4392-2013 Lima, al validar la interpretación amplia del Juzgado respecto del inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta** Indica que en el presente caso las autoridades administrativas y posteriormente convalidado en la Sentencia de Vista ha añadido requisitos no previstos en la Ley del Impuesto a la Renta, para aceptar la deducción de parte del costo computable solicitado por la compañía a aquélla, asociado a participaciones recibidas con ocasión de una reorganización empresarial. Señala que la Sentencia de Vista al no pronunciase sobre sus argumentos, valida el accionar de las autoridades administrativas toda vez que sostuvieron que el costo computable asociado a participaciones recibidas de una reorganización empresarial se determina sobre la base de una fórmula que tiene por numerador al costo total de las participaciones canceladas cuyo cálculo implicaría multiplicar el número total de participaciones canceladas por su valor nominal, cuando la norma siempre alude a costo total y no a valor nominal. Argumenta que se debe advertir la vulneración de la norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, toda vez que en vía de interpretación se ha considerado que es requisito para la deducción y reconocimiento de costo computable proveniente de participaciones recibidas producto de una reorganización empresarial que el numerador de la fórmula legal prevista a tal fin se calcule sobre la base del valor nominal de cada participación, lo cual no ha sido previsto en parte ninguna de la norma tributaria, específicamente en la ley del impuesto a la renta. Agrega que se está creando un perjuicio de la compañía, en vía de interpretación, un requisito no previsto en la Ley de Impuesto a la Renta que vulnera la norma mencionada. Refiere que la sentencia de la Casación Nº 4392-20 13 Lima emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, reafirma las disposiciones contenidas en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que proscribe la prohibición de hacer mediante interpretación extensiva asociada a supuestos distintos que la ley señale, con lo cual no es posible hacer extensivas ciertas disposiciones tributarias a supuestos para los cuales ello no ha sido regulado de manera previa. j. **Infracción por vulneración del principio de capacidad contributiva** Refiere que producto de haberse tomado como base de la reliquidación un reparo contrario a ley y toda vez que la nulidad de la RTF impugnada no ha sido declarada nula, se vulneran los principios de capacidad contributiva de la empresa. **I.3 Auto calificatorio** Mediante el auto calificatorio del siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, se declaró **procedente** el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la empresa BZP ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP), por las causales mencionadas en el acápite anterior. **II. CONSIDERANDO Primero: Delimitación del petitorio 1.1** El tema principal que se trae a casación con relación a las infracciones normativas denunciadas es, en control de derecho, establecer si la sentencia de vista ha incurrido en las infracciones a normas sustantivas y procesales de las siguientes disposiciones legales: a) Inaplicación del artículo 370 del Código Procesal Civil b) Aplicación indebida del inciso 7 del artículo 22 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y de los incisos 2 y 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil c) Inaplicación del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, del numeral 6 del artículo 50 y del numeral 3 del artículo 122, así como del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil d) Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva e) Vulneración del principio de seguridad jurídica f) Inaplicación del artículo 320 del Código Procesal Civil g) Infracción por inaplicación del artículo 127 del Código Tributario h) Infracción por inaplicación del inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta i) Vulneración del principio de reserva de ley, de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario y la regla jurisprudencial vinculante 5.2.1 contenida en la Casación Nº 4392-2013 Lima, al validar la interpretación amplia del Juzgado respecto al inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta j) Infracción por vulneración del principio de capacidad contributiva **1.2** La línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver las causales procesales de afectación al debido proceso y falta de motivación de las resoluciones judiciales, examinando si la sentencia impugnada ha incurrido en las mismas. En caso la causal resulte amparable, acarrearía la nulidad de la resolución judicial

impugnada e impediría consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre la causal de carácter material. En el caso de no establecer amparable la infracción procesal denunciada, en segundo orden se procederá a analizar las infracciones normativas de carácter material anotadas en el acápite anterior. **Segundo: Sobre las infracciones normativas por afectación al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 2.1** El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional: Constitución Política del Perú **Artículo 139.-** Son principios y derechos de la función jurisdiccional "**5.** La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". Debida motivación que es uno de los derechos que conforman el derecho fundamental al debido proceso[1], reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece como principios y derechos de la función jurisdiccional: Constitución Política del Perú **Artículo 139.-** Son principios y derechos de la función jurisdiccional "3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional." **2.2** Este derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones también encuentra amparo en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y está incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ha obtenido interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución), que establece que es un derecho que permite verificar la materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos[2], y que: "[…] la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser Juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática […]".[3] **2.3** Cabe enfatizar que es obligación de los jueces motivar las resoluciones judiciales, como principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, regulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece: **"Artículo 12.- Motivación de resoluciones** Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente." También se encuentra regulado en el Código Procesal Civil, que establece, en los incisos 3 y 4 del artículo 122, lo siguiente: Las resoluciones contienen: **3.** La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; **4.** La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. **2.4** En esa misma línea, es pertinente anotar que esta Sala Suprema entiende que la idea de motivación no alude a una justificación profusa, abundante o retórica, sino a la exigencia de un mínimo de motivación congruente, en cuya ratio decidendi puedan observarse las razones por las que la Sala Superior llegó a la decisión correspondiente. Así, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos 9 y 11 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 02050-2005-HC /TC, caso Walter Lee, ha indicado lo siguiente: **9.** "Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el de obtener una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente planteadas por las partes en cualquier clase de procesos […]. **11.** La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión". **2.5** Finalmente, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones el **principio de congruencia** establecido en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII[4] del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo, por el cual el Juez no puede ir más allá del petitorio de la demanda ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados. Asimismo, la Corte Suprema, en la Casación Nº 1099-2017 LIMA, ha señalado con respecto al principio de congruencia, lo siguiente: "[…] que en toda resolución judicial debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede procesal, es el "[…] principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes […] para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y las pretensiones […]". **Tercero: Análisis de las causales casatorias de naturaleza procesal 3.1** De los fundamentos que sustentan las infracciones normativas procesales contenidas en los acápites **a)**, **b)**, **c), y d),** se advierte que se relacionan entre sí. Por tal motivo, se procederá a analizarlas de forma conjunta. **3.2** La recurrente sostiene en el fundamento del **acápite a)** que la Sala Superior obstaculizó el acceso a la tutela jurisdiccional, al reformar el fallo de fondo contenido en la sentencia de primera instancia, que declara infunda la demanda, por uno inhibitorio, es decir, que declara improcedente la demanda. Así impide cualquier tipo de pronunciamiento sustantivo, con lo que vulnera el principio de reforma en peor y obstaculiza el acceso a la tutela jurisdiccional. **3.3** Sostiene en el fundamento del **acápite b)** que lo pretendido únicamente puede discutirse mediante el proceso contencioso administrativo por ser la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 irrecurrible en la vía administrativa, al tratarse de última instancia administrativa, por lo que no existe otra vía donde pueda solicitar la debida tutela de sus derechos, por lo que sí tiene interés para obrar. Sostiene que de consentirse la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, la situación jurídica de la empresa jamás retornará al estatus anterior a la impugnación y se estaría desconociendo el importe revocado por la administración tributaria, ascendente a S/ 28'769,585.91 (veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y uno céntimos), extremo por el cual se declaró la improcedencia de la solicitud de certificación de capital invertido de la compañía. **3.4** Sostiene en el fundamento del **acápite c)** que el Tribunal Fiscal convalidó el tipo de cambio indicado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3582-9-2019, convalidando que la administración tributaria desconozca parte del costo computable de las participaciones recibidas por la empresa como consecuencia de la reorganización empresarial, citando como supuesta base legal de su reparo el inciso e) del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y el inciso e) del artículo 11 del reglamento de la ley. El ad quem omite pronunciarse sobre cada uno de sus argumentos, destinados a demostrar el correcto procedimiento de determinación del costo computable de las participaciones recibidas por la compañía BPZ Norte Oil S.R.L., incongruencia omisiva que deviene en defecto de motivación. **3.5** Sostiene en el fundamento del **acápite d)** que la sentencia de vista vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la empresa, toda vez que no advirtió que la resolución del Tribunal Fiscal materia de demanda puede adquirir la calidad de cosa juzgada e inimpugnable, y no pueda oponerse a la eficacia de la sentencia definitiva que se emitirá en el Expediente de Casación Nº 10227-2021-0-5001-SUDC-01. **3.6** En el presente caso, para establecer si la sentencia de vista ha incurrido en infracción del derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, corresponde acudir a sus propios fundamentos, que sustentan su decisión de revocar la sentencia de primera instancia —que declaró infundada la demanda— y, reformándola, declara improcedente la demanda. **3.6.1** La sentencia recurrida en su considerando primero se pronuncia señalando los agravios invocados en el recurso de apelación. En su considerando segundo, señala las pretensiones de la demanda. En su considerando tercero, señala que es materia de controversia determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 ha sido emitida conforme a ley o adolece de vicio de nulidad. En su considerando cuarto, se remite a los antecedentes administrativos. **3.6.2** En el considerando quinto, analiza el caso señalando que se determinará si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 se encuentra arreglada a ley en lo que respecta a lo decidido por el Tribunal Fiscal con relación al cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019 por la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT. Asimismo, analiza los agravios i, ii y iii de la apelación y señala que el Tribunal Fiscal en la Resolución

Nº 09304-8-2019 revocó la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, por consiguiente, no hay nada verificable ya que la administración tributaria no dio cumplimiento a la ordenado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019 y lo que se ordena a la SUNAT en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 es que vuelva a emitir nueva resolución de cumplimiento, lo que no ha ocurrido. Señala que las pretensiones de la demanda están referidas a cuestionar el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía sobre la base del valor nominal de las participaciones canceladas, en pretendido cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, cuestionando el procedimiento seguido por la administración para establecer el costo computable. Indica que observa falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, ya que la fundamentación fáctica y jurídica no se encuentra dirigida a cuestionar el pronunciamiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018 sino el reparo de fondo, sobre la validez de la determinación del costo computable de cada participación en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), pese a que dicho extremo ya ha sido materia de discusión en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, lo que no guarda conexidad con la materia de controversia de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018, que se circunscribió a determinar si la disminución de la certificación para efectos de la recuperación del capital invertido por el importe de un millón trescientos nueve mil ochocientos treinta y dos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/ 1'309,832.64) se encontró conforme a derecho, ordenando a la administración tributaria pronunciarse sobre la materia de controversia en relación improcedencia o no de la certificación por el importe no reconocido, ascendente a veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 28'769,585.91). Señala el ad quem que los fundamentos planteados de hecho y derecho por la demandante no fueron discutidos en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018 sino en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019 y planteados por la demandante en la demanda contencioso administrativa signada con Expediente Nº 8186-2019, por lo que concluye que deviene improcedente por falta de conexión lógica entre los argumentos planteados por la demandante y la materia de discusión en la resolución del Tribunal Fiscal. **3.6.3** En el numeral 5.6 del quinto considerando, el ad quem señala que, de la revisión de los medios probatorios, advierte que la pretensión también es objeto de revisión en otro proceso judicial signado con Expediente Nº 08186-2019, en el cual se cuestiona y solicita lo mismo que en el caso de autos. Señala que si bien en el Expediente Nº 08186-2019 la demandante solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-20219 y en el caso de autos se solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, también es cierto que en ambos procesos solicita lo mismo bajo los mismos argumentos y cuestionando expresamente a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, lo que ha generado dos procesos idénticos que tienen la misma controversia de fondo. Señala que la emisión de la sentencia de primera instancia no solo implica que exista un doble pronunciamiento respecto a la pretensión consistente en determinar el importe del costo computable asociado a cada participación recibida por la compañía recurrente y que se emita la certificación del capital invertido, sino también que se ha generado que exista un avocamiento indebido del Juez de primera instancia respecto de una pretensión que ya es materia de tutela en otro proceso judicial, donde se ha visto satisfecha la necesidad de tutela jurisdiccional de la demandante. Por tanto, se encuentra impedida de peticionar tutela jurisdiccional en este proceso al carecer manifiestamente de interés para obrar. **3.6.4** En el numeral 5.10 del quinto considerando se pronuncia respecto al agravio iv de la apelación, respecto a la pretensión subordinada a la pretensión principal sobre emitir pronunciamiento de plena jurisdicción y que se suspenda el presente proceso ordenando al Tribunal Fiscal y a la administración tributaria que sujeten la reliquidación a lo que se resuelva en el Expediente Judicial Nº 8186-2019, a fin de evitar fallos contradictorios y que la resolución del Tribunal Fiscal impugnada adquiera la calidad de cosa decidida. Señala el ad quem que deviene improcedente por imposibilidad jurídica, configurándose la causal prevista en el artículo 427 (inciso 5) del Código Procesal Civil. Señala que para evitar que se produzcan fallos contradictorios entre el presente proceso y el proceso seguido en el Expediente Nº 08185-2019, se debió acudir a la acumulación objetiva sucesiva de procesos, acorde a lo preceptuado en el artículo 88 (inciso 3) del Código Procesal Civil, lo que debió ser solicitado por la parte procesal en el modo y oportunidad previstos en el artículo 90 del invocado código adjetivo. Respecto a la pretensión de plena jurisdicción y a que el Juzgado se encontraba obligado a adoptar las medidas necesarias para la protección de sus derechos, señala que no guarda correspondencia con la pretensión subordinada, ya que la tutela que se brinda en un proceso contencioso administrativo es reconocer o disponer el restablecimiento de un derecho o interés conculcado por la actuación administrativa (efecto declarativo); y se condena a la administración para que adopte todas las medidas o actos necesarios para el fin de reconocer o restablecer los derechos conculcados (modelo condenatorio). Concluye que la declaración de improcedencia de la pretensión subordinada no implica una contravención al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. **3.6.5** En el sexto considerando, se pronuncia respecto a la conclusión a que se arriba en cuanto a la pretensión principal y accesoria. Señala que se observa falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, ya que la fundamentación fáctica y jurídica no se encuentra dirigida a cuestionar el pronunciamiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2018, sino que está dirigida a cuestionar el reparo de fondo sobre la validez de la determinación del costo computable de cada participación recibida por la recurrente, pese a que dicho extremo ya ha sido materia de discusión en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, por lo que el extremo de la demanda referido a la discusión del citado reparo deviene improcedente por falta de interés para obrar, por ser dicho extremo conocido en el Expediente Nº 8186-2019. En cuanto a la pretensión subordinada a la pretensión principal, sobre suspender el proceso judicial, refiere que esto no puede ser invocado como pretensión en una demanda contencioso administrativa, en la medida que no se trata de una pretensión material que dé cuenta de derechos subjetivos de la recurrente, sino que importa un tema procesal de mero trámite, cuya solicitud se puede presentar en cualquier estado del proceso, por lo que deviene improcedente por imposibilidad jurídica, configurándose la causal prevista en el artículo 427 (inciso 5) del Código Procesal Civil. **3.9** Conforme se ha examinado de los fundamentos expresados y la motivación de la sentencia de vista, se advierte que la misma ha expuesto su análisis y su razonamiento, evidenciando tanto los sustentos jurídicos como fácticos de la decisión de revocar la sentencia de primera instancia —que declaró infundada la demanda— y, reformándola, declarar improcedente la demanda. En consecuencia, no se evidencia vicio de motivación que implique que la sentencia de vista haya incurrido en la infracción procesal de vulneración a la debida motivación. Con relación a la vulneración del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, no se advierte la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, por cuanto la recurrida contiene motivación coherente, precisa y sustentada de sus decisiones, utilizando el ad quem su apreciación razonada, por lo cual las causales denunciadas contenidas en los acápites **a)**, **b)**, **c)** y **d)** resultan **infundadas**. **Cuarto: Sobre la infracción material de vulneración del principio de seguridad jurídica e inaplicación del artículo 320 del Código Procesal Civil 4.1** De los fundamentos que sustentan las infracciones normativas procesales denunciadas contenidas en los acápites **e), y f),** se advierte que se relacionan entre sí, ya que ambas cuestionan la suspensión del proceso y la emisión de fallos contradictorios, por lo que serán analizadas en forma conjunta. **4.2** La recurrente en el fundamento del **acápite e)** señala que cuando se emiten fallos contradictorios se vulnera la seguridad jurídica, puesto que al haberse dado dos pronunciamientos por parte del órgano jurisdiccional sobre aspectos de un mismo caso que se contradicen mutuamente, se atenta contra dicho principio fundamental del ordenamiento constitucional. La Sala Superior habría inaplicado el principio de seguridad jurídica, ya que correspondía suspender y sujetar el presente proceso a lo que se resolviera en el proceso judicial signado con Expediente Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01, el cual se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de Lima y en el que discute la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, ello a fin de evitar la emisión de fallos contradictorios. **4.3** La recurrente sostiene en el fundamento del **acápite f)** que la Sala Superior ha inaplicado el artículo 320 del Código Procesal Civil, señalando que correspondía suspender y sujetar el presente proceso a lo que se resolviera en el Expediente de Casación Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01, en el cual se viene discutiendo el valor de las participaciones canceladas para efectos del cálculo del capital invertido solicitado por la compañía, ello a fin de evitar la emisión de fallos contradictorios. **4.4** A fin de realizar el análisis correspondiente, se procede a citar los dispositivos legales cuya infracción material se denuncia: El principio de seguridad jurídica no tiene reconocimiento expreso en la Constitución; sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, estableciendo en la Sentencia Nº 0016-2002-AI/TC[5] que tal principio forma parte consubstancial del Estado constitucional de derecho, puesto que impregna todo

el ordenamiento jurídico. Siendo ello así, se citan los fundamentos 3 y 4 de la acotada sentencia: **3.** El principio de seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho" (STCE 36/1991, FJ 5). El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la "predecible" reacción, sea para garantizar la permanencia del statu qua, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal. **4.** Así pues, como se ha dicho, la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a través de distintas disposiciones constitucionales, algunas de orden general, como la contenida en el artículo 2°, inciso 24, parágrafo a) ("Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido se hacer lo que ella no prohíbe"), y otras de alcances más específicos, como las contenidas en los artículos 2°, inciso 24, parágrafo d) ("Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley") y I39°, inciso 3, ("Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación"). Código Procesal Civil Suspensión legal y judicial Artículo 320.- Se puede declarar la suspensión del proceso, de oficio o a pedido de parte, en los casos previstos legalmente o cuando a criterio del Juez sea necesario. El Juez a pedido de parte, suspende la expedición de la sentencia en un proceso siempre que la pretensión planteada en él dependa directamente de lo que debe resolver en otro proceso en el que se haya planteado otra pretensión cuya dilucidación sea esencial y determinante para resolver la pretensión planteada por él. Para ello es necesario que las pretensiones sean conexas, a pesar de lo cual no puedan ser acumuladas, caso contrario, deberá disponerse su acumulación.**" 4.5** La recurrente sostiene que se vulnera el principio de seguridad jurídica por haberse emitido pronunciamientos contradictorios por parte del órgano jurisdiccional; sin embargo, en el presente caso se advierte que la Sala Superior ha emitido sentencia de vista mediante resolución número diecisiete, del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la misma que no contiene pronunciamiento de fondo, por haber revocado la sentencia de primera instancia y, reformándola, haber declarado improcedente la demanda, lo que no se contrapone con lo resuelto en el proceso judicial signado con Expediente Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01. Respecto a lo señalado por el casante, sobre que la Sala Superior debió suspender el proceso y sujetarlo a lo que se resolviera en el Expediente Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01, el cual se encuentra pendiente de resolución ante esta Corte Suprema de Justicia de Lima, ello a fin de evitar también la posibilidad de fallos contradictorios; el artículo 320 del Código Procesal Civil señala que el Juez, a pedido de parte, suspende la expedición de la sentencia siempre que la pretensión planteada dependa directamente de lo que deba resolver en otro proceso y cuya dilucidación sea esencial y determinante para resolver el presente caso, siempre que las pretensiones sean conexas y no puedan ser acumuladas. Advierte en el presente caso que si bien la demandante sostuvo que existió vinculación entre el presente proceso judicial y el Expediente Nº 10227-2021-0-5001-SU-DC-01, sin embargo no solicitó en tiempo oportuno la acumulación de los procesos, así como tampoco señaló los motivos por los cuales deba procederse con la suspensión, en caso de no corresponder la acumulación, por lo que dichas omisiones no dan cumplimiento a lo previsto en el artículo 320 del Código Procesal Civil. A ello se suma que el pedido de suspensión no es claro. Si bien solicita la suspensión del presente proceso judicial, al mismo tiempo solicita que se ordene al Tribunal Fiscal y a la administración que sujete la reliquidación a lo que se resuelva en forma definitiva en el Expediente Judicial Nº 8186-2019. Por lo expuesto, las causales denunciadas contenidas en los acápites **e)** y **f)** devienen **infundadas**. **Quinto: Sobre la infracción material de inaplicación del artículo 127 del Código Tributario 5.1** La empresa recurrente sostiene en el fundamento del **acápite g)** que el ad quem inaplicó el artículo 127 del Código Tributario al convalidar el cambio de fundamento del reparo efectuado por la administración tributaria al desconocer parcialmente el costo computable. Señala que originalmente la administración tributaria desconoció parte del costo computable citando como base legal el inciso e) del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y el inciso e) del artículo 11 del reglamento de la ley, y, luego que el Tribunal Fiscal ordenara la emisión de un nuevo pronunciamiento, la administración tributaria mediante Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT cambia la base legal y aplica el inciso f) del artículo 21.2 de la Ley de Impuesto a la Renta, correspondiente al método para calcular el costo computable de participaciones recibidas como consecuencia de reorganización de sociedades. **5.2** A fin de realizar el análisis correspondiente, se procede a citar el dispositivo legal cuya infracción material se denuncia: **Texto Único Ordenado del Código Tributario** Art. 127.- Facultad de Reexamen El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o para disminuirlos. Párrafo incorporado por el Artículo 33º del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el 15 de marzo de 2007. **5.3** De la revisión de los antecedentes de los actuados administrativos, se advierte que, por Resolución del Tribunal Fiscal Nº 4878-3-2016, fue declarada nula la Resolución de Intendencia Nº 0240240026953/SUNAT, emitida el catorce de marzo de dos mil trece, que autorizó la emisión de la certificación de recuperación de capital invertido por ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles (S/. 129'699,900.00) y señaló como base legal de la fórmula de cálculo del costo computable la establecida en el literal e) del numeral 21.2 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y el literal e) del artículo 11 de su reglamento. Dicha resolución de Intendencia se reputa inexistente y no tiene efectos jurídicos, conforme lo prescribe el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley Nº 27444, que establece que la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto por el que ha sido declarada nula. En ese sentido, la Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT, que ha sido emitida en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 4878-3-2016, y que fundamenta su decisión en otra norma legal, consistente en el inciso f) numeral 21.2 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, no contraviene la facultad de reexamen prevista en el artículo 127 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por lo que deviene **infundada** la causal denunciada. **Sexta: Sobre la inaplicación del inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta; vulneración del principio de reserva de ley, de la norma VIII del título preliminar del Código Tributario y de la regla jurisprudencial vinculante 5.2.1 contenida en la Casación Nº 4392-2013 Lima; y vulneración del principio de capacidad contributiva 6.1** En el caso concreto, de las causales contenidas en los **acápites h), i),** y **j)**, se advierte que guardan relación con el fundamento por referirse al cálculo del costo computable. Por tal motivo, se procederá a analizarlas de forma conjunta. **6.2** La empresa recurrente sostiene en el fundamento del **acápite h)** que el ad quem desconoció el procedimiento establecido en la Ley del Impuesto a la Renta para establecer el costo computable de las participaciones que la compañía recibió de BPZ NORTE OIL, convalidando el ilegal accionar de la administración tributaria, que fue avalado por el Tribunal Fiscal y el Juzgado, ya que consideró como costo computable de las participaciones canceladas —que constituye el numerador de la referida fórmula prevista en el inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta— el importe consignado en la escritura pública, ascendente a S/ 129'699,900.00 (ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles con cero céntimos), que corresponde al valor nominal de las participaciones a la fecha de escisión del bloque patrimonial (diez de diciembre de dos mil doce). **6.3** La empresa recurrente sostiene en el fundamento del **acápite i)** que las autoridades administrativas han añadido requisitos no previstos en la Ley del Impuesto a la Renta para aceptar la deducción de parte del costo computable asociado a participaciones recibidas con ocasión de una reorganización empresarial. Alega que la sentencia de vista, al no pronunciase sobre sus argumentos,

validó el accionar de las autoridades administrativas, que sostuvieron que el costo computable asociado a participaciones recibidas de una reorganización empresarial se determina sobre la base de una fórmula que tiene por numerador al costo total de las participaciones canceladas cuyo cálculo implicaría multiplicar el número total de participaciones canceladas por su valor nominal, cuando la norma siempre alude a costo total y no a valor nominal. Señala que se ha vulnerado la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, por considerar, en vía de interpretación, que es requisito para la deducción y reconocimiento del costo computable proveniente de participaciones recibidas producto de una reorganización empresarial, que el numerador de la fórmula legal prevista a tal fin se calcule sobre la base del valor nominal de cada participación, lo que no ha sido previsto en las normas tributarias ni en la Ley del Impuesto a la Renta. Refiere que la Sentencia de Casación Nº 4392-20 13 Lima reafirma las disposiciones contenidas en la norma VIII del título preliminar del Código Tributario, que proscribe la interpretación extensiva, ya que no es posible hacer extensivas ciertas disposiciones tributarias a supuestos para los cuales ello no ha sido regulado de manera previa. **6.4** La empresa recurrente sostiene en el fundamento del **acápite j)** que, producto de haberse tomado como base de la reliquidación un reparo contrario a ley, se vulnera el principio de capacidad contributiva. **6.5** A fin de realizar el análisis correspondiente, se procede a citar los dispositivos legales cuyas infracciones materiales se denuncia: **Ley del Impuesto a la Renta Artículo 21°** Tratándose de la enajenación, redención o rescate cuando corresponda, el costo computable se determinará en la forma establecida a continuación: 21.2 Acciones y participaciones: **f)** Tratándose de acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una reorganización empresarial, su costo computable será el que resulte de dividir el costo total de las acciones o participaciones del contribuyente que se cancelen como consecuencia de la reorganización, entre el número total de acciones o participaciones que el contribuyente recibe. En el caso de la reorganización simple, el costo computable de las acciones o participaciones que se emitan será el que corresponda al activo transferido. Si la reorganización se produce al amparo de lo señalado en el numeral 2 del artículo 104° de la Ley, no se deberá considerar como parte del costo del activo transferido el mayor valor producto de la revaluación voluntaria que hubiera sido pactada debido a la reorganización. Si el bloque patrimonial transferido está compuesto por activos y pasivos, el costo computable será la diferencia entre el valor de ambos. Si el pasivo fuera mayor al activo, el costo computable será cero (0). Inciso f) incorporado por el artículo 3° de la Ley Nº 29645, publicada el 31.12.2010, vigente desde el 1.1.2011. "**Constitución Política del Perú** Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo" **NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS** Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo. Norma modificada por el Artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el 18 de julio de 2012. **Casación 4392-2013** "5.2.1 La Norma VIII del Título Preliminar el Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva, admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada, resultando para ello muy importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar." **Antecedentes administrativos 6.6** A fin de emitir pronunciamiento respecto a las causales denunciadas, es necesario señalar los hechos suscitados en el procedimiento contencioso tributarios, como aparece a continuación: **6.6.1** La empresa contribuyente, el cinco de febrero de dos mil trece, solicitó la emisión de certificación para recuperación de capital invertido por el importe ascendente a ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 158'469,485.91), respecto de cuatrocientos treinta y dos mil trescientos treinta y tres participaciones de su propiedad, considerando como valor de cada participación recibida como consecuencia de reorganización la suma de trescientos sesenta y seis soles con cincuenta y cuatro céntimos (S/ 366.54). **6.6.2** La administración tributaria, mediante **Resolución de Intendencia Nº 0240240026953/SUNAT**, solamente autorizó la emisión de certificación para la recuperación de capital invertido por el importe de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles (S/ 129'699,900.00), reparando y desconociendo la cantidad de veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 28'769,585.91). No estando conforme la contribuyente con dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante **Resolución Nº 04878-3-2016,** del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, que declaró nula la Resolución de Intendencia Nº 0240240026953/SUNAT, fundamentando que la administración tributaria desconoció el costo computable de las acciones consideradas por la recurrente y modificó el valor de cada participación de trescientos sesenta y seis soles con cincuenta y cuatro céntimos (S/ 366.54) a la suma de trescientos soles (S/ 300.00), con lo cual obtuvo como resultado la suma autorizada de ciento veintinueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete soles con veintidós céntimos (S/. 129'684,637.22), sin analizar ni sustentar las razones por las que no correspondía reconocer el importe considerado por la recurrente; por ello, ordenó a la administración emitir nuevo pronunciamiento. **6.6.3** Ante lo resuelto por el Tribunal Fiscal, la administración tributaria emitió nuevo pronunciamiento contenido en la **Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/ Sunat**, del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, que resuelve nuevamente autorizar parcialmente la certificación por el importe de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles (S/ 129'699,900.00), y repara el monto de veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 28'769,585.91), considerando como sustento legal del reparo la aplicación del inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, y señala que para determinar el costo computable de cada una de las participaciones se aplicó el inciso a) del artículo 60 de la Ley del Impuesto a la Renta, según el cual las operaciones en moneda extranjera se contabilizan al tipo de cambio vigente a la fecha de operación, y, considerando la fecha de la Junta General de Socios, que aprobó la escisión del bloque patrimonial, esto es, el diez de diciembre de dos mil doce, determinó como costo computable la suma de ciento veintinueve millones seiscientos ochenta seis mil cuatrocientos soles con cero céntimos (S/ 129'686,400.00). No conforme la empresa contribuyente con el monto no reconocido, interpuso recurso de apelación el seis de septiembre de dos mil dieciséis, lo que fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante **Resolución Nº 03582-9-2019,** que resolvió revocar la Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/Sunat señalando que el artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, tratándose de participaciones recibidas de una reorganización empresarial, el costo computable será el resultado de dividir el costo de las participaciones que se cancelen entre el total de participaciones que se recibe, por lo que el resultado de dividir las participaciones canceladas, por cincuenta millones trescientos ochenta y dos mil quinientos treinta dólares con cincuenta y un centavos (US$ 50'382,530.51), y las cuatrocientos treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho participaciones recibidas, se obtiene como resultado el costo computable por cada participación recibida de ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55). En ese sentido, señala que el **procedimiento seguido por la administración se ajusta a ley**. Asimismo, indica que el costo computable de cada participación recibida, que es ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), ha sido convertido por la administración a moneda nacional usando el tipo de cambio de dos mil quinientos setenta y cuatro soles (S/ 2.574), que corresponde al de la fecha de la Junta General de Socios, esto es, el diez de diciembre de dos mil doce, lo que genera un total de trescientos soles (S/.300.00) soles como costo computable por participación, costo que fue aplicado a las cuatrocientos treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho participaciones y dio lugar a la suma de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles (S/.129'699,900.00). Sin embargo, en concepto del Tribunal Fiscal, **correspondía considerar el tipo de cambio vigente a la fecha de la inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos** y no la de realización de la Junta General de Socios, por lo que revoca la apelada a fin de que la administración verifique y considere el tipo de cambio que corresponde. Finalmente, el tribunal administrativo señaló que el procedimiento utilizado por la contribuyente para determinar el costo computable no se encuentra conforme con lo establecido por el inciso f) del numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que no ampara la nulidad solicitada. **6.6.4** En cumplimiento de la Resolución Nº 03582-9-2019, la administración tributaria emite la **Resolución de Intendencia de Cumplimiento Nº 0120240001834/Sunat**, de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, que resolvió autorizar

la disminución de la certificación para efectos de la recuperación del capital invertido por el importe de un millón trescientos nueve mil ochocientos treinta y dos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/. 1'309,832.64) respecto al importe autorizado en la Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT, señalando haber considerado la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y ocho soles (S/ 2.548), el tipo de cambio vigente a la fecha de inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos, esto es, al dos de enero de dos mil trece, lo que dio como resultado un total de doscientos noventa y seis soles con noventa y siete céntimos (S/ 296.97) de costo computable por participación, lo que fue aplicado a cuatrocientos treinta y dos doscientos ochenta y ocho participaciones recibidas y dio un total de ciento veintiocho millones trescientos setenta y seis mil quinientos sesenta y siete soles con cero céntimos (S/ 128'376,567.00), a ser reconocidos como costo computable, por lo que autorizó la disminución de la certificación en el importe de un millón trescientos nueve mil ochocientos treinta y dos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/ 1'309,832.64). No conforme, la contribuyente interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante **Resolución Nº 9304-8-2019**, resolución que es materia de controversia en el presente proceso. Este acto administrativo resolvió revocar la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/Sunat en el extremo que disminuye la certificación en el importe de un millón trescientos nueve mil ochocientos treinta y dos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/ 1'309,832.64), señalando que la contribuyente impugnó el extremo no reconocido por la administración tributaria, y no cuestionó el importe de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles con cero céntimos (S/ 129'699,900.00) autorizado por la administración, por lo que, para el colegiado administrativo, correspondía que la administración determinara la procedencia o no de la certificación por el importe no reconocido**.** Nuevamente, la contribuyente no estuvo conforme e impugnó la Resolución Nº 9304-8-2019 mediante demanda contencioso administrativa, la que dio lugar al presente proceso judicial y que ha motivado la interposición del recurso de casación bajo análisis. **Séptimo: De las resoluciones de cumplimiento en el procedimiento contencioso tributario 7.1** En el título III del libro tercero del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, se regula el procedimiento contencioso tributario, disponiendo su artículo 143 que: "El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera". Cabe precisar que el tenor transcrito es introducido por el artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 953, publicado el cinco de febrero de dos mil cuatro. **7.2** Por su parte, el artículo 124 del referido Texto Único Ordenado del Código Tributario precisa que son etapas del procedimiento contencioso tributario la reclamación ante la administración tributaria y la apelación ante el Tribunal Fiscal; siendo que, de conformidad a los artículos 147 y 149 del mismo cuerpo normativo, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar (a no ser que, no figurando en la orden de pago o resolución de la administración tributaria, hubieran sido incorporados por esta al resolver la reclamación), y que la administración tributaria será considerada parte en el procedimiento de apelación, pudiendo presentar medios probatorios y demás actuaciones que correspondan. **7.3** Con relación a las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, los artículos 153 y 156 del Texto Único Ordenado del Código Tributario prevén que contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa, y que las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la administración tributaria bajo responsabilidad. **7.4** Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el precitado artículo 156 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1263[6], en caso se requiera expedir una resolución de cumplimiento, los funcionarios de la administración tributaria la emitirán a fin de cumplir con lo dispuesto por el colegiado administrativo (Tribunal Fiscal), bajo responsabilidad. Emitida y notificada la resolución de cumplimiento, la norma contempla la posibilidad de interponer recurso de apelación contra ella, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en que se efectuó su notificación. **7.5** El artículo 157 del Código Tributario señala que, agotada la vía administrativa, la resolución del Tribunal Fiscal podrá impugnarse mediante el proceso contencioso administrativo. Cabe precisar que la interposición de la demanda contencioso administrativa no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria, conforme lo señala también el artículo 157 del Código Tributario. **Octavo: Análisis del caso 8.1** El caso de autos, la empresa demandante planteó como pretensión principal la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0120240001834/SUNAT, en cuanto mantiene el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), sobre la base del valor nominal de las participaciones canceladas, en pretendido cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019. Atendiendo al marco regulatorio que rige el procedimiento contencioso tributario, y a que la controversia tributaria se encuentra circunscrita a la verificación de la labor de la autoridad tributaria, esto es, si ha dado o no cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, corresponde en sede judicial emitir un pronunciamiento congruente con los hechos suscitados en sede administrativa, los que no pueden ser descontextualizados, en caso la resolución del Tribunal Fiscal que ordena el cumplimiento se encuentre surtiendo efectos y sea ejecutable, garantizándose con ello el respeto a los principios y garantías de un debido proceso. **8.2** La recurrente cuestiona el importe del costo computable de cada participación recibida por la compañía en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), pues destaca que ha sido calculado por la administración tributaria aplicando un procedimiento que no se encuentra regulado en las normas tributarias, como es el caso de la Ley del Impuesto a la Renta. De los actuados en sede administrativa, se advierte que la administración tributaria no ha venido dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en la resolución emitida por el Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019, que si bien determinó el costo computable de cada participación en la cantidad de ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco centavos (US$ 116.55), aplicando un procedimiento que el Tribunal Fiscal consideró arreglado a ley, al realizar el cambio a moneda nacional aplicó un tipo de cambio que no correspondía a la fecha en que se había registrado la operación en Registros Públicos, y, posteriormente, en forma arbitraria, recalculó el costo computable que no fue reparado y por el contrario autorizado para certificación en el monto de ciento veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos soles con cero céntimos (S/ 129'699,900.00), y disminuyó al mismo la suma de un millón trescientos nueve mil ochocientos treinta y dos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/ 1'309,832.64) soles; este extremo fue revocado por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución Nº 9304-8-2019, sin embargo se mantuvo el procedimiento de cálculo de determinación del costo computable respecto al monto que fue reparado y cuestionado por la contribuyente. **6.12** También se advierte de los actuados que el procedimiento aplicado por la administración tributaria para determinar el costo computable de cada una de las participaciones recibidas como consecuencia de reorganización empresarial, y que originó el reparo en la cantidad de veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco soles con noventa y un céntimos (S/ 28'769,585.91), desconociendo su certificación, y que ha sido materia de cuestionamiento en todo el procedimiento contencioso tributario por el contribuyente, ha sido considerado como un procedimiento válido y legal por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 3582-9-2019, la misma que ha sido materia de cuestionamiento en el proceso judicial seguido con Expediente Nº 8186-2019. **6.13** Revisado el Sistema de Información Judicial - SIJ, se advierte que en el Proceso Judicial Nº 8186-2019, **la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019** —que ha dado lugar a la Resolución de Intendencia de Cumplimiento Nº 0120240001834/SUNAT— y la **Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT** —que resuelve la solicitud de certificación de recuperación de capital invertido— han sido declaradas **nulas** por la sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós, del doce de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera, que señala en el décimo cuarto considerando lo siguiente: **Décimo Cuarto**: En mérito a los considerandos precedentes, se determina que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3582-9-2019 de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley Nº 274444, por esa razón, corresponde estimar parcialmente la pretensión principal y sus pretensiones accesorias de conformidad con el artículo 87 del Código procesal Civil, en consecuencia, se reconoce que el numerador de la fórmula de cálculo prevista en el inciso f) del numeral 21.2) del artículo 21 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, está referido al costo de adquisición de las participaciones, más no a su valor nominal, debiendo la Administración Tributaria calcular el costo computable de las participaciones como consecuencia de una reorganización societaria de conformidad con lo sustentado en la presente resolución. **6.13** Habiendo sido impugnada la sentencia de vista, la Corte Suprema emitió la

Ejecutoria Suprema Nº 10227-2021 declarando infundados los recursos extraordinarios de casación, y señaló en el numeral 3.5 y 3.6 del tercer considerando, respecto al procedimiento aplicado por la administración tributaria para el cálculo del costo computable, lo siguiente: d.5 Al realizar la labor interpretativa del literal f) del numeral 21.2) del artículo 21 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se tienen las siguientes disposiciones: **N1=** En el caso de acciones recibidas como consecuencia de una reorganización empresarial, el costo computable se determinará dividiendo el costo total de las acciones o participaciones del contribuyente que se cancelen como consecuencia de la reorganización, entre el número total de acciones o participaciones que el contribuyente recibe. El citado literal f) resulta concordante con la disposición del literal 1) del artículo 20 del mismo texto único, que dispone: "[…] Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase por: **1)** Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente […]". (El subrayado es nuestro). **N2=** Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adquisición, entre otros. Al concordar N1 y N2, tenemos que el costo computable se determinará dividiendo el costo de adquisición de las acciones o participaciones del contribuyente que se cancelen como consecuencia de la reorganización societaria, entre el número total de acciones o participaciones que el contribuyente recibe. d.6 Es así que la sentencia de vista al analizar e interpretar jurídicamente las disposiciones antes anotadas que resultan aplicables para la solución de la presente controversia decide declarar fundada en parte la demanda al haber determinado que el numerador de la fórmula del costo computable de las participaciones recibidas como consecuencia de una reorganización societaria contenida en el literal f) del numeral 21.2) del artículo 21 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, está referida al costo de adquisición de las participaciones canceladas, sobre la base de lo señalado por el literal a) del mismo numeral 21.2 referido al costo computable de acciones y participaciones, lo que se ajusta a derecho. 3.6.1 […] En este orden de ideas, este Colegiado Supremo no advierte que la sentencia de vista contenga una interpretación errónea ni extensiva del literal f) del numeral 21.2 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, sino que su resultado lo constituye el análisis en conjunto de las normas del citado texto único y su Reglamento como de la doctrina tributaria que resultan pertinentes para arribar a la solución de la presente controversia. […] **6.14** Siendo así, la **Resolución de Intendencia Nº 0120240001515/SUNAT** —que resuelve la solicitud de la empresa recurrente de expedición del certificado de recuperación de capital invertido— y la **Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03582-9-2019** —que señala que el procedimiento utilizado por la SUNAT para el cálculo del costo computable es arreglado a ley—, habiendo sido declaradas nulas, no surten efectos y no son ejecutables. **6.15** En el presente caso, se advierte que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 9304-8-2019, la que es materia de controversia, ha mantenido el procedimiento aplicado por la Sunat para determinar el valor de cada una de las participaciones recibidas por la compañía como costo computable (lo que generó por cada participación la cantidad de ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco céntimo (US$ 116.55), convertido a moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de inscripción en Registros Públicos dio como resultado trescientos sesenta y seis soles con cincuenta y cuatro céntimos (S/. 366.54); sin embargo, en el proceso judicial seguido con el Expediente Nº 8186-2019 ha quedado establecido que dicho procedimiento utilizado por la Sunat no es conforme a derecho, debido a que el numerador de la fórmula del costo computable de las participaciones recibidas como consecuencia de una reorganización societaria contenida en el literal f) del numeral 21.2) del artículo 21 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, está referida al costo de adquisición de las participaciones canceladas, sobre la base de lo señalado por el literal a) del mismo numeral 21.2 referido al costo computable de acciones y participaciones, lo que si se ajusta a derecho, es que el mencionado importe correspondiente al costo computable de cada participación recibida por la Compañía en ciento dieciséis dólares con cincuenta y cinco céntimo (US $ 116.55), convertida posteriormente en moneda nacional, no es arreglado a ley, por lo que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 9304-8-2019, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley Nº 27444, y debe declararse su nulidad, ordenando que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento dando cumplimiento a lo señalado en la Casación Nº 10227-2021, concordante con la Sentencia de Vista contenida en la resolución Nº 22, en el expediente Nº 8186-2019, en atención a los fundamentos expuestos en la presente sentencia. Por los fundamentos expuestos, las causales denunciadas contenidas en los acápites **h), i) y j)** devienen en **fundadas**. **DECISIÓN** Por tales consideraciones y en atención a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP) mediante escrito del quince de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la resolución número diecisiete, del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; y, **actuando en sede de instancia, REVOCARON** la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y, **REFORMÁNDOLA, DECLARARON FUNDADA** la demanda, en consecuencia **NULA** la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09304-8-2019, por lo que el Tribunal Fiscal debe emitir nueva resolución teniendo presente lo resuelto en la Casación Nº 10227-2021, en concordancia con la sentencia de vista emitida mediante resolución número veintidós en el Expediente Nº 8186-2019; en los seguidos por la empresa BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP (LP) contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre acción contencioso administrativa. Por último, **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la Jueza Suprema **Cabello Matamala**. SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, **CABELLO MATAMALA,** DELGADO AYBAR, TOVAR BUENDÍA.

---

1 El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, el cual exige que en todas las instancias judiciales se cumplan necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden público que han sido establecidas a fin de generar que todas las personas estén en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia del veintisiete de enero de dos mil nueve; párrafo 153.

3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. "Caso Apitz Barbera y otros". Sentencia del cinco de agosto de dos mil ocho; fundamento 77.

4 **Código Procesal Civil**
Juez y Derecho.-
Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

5 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0016-2002-AI/TC, del treinta de abril de dos mi tres. Proceso de inconstitucionalidad seguido por el Colegio de Notarios de Junín.
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00016-2002-AI.pdf

6 Publicado el 10 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano.

C-2245460-21

CASACIÓN Nº 19425-2023 LIMA

Lima, doce de septiembre de dos mil veintitrés

VISTO Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos, **i)** por el **representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del quince de mayo de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos sesenta a cuatrocientos ochenta y ocho del Expediente Judicial Electrónico - EJE[1]); y, **ii)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal**, mediante escrito del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas quinientos dos a quinientos veinticuatro), contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número veintidós del catorce de abril de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos cincuenta y uno), que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número diez de fecha diecisiete de junio de dos mil

veinte (fojas ciento noventa y ocho a doscientos veinticinco), que declaró infundada la demanda en el extremo referido a la pretensión de dejar sin efecto a la Resolución de Intendencia (cumplimiento) Nº 0260150010138, e improcedente la demanda respecto al extremo relativo a la aplicación de la Casación Nº 4392-2013-Lima a los intereses moratorios de los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año 2005. Asimismo, **revoca** la referida sentencia que declaró improcedente la demanda respecto al extremo referido a la capitalización de intereses; y, reformándola la declara fundada, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2500-8-2018, en este extremo. y, sobre el extremo que declara infundada la demanda referido a la suspensión de los intereses moratorios por exceso de plazo en resolver de la administración y Tribunal Fiscal; y, reformándola se declara fundada, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2500-8-2018, en este extremo. **CONSIDERANDO Primero:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, el cual señala que, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú "tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados […]". En ese sentido, se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales, como son los sujetos procesales, como es la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes, la naturaleza de las actuaciones impugnables, las particularidades procesales como son los requisitos de admisibilidad y procedencia, la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar, la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, prevaleciendo la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N.°00018-2003-AI/TC[2]. **Segundo:** Asimismo, resulta necesario señalar que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, dispone que: "[e]l Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley"; en ese marco, resulta pertinente indicar la Ley Nº 31591[3], publicada en el diario oficial El Peruano con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que introdujo, entre otros aspectos sustanciales, modificaciones respecto del trámite recurso de casación y su respectiva calificación. En ese orden, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, y en específico, al artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la referida Ley Nº 31591, deben ser tomadas en forma supletoria, teniendo presente los principios que regulan tal norma especial, que no debe ser desnaturalizado, menos aún las exigencias esenciales que lo caracterizan. **Requisitos de procedencia Tercero:** Resulta necesario señalar los siguientes artículos del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y su modificatoria introducido por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, los cuales son: **Artículo 388. Causales** Son causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. […] **Artículo 391. Interposición y admisión** 1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende. 2. El recurso se interpone: a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada. b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. […] **Artículo 393. Improcedencia** 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos. Además, sobre los requisitos de procedibilidad, resulta aplicable supletoriamente al recurso de casación del proceso contencioso administrativo, el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, en cuanto establece que el recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso, toda vez que, el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. **Cuarto:** Efectuada la revisión de los requisitos de procedibilidad, se advierte que el recurso impugna una resolución expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso, además, este no tiene un sentido anulatorio, respecto a la decisión, por ende, se cumple con los requisitos señalados en el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591. Asimismo, sobre los requisitos de admisibilidad contenidos en el inciso 2 del modificado artículo 391 del Código Procesal Civil, se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días de notificada (fojas cuatrocientos cincuenta y cinco [SUNAT] y cuatrocientos cincuenta y siete [Tribunal Fiscal]), En relación al arancel judicial por concepto de casación, los recurrentes al ser parte del Estado se encuentran exonerados del pago, al amparo del artículo 47 de la Constitución Política el Estado. Por tanto, se cumple con los requisitos precisados en este inciso de la referida norma. **Quinto:** El recurso de casación presentado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se sustenta en las siguientes causales: **Infracciones normativas de derecho procesal** a) La Sala Superior vulnera el numeral 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el articulo VII del Título Preliminar del código Procesal Civil, numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por las siguientes razones: - **La sentencia de vista incurre en una motivación aparente e insuficiente puesto que no ha efectuado el test de proporcionalidad a fin de realizar el control difuso (inaplicación) de la regla de capitalización de intereses y aplicación de intereses, de acuerdo con el precedente vinculante contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04293-2012-PA/TC y la doctrina jurisprudencia vinculante contenida en la Consulta Nº 1618-2016-Lima Norte, no resultando fundamento suficiente invocar lo resuelto en otros casos.** La casacionista señala que, la Sala Superior exoneró a la contribuyente de los intereses moratorios generados en el exceso del plazo para resolver el recurso de apelación por parte del Tribunal Fiscal, inaplicando una serie de normas legales sin hacer el test de proporcionalidad a fin de efectuar el control difuso de esas normas de acuerdo con lo señalado en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04293-2012-PA/TC y la doctrina jurisprudencial vinculante contenida en la Consulta Nº 1618-2016-Lima Norte, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Argumenta que, la Sala Superior inaplicó el artículo 33 del Código tributario (Decreto Legislativo Nº 816), la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 30230 publicada el 12 de julio de 2014, las que no han sido declaradas inconstitucionales; por tanto, gozan de presunción de constitucionalidad y son obligatorias

para todos sin excepción, según lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución. Agrega que, sin embargo, en la sentencia de vista se inaplicaron las referidas normas invocando y remitiéndose únicamente a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 4082-2012-PA/TC y Nº 04532-2013-PA/TC, según se aprecia en el noveno considerando, lo que no resulta fundamento suficiente para la inaplicación de estas normas, pues la Sala Superior estaba obligada a efectuar su propio control difuso para el caso de autos. - **La Sentencia de vista incurre en una falta de motivación externa y vulnera el principio de prohibición de arbitrariedad al partir de la premisa falsa que las Sentencias Nos. 4082-2012-PA/TC y 4532-2013-PA/TC constituyen doctrina jurisprudencial vinculante, pese a que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no lo son, con lo cual, la Sala Superior vulnera el debido procedimiento.** La casacionista señala que, el principio a la prohibición a la arbitrariedad implica en rigor, una garantía al debido proceso, e impide que los juzgadores emitan sus pronunciamientos basados en fundamentos incongruentes y contradictorios con la realidad. En el caso de autos, a efectos de aplicar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC y Nº 04532-2013-PA/TC y así revocar la sentencia de primera instancia en el extremo que declaró infundada la demanda, la Sala Superior ha afirmado que las mismas constituyen doctrina jurisprudencial vinculante, pese a que el Tribunal Constitucional de forma expresa ha señalado que no lo son; por tanto, al sustentar su decisión en una premisa falsa, la Sala Superior a vulnerado el debido proceso al trasgredir el principio de la prohibición a la arbitrariedad, incurriendo en una nulidad insalvable, según arguye la parte recurrente. - **La Sala Superior incurre en una motivación insuficiente y aparente al no haber expresado razones para extender los efectos procesales de la tutela del plazo razonable a aspectos sustanciales de la controversia, como la determinación de la deuda tributaria en el extremo relativo a los intereses moratorios.** La recurrente señala que, la Sala Superior concluye que la tutela del plazo razonable (en el caso, lo equipara al plazo legal) amerita la inaplicación de intereses moratorios. Sin embargo, no justifica dicha afirmación en algún fundamento, únicamente alude a las Sentencias del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes Nos. 4082-2012 y 4532-2013. Arguye, que debe anotarse que aun en el supuesto negado que se considere que en el presente caso hubo una lesión del derecho a un plazo razonable, tal afectación no es razón suficiente para disponer la inaplicación de intereses moratorios, puesto que la tutela de dicho derecho es estrictamente procesal, esto es, que se emita el pronunciamiento respectivo por la autoridad competente. Argumenta, que la Sala Superior baso su decisión en su simple subjetividad, pues lejos de sujetarse a los márgenes del contenido del derecho a un plazo razonable, y a las normas legislativas y jurisprudenciales aplicables al caso, le otorgó a dicho derecho una consecuencia que no se desprende de su contenido y complementariedad en el ordenamiento jurídico. Es decir, la Sala Superior actuó en este extremo de su sentencia de manera arbitraria, incurriendo en una motivación aparente o insuficiente. Infracciones normativas de derecho material **b) Inaplicación del artículo 33 del Código Tributario vigente antes de la modificación introducida por la Ley Nº 30230.** La casacionista señala que, pese de haber una norma expresa aplicable e identificada para el caso, la Sala Superior ha omitido aplicarlo, soslayando con ello, no solo a la propia norma, sino también el derecho de los justiciables. En el presente caso, la Sala Superior ha inaplicado el artículo 33 del Código Tributario vigente antes de la modificación introducida por la Ley Nº 30230, pese a que dicha norma resultaba trascendental para resolver la controversia vinculada a la inaplicación de los intereses moratorios, olvidando la Sala Superior el fin constitucionalmente valioso de los intereses moratorios. Arguye, que la regla de la suspensión del cómputo de intereses moratorios durante el exceso del plazo para resolver los recursos de reclamación se introdujo el 01 de abril de 2007. Asimismo, la regla de la suspensión de intereses por exceso del plazo para resolver el recurso de apelación y la resolución de cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Fiscal recién estuvo vigente a partir del 13 de julio de 2014. Agrega que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 (norma que a la fecha no ha sido declarada inconstitucional), estableció una regla especial de suspensión de intereses a los procesos en trámite a la fecha de su entrada en vigencia, estableciendo que, para los procesos en trámite, la regla de suspensión en instancia de apelación se aplicara en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de dicha ley. En ese sentido, desde el 14 de julio de 2015 hasta la fecha que se emitió la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada, la administración suspendió la aplicación de los intereses y actualizo la deuda tributaria únicamente en función del índice de precios al consumidor; sin embargo, esto último no fue tomado en cuenta por la Sala Superior. c) Inaplicación de la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 30230 y el Decreto Legislativo Nº 981. La casacionista señala que, la Sala Superior ha inaplicado la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 sin efectuar control difuso, pese a que dichas normas resultan trascendentales para resolver la presente controversia vinculada a la inaplicación de los intereses moratorios, pues dicha norma establece una disposición mandatoria de cumplimiento obligatorio respecto a cómo y desde cuándo debe aplicarse la regla de la suspensión de los intereses moratorios. Argumenta, que antes de la vigencia de la Ley Nº 30230, ni el Código Tributario ni otra norma de naturaleza tributaria, establecía la suspensión de los intereses moratorios devengados en el exceso de plazo para resolver el recurso de apelación por parte del Tribunal Fiscal. Fue recién con la entrada en vigencia de esta norma que se modificó el artículo 33 del Código Tributario, esto es, desde el 14 de julio de 2015. Agrega, que el Decreto Legislativo Nº 981 si bien introdujo la regla de suspensión de los intereses moratorios en instancia de reclamación, también, estableció una prohibición expresa señalando que "La suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso – administrativa". Argumenta, que en todo caso si alguna autoridad jurisdiccional quiere inaplicarlos está en la obligación de efectuar el riguroso ejercicio de razonabilidad e interpretación a la luz de la Constitución que conlleve al control difuso y en base a una fundamentación de orden constitucional decidir si los aplica o no, lo que no ha sucedido en el caso de autos. **Sexto:** El recurso de casación presentado por el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del **Tribunal Fiscal** se sustenta en las siguientes causales: **a) Infracción normativa por inaplicación de las modificaciones introducidas en el artículo 33 del Código Tributario mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 981 y de la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 30230**. La parte recurrente señala que**,** cuya interpretación conjunta determina cuando se suspende el plazo para el cobro de los intereses moratorios por la demora en resolver del Tribunal Fiscal; la parte recurrente refiere que no estaba obligado a suspender el cobro de los intereses moratorios en caso de dilación en resolver la controversia, dado que el Decreto Legislativo Nº 981 publicado el 15 de marzo de 2017 al igual que el decreto legislativo Nº 969 claramente señalan que solo se suspenderá el cálculo de los intereses moratorios por la demora en resolver la reclamación ante Sunat, expresamente señala que la suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el tribunal fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa; por lo que lo resuelto por la administración tributaria y confirmada por el Tribunal Fiscal se encuentra emitidas conforme a ley. Por lo tanto, para las deudas tributarias que se encontraran en procedimientos de apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la norma, la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios sería aplicable si en el plazo de doce meses contados desde la entrada en vigencia de la ley, el Tribunal Fiscal no resolvía las apelaciones interpuestas. En el caso concreto, respecto de la apelación, de los hechos expuestos en el proceso judicial, se observa que el recurso de apelación fue presentado el 06 de diciembre de 2013 contra la citada resolución de intendencia, el mismo que fue elevado a las oficinas del Tribunal Fiscal siendo ingresado los actuados al Tribunal Fiscal el 20 de febrero de 2014, recurso que finalmente fue resuelto por dicho Tribunal Administrativo mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00623-2-2013, recién el 25 de enero de 2018. Siendo así, la parte recurrente refiere que la Sala Superior no tomó en cuenta que la Resolución de Intendencia Nº 1060140005835/SUNAT fue emitida el 30 de setiembre de 2013 y el recurso de apelación fue interpuesto el 06 de diciembre de 2013; es decir, antes de la dación de la Ley Nº 30230 (12 de julio de 2014), según señala la parte recurrente. b) Inaplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1540. La parte recurrente señala que es necesario que tuviera en cuenta la complejidad asignada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, debiendo considerar el plazo razonable para resolver el procedimiento contencioso tributario; la parte recurrente refiere que la Sala Superior debió aplicar lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1540, siendo necesario que tuviera en cuenta la complejidad asignada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, debiendo considerar el plazo razonable para resolver el procedimiento contencioso tributario. **c) Vulneración de lo dispuesto en el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Estado y lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y el**

artículo 36 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584. La parte recurrente señala que la Sala Superior resuelve en contravención de lo dispuesto en la Sentencia Casatoria Nº 6619-2021-SK Innovation. Asimismo, señala que, ha resuelto en contravención de lo dispuesto en la Sentencia Nº 03525-2021-AA- Maxco S.A.; la parte recurrente refiere que la Sala Superior no tomo en cuenta que lo único que pretende la demandante es lograr que la administración tributaria emita un nuevo pronunciamiento en la apelación de una resolución de cumplimiento en la que exclusivamente solo se verifica si la actuación de la administración tributaria se ajusta a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal. Por tanto, la parte recurrente señala que el demandante al plantear su demanda no ha tomado en cuenta que si no estuvo de acuerdo con resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07117-8-2017, debió haberla impugnado en su oportunidad mediante la correspondiente interposición de la demanda contencioso administrativa y no tratar de cuestionarla luego de que la misma haya quedado consentida. Siendo así, queda claro que no existe forma alguna de que la administración tributaria tenga una actuación ilegal al momento de reliquidar los montos materia de litis, pues esta solo se limitó a emitir un pronunciamiento conforme fue ordenado mediante las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nºs. 04914-8-2013 y 07117-8-2017. d) Inaplicación del control difuso previsto en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado conforme con lo dispuesto en la Sentencia Nº 03525-2021-AA – Caso Maxco S.A. La parte recurrente refiere que la Sala Superior aplica control difuso sin cumplir con los parámetros mínimos que lo habilitan, se convierte en un control difuso muy gravoso al afectar la obligatoriedad del artículo 33 del Código Tributario se estaría afectando la obligatoriedad de las leyes, la igualdad ante la Ley y la seguridad jurídica, al permitir que las normas del ordenamiento jurídico que son obligatorias y vinculantes para todos sin excepción, sean inaplicadas en algunos casos particulares a diferencia de la generalidad y solo para fines constitucionales, por lo que el ejercicio del control difuso no puede ser realizado sin tomar en cuenta los parámetros de compatibilidad constitucionalidad. **Séptimo:** Antes de proceder con el análisis del recurso de casación, es necesario reiterar que constituye un medio impugnatorio extraordinario de que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando separadamente cada causal invocada. **Octavo:** Emitiendo pronunciamiento respecto de las causales mencionadas en el literal **a)** del quinto considerando y literal **c)** del sexto considerando de la presente resolución. Esta Sala Suprema debe precisar que la motivación de las decisiones judiciales y el debido proceso son garantías de la correcta administración de justicia y a la vez derechos fundamentales recogidos y protegidos en el artículo 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Estado y diversas normas de carácter legal como el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil, por el cual se exige la fundamentación de los autos y las sentencias, siendo que dicha motivación debe contar con una exposición ordenada y precisa de los hechos y el derecho que las justifican la emisión de la sentencia. Así como en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que garantizan que las decisiones judiciales se adopten conforme a las razones que el derecho suministra, y respetando el derecho a ser oído, el derecho a la defensa, entre otros. De la referida causal se desprende que, si bien la entidad recurrente SUNAT denuncia que la decisión de la Sala Superior incurrió en una motivación aparente, insuficiente, aparente externo, vulnera el principio de prohibición de arbitrariedad, y el debido procedimiento; manifestando en sí, que la Sala Superior no refiere argumentos de hecho y derecho que llevan a la conclusión que corresponda inaplicar los intereses moratorios por el plazo en exceso de resolver. Asimismo, la entidad recurrente Tribunal Fiscal refiere que la Sala Superior no tomo en cuenta que la parte demandante pretende que la administración tributaria emita nuevo pronunciamiento en la apelación de una resolución de cumplimiento. En ese sentido, es necesario señalar que la Sala Superior refiere argumentos de forma razonada y suficiente conforme se aprecia en el considerando décimo quinto al décimo noveno de la sentencia de vista, asimismo hace mención a las normas que regulan sobre los intereses moratorios, por lo que, la partes recurrentes cuestionan la fundamentación de la Sala Superior no estando de acuerdo con el razonamiento y análisis expresado, en consecuencia, las causales materia de análisis no son claras ni precisas. Asimismo, respecto a lo denunciado por el Tribunal Fiscal al referir que se trata sobre una resolución de cumplimiento tenemos que en los considerandos decimo primero y decimo segundo, la Sala Superior justifica y motiva su decisión. En ese sentido, es necesario señalar que la Sala Superior refiere argumentos de forma razonada y suficiente conforme se aprecia en el considerando sexto al vigésimo de la sentencia de vista, asimismo hace mención a las normas que regulan sobre los intereses moratorios, por lo que, las partes recurrentes cuestionan la fundamentación de la Sala Superior no estando de acuerdo con el razonamiento y análisis expresado, en consecuencia, las causales materia de análisis no son claras ni precisas. Además, se advierte que el desarrollo de las causales se han sustentado como si se tratara de un recurso de apelación; dado que, la tesis argumentativa de las partes recurrentes estaría dirigida a discrepar los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes Nºs. 4082-2012-PA/TC y 4532-2013-PA/TC para verificar si en el procedimiento administrativo se incurrió en la vulneración del derecho al plazo razonable al aplicar el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no obstante, no le corresponde a esta Sala Suprema actuar como una tercera instancia, en tanto, lo pretendido por las partes recurrentes no se condice con la naturaleza del recurso de casación. Cabe mencionar que, el órgano jurisdiccional no siempre comparte el criterio de las partes o de una de ellas, lo que no significa que no esté debidamente motivada una resolución. En ese sentido, las partes recurrentes no describen con claridad y precisión las razones concretas de las infracciones normativas denunciadas. En consecuencia, por estos fundamentos, las referidas causales devienen en **improcedentes. Noveno:** Emitiendo pronunciamiento respecto de las causales mencionadas en los literales **b)** y **c)** del quinto considerando y los literales **a), b)** y **d)** del sexto considerando de la presente resolución. Este Supremo Tribunal señala que, la inaplicación de una norma de derecho material, como causal del recurso de casación, se plantea cuando el juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, correspondiendo en ese escenario a las entidades recurrentes demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia de la instancia de mérito. Al respecto tenemos que, la Sala Superior desarrolla y aplica las normas y doctrina jurisprudencial que son pertinentes para resolver la controversia del caso en concreto, pues en el considerando décimo octavo de la sentencia de vista refiere lo siguiente: […] **DÉCIMO OCTAVO:** Ahora bien, de la revisión de la sentencia recurrida, se advierte que la A-quo pese a señalar que la STC Nº 4082-2012-PA/TC y la Nº 4532-2013-PA/TC (caso ICATOM) no son vinculantes o doctrina., jurisprudencial, ha procedido a analizar los hechos a la luz de la mencionada STC Nº 4532-2013-PA/TC, conforme se aprecia de su considerando II.3.24; evaluando, el cumplimiento de los criterios precisados en su fundamento 33) tales como: **i) complejidad del asunto,** concluyendo, luego de hacer un relato de actuados procedimentales tanto del contribuyente como de la propia administración, que la complejidad del asunto no era tal, pero que se debía analizar otro proceso (IR 2004); asimismo, respecto a **la ii) actividad o conducta del interesado** la A quo estableció que el administrado, ante la demora de la administración pudo haber interpuesto una queja conforme al artículo 155 del Código Tributario. **iii) la conducta de las autoridades administrativas**, la A-quo consideró que el Tribunal Fiscal excedió el plazo legal que tenía para resolver la controversia; por último, respecto al ítem **iv) consecuencias que la demora produce en la situación jurídica del interesado**, precisó que no se apreciaba que la contribuyente haya acreditado que los intereses moratorios cobrados por la demora en la emisión de la resolución impugnada hayan sido desproporcionados o irrazonables o que sus consecuencias produzcan un perjuicio desproporcionado en la situación jurídica de interesado, por el contrario, la empresa recurrente solo se ha limitado a cuestionar la constitucionalidad del cobro de los intereses moratorios sin consignar sustento alguno. […] De la apreciación de los argumentos esgrimidos por la Sala Superior, se puede observar que la inaplicación de los intereses moratorios en el caso en concreto, resulta porque se considera la aplicación de una doctrina jurisprudencial, las cuales son Sentencias del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes Nº 04082-2012-PA/TC y 4532-2013-PA/TC, según el principio de razonabilidad; asimismo el Colegiado Superior emite las razones del porqué es necesaria la aplicación de estas sentencias para analizar los intereses moratorios por la demora en resolver el recurso de apelación en sede administrativa, para el caso en concreto. De lo referido en el párrafo anterior, se advierte que, al referirse a la inaplicación de las normas denunciadas por las partes recurrentes, no demuestran de manera clara en que forma estas causales podrían afectar la

decisión impugnada, pues, no explican la razón del porqué estas deben ser aplicadas en el caso en concreto, tampoco refiere de qué manera estas debería ser aplicadas para el desarrollo del presente caso, de forma clara y precisa. Por tales razones, se verifica que, lo que pretenden las partes recurrentes es cuestionar los criterios de la Sala Superior no estando conforme con la decisión. Además, se debe precisar que esta Sala Suprema tiene criterio respecto a los intereses moratorios por demora en resolver y capitalización de intereses, emitida mediante la Casación Nº 6619-2021 Lima. En consecuencia, estas causales devienen en **improcedentes**. **Décimo:** Por lo expuesto, se advierte que los fundamentos de los recursos de casación de las partes recurrentes no son claros ni precisos, por ende, no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, en consecuencia, conforme al literal a) del numeral 2 del modificado artículo 393 del referido código procesal, los mismos devienen en **improcedentes.** Por otro lado, se aprecia que la entidad recurrente Tribunal Fiscal invoca la aplicación del artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado mediante Ley Nº 31591- Ley que modifica los diversos artículos del Código Procesal Civil, exhortando a la Sala que meritúe que su recurso de casación persigue como fin el resguardo de la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, así como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Sobre el particular, cabe precisar que dicho artículo establece que: "Excepcionalmente, es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386 cuando la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial"; no obstante, esta Sala Suprema no considera necesaria la aplicación del artículo en mención, toda vez que no se aprecia una inadecuada aplicación del derecho objetivo, ni la necesidad de uniformizar jurisprudencia. **Décimo primero:** En cuanto a los demás requisitos fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedentes las causales contenidas en el considerando quinto y sexto de la presente resolución. **DECISIÓN** Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, concordante con el literal a) del numeral 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, **DECLARARON IMPROCEDENTES** los recursos de casación interpuestos **i)** por el **representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)**, mediante escrito del quince de mayo de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos sesenta a cuatrocientos ochenta y ocho); y, **ii)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal**, mediante escrito del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas quinientos dos a quinientos veinticuatro), contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número veintidós del catorce de abril de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos cincuenta y uno), emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por San Ignacio S.A. en Liquidación contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución del Tribunal Fiscal. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, ARAUJO SÁNCHEZ, PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, **TOVAR BUENDÍA.**

[1] Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

[2] Publicada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis en el diario oficial El Peruano.

[3] Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

C-2245460-22

CASACIÓN Nº 19270-2023 LIMA

Lima, once de septiembre de dos mil veintitrés

VISTO Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos, **i)** por la **representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),** mediante escrito del cuatro de mayo de dos mi veintitrés (fojas quinientos sesenta y ocho a quinientos ochenta y cinco del Expediente Judicial Electrónico - EJE[1]); y, **ii)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal**, mediante escrito del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos treinta y siete a seiscientos cuarenta y seis); contra la sentencia de vista del veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas quinientos cuarenta y tres a quinientos sesenta y dos), que confirmó la sentencia de primera instancia del dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas cuatrocientos cincuenta y siete a cuatrocientos setenta y seis), que declaró fundada la demanda. **CONSIDERANDOS Primero:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, el cual señala que, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú "tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados […]". En ese sentido, se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales, como son los sujetos procesales, como es la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes, la naturaleza de las actuaciones impugnables, las particularidades procesales como son los requisitos de admisibilidad y procedencia, la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar, la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, prevaleciendo la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00018-2003-AI/TC[2]. **Segundo:** Asimismo, resulta necesario señalar que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, dispone que: "[e]l Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley"; en ese marco, resulta pertinente indicar la Ley Nº 31591[3], publicada en el diario oficial El Peruano con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que introdujo, entre otros aspectos sustanciales, modificaciones respecto del trámite recurso de casación y su respectiva calificación. En ese orden, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, y en específico, al artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la referida Ley Nº 31591, deben ser tomadas en forma supletoria, teniendo presente los principios que regulan tal norma especial, que no debe ser desnaturalizado, menos aún las exigencias esenciales que lo caracterizan. **Requisitos de procedencia Tercero:** Resulta necesario señalar los siguientes artículos del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y su modificatoria introducido por la Ley Nº 31591, de aplicación supletoria, los cuales son: **Artículo 388. Causales** Son causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. […] **Artículo 391. Interposición y admisión** 1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere

erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende. 2. El recurso se interpone: a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada. b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. […] **Artículo 393. Improcedencia** 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos. Además, sobre los requisitos de procedibilidad, resulta aplicable supletoriamente al recurso de casación del proceso contencioso administrativo, el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, en cuanto establece que el recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso, toda vez que, el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. **Cuarto:** Efectuada la revisión de los requisitos de procedibilidad, se advierte que el recurso impugna una resolución expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso, además, este no tiene un sentido anulatorio, respecto a la decisión, por ende, se cumple con los requisitos señalados en el numeral 1 y el literal c del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591. Asimismo, sobre los requisitos de admisibilidad contenidos en el inciso 2 del modificado artículo 391 del Código Procesal Civil, se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días de notificada (fojas seiscientos treinta y dos [SUNAT], y seiscientos treinta y tres [Tribunal Fiscal]), con relación al arancel judicial por concepto de casación, las partes recurrentes se encuentran exoneradas de presentar el referido arancel, al amparo del artículo 47 de la Constitución Política el Estado. Por tanto, se cumple con los requisitos precisados en este inciso de la referida norma. **Causales denunciadas Quinto:** La representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria **(SUNAT),** formula su recurso de casación por las siguientes causales: a) Inaplicación de lo dispuesto por los artículos 1.b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y 18 de la Decisión Nº 571 y 54 de la Resolución Nº 1684 emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina. La parte recurrente refiere que la Sala Superior sustenta su decisión en la aplicación del principio de verdad material, asimismo señala que, se deben valorar los medios probatorios presentados por la demandante de manera extemporánea; respecto a ello, la parte recurrente refiere que los documentos analizados por la Sala Superior, señala que, ni la Administración Aduanera ni el Tribunal Fiscal pueden suplir en la carga probatorio que le atañe al importador y que deben de ser presentados dentro del plazo legal otorgado, pues este ultimo es responsable de los documentos que son materia de importación aduanera. Añade que la normatividad nacional y comunitaria, está ampliamente sustentado que es sobre el importador sobre el que recae la carga de la prueba, como agente directo y participante principal en su contrato de compra venta internacional (artículo 1 del Reglamento Nacional de Valoración del Decreto Supremo Nº 186-99-EF). Como se indica de la normativa glosada, a nivel comunitario, el artículo 16 de la Decisión 571, establece que la carga en la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía, se precisa en dicha norma que cuando el importador sea una persona jurídica a su representante legal autorizado para hacerlo en su nombre. Asimismo, refiere que resulta obvia la voluntad del legislador nacional y comunitario determinar cuál es el agente sobre el cual recae la carga de la prueba, esto es, en el importador, ello por cuanto la particularidad del proceso de despacho aduanero obedece al hecho fundamental que: Es el importador como operador de comercio internacional quien sabe y conoce las particularidades de sus relaciones comerciales con sus proveedores. No es facultad de la administración aduanera intervenir en este proceso de negociación comercial en el cual se han fijado y establecido las condiciones de cada operación comercial. b) Contravención del artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Perú, al pretenderse que se admitan medios probatorios vencido el plazo del procedimiento de duda razonable sin carta fianza bancaria o financiera u otra garantía establecida por la aduana (artículo 141 del Código Tributario). La parte recurrente refiere que la Sala Superior señala que no importan los plazos establecidos ni las limitaciones legales establecidas (artículo 141 del Código Tributario), y debe la Administración Aduanera sustituir en el lugar de la actora como titular de la carga de la prueba para acreditar el valor declarado en pro del valor por ellos declarado; la parte recurrente refiere que se verifica que la Sala Superior está contraviniendo normas nacionales que regulan específicamente el tema de valoración aduanera y la presentación de sus medios probatorios dentro del procedimiento de duda razonable. Añade que, cuando haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, le solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustadas de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial del Comercio - OMC, esto es, que se desarrolla el procedimiento de duda razonable, siendo esto dispuesto, por el articulo 11 del Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, sustituido por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 119-2010-EF. Asimismo la parte recurrente refiere que el importador no presentó los documentos dentro del plazo legal otorgado, solo correspondía la admisión de sus medios probatorios extemporáneos, en tanto, se acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza bancaria o financiera u otra garantía por dicho monto que la Administración Tributaria establezca por Resolución de Superintendencia, actualizada hasta por nueve (9) meses o doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia o veinte (20) días hábiles tratándose de la reclamación de resoluciones de multa que sustituyan a aquellas que establezcan sanciones de comiso de bienes, como puede verse, no presentó Carta Fianza Bancaria o Financiera u otra garantía referida al monto reclamado vinculado a las pruebas extemporáneas, como lo exige el artículo 141 del Código Tributario, sino que como este mismo admite, esta orden de depósito, según manifiesta, “garantizaba” la duda razonable de la Declaración Aduanera de Mercancías declarada por la demandante. **Sexto:** El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del **Tribunal Fiscal,** formula su recurso de casación por las siguientes causales: e) **Infracción normativa por inaplicación de lo dispuesto por los artículos 1.b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y 18 de la Decisión Nº 571 y 54 de la Resolución Nº 1684 emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.** Señala la parte recurrente que, la Sala Superior no aplicó las referidas normas, pues sustenta la sentencia que, en aplicación del principio de verdad material, se deben valorar los medios probatorios presentados por el demandante de manera extemporánea. Añade que respecto a los documentos que son analizados por la Sala Superior, es preciso indicarse, que la Administración Aduanera ni el Tribunal Fiscal pueden suplir en la carga probatoria que le atañe al importador y que deben de ser presentados dentro del plazo legal otorgado, pues este último es responsable de los documentos que son materia de importación aduanera. Ello porque, como puede verse de la normatividad nacional y comunitaria, está ampliamente sustentado que es sobre el importador sobre el que recae la carga de la prueba, como agente directo y participante principal en su contrato de compra venta internacional, (artículo 1 del Reglamento Nacional de Valoración del Decreto Supremo Nº 186-99-EF). Añade la parte recurrente que la inobservancia y por ende

inaplicación de las normas denunciadas, ha permitido que en el fallo recurrido considere que el principio de verdad material es un principio absoluto sin límites, puesto que no se ha considerado los plazos que atañen al procedimiento de duda razonable, la carga de la prueba para acreditar el valor declarado por la importadora y lo dispuesto en el artículo 141 del Código Tributario. Dicha posición, es errada conforme con la normativa internacional glosada y de acuerdo al principio de especialidad, dicha carga de la prueba corresponde única y exclusivamente a la demandante, además, es ella quien debió presentar sus pruebas dentro del plazo legal establecido y si aún no lo cumplía, tenía que contar con carta fianza bancaria financiera u otra garantía, pues la presentación de sus medios probatorios son extemporáneos. **Séptimo:** Antes de proceder con el análisis del recurso de casación, es necesario reiterar que constituye un medio impugnatorio extraordinario de que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando separadamente cada causal invocada. **Octavo:** Emitiendo pronunciamiento respecto de la causal mencionada en el literal **b)** del quinto considerando de la presente resolución; se desprende que, si bien la entidad recurrente denuncia la vulneración a la debido proceso y tutela jurisdiccional, pues refiere que la Sala Superior pretende que se admitan medios probatorios vencido el plazo del procedimiento de duda razonable sin carta fianza bancaria o financiera u otra garantía establecida por la aduana, establecido en el artículo 141 del Código Tributario; su fundamentación no especifica cuáles serían los vicios sustanciales en que habría incurrido la resolución objeto del recurso de casación planteada por la entidad recurrente, pues se limita a indicar que en la sentencia de vista, no consideró aplicar el artículo 11 del Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, sustituido por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 119-2010-EF y el articulo 141 del Código Tributario. Este Supremo Tribunal señala que, la entidad recurrente no presenta argumentos suficientes para demostrar las infracciones denunciadas sobre el fondo de la controversia, pues no se observa que la Sala Superior hubiese vulnerado el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; por el contrario, se aprecia que la denuncia planteada por la entidad recurrente se sustenta en cuestionamientos fácticos; pues refiere argumentos respecto a la valoración aduanera y la presentación de sus medios probatorios dentro del procedimiento de duda razonable, cuyo análisis no resulta procedente en sede casatoria. Máxime si en sede de instancia se ha establecido, que la administración como el Tribunal Fiscal al haber soslayado aplicar el principio de verdad material en el caso de autos, pese a contar con el acervo probatorio suficiente, no pudieron verificar el pago total y completo del precio estipulado por dicha mercancía, exigencia que, en aplicación del principio mencionado, sí ha quedado satisfecha en este proceso; por lo que, carece de fundamento el descarte o rechazo de la aplicación del primer método de valoración, consecuentemente, no resulta aplicable en el caso concreto el tercer método de valoración de conformidad con lo preceptuado en el acotado artículo 2 del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo número 186-99-EF. En este sentido, de los argumentos planteados por la entidad recurrente se verifica que en el fondo se pretende cuestionar los criterios desplegados por las instancias de mérito a fin de que se asuma por válida la tesis postulada por esta. Por lo tanto, no se advierte claridad en las supuestas falencias denunciadas por la entidad casacionista. En consecuencia, por estos fundamentos, la referida causal deviene en **improcedente. Noveno:** Emitiendo pronunciamiento respecto de la causal mencionada en el literal **a)** del quinto considerando y el literal **a)** del sexto considerando de la presente resolución. Este Supremo Tribunal señala que, la inaplicación de una norma de derecho material, como causal del recurso de casación, se plantea cuando el juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, correspondiendo en ese escenario a la entidad recurrente demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las sentencias de las instancias de mérito. Las entidades recurrentes señalan que, existe infracción por inaplicación de lo dispuesto por los artículos 1.b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y 18 de la Decisión Nº 571 y 54 de la Resolución Nº 1684 emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, pues refieren que no es pertinente la admisión de los medios probatorios vencido el plazo del procedimiento de duda razonable sin carta fianza o carta fianza bancaria o financiera u otra garantía establecida por la aduana (artículo 141 del Código Tributario) y que la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía. Al respecto la Sala Superior orientó su argumento señalando en el considerando decimo primero de la sentencia recurrida que, […] DÉCIMO PRIMERO: Como ya se ha señalado, una vez planteada la duda razonable por la Aduana, es el importador el encargado de aclarar dicha duda, pues es el propio interesado a quien corresponde contestar los requerimientos que efectúe la Administración, facilitando la documentación pertinente que él detenta, para así establecer que el precio pagado o por pagar es el declarado, por lo que la Ley le asigna la carga de la prueba en esta etapa. Dicha afirmación se condice con lo establecido en el artículo 1 inciso b) del Decreto Supremo Nº 186-99-EF que establece el "Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC", que al referirse a la carga de la prueba en estos casos de ajuste de valor, señala que es obligación del importador el probar que el Valor en Aduana declarado es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, de conformidad con las condiciones y ajustes previstos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y las normas establecidas en el Reglamento. En tal sentido, si el importador no cumple con desvirtuar la duda razonable planteada, Aduanas utilizará los otros métodos de valoración en forma sucesiva y excluyente para determinar el Valor en Aduana de las mercancías. Consecuentemente, se reitera que la carga de la prueba para estar comprendido en el primer método le corresponde al importador. […] De lo expuesto se observa que, la Sala Superior aplica y analiza el artículo 1.b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, considerando así también los actuados en sede administrativa y concluyendo que de una apreciación conjunta y razonada de los documentos señalados se encuentra que existe una correspondencia entre el monto declarado en la factura comercial de la importación discutida con el monto pagado, por lo que, ello lleva a concluir que realmente, se ha efectuado el pago de la factura comercial Nº 19PW013, consignada en la Declaración Aduanera de Mercancía Nº 118-2019-10-451806 con lo que se demuestra que es el precio realmente pagado, en consecuencia, ha quedado demostrado que tanto la administración como el Tribunal Fiscal al haber soslayado aplicar el principio de verdad material en el caso de autos, pese a contar con el acervo probatorio suficiente, no pudieron verificar el pago total y completo del precio estipulado por dicha mercancía, exigencia que, en aplicación del principio mencionado, sí ha quedado satisfecha en este proceso; por lo que, carece de fundamento el descarte o rechazo de la aplicación del primer método de valoración, consecuentemente, no resulta aplicable en el caso concreto el Tercer Método de Valoración de conformidad con lo preceptuado en el acotado artículo 2 del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo número 186-99-EF. Por lo tanto, las entidades recurrentes cuando señalan la inaplicación de los artículos 1.b) del Decreto Supremo Nº 186-1999-EF, 16 y 18 de la Decisión Nº 571 y 54 de la Resolución Nº 1684 emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina; no expresan de forma clara y precisa de qué forma debió aplicarse las referidas normas; es decir, no demuestran la pertinencia de las normas para la resolución del caso en concreto; asimismo se verifica en el anterior considerando que la Sala Superior interpreta y aplica de manera correcta las normas. Esta Sala Suprema advierte que las partes recurrentes pretenden cuestionar los criterios de la Sala Superior, al no estar conforme con la decisión, sin embargo, resulta suficiente las normas interpretadas por la Sala Superior para la solución del caso en concreto. En consecuencia, las referidas causales devienen en **improcedentes. Décimo:** Por lo expuesto, se advierte que los fundamentos de los recursos de casación de las partes recurrentes no son claros ni precisos, por ende, no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, en consecuencia, conforme al literal a) del numeral 2 del modificado artículo 393 del referido código procesal, los mismos devienen en **improcedentes.** Por otro lado, se aprecia que la entidad recurrente Tribunal Fiscal invoca la aplicación del artículo 392-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 29364 - Ley que modifica los diversos artículos del Código Procesal Civil, exhortando a la Sala que meritúe que su recurso de casación que persigue como fin el resguardo de la uniformidad de la jurisprudencia nacional por

la Corte Suprema, así como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Respecto a ello, esta Sala Suprema no considera necesaria la aplicación de la procedencia excepcional, toda vez que no se aprecia una inadecuada aplicación del derecho objetivo, ni la necesidad del desarrollo de la doctrina jurisprudencial para el presente caso. **Décimo primero:** En cuanto a los demás requisitos fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedentes las causales contenidas en el considerando quinto y sexto de la presente resolución. **DECISIÓN** Por estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, concordante con el literal a) del numeral 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, **DECLARARON IMPROCEDENTES** los recursos de casación interpuestos, **i)** por la **representante legal de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),** mediante escrito del cuatro de mayo de dos mi veintitrés (fojas quinientos sesenta y ocho a quinientos ochenta y cinco); y, **ii)** por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,** en representación del **Tribunal Fiscal**, mediante escrito del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas seiscientos treinta y siete a seiscientos cuarenta y seis); contra la sentencia de vista del veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas quinientos cuarenta y tres a quinientos sesenta y dos), emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Power Refle S. A. C. contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como **ponente** la señora Jueza Suprema Tovar Buendía. SS. BURNEO BERMEJO, ARAUJO SÁNCHEZ, PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, **TOVAR BUENDÍA.**

---

1 Todas las citas remiten a este expediente, salvo indicación contraria.

2 Publicada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis en el diario oficial El Peruano.

3 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

C-2245460-23

CASACIÓN Nº 23345-2023 LIMA

Lima, treinta de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso extraordinario de casación presentado por la recurrente **Encofrados Innova S.A.C.** mediante escrito del dieciocho de enero de dos mil veintitrés (folios 2153 – 2179 del EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce del veinte de diciembre de dos mil veintidós (folios 2124 – 2144 del EJE) que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número ocho, del trece de setiembre de dos mil veintidós (folios 2036 – 2057 del EJE), que declaró infundada la demanda. **SEGUNDO:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que precisa que el Proceso Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concordado con el inciso 1 del artículo 2 del citado texto que dispone que en caso de defecto o deficiencia de la Ley, el Juez debe aplicar los principios del derecho administrativo, y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. En el sentido de lo antes indicado se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales-, como son los sujetos procesales: la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes; la naturaleza de las actuaciones impugnables; las particularidades procesales, como son los requisitos de admisibilidad y procedencia; la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar; la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, y debe prevalecer la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y en específico, de la reciente modificación que ha sufrido por la Ley Nº 31591[2], publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2022, que introdujo, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones respecto del recurso de casación, debemos evaluar si estas son compatibles con la naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo, conforme a lo señala la Primera Disposición Complementaria Final del mencionado Código Procesal. En ese orden, luego del análisis correspondiente, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativas, y en específico, a los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, se considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, que pueden ser tomadas en forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo son: el inciso 1[3] y literal c) del inciso 2[4] del artículo 386[5], así como los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil[6]. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos, estos son: Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386[7] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil introducidos por la Ley Nº 31591, no serán de aplicación por restringir derechos de las partes en este tipo de procesos, además de generar un gran impacto en el interés público (administrados y el estado). **TERCERO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 386 y 391 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso[8], siempre que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio[9]; **ii)** El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende[10]; **iii)** se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada[11]; **iv)** fue interpuesto dentro del plazo de diez (10) días de notificada a la recurrente con la resolución impugnada[12]; y, **v)** en cuanto a la tasa respectiva[13], no adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de casación, puesto que se encuentra exento del pago del mismo. **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que: **(i)** el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o las razones por las cuales se habría producido el apartamiento inmotivado del precedente judicial; **(ii)** recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de "transferir la queja expresiva de los agravios" y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, "por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse" y porque su estudio "se limita a la existencia del vicio denunciado"; **(iii)** la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite

modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye tercera instancia judicial. No es posible revaloración probatoria en sede casatoria; **(iv)** cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho, es decir, lo que se examina es saber si en ella existe argumentación racional conforme al ordenamiento jurídico; **(v)** tales infracciones deben describirse con claridad y precisión, debiéndose señalar que cuando la ley indica que se debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que menciona; y **(vi)** lo que debe discutirse en casación son las razones esenciales que fueron el soporte de la sentencia que se impugna; las motivaciones accesorias resultan intrascendentes en torno a la calificación del recurso. **QUINTO:** En cuanto a la declaración de improcedencia, el artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, el legislador señala que: "1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos." **SEXTO:** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, se verifica que la sentencia de vista materia de impugnación es pasible de ser recurrida vía casación; y en relación al literal c) del inciso 1 del artículo 393 del mismo cuerpo legal, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con impugnar la resolución de primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifica del escrito de apelación del veintiuno de setiembre de dos mil veintidós (folios 2063– 2080 del EJE). Infracciones denunciadas por la recurrente **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: 1) Infracción normativa por inaplicación de los numerales 3) y 5) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú - El Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales; Infracción normativa por Inaplicación del Artículo 197 del T.U.O. del Código Procesal Civil. Como argumentos que sustentan la referida infracción normativa señala lo siguiente: a) Los medios probatorios presentados no han sido valorados debidamente, sino que el análisis realizado por la sentencia de vista ha sido totalmente limitado debido a que señaló que la recurrente no acreditó las operaciones realizadas con sus proveedores existiendo argumentos repetitivos a los señalados en la instancia administrativa. b) No ha existido la debida valoración sobre la obligación de verificar los hechos manifestados en el Procedimiento Administrativo; existe una supuesta valoración de la documentación presentada pero finalmente esto sólo es una repetición de lo dicho en sede administrativa, hecho que considera relevante, pues ha acreditado un actuar responsable y correcto que no ha sido valorado. c) La Sentencia de Vista afirma que existe una operación simulada entre la recurrente y sus proveedores, sin motivar el sustento de dicha afirmación, la cual se encuentra sustentada sólo en lo dicho a nivel administrativo. Ello demuestra el incorrecto actuar y la vulneración al derecho de defensa, que genera que la Sentencia se encuentre viciada. d) Precisa que cumplió con presentar la documentación suficiente para acreditar la realización de las operaciones comerciales realizadas con las empresas Andamios Eléctricos Innova S.A.C., Profield S.A.C., Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L., Indek Andina E.I.R.L., y Servinegocios S.A.C. e) Respecto las operaciones comerciales con Profield SAC, Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L. e Indek Andina E.I.R.L., precisa que en el expediente obra diversa documentación, tal y como es el caso de, por ejemplo, de comprobantes de pago, guías de remisión, constancias de depósito de detracción, declaraciones únicas de aduanas, certificación o constancia notarial de bienes adquiridos, documentos de reconocimiento de deuda y estados de cuenta bancarios. f) Todos los documentos presentados por la Compañía han sido desestimados debido a que supuestamente no se acreditan que las operaciones contenidas en las facturas observadas hubiesen sido realizadas con los proveedores observados, concluyéndose que la recurrente no habría presentado medios probatorios o documentación sustentatoria que acreditara la efectiva realización de las operaciones observadas, sin valorar en ningún momento que las operaciones fueron registradas en el Registro de Compras electrónico, de conformidad con el inciso h) del artículo 6 de la Resolución de Superintendencia Nº 039-2019/SUNAT. g) Respecto de las operaciones comerciales con Andamios Eléctricos Innova S.A.C, Profield SAC, Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L., Indek Andina E.I.R.L. señala que no se han valorado de forma conjunta las pruebas presentadas, dejándose de lado las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia en torno al conjunto de medios probatorios, los que debían acarrear que se llegue a la conclusión sí había cumplido con todas las obligaciones a nuestro cargo para acreditar las operaciones reales con nuestros proveedores, encontrándose en el proceso aquellas que se han encontrado estrictamente referidas a tal fin. h) A fin de corroborar que sus adquisiciones fueron reales, la Compañía jamás se opuso a que SUNAT, en base a su potestad fiscalizadora, hiciera cruces de información con cada uno de sus proveedores a fin de comprobar la realidad de sus operaciones. Precisa que, si SUNAT hubiera realizado tal actividad o incluso si ahora se dispusieran tales actividades, no quedaría ninguna duda de que sus adquisiciones fueron totalmente reales. Si bien pudo haber existido alguna desprolijidad en alguna formalidad o documentación de sustento, ello de ningún modo debería llevar a desconocer sus adquisiciones, pues ello sería un exceso y afectaría su patrimonio de forma irrazonable y el derecho constitucional a que los tributos no sean confiscatorios, sin perjuicio de que pudiera existir alguna infracción administrativa por algún error o defecto formal en la documentación. i) La sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa por inaplicación de los numerales 3) y 5) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú dado que existe una motivación aparente de parte de la Séptima Sala Contenciosa Administrativa son Subespecialidad Tributaria y Aduanera, pues el análisis que ha realizado sobre el caso se ha encontrado limitado, expresándose sobre diversos aspectos sin tener un análisis consciente de la práctica comercial, lo que habría llevado a verificar que con los medios de prueba que ha señalado, sí ha acreditado operaciones reales, siendo los documentos presentados propios de toda actividad comercial, utilizados en la práctica para el tipo de operación realizada. j) La sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa por inaplicación del Artículo 197 del T.U.O. del Código Procesal Civil, debido a que no se han valorado los medios probatorios presentados, no tomándose en cuenta el principio de valoración de la prueba, al limitar y restringir el órgano jurisdiccional su análisis sobre todos los que acreditaban indudablemente las operaciones reales de la recurrente. Análisis de las infracciones normativas planteadas por la recurrente **OCTAVO:** Respecto de las infracciones normativa alegadas por la recurrente **en el numeral 1) del séptimo considerando**, esta Sala Suprema debe precisar que la recurrente señala como fundamento principal que la sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa por inaplicación de los numerales 3) y 5) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú dado que existe una motivación aparente de parte de la Sala Superior. Precisa que cumplió con presentar la documentación suficiente para acreditar la realización de las operaciones comerciales realizadas con las empresas Andamios Eléctricos Innova S.A.C., Profield S.A.C., Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L., Indek Andina E.I.R.L., y Servinegocios S.A.C. Asimismo, añade que la sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa por inaplicación del Artículo 197 del T.U.O. del Código Procesal Civil, debido a que no se han valorado los medios probatorios presentados, no tomándose en cuenta el principio de valoración de la prueba, al limitar y restringir el órgano jurisdiccional su análisis sobre todos los que acreditaban indudablemente las operaciones reales de la recurrente. Al respecto, esta Sala Suprema debe hacer referencia al principio de sana critica o la apreciación razonada de los medios probatorios. En efecto, la necesidad de valorar los medios probatorios en el ámbito tributario, no constituyen hechos ajenos a la Administración Tributaria ni al órgano jurisdiccional, en cuanto los medios probatorios son los instrumentos que permiten establecer si las afirmaciones o

enunciados en la determinación tributaria efectuada por el deudor, son verdaderas, o están fundadas sobre bases cognoscitivas suficientes y adecuadas al fin de que se consideren como verdaderos. Refiere Taruffo[14] al respecto: En esta perspectiva, la prueba cumple con su función epistémica porque se configura como el instrumento procesal que típicamente es útil a los jueces para descubrir y conocer la verdad en torno a los hechos de la causa. Específicamente, la prueba es el instrumento que provee al juez la información que necesita para establecer si los enunciados sobre los hechos se fundan en cimientos cognoscitivos suficientes y adecuados al fin de que se consideren como verdaderos. La función de la prueba es, entonces, racional porque se ubica en el interior de un procedimiento racional de conocimiento y está dirigida a la formulación de juicios de verdad fundados en una justificación racional. De esta manera, en un escenario administrativo o jurisdiccional, en el supuesto de que el conflicto radique en los hechos (questio facti), las afirmaciones o declaraciones del deudor tributario requieren ser acreditadas y esta carga recae usualmente en quien declara los hechos como ciertos y en todo caso, en quien está en mejor posición para acreditar las afirmaciones realizadas. La valoración de estos medios probatorios no constituye un acto cuya valoración este previamente determinada por el legislador o por la íntima convicción de los jueces; sino constituye un proceso racional donde el juez o el órgano de la administración, expone sus razones o justifica las conclusiones que deriven del análisis de los medios probatorios. Así refiere el Código Procesal Civil: **Código Procesal Civil** "Artículo 197. Valoración de la prueba. Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada […]". Esta Sala Suprema, debe señalar que esta disposición normativa está vinculada a establecer la función racional que deben cumplir los medios probatorios en la formulación de juicios de verdad y en su justificación; sin embargo, no ha prescrito un método o algún procedimiento que nos permita arribar a este sistema de valoración. La doctrina, no obstante, admite que en el sistema de la sana crítica o de apreciación razonada de los medios probatorios, la justificación de los hechos puede ser realizadas a través de dos técnicas: la analítica y la globalizadora: […] De todos modos, no siempre se motiva (o justifica) con la precisión y exhaustividad indicadas. Cabe diferenciar en principio dos grandes técnicas o estilos de motivar: uno analítico y el otro globalizador. La técnica analítica entiende que la motivación ha de estructurarse en una exposición pormenorizada de todas las pruebas practicadas, del valor probatorio que se les ha asignado y de toda la cadena de inferencias que ha conducido finalmente a la decisión. La técnica globalizadora, en cambio, consiste, grosso modo, en una exposición conjunta de los hechos, en un relato, una historia que los pone en conexión en una estructura narrativa[15]. En este sentido, la denuncia a la vulneración de este principio, debe suponer una actuación arbitraria o irracional del juzgador en el proceso de valoración de los medios probatorios. Esta afirmación, en consecuencia, deja de lado los cuestionamientos de las partes a los enunciados o las conclusiones sobre hechos (questio facti), en el que no se advierta una actuación arbitraria, carente de toda justificación razonable del juzgador. En el caso, la sentencia de vista señaló que la controversia radicaba en determinar si se han valorado sus medios probatorios, así como si se ha cumplido con la debida motivación y si es que las operaciones comerciales de la recurrente con las empresas Andamios Eléctricos Innova S.A.C, Profield S.A.C, Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L y Indek Andina E.I.R.L, fueron reales. En tal sentido, con relación a los medios probatorios presentados por la recurrente para sustentar las operaciones reparadas, la sentencia de vista señaló lo siguiente: […] La recurrente no acreditó con medios probatorios o documentación idónea la efectiva realización de las operaciones con sus proveedores, a que se referían los comprobantes observados, por lo que lo resuelto por el Tribunal Fiscal resulta acorde a ley al referirse a cada uno de los documentos probatorios recogidos en el procedimiento de fiscalización y a los presentados en el proceso contencioso administrativo tributario, valorándolos de manera conjunta, tal como se demuestra con su contenido. Asimismo, cabe señalar que, la instancia de mérito ha determinado su decisión de confirmar la sentencia apelada que declara infundada la demanda, expresando de manera razonada, suficiente y congruente las razones fácticas y jurídicas que la sustentan, y en base a una debida valoración de los medios probatorios; debiendo precisarse que para tener derecho al crédito fiscal no basta con tener las facturas, ni demostrar su registro contable, ni los pagos efectuados, siendo que dicha documentación debe ser contrastada con otros medios probatorios que otorguen indicios razonables de la efectiva adquisición de los bienes y servicios que se señalan haber recibido en el plano de la realidad […] Asimismo, la sentencia de vista concluyó que la recurrente no acreditó con medios probatorios o documentación idónea la efectiva realización de las operaciones con su proveedor Profield S.A.C, a que se referían los comprobantes observados. Precisó que guías de remisión remitente, no contaban con la identificación del transportista ni de los vehículos que habrían realizado el traslado de los bienes, ni el motivo de traslado ni la firma ni conformidad de la recurrente, aunado a que las facturas observadas tampoco hacen referencia a dichas guías de remisión, razón por la cual tampoco acreditan la realidad de las operaciones observadas, y si bien ambos ocuparían el mismo inmueble, ello no conlleva a la ausencia de control de la entrega de los bienes adquiridos; respecto a las constancias de depósitos, señaló que no constituyen documentación idónea que acredite la realización de las operaciones observadas, dado que únicamente acreditan el pago; respecto del documento denominado descripción de uso de materiales, precisa que únicamente explica para que es utilizado el tinte esmalte sintético adquirido, mas no sustenta la efectiva adquisición de los bienes observados. Con relación a las operaciones con Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L, la sentencia de vista señaló que pese a todos los medios probatorios presentados a nivel administrativo, no se ha logrado acreditar que efectivamente, dichas operaciones se hayan realizado, dado que, si bien la recurrente presentó las guías de remisión remitente, estas no cuentan con la identificación del transportista ni de los vehículos que habrían realizado el traslado de los bienes, asimismo, tampoco ha consignado el motivo de traslado ni la firma ni conformidad de la recurrente, aunado a que las facturas observadas tampoco hacen referencia a dichas guías de remisión, razón por la cual tampoco acreditan la realidad de las operaciones observadas; respecto a las constancias de depósitos, estas no constituyen documentación idónea que acredite la realización de las operaciones observadas, dado que únicamente acreditan el pago. En tal sentido concluye que la recurrente no acreditó con medios probatorios o documentación idónea la efectiva realización de las operaciones con su proveedor Corporación Ferretera Luhanka E.I.R.L. Respecto de sus operaciones con la empresa Indek Andina E.I.R.L la sentencia de vista señala que no obstante los medios probatorios presentados a nivel administrativo, no se ha logrado acreditar que efectivamente, dichas operaciones se hayan realizado, dado que, si bien se presentó la Ficha Ruc de su proveedor, registro de activo fijo, relación de facturas emitidas por su proveedor, estados de cuenta, documentos de importación del proveedor y contrato bilateral, advierte que estos acreditan una vinculación con su proveedor, mas no la efectiva realización de las operaciones observadas; asimismo, respecto a las órdenes de servicio, añade que se tratan de documentos internos que únicamente acreditan la voluntad de adquirir determinados bienes, mas no que se hayan realizado dichas adquisiciones, máxime si no cuentan con ningún sello de recepción y no se encuentra identificada la persona que en representación del proveedor las habría recibido; respecto de las guías de remisión remitente, se aprecia que se consignó como fecha de emisión y transporte el mismo día; sin embargo, la recurrente afirmó que los bienes que habría adquirido permanecían en su custodia antes de la fecha de facturación, contradicción que le resta fehaciencia a las acotadas guías, aunado a ello, las facturas observadas tampoco hacen referencia a dichas guías de remisión, razón por la cual tampoco acreditan la realidad de las operaciones observadas, y si bien ambos ocuparían el mismo inmueble, ello no conlleva a la ausencia de control de la entrega de los bienes adquiridos; respecto de la constatación notarial de fecha 15 de agosto de 2019, señala que dicho documento no acredita que los materiales y herramientas que mantenía en su almacén, correspondan a los bienes adquiridos al proveedor observado, máxime si corresponden a una fecha distinta a los periodos materia de controversia. En tal sentido, la sentencia de vista concluyó que la recurrente no acreditó con medios probatorios o documentación idónea la efectiva realización de las operaciones con su proveedor Indek Andina E.I.R.L, a que se referían los comprobantes observados. De la confrontación entre lo argumentado por la recurrente y la sentencia de vista se evidencia que la parte recurrente pretende es que esta Sala Suprema realice una nueva valoración de los medios probatorios merituados en la sentencia de vista, es decir, sus argumentos no están vinculados propiamente a cuestionar el sistema de valoración de medios probatorios adoptado por el ordenamiento; sino a la valoración de los medios probatorios efectuada por el órgano jurisdiccional; no obstante, dicha valoración de los medios es ajena al fin nomofiláctico del recurso de casación. Lo antes

expuesto implicaría una revaloración de los hechos y medios probatorios, propósito que no es coherente con la naturaleza del recurso extraordinario de casación. Sumado a lo antes señalado, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista se pronunció sobre la materia controvertida y expuso las razones por las cuales los medios probatorios presentados por la parte recurrente no le causaron convicción a efectos de acreditar las operaciones reparadas por la Administración Tributaria. Por lo tanto, las infracciones normativas de carácter procesal devienen en **improcedentes**. **NOVENO:** En cuanto a los demás requisitos de procedencia fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedente las causales contenidas en los considerandos séptimo y décimo de esta resolución. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación presentado por la demandante **Encofrados Innova S.A.C.** mediante escrito del dieciocho de enero de dos mil veintitrés (folios 2153 – 2179 del EJE), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce del veinte de diciembre de dos mil veintidós (folios 2124 – 2144 del EJE) que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número ocho, del trece de setiembre de dos mil veintidós (folios 2036 – 2057 del EJE), que declaró infundada la demanda; **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por **Encofrados Innova S.A.C.** contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y **el Tribunal Fiscal, sobre** acción contencioso administrativa; y los devolvieron. **Interviene como ponente la señora jueza Delgado Aybar. SS.** YAYA ZUMAETA, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, **DELGADO AYBAR,** CORANTE MORALES.

---

1 Expediente Judicial Electrónico.

2 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

3 "1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso."

4 "2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio."

5 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

6 Nótese que se aplica solo los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:

Código Procesal Civil

Artículo 391. Interposición y admisión

"1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.

2. El recurso se interpone:

a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.

b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.

3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.

4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.

[…].

6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

7 Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:

Artículo 386. Procedencia

a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;

b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia.

8 Inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil

9 Literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

10 Inciso 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

11 Literal a) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

12 Literal b) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

13 Literal c) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

14 TARUFFO, Michelle. (2013). "Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos". México; p. 101.

15 Gascon Abellan, Marina. La prueba Judicial: valoración racional y motivación. Universidad de Castilla-la Mancha. https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MYBL04CF-7G0W1S-47L8/Prueba%20Gascon.pdf.

C-2245460-24

CASACIÓN Nº 26547-2023 LIMA

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante **Ramírez Muro Ricardo Fernando** del diecisiete de julio de dos mil veintitrés (folios 332 - 339 del Expediente Judicial Electrónico[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número doce, del veintiocho de junio de dos mil veintitrés (folios 315 - 326), emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número siete, del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (folios 242 - 255), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **SEGUNDO:** Preliminarmente, se debe mencionar que las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general". Es decir, debe primar la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que precisa que el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la administración pública, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concordado con el inciso 1 del artículo 2 de la citada ley, que dispone que, en caso de defecto o deficiencia de una ley, el juez debe aplicar los principios del derecho administrativo y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa, como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos procedimientos administrativos, incluidos los especiales. En ese orden de ideas, se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza, tomando en cuenta que tiene características propias -diferentes a otras instituciones procesales-, como son los sujetos procesales: la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes; la naturaleza de las actuaciones impugnables; las particularidades procesales, como son los requisitos de admisibilidad y procedencia; la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar; la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia o antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, y debe prevalecer la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y en específico, de la reciente modificación que ha sufrido por la Ley Nº 31591[2], publicada en el diario oficial El Peruano el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que introdujo, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones respecto del recurso de casación, debemos evaluar si estas son compatibles con la naturaleza del proceso contencioso administrativo, conforme lo señala la primera disposición complementaria final del mencionado código procesal. De este modo, luego del análisis correspondiente, este colegiado supremo, con base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, y en específico, de los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, introducidas por la Ley Nº 31591 que pueden ser tomadas en forma supletoria

para regular la casación del proceso contencioso administrativo son el inciso 1[3] y el literal c) del inciso 2[4] del artículo 386[5], así como los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del mismo código[6]. Asimismo, precisamos que los requisitos de admisibilidad omitidos —literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386[7] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591—, no serán de aplicación por restringir derechos de las partes en este tipo de procesos, y por generar un gran impacto en el interés público (tanto de los administrados y como del estado). **TERCERO:** El recurso objeto de análisis cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 386 y 391 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso[8], y ello en tanto el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio[9]; **ii)** el recurso de casación se indica separadamente cada causal invocada y cita concretamente los preceptos legales que se considera erróneamente aplicados o inobservados; se precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustentan su pretensión y se expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende[10]; **iii)** se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada[11]; **iv)** fue interpuesto dentro del plazo de diez (10) días de notificada a los recurrentes con la resolución impugnada[12]; y **v)** en cuanto a la tasa respectiva[13], adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de casación (folio 340). **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que: **(i)** el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o las razones por las cuales se habría producido el apartamiento inmotivado del precedente judicial; **(ii)** recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de "transferir la queja expresiva de los agravios" y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, "por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse" y porque su estudio "se limita a la existencia del vicio denunciado"; **(iii)** la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye tercera instancia judicial. No es posible revaloración probatoria en sede casatoria; **(iv)** cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho, es decir, lo que se examina es saber si en ella existe argumentación racional conforme al ordenamiento jurídico; **(v)** tales infracciones deben describirse con claridad y precisión, debiéndose señalar que cuando la ley indica que se debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que menciona; y **(vi)** lo que debe discutirse en casación son las razones esenciales que fueron el soporte de la sentencia que se impugna; las motivaciones accesorias resultan intrascendentes en torno a la calificación del recurso. **QUINTO:** En cuanto a la declaración de improcedencia, en el artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, el legislador señala que: 1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos. **SEXTO:** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, se verifica que la sentencia de vista materia de impugnación es pasible de ser recurrida vía casación; y con relación al literal c) del inciso 1 del artículo 393 del mismo cuerpo legal, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con impugnar la resolución de primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifica del escrito de apelación (folios 261 - 266). **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema Sala advierte que el recurrente denuncia como causal casatoria la siguiente: **a) Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 21 y 23 de la Ley de Tributación Municipal** El casacionista sostiene que la adjudicación judicial del bien inmueble dado como consecuencia de un remate judicial derivado de un proceso de ejecución de garantía donde el acreedor hipotecario es el adjudicario del bien, no se encuentra dentro de los alcances de la hipótesis de incidencia tributaria descrita en la norma legal de los artículos 21 y 23 de la Ley de Tributación Municipal, por lo que no estaría afecto al impuesto de alcabala. Alega que las instancias de mérito han incurrido en una afectación al principio tributario de legalidad, dado que al no encontrarse previsto positivamente como gravable en la norma legal la adjudicación judicial de bien inmueble por remate público, de manera expresa en los alcances de los artículos 21 y 23 de la Ley de Tributación Municipal. Asimismo, indica que se ha incurrido en una afectación al principio de reserva de ley, dado que la autoridad administrativa o judicial no tienen potestad para crear, modificar, o incluir conductas como gravadas para el pago del impuesto. Por último, agrega que en la ejecución judicial no se da conmutatividad de las prestaciones, por lo que no encajaría típicamente como un supuesto dentro de los alcances de los artículos 21 y 23 de la Ley de Tributación Municipal, en razón de que la norma refiere de "comprador" o como "adquiriente", no hace referencia como "adjudicatario" por remate. **OCTAVO:** Respecto de la infracción normativa contenida en el **literal a) del séptimo considerando**, se aprecia que la parte recurrente ha fundamentado la infracción normativa como si se tratara de un recurso de apelación conforme se aprecia de sus argumentos, en los que se verifica que lo que en el fondo pretenden es cuestionar los criterios desplegados por las instancias de mérito, a fin de que se asuma por válida la tesis postulada en el presente proceso, sin tener presente, la parte recurrente, que la Corte Suprema en la Casación Nº 7365-2013 Lima de fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, ha establecido: Sobre la función nomofiláctica del recurso de casación, es necesario tener presente que la función nomofiláctica en casación, en función de cognición especial, sobre vicios de la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial; que en control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional" , revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica; en ese sentido; habiendo acudido en casación la demandante alegando infracciones de normas, ésta no apertura la posibilidad de acceder a una tercera instancia, tampoco se orienta a verificar un reexamen de la controversia ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y proceso, sino más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines como es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, por lo que solo puede funcionar en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración. En ese sentido, se advierte que la recurrente no precisa los fundamentos por los cuales considera que lo resuelto por la Sala Superior resulta incorrecto, ni tampoco los motivos por los cuales se habría incurrido en infracción a la norma que señala, por lo cual, la causal bajo análisis carece de claridad y precisión, pues impide a este colegiado examinar si realmente se configuró la interpretación errónea de las normas que invoca, por el contrario implica la intención del recurrente de que se realice un nuevo análisis de hechos, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación; en consecuencia, teniendo en cuenta lo indicado y al advertirse que la infracción normativa carece de fundamentación

suficiente, devienen **improcedente. NOVENO:** Del mismo modo, cabe resaltar lo señalado en la Sentencia Nº 00802-2020-PA/TC de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fundamento jurídico 19 que establece: Ahora bien, corresponde dejar establecido que la casación, aun cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. **Y es extraordinario porque su viabilidad se encuentra circunscrita solo a determinadas resoluciones judiciales y por específicas causales legalmente preestablecidas, y porque en su formulación deben satisfacerse requisitos de forma que, en contraste con los recursos ordinarios**, resultan ser altamente especializados, de modo tal que impone como carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso. […]. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Ramírez Muro Ricardo Fernando** del diecisiete de julio de dos mil veintitrés (folios 332 - 339 del Expediente Judicial Electrónico), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número doce, del veintiocho de junio de dos mil veintitrés (folios 315 - 326); **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por Ramírez Muro Ricardo Fernando contra el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT y **el Tribunal Fiscal, sobre** acción contencioso administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Juez Supremo Delgado Aybar. SS. BURNEO BERMEJO, CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, **DELGADO AYBAR,** CORANTE MORALES.

---

1 Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

3 1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso.

4 2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que:
[…] c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio.

5 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

6 **Código Procesal Civil**
Artículo 391.Interposición y admisión
1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. El recurso se interpone:
a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.
b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda.
c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.
4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.
[…].
6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

7 **Artículo 386.Procedencia**
a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;
b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia.

8 Inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

9 Literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

10 Inciso 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

11 Literal a) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

12 Literal b) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

13 Literal c) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

CASACIÓN Nº 26599-2023 LIMA

Lima, ocho de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso extraordinario de casación presentado por la codemandada Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT (mediante su Procuraduría Pública) mediante escrito del trece de julio de dos mil veintitrés (folios 432 – 437 del EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve del veintisiete de junio de dos mil veintitrés (folios 411 – 426 del EJE) que revocó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número doce, del diez de marzo de dos mil veintitrés (folios 301 – 313 del EJE), que declaró infundada la demanda; y reformándola declararon fundada en parte la demanda. **SEGUNDO:** Al respecto, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo deben ser interpretadas bajo el principio de especialidad de las normas, que señala que "la norma especial prima sobre la general", es decir, que deben ser interpretadas conforme a la naturaleza de las normas de índole administrativo, partiendo de lo que dispone el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que precisa que el Proceso Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concordado con el inciso 1 del artículo 2 del citado texto que dispone que en caso de defecto o deficiencia de la Ley, el Juez debe aplicar los principios del derecho administrativo, y lo que disponen otras normas de naturaleza administrativa como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que se erige como norma común para las actuaciones de la administración pública y regula todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. En el sentido de lo antes indicado se consagra la particularidad de la justicia administrativa y su específica naturaleza tomando en cuenta que tiene características propias, diferentes a otras instituciones procesales-, como son los sujetos procesales: la administración pública en la relación jurídica procesal o las personas naturales o jurídicas en su condición de administrativos o contribuyentes; la naturaleza de las actuaciones impugnables; las particularidades procesales, como son los requisitos de admisibilidad y procedencia; la carga de la prueba o el tratamiento de la tutela cautelar; la plena jurisdicción, entre otros aspectos. Por ello, se resalta, por el principio de especialidad de la norma, que cualquier vacío, deficiencia, antinomia, deben resolverse bajo la lógica de este marco normativo, y debe prevalecer la ley especial sobre la general o sobre cualquier otra de carácter supletorio, en la línea de lo señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC. En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y en específico, de la reciente modificación que ha sufrido por la Ley Nº 31591[2], publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2022, que introdujo, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones respecto del recurso de casación, debemos evaluar si estas son compatibles con la naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo, conforme a lo señala la Primera Disposición Complementaria Final del mencionado Código Procesal. En ese orden, luego del análisis correspondiente, este Colegiado Supremo en base a lo previamente señalado, conforme a un análisis integral de las normas propias de la justicia administrativas, y en específico, a los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, se considera que las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, que pueden ser tomadas en forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo son: el inciso 1[3] y literal c) del inciso 2[4] del artículo 386[5], así como los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil[6]. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos, estos son: Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386[7] e inciso 5 del artículo 391 del Código Procesal Civil introducidos por la Ley Nº 31591, no serán de aplicación por restringir derechos de las partes en este tipo de procesos, además de generar un gran impacto en el interés público (administrados y el estado). **TERCERO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 386 y 391 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una

resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso[8], siempre que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio[9]; **ii)** El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende[10]; **iii)** se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada[11]; **iv)** fue interpuesto dentro del plazo de diez (10) días de notificada a la recurrente con la resolución impugnada[12]; y, **v)** en cuanto a la tasa respectiva[13], no adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de casación, puesto que se encuentra exento del pago del mismo. **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que: **(i)** el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o las razones por las cuales se habría producido el apartamiento inmotivado del precedente judicial; **(ii)** recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de "transferir la queja expresiva de los agravios" y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, "por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse" y porque su estudio "se limita a la existencia del vicio denunciado"; **(iii)** la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye tercera instancia judicial. No es posible revaloración probatoria en sede casatoria; **(iv)** cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho, es decir, lo que se examina es saber si en ella existe argumentación racional conforme al ordenamiento jurídico; **(v)** tales infracciones deben describirse con claridad y precisión, debiéndose señalar que cuando la ley indica que se debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que menciona; y **(vi)** lo que debe discutirse en casación son las razones esenciales que fueron el soporte de la sentencia que se impugna; las motivaciones accesorias resultan intrascendentes en torno a la calificación del recurso. **QUINTO:** En cuanto a la declaración de improcedencia, el artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, el legislador señala que: "1. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a. No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388, respectivamente; b. se refiere a resoluciones no impugnables en casación; o, c. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. 2. También declara la improcedencia del recurso cuando: a. Carezca manifiestamente de fundamento; o, b. se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. 3. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. 4. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte días, con el voto conforme de tres jueces supremos." **SEXTO:** En cuanto al requisito de procedencia previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591, se verifica que la sentencia de vista materia de impugnación es pasible de ser recurrida vía casación; y en relación al literal c) del inciso 1 del artículo 393 del mismo cuerpo legal, se aprecia que a la parte recurrente - Sunat, no le es exigible este requisito toda vez que la sentencia de primera instancia no le fue desfavorable en ningún extremo. Infracciones denunciadas por la recurrente **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: 1) Vulneración del numeral 5 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú por deficiencias en la motivación Como argumentos que sustentan la referida infracción normativa señala lo siguiente: a) Invoca la vulneración del numeral 5 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú por deficiencias en la motivación de la sentencia emitida, puesto que dicha sentencia señala que la Administración Aduanera y el Tribunal Fiscal, han incumplido con la línea jurisprudencial donde se advierten pronunciamientos en contra del Principio de Economía Procesal, al advertirse que sobre el hecho materia del presente existe manifiesta improcedencia. b) Añade que el pronunciamiento materia de casación, no expresa eficientemente las razones por las cuales concluye que la Administración Aduanera no motivó de manera adecuada su decisión sustentándose en jurisprudencia administrativa y judicial citada. c) El artículo 136 concordado con el inciso a) del numeral 3 del artículo 119 del Código Tributario, establece que existen supuestos en los cuales la Administración Tributaria no aplicará la regla de pagar previamente la deuda a fin de que la Administración de trámite al recurso interpuesto extemporáneamente; esto está referido a las órdenes de pago, en caso de resoluciones de determinación o multa cuando el recurso es planteado dentro de los plazos, o que no subsista la exigibilidad de la deuda porque podría haber sido pagada, fraccionada o refinanciada. d) La Resolución de División Nº 0003-2014 emitida por la Sunat sancionó al contribuyente con la imposición de una multa por no comunicar a la Administración Aduanera la fecha del término del embarque en el plazo señalado, por ello estableció que se incurrió en la infracción establecida en el numeral 4, inciso d) del Artículo 192 del Decreto Legislativo número 1053, Ley General de Aduanas. En tal sentido, no aprecia que la deuda se haya extinguido o que se hubiese interpuesto oportunamente el recurso, para efectos de que se hubiese configurado el supuesto de improcedencia que excepcionalmente contempla el Código, pues la procedibilidad del cobro de la multa emana de la propia resolución de multa y el recurso se presentó extemporáneamente lo cual exige pago previo. e) Las Resoluciones del Tribunal Fiscal invocadas en la sentencia impugnada, resuelven un caso concreto y no constituyen Jurisprudencia de Observancia obligatoria según lo previsto por el artículo 154 del Código Tributario – pues no basta con indicar que los casos sean supuestamente idénticos, en los que se habría resuelto en forma favorable al demandante, sino que implica que lo resuelto mediante Resoluciones del Tribunal Fiscal establezcan de modo expreso y de carácter general el sentido de las normas tributarias. f) En cuanto al argumento de la Sentencia sobre manifiesta improcedencia del caso materia de litis, por existencia de Jurisprudencia del Tribunal Fiscal, señala que dicho pronunciamiento está versando sobre el fondo del asunto, cuando el presente proceso se circunscribe a la admisibilidad del recurso de reclamación, esto es una cuestión de forma, por lo que considera que existe un avocamiento indebido que vulnera el debido procedimiento. 2) Inaplicación de lo dispuesto por los numerales 2 y 3 del artículo 137 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133- 2013-EF a) La Sentencia emitida reconoce que el artículo 137 del Código Tributario en los numerales señalados ha previsto un plazo de hasta 20 días para reclamar una Resolución de Multa y que, excepcionalmente se permite la presentación extemporánea de dicha reclamación, acreditando el pago de la totalidad de la deuda tributaria o presentando carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada. b) Sin embargo, dicha sentencia, en clara contravención a la norma señalada, incluso vulnerando el Principio de Legalidad aplicado en los Actos Administrativos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera y el Tribunal Fiscal, considera que las Resoluciones emitidas adolecen de manifiesta improcedencia. Es decir, el Colegiado Judicial, en forma ilegal, analizando solamente los argumentos del demandante, considera que el pago previo para ser admitida la Reclamación debe ser obviado. c) Asimismo, se sustenta en supuesta jurisprudencia, que no es tal, para fundamentar su pronunciamiento, recurriendo a argumentaciones de aplicación del Principio de Razonabilidad y de Predictibilidad. En tal sentido, la sentencia formulada agravia la normativa expresamente señalada para el supuesto materia del presente caso, es decir, la no admisión de reclamación extemporánea sin acreditar previamente el pago o el afianzamiento de la deuda tributaria, soslayando la correcta búsqueda de la verdad material dentro un marco normativo de carácter vinculante. **Análisis de las infracciones normativas planteadas por la SUNAT OCTAVO:** Respecto

de las infracción normativa señalada **en el numeral 1) del séptimo considerando**, esta Sala Suprema debe precisar que la recurrente señala como fundamento principal que la sentencia de vista incurre en vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú por deficiencias en la motivación de la sentencia emitida, puesto que dicha sentencia señala que la Administración Aduanera y el Tribunal Fiscal, han incumplido con la línea jurisprudencial donde se advierten pronunciamientos en contra del Principio de Economía Procesal, al advertirse que sobre el hecho materia del presente existe manifiesta improcedencia. Al respecto, se advierte que la sentencia de vista ha concluido que el Tribunal Fiscal al negarle la tramitación del medio impugnatorio a la demandante no sigue su propia jurisprudencia; lo que vulnera el principio de predictibilidad; por lo que, remite los actuados para que el Colegiado administrativo emita un pronunciamiento de fondo respecto del recurso impugnatorio sin la exigencia del pago previo. Por otro lado, la sentencia de vista admite la posibilidad de examinar el recurso impugnatorio sin el pago previo frente a una manifiesta improcedencia y basa su fallo en la Casación Nº 13589-2015-Lima, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que ha señalado lo siguiente: "[…] SÉPTIMO.- En atención a estas consideraciones, este Colegiado Supremo estima que en el presente caso, si bien resultaba pertinente la aplicación del artículo 146 del Código Tributario que determinaba la inadmisibilidad de la apelación presentada por […], al no presentar la subsanación de su recurso de apelación dentro del plazo requerido; según se ha explicado en los parágrafos precedentes en atención al principio de razonabilidad, no cabe duda que el Tribunal Fiscal al contar con precedentes en los cuales se establecía que la acotación realizada por la Administración Tributaria era manifiestamente improcedente por carecer de sustento, en un sentido de razonabilidad y de justicia optó por desarrollar el tema de fondo y evaluar los actuados, realizando una debida ponderación de los hechos, por lo que no se postergó deliberadamente la aplicación del artículo denunciado por la recurrente. OCTAVO. - Siendo ello así, esta Suprema Sala concluye que la decisión adoptada en la sentencia de vista, objeto de casación, de confirmar la infundabilidad de la demanda, no vulnera en modo alguno la norma cuya infracción se denuncia, sino que, se optó correctamente en armonía con el principio de razonabilidad ya descrito; correspondiendo por ello desestimar los fundamentos del recurso de casación. […]" De lo contrastado entre lo señalado en la sentencia de vista y los argumentos de la recurrente se advierte que estos últimos no sustentan la vulneración del principio de debida motivación de las resoluciones judiciales, es decir, la recurrente no cuestiona la falta de motivación de la sentencia de vista sino el criterio desplegado por la instancia de mérito respecto de la admisión del recurso impugnatorio, a fin de que se asuma por válida su tesis postulada en el presente proceso. Por lo tanto, la recurrente no ha demostrado la infracción normativa del numeral 5 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, se debe declarar la **improcedencia** de la referida causal. **NOVENO:** Respecto de la infracción normativa señalada **en el numeral 2) del séptimo considerando**, esta Suprema advierte que la recurrente argumenta como fundamento principal que la Sala Superior ha inaplicado lo dispuesto por los numerales 2 y 3 del artículo 137 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133- 2013-EF. Asimismo, señala que la sentencia de vista vulnera el Principio de Legalidad aplicado en los Actos Administrativos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera y el Tribunal Fiscal, es decir, el Colegiado Judicial, en forma ilegal, ha analizado solamente los argumentos del demandante y considera que el pago previo para ser admitida la Reclamación debe ser obviado. En este contexto, antes de ingresar en el análisis de la inaplicación de la disposición normativa en cuestión, esta Sala Suprema debe establecer que la aplicación de una disposición normativa implica no solo la interpretación de una disposición normativa, sino también la comprobación de los hechos de la causa (que en nuestro sistema son aquellos determinados por las instancias de mérito), la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. Así, refiere Guastini[14]: Aplicación e interpretación son cosas evidentemente diferentes. Mientras que el verbo «interpretar» concuerda con cualquier sujeto (ya que cualquiera puede desempeñar la actividad interpretativa), el verbo «aplicar» concuerda solo con aquellos sujetos que designan -precisamente- órganos llamados de aplicación: principalmente jueces y funcionarios administrativos (principalmente, pero no exclusivamente: muchas normas constitucionales, para poner el ejemplo más obvio, son aplicadas por los supremos órganos constitucionales y algunas solo por ellos). Se puede decir de un jurista, o de un ciudadano cualquiera, que «interpreta» el derecho; pero no sería apropiado decir que un jurista, o un ciudadano, «aplica» el derecho. Ver G. Tarello, «Orientamenti analitico-linguistici e teoría dell'interpretazione giuridica», en U. Scarpelli (ed.), Diritto e analisi dellinguaggio, Milano, 1976. Por otra parte, el término «aplicación», especialmente si se refiere a órganos jurisdiccionales, designa comúnmente un conjunto de operaciones que no se extinguen con la interpretación, ya que incluyen junto con la interpretación propiamente dicha (y la construcción jurídica, claro): la comprobación de los hechos de la causa, la calificación del supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de la controversia. De esta manera, la inaplicación de una disposición normativa como causal de casación implica la existencia de una disposición normativa (cuya fundamentación corresponde al recurrente), que debió ser aplicada por el órgano jurisdiccional para la solución del caso concreto. Esta norma, que eventualmente debió ser aplicada para resolver el caso, debe tener incidencia directa en la resolución recurrida; es decir, debe estar vinculada a la ratio decidendi. De la sentencia de vista, se advierte que la Sala ha fundamentado las razones por las cuales en el presente caso es razonable que la Administración responda la pretensión de la demandante; además, señaló que el abastecimiento de combustible es coherente con su giro de negocio. Además, se verifica que lo que en el fondo pretende la recurrente es cuestionar el criterio desplegado por la instancia de mérito con relación a la admisión del recurso impugnatorio, a fin de que se asuma por válida su tesis postulada en el presente proceso. De otro lado, la recurrente ha señalado la inaplicación de la referida norma en un sentido genérico y sin mayor concreción e incidencia directa en la sentencia recurrida. Asimismo, tampoco precisó la existencia de una disposición normativa que debió ser aplicada por el órgano jurisdiccional para la solución del caso concreto. Por los considerandos expuestos, se debe declarar la **improcedencia** de la referida causal. **DÉCIMO:** En cuanto a los demás requisitos de procedencia fijados en el artículo 393 del Código Procesal Civil, cabe precisar que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos, al haberse declarado improcedentes las causales contenidas en el considerando séptimo de esta resolución. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación presentado por la codemandada **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT** (mediante su Procuraduría Pública) mediante escrito del trece de julio de dos mil veintitrés (folios 432 – 437), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve del veintisiete de junio de dos mil veintitrés que revocó la sentencia de primera instancia emitida mediante resolución número doce que declaró infundada la demanda; y reformándola declararon fundada en parte la demanda; **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por **LATAM AIRLINES PERÚ S.A.** contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y **el Tribunal Fiscal, sobre** acción contencioso administrativa; y los devolvieron. **Interviene como ponente la señora Jueza Suprema provisional Yalán Leal. SS.** YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, Y**ALÁN LEAL, P**EREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

1 Expediente Judicial Electrónico.

2 Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la corte suprema de justicia de la república y dicta otras disposiciones.

3 "1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso."

4 "2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: (…) c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio."

5 Nótese que se aplica solo el inciso 1 y el literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591.

6 Nótese que se aplica solo los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:

Código Procesal Civil

Artículo 391. Interposición y admisión

"1. El recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisa el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende.

2. El recurso se interpone:

a. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada.

b. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. c. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.

3. Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.
4. Si no se cumple con lo previsto en literal c del numeral 2, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de tres días para su subsanación, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si su interposición hubiera tenido tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.
[…].
6. Si la Sala Superior admite el recurso, eleva el expediente a la Corte Suprema con conocimiento de las partes, quienes son notificadas en sus respectivas casillas electrónicas.

7 Literales a) y b) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, introducido por la Ley Nº 31591, consistentes en:
Artículo 386. Procedencia
a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero;
b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia.

8 Inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil

9 Literal c) del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

10 Inciso 1 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

11 Literal a) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

12 Literal b) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

13 Literal c) del inciso 2 del artículo 391 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 31591.

14 GUASTINI, Ricardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, CEPC; p. 249

C-2245460-26

CASACIÓN Nº 55262-2022 LIMA

TEMA: PRINCIPIO DE LEGALIDAD
SUMILLA: La sentencia de vista tiene determinado en la presente controversia que, a la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883 (doce de febrero de dos mil diez), la empresa recurrente no contaba con licencia de funcionamiento para realizar la actividad de ensamblaje, por lo que concluye que la accionante no acreditó su condición de "empresa ensambladora autorizada". Sin embargo, no advirtió que, con arreglo al principio de legalidad, dicho requisito no podía ser acreditado por la empresa accionante con la licencia de funcionamiento, por no ser la municipalidad correspondiente la entidad competente para otorgar la autorización para realizar actividades de ensamblaje, en los términos que expone el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC. Así pues, se observa que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa por contravención del principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución y del artículo VIII del título preliminar del Código Tributario, al realizar una interpretación extensiva de las normas, introduciendo un requisito no previsto, como lo es la licencia de funcionamiento. Ante la falta de regulación por parte del Ministerio de la Producción respecto de la autorización a las empresas de ensamblaje, en mérito al principio de verdad material, corresponde que la administración aduanera verifique los diversos medios probatorios que lleven a acreditar que, en efecto, a la fecha de numeración de la citada declaración aduanera de mercancías, la empresa recurrente ostentaba la condición de "empresa ensambladora autorizada", a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC.
PALABRAS CLAVE: Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, vulneración del principio de legalidad, vulneración de la norma VII del Código Tributario

Lima, veintidós de agosto de dos mil veintitrés

QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS La causa número cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y dos, guión, dos mil veintidós, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada por los señores Jueces Supremos Burneo Bermejo (presidente), Bustamante Zegarra, Cabello Matamala, Delgado Aybar y Tovar Buendía, luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: **I. ASUNTO** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa PICON S.A.C. mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintidós (fojas cuatrocientos once del expediente judicial electrónico - EJE), contra la sentencia de vista emitida con resolución número treinta, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas trescientos setenta del EJE), que confirma la sentencia apelada, contenida en la resolución número veintitrés, del veintitrés de marzo de dos mil veintidós (fojas doscientos noventa y dos del EJE), que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. **I.1. Antecedentes I.1.1 Demanda** Con fecha once de abril de dos mil diecisiete, PICON S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y contra el Tribunal Fiscal, formulando las siguientes pretensiones: **Pretensión principal:** Solicita que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017 (fojas seis del EJE), emitida el seis de enero de dos mil diecisiete, que resuelve confirmar la Resolución de Intendencia Nº 217 3T0000/2016-000411, de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, que declara improcedente la solicitud de regularización/reconocimiento físico presentada al amparo de la Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. **Pretensión accesoria a la pretensión principal:** Como consecuencia de amparar la pretensión principal, solicita se declare fundada su solicitud de devolución de impuesto. La empresa demandante sustenta su demanda con los siguientes fundamentos: a) Señala que la Resolución de Intendencia Nº 2I7-3T0000/2016-000410 declaró improcedente la solicitud de regularización / reconocimiento físico presentada al amparo de la Ley Nº 27037 - Ley de la Promoción de la Inversión en la Amazonía, referida a las mercancías importadas con la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883-01-7-00 (series 1 al 15) y declaró definitivo el importe de cuatro mil seiscientos dos soles con cero céntimos (S/ 4,602.00). b) Indica que al momento de numeración de la citada Declaración Aduanera de Mercancías de importación de paquetes CKD para su actividad de ensamblaje, contaba con el Registro de Productos Industriales - RPIN, el cual fue derogado mediante el Decreto Legislativo Nº 1004 (norma publicada el tres de mayo de dos mil ocho). c) Es ilegal que el Tribunal Fiscal y la SUNAT le exijan contar con licencia de funcionamiento cuando dicho requisito no ha sido previsto en el Decreto Supremo Nº 353-84-EFC, para acogerse al Convenio Peruano Colombiano no cabe establecer requisitos que no estén previstos en la ley. I.1.2 Sentencia de primera instancia El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia emitida mediante resolución número veintitrés, de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós (fojas doscientos noventa y dos del EJE), declaró **infundada la demanda.** La sentencia de primera instancia se fundamenta principalmente en que la demandante no acreditó contar con licencia de funcionamiento como empresa ensambladora al momento de numerar la Declaración Aduanera de Mercancías. **I.1.3 Sentencia de vista** La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Lima emite la sentencia de vista con resolución número treinta, del veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas trescientos setenta del EJE), que **confirma** la sentencia apelada, que declaró **infundada la demanda** en estos extremos. La sentencia de vista sostiene principalmente que, en el presente caso, no se advierte que las resoluciones impugnadas por la demandante hayan vulnerado el principio de legalidad, toda vez que se ha corroborado objetivamente que la recurrente no cumplía con el requisito de ser una "empresa ensambladora autorizada", al carecer de la correspondiente licencia de funcionamiento para realizar la actividad de ensamblaje. De este modo, concluye la sentencia de vista que las entidades demandadas han actuado en observancia de dicho principio, el mismo que constituye una obligación de las autoridades administrativas —y, en general, de todas las autoridades que componen el Estado— de actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines de dichas facultades. Por consiguiente, la sentencia de vista decide declarar infundada la demanda y, al haber la instancia inferior emitido un pronunciamiento en el mismo sentido, su pronunciamiento es confirmatorio. **I.2 Recurso de casación** La parte demandante, empresa PICON S.A.C., mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintidós (fojas cuatrocientos once del EJE), interpone recurso de casación contra la sentencia de vista, del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que confirmó la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Sustenta su recurso en las siguientes infracciones normativas: a) **Contravención al debido proceso y debida motivación de las resoluciones contenida en el numeral 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú**

Señala la recurrente que, la sentencia de vista contiene una motivación aparente e insuficiente, que parte de una premisa errónea al pretender que se aplique la Ley de Simplificación Nº 26935, la cual es de carácter general y no regula la calificación de empresa ensambladora por ser atribución y competencia exclusiva de PRODUCE conforme a su ROF. Que PRODUCE a través de sus registros determinaba la exigencia de requisitos y certificaba a través del Registro la condición de empresa ensambladora o de productos industriales, pero al ser derogado el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN, como un mecanismo para facilitar y promover la comercialización e industrialización de la región y zona selva, ya no existía requisito alguno, por lo que la invocación de la norma de simplificación es una apariencia de fundamentación que trataría de suplir el vacío creado por la derogatoria del RPIN al aplicar una norma de carácter general que solo regula el aspecto de las licencias de funcionamiento otorgadas por la Municipalidad, mas no la acreditación como empresa ensambladora, siendo que en su caso contaba con RPIN a la época de las declaraciones aduaneras, constancia expedida por PRODUCE que acreditaba su condición de empresa ensambladora. Sostiene que la sentencia de vista incurre en motivación incongruente ya que reconoce que la competencia es de PRODUCE, pero luego introduce como válido que se aplique la Ley Nº 26935, Ley de Simplificación para obtener Licencia de Funcionamiento. b) **Contravención al Principio de Legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y del artículo VIII del título preliminar del Código Tributario** Señala la recurrente que, la sentencia de vista ha incurrido en una contravención al principio de legalidad al hacer suyos los fundamentos de la sentencia de primera instancia y la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, requiriendo requisitos no contemplados en la ley como es el de exigir la Licencia de Funcionamiento como empresa ensambladora otorgada por la Municipalidad, cuando la Municipalidad no es la institución legitimada por ley para acreditar la condición de empresa ensambladora, sino PRODUCE, como institución autorizada para regular las normas jurídicas respecto de las empresas ensambladoras. Señala, que cuando se produjeron las declaraciones de adquisición de Mercancías - DAMS ante la Aduana en el año dos mil diez, ya se había producido la derogatoria del RPIN mediante Decreto Legislativo Nº 1004-2008, por ello PRODUCE procedió a emitir las constancias respectivas como empresa ensambladora, ya que la empresa contaba con el RPIN previamente y ello la acreditaba como empresa ensambladora, por lo que la sala, la A-quo y el Tribunal Fiscal, al desconocer la institución competente y pretender incluir requisitos legales vía interpretación vulneran el principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la constitución y artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario, porque inaplican el Decreto Supremo Nº 10-2006 de PRODUCE, el Decreto Legislativo Nº 1004 y la Ley de Industrias - 23407 . **Auto calificatorio** Mediante auto de calificación del cuatro de abril de dos mil veintitrés, la Quinta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara **procedente** el recurso interpuesto por la empresa demandante respecto de las causales indicadas en el acápite anterior (foja ciento ochenta y siete del cuaderno de casación) **II. CONSIDERANDO Primero: Delimitación del petitorio 1.1** Es materia de pronunciamiento de fondo, el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante contra la sentencia de vista emitida en segunda instancia, que, poniendo fin al proceso, confirma la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda. **1.2** La empresa casante trae a casación las siguientes infracciones normativas: a) Contravención del debido proceso y la debida motivación de las resoluciones, contenidos en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú b) Contravención del principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y en el artículo VIII del título preliminar del Código Tributario j.3 En el presente caso, la línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver la causal de naturaleza procesal a fin de verificar si la sentencia impugnada ha incurrido en infracción del derecho a la debida motivación y al debido proceso, previstos en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución. De resultar amparable, acarrearía la nulidad de la resolución judicial impugnada e impediría, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre la causal de carácter material. En el caso de no establecer amparable la infracción procesal denunciada, en segundo orden, se procederá analizar las infracciones normativas de carácter material señaladas en el acápite anterior. Segundo: Sobre el derecho fundamental a la motivación **2.1** El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución[1], también encuentra amparo en los tratados internacionales sobre derechos humanos, estando incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fundamental es uno de los derechos que conforman el derecho fundamental al debido proceso[2], el cual se encuentra, a su vez, reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, y cuenta con desarrollo legal en los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, que exigen que las sentencias deben contener los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la decisión judicial, con la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de los puntos controvertidos. Asimismo, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece con carácter obligatorio que las resoluciones judiciales deben estar motivadas bajo responsabilidad con expresión de los fundamentos en que se sustentan. El derecho a la motivación ha sido objeto de interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política del Estado), que establece que es un derecho que permite verificar la materialización del derecho a ser oído y que la argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos[3], que es un derecho a ser juzgado por las razones que el derecho suministra: […] la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática […]. El derecho a la motivación además garantiza a las partes la observancia del debido proceso, que se resuelve en coherencia con los actuados en el proceso garantizando el derecho de defensa, el respeto de lo resuelto en razón de los recursos impugnatorios, y el cumplimiento de lo ordenado en resoluciones judiciales emitidas en el proceso con calidad de cosa juzgada. Tercero: Infracción procesal denunciada por la empresa demandante **3.1** La empresa recurrente sustenta principalmente que la sentencia de vista contiene una motivación aparente e insuficiente, que parte de una premisa errónea al pretender que se aplique la Ley Nº 26935 – Ley sobre simplificación de procedimientos para obtener los registros administrativos y las autorizaciones sectoriales para el inicio de actividades de las empresas, la cual es de carácter general y no regula la calificación de empresa ensambladora por ser atribución y competencia exclusiva de Ministerio de la Producción - PRODUCE, conforme a su Reglamento de Organización y Funciones - ROF. Alega que el Ministerio de la Producción - PRODUCE, mediante sus registros, determinaba la exigencia de requisitos y certificaba la condición de empresa ensambladora o de productos industriales, pero al ser derogado el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN, como un mecanismo para facilitar y promover la comercialización e industrialización de la región y zona selva, ya no existía requisito alguno. Por tanto, la invocación de la norma de simplificación es una apariencia de fundamentación que trataría de suplir el vacío creado por la derogatoria del RPIN al aplicar una norma de carácter general que solo regula el aspecto de las licencias de funcionamiento otorgadas por la municipalidad, mas no la acreditación como empresa ensambladora, siendo que en su caso contaba con RPIN a la época de las declaraciones aduaneras, constancia expedida por PRODUCE que acreditaba su condición de empresa ensambladora. Sostiene que la sentencia de vista incurre en motivación incongruente, ya que reconoce que la competencia es de PRODUCE, pero luego introduce como válido que se aplique la Ley Nº 26935. **3.2** A fin de verificar si la sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa denunciada, el examen a efectuarse debe partir necesariamente de los propios fundamentos o razones que le sirvieron de sustento. De tal modo que, al realizar el control de derecho de la resolución impugnada, se analizarán las razones expuestas que justificaron la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda. **3.3** Examinando la sentencia de vista, se advierte que, en el primer considerando, precisa los agravios del recurso de apelación por parte de la empresa demandante; en el considerando segundo, se señalan las pretensiones de la demandante; en el considerando tercero, se delimita la presente controversia, la cual se circunscribe a determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, del seis de enero de dos mil diecisiete, adolece o no de algún vicio de nulidad; en el considerando

cuarto, la sentencia impugnada señala la base legal aplicable para la importación de mercancías que se destinen a la Amazonía, como son el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano (PECO), la Ley Nº 27037 y su reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 103-99-EF, así como el Decreto Supremo Nº 353-84-EFC. La sentencia impugnada sostiene que, con el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano - PECO, se estableció una zona de tratamiento aduanero especial para los departamentos de la Amazonía, como Loreto, San Martín y Ucayali, a fin de regular los gravámenes y beneficios tributarios para las importaciones de productos con destino a tales circunscripciones. El numeral 7 de su artículo VIII señala que las mercancías que se importan a dicho territorio deberán cumplir con los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en cada país. Agrega la sentencia bajo análisis que con la tercera disposición complementaria de la Ley Nº 27037, concordante con el artículo 18 del reglamento de las disposiciones tributarias contenidas en esta última citada ley, aprobado por el Decreto Supremo Nº 103-99-EF, se estableció que la importación de bienes destinados al consumo en la Amazonía se encuentra exonerada del impuesto general a las ventas. La recurrida sostiene que con el Decreto Supremo Nº 353-84-EFC[4], se estableció la vigencia de las modificaciones al Arancel Común del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, y en su artículo 4 se dispuso que: **Las empresas ensambladoras autorizadas** de la zona de aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938, podrán ingresar al país acogiéndose a la operación aduanera de tránsito las partes y piezas, incluso los paquetes desarmados sistema CKD con destino a dicha zona, gozando de lo establecido en el referido Protocolo. **3.4** En el considerando quinto, la sentencia impugnada señala las normas legales aplicables sobre la autorización para realizar actividades de ensamblaje. Al respecto, la recurrida identifica el artículo 12 de la Ley Nº 23407 - Ley General de Industrias; el artículo 3 de la Ley Nº 26935 - "Ley sobre simplificación de procedimientos para obtener los registros administrativos y las autorizaciones sectoriales para el inicio de actividades de las empresas"; el Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, que aprueba el reglamento de organización y funciones - ROF del Ministerio de la Producción, el cual en su artículo 8 (inciso d) señala que el mencionado ministerio tiene, entre otras funciones, la de establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de transformación de los subsectores pesquería e industria, así como fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las mismas, incluyendo las actividades productivas que se desarrollen en las zonas francas, zonas de tratamiento especial y comercial y zonas especiales de desarrollo. **3.5** En el considerando sexto, la sentencia de vista expone los antecedentes administrativos que dieron origen a la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, que es materia de impugnación en el presente proceso. En el considerando sétimo, la recurrida realiza el análisis del caso en concreto, atendiendo los agravios del recurso de apelación. Precisa que la sentencia apelada no ha incurrido en falta de motivación y arriba a la conclusión —luego de analizar la normativa aplicable y los actuados— de que la empresa demandante no ha acreditado su condición de empresa ensambladora a la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883 (doce de febrero de dos mil diez), en concordancia con lo establecido por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC, por lo que afirma no cabe amparar la demanda. **3.6** Del examen a la sentencia impugnada, se advierte que ha expuesto las razones jurídicas y fácticas que sustentan su decisión de confirmar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda, y que ha absuelto los agravios expuestos en el recurso de apelación y analizado los medios probatorios ofrecidos que fundamentan su decisión. Conforme a lo anteriormente desarrollado en el presente considerando, no se aprecia que la recurrida haya incurrido en la infracción procesal denunciada de contravención del debido proceso y debida motivación de las resoluciones, contenidos en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución, por lo que corresponde sea desestimado este extremo del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandante. No obstante lo antes señalado, ello no implica la convalidación de las premisas normativas en que se fundamenta la sentencia de vista, las mismas que se analizarán al desarrollar las infracciones de carácter material. Por lo anteriormente expuesto, el recurso de casación de la empresa recurrente resulta **infundado** en este extremo. **Cuarto: Sobre la infracción normativa por contravención del principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y en el artículo VIII del título preliminar del Código Tributario 4.1** Antes de emitir pronunciamiento respecto a las infracciones de carácter material denunciadas por la parte recurrente, corresponde establecer las premisas fácticas establecidas por las instancias de mérito: **i)** Con fecha doce de febrero de dos mil diez, PICON S.A.C. —mediante su agente de aduanas JYN ASOCIADOS S.A.— numeró en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883. Posteriormente, solicitó la regularización de dicha Declaración Aduanera de Mercancías al amparo del Decreto Supremo Nº 015-94-EF - Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano y la Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. **ii)** Mediante Resolución de Intendencia Nº 217-3T00O0/2011- 000411, se resolvió declarar improcedente la regularización de la citada Declaración Aduanera de Mercancías y declarar definitivo el importe de cuatro mil seiscientos dos soles con cero céntimos (S/ 4,602.00) en el marco de la Ley Nº 27037. Contra esta resolución, la demandante interpuso recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado mediante la Resolución de Intendencia Nº 217-3T0000/2012-000303, la cual fue apelada y resuelta a través de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11905-A-2012, que declaró nulas las resoluciones de Intendencia antes mencionadas. **iii)** En cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11905-A-2012, se emitió la Resolución de Intendencia Nº 217-3T0O00/2013-O0O0981, que declaró improcedente la solicitud de regularización de la Declaración Aduanera de Mercancías en mención y declaró definitivos los importes antes mencionados. Dicha resolución fue apelada, y ello dio origen a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17242-A-2013, que declaró nulo el concesorio de apelación. **iv)** En ejecución de dicho fallo, mediante Resolución de Intendencia Nº 217-3T0000/2015-000167, del veinticinco de febrero de dos mil quince, se atendió el recurso de reclamación interpuesto por la demandante declarándose declarar infundado el mismo. Dicha resolución objeto de un recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05189-A-2015, con la cual determinó revocar la Resolución de Intendencia Nº 217-3T0000/2015-000167. **v)** Nuevamente, en cumplimiento de este último fallo del Tribunal Fiscal, la autoridad aduanera emitió la Resolución de Intendencia Nº 217-3TUOOO/2016-000411, que resolvió declarar improcedente las solicitudes de regularización presentadas por PICON S.A.C. y a su vez declaró definitivo el importe de cuatro mil seiscientos dos soles con cero céntimos (S/. 4,602.00), en el marco de la Ley Nº 27037. **vi)** Contra esta resolución de Intendencia, la recurrente interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal a través de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, la cual confirmó los actos administrativos emitidos por SUNAT y es esta la resolución del Tribunal Fiscal cuya nulidad se solicita mediante la presente demanda. **4.2** Corresponde establecer el marco normativo pertinente aplicable a la presente controversia. **4.2.1** Sobre el particular, cabe señalar que la suscripción del Convenio PECO entre los Estados peruano y colombiano, se dio con la finalidad de promover las actividades económicas, industriales y comerciales de las respectivas áreas amazónicas de dichos países. De esta forma, en el artículo VI del Protocolo Modificatorio de mil novecientos ochenta y uno, se indicó que: "Los dos países convienen en exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones de productos originarios y provenientes de los territorios en que tiene aplicación el presente Protocolo", mientras que, en el numeral 75 del artículo VIII del mismo texto legal, se estableció que todas las mercancías que se importen a los territorios en los cuales es aplicable el Convenio PECO, esto es, los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali, "[…] deberán cumplir con los requisitos señalados por las legislaciones nacionales de cada país". **4.2.2** Por su parte, en el artículo 3 de la Ley Nº 27037, se estableció que, para efectos de sus alcances, la Amazonía comprende: "a) Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. […]". Asimismo, en la tercera disposición complementaria de dicha ley, se indicó que: "[…] la importación de bienes que se destine al consumo en la Amazonía, se encontrará exonerada del Impuesto General a las Ventas […]", lo cual es concordante con el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 103-99-EF, que ratifica la exoneración del IGV para aquellos bienes importados que se destinen al consumo en la Amazonia, solo respecto de los especificados y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio PECO. **4.2.3** Por tanto, la administración aduanera, de acuerdo a las

facultades reguladas en el artículo 165 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo Nº 1053), podrá ejercer las acciones de control, antes y durante el despacho de las mercancías, con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero, requiriendo toda la información necesaria relacionada con las operaciones de comercio exterior. **4.2.4** Por otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 353-84-EFC, publicado el quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, se estableció la vigencia de las modificaciones al arancel común del Protocolo Modificatorio del Convenio PECO; en el artículo 4 de dicho decreto se indicó: **Artículo 4**.- Las **empresas ensambladoras autorizadas** de la zona de aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano - Colombiano de 1938, **podrán ingresar al país acogiéndose** a la operación aduanera de tránsito las partes y piezas, incluso los paquetes desarmados sistema CKD con destino a dicha zona, **gozando de lo establecido en el referido Protocolo**. [Énfasis nuestro] Esto es, para acceder a los beneficios tributarios del Convenio PECO, se debe de cumplir el requisito fijado expresamente en el precitado artículo 4. Para tal efecto, resulta de importancia referirnos a la Ley Nº 23407 - Ley General de Industrias, vigente desde el veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos, ya que conforme a lo previsto en el artículo I del título preliminar: "La presente Ley establece las normas básicas que promueve y regulan la actividad industrial manufacturera de conformidad con el Título III de la Constitución Política" [énfasis nuestro]; lo cual, a su vez, implica que —de acuerdo al segundo párrafo del artículo VII del título preliminar— la aplicación de normas complementarias dictadas para promover el desarrollo de los sectores industriales manufactureros, no podrá reducir los incentivos que la Ley Nº 23407 otorga. Precisamente la acotada norma coadyuva a la comprensión de los alcances del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC, respecto a la acreditación de la condición de "empresa ensambladora autorizada". Esto porque el artículo 12 contiene la obligación de la inscripción de todos los productos industriales manufacturados en el país en el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN; y porque, según el artículo 10, todos los interesados tienen acceso a tal registro; disposiciones que se alinean a los objetivos regulados en el artículo 1 de la anotada Ley General de Industrias. Sin embargo, el RPIN fue eliminado con el Decreto Legislativo Nº 1004, vigente desde el cuatro de mayo de dos mil ocho, que reguló: Artículo 1.- **Elimínese el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN, creado mediante Ley Nº 23407**. En tal sentido, las empresas podrán comercializar libremente los productos manufacturados en el país sin necesidad de la inscripción en tal registro. Artículo 2.- Deróguese el **numeral 2 del artículo 10, el artículo 12** y el artículo 21 de la Ley Nº 23407, así como toda norma que se oponga al presente Decreto Legislativo. [Énfasis nuestro] De la parte considerativa del citado decreto legislativo, se desprende que este busca apoyar la facilitación del comercio, mejorar el marco regulatorio y promover la inversión privada. **4.3** Por su parte, la línea argumental de la empresa recurrente se encuentra dirigida a cuestionar que la sentencia de vista ha incurrido en contravención del principio de legalidad al pedir requisitos no contemplados, como es la licencia de funcionamiento como empresa ensambladora otorgada por la municipalidad, cuando la municipalidad no es la institución legitimada por ley para acreditar la condición de empresa ensambladora, sino que lo es PRODUCE, como institución autorizada para regular las normas jurídicas respecto de las empresas ensambladoras. **4.4** Resulta pertinente citar las normas denunciadas por la empresa recurrente, las cuales indican expresamente lo siguiente: Constitución Política del Perú **Artículo 74.-** Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. **Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS** Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT- tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. **4.5** Con la finalidad de determinar si la sentencia de vista ha incurrido en las infracciones normativas denunciadas, corresponde acudir a sus fundamentos: **4.5.1** Advertimos que en el acápite 7.9 del considerando séptimo de la recurrida, la misma absuelve los agravios de la empresa demandante afirmando que la exigencia del requisito de ser una empresa ensambladora autorizada se cumple con la licencia de funcionamiento, lo cual no vulnera el principio de legalidad. Al respecto, en el acápite 7.9 del considerando séptimo de la recurrida, se expone lo siguiente: **7.9. En relación al agravio (ii) de la empresa recurrente**, se tiene que, conforme se advierte de los antecedentes del caso en la instancia administrativa y judicial, en relación al argumento de la recurrente consistente en señalar que la juez realiza un análisis subjetivo y sesgado dando por cierto la afirmación de SUNAT y del Tribunal Fiscal respecto de que la licencia de funcionamiento constituye un requisito para la devolución de los derechos al importador, cuando la condición de ensambladora se acreditaba solo con el RPIN, derogado por el D.L. Nº 1004, norma que se dio con la finalidad de reducir formalidades, lo que género que la Administración exigiera un requisito no previsto en norma alguna y por interpretación según su criterio exigió la licencia de funcionamiento como requisito, lo cual fue confirmado por la juez de la causa, por lo que se contravendría la norma VIII del TPCT, que constituye el principio de legalidad tributario y determina que los tributos o requisitos o exigencias que demanden cumplimiento para acogerse a un beneficio o para cumplir una obligación tienen que estar contenidos en una norma jurídica determinada (principio de legalidad); al respecto, se tiene que del estudio de la resolución venida a grado no se evidencia vulneración al principio de legalidad, toda vez que la A-quo fundamentó su decisión, arribando a la conclusión que, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal han resuelto conforme al ordenamiento jurídico, en la medida que no se ha requerido a la demandante el cumplimiento de requisitos no establecidos en el Decreto Supremo Nº 353-84-EFC y las demás normas relacionadas al PECO, pues únicamente se ha requerido la acreditación de la autorización de la empresa que realizó el proceso de ensamblaje de las mercancías importadas. **4.5.2** Asimismo, en el acápite 7.10 del mismo considerando (página 14), la sentencia impugnada concluye que, a la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883 (doce de febrero de dos mil diez), la empresa recurrente no contaba con licencia para el giro de ensamblaje de vehículos, la cual le fue otorgada con posterioridad. Lo antes indicado se aprecia en el mencionado acápite de la recurrida, que precisa lo siguiente: **7.10.** En ese contexto, como se ha verificado a lo largo del proceso contencioso, la controversia materia de análisis se centra en la exigibilidad de acreditar la condición de empresa ensambladora autorizada, lo cual no ha sido acreditado por la recurrente, conforme se desprende del requerimiento efectuado por la Administración Aduanera a la Municipalidad de Coronel Portillo (Jurisdicción donde se encuentra el domicilio fiscal de la accionante) información de las licencias de funcionamiento que pudiera tener PICON S.A.C., en calidad de empresa ensambladora. Dicha comuna, mediante Oficio Nº 1281-2015-MPLP/A de fecha 21 de diciembre de 2015, informó a la Administración Aduanera que, con fecha **02 de abril de 2008**, se otorgó la Licencia Municipal de Funcionamiento Nº 181-08 a PICON S.A.C. para el giro de negocio: Venta de vehículos menores, repuestos y otros. Dicho giro de negocio fue **ampliado** recién el **12 de diciembre de 2011**, para el giro de "ENSAMBLAJE Y VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MAYORES Y MENORES", en su local ubicado en la Av. Alameda Perú Nº 345, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco. Por lo tanto, bien es cierto, la demandante sí contaba con licencia; no obstante, se aprecia de autos que dicha licencia fue posterior a la fecha de numeración de la DAM 118-2010-10-041883 (12 de febrero de 2010). Por consiguiente, **se verifica objetivamente que la accionante no acreditó tal condición durante el procedimiento de la regularización y tampoco durante el proceso contencioso** derivado de la improcedencia de las solicitudes de regularización, tal como se observa de actuados […]. **4.6** Al respecto, es importante señalar que, conforme a

nuestro Estado Constitucional de Derecho, los tributos se establecen por norma legal, de conformidad con el principio de legalidad en materia tributaria, previsto en el artículo 74 de la Constitución. Asimismo, conforme a la norma IV del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se establece que, por ley o por decreto legislativo en caso de delegación, se crean, modifican y suprimen los tributos, se señala —entre otros— el hecho generador de la obligación tributaria, el acreedor tributario y el deudor tributario, y se concede exoneraciones y beneficios tributarios. En materia tributaria, el principio de legalidad implica, pues, que la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo debe estar sometida no solo a las leyes pertinentes, sino y principalmente, a lo establecido en la Constitución[5]. El principio de legalidad, en opinión de Guzmán Napurí[6], es sin lugar a dudas el principio más importante del derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas —y en general todas las autoridades que componen el Estado— deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas dichas facultades, en concordancia con lo establecido en el artículo IV, inciso 1, literal 1.1, del título preliminar de la Ley Nº 27444. Este mismo autor continúa señalando que "la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa)[7]. La discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual es consistente con la moderna teoría administrativa, e incluso, con reiterada jurisprudencia, en especial la emitida por el Tribunal Constitucional"[8]. En la presente ejecutoria, se ha desarrollado en el acápite 4.2 que la creación del RPIN, mediante la Ley Nº 23407, coadyuvaba a la verificación del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC, porque permitía que las entidades administrativas implicadas corroboren si la empresa que pretendía acogerse a los beneficios previstos en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano acreditaba o no su condición de "empresa ensambladora autorizada". Sin embargo, el anotado registro estuvo vigente desde el veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos, y fue derogado el cuatro de mayo de dos mil ocho, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1004. En tal sentido, resulta posible colegir que a la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883 (doce de febrero de dos mil diez), si bien no existía norma que prevea expresamente los requisitos que se debían cumplir para la acreditación de la condición de "empresa ensambladora autorizada", resultaba trascendental que, en mérito al principio de verdad material, la administración aduanera realizara la verificación de los diversos medios probatorios que permitiesen acreditar que, en efecto, la empresa recurrente ostentaba la condición de "empresa ensambladora autorizada". Cabe precisar que los medios probatorios a requerir resultan ser distintos al Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN, por cuanto el mismo fue eliminado al entrar en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1004, por lo que, a la fecha de numeración de la referida Declaración Aduanera de Mercancías, a la recurrente no le era exigible tal requisito a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC. Para Guzmán Napurí, el principio de verdad material indica que, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, conforme lo establece el artículo IV, inciso 1, literal 1.11 del título preliminar de la Ley Nº 27444. Este autor afirma al respecto que "la Administración no debe contentarse con lo aportado por el administrado, sino que debe actuar, aun de oficio, para obtener otras pruebas y para averiguar los hechos pertinentes en la búsqueda de la verdad material u objetiva, ya que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima sobre la verdad formal"[9]. Del análisis del acto impugnado en el presente proceso judicial, advertimos que la propia Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, del seis de enero de dos mil diecisiete, reconoce la falta de regulación del sector correspondiente a fin de que se acredite la autorización de empresa ensambladora ante la derogatoria del RPIN mediante Decreto Legislativo Nº 1004. Conforme se aprecia del último párrafo de su segunda página, el tribunal administrativo explica lo siguiente: […] a fin de superar la falta de regulación por parte del Ministerio de la Producción sobre autorización de empresas ensambladoras, lo que constituye un vacío legal para cumplir lo negociado en el marco del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano y su Protocolo Modificatorio; la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976, que regula el otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento, establece la competencia de las autoridades municipales a efecto de determinar la compatibilidad de uso señalado por el interesado y que es necesaria para el otorgamiento de las licencias municipales de funcionamiento; por lo que resulta que son las Municipalidades las que verifican el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado para luego determinar si es compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente; […] Se aprecia con ello que, al requerir la licencia de funcionamiento, se ha establecido un requisito no previsto para acreditar la condición de empresa ensambladora autorizada, lo cual genera vulneración al principio de legalidad. Por su parte, la sentencia de vista tiene determinado en la presente controversia que, a la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2010-10-041883 (doce de febrero de dos mil diez), la empresa recurrente no contaba con licencia de funcionamiento para realizar la actividad de ensamblaje, con lo que concluye que la accionante no acreditó su condición de "empresa ensambladora autorizada", pero no advirtió que, con arreglo al principio de legalidad, dicho requisito no podía ser acreditado por la empresa accionante con la licencia de funcionamiento, por no ser la municipalidad correspondiente la entidad competente para otorgar la autorización para realizar actividades de ensamblaje, en los términos que expone el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84- EFC. Cabe señalar que las normas que conceden beneficios son de aplicación excepcional, por lo que no procede para su aplicación efectuar una interpretación extensiva como la establecida por la sentencia de vista, en el sentido de que la condición de empresa ensambladora autorizada se acredita con la licencia de funcionamiento, lo cual claramente vulnera la norma VIII del Texto Único Ordenado del Código Tributario, que proscribe que en vía de interpretación se extiendan las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados en la ley. Por ello, ante la falta de regulación por parte del Ministerio de la Producción respecto de la autorización a las empresas de ensamblaje, corresponde que la administración aduanera verifique diversos medios probatorios que lleven a determinar si, a la fecha de numeración de la citada Declaración Aduanera de Mercancías, la empresa recurrente ostentaba la condición de "empresa ensambladora autorizada", a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 353-84-EFC. En tal sentido, se observa que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa por contravención del principio de legalidad contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y en el artículo VIII del título preliminar del Código Tributario, por lo que corresponde declarar **fundado** el recurso de casación de la empresa recurrente. **Actuación en sede de instancia 4.7.** Al haberse estimado el recurso de casación de la parte demandante por esta última causal, corresponde casar la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, revocar la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda en todos sus extremos, y, reformándola, **declarar fundada la demanda** en el extremo referido a la pretensión principal, e infundada respecto a la pretensión accesoria. En tal sentido, corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 2173T0000/2016-000411, emitida el quince de julio de dos mil dieciséis por la Intendencia de Aduana de Pucallpa; igualmente, corresponde declarar la nulidad de la mencionada Resolución de Intendencia Nº 2173T0000/2016-000411, por lo que debe la administración emitir nueva resolución con arreglo a lo dispuesto en la presente ejecutoria suprema. DECISIÓN Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 31591, **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa PICON S.A.C., mediante escrito del doce de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución número treinta, del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Actuando en sede de instancia, **REVOCARON** la sentencia apelada, expedida mediante resolución número veintitrés, del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, que declaró infundada la demanda, y, reformándola, declararon fundada la demanda en el extremo referido a la

pretensión principal e infundada respecto a la pretensión accesoria. Por tanto, **DECLARARON** la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00177-A-2017, que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 217 3T0000/2016-000411, emitida el quince de julio de dos mil dieciséis por la Intendencia de Aduana de Pucallpa; igualmente, **DECLARARON** la nulidad de la mencionada Resolución de Intendencia Nº 2173T0000/2016-000411, por lo que debe la administración emitir nueva resolución con arreglo a lo dispuesto en la presente ejecutoria suprema; en los seguidos por la empresa PICON S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a Ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Cabello Matamala**. SS. BURNEO BERMEJO, BUSTAMANTE ZEGARRA, **CABELLO MATAMALA,** DELGADO AYBAR, TOVAR BUENDÍA.

---

1 **Constitución Política del Perú**
[…]
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

2 El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del derecho al debido proceso, consagrado en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional. Exige que en todas las instancias judiciales se cumplan necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden público que han sido establecidos, a fin de generar que todas las personas estén en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

3 Corte IDH (2009). Caso Tristán Donoso vs. Panamá; párr. 153.

4 Publicado el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

5 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2302-2003-AA/TC LIMA, del trece de abril de dos mil cinco

6 GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2011). Tratado de la administración pública y del procedimiento administrativo. Lima, Ediciones Caballero Bustamante; p. 35.

7 El autor cita en este punto a BELADIEZ ROJO, Margarita (2000). "La vinculación de la Administración al derecho". En Revista de Administración Pública, Nº 153.

8 GUZMÁN NAPURÍ, op. cit., p. 36.

9 Ibidem, p. 61.

C-2245460-27

CASACION Nº 6745-2019 LIMA

Lima, dos de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; el expediente judicial y el cuaderno de casación; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **sucesión de Gavino Julca Quispe,** mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho (fojas cuatrocientos noventa y tres a cuatrocientos noventa y nueve del expediente principal[1]), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número treinta y uno de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas cuatrocientos ochenta y dos a cuatrocientos ochenta y ocho), emitida por la Quinta Sala Contencioso Administrativa Laboral Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **confirmó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número veintiséis, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos veinte a cuatrocientos treinta y seis), que **declaró infundada la demanda en todos sus extremos**. En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. **Formalidad del Recurso de Casación SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su texto entonces vigente, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Superado el análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable en autos, que sus fines se encuentran limitados a: **(i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **(ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil, por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, aplicable en autos, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Sobre los requisitos de procedencia **QUINTO:** Asimismo, el modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto vigente en autos, establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **sucesión de Gavino Julca Quispe**, atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Quinta Sala Contencioso Administrativa Laboral Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** el recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial por interposición de la casación, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese contexto, y como se ha adelantado, el recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo. **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, aplicable al proceso, se tiene que la recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar infundada la demanda que interpuso, impugnándola mediante recurso de apelación (fojas tres mil doscientos dos a tres mil cuatrocientos veintiocho), por lo que ha satisfecho este requisito; y, respecto al cumplimiento de la exigencia prevista en el inciso 4 del mismo artículo y Código, del recurso de casación se tiene que el pedido casatorio es anulatorio en lo principal y revocatorio como subordinado. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** En el presente caso, la parte recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de la siguiente causal: Infracción normativa de los artículos 11 y 70 del Decreto Ley Nº 19990 y del literal d) del artículo 7 de la Resolución Suprema

Nº 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional. Sostiene que la sentencia de vista incurre en error al señalar que los medios probatorios presentados por su parte no permiten generar convicción sobre la vinculación del demandante con la entidad empleadora, no obstante que el artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, en su tercer párrafo, establece que son medios probatorios idóneos y suficientes para demostrar periodos de aportaciones, los certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, no necesariamente de manera conjunta, sino cualquiera de ellos. En tal sentido, se incurre en error al señalar que los documentos presentados no son prueba suficiente para acreditar la veracidad de los aportes realizados, cuando es la propia ley que le otorga el valor probatorio a la documentación presentada, lo que contraviene el precedente vinculante establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 4762-2007-PA/TC y resolución aclaratoria. De otro lado, el artículo 11 del citado Decreto Ley establece que los empleadores están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios, siendo que en atención a lo dispuesto en el literal d) del artículo 7 de la Resolución Suprema Nº 306-2001-EF, la Oficina de Normalización Previsional debe efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley. **NOVENO:** En línea con la función de calificación que a esta Corte Suprema corresponde en la presente etapa, y de conformidad con los artículos 384 y 388, numeral 2, del Código Procesal Civil, se debe evaluar que se haya descrito con claridad y precisión la infracción de carácter normativo que se denuncia, atendiendo a que el examen que habilita dicho medio impugnatorio excepcional se debe circunscribir a una evaluación jurídica del caso, que a su vez se realizará sobre la base de los hechos ya determinados por las instancias de mérito y luego de la valoración de los medios probatorios. En efecto, queda claro que en sede casatoria no se puede ingresar a verificar nuevamente la ocurrencia de los hechos ya acreditados o descartados a nivel de instancia, y menos aún corresponde realizar una nueva valoración de los medios probatorios ya merituados, precisamente, con la finalidad de demostrar o desvirtuar tales hechos, pues ello no es la finalidad del recurso de casación, orientado a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **DÉCIMO:** Revisados los argumentos que sustentan el recurso de casación, se advierte que la parte demandante pretende un reexamen de los medios probatorios aportados por su parte, a fin de establecer que aquellos sí son idóneos para acreditar un mayor tiempo de servicios prestados a diversos empleadores y, con ello, un importe superior en la respectiva pensión de jubilación. No obstante, no considera que la demanda ha sido declara infundada por insuficiencia probatoria, no solo porque el actor ha aportado como medios de prueba documentos en copias simples, sino fundamentalmente porque no se ha ofrecido documentación adicional que los respalde. **10.1.** Además, el Colegiado Superior advierte que varios de los documentos presentados se refieren al reconocimiento de aportes adicionales sobre periodos que ya se encuentran reconocidos, todo lo cual importa una valoración probatoria de los instrumentos con los que se ha pretendido dar soporte a la pretensión de la demanda, por parte de las instancias de mérito, y que, insistimos, no pueden ser materia de reexamen por este Supremo Colegiado sin desvirtuar la finalidad y alcances del recurso extraordinario interpuesto. **10.2.** Por lo indicado, la referida causal no satisface las exigencias previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, deviniendo en **improcedente. DECISIÓN:** Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable en autos, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, **sucesión de Gavino Julca Quispe,** mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho (fojas cuatrocientos noventa y tres a cuatrocientos noventa y nueve), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número treinta y uno de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas cuatrocientos ochenta y dos a cuatrocientos ochenta y ocho), emitida por la Quinta Sala Contencioso Administrativa Laboral Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por la sucesión de Gavino Julca Quispe contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. **YAYA ZUMAETA,** CABELLO MATAMALA, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

[1] En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

C-2245460-28

CASACIÓN Nº 44387-2022 LAMBAYEQUE

Lima, siete de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; el expediente judicial digital y cuaderno de casación; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Custodio Saavedra Matril,** el catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas trescientos dos a trescientos trece del expediente judicial digitalizado[1]), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número catorce del dieciocho de febrero de dos mil veintidós (fojas doscientos ochenta y nueve a doscientos noventa y ocho), emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, **que revocó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número diez de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas doscientos cuarenta y ocho a doscientos cincuenta y siete), que **declaró fundada en parte** la demanda; y **reformándola la declaró infundada en todos sus extremos.** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. Formalidad del Recurso de Casación **SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su texto entonces vigente, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Como anotación previa al análisis de los requisitos de procedencia, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, considerando que el recurso de casación es formal y excepcional, debe estar estructurado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto es en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo responsabilidad del justiciable -recurrente- adecuar los agravios que invoca a las causales que para dicha finalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal, desde que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el Recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo, no

pudiendo subsanarse de oficio los defectos incurridos en su formulación. **Sobre los requisitos de procedencia QUINTO:** El modificado artículo 388 del Código Procesal Civil establece como requisitos de procedencia del recurso de casación, en su texto aplicable al caso, los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por el demandante, **Custodio Saavedra Matril,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** la parte recurrente no ha adjuntado tasa judicial por interposición de la casación, al encontrarse exonerado en virtud de lo establecido en el literal i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese contexto, y como se ha adelantado, el Recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo. **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, se tiene que a la parte recurrente no le es exigible este requisito, al ser la sentencia de primera instancia favorable a sus intereses, al declarar fundada en parte la demanda interpuesta. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** El recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de las siguientes causales: **a) Infracción normativa del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29711, así como de los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil.** Sostiene que del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990 se desprende como regla que es al empleador a quien corresponde la retención y pago de las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, en tanto que al trabajador le corresponde acreditar el vínculo laboral para considerar el periodo de labores como periodos de aportaciones efectivas al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), de manera que el requisito relativo a las aportaciones dentro del SNP, en lo que respecta al trabajador, se tiene por cumplido a partir de la comprobación del vínculo laboral entre este y su empleador, sin que sea de cargo de aquel probar si se efectuaron o no las aportaciones por parte del obligado legalmente para ello. Sin embargo, refiere que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) no le reconoce sus aportes, desconociéndole 20 años de labores. Refiere que ha trabajado en la Hacienda Carniche y Potrerillo Sociedad Anónima desde el uno de enero de mil novecientos cincuenta y siete hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, periodo que acredita según indica con certificado de trabajo, récord de trabajo suscrito por su empleador, boletas de pago, declaración jurada de su empleador, oficio en el que se informa sobre sus labores, partida registral, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), acta de entrega y recepción de planillas por parte de la ONP y otros, Hacienda que posteriormente se transformó en la Cooperativa Agraria de Trabajadores Carniche Ltda. Nº 019-B-II, en donde trabajó desde el tres de enero de mil novecientos setenta y tres hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis, como obrero asegurado en el libro de planillas, lo que acredita según refiere con los documentos señalados. Asimismo, indica que ha trabajado en la Comisión de Administración de Adjudicación Provisional del Predio La Ramada desde el uno de enero de mil novecientos setenta al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, y posteriormente desde el uno de enero de mil novecientos setenta y siete al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho como socio cooperativista en la Cooperativa Agraria de Producción Independiente Ltda Nº 006-II-AA, y que con el Contrato de Adjudicación de Propiedad de su Parcela que la empresa le entregó por sus beneficios sociales al momento de la parcelación. Agrega que se ha incumplido con aplicar la Casación 68-2011-Lambayeque y otros. **b) Infracción de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.** Manifiesta que la sentencia de vista adolece de vicio de motivación que afecta el debido proceso, en la medida que no se ha compulsado adecuadamente la prueba en su conjunto, lo que trajo como consecuencia que no se reconozca el derecho fundamental a la pensión en su perjuicio, y que la falta de motivación y la no valoración de manera conjunta y razonada de los medios probatorios por parte de la Sala Superior vulnera la garantía constitucional del debido proceso. **OCTAVO:** En lo concerniente a la causal resumida en el **acápite a)** del considerando inmediato anterior, se tiene que la recurrente cuestiona esencialmente el análisis valorativo que realizó la Sala Superior para el otorgamiento de pensión de jubilación, pues sus argumentos están estructurados de forma tal que el recurso es interpuesto como si fuera uno de instancia, orientado más bien a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, al sostener principalmente que la demandada no le reconoce sus aportes, desconociéndole 20 años de labores, cuando ha trabajado para la Hacienda Carniche y Potrerillo Sociedad Anónima, que posteriormente se transformó en la Cooperativa Agraria de Trabajadores Carniche Ltda. Nº 019-B-II, y en la Comisión de Administración de Adjudicación Provisional del Predio La Ramada y posteriormente en la Cooperativa Agraria de Producción Independiente Ltda Nº 006-II-AA, haciendo mención a sus medios probatorios presentados. **8.1.** Tal propósito evidentemente no se condice con la naturaleza ni con los fines del recurso de casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, más todavía cuando la Sala Superior señaló que los medios probatorios presentados no causan convicción sobre la realización de labores efectivas para sumar años de aportación. **8.2.** Por tanto, no se advierte que la causal sea clara y precisa en relación al contenido y alcances de la sentencia cuestionada, ni demuestra la incidencia directa que ella tiene sobre la misma, incumpliendo las exigencias previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, por lo que deviene en **improcedente. NOVENO:** Respecto a la causal descrita en el **acápite b)** del considerando séptimo de este pronunciamiento, tenemos que el debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia debidamente motivada. **9.1.** En este apartado, la recurrente sostiene que la Sentencia impugnada adolece de vicio de motivación, debiendo en ese sentido precisarse que uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, recogido en el inciso 5 del artículo 139 de nuestra Carta Magna, por el cual se garantiza a las partes involucradas en una controversia el acceso a una respuesta del juzgador, que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la justifiquen lógica y razonadamente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquéllos dentro del proceso. **9.2.** La recurrente alega, en concreto, que la sentencia de vista afecta el debido proceso, en la medida que no se ha compulsado adecuadamente la prueba en su conjunto, lo que trajo como consecuencia -a su decir- que no se reconozca el derecho fundamental a la pensión en su perjuicio, agregando que la falta de motivación y la no valoración de manera conjunta y razonada de los medios probatorios por parte de la Sala Superior, vulnera la garantía constitucional del debido proceso. **9.3.** Al respecto, de la revisión de la sentencia de vista se aprecia que la Sala Superior ha señalado que los documentos presentados no causan convicción sobre la realización de labores efectivas para sumar años de aportación, pues el certificado de trabajo no se encuentra respaldado por otra documentación contemporánea a la relación laboral y que no se cumple con acreditar los años de aportación necesarios para el otorgamiento de la pensión. **9.4.** A pesar de esta fundamentación la recurrente no expone de forma clara y precisa por qué este juicio valorativo de la Sala de mérito sería inapropiado o inidóneo para justificar la postura que se recoge en la resolución recurrida, de ahí que se advierte que recurrente señala una disconformidad con la valoración de los hechos y los medios de prueba que obran en autos, en particular, respecto del análisis efectuado sobre el caudal probatorio

ofrecido por los litigantes, cuyo examen sirvió de base a la Sala Superior para revocar la sentencia de primera instancia, pretendiéndose en puridad un reexamen (revaloración) por este Supremo Tribunal sobre dicha cuestión, lo que es ajeno a la función nomofiláctica del recurso extraordinario de casación, cuales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil. Así, y como se ha adelantado, la causal examinada no es clara ni precisa en relación con el contenido y alcances de la sentencia cuestionada, ni demuestra la incidencia directa que ella tiene sobre la misma decisión cuestionada, incumpliendo las exigencias previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que deviene en **improcedente. DÉCIMO:** Sin perjuicio de lo glosado, es pertinente reiterar que el recurso extraordinario de casación es uno eminentemente formal y excepcional. Tal línea de formalidad necesaria ha sido manifestada también por el Tribunal Constitucional nacional en la sentencia del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, recaída en el expediente Nº 00802-2020-PA/TC, el cual precisa que: 19. Ahora bien, corresponde dejar establecido que **la casación,** aun cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. Y es extraordinario porque su viabilidad **se encuentra circunscrita solo a determinadas resoluciones judiciales y por específicas causales legalmente preestablecidas, y porque en su formulación deben satisfacerse requisitos de forma que, en contraste con los recursos ordinarios, resultan ser altamente especializados, de modo tal que impone como carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso.** […] 21. En relación […], esto es, **demostrar la incidencia directa de la infracción normativa denunciada sobre la decisión impugnada, cabe destacar que, atendiendo al carácter eminentemente formal del recurso de casación, dicho requisito debe encontrarse expresamente desarrollado en una sección específica dentro del cuerpo del recurso.** Así, para el juez ordinario que califica su procedencia, debe ser evidente dicho desarrollo, lo cual descarta la posibilidad de dar por satisfecho este requisito, solo porque supuestamente se encontraría implícito en la argumentación de fondo del propio recurso. 22. Cabe también precisar que cuando la norma exige demostrar la incidencia de la infracción normativa en la decisión impugnada, ello se refiere a su influjo o repercusión en la parte dispositiva del fallo, alterando el sentido de este. Así, resulta tan importante la verificación de este requisito para el diseño del sistema casatorio, que de ausentarse -sea porque no existe tal incidencia o sea por negligencia del recurrente-, el recurso resulta inviable, conforme a lo establecido en la propia ley. [Énfasis nuestro] DECISIÓN: Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en su texto aplicable al caso, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Custodio Saavedra Matril,** el catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas trescientos dos a trescientos trece), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número catorce del dieciocho de febrero de dos mil veintidós (fojas doscientos ochenta y nueve a doscientos noventa y ocho), emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por el demandante, Custodio Saavedra Matril, con la demandada Oficina de Normalización Previsional, sobre otorgamiento de pensión. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. Y**AYA ZUMAETA, B**URNEO BERMEJO, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.YLC/led

[1] En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

C-2245460-29

CASACIÓN Nº 4789-2022 AREQUIPA

Lima, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés

VISTOS; el expediente judicial y cuaderno de casación formado en este Supremo Tribunal; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Víctor Alberto Fernández Roig,** el veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y uno del expediente judicial digital[1]), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número trece del seis de abril de dos mil veintiuno (fojas ciento veintiséis a ciento cuarenta y uno), emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, **que confirmó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número diez de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte (fojas cien a ciento diez), **que declaró infundada la demanda.** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. **Formalidad del Recurso de Casación SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su texto entonces vigente, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Superado el análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable en autos, que sus fines se encuentran limitados a: **(i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **(ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil, por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, aplicable en autos, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. **QUINTO:** Asimismo, el modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Sobre los requisitos de procedencia **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por el demandante, **Víctor Alberto Fernández Roig,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** el

recurrente no ha acompañado la tasa judicial por interposición de la casación, al encontrarse exonerado de dicha exigencia, de acuerdo a lo regulado por el inciso i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese contexto, se tiene que el recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria y en su texto pertinente, se tiene que el recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar infundada la demanda interpuesta por su parte, impugnándola mediante recurso de apelación (fojas ciento quince a ciento veintidós) por lo que se ha satisfecho dicho requisito; y, respecto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso 4 del artículo 388 del mismo cuerpo normativo, del recurso se tiene que el pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** El recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de las siguientes causales: **a) Infracción normativa del artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990.** Sostiene que su solicitud versó sobre recálculo de pensión de jubilación por error aritmético, considerando que el otorgamiento debió hacerse según el cálculo de la remuneración de referencia; así, en su caso, debió aplicarse la normativa denunciada, sin que le sea aplicable el nuevo sistema de cálculo establecido por el Decreto Ley Nº 25967, que toma como referencia la remuneración de los últimos 36, 48 o 60 meses. Agrega que en este caso la Ley Nº 23908 no es una norma que establezca el cálculo de la pensión de jubilación, sino que creó el concepto de pensión mínima, ni establece la forma de determinar la remuneración de referencia, ya que el cálculo de la pensión se determina conforme con el artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990. De igual forma, se establecieron montos máximos de las pensiones, como el Decreto Supremo Nº 077-84-PCM, que precisaba que la pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) es el equivalente al 80% de la suma de 10 remuneraciones mínimas mensuales asegurables, con arreglo a las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 19990; por ello, el cálculo de la pensión de referencia debe ser conforme al artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990, por lo que el monto de la pensión otorgada por el Sistema Nacional de Pensiones es el resultante del sistema de cálculo establecido en cada modalidad de jubilación, el mismo que en ningún caso podía ser inferior al mínimo y/o superar el monto máximo, conforme a la propia norma rectora del sistema. **b) Infracción normativa del artículo 1236 del Código Civil.** Expone que se contraviene la normativa denunciada ya que, examinada a la luz del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, permite concluir que las remuneraciones y demás créditos pensionarios sufren una pérdida significativa de su capacidad adquisitiva, debido a la variación del signo monetario, por lo que debe actualizarse al valor de los créditos laborales a efectos que recuperen el carácter alimentario que intrínsecamente poseen, puesto que, habiendo desaparecido el sol oro, el inti y el inti millón, debido a la inflación u otros fenómenos de carácter económico, no es posible que la pensión de jubilación pierda capacidad adquisitiva hasta el punto –en muchos casos– de perder total significación económica. Tras haberse reconocido 25 años de aportaciones y emitirse la Resolución Nº 9369-2009-ONP/DPR.SC/DL19990, no se hace un recálculo de su pensión sobre sus 12 últimas remuneraciones, y lo que realiza la demandada es poner una cifra a su libre albedrío sin un sustento legal y/o contable, en contravención del ordenamiento legal. **NOVENO:** Con relación a la causal resumida en el **acápite a)** del octavo considerando de la presente resolución, el recurrente alega que su solicitud tenía como propósito el recálculo de su pensión de jubilación pues el aprobado contiene un error aritmético, señalando que, a su caso, resulta aplicable el método de cálculo previsto en el artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990 y no el dispuesto en la Ley Nº 23908, que no establece una fórmula de cálculo de la pensión de jubilación, sino que creó el concepto de pensión mínima, así como tampoco es aplicable el nuevo sistema de cálculo establecido por el Decreto Ley Nº 25967, añadiendo que el monto de pensión otorgada por el Sistema Nacional de Pensiones debe ser el resultado del sistema de cálculo establecido en cada modalidad de jubilación, el que en ningún caso podía ser inferior al mínimo y/o superar al monto máximo. **9.1.** En este punto, el recurrente obvia referirse a que, en sede de instancia, se determinó que el demandante presentó su solicitud de pensión de jubilación alegando que tenía la condición de asegurado facultativo independiente, el que exigía se le aplique, a su caso concreto, el método de cálculo contemplado en el artículo 74 del Decreto Ley Nº 19990, que establece cómo determinar la pensión de jubilación de este tipo de asegurados, aportaciones que además fueron reconocidas como tales en la respectiva hoja de liquidación que obra en los actuados administrativos, tal como se aprecia en el punto 10 de la parte considerativa de la sentencia de vista recurrida, bajo el siguiente texto: [...] la parte apelante - demandante alega que se debió calcular su remuneración de referencia conforme sus 12 últimas remuneraciones. Al respecto advertimos que el actor tiene la calidad de asegurado facultativo independiente, conforme se desprende de su Solicitud de jubilación, presentada con fecha 30 de enero de 1991, mediante la cual peticionó pensión de jubilación en calidad de facultativo independiente, conforme se verifica del archivo digital a88805068198-028, páginas 21 y 22 del expediente administrativo, y de la Hoja de Liquidación de fojas 10; por lo que para el cálculo de su remuneración de referencia correspondía que se le aplique lo establecido en el artículo 74 del D.L Nº 19990 que señala: 'El monto de las prestaciones para los asegurados facultativos a que se refiere el inciso a) del artículo 42 se determinará en base al ingreso de referencia, que es igual al promedio de los ingresos asegurable de los últimos sesenta meses y por los que se hubiese pagado aportaciones'. Por lo tanto, al verificarse que la demandada ha calculado la remuneración de referencia del demandante en base a sus últimos 60 meses de aportación, corresponde desestimar este argumento de apelación. **9.2.** En ese contexto, los argumentos expuestos por el recurrente buscan que esta Sala Suprema revise las cuestiones fácticas que ya fueron fijadas por las instancias de mérito, al sostener que debe aplicársele un método de cálculo distinto, previsto en la mencionada norma para los asegurados obligatorios que cesan de prestar servicios y que opten por la continuación facultativa, esto es, el artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990, pese a que esta norma no resulta aplicable a los asegurados facultativos independientes reconocidos en el inciso a) del artículo 4 de la mencionada Ley. En consecuencia, la casual bajo examen no supera la exigencia de claridad y precisión que prevé el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, en función a lo que se desprende de la decisión cuestionada, ni la demostración de la incidencia directa de tal infracción sobre la referida decisión, a que se contrae el numeral 3 de los mismos artículo y Código, por lo que deviene en **improcedente. DÉCIMO:** Respecto a la causal descrita en el **acápite b)** del octavo considerando de la presente resolución, conforme a los términos que respaldan el motivo de casación bajo revisión, se sostiene que la Sala Superior debió actualizar el valor de sus créditos laborales a efectos de que recuperen el carácter alimentario que intrínsecamente poseen, y que no es posible que la pensión de jubilación pierda capacidad adquisitiva hasta el punto de perder total significación económica, como en su caso, señalando que no se hizo un recálculo de su pensión sobre la base de sus 12 últimas remuneraciones, habiendo la entidad demandada puesto una cifra a su libre albedrío sin un sustento legal y/o contable, ello pese a haberle reconocido 25 años de aportaciones y emitirse la Resolución Nº 9369-2009-ONP/DPR.SC/DL19990. **10.1.** Sobre este particular, debemos precisar que en tales términos el recurso no fundamenta adecuadamente la infracción normativa denunciada, desde que la sentencia de vista evidencia un análisis de la norma denunciada y cómo esta es aplicable atendiendo a las disposiciones que regulaban el sueldo mínimo vital y, más tarde, el ingreso mínimo vital, las que permitieron a la entidad demandada otorgar al recurrente una actualización de su pensión de jubilación, conforme con los fundamentos expuestos en el punto 11 de la parte considerativa de la resolución recurrida: […] la parte apelante, se refiere a la aplicación del criterio valorista contenido en el artículo 1236 del Código Civil; al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 1889-2011-PA/TC, ha señalado que el mencionado artículo está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo. Así, en el caso de autos, al haberse producido la contingencia el 1 de enero de 1991, cuando la moneda era el inti millón, el monto a abonar fue actualizado con el equivalente al último sueldo mínimo vital, esto es el ingreso mínimo vital de S/.12.00 nuevos soles, establecido por el Decreto Supremo Nº 002-91-TR, que multiplicado por 3 resulta S/.36.00 nuevos soles; por lo que no corresponde su aplicación, debiendo desestimar este argumento de apelación. **10.2.** Del análisis de los argumentos expuestos en este punto del recurso de casación, se advierte que los mismos tampoco tienen

incidencia directa en el sentido de lo resuelto por la Sala de mérito, pues si bien pretenden justificar la pertinencia de la norma invocada para el caso concreto, se centra en sostener que debió calcularse su pensión de jubilación en base a sus 12 últimas aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, asunto vinculado con la alegada aplicación del artículo 73 del Decreto Ley Nº 19990, reseñada en el punto anterior de la presente resolución, sin establecerse con claridad cómo dicha norma sería aplicable y de qué manera su inaplicación supondría un desconocimiento de sus derechos por parte de la entidad demandada; en este sentido, el recurrente no ha cumplido con precisar cómo el glosado razonamiento de los Jueces Superiores resultaría incorrecto, a efectos de alegar, luego, que no se cumplido con la correcta aplicación de la enunciada norma material para la resolución de su caso en concreto. **10.3.** En esa perspectiva, lo argumentado por el casante en este extremo del recurso de casación, no permite dilucidar las razones por las que se considera que no ha sido aplicado dicho dispositivo legal y, desde esa óptica, la causal bajo revisión no supera la exigencia de claridad y precisión que prevé el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, como tampoco la demostración de la incidencia directa de la misma infracción sobre la decisión cuestionada, a que se contrae el numeral 3 de los mismos artículo y Código, por no contener el recurso desarrollo al respecto; en tal virtud, esta causal examinada también es **improcedente.** DECISIÓN: Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Víctor Alberto Fernández Roig**, el veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y uno), **contra la sentencia de vista** contenida en la resolución número trece del seis de abril de dos mil veintiuno (fojas ciento veintiséis a ciento cuarenta y uno), emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Víctor Alberto Fernández Roig contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa en materia previsional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. **YAYA ZUMAETA,** CABELLO MATAMALA, PEREIRA ALAGÓN, DELGADO AYBAR, LINARES SAN ROMÁN.

[1] En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

C-2245460-30

CASACIÓN Nº 45767 – 2022 LIMA

Lima, dos de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Oficina de Normalización Previsional – ONP,** de fecha trece de setiembre de dos mil veintiuno (folios 173 – 204 del Expediente Judicial Digitalizado[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, del quince de julio de dos mil veintiuno (folios 156 – 164), emitida por la Novena Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **confirmó** la sentencia apelada contenida en la resolución número nueve, del diecisiete de noviembre de dos mil veinte (folios 121 – 130), que declaró **fundada en parte** la demanda. **SEGUNDO:** Conforme a lo previsto en los artículos 34, inciso 3) sub numeral 3.1, y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS[2], concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente al caso de autos, se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio establecidos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a las modificaciones dispuestas por la acotada Ley Nº 29364[3]. **TERCERO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** ha sido interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; **iii)** fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificado a la entidad recurrente con la resolución impugnada; y, **iv)** no adjunta la tasa judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerada por ser una entidad del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 24 literal "g" del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación del recurso debe ser clara, precisa y concreta**;** debiendo indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. **QUINTO:** En cuanto a las causales del recurso, estas se encuentran contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se señala que: «El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos de procedencia del recurso: **i)** que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; así como, **iii)** demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, finalmente **iv)** indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** El recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia prevista en el citado artículo 388, numeral 1 del Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la parte recurrente interpuso recurso de apelación (folios 133 – 146), contra la sentencia de primera instancia, porque la misma le resultó adversa. Asimismo, respecto al numeral 4 del mencionado artículo la parte recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio. **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Sala Suprema distingue que se denuncian las siguientes causales casatorias: a) Infracción normativa del artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política del Perú Señala que los pronunciamientos de primera y segunda instancia acarrean una falta de motivación de las resoluciones judiciales en su forma de deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas y motivación sustancialmente incongruente, al indicar que la forma de cálculo de la remuneración de referencia señalada en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF, no es aplicable a los asegurados, sin embargo, no se analiza ni motiva debidamente por qué, no corresponde aplicar el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF, donde se señala que lo dispuesto en los artículos precedentes es de aplicación para la población afiliada al Sistema Nacional de Pensiones nacida con posterioridad al 01 de enero de 1947. **b) Infracción normativa del apartamiento inmotivado de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional contenidos en los expedientes números 03067-2007-PA/TC y 03258-2018-PA/TC** Sostiene que la Sala Superior omite señalar por qué se aparta de los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional contenidos en los expedientes números 03067-2007-PA/TC y 03258-2018-PA/TC, donde se señala que el Decreto Supremo Nº 099-2002-EF entró en vigor desde el 14 de junio de 2002 y es aplicable, de conformidad con su artículo 5 a los trabajadores que hayan nacido con posterioridad al 01 de enero de 1947, ya sea obligatorio o facultativo. **c) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF** Expresa que lo afirmado por Sala Superior no tiene sustento legal alguno, pues ha interpretado erróneamente el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF, norma que regula la manera de determinar y calcular la remuneración de referencia, monto que sirve de sustento inicial para el cálculo respectivo del monto pensionario. Es así que establece que la Remuneración de referencia es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 60 el total de remuneraciones asegurables percibidas por el asegurado en los últimos 60 meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes aportación, es decir, que el promedio a obtener se determina en base a los meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación. **d) Infracción normativa por contravención al artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú.** Refiere que la Sala Superior ha contravenido el artículo 2.2 de la Carta Magna, del derecho a la igualdad en aplicación de la Ley Previsional, al señalar que no es posible

determinar que lo regulado en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF, solo a los asegurados facultativos, ya que sería un acto discriminatorio que no es objetivo ni razonables, siendo esto así, no es posible aplicarla únicamente a los asegurados facultativos, discriminando a los obligatorios, ya que ambos realizan los mismos aportes y se le exigen los mismos requisitos para acceder a una pensión. **OCTAVO:** En relación a las infracciones descritas en los **literales a), b) y d)** del considerando anterior, esta Sala Suprema observa que la parte impugnante pretende que esta Sala Suprema realice un re examen de los hechos y de la prueba actuada, esto al señalar que el Decreto Supremo Nº 099-2002-EF es de aplicación a todos los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones nacidos con posterioridad al 01 de enero de 1947, con lo cual, se tiene que la demandante al haber nacido con posterioridad a dicha fecha, le es válidamente aplicable; sin tener en cuenta que dichos aspectos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los fines del extraordinario recurso de casación que establece el artículo 384 del Código Procesal Civil; deviniendo en **improcedentes** las causales referidas. **NOVENO:** Respecto a la infracción descrita en el **literal c)** del séptimo considerando, se observa que no se ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada; lo que significa que la referida infracción debe revestir un grado tal de transcendencia o influencia que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se modifique el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna; pretendiendo una modificación de la evaluación fáctica y jurídica establecida por la instancia de mérito con la subsecuente modificación del criterio vertido por el Ad quem, como si se tratara de un recurso de apelación, lo cual no es posible mediante el recurso de casación, razón por la cual deviene en **improcedente** la presente causal. **DÉCIMO:** Por lo que, se advierte que el presente recurso no cumple con los presupuestos para su procedencia conforme lo prescriben los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364; correspondiendo declarar la **improcedencia** del recurso casatorio. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Oficina de Normalización Previsional – ONP,** de fecha trece de setiembre de dos mil veintiuno (folios 173 – 204 del Expediente Judicial Digitalizado), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, del quince de julio de dos mil veintiuno (folios 156 – 164); **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por Odilia Quispe Inocente Vda de Inocente contra Oficina de Normalización Previsional – ONP, sobre acción contencioso administrativa; notifíquese por Secretaría y devolver los actuados. Interviene como **ponente la señora Jueza Suprema provisional Yalán Leal.** SS. YAYA ZUMAETA, CABELLO MATAMALA, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

1 Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

2 Antes previstos en los artículos 35 inciso 3 sub numeral 3.1, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.

3 Considerando que las modificatorias introducidas al Código Procesal Civil a través de la Ley Nº 31591, publicada el 26 de octubre de 2022, no son de aplicación al presente caso, por mandato de la Segunda Disposición Final del acotado Código.

C-2245460-31

CASACIÓN Nº 46591-2022 DEL SANTA

Lima, dos de noviembre de dos mil veintitrés

VISTO; el expediente judicial digital y el cuaderno de casación; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada **Oficina de Normalización Previsional (ONP),** el catorce de febrero de dos mil veintidós (fojas ciento noventa y tres a doscientos seis del expediente judicial digitalizado[1]), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas ciento sesenta y cinco a ciento setenta y uno), emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, **que confirmó la sentencia apelada de primera instancia** contenida en la resolución número ocho de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas ciento once a ciento veintitrés), **que declaró fundada en parte la demanda[2].** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. Formalidad del Recurso de Casación **SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su texto entonces vigente, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Como anotación previa al análisis de los requisitos de procedencia, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha previsto en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, aplicable en autos, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. **Sobre los requisitos de procedencia QUINTO:** El modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por la demandada, **Oficina de Normalización Previsional,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria y en su texto aplicable, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** la recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, al formar parte del Estado y de conformidad con lo previsto por el artículo 24 (inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese contexto, y como se ha adelantado, el recurso de casación ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo. **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, se tiene que la recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar fundada en parte la demanda interpuesta por la demandada Oficina de Normalización Previsional, impugnándola mediante recurso obrante de fojas treinta y tres a cincuenta y seis del cuaderno de casación, por lo que se ha satisfecho dicho requisito. De

otro lado, respecto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso 4 del mismo artículo y Código, del recurso se tiene que el pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** La recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de las siguientes causales: **a) Interpretación errónea del artículo 1236 del Código Civil.** Sostiene que la infracción normativa en materia previsional se sustenta en el supuesto que se ha interpretado erróneamente los criterios de la deuda laboral a un supuesto pago de pensiones que no tienen la misma naturaleza, siendo el caso que los aportes mensuales de los trabajadores sirven para pagar las pensiones de los jubilados, por lo que no se encuentran ante una deuda crediticia laboral ni tampoco civil, sino ante un pago de una prestación previsional, la cual se otorga al cumplirse con los requisitos del Sistema Nacional de Pensiones, como un derecho social y no de otra materia. Agrega que, en el derecho previsional, el monto pensionario no se da por el acuerdo de las partes, sino que se fija por la ley y por parte del Poder Ejecutivo, por lo que la deuda laboral corresponde a una deuda propia de la relación laboral y sus beneficios propios de ese derecho, mas no previsional, como se ha pretendido hacer ver en el presente proceso. Asimismo, refiere que no se pueden aplicar los criterios de una deuda laboral a una deuda previsional y menos lo referido a la actualización de una supuesta deuda, constituyendo un error el hecho de aplicar los criterios de un pleno jurisdiccional sobre un tema laboral, a un aspecto previsional. **b) Interpretación errónea de lo regulado en norma de derecho privado (Código Civil) a un supuesto previsional, y contravención a lo dispuesto en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.** Señala que el otorgamiento y reajuste de pensiones se dispone por ley, atendiendo las previsiones presupuestarias para tal fin, por lo que el criterio valorista no resulta aplicable para disponer el reajuste de pensiones, por no tomar en cuenta las previsiones presupuestarias que señala la Constitución Política, e incluso se está contraviniendo el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00016-2020-PI, pleno jurisdiccional. **c) Interpretación errónea de la norma especial Decreto Ley Nº 19990, sujeta a una norma-principio como lo es la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, siendo la norma regla el artículo 79 del Decreto Ley Nº 19990.** Argumenta que no se ha evaluado que por el principio de especialidad el otorgamiento y reajuste de la pensión se disponen por una norma especial (Decreto Ley Nº 19990) sujeta a una norma principio, como lo es la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política y la norma regla es el artículo 79 del Decreto Ley Nº 19990. **NOVENO:** Con relación a las causales detalladas en el considerando anterior, este Tribunal Supremo estima pertinente emitir pronunciamiento conjunto, en tanto ha advertido que la fundamentación de las mismas se relaciona entre sí. **9.1.** Sobre el particular, en cuanto al supuesto de actualización de la moneda, la recurrente cuestiona que la sentencia de vista ha interpretado en forma errónea los dispositivos legales detallados en el considerando precedente, toda vez que está ordenando el pago en base a un cálculo que no corresponde, lo que a su vez trae consigo una afectación al fondo previsional; del mismo modo, señala que el principio de legalidad se ha visto afectado, así como la naturaleza propia de la pensión, por cuanto se ha desconocido que el cálculo de la pensión y los reajustes son beneficios de la Seguridad Social por el cumplimiento de los requisitos previstos en determinada norma previsional, reiterando el supuesto que, con ello, el principio de legalidad se ha visto afectado. **9.2.** La recurrente alega que se ha interpretado erróneamente los criterios de deuda laboral y/o civil tal como lo establece el artículo 1236 del Código Civil, a un supuesto de pago de pensiones que no se encuentra contenido dentro del derecho previsional, y menos lo referido a la actualización de una supuesta deuda, constituyendo un error aplicar los criterios de un pleno jurisdiccional laboral a un aspecto previsional. En este sentido, lo que la recurrente plantea son cuestionamientos al análisis efectuado por la Sala Superior con relación a la actualización de la moneda, que fuera realizada por el órgano jurisdiccional de segunda instancia en los considerandos siete, ocho, nueve y diez de la sentencia de vista; sin embargo, de la lectura total de dichos considerandos no se advierte que la postura adoptada por la Sala Superior se sustente en la aplicación del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997 al cual se ha aludido en el escrito de casación; en ese sentido, es pertinente advertir que la sentencia de vista se remite a considerar lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 198-2003-AC/TC, así como la Casación Nº 15507-2016-Del Santa; asimismo, expresamente consignó en uno de sus considerandos lo siguiente: 7: Así entonces, este Tribunal de Alzada advierte que no existe controversia respecto a la aplicación de la Ley Nº 23908, sino respecto de la actualización de la moneda desfasada de la diferencia del reajuste de la pensión de invalidez de la demandante. Así entonces, resulta ilustrativo indicar que, debido a las fluctuaciones del valor de la moneda nacional por causas de inflación (que el país afrontó en el periodo involucrado) y otros fenómenos económicos, importó la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda que derivó en el país al extremo de perder toda significación económica, pues el signo monetario perdió sustancialmente su capacidad adquisitiva; de ahí que el artículo 1236° del Código Civil contiene una de las excepciones al principio nominalista aplicable a las obligaciones dinerarias previstas en el mismo código, inclinándose por la teoría valorista, la misma que resulta aplicable a las deudas de naturaleza previsionales en virtud a los principios tuitivos en directa relación a los derechos a la seguridad social y pensión (artículos 10° y 11° de la Constitución Política del Estado). **9.3.** En ese sentido, se advierte que inicialmente la recurrente no expone de forma clara y precisa por qué este juicio valorativo de la Sala de mérito resulta incorrecto, toda vez que, tal como se ha descrito anteriormente, no es acorde a lo actuado el argumento bajo el cual sostiene en su recurso de casación que no resulta viable la aplicación del Pleno Jurisdiccional Laboral 1997, desde que el mismo no fue objeto sustancial de valoración o análisis en la sentencia recurrida, omitiendo del mismo modo desarrollar argumentos claros y precisos que permitan a este Colegiado Supremo advertir algún grado de inconsistencia de la postura adoptada por el órgano jurisdiccional de segunda instancia. **9.4.** En ese mismo sentido, la parte recurrente sostiene que se ha interpretado erróneamente la actualización y liquidación de pensiones devengadas, por cuanto se aplica lo dispuesto en una norma de derecho privado como es el Código Civil a un supuesto previsional, adicionando que no existe disposición alguna que determine actualizar la moneda devaluada a la fecha de pago, por lo que se contravendría lo dispuesto en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, agregando que el otorgamiento y reajuste de pensiones se dispone por ley en virtud a las previsiones presupuestarias para tal fin, por lo que el criterio valorista no resulta aplicable para disponer el reajuste de pensiones por no tener en cuenta las previsiones presupuestarias establecidas en la Carta Fundamental. **9.5.** En virtud a lo alegado en este extremo por la parte recurrente, se torna pertinente remitirnos nuevamente a evaluar el considerando siete de la sentencia de vista, el cual refiere a las fluctuaciones del valor de la moneda nacional por causas de inflación, así como de otros fenómenos económicos, que importó la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda que devino en el país al extremo de perder toda significación económica, toda vez que el signo monetario perdió sustancialmente su capacidad adquisitiva y, seguidamente, que el artículo 1236° del Código Civil contiene una de las excepciones al principio nominalista aplicable a las obligaciones dinerarias previstas en el mismo Código, inclinándose por la teoría valorista, la misma que resulta aplicable a las deudas de naturaleza previsionales en virtud a los principios tuitivos, en directa relación a los derechos a la seguridad social y pensión (artículos 10° y 11° de la Constitución Política del Estado). **9.6.** En ese sentido, es claro que la sentencia recurrida ha sustentado su postura en lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política, los cuales contemplan el derecho a la seguridad social, así como el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones respectivamente, valorando del mismo modo criterios vertidos por el máximo intérprete de la Carta Fundamental, quien en la sentencia recaída en el Expediente Nº 198-2003-AC/TC señaló que en todos aquellos casos de restitución de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante, por equidad, se debe aplicar lo señalado en el artículo 1236 del Código Civil, criterio interpretativo que también concuerda con el vertido por esta Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 15507-2016-Del Santa, en cuanto sostuvo que corresponde la actualización, en mérito de lo dispuesto en el artículo 1236° del Código Civil, con el equivalente al último sueldo mínimo vital, es decir, el "ingreso mínimo legal" de I/m. 12.00 intis millones ó S/. 12.00 nuevos soles (actualmente soles), establecido por Decreto Supremo Nº 002-91-TR (publicado el 17 de enero de 1991), que multiplicado por tres resulta S/ 36.00 soles. **9.7.** En igual sentido conviene señalar que la Sala Superior en el considerando diez de la sentencia de vista, ha dejado sentada su postura respecto a que la demandada Oficina de Normalización Previsional no cumplió

con actualizar las pensiones de la demandante en forma correcta, precisando para ello que se deben actualizar los montos dinerarios desfasados, debiendo tomarse como factor de actualización de la moneda el importe de S/ 36.00 soles, ello en virtud a lo establecido en la Casación Nº 15507-2016-Del Santa, enfatizando a su vez que el factor de actualización que toma como referencia la remuneración mínima vital de S/ 750.00, y que fue establecido por el Decreto de Urgencia Nº 007-2012-TR, resulta errado, por cuanto la remuneración mínima vital es un concepto diferente al sueldo mínimo vital o su sustitutorio de ingreso mínimo legal, ya que la remuneración mínima vital desde su entrada en vigencia ya no recoge ninguno de los componentes conceptuales de los anteriores. **9.8.** A pesar de tal fundamentación, la entidad recurrente no expone de forma clara y precisa por qué este juicio valorativo de la Sala de mérito, que consideró que no se había realizado de manera correcta la actualización de pensiones de la accionante, sería inapropiado o inidóneo para justificar la postura que se recoge en la resolución recurrida, acerca de que la actualización de pensiones realizada por la Oficina de Normalización Previsional es correcta, advirtiendo que si bien la parte discrepa con el criterio asumido en la sentencia de vista, la citada discrepancia se sustenta en razonamientos que no permiten advertir la interpretación errónea de los dispositivos legales a los cuales se remite en su recurso de casación. **9.9.** Finalmente, la recurrente ha señalado que no se cumplió con evaluar que por el principio de especialidad, el otorgamiento y reajuste de la pensión se disponen por una norma especial, como lo es el Decreto Ley Nº 19990, sujeta a una norma principio como lo es la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política y la norma regla contenida en el artículo 79 del Decreto Ley Nº 19990. No obstante, es pertinente reiterar que en los puntos 7 a 10 de la sentencia de vista recurrida, la instancia de mérito ha cumplido con precisar y sustentar los motivos por los cuales considera que procede actualizar las pensiones de la demandante, argumentos que con la claridad y precisión que exige el recurso extraordinario no han sido cuestionados por la impugnante. **9.10.** Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto por la recurrente, los argumentos vertidos en su recurso de casación no son claros ni precisos, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sin la coherencia y formalidad que exige el anotado recurso extraordinario. **DÉCIMO:** En consecuencia y en consideración a lo expuesto precedentemente, se concluye que se han incumplido las exigencias previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que las causales invocadas devienen en **improcedentes.** DECISIÓN: Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en su texto aplicable al caso, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la **Oficina de Normalización Previsional,** el catorce de febrero de dos mil veintidós (fojas ciento noventa y tres a doscientos seis), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas ciento sesenta y cinco a ciento setenta y uno), emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por María Correa Rojas contra Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa en materia previsional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. **YAYA ZUMAETA,** CABELLO MATAMALA, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

1 En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

2 La sentencia de vista modificó el factor de actualización de moneda de S/ 750.00 a S/ 36.00.

C-2245460-32

CASACIÓN Nº 14259-2022 LAMBAYEQUE

Lima, dos de noviembre de dos mil veintitrés

VISTO; el expediente judicial digital y el cuaderno de casación; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Silvestre Collas Mondragón,** mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno (fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cincuenta y tres del expediente judicial digitalizado[1]), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número once de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas doscientos veintiocho a doscientos treinta y nueve), emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, **que confirmó la sentencia apelada de primera instancia** contenida en la resolución número siete de fecha tres de agosto de dos mil veinte (fojas doscientos tres a doscientos nueve), **que declaró infundada la demanda.** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. **SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Superado el análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil, por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Sobre los requisitos de procedencia **QUINTO:** El artículo 388 del Código Procesal Civil establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por el demandante, **Silvestre Collas Mondragón,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** no se adjunta el recibo de pago de la tasa judicial por concepto de interposición del recurso de casación, por cuanto el recurrente

se encuentra exonerado de su presentación, de conformidad con lo regulado en el artículo 24, inciso i), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese contexto, se tiene que, como se ha adelantado, el Recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo. **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, se tiene que el recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar infundada la demanda, impugnándola mediante recurso obrante de fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y cinco del expediente principal, por lo que ha satisfecho este requisito; y, respecto al cumplimiento de la exigencia prevista en el inciso 4 del mismo artículo y Código, del recurso de casación se tiene que el pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de las siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 70 del Decreto Ley 19990. Sostiene que el colegiado superior no toma en cuenta en su pronunciamiento las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que sí reconocen la validez de los certificados de trabajo para acreditar los aportes realizados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por lo que se vulnera el derecho a la pensión, el derecho a un debido proceso y a la debida motivación. Dicho criterio, indica el recurrente, es errado, pues el ponente desconoce las épocas de existencia de las Cooperativas, ya que las labores sí fueron permanentes y no se hacía distingo de las labores asignadas entre contratados, eventuales o permanentes, recibiendo todos sus boletas de pago. Agrega que pese a la presentación de declaraciones juradas ratificando las labores realizadas en las empresas, que fueron suscritas por sus representantes legales, y la autenticidad de los certificados de trabajo, el colegiado superior no les otorga valor legal, inobservando la Casación Nº 7398-2012-Lima, que toma en cuenta el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, debiéndose otorgar la pensión de jubilación bajo el régimen general. Además, señala que de lo dispuesto en los artículos 70 y 72 del Decreto Ley Nº 19990, se desprende que aun cuando el empleador o la empresa de propiedad social, cooperativa o similar no hubiera efectuado el pago de las aportaciones, se debe computar sin excepción como aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Al trabajador le corresponde acreditar el vínculo laboral, para lo cual se debe tener en cuenta las Casaciones números 007-2014-Sullana, 12588-2013-Piura, 068-2011-Lambayeque, 9692-2009-Lambayeque, 1725-2010-Lambayeque y 3035-2011-Lambayeque, que el recurrente considera que se ha incumplido con aplicar dicha jurisprudencia, al no valorarse los medios probatorios presentados, tales como los certificados de trabajo extendidos por los representantes legales de las empresas y cooperativas, que se han ratificado con boletas de pago, copia de planillas y actas de entrega de libros de planillas, entre otros. **b) Inaplicación del principio iura novit curia consagrado en el artículo VIII del título preliminar del Código Procesal Constitucional y de los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, vulnerándose a su vez los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, esto es, afectación al debido proceso y debida motivación de las resoluciones judiciales.** Alega que la Sala Superior no aplicó el principio iura novit curia, pues debió aplicarse el artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, así como sus modificatorias; asimismo, señala que inaplicó a su vez los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, toda vez que, pese a que se acreditaron los hechos expuestos en su demanda, la Sala de mérito no ha valorado de forma conjunta y razonada los medios probatorios presentados, vulnerando lo dispuesto en los incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el recurrente refiere que ha cumplido con presentar documentación adicional para acreditar aportes y acceder a una pensión mínima, siendo que su empleador ha suscrito su documentación laboral y declaración jurada, habiéndose informado sobre la validez y autenticidad de los mismos, según informes que obran en autos, los cuales no han sido cuestionados por la demandada, por lo que conservan eficacia jurídica y valor legal para este proceso. **NOVENO:** En línea con la función de calificación que a esta Corte Suprema corresponde en la presente etapa, y de conformidad con los artículos 384 y 388 (numeral 2) del Código Procesal Civil, se debe evaluar que se haya descrito con claridad y precisión la infracción de carácter normativo que se denuncia, atendiendo a que el examen que habilita dicho medio impugnatorio excepcional se debe circunscribir a una evaluación jurídica del caso, que a su vez se realizará sobre la base de los hechos ya determinados por las instancias de mérito y luego de la valoración de los medios probatorios. En efecto, queda claro que en sede casatoria no se puede ingresar a verificar nuevamente la ocurrencia de los hechos ya acreditados o descartados a nivel de instancia, y menos aún corresponde realizar una nueva valoración de los medios probatorios ya merituados, precisamente, con la finalidad de demostrar o desvirtuar tales hechos, puesto que ello no es la finalidad del recurso de casación, orientado a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **DÉCIMO:** En tal sentido, con respecto a la causal resumida en el **literal a)** del octavo considerando de la presente resolución, cabe precisar que cuando se recurre a un recurso técnico como es el de casación, no cabe efectuar alegaciones ni cuestionamientos al criterio valorativo de los magistrados de instancia, sino que se deben desarrollar jurídicamente las infracciones en que hubiere incurrido la sentencia impugnada, precisando bajo qué razonamientos se habrían configurado tales infracciones. **10.1.** En ese contexto, cuando el recurrente sostiene que la Sala Superior incurrió en la infracción normativa del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, lejos de incidir sobre cómo se habría concretado la infracción denunciada, esto es, ya sea por interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de la norma invocada, sus argumentos se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración efectuada por la instancia de mérito sobre los medios probatorios presentados por el actor para acreditar el periodo por el cual se efectuaron las aportaciones a la Oficina Nacional Previsional, siendo que a su consideración no se le otorgaron la validez legal que le correspondía a los documentos exhibidos, motivo por el cual se estaría afectando su derecho a una pensión bajo el régimen general. Siendo ello así, lo que en realidad se pretende es obtener la revaloración de los medios probatorios por esta Sala Suprema, con la consecuente modificación de la base fáctica que dio mérito al criterio asumido por el colegiado superior[2], obviando que la sede casatoria no es una tercera instancia, sino que, en estricto, tiene por función el control del derecho. **10.2.** Por otro lado, si bien el recurrente refiere que se le debió computar los años de aportación a la ONP aun cuando el empleador no hubiese cumplido con el pago de tales aportes, cabe precisar que el colegiado superior no supedita el cómputo del tiempo de aportaciones al aludido pago, sino que observa que los documentos presentados no acreditan el vínculo laboral durante todo el periodo sostenido por el casante, considerando el criterio establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC, de modo que –contrariamente a lo sostenido por el recurrente- la Sala de mérito sí efectúa una valoración de los medios probatorios presentados, evidenciando todo ello no estar de acuerdo con el criterio vertido por la instancia de mérito, lo cual no se condice con la causal material invocada. **10.3.** Por tanto, no habiendo cumplido el recurrente con las exigencias de precisión y claridad que prevén los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la causal analizada deviene en **improcedente. DÉCIMO PRIMERO:** En lo que corresponde a la causal resumida en el **literal b)** del octavo considerando de la presente resolución, referida a la inaplicación del principio iura novit curia al no considerarse lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, vulnerándose a su vez los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, esto es, afectación al debido proceso y debida motivación de las resoluciones judiciales, se debe advertir que los fundamentos que sostiene el recurrente sobre la causal casatoria invocada, persisten en presuntos defectos de valoración de los medios probatorios que, a su entender, acreditaron de manera suficiente la pretensión de su demanda. **11.1.** Sobre la documentación presentada por el impugnante para acreditar los años de trabajo que se corresponden con el cómputo del periodo válido de aportación a la ONP, corresponde precisar que la Sala de mérito ha confirmado el periodo reconocido en sede administrativa, vinculados a los trabajos realizados para las empresas Construcciones Villasol Sociedad Anónima y Graña y Montero Sociedad Anónima, denegando los mayores años que solicitó el actor que se le reconozcan debido a inconsistencias observadas, tales como el hecho que el certificado de trabajo emitido por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Talambo Ltda. Nº 31, no solo no se encontraba suscrito por un representante legal acreditado para su

expedición, sino que había sido emitido en el año 1989, certificando un periodo laboral hasta 1990, esto es, hasta un año posterior a la fecha de su emisión. Asimismo, el certificado de trabajo emitido por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Lucas Deza Romero Ltda. Nº 259 detalla que el demandante trabajó como "obrero de campo eventual", sin poder determinar con exactitud el periodo por el cual prestó sus servicios. En adición, el colegiado superior determinó la presentación de documentación fraudulenta por anacronismo y diversas declaraciones juradas que han sido catalogadas como manifestaciones unilaterales, que no han podido ser corroboradas con documentación adicional (actas de entrega y recepción de planillas, partidas registrales, entre otros), respecto a las afirmaciones contenidas en las mismas. **11.2.** De lo expuesto en el numeral 11.1 precedente, se tiene que la instancia de mérito ha dado valor probatorio a los documentos presentados por el casante que sirvieron de base fáctica para arribar a la decisión adoptada en base a la legislación vinculada al derecho a la pensión de jubilación del régimen general, de modo que el actor plantea en realidad una abierta disconformidad sobre la apreciación vertida de los medios probatorios valorados, lo que no puede volver a ser objeto de análisis por esta Sala Suprema, en tanto no se condice con los fines que se le atribuyen al recurso de casación, conforme hemos adelantado en el noveno considerando. **11.3.** Entonces, podemos advertir que este extremo del recurso tampoco cumple con las exigencias que prevén los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que la causal invocada deviene en **improcedente. DÉCIMO SEGUNDO:** Igualmente, es imperioso destacar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido la naturaleza extraordinaria del recurso de casación que exige de los recurrentes un mayor diligencia al momento de su interposición. Así, el máximo interprete constitucional ha señalado que: […] corresponde dejar establecido que la casación, aun cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. Y es extraordinario porque su viabilidad se encuentra circunscrita solo a determinadas resoluciones judiciales y por específicas causales legalmente preestablecidas, y porque en su formulación deben satisfacerse requisitos de forma que, en contraste con los recursos ordinarios, resultan ser altamente especializados, de modo tal que impone como carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso[3]. **12.1.** Ahora bien, en cuanto al requisito previsto en el artículo 388 (inciso 3) del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, referido a la incidencia directa de la infracción normativa denunciada que el recurrente debe demostrar, se ha precisado que: […] atendiendo al carácter eminentemente formal del recurso de casación, dicho requisito debe encontrarse expresamente desarrollado en una sección específica dentro del cuerpo del recurso. Así, para el juez ordinario que califica su procedencia, debe ser evidente dicho desarrollo, lo cual descarta la posibilidad de dar por satisfecho este requisito solo porque supuestamente se encontraría implícito en la argumentación de fondo del propio recurso. Cabe también precisar que cuando la norma exige demostrar la incidencia de la infracción normativa en la decisión impugnada, ello se refiere a su influjo o repercusión en la parte dispositiva del fallo, que altere el sentido de este. Así, resulta tan importante la verificación de este requisito para el diseño del sistema casatorio, que de ausentarse –sea porque no existe tal incidencia o sea por negligencia del recurrente–, el recurso resulta inviable, conforme a lo establecido en la propia ley[4]. **12.2.** Siendo ello así, al advertirse las omisiones y defectos del recurso de casación interpuesto, advertidos en los considerandos anteriores, y en atención a la jurisprudencia constitucional mencionada, por exclusiva responsabilidad del recurrente resulta inviable la procedencia del recurso que interpone. **DECISIÓN:** Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Silvestre Collas Mondragón,** mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno (fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cincuenta y tres), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número once de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas doscientos veintiocho a doscientos treinta y nueve), emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Silvestre Collas Mondragón, con la Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. **YAYA ZUMAETA,** CABELLO MATAMALA, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

1 En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

2 Cabe advertir que la Sala Superior, en su fundamento 6 de la Sentencia de Vista impugnada, detalla los documentos presentados por el recurrente, así como la valoración efectuada respecto de cada uno de ellos, encontrando inconsistencias que no son rebatidas de forma concreta por el recurrente.

3 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00041-2020-PA/TC, del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; fundamento 17.

4 Ibidem; fundamentos 19 y 20.

C-2245460-33

CASACIÓN Nº 45759 – 2022 LIMA

Lima, dos de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Seguro Social de Salud - ESSALUD,** de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidós (folios 51 – 61 del Expediente Judicial Digitalizado[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, del siete de noviembre de dos mil veintiuno (folios 39 – 48), emitida por la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que **revocó** la sentencia apelada contenida en la resolución número cinco, del doce de agosto de dos mil diecinueve (folios 21 – 25), que declaró infundada la demanda; y, reformándola declaró **fundada** la demanda en todos sus extremos. **SEGUNDO:** Conforme a lo previsto en los artículos 34 inciso 3 sub numeral 3.1, y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS[2], concordante con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente al caso de autos, se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio establecidos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a las modificaciones dispuestas por la acotada Ley Nº 29364[3]. **TERCERO:** El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: **i)** se impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** ha sido interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; **iii)** fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificado el recurrente con la resolución impugnada; y, **iv)** no adjunta la tasa judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerado por ser una entidad del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 24 literal "g" del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. **CUARTO:** Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación del recurso debe ser clara, precisa y concreta**;** debiendo indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. **QUINTO:** En cuanto a las causales del recurso, estas se encuentran contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se señala que: «El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos de procedencia del recurso: **i)** que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso; **ii)** se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; así como, **iii)** demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, finalmente **iv)** indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** El recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia prevista en el

citado artículo 388 numeral 1 del Código Procesal Civil, en razón a que, de los actuados se observa que la parte recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia porque el mismo no le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo, la parte recurrente señala que su pedido es anulatorio y/o revocatorio. **SÉPTIMO:** De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Sala Suprema distingue que se denuncian las siguientes causales casatorias: a) Infracción normativa del apartamiento inmotivado del precedente vinculante de la Casación Nº 7785-2012-San Martín Sostiene que la Sala Superior incurre en una grave omisión de inobservancia de un precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, recaído en la Casación Nº 7785-2012-San Martín, al no tener en cuenta que uno de los puntos controvertidos era determinar si correspondía la nivelación o no de la demandante. Asimismo, no advierte que el pedido de la demandante fue de fecha posterior a la reforma constitucional del régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, y en tal razón era de aplicación el precedente vinculante invocado. **b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 56 del Decreto Ley Nº 20530** Señala que la Sala Laboral ha inaplicado lo dispuesto por el artículo 56 del Decreto Ley N°20530, dicha omisión ha traído como consecuencia que no se precise correctamente, pues por aplicación de lo dispuesto por la normativa indicada en el artículo 56 del Decreto Ley Nº 20530, los devengados deben ser tres años antes de su solicitud en la vía administrativa y no desde la fecha de su cese. **c) Infracción normativa por interpretación errónea de la Ley N°28389 y el artículo 4 de la Ley Nº 28449** Indica que la Sala Laboral ha interpretado erróneamente las normas invocadas, dado que dichas normas legales cierran la posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad a futuro, criterio que ha sido reiterado en diversas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, como las recaídas en las causas N°02543-2007-PC/TC, 0033-2007-PA/TC en las que se ha precisado que la nivelación pensionaria establecida para las pensiones de cesantía otorgadas conforme al Decreto Ley Nº 20530, en aplicación de la Ley Nº 23495 y su norma reglamentaria, no constituyen, por razones de interés social, un derecho exigible. **OCTAVO:** En relación a la infracción descrita en el **literal a)** del considerando anterior, esta Sala Suprema observa que la parte impugnante refiere el apartamiento inmotivado del precedente vinculante de la Casación Nº 7785-2012-San Martín, que establece que no se puede solicitar la nivelación tanto en la vía administrativa como la judicial; al respecto esta Sala Suprema precisa que de acuerdo a la pretensión demandada y a lo determinado en la Sala de mérito, el presente caso no se trata de un pedido de nivelación de pensión, sino de una solicitud de pago de pensiones de cesantía con el último cargo designado. Siendo ello así, su denuncia no se ajusta a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil; razón por la cual, la causal mencionada deviene en **improcedente**. **NOVENO:** Respecto a las infracciones descritas en los **literales b) y c)** del séptimo considerando, se advierte que, si bien la entidad impugnante indica las normas que a su criterio considera se han sido infringidos al emitirse la sentencia de vista, expresa argumentos genéricos referidos a supuestos fácticos debatidos y resueltos por la instancia de mérito, que están orientados más bien a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos, con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, propósito que evidentemente no se condice con la naturaleza ni con los fines del recurso extraordinario de casación, de ahí que resulta evidente la falta de claridad y precisión en la infracción normativa analizada. Por lo que se determina el incumplimiento del requisito previsto en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, motivo por lo cual las causales analizadas resultan en **improcedentes**. **DÉCIMO:** Por lo que, se advierte que el presente recurso no cumple con los presupuestos para su procedencia conforme lo prescriben los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364; correspondiendo declarar la **improcedencia** del recurso casatorio. **DECISIÓN:** Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Seguro Social de Salud - ESSALUD,** de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidós (folios 51 – 61 del Expediente Judicial Digitalizado), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, del siete de noviembre de dos mil veintiuno (folios 39 – 48); **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por Juana Mercedes Carrasco Reyes Vda de Galvez contra Seguro Social de Salud - ESSALUD, sobre acción contencioso administrativa; notifíquese por Secretaría y devolver los actuados. Interviene como **ponente la señora Jueza Suprema provisional Yalán Leal.** SS. YAYA ZUMAETA, CABELLO MATAMALA, **YALÁN LEAL,** PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

[1] Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

[2] Antes previstos en los artículos 35 inciso 3 sub numeral 3.1, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.

[3] Considerando que las modificatorias introducidas al Código Procesal Civil a través de la Ley Nº 31591, publicada el 26 de octubre de 2022, no son de aplicación al presente caso, por mandato de la Segunda Disposición Final del acotado Código.

C-2245460-34

CASACIÓN Nº 11561-2022 DEL SANTA

Lima, siete de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por **Alberto Zalamir Obeso Cruz** de fecha veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno (fojas noventa y seis del Expediente Principal Digitalizado - NO EJE), contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número nueve del primero de setiembre de dos mil veintiuno (fojas ochenta y seis), que confirma la sentencia apelada emitida mediante resolución número cinco del treinta y uno de julio de dos mil veinte (fojas cincuenta y cinco), que declara infundada la demanda interpuesta. CONSIDERANDO **Primero:** Se debe proceder a calificar si dicho recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil[1], modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria en el proceso contencioso administrativo. **Fines del Recurso de Casación Segundo**: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a, **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia. **Admisibilidad del recurso Tercero:** Cabe anotar que el artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, establece requisitos de admisibilidad del recurso de casación: 1.- Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2.-ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3.- dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4.- adjuntando el recibo de la tasa respectiva. […]. **Cuarto:** Efectuada la revisión de los requisitos de admisibilidad, se advierte que el recurso impugna una resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Santa que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días de notificada. En relación al arancel judicial por concepto de casación, no se adjunta la tasa judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerado en virtud de lo establecido en el artículo 24 literal "i" del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Siendo así, se cumple con los requisitos precisados en el tercer considerando de la presente resolución. **Requisitos de procedencia Quinto:** El modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, establece los siguientes requisitos de procedencia del recurso de casación: 1.- Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; 2.- describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.- demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4.- indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. […] **Sexto:** Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código

Procesal Civil, de aplicación supletoria, se advierte que el recurrente apeló la resolución emitida en primera instancia, que le fue desfavorable, conforme se verifica del recurso de apelación (fojas sesenta y cuatro). Por ende, esta exigencia se cumple. En relación al requisito previsto en el numeral 4 del citado dispositivo, advertimos en la casación, materia de calificación, pedido revocatorio de la sentencia de vista, por lo que esta exigencia también ha sido cumplida. **Causales denunciadas Séptimo:** El recurrente Alberto Zalamir Obeso Cruz sustenta su recurso de casación en la siguiente causal y bajos los siguientes fundamentos: **Interpretación errónea de la norma de derecho material por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa** La errónea interpretación de las normas de derecho material por parte de la Sala de su Presidencia, consistente en que según criterio del Cuerpo Colegiado, es que al haber cumplido con los años de aportes, y acreditar haber estado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad en mérito al certificado de identificación genérica de riesgos por función obrante a folios doce; correspondería ordenar a la demandada efectúe un nuevo cálculo de pensión de jubilación del actor en base a la ley de jubilación minera; en nada variaría el monto de la remuneración de referencia del actor, pues el monto que le han otorgado por pensión de jubilación que debía ser aplicado de conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo 029-87-TR, Reglamento de la Ley 25009 que ha establecido que la pensión completa a la que se refiere la Ley será equivalente al (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de la pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990, en el presente caso se le está aplicando descuentos que no corresponden a este régimen por ser ESPECIAL LA APLICACIÓN DE LA LEY MINERA. **Interpretación correcta que debe darse a la norma de derecho material** De acuerdo a lo previsto por la Ley 25009 para tener acceso a la pensión de jubilación bajo los alcances de la Ley Minera, el trabajador debe haber laborado en áreas de alto riesgo de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, debidamente acreditado con el certificado de alto riesgo otorgado por la EMPRESA SIDERPERÚ S.A., corresponde se le otorgue de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº 25009 aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-89-TR prescribe que "Los trabajadores de centros de producción minera que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, tienen derecho a pensión completa de jubilación, siempre que cumplan con el número de años de aportaciones previsto en el Decreto Ley Nº 19990". **Octavo:** Antes de proceder con el análisis del recurso de casación, es necesario reiterar que constituye un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal y solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. En ese sentido, la fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y concreta, y debe indicar ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la República. Análisis de las causales denunciadas **Noveno:** Emitiendo pronunciamiento respecto de la causal expuesta en el séptimo considerando, se advierte que la parte recurrente no describe con claridad y precisión las razones concretas que configurarían la misma, ya que de la sentencia de vista no se advierte que la Sala Superior haya señalado que "correspondería ordenar a la demandada efectúe un nuevo cálculo de pensión de jubilación del actor en base a la ley de jubilación minera; en nada variaría el monto de la remuneración de referencia del actor", sino precisó en su octavo considerando que "no se está aplicando ningún tope a su pensión de jubilación, solo se ha determinado el monto proporcional que le asiste conforme a ley". Maxime, que las instancias de mérito precisaron que los trabajadores de centro de producción minera tienen derecho a pensión completa de jubilación, siempre que cumplan con el número de años de aportaciones previsto en el Decreto Ley Nº 19990, precisando que es de treinta años de aportes, y que la recurrente acreditó veintiún años, por lo que se determinó un monto proporcional. En consecuencia, concluimos que la parte impugnante no cumple con el requisito previsto en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, motivo por el cual el recurso interpuesto deviene en **improcedente.** DECISIÓN Por estas consideraciones, al no haberse satisfecho los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del mismo cuerpo normativo, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por **Alberto Zalamir Obeso Cruz** de fecha veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno (fojas noventa y seis), contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número nueve del primero de setiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por el recurrente contra la contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre recálculo de pensión minera. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor **Juez Supremo Burneo Bermejo.** SS. YAYA ZUMAETA, BURNEO BERMEJO, YALAN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

[1] Se precisa que si bien la Ley Nº 31591, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de octubre de 2022, modifica diversos artículos del Código Procesal Civil en relación al recurso de casación; tales modificaciones no son aplicables al caso concreto, conforme a lo dispuesto en la segunda disposición complementaria del citado código.

C-2245460-35

CASACIÓN Nº 43805-2022 DEL SANTA

Lima, siete de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; el expediente judicial digital y el cuaderno de casación; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Miguel Gallardo Cornejo,** mediante escrito del catorce de enero de dos mil veintidós (fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y seis del expediente judicial digitalizado), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas doscientos treinta y dos a doscientos treinta y siete), emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que **confirmó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número siete, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno (fojas doscientos seis a doscientos quince), que declaró **infundada la demanda.** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. **Formalidad del Recurso de Casación SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **i)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **ii)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **iii)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **iv)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Superado el análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran limitados a: **i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil, por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento

inmotivado del precedente judicial. Sobre los requisitos de procedencia **QUINTO:** Asimismo, el modificado artículo 388 del Código Procesal Civil establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por el demandante, **Miguel Gallardo Cornejo,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** no se adjunta el recibo de pago de la tasa judicial por concepto de interposición del recurso de casación, por cuanto el recurrente se encuentra exonerado de su presentación, de conformidad con lo regulado en el inciso i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese contexto, se tiene que, como se ha adelantado, el Recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo. **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, se tiene que el recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar infundada la demanda de su propósito, impugnándola mediante recurso obrante de fojas doscientos dieciséis a doscientos veintiuno del expediente principal, por lo que ha satisfecho este requisito; y, respecto al cumplimiento de la exigencia prevista en el inciso 4 del mismo artículo y Código, del recurso de casación se tiene que el pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** En cuanto a los requisitos de procedencia, el recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de la siguiente causal: **Infracción normativa de los artículos 10 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú, artículo 197 del Código Procesal Civil y artículos 1 y 2 (inciso a) del Decreto Ley Nº 25967.** Sostiene que el colegiado superior no ha tomado en cuenta todos los medios probatorios presentados por su persona y que obran en autos, lo que ha llevado a confirmar una sentencia ilegal y arbitraria. Al respecto, refiere que ha cumplido con demostrar que ha laborado y por ende aportado al Sistema Nacional de Pensiones, por 32 años, 02 meses y 08 días, conforme a la siguiente relación: i) Ex empleadora Compañía Agrícola Explotadora "Las CIENAGAS" Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – Hacienda San Martín, por el periodo del quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve al treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos (3 años y 7 días de labor, acreditados con la copia fedateada del certificado de trabajo y Liquidación de Beneficios Sociales); ii) Eduardo Larraburre GAMERO-HACIENDA TALANDRACAS por el periodo del ocho de enero de mil novecientos sesenta y tres hasta el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y uno (08 años, 11 meses y 21 días de labor, acreditados con la copia fedateada del padrón de Liquidación de Beneficios Sociales); iii) Comité Especial de Administración Alto Piura –Ex hacienda Talandracas por el periodo del dos de noviembre de mil novecientos setenta y dos al nueve de diciembre de mil novecientos setenta y tres (01 año y 08 días de labor, acreditados con la copia fedateada del certificado de trabajo, de fecha 18.08.2003); iv) Cooperativa Agraria de Trabajadores LUIS M. SANCHEZ CERRO LTDA. donde ha laborado desde el diez de diciembre de mil novecientos setenta y tres al treinta y uno de diciembre de mil novecientos novena y dos (19 años y 22 días de labor, acreditados con la copia fedateada del certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, así como 04 oficios sobre entrega de planillas de salarios). Por lo expuesto, solicita se declare fundado su recurso de casación y, por ende, se le otorgue su pensión de jubilación, de acuerdo al Decreto Ley Nº 25967, más el pago de los devengados e Intereses legales. **NOVENO:** En línea con la función de calificación que a esta Corte Suprema corresponde en la presente etapa, y de conformidad con los artículos 384 y 388 (numeral 2) del Código Procesal Civil, se debe evaluar que se haya descrito con claridad y precisión la infracción de carácter normativo que se denuncia, atendiendo a que el examen que habilita dicho medio impugnatorio excepcional se debe circunscribir a una evaluación jurídica del caso, que a su vez se realizará sobre la base de los hechos ya determinados por las instancias de mérito y luego de la valoración de los medios probatorios. En efecto, queda claro que en sede casatoria no se puede ingresar a verificar nuevamente la ocurrencia de los hechos ya acreditados o descartados a nivel de instancia, y menos aún corresponde realizar una nueva valoración de los medios probatorios ya merituados, precisamente, con la finalidad de demostrar o desvirtuar tales hechos, puesto que ello no es la finalidad del recurso de casación, orientado a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **DÉCIMO:** En tal sentido, con respecto a la causal resumida en el octavo considerando de la presente resolución, cabe precisar que cuando se recurre a un recurso técnico como es el de casación, no cabe efectuar alegaciones ni cuestionamientos al criterio valorativo de los magistrados de instancia, sino que se deben desarrollar jurídicamente las infracciones en que hubiere incurrido la sentencia impugnada, precisando bajo qué razonamientos se habrían configurado tales infracciones. **10.1.** En ese contexto, cuando el recurrente sostiene que la Sala Superior incurrió en infracción normativa de los artículos 10 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú, artículo 197 del Código Procesal Civil y artículos 1 y 2 (inciso a), del Decreto Ley Nº 25967, lejos de incidir sobre cómo se habría concretado la infracción denunciada, esto es, ya sea por interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de las normas invocadas, sus argumentos se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración efectuada por la instancia de mérito sobre los medios probatorios presentados por el actor para acreditar el periodo por el cual sostiene que se efectuaron las aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional, dado que a su consideración no se tomaron en cuenta los medios probatorios presentados, motivo por el cual se estaría afectando su derecho a una pensión, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la valoración conjunta de los medios probatorios. Siendo ello así, lo que en realidad se pretende es obtener la revaloración de los medios probatorios por esta Sala Suprema, con la consecuente modificación de la base fáctica que dio mérito al criterio asumido por el colegiado superior[1], obviando que la sede casatoria no es una tercera instancia, sino que, en estricto, tiene por función el control del derecho, salvo la existencia de nulidades insubsanables y/o evidentes. **10.2.** Sobre ello, cabe precisar que todos los documentos que han sido mencionados por el recurrente en su recurso de casación han sido objeto de valoración por el colegiado superior, de modo que su afirmación referida a que no se habrían tomado en cuenta no es exacta. **10.3.** Asimismo, se tiene que el órgano jurisdiccional ha determinado la insuficiencia de los documentos presentados para acreditar el vínculo laboral (y el periodo de aportaciones) durante el tiempo sostenido por el casante, advirtiendo deficiencias, como el hecho de no acreditar las facultades de la persona que suscribe los certificados de trabajo, inconsistencias en cuanto a la fecha de inicio de labores que se detallaban en el certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, pese a ser emitidos presuntamente por la misma entidad, así como documentos cuya información contenida no pudo ser corroborada debido a que no se presentaron instrumentales adicionales con dicho fin. Aunado a ello, se tuvo en cuenta lo sentenciado en el Expediente Nº 26391-2012, proceso en el cual se determinó mediante informes grafotécnicos la falta de veracidad de los documentos presentados para acreditar el periodo laboral alegado. En tal sentido, con todo ello, solo se evidencia la disconformidad del recurrente respecto del criterio vertido por la instancia superior de mérito, lo cual no se condice con las infracciones normativas denunciadas. **10.4.** Por tanto, no habiendo cumplido el recurrente con las exigencias de precisión, claridad e incidencia que prevén los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, el recurso de casación en este extremo deviene en **improcedente. DÉCIMO PRIMERO:** Igualmente, es imperioso destacar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, que exige de los recurrentes una mayor diligencia al momento de su interposición. Así, el máximo interprete constitucional ha señalado que: […] corresponde dejar establecido que la casación, aun cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. Y es extraordinario porque su viabilidad se encuentra circunscrita solo a determinadas resoluciones judiciales y por específicas causales legalmente preestablecidas, y porque en su formulación deben satisfacerse requisitos de forma que, en contraste con los recursos ordinarios, resultan ser altamente especializados, de modo tal que impone como carga

procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso[2]. **12.1.** Ahora bien, en cuanto al requisito previsto en el artículo 388 (inciso 3) del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, referido a la incidencia directa de la infracción normativa denunciada que el recurrente debe demostrar, se ha precisado que: […] atendiendo al carácter eminentemente formal del recurso de casación, dicho requisito debe encontrarse expresamente desarrollado en una sección específica dentro del cuerpo del recurso. Así, para el juez ordinario que califica su procedencia, debe ser evidente dicho desarrollo, lo cual descarta la posibilidad de dar por satisfecho este requisito solo porque supuestamente se encontraría implícito en la argumentación de fondo del propio recurso. Cabe también precisar que cuando la norma exige demostrar la incidencia de la infracción normativa en la decisión impugnada, ello se refiere a su influjo o repercusión en la parte dispositiva del fallo, que altere el sentido de este. Así, resulta tan importante la verificación de este requisito para el diseño del sistema casatorio, que de ausentarse –sea porque no existe tal incidencia o sea por negligencia del recurrente–, el recurso resulta inviable, conforme a lo establecido en la propia ley[3]. **12.2.** Siendo ello así, al advertirse las omisiones y defectos del recurso de casación interpuesto, advertidos en los considerandos anteriores, y en atención a la jurisprudencia constitucional mencionada, por exclusiva responsabilidad del recurrente resulta inviable la procedencia del recurso que interpone. **DECISIÓN:** Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el demandante, **Miguel Gallardo Cornejo,** mediante escrito del catorce de enero de dos mil veintidós (fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y seis), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número doce, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas doscientos treinta y dos a doscientos treinta y siete), emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa. Por último, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por el demandante, Miguel Gallardo Cornejo, con la demandada, Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta SS. **YAYA ZUMAETA, B**URNEO BERMEJO, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES.

---

1 Cabe advertir que la Sala Superior, en los fundamentos que van desde el punto 6 al 14 de la Sentencia de Vista impugnada, detalla los documentos presentados por el recurrente, así como la valoración efectuada respecto de cada uno de ellos, encontrando inconsistencias que no son rebatidas de forma concreta por el recurrente.

2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00041-2020-PA/TC, del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; fundamento 17.

3 Expediente Nº 00041-2020-PA/TC, op. cit., fundamentos 19 y 20.

C-2245460-36

CASACIÓN Nº 43012-2022 AREQUIPA

Lima, siete de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; el expediente judicial digital y cuaderno de casación[1]; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, **Isidora Ricardina Salas de Montes,** el nueve de febrero de dos mil veintidós (fojas trescientos treinta y ocho a trescientos cuarenta y nueve del expediente judicial digitalizado), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número veinticuatro, del trece de diciembre de dos mil veintiuno (fojas trescientos veinticinco a trescientos treinta y dos), emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, **que revocó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número diez de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte (fojas doscientos ochenta y tres a doscientos noventa y dos), que declaró fundada en parte la demanda, y **reformándola, declaró infundada la demanda.** En tal sentido, corresponde se proceda a verificar si el referido recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34 (inciso 3) y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria y según su texto aplicable. Formalidad del Recurso de Casación **SEGUNDO:** En ese propósito, se tiene que el modificado artículo 387° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su texto entonces vigente, prevé los requisitos de admisibilidad que debe contener el recurso de casación, estableciendo con ese fin que este se interpone: **1)** contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **2)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la República, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; **3)** dentro del plazo diez (10) días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **4)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición normativa que a ello la exonere. **TERCERO:** Superado el análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable en autos, que sus fines se encuentran limitados a: **(i)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, **(ii)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. **CUARTO:** En esa misma línea de pensamiento, por medio del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, aplicable en autos, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. **Sobre los requisitos de procedencia QUINTO:** El artículo 388 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, establece como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. **SEXTO:** Con relación al recurso de casación interpuesto por la demandante, **Isidora Ricardina Salas de Montes,** atendiendo a los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: **i)** ha sido interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **ii)** se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; **iii)** ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, **iv)** la recurrente no ha acompañado la tasa judicial por interposición de la casación, al encontrarse exonerado de dicha exigencia, de acuerdo a lo regulado por el inciso i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese contexto, se tiene que el recurso ha superado el examen de admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo **SÉPTIMO:** En cuanto a la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria y en su texto pertinente, se tiene que el recurrente no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses, al declarar infundada la demanda interpuesta por su parte, impugnándola mediante recurso (fojas ciento cuatro a ciento once), por lo que se ha satisfecho dicho requisito; y, respecto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso 4 del artículo 388 del mismo cuerpo normativo, del recurso se tiene que el pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. **OCTAVO:** La recurrente, en el recurso materia de control objetivo de legalidad, articula la formulación de la siguiente causal: **Infracción**

normativa del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Sostiene que la Sala Superior incurre en infracción de los derechos invocados, pues ha expuesto que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) tiene tiempo indefinido para revisar expedientes y puede burlar el plazo que se ha establecido por ley, y sería un desequilibrio económico al Sistema Nacional de Pensiones de otorgársele una pensión, es decir, la Sala Superior maneja sus propios tiempos. Además, para que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueda otorgar una pensión definitiva, previamente realizaron inspecciones en los centros laborales y recolectaron información; si hubiera existido un error debieron denegar la pensión y no otorgar una pensión definitiva; en esa línea, qué garantiza a la demandante que el libro [de planillas] pudo ser manipulado, después de siete años, con la única finalidad de afectarle la pensión justa que debía percibir. **NOVENO:** Respecto a la causal descrita en el considerando anterior de este pronunciamiento, tenemos que la tutela jurisdiccional, consagrada en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia debidamente motivada **9.1.** Por su parte, el inciso 5 del artículo 139 de la Carta Política, garantiza a las partes involucradas en una controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellos dentro del proceso. **9.2.** En el recurso casatorio, la recurrente básicamente alega la vulneración a los derechos procesales invocados, al haberse validado indebidamente –a su criterio– la actuación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que habría suspendido y declarado la nulidad de su derecho previsional pese al tiempo transcurrido desde que este le fue reconocido, amparado en la realización de inspecciones y el ejercicio de su facultad de fiscalización posterior, cuando habrían vencido los plazos para realizar estas actividades. Sobre ello, tenemos que lo sostenido por la recurrente trasluce una disconformidad con el criterio asumido por el órgano superior en relación a los hechos involucrados en esta causa, a pesar de evidenciarse que se han otorgado las razones factuales y jurídicas correspondientes, en base a las instrumentales que sustentan la decisión confirmatoria de la sentencia apelada, apreciándose entonces que lo realmente pretendido a través de lo argumentado no consiste en revelar la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y/o a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sino cuestionar el criterio asumido por los jueces superiores en relación a los hechos involucrados en la controversia, vinculados con la notificación de las resoluciones administrativas impugnadas por la demandante. **9.3.** Efectivamente, el órgano superior de mérito ha establecido que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) actuó legítimamente al amparo del numeral 14 del artículo 3 de la Ley Nº 28532, del Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM y la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo Nº 092-2012-EF, sobre fiscalización posterior y suspensión de la pensión de la demandante, dado que en los actuados administrativos se habría verificado lo siguiente, según lo expuesto en el punto 2.3.3 de la parte considerativa de la sentencia de vista recurrida: […] si la ONP decide suspender el pago de la pensión, la resolución administrativa que al efecto se expide debe indicar certeramente que los documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o contienen datos inexactos que desvirtúan el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación; pues, se encuentra en controversia el sustento económico del pensionista, por lo que debe cumplirse la obligación de fundamentar debidamente la decisión; en conformidad a lo señalado por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamiento [...]. Estando a lo señalado, del expediente administrativo que obra en CD de fojas 139 (archivo a02300006909-0001-9744 al 9747) aparece el Informe de Fiscalización de fecha 28 de octubre de 2016, que contiene el proceso de verificación efectuado por la Oficina de Normalización Previsional, dando cuenta del Informe Pericial Grafotécnico Nº 1572-2016-DPR.IF/ONP (archivo a02300006909-0001-9811 al 9817), el cual efectuado su revisión de la planilla de sueldos en la cual se indica: que es falso porque el soporte ha sido manipulado para otorgarle antigüedad al observar manchas marrones ocasionados por una acción térmica no compatible con una degradación natural del papel; que se hizo el descuento con mención a las siglas SSP que corresponden al Seguro Social del Perú, que en la fecha de apertura e inicio del periodo laboral de dicha institución no existía evidenciando fraude en el tiempo por anacronismo normativo, y que en el registro de trabajadores y descuentos desde el inicio del periodo laboral de abril de 1964 se ha utilizado un bolígrafo de tinta gel color negro de manera intercalada hasta el 29 de noviembre de 1994 evidenciando fraude en el tiempo por anacronismo tecnológico, documentos que corroboran que el documento "planilla de sueldos" en la cual se sustenta el reconocimiento de aportes de la demandante por el periodo 4 de mayo de 1968 a marzo de 1990 (21 años y 10 meses) y que motivó el otorgamiento de la pensión que estuvo percibiendo, evidencia falsedad; es decir que la demandada ha cumplido con sustentar debidamente la suspensión de la pensión de la demandante, en ejercicio de sus facultades establecidas por el artículo 3, numeral 14 de la Ley Nº 28532, el Decreto Supremo Nº 096- 2007-PCM y la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo Nº 092-2012-EF, sobre fiscalización posterior y suspensión de la pensión de la demandante, por lo que resulta acorde a derecho que se haya declarado la nulidad de la Resolución Nº 41289-2010- ONP/DPR.GD/DL 19990 que reconoce un derecho pensionario en base a un documento falso". En todo caso, aquellos aspectos referidos con la normativa que establece plazos para la emisión de actos administrativos, son cuestiones que no podrían dilucidarse o definirse a través de una causal de naturaleza procesal, como la planteada, sino de una material que se oriente a establecer cuál es la interpretación correcta que debe otorgarse al marco normativo que regula dicha materia y que permitirían la aplicación de sus preceptos, lo que no ha sido denunciado y, menos aún, planteado y desarrollado por la impugnante. **9.4.** Por lo demás, lo sostenido en el recurso lleva ínsito una pretensión de revaloración de las pruebas actuadas y de los hechos fijados en sede de instancia, desconociendo que el recurso de casación evalúa asuntos de derecho con exclusión de los hechos y las pruebas, al no ser una tercera instancia, no siendo una actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba ni originar debate sobre el valor probatorio asignado por las instancias de mérito a las pruebas incorporadas a la causa. **9.5.** Lo expuesto denota una falta de claridad y precisión de la infracción normativa denunciada en relación con el contenido y decisión que se plasma en la sentencia de vista cuestionada, inobservándose el requisito de procedencia contemplado en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil. Además, el recurso carece de desarrollo sobre la demostración de la incidencia directa que tendría la infracción normativa denunciada en la decisión adoptada por la Sala Superior de origen, por lo que tampoco es posible entender satisfecho el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 388 del acotado Código, en su texto aplicable, requisito sobre el cual es pertinente resaltar lo sostenido por el Tribunal Constitucional nacional en cuanto señala que: "22. […] resulta tan importante la verificación de este requisito para el diseño del sistema casatorio, que de ausentarse -sea porque no existe tal incidencia o sea por negligencia del recurrente-, el recurso resulta inviable, conforme a lo establecido en la propia ley"[2]; en tal virtud, no habiéndose satisfecho los dos requisitos de procedibilidad del recurso de casación examinados, este deviene en **improcedente.** DECISIÓN: Por las razones expuestas y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, **DECLARARON IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por la demandante, **Isidora Ricardina Salas de Montes,** el nueve de febrero de dos mil veintidós (fojas trescientos treinta y ocho a trescientos cuarenta y nueve), contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número veinticuatro, del trece de diciembre de dos mil veintiuno (fojas trescientos veinticinco a trescientos treinta y dos), emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Por último, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a; en los seguidos por la demandante, Isidora Ricardina Salas de Montes, con la demandada, Oficina de Normalización Previsional, sobre nulidad de resolución administrativa en Materia Previsional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. **YAYA ZUMAETA,** BURNEO BERMEJO, YALÁN LEAL, PEREIRA ALAGÓN, CORANTE MORALES. GTG/led

[1] En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00802-2020-PA/TC, del diecisiete de diciembre de dos mil veinte; fundamento 22.

C-2245460-37